



Conflicto minero y organizaciones étnicas: Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras y  
Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Toma en resistencia

Monografía de:  
Anabel Arias Cuéllar

Director  
Mario Luna Benítez  
PhD. Sociología

Universidad del Valle  
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  
Departamento de Sociología  
Santiago de Cali, Junio  
2015

*A quienes continúan resistiendo con dignidad en los territorios. A mi madre y mi padre, que han sido mi más importante ejemplo de rebeldía.*

### **Agradecimientos:**

Mis más sinceros agradecimientos a las dos organizaciones, el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras y el Consejo Comunitario de La Toma, por permitirme aprender de sus trayectorias de lucha. A Meraldiño, Lisi, Enrique, Leonor, Luisa, Eduar, Manuel, Erley, y todas las personas por abrirme las puertas de sus casas y sus vidas.

Al profesor Mario Luna Benítez porque sin recelo alguno me permitió seguir mi propio camino, ofreciendo su acompañamiento decidido, su confianza y paciencia.

A mi familia, que me brindó un apoyo sin restricciones, condición indispensable para afrontar este y todos los retos. En especial a Diana, por tu inagotable apoyo e interés; a mi tía Ruby, a mi abuela Graciela y a mis padres.

A la Universidad del Valle, gracias por abrir en tus moradores ese apetito de conocimiento.

# Índice

Introducción .....	1
A.    Acercándome al conflicto en Suárez: mi experiencia personal y política. ....	7
B.    Problemática, pregunta y objetivo de la investigación .....	9
C.    Metodología y archivos documentales .....	13
D.    El conflicto social, organizaciones y movimientos sociales en América Latina .....	24
CAPÍTULO I.....	40
1.    El polémico “boom” minero nacional y los hitos de conflicto en el reciente trayecto histórico local .....	40
1.1.    El “des-arreglo” minero sale a la luz: institucionalidad y política minera en Colombia.....	40
1.2.    Despojo, conflictos previos y organización étnica.....	46
CAPÍTULO II.....	65
2.    Apuntes sobre los tipos de minerías en Suárez .....	65
2.1.    Minerías en La Toma y en zona occidental.....	67
CAPÍTULO III .....	83
3.    Desarrollo del conflicto minero y la acción organizada del Consejo Comunitario de la Toma y el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras.....	83
3.1.    Me titularon la casa y yo no sabía: pero ¿cómo se enteraron las organizaciones étnicas? .....	83
3.2.    Las “Retros” y las Dragas: los foráneos nacionales ilegales .....	93
3.3.    Minerías tradicionales y Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires: Artilugio en disputa. 113	
3.4.    Las multinacionales: el caso de Cosigo Resources y la Sociedad Kedahda o AngloGold Ashanti	156
3.5.    Naturales colombianos con títulos. Amparos administrativos y agudización de la tensión ‘nativos’/‘foráneos nacionales no legítimos’ .....	188
3.6 La mina El Danubio: el paisa empresario y sus aliados estratégicos .....	217
CAPITULO IV .....	238
4.    Perspectivas estratégicas de las organizaciones étnicas .....	238
4.1    Autoridad étnica, gobierno propio e identidad: importancia de la territorialidad .....	238
4.2.    Proceso de Titulación Colectiva .....	256
CAPÍTULO V .....	287
5.    Conclusiones.....	287
Anexos.....	300
Anexo 1 .....	300
Anexo 2 .....	304
Anexo 3 .....	307
Anexo 4 .....	309
Anexo 5 .....	309
Anexo 6 .....	316
Anexo 7 .....	317

Anexo 8 .....	318
Anexo 9 .....	319
Anexo 10 .....	320
6. Bibliografía.....	321
7. Fuentes primarias.....	330
DOCUMENTOS CITADOS Y REVISADOS POR CAPÍTULOS .....	330

### Índice de Tablas

Tabla 1.....	130
Tabla 2.....	131
Tabla 3.....	132
Tabla 4.....	155
Tabla 5.....	307
Tabla 6.....	308
Tabla 7.....	313
Tabla 8.....	314

### Índice de Ilustraciones

Ilustración 1.....	128
Ilustración 2.....	134



## **Introducción**

Actualmente, el país se encuentra viviendo un momento político que seguramente marcará su historia. El desarrollo de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc parecen un proceso que promete detener el conflicto armado interno, entre la guerrilla más grande de Colombia y su Estado, poniendo en marcha el desarme y la reinserción de los alzados en armas. Con este panorama político, el “postconflicto” se asoma en el horizonte como una realidad futura cada vez más real. Sonando ya sistemáticamente en foros, reportajes e informes institucionales, este concepto se nos presenta como la cristalización de una nueva sociedad que, aunque sin carecer de grandes problemas, respirará un nuevo aire, puro al menos de uno de los conflictos sociopolíticos más determinantes de su historia moderna.

Se preguntará el lector ¿por qué iniciar hablando de paz?, y no de las organizaciones étnicas, o de minería. Por un lado, hoy, cuando sentimos casi contornear la frontera del anhelado y tantas veces frustrado periodo de “paz”, cuando palpamos por fin la grandiosa imagen de una sociedad sin conflicto armado, asistimos también –además de la proliferación de “las violencias”- a la reedición y/o emergencia y/o visibilización de numerosos conflictos que, aunque con importantísimas consecuencias para la futura realidad de la sociedad colombiana, parecen pasar a un segundo plano. No solamente las profundas transformaciones socioeconómicas que se están materializando en reformas, nuevas leyes y políticas públicas puestas a andar durante este y anteriores gobiernos, sino también la respuesta que diversos sectores y grupos sociales puedan tener hacia ellas, son parte de esa reconfiguración de significativos aspectos de la sociedad, que veremos probablemente con más claridad adelante en la historia.

En especial, viene marcando un precedente la respuesta de sectores y grupos no conformes con estas medidas institucionales, a distintos niveles y en diversos grados, en la medida que se consolidan como actores colectivos experimentados. La realizan a diferentes niveles y en distintos tipos de conflictos, por ejemplo los relacionados con la tierra y su uso. Muchos de ellos están dispuestos a continuar llevando a cabo una acción organizada para incidir y disputarse, desde sus posiciones e intereses elaborados, una ruta diferente a la dispuesta por

estos gobiernos. Estos *otros* conflictos reflejan una serie de aspectos que están siendo problematizados por grupos de personas, a partir de procesos propios de percepción, comprensión e interpretación de esos aspectos específicos y más ampliamente sobre el mundo. Esos procesos y conflictos, considero, merecen la pena ser analizado desde la academia, pues son en estos en los que determinados actores se construyen también como ciudadanos.

Por otro lado, el tema extractivo es actualmente de gran importancia por el alto impacto que las políticas mineras estatales tienen en la configuración del país a muchos niveles. La decisión del tema y perspectiva de esta monografía responde, de esta manera, al gran peso que le atribuyo a este sector económico e institucional en la definición de nuestro destino, y a la preocupación por fortalecer nuestras posibilidades de incidencia como ciudadanos en aquellas políticas.

A partir del 2001, en el país se inaugura una nueva época para la minería –que venía ya dando pasos desde antes-, con el nuevo Código Minero, la Ley 685 de ese año. Observamos, entonces, una serie de nuevos fenómenos y el reforzamiento de una tendencia hacia la desregulación, bajo el supuesto de que es necesario explotarlo todo. Esta febril actividad es elevada al estatus de *utilidad pública e interés social*. Nos resultaba de gran importancia explorar la forma en la que esta realidad minera institucional se introducía y repercutía en el nivel local. La nueva ley minera desataba numerosos y profundos cambios en los criterios necesarios para ostentar el derecho de acceso al recurso minero así como en la distribución de ese derecho. Incidiendo, más ampliamente, en la configuración del espacio rural, el uso práctico que los habitantes hacen del suelo y del subsuelo, y la escala de prioridades tomada en cuenta por la política estatal con relación a las actividades económicas rurales. Emergía, aparentemente, un mercado financiero especulativo de títulos mineros que en parte impulsaba la masiva demanda de concesiones. Además, se apuntalaba una fuerte vinculación entre la institucionalidad estatal local, regional y nacional, y nuevos actores mineros nacionales y extranjeros. Estos últimos hacen presencia en lo local, afectando con sus dinámicas a las poblaciones concretas.

Entre las numerosas y variadas “situaciones” inducidas en las zonas que serían modificadas e impactadas –no necesariamente conflictivas-, nos parecían relevantes las que presentaban

actores sociales divergentes, implicados ya fuera por una afectación directa o indirecta, o por un compromiso específico con el caso. ¿Quiénes estaban discrepando? ¿Cómo estaban manifestando, desde lo local, esta inconformidad hacia la transformación en marcha o potencial? nos preguntábamos. Se hacía cada vez más evidente la aparición de actores problematizando y politizando estos cambios, dispuestos a oponerse desde diversos lugares argumentativos, sociales e identitarios. Decidimos entonces acercarnos a un caso local explícitamente conflictivo, en el marco de ese nuevo momento minero.

Después de rastrear múltiples opciones dimos con el lugar, sin buscarlo. El caso sería el municipio de Suárez, Cauca, a donde llegamos por razones diferentes, vinculadas a la solidaridad brindada a las comunidades confinadas a causa de la situación de enfrentamientos armados entre Farc y Ejército. El Gobernador del Cabildo en la época, Enrique Güetio, buscaba el acompañamiento de estudiantes, profesionales y defensores de DDHH, por lo que varios jóvenes decidimos asistir al territorio en una comisión en noviembre de 2011. Se inició una relación de solidaridad y aprendizajes mutuos, entre varios comuneros/as y estudiantes. Un mes antes, en ese contexto, había acompañado la comisión de DDHH del Congreso de la República que se desplazó a la parcialidad indígena en Suárez el 14 de octubre de ese mismo año, para escuchar a los/as comuneros/as indígenas y campesinos afectados por la violación de sus derechos. También los líderes afrodescendientes que asistieron a la visita de la comisión referenciaron situaciones de despojo y de gran injusticia, como el desalojo de mineros, en las que el Consejo Comunitario había jugado un papel crucial. Tanto unos como otros señalaban que la crisis en Suárez estaba relacionada con intereses sobre el oro, contrarios a sus proyectos de vida colectivos.

De esta forma pude identificar el protagonismo del Cabildo Indígena y de un Consejo Comunitario de Comunidades Negras en especial, el de La Toma, en una amplia disputa en torno al oro, frecuentemente denunciada por ellos/as como causa de numerosas situaciones que amenazan su *pervivencia* como grupos y comunidades. Había cristalizado en los/as líderes y lideresas de estas organizaciones étnicas una consciencia específica sobre unos nuevos actores mineros y una nueva realidad que amenazaba su existencia como grupo y comunidad. Había una lectura global del tema y lo exponían en múltiples contextos,

aparentemente inconexos. En ese momento el Cabildo cumplía un papel determinante en la mitigación de los efectos de los enfrentamientos armados, desarrollando incluso el papel de los funcionarios estatales que se negaban a subir a la zona. Su decisión era permanecer en ese territorio, a toda costa, apoyándose en una estrategia de Asambleas Permanentes que disuadieran las personas de desplazarse.

Se delineaban dos actores colectivos de gran importancia en un conflicto en torno al recurso minero, el oro, referenciado explícitamente y asumiéndolo cada cual desde su particularidad. Una misma disputa, con la participación de dos organizaciones confrontando desde una perspectiva y experiencia cualitativamente distinta, pero tan importante la una como la otra. Sin duda, cada una de éstas había jugado hasta ahora un categórico papel en la problematización misma del asunto minero, en la configuración del conflicto y su desarrollo, por lo tanto, era necesario esforzarse por aprehender sus perspectivas específicas para hacerse una mejor lectura desde la mirada de sus protagonistas.

Este trabajo se compone de cinco capítulos. El primero es la presentación de dos breves contextos. Uno en el que se abordan algunos aspectos institucionales y políticos recientes del sector minero en Colombia que han llevado el tema a ser cuestionado por diferentes sectores –académicos, institucionales y políticos- y a la opinión pública en una polémica de alcances nacionales; otro en el que abordamos unos precedentes históricos recientes: tres momentos de despojo y contradicción previos que han marcado las organizaciones étnicas estudiadas y su perspectiva política en el posterior conflicto minero.

El segundo capítulo presentamos las zonas mineras y los aspectos generales que caracterizan las prácticas mineras vigentes en estas poblaciones. También indagamos algunas percepciones que líderes de las organizaciones étnicas tienen de éstas y de los nuevos actores mineros que han llegado a sus territorios relacionándolo en determinados casos con breves apuntes sobre la larga historia minera local.

El tercer capítulo, el de mayor extensión, recoge en seis apartados, momentos del conflicto y situaciones entre actores, pasando por figuras jurídicas y decisiones políticas. Por medio de ellos busco ofrecer al lector una lectura del amplio conflicto que se desarrolla sobre lo minero en el municipio de Suárez. También en este tercer capítulo incorporamos diversos

elementos de contextualización pertinentes al eje central del asunto, así como referentes del enfoque analítico adoptado. Este capítulo integra:

Una primera “fotografía” de la apertura del nuevo momento conflictivo, marcado por unos derechos mineros –títulos- a nombre tanto de “viejos” conocidos como de nuevos y desconocidos actores, y reconstruimos parte de las relaciones interorganizativas que permitieron el acceso a esa información y a una específica posición frente a la realidad descubierta.

En el segundo apartado, indagamos la presencia de agentes que operan sus explotaciones mineras con retroexcavadoras y dragas. Antes incluso de ser concedida la titulación minera vigente hoy, de forma ilegal y cada vez más, ilegítima, vienen apropiándose del oro que yace en el lecho de los ríos y sus playas. Describimos algunos aspectos de su relación con las autoridades institucionales locales, con las organizaciones, poblaciones étnicas y con otros actores mineros. Su papel no es posible obviarlo, menos cuando funcionan como una fuerte y efectiva presión en las decisiones y posibilidades de los líderes étnicos y los mineros de aluvión, siendo además un factor de poder en las redes políticas y clientelares del departamento y el municipio.

En su tercer apartado exploramos la figura del Área de Reserva Especial declarada para Suárez y Buenos Aires. Delimitamos así la afectación de intereses de multinacionales y otros solicitantes de concesiones mineras en ese proceso y la disputa entre actores locales por el control de la Concesión Especial que será expedida como resultado de este. El problema de fondo indagado en este subcapítulo se relaciona con la situación de la minería informal tradicional y sus posibilidades de formalización, la injerencia de la institucionalidad local y el lugar político de las organizaciones étnicas.

En el cuarto apartado, regresamos a otro actor principal del conflicto. Reconstruimos las relaciones promovidas por la AngloGold Ashanti con el gobierno local, con las comunidades y sus líderes, y por supuesto el cuestionamiento de algunos de éstos a la empresa, que terminó en un rechazo más amplio de diferentes sectores del municipio. Este rechazo sin embargo, va a variar según los contextos y momentos.

En el quinto apartado se presenta el conflicto con otros dos actores, Héctor J. Sarria y Olga N. Ruíz. Estas personas naturales nacionales son titulares de derechos mineros en el

corregimiento de La Toma, a su vez consideradas como foráneas no legítimas por parte del Consejo Comunitario y la gran mayoría de mineros del lugar. Ruíz y Sarria solicitan cada uno un amparo administrativo. La solicitud de Sarria resulta en una orden de desalojo de mineros tradicionales, lo cual agudizó la tensión previa y desató la solidaridad de una gran cantidad de actores nacionales e internacionales. El conflicto se detiene con el fallo de la Corte Constitucional T-1045A que suspende los títulos y solicitudes vigentes en el corregimiento de La Toma por ser territorio ancestral.

Terminamos el capítulo con el análisis de la transformación de la mina El Danubio avanzada por Alonso Giraldo. Analizamos las apreciaciones y relacionamientos del Cabildo Indígena con este actor minero. Se presentan algunos datos sobre la producción y comercialización de oro de la mina El Danubio, encontrados en el expediente jurídico del título EEK-152, estableciendo su relación con la cuestionada Comercializadora Internacional Giraldo y Duque. Aclaremos algunos aspectos a propósito de las investigaciones adelantadas en los últimos años por el gobierno sobre el lavado de activos a través de la comercialización de oro, la posible implicación de esta Comercializadora y de actores mineros regionales en la compra de oro proveniente de minería ilegal.

En el cuarto capítulo analizamos las perspectivas estratégicas de las dos organizaciones identificadas en la reconstrucción del conflicto. En “Autoridad étnica, gobierno propio” se indagan estas formas organizativas en su inserción en contextos sociocomunitarios y políticos, y en su dinámica de autoridad étnica, desde el gobierno propio y sus procesos de territorialización, la caracterización de la población que agrupan o con la que conviven y su relación con otras organizaciones comunitarias como las JAC. Presentamos el “Proceso de Titulación Colectiva”, donde a partir de situaciones concretas presentamos una lectura de lo que ha sido la titulación colectiva emprendida por el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras y el Consejo Comunitario de la Toma. Esta decisión más que una formalidad ha sido una disputa estratégica por consolidar el control territorial, legítimo y legal, sobre un espacio de vida que estas comunidades desde hace mucho, han venido construyendo y consolidando como propio. Se erige como un reclamo de poder autónomo, para seguir proyectando una permanencia digna en este territorio.

Finalmente presentamos las conclusiones de esta monografía en el cuarto capítulo, retomando los aspectos más importantes del trabajo.

A continuación, el lector encontrará un apartado con especificaciones sobre la metodología, el trabajo de campo y documental. También otro más sobre aspectos relacionados con el enfoque analítico de investigación que me permitió ir ajustando el documento y tomando decisiones sobre los datos que iré presentando. Este enfoque parte de las discusiones propias de la sociología de la organización, el conflicto social, los movimientos sociales y su concreción en América Latina.

#### **A. Acercándome al conflicto en Suárez: mi experiencia personal y política.**

Gracias a las denuncias de algunas comuneras indígenas del Cabildo de Cerro Tijeras en el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanía, y a la información de otras personas que conocían el proceso de Cerro Tijeras, un grupo de amigos supimos de la fuerte agudización del conflicto armado en Suárez, especialmente en su zona occidental. Decidimos organizar una Comisión Humanitaria compuesta por estudiantes de la Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Libre –seccional Cali-, Universidad Católica de Cali y una egresada de la Universidad Santiago de Cali. Participaron además defensores de derechos humanos de la CUT, y en coordinación con la Junta Directiva del Cabildo Indígena, acompañamos durante unos días las comunidades confinadas. Esta visita se realizó en noviembre de 2011. Yo había recorrido algunas veredas en octubre cuando tuve la oportunidad de acompañar a la Comisión Humanitaria del Congreso de la República que hizo presencia por las mismas razones. En esa visita dialogué por vez primera con el Gobernador Enrique Güetio quien alentaba la llegada de estudiantes solidarios al Cabildo.

De esta forma se comenzó una relación que hasta hoy se mantiene vigente. En aquel primer momento supe también de la existencia del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento de La Toma, proceso que desconocía, y que ha sido determinante en el tema minero tanto del municipio como del país. En el segundo semestre de 2012, cuando iniciaba mi trabajo de campo ya como investigadora e independiente de la comisión de

estudiantes, aún indagaba si realizar la investigación con una sola organización. Sin embargo decidí insistir en relacionarme con las dos e intentar comprender desde esas dos dimensiones, más allá de los obstáculos evidentes que la decisión implicaba. A partir de finales de 2012 varios líderes y comuneras me abren las puertas de sus casas, durante algunos periodos en los que permanecí en sus veredas o en la cabecera del municipio de Suárez. Y más que nada, me abren las puertas de sus vidas.

Desearía resaltar que mi posición frente a cada una de estas personas, ha sido la de una joven, estudiante y foránea. Sin conocidos previos en los territorios, ni relaciones precedentes, principalmente con mi presencia y acción he debido buscar los espacios, establecer las confianzas -nunca perfectas siempre variables-, y esforzarme por considerar todas las condiciones necesarias para ir adelante con este vínculo que considero más que nada político. En los dos casos fue posible encontrar situaciones en las que se habían tenido experiencias no positivas con estudiantes foráneos. También en los dos casos encontré una fuerte acogida por parte de la gran mayoría de comuneros y comuneras que saludaban mi llegada positivamente, pero siempre con la realidad tangible de mi condición de extraña. En este contexto, para mí resultó importante reconocer una suerte de contradicción interna, entre mi condición de extraña, por un lado, y la profunda identificación que siento con los postulados de estas dos organizaciones, por el otro. Entre las posibles y siempre probables desconfianzas y mis deseos por establecer lazos de aprendizaje más allá del trabajo de investigación, por aportar en esos procesos desde mis posibilidades. Esta situación ha cambiado relativamente y de forma diferente en cada caso.

Con los indígenas de la organización he tenido más momentos y circunstancias para consolidar una relación de aporte mutuo, en términos organizativos y políticos, dado que les visité y acompañe en espacios organizativos en más ocasiones. Es decir, sus líderes, puedo decir hoy, cuentan con mi participación y apoyo y, en casos determinados, solicitan mis aportes en aspectos relacionados con el tema minero u otros. La relación con los y las líderes afrodescendientes ha venido transformándose, pero considero que se me ve como una estudiante que avanza un trabajo sobre la minería y el Consejo, más que como una persona que puede aportar en el proceso. En medio de estas consideraciones, es importante



decir que mi interés se orienta a que el presente trabajo sirva en alguna medida al proceso político de cada organización, pero más seguramente, el aporte de informaciones recopiladas y otros elementos que se puedan derivar de esta investigación.

Como es evidente, mi posición frente al conflicto minero en Suárez no es neutral. Deseo avanzar en una reflexión que despierte preguntas, en función de generar condiciones que amplíen las posibilidades de resistir a los grandes poderes que enfrentamos. Se trata, entonces, de considerar una diversidad de dimensiones y obstáculos que desde las organizaciones debemos enfrentar, aunque cada una desde su especificidad. No son solo las ansias de conocimiento sociológico las que me motivan a intentar comprender el conflicto minero estudiado y sus organizaciones implicadas. Es más bien la intensión de una persona que ha participado en dinámicas organizativas populares y se pregunta también por su praxis. Mi relación con procesos barriales, estudiantiles, mi cercanía con la lucha sindical y la movilización social como alternativas para la construcción de proyectos de vida, y de país, son un referente sin el cual no se puede explicar esta decisión. Por eso son también inquietudes personales. Quise acercarme a otras organizaciones que desconocía en sus dinámicas, pero que a pesar de eso reconocía familiares desde esas experiencias de vida previas. La preocupación generada por la realidad minera fue la ruta de llegada a estas dos organizaciones étnicas.

## **B. Problemática, pregunta y objetivo de la investigación**

Como lo he señalado en párrafos anteriores, los cambios en las políticas mineras y la entrada masiva de multinacionales a Colombia fue un motor que me llevó a determinar el tema como centro en mi trabajo de grado. Observaba las inmensas minas, los inmensos orificios mineros de Argentina, Perú y México, y consideraba que era necesario preguntarse cómo detenerlo. Al ver la realidad minera colombiana identifiqué una complejidad mayor, porque la discusión no pasaba sólo por las multinacionales, sino por una diversidad de actores mineros que tenían parte y función en lo local y lo nacional. Por esta razón, me incliné hacia un caso de conflicto minero en el que se presentaran actores mineros distintos

a las multinacionales, en el que tuviera la oportunidad de acercarme, en la medida que fuera posible, a sus diferentes posiciones, intereses y relaciones con la institucionalidad, las organizaciones étnicas y entre sí.

Nos preguntamos ¿bajo qué condiciones emerge, en relación con la promoción del sector minero a nivel nacional, un conflicto social en lo local y cómo se desarrolla?

Cuáles son los actores involucrados, cómo interpretan los cambios, cómo actúan. Qué importancia tiene la organización social y sus formas específicas en la acción social de los actores, nos interesan como cuestionamientos específicos que guían el presente trabajo.

De acuerdo a lo anterior, nuestro objetivo es comprender la complejidad de un conflicto minero en su contexto histórico, territorial, social y cultural, y las implicaciones para dos organizaciones étnicas involucradas, el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras y el Consejo Comunitario de la Toma. Para esto es necesario reconstruir el conflicto en torno al recurso minero oro, transcurrido durante los últimos diez años en el municipio de Suárez. Describir las relaciones entre los diversos actores locales o nacionales, institucionales o no, que inciden en su desarrollo, afectando las posibilidades de incidencia que las estrategias y acciones colectivas de las dos organizaciones étnicas tienen en la disputa. La reconstrucción se realizará desde el testimonio de algunos líderes del Consejo y el Cabildo y a partir del material documental recopilado. El problema pasa entonces por una preocupación cualitativa.

Considero que las experiencias concretas que han tenido las personas frente a los diversos tipos de minería juegan en la percepción y posición política que tienen frente a esas actividades y a los actores que las agencian. Esta idea la he afianzado a través de la realización de las entrevistas y de las conversaciones con la gente. Me fue mucho más evidente cuando profundicé mi relación con la comunidad negra de La Toma y pude comparar su experiencia con la de los indígenas, dado que son bastante diferentes al tener mayor cercanía con la minería que estos últimos. La posición varía también, por ejemplo, cuando se trata de un minero o una persona no familiarizada con la minería, así pertenezcan a la misma organización o comunidad. En ese sentido, pienso que el nivel de familiaridad

con las zonas mineras es un importante factor que incide en el detalle con que las personas pueden caracterizar las situaciones, actores y relaciones presentes en el desarrollo de la actividad, y por ende en la cantidad de aspectos concretos que tienen en cuenta en su consideración. También incide el tipo de minería con el que se es familiar, o que se practica.

La experiencia política en la organización étnica es otro importante factor que considero de peso en las posiciones que adopta la persona ante esas actividades y actores. Es decir, un minero organizado y uno alejado de la organización pueden tener consideraciones muy diferentes al respecto de un mismo tema relacionado con la minería. O una persona que nunca ha practicado ningún tipo de minería pero ha estado al frente de múltiples responsabilidades dentro de la organización étnica puede manejar gran cantidad de criterios y de información sobre el conflicto minero que un minero de su comunidad poco vinculado a la organización no maneja.

Pienso que todos esos “lugares” y experiencias en las trayectorias personales marcan los criterios que las personas adoptan frente a los tipos de minería. Sin embargo, el rechazo o no, o la consideración de un criterio en particular sobre algún tipo de minería, no se derivan mecánicamente de una determinada experiencia. En fin, desde mi punto de vista, las posiciones adoptadas son apropiadas de forma específica por cada persona gracias a una experiencia concreta de vida.

En ese sentido es importante aclarar que el objetivo, la propuesta analítica/conceptual y el desarrollo de este trabajo no son definidos por las organizaciones que son sus protagonistas. El objetivo y su desarrollo son una definición de quien escribe, que responde a inquietudes sociológicas, políticas y personales. Inquietudes que se ligan, a su vez, a una identificación con las causas por las que estas organizaciones resisten. Esas inquietudes son sociológicas en tanto quieren acercarse a la comprensión de un problema en torno a un contexto de relaciones entre actores organizados, sus desarrollos específicos con relación a ese contexto y a sus dinámicas “internas” y “externas”. De otra manera, son políticas porque detrás de esta intención de comprensión y de análisis hay una posición frente a la necesidad de fortalecer estas propuestas organizativas étnicas para lograr la pervivencia y permanencia de estas comunidades. Aunque parezca inútil la reflexión sociológica en muchos casos, la

considero poderosa e incidente en la acción política de los sujetos. Desafortunadamente, esta potencia no es tangible para muchos/as por las formas académicas que reviste. Por esto algunos aspectos del problema organizativo que exploro, vistos desde una perspectiva sociológica, y transmitidos desde ese lenguaje académico, pueden resultar poco útiles en la lucha política concreta. Incluso, pueden estar fuera del alcance de las preocupaciones presentes entre quienes me brindaron sus opiniones y tiempo. Sin embargo, también pienso que algunas inquietudes similares aparecen a su manera, con un lenguaje diferente en las cotidianidades de algunos comuneros/as que asumen la acción organizada permanentemente, en su contexto de liderazgo.

¿Por qué abordar el problema minero desde una perspectiva de conflicto social? Los conflictos sociales pueden ser entendidos como acciones sociales interrelacionadas con transformaciones, estructuras y contradicciones sociales más generales -por ejemplo: relaciones de poder, relaciones de “raza”, etnicidad, de clase, etc.-. Dependiendo de cómo cierto/as actores, grupos y organizaciones perciben e interpretan estas transformaciones o contradicciones se vuelven significativos y relevantes para la actuación de estos mismos (Bebbington 2012: 16-20).

Partiendo de esta perspectiva el análisis del conflicto social en torno a la minería de oro en Suarez funciona como un prisma a través del cual mirar las interacciones entre actores muy diversos, relaciones que en el conjunto de la vida social no se restringen necesariamente al conflicto, pero que aparecen bajo una nueva luz gracias a él. De igual forma, en lo atinente a las relaciones internas entre miembros de las organizaciones étnicas. Aunque los trazos que se puedan dar sobre todos estos aspectos sean bastante gruesos y generales, considero que abordar el problema desde un contexto específico de interacción permite un sentido que no sería tan evidente a partir de otros ángulos. La perspectiva que me guía la expresa Friedberg, quien resalta la importancia de hacer un análisis situado en la realidad específica y cualitativa de los vínculos entre actores de las organizaciones y del ambiente, en su

dinámica concreta de “interestructuración” del sistema organización/ambiente<sup>1</sup>: “Breve, para comprender la institución/configuración del ambiente, es necesario reconstruir los procesos de interacción concretos entre los miembros de una organización ubicados en sus diferentes niveles y sus interlocutores respectivos dentro de los diferentes segmentos concretos del ambiente. En efecto, los miembros de las organizaciones no interaccionan con una ambiente abstracto, sino con un número limitado de interlocutores concretos que se convierten en sus interlocutores privilegiados” (Friedberg 1997: 101). En este sentido, el conflicto es un contexto específico, es parte de ese ambiente. Podemos decir, entonces, que éste es el estudio de caso de un conflicto desatado en torno al recurso oro, a partir del cual he seleccionado segmentos del ambiente y de las dos organizaciones, y que su metodología está estructurada básicamente en una estrategia que reúne el diseño etnográfico y el documental.

### **C. Metodología y archivos documentales**

El siguiente trabajo se estructuró en una estrategia que reunió el diseño etnográfico y el documental. Se fundamentó primero en una etnografía de las relaciones político organizativas de las organizaciones étnicas, lo que significa el acompañamiento durante periodos a líderes de las dos organizaciones junto con quienes fui conociendo el funcionamiento de aquellas –desde la posición particular del líder, claro está-, sus líneas de acción y trabajo, sus políticas y posiciones, sus relaciones con otros actores, presenciando actividades internas así como de interlocución con actores “externos”. Luego vino el procesamiento de parte del archivo físico del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras y del Expediente Jurídico del ARE proporcionado por la ANM, que permitió profundizar en esta reconstrucción de relaciones y posiciones políticas, así como respaldar y contrastar algunos datos etnográficos.

La disyuntiva que se presenta entre un documento que cumpla las exigencias de la academia, y un documento pertinente y adecuado a las necesidades más concretas de estas

---

<sup>1</sup> “Este sistema no coincide sino muy imperfectamente con las fronteras de una o varias organizaciones. Es un sistema de actores, individuales o colectivos, institucionalizados o no, que engloba todo o parte de una organización y de los actores de su ambiente y para el cual una parte de la organización puede convertirse en ambiente.” Pp. 102-103

organizaciones, se me presentó como un dilema en un momento dado. Finalmente, en este trabajo prevalece la obligación de cumplir ciertos parámetros y formas académicas, más que orientarse a esas necesidades concretas. En la medida en que he podido aportar algunas informaciones nuevas para los líderes de las organizaciones, he ido afrontando ese dilema. Puede que este trabajo no sea considerado un “aporte concreto”, pero la investigación me ha permitido hacer otras contribuciones que los/as líderes de las dos organizaciones pueden llegar a considerar más cercanos a sus necesidades y más útiles. En este sentido, he podido entregarles la información proporcionada por la ANM en respuesta a un derecho de petición que realicé y que envió a su nombre el ex-congresista del Polo Democrático Alternativo Wilson Arias. A pesar de los oficios y solicitudes que desde uno y otro proceso habían sido radicados, no habían podido obtenerla. Para mí, la oportunidad de apoyar en esa tarea ha sido muy importante y considero que ha permitido estrechar los lazos de confianza.

Mientras procesaba la información del expediente jurídico del Área de Reserva Especial elaboré un documento sobre los Informes Técnicos realizados desde 2008 hasta 2014, a las explotaciones presentes en los polígonos del ARE. Ese documento de trabajo ha sido entregado especialmente a varios líderes del Consejo Comunitario de La Toma y su Junta de Gobierno, y al Gobernador actual del Cabildo.

En el caso del Cabildo Indígena pude contribuir en seis asambleas realizando exposiciones sobre la política minera y los tipos de minería, intervenciones que tenían como objetivo difundir y sensibilizar sobre el tema. Esto se dio en un recorrido por el amplio territorio de Cerro Tijeras en el que visitamos ocho veredas ubicadas en puntos claves, con el Gobernador Cobo en 2012, que desarrollaba su ejercicio de rendición de cuentas. En la asamblea de mayo de 2014 en Altamira también hice una exposición sobre algunos tipos de minería y sobre los títulos presentes en el municipio. En algunas reuniones internas he colaborado con la información que he acumulado sobre el caso de Suárez.

En ese orden de ideas, este documento que entrego como trabajo de grado es, desde mi punto de vista, parte de un proceso que será continuado. Considero que es importante elaborar una serie de documentos con objetivos orientados hacia las necesidades concretas de las dos organizaciones étnicas. Puede ser útil políticamente que la información adquirida

a lo largo de este proceso de investigación tome una nueva presentación, resaltando datos y aspectos que pueden ser los de mayor efecto político en la lucha concreta de estas comunidades por permanecer en el territorio. Para lograrlo, las organizaciones étnicas deben orientar ese aporte.

Al mismo tiempo, más allá de las barreras del lenguaje usado, espero que los y las líderes/as reconozcan en esta monografía un intento por sistematizar un conflicto que es de gran importancia para el destino de nuestro país. Desearía que fuera una excusa para llamar la atención sobre la necesidad de ampliar ese empeño. Considero que la posibilidad de una reconstrucción realmente cabal, mucho más valiosa política y sociológicamente, está en manos de esas dos organizaciones que han sido sus protagonistas. Son ellas quienes pueden trascender los profundos vacíos y sesgos que este trabajo presenta, y quienes pueden hacer de tal ejercicio de sistematización una herramienta para fortalecer en concreto su lucha política; el empeño está en sus manos.

Este documento se pregunta también por los vínculos y diferencias del proceso afrodescendiente y el proceso indígena local, con la idea de resaltar la necesidad de seguir afianzando, como lo han venido haciendo, sus relaciones de solidaridad, sus lazos de trabajo y confianza. Consciente de las numerosas dificultades que estos vínculos han tenido que superar en las situaciones concretas, en el desarrollo del trabajo no eludo las posiciones políticas diferentes y las distancias que puede haber entre unos y otros.

El ideal de llevar a cabo una retroalimentación a lo largo del proceso ha sido difícil, principalmente por la dificultad que implica hacer converger las agendas de los líderes – bastante agitados- y la mía. Median gran cantidad de limitaciones: de tiempo personales, ritmos específicos de la organización o de quienes me recibían en sus casas. También el hecho de no haber llegado en el marco de un proceso institucional de la universidad, en un proyecto mayor o a través de una organización étnica regional, pueden ser algunas de las razones por las que no he podido tener un espacio más formal en las agendas de las organizaciones. Considero que el lugar de joven estudiante, y la realidad organizativa de los sectores, marcaron que todas mis posibilidades pasaran por lo informal. Opté, ante esta realidad, y ante la apertura y aceptación que veía de parte de mis interlocutores, por

solicitar permiso y dialogar con cada dirigente que identificaba como representativo en las organizaciones: en el caso del Consejo a Gustavo Zapata –que me permitió la entrada en un principio, en 2012 cuando era presidente de la organización-, a Tomás Salcedo líder de Yolombó, a Julián Labrada líder de Gelima, a Marcel Quintero –presidente en 2013- y a José Antonio Vidal –presidente en 2014-. Poco o nulo contacto tuve en esta primera etapa con Simón Rodríguez y Camila Restrepo, con quienes interlocuté posteriormente. También intentaba explicarle mi trabajo a los/as diversos/as comuneros/as con quienes conversaba.

En el caso del Cabildo, dialogué con Enrique Güetio –gobernador en aquella época- y algunos miembros de la Junta presentes en las reuniones desarrolladas en 2011; luego con el gobernador Carlos Cobo, algunos miembros de la Junta y con Meraldiño Caviche en los encuentros de 2012, de nuevo en 2013 con el gobernador Manuel Belalcazar, Albeiro Cortez, Nelson y otros miembros de la Junta. Durante 2014, por mi escasa presencia en Cerro Tijeras no tuve mucho contacto con el gobernador de ese año, Marino Pilcue, aunque Meraldiño –vicegobernador en ese momento- y varios conocidos hacían parte de la Junta Directiva. Durante los primeros meses del año 2015 ha sido posible generar diálogos sobre este material en una dinámica de mayor retroalimentación y debate.

La ubicación de mis interlocutores en el territorio marcó también la mirada. Yolombó fue mi referente en La Toma, pues Gustavo vive en esta vereda. Altamira y el sector de Unión Olivares fue el polo en el que me moví regularmente en la parcialidad de Cerro Tijeras. En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que la descripción que el lector encontrará en este trabajo es una *versión* a propósito de las relaciones sociales específicas que, siendo foránea y desconocida, debí reconstruir pacientemente, al tiempo que entablaba vínculos de confianza con esos líderes de las organizaciones. Recogiendo poco a poco fragmentos aislados de una realidad social infinita, múltiple e ilimitada, fui armando un rompecabezas al que *yo misma le obligo el sentido*, una comprensión que presento en este escrito y que, aunque puede parecer hoy algo simple, fue un descubrimiento asombroso a cada paso. Para acercarme a esta realidad debí asistir a reuniones diversas de organizaciones y sectores de La Toma, por ejemplo, algunas de ASOYOGÉ y otras de mineros de la vereda La Toma.



Acompañé a Gustavo a una reunión de la Cooperativa de Mineros de Suárez, en la cabecera. Participé en otras actividades sin relación aparente con el tema minero, como en una de las sesiones de los talleres que adelantaban sobre el cultivo de plátano en Gelima, o una jornada de procesamiento de la caña en panela –trabajo en el trapiche-. Presencié espacios informales entre dirigentes, conviví especialmente con Gustavo Zapata y su madre Ángela, quienes me acogieron generosamente en su casa durante los periodos que permanecí en Yolombó. Con él procuré desplazarme a todas las actividades que desarrollara, en La Toma o en otros lugares.

Aunque mi tema central no era profundizar en las características de las prácticas mineras realizadas por los tomeños, participé en varias jornadas de minería que ayudaron a familiarizarme con términos y procesos que ellos referenciaban en las conversaciones y que yo desconocía: una de aluvión en playa del río Ovejas a la que me llevó Gustavo y en la que me limité a observar; una en “Corte” de venero en Gelima donde acompañé a Valentina Zapata, Mateo y otros; y una en mina de filón en la zona de La Carolina, propiedad de Gisela y su esposo, en estas últimas intenté participar aunque mi ayuda resultaba más un obstáculo que una apoyo. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por tres minas ubicadas en el Peñón, gracias a Milton Prado que me brindó sus saberes, día que asistimos también a un entierro en la vereda La Toma. Éste último me invitó a conocer la mina La Gelima durante una visita de un asistente técnico del SENA. En fin, fui acercándome a la dinámica comunitaria, reconociendo y aprendiendo de relaciones y actividades rurales, y las personas. Me informaba sobre las formas de minería, sobre los episodios de conflicto, los sentimientos y percepciones. Mi énfasis estuvo en buscar las relaciones y espacios organizativos, priorizándolos como espacios etnográficos.

En Altamira ocurrió similar, y dado que el vínculo con la vereda era anterior fue más estrecho. Un estudiante de la Universidad Pedagógica que conocimos allá mismo fue un primer apoyo. Esto me permitió moverme con mayor autonomía. Inicialmente permanecía en la Casa del Cabildo en Altamira, pero después de la partida del estudiante, empecé a quedarme en la casa de doña Luisa, don Pedro y don Isaías Güetio, mayores indígenas. Al igual que en La Toma, intentaba acercarme a las dinámicas de la comunidad, ayudando en

tareas agrícolas, asistiendo a eventos y fiestas veredales, como unos cuantos bingos en el Hormiguero y Altamira, participando en la radio indígena donde los comuneros/as se encontraban. Con Amparo trabajamos en su potrero una jornada, atrapando la vaca, ordenando las mangueras del agua, con don Micho fuimos a cosechar semillas de coca, otro día cosechamos sidra, conversamos en el billar sobre la historia de Altamira. Con doña Luisa recogí café, mafafa y yuca.

Con Meraldiño me vi en Altamira, pero durante una época principalmente en Suárez, en las reuniones, o en las Asambleas en Alejandría. Nos encontramos en repetidas ocasiones en la Casa de Paso de la AIC en la cabecera, donde yo aprovechaba para acompañarlo a espacios políticos y en las tareas que debía cumplir. Hasta Caloto llegamos a recoger materiales para la construcción de unos refugios de emergencia. Es uno de mis interlocutores principales, quien me ha brindado su confianza y respaldo en la organización. Bladimir como empleado de la AIC me brindó ese espacio para hospedarme en la cabecera. En Suárez me enteraba de las agendas al toparme con personas del Consejo o el Cabildo, es un epicentro que permitió moverme y estar al tanto de informaciones a través de encuentros cortos, acompañar a uno o al otro, y asistir a reuniones formales. Las fechas de las visitas realizadas, eventos asistidos, con sus lugares y acompañantes puede examinarse en el Anexo 1 al final del trabajo.

A finales de 2013 inicié el procesamiento de la información recolectada en campo hasta ese momento. Las entrevistas fueron realizadas ese semestre y durante el año 2014. No siempre fue fácil el desarrollo de aquellas entrevistas, en especial por la barrera que implica la grabadora, es decir, por la situación formal que se induce y por la delicadeza de algunas informaciones. Las conversaciones informales predominaron durante el trabajo de campo.

A medida que me familiarizaba con el contexto local y las aristas del conflicto minero, me acercaba a la historia de esas comunidades y de las organizaciones. A eso responde la entrevista realizada a don Ovidio Ovando. El libro “Salvajina. Oro y pobreza” de Ismael Juanillo me aportó con algunos aspectos de la historia del municipio y aspectos de la minería. En el caso particular del corregimiento La Toma fue de gran importancia conocer el libro “La Toma. Historia de territorios, autonomía y resistencias” de Ararat *et al*, que ha

sido un pilar en mi proceso para conocer y comprender la historia local de esa comunidad negra y de su organización étnica. También me sugirió nuevas ideas y afianzó otras que traía, como sobre las diferencias entre lo que es la minería para una comunidad o para otra, y los momentos históricos que han vivido. Varias de las ideas que manejo pueden ser consideradas prolongaciones o consecuencias de reflexiones sobre otras que encontré en el libro. Su lectura me permitió centrar la atención en el conflicto reciente, enfocándome en los últimos diez años y dejando atrás el impulso por indagar la historia más lejana.

En mayo 2014, Enrique Güetio, a quien le había contado en repetidas ocasiones de mi trabajo, me invita a su casa en Timbío. La idea era organizar y analizar los documentos sobre minería que el Cabildo había acumulado a lo largo de estos años y que él custodia. Son varios folders que ordené y procesé. El archivo incluía material producido tanto por el Cabildo como por el Consejo Comunitario estudiado, documentos políticos y de trabajo, cartas de la Alcaldía y el Concejo Municipal, informes de Ingeominas y CRC. Trabajé algunos documentos con tópicos diferentes pero pertinentes para el proceso de comprensión de la dinámica amplia de las organizaciones.

El acceso a esa información fue crucial para ordenar con mayor sistematicidad el conflicto y las situaciones entre los actores, gracias a los soportes documentales, apoyando y contrastando con la comprensión global que venía consolidando en el trabajo etnográfico. Sin las visitas y encuentros en el municipio de Suárez no tendría los elementos para moverme en ese acervo documental, dándole un peso y una lectura especial a cada uno de los documentos. En ellos, reconocía episodios que me habían contado, relaciones entre actores que había observado o escuchado, posiciones políticas que se expresaban en las reuniones aparecían en comunicados. Considero que la decisión de trabajar suficientemente el material documental me permitió complementar y afianzar esas reconstrucciones elaborada desde las conversaciones, además de profundizar en algunas informaciones que no había obtenido en las visitas. La revisión documental iniciada a finales de mayo de 2014 redujo los periodos de visitas, que se convirtieron en encuentros puntuales.

En abril de 2014 redacté un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional de Minería, releando el Código de Minas a la luz del caso que ya conocía un poco más. Este ejercicio fue interesante, comprendía nuevos aspectos de la ley que antes apenas lograba identificar. Simón, a quien entrevisté por esos días, me recomendó incluir en la solicitud un punto exclusivo sobre el Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires, Cauca, lo cual no había previsto hasta ese momento. Esta sugerencia fue determinante para mi trabajo.

Ya con la información proporcionada por la ANM, el material documental creció por cuenta de los archivos institucionales de la autoridad minera. Dada la amplitud de la documentación (los expedientes de los 17 títulos vigentes en Suárez y del ARE suman unos 8.500 folios escaneados en Pdf), tomé la decisión de enfocarme en revisar el expediente del Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires, Cauca. El ARE se relaciona más directamente con la comunidad afrodescendiente de la cabecera municipal y del corregimiento de La Toma, por lo que el tema es principalmente referenciado por los/as comuneros/as del Consejo Comunitario, pero también está presente especialmente en la memoria del indígena Enrique Güetio. En los diálogos que he tenido con la mayoría de comuneros/as indígenas he identificado que el tema del ARE no les es familiar y no es un tema que se aborde en los encuentros que presencié de la organización, incluso no muchos de mis interlocutores indígenas conocen de su existencia. A pesar de esto, el ARE representa una herramienta institucional de gran importancia para el tema minero de la región. Ese expediente se compone de siete carpetas electrónicas de las cuales había información útil en cuatro de ellas<sup>2</sup>.

Posteriormente revisé el Expediente Jurídico del título minero EEK-152 completo, compuesto por dos carpetas, una con un archivo Pdf de 216 folios y otra con tres Pdf de 70, 50 y 48 folios cada uno. Procesé también el expediente del título EKE-151 completo, con

---

<sup>2</sup> Se compone más específicamente por: Carpeta I del MinMinas con 117 folios; Carpeta II del MinMinas con 85 folios; Carpeta I de la ANM con 272 folios y un anexo de 2 folios; Carpeta II de la ANM con 261 folios de los cuales unos 115 son fotocopias de cédulas de los beneficiados por los polígonos; Carpeta III de la ANM con 203 folios de “actas de visita” que son la información recolectada por la autoridad en una visita de la que el informe está en la carpeta anterior, por lo que no fue necesario revisarlas una por una; Carpeta IV de la ANM también con 203 folios de “actas de visita” de la misma fecha; Carpeta V de la ANM con un archivo Pdf de 396 folios y otro de 208 folios igualmente de “actas de visita” y de un Informe Técnico sobre el polígono del ARE ubicado en Buenos Aires, por lo que no revisé en profundidad esta Carpeta.

trece archivos Pdf (de 1, 88, 62, 96, 78, 74, 106, 92, 96, 104, 102, 98, 82 folios cada uno). Fueron consultados algunos oficios de la primera parte del expediente del título GD6-121 de Cosigo Resources, debido a la relación que identifiqué con el polígono Turbina-Tamboral del ARE.

Puede decirse que el trabajo etnográfico fue una luz guía que me permitió tomar una serie de decisiones sobre el material documental disponible. También me ha permitido sugerir sobre algunos elementos específicos de la relación que algunos líderes tienen con las minerías y el conflicto.

La incorporación de las entrevistas es un intento por resaltar algunas voces, unas anécdotas y unas percepciones subjetivas, más allá de los datos que enmarcan unos hechos políticos e históricos. Por la cantidad de información que venía procesando, realicé solo nueve entrevistas, dos de las cuales a un mismo líder. El riesgo de caer en la mirada particular de unos líderes, dado que pueden y, seguramente, tienen percepciones y opiniones diferentes a otros comuneros/as, decidí asumirlo pues consideraba importante escuchar la voz directa de al menos un comunero por proceso. Me interesaba resaltar también su narrativa y que ésta nos guiara en tramos pertinentes del texto. Es de subrayar que los nombres de algunos líderes han sido sustituidos concertadamente por seudónimos dado el riesgo que implica en su seguridad la información por ellos aportada. Otros líderes no lo consideraron necesario.

Las entrevistas realizadas a miembros del Cabildo de Cerro Tijeras incluyen a Albeiro Cortez un indígena minero nacido en El Diviso que, aunque siendo cabildante de años atrás, no había sido parte de la Junta Directiva hasta 2013. Su participación en la *dirigencia* de la organización ha sido muy reducida; por haber sido minero gran parte de su vida me podía brindar una mirada e información diferente a las otras personas entrevistadas del Cabildo. Además, entrevisté a dos indígenas que sin ser mineros han estado fuertemente implicados en la *dirigencia* de la organización desde sus inicios y han presenciado/protagonizado numerosos espacios y momentos relacionados con el conflicto minero. Ellos son Meraldiño Caviche quien junto con Enrique Güetio –Gobernador y vice gobernador en numerosas ocasiones desde 2004- son líderes de Altamira que se han empapado mucho del tema minero sin ser mineros. Por el rol político que han jugado

conocen gran cantidad de información y recuerdan situaciones especialmente sobre las multinacionales y el conflicto reciente, que muchos líderes de la organización no manejan. Es posible identificar esa diferencia cualitativa al dialogar con otros líderes. El primer personaje que entrevisté fue a don Ovidio Ovando de Naranjal, dado que varias personas de la organización lo referencian como cofundador del Cabildo, por lo que esa conversación versó sobre los orígenes del proceso local y su sentido político. Otro entrevistado fue Ramón Tobar, cabildante y habitante de la vereda Senderito del corregimiento de Mindalá. Además de conocer gran cantidad de información sobre la AGA y Cosigo Resources, tenía familiaridad con hechos ocurridos en su corregimiento, donde se ubica el título de esa última multinacional. El último entrevistado fue Manuel Belalcazar quien fue Gobernador en el 2013, habitante de Santa Ana en Agua Clara. Antes del 2013 poco había participado del Cabildo pero sí estaba involucrado en el proceso indígena regional, ha estado bastante implicado en el periodo reciente y permite acercarse a aspectos relacionados con la zona de Agua Clara.

Del Consejo Comunitario pude desarrollar dos entrevistas con Simón Rodríguez, quien me interesaba por su especial compromiso con el tema minero dentro de la organización y su fuerte liderazgo durante el conflicto. Mientras lo entrevistaba, Mario Mondragón me recomendó hablar con él, argumentando que es una de las personas que más conocen del tema minero en el Consejo. Luego supe que el coordinador local del proceso de Consulta Previa realizado al proyecto de desviación del río Ovejas, por lo que me aportaba una mirada amplia y de largo aliento de la construcción organizativa. A Edwin y Mario les hice una entrevista conjunta. Estos dos líderes son más jóvenes, el primero muy integrado al proceso, vinculado a la parte juvenil y cultural de la organización; el segundo es miembro y está dedicado principalmente a la minería de forma permanente. También tienen una fuerte relación con la pesca y el río.

Esas ocho entrevistas fueron semiestructuradas. Están centradas principalmente en la reconstrucción de las historias conflictivas entorno a los títulos de exploración y explotación de oro. A determinados actores minero como las retroexcavadoras y, así como

en las relaciones entre organizaciones étnicas, gremiales y el estado. Con Edwin y Mario, hablamos del trabajo del Consejo Comunitario y de su perspectiva hacia el futuro, del desalojo solicitado por Sarria, de cómo viven la minería ellos. Con Simón profundicé en los tipos de minerías que realizan los afrodescendientes en La Toma, el conflicto con AngloGold, las “retros”, la relación con el Cabildo y la constitución de Resguardo. Con Meraldiño pude profundizar en su rol como concejal, en el tema de El Danubio y AngloGold. Con Albeiro, por ser minero, pude indagar en cómo veía él la minería, las formas de trabajo en la explotación en filón, sobre la mina El Danubio, las retroexcavadoras y en menor medida sobre el conflicto subyacente.

Conscientemente me lancé a este proceso de investigación, reconociendo que partía de un desconocimiento casi completo del medio y la vida rural, porque sería la oportunidad de aprender de otros mundos, otras subjetividades y resistencias. Esta experiencia podía cambiar algo de mi mirada, y así fue. La revisión del trabajo ha sido también un proceso de aprendizaje y autocrítica que debe continuar más allá de este resultado.

Además, a través de esa revisión se ha propiciado un intercambio más concreto sobre algunas partes del texto, dialogando con determinados líderes étnicos sobre algunas ideas que en él están plasmadas. Por momentos ha sido posible leer directamente el texto, incluso redactar conjuntamente, en otros se hace necesario preguntar de una forma diferente, volver varias veces sobre una misma idea sin considerar el texto por su lenguaje. Sin embargo, más allá de las diversas formas y posibilidades, mi intención ha sido ajustar ideas, explicitar las posiciones diferentes entre ellos y también frente a las mías, complementar, aclarar y contraponer informaciones. En el anexo 2 relaciono los encuentros en los que he desarrollado este tipo de interacción.

Algunas otras fuentes se presentan en acápites diferentes. Al abordar el precedente del Acta del 86 y del Proyecto de Desviación del Río Ovejas se referencian algunos artículos que revisé en la prensa de esos meses, especialmente El País, consultado en la Biblioteca Departamental durante el segundo semestre de 2013. Finalmente, la breve contextualización sobre el tema minero institucional se soporta en artículos que venía

encontrando en internet desde que me interesé en el tema minero -2011-. Estos permiten ilustrar la importancia creciente del asunto en la opinión pública nacional.

#### **D. El conflicto social, organizaciones y movimientos sociales en América Latina**

El conflicto social ha sido una preocupación permanente en la sociología tanto desde visiones en las que la prevalencia de las causas estructurales de las relaciones de producción, de la distribución de bienes económicos y de poder son remarcadas como factores/causas intrínsecas al sistema social, así como desde perspectivas funcionalistas que ponen el acento en los medios por los que se restablece la integración y ante todo en la capacidad de equilibrio del sistema (Birnbaum, 1992). Podríamos decir que –casi- todas las teorías sociológicas deben hacer frente a la realidad “omnipresente” del conflicto en la vida social en sus diferentes campos, relaciones y niveles, pero la función y las fuentes del conflicto han sido materia de un largo debate, más o menos intenso, más o menos explícito en las diversas propuestas teóricas; y las posiciones ante lo considerado conflictivo y el por qué, resultan diversas. En este sentido, esas consideraciones marcan la forma en que se aborda el fenómeno y qué es importante ver en él. Es ya conocida la referencia a la lucha de clases como modelo clásico del enfrentamiento entre amplios sectores diferenciados e identificados con relación a su posición en el modelo de producción, enfrentamiento especialmente relevante y agenciado desde una consciencia de este eje-clase en los conflictos obrero-patronales de las sociedades industrializadas del siglo XIX – reivindicándose el proletariado explícitamente como clase, y fundamentando su confrontación en esta perspectiva, lo que para Marx sería una no-ideología, a diferencia de clases sociales anteriores-. La evidencia de esa fuente de conflicto ha marcado profundamente la mirada y el avance de los estudios en torno a éste durante mucho tiempo. Sin embargo, tanto la predominancia de una lectura reduccionista del marxismo así como de otros importantes teóricos como Durkheim, viéndole como producto de una especie de disfuncionalidad, indujeron durante mucho tiempo una “muy rígida interpretación de las fuentes del conflicto”, mostrándose “incapaz” de “aprehender su extrema diversidad”, pues



sus referencias casi mecánicas a contradicciones estructurales desestimaron el estudio específico de sus desarrollos como unidad analítica autónoma más allá de estos supuestos determinantes (Birnbaum, 1992).

Por otro lado, la discusión sobre el papel de la intencionalidad de los actores, de su acción y elección es mucho más compleja en la obra de Marx. Es sabido el interés que tuvo por conceptualizar y reconocer la incidencia de los valores e ideologías de los actores implicados en el desarrollo de los conflictos que analizó, “de su consciencia “verdadera” o “falsa”, de su alienación o, también de su aptitud a desligarse de sus intereses para comprometerse, como ciertos nobles durante la Revolución francesa, al lado de actores que persiguen objetivos contradictorios” (Birnbaum, 1992: 234) El reconocimiento del peso específico que tiene en un conflicto la elección tomada por ciertos individuos, su influencia en el desarrollo de éste, implica una mirada sobre el margen de libertad de aquellos frente a las estructuras socioeconómicas en las que se inscriben. Se abre de alguna forma la discusión sobre la naturaleza de la acción colectiva y del desarrollo propio de los conflictos, sobre el peso de aquella en el rumbo de éste.

En otra vía, e intentando cuestionar el determinismo estructural y economicista, está el individualismo metodológico de Weber, quien pone un fuerte acento en la “acción fundada sobre valores que no pueden deducirse simplemente de la función ocupada dentro de una institución cualquiera”, y para el que “la lucha es ‘una relación social en la medida que la actividad está orientada por la intención de hacer triunfar su propia voluntad contra la resistencia del o de los interlocutores’.” (Birnbaum, 1992). Como señala Birnbaum, este razonamiento pone en evidencia la posibilidad que tiene el actor de incidir en la “competencia” a partir de una multiplicidad de elementos “yendo de la fuerza física hasta las capacidades intelectuales o incluso organizacionales, incluyendo igualmente tanto el carisma como las diferentes técnicas demagógicas”. (Birnbaum: 236) En este sentido, la fuente del conflicto no se restringe a causas estructurales ligadas a la producción económica o a la división social del trabajo. Ahora, éste reviste los niveles más micro, incorpora los individuos y su intencionalidad, quienes apelan a una diversidad de recursos –desplegados en la lucha o contemplados como objetivos a alcanzar-, sean la riqueza, el poder o el prestigio. Esta perspectiva marca un nuevo paradigma: el conflicto no cesa y no puede

cesar, es “inherente a la vida social” y más que una disfuncionalidad “se transforma en un concepto analítico utilizable para todo el sistema social.” (Birnbaum, 1992). Se evidencia una serie mucho más amplia de aspectos conjugándose en los conflictos, pero también la clásica discusión en torno a la relación acción-estructura.

Por otro lado, en torno a la categoría de organización social ha habido interesantes debates teórico-metodológicos que referiré muy parcialmente. Aparece de forma similar la discusión sobre la intención del actor, que corrientes económicas postulan principalmente en términos de elección racional y consciente de parte del individuo frente a la organización<sup>3</sup>. La mirada de la acción individual desde la perspectiva del racionalismo utilitarista ha traído profundas consecuencias que, de igual forma que las miradas estructural-funcionalistas, han segmentado y ocultado importantes elementos tanto de la vida social en general como organizativa en particular, apartando del análisis factores efectivos que intervienen en la elección y la conducta humana, y eventualmente colectiva. “Estos modelos no aclaran la génesis y existencia de grupos (...). Aun cuando reconocen libertad en los actores, al aislarlos les imputan una libertad y una racionalidad ilimitados, y los tratan como actores soberanos y racionales que negocian libremente entre ellos las condiciones de su cooperación. La organización debe considerarse como un conjunto de mecanismos reductores que restringen las posibilidades de negociación de los actores, y que –de esta manera- permiten resolver los problemas de cooperación.” (Crozier y Friedberg, 1977)

La ilusión racionalista también permeó las posturas inversas, esto es las visiones funcionalistas y estructuralistas de la organización social que tienden a negar la importancia del actor individual, su intención y acción propia. Este último estaría aplacado por una suerte de obediencia mecánica surgida de la integración en su rol funcional para el logro del mantenimiento de la organización y sus objetivos. Su supuesta adhesión a una racionalidad

---

<sup>3</sup> La comprensión de la relación individuo-organización partiendo de la intencionalidad y necesidad del actor genera dos tipos de simplificaciones según Crozier y Friedberg: “porque un actor ‘abstracto’ y aislado de su contexto requiere acudir a algunos ‘postulados a priori’ sobre el comportamiento humano, que implica apelar a simplificaciones”. Por un lado, la que prima las necesidades psicológicas del individuo, y asume una convergencia dada entre estructuras organizativas y esas necesidades, vistas cada una como variables independientes y separando las entidades. Y la que partiendo del esquema teórico del mercado, ve en la racionalidad del individuo la intención permanente de obtener una retribución equivalente a la contribución, basando la negociación del actor con la organización en una lógica costo-beneficio. (Crozier y Friedberg, 1977)

única que gobierna la organización permite elaborar una concepción de ésta como ausente de conflictos y discontinuidades internas. En este sentido, las organizaciones como un “todo unificado y coherente, enteramente estructurado por objetivos predeterminados y fijos una vez por todas, al servicio de los cuales ella se encuentra y en relación a los cuales ella es de alguna manera totalmente transparente” (Crozier y Friedberg, 1977) dominó como perspectiva marcando diversas propuestas teóricas.

Todas estas perspectivas han sido poco a poco desmontadas y relativizados los supuestos sobre los que se fundan, a través de gran cantidad de trabajos empírico-analíticos en torno a los procesos de burocratización, de toma de decisión y en general de los intercambios mediados por relaciones de poder. Se puso entonces en cuestión la teoría de la elección racional y utilitarista, la noción transparente de las organizaciones con objetivos claros y coherencia interna, el “carácter intencional del funcionamiento de una organización” así como de las acciones colectivas de estos grupos. Emerge un énfasis en la “limitada racionalidad” –en términos clásicos de medios/fines costo/beneficio- que opera en las decisiones de los actores individuales, en las que se mezclan factores fuertemente vinculados a lo afectivo, el reconocimiento mutuo, la identidad personal y compartida; así como en la ambigüedad de los desarrollos de la organización, de sus objetivos y estructuras a lo largo del tiempo.

La perspectiva de la organización como una “arena política” reconoce, de este modo, que la cooperación no es espontánea ni mecánica, que las relaciones de poder y dependencia prevalecen entre sus miembros, los cuales se comportan en función de una serie de influjos e intenciones ambiguas, cargadas de racionalidades distintas según sus lugares sociales y organizativos específicos, e incluso “eventualmente contradictorias”. La estructura organizativa no está por “fuera” de los actores –los cuales se insertarían en ella-; ésta es el conjunto de posiciones y relaciones entre aquellos, y cambia como tal en el tiempo –en unos casos más rápido o más lento-. Se presenta, por lo tanto, un dualismo en el que la acción individual es estructurante: da forma a la organización en un entramado de actores con intenciones claras o ambiguas, en el que a través de relaciones dinámicas y cambiantes de poder que se materializan “coaliciones” dirigentes. O mucho más allá de estas coaliciones, donde cada uno de los jugadores actúa modificando la trama en la que se

desarrollan esas mismas relaciones que lo restringen desde las posibilidades de su propia margen de libertad –que varía según sus recursos disponibles para el control de incertidumbres y dependencias, libertad que remite de forma cíclica, en parte, a su lugar en la trama-.

En este sentido, la organización “no tiene ni personalidad ni objetivos propios” si no los que se construyen en la dinámica sociopolítica de sus miembros, “la coherencia, la cohesión y la integración” son procesos condicionados por la ambigüedad y la contingencia. Según March la ambigüedad concierne principalmente a cuatro dimensiones: 1. La ambigüedad relativa a las preferencias de los actores; 2. “La ambigüedad de las pertinencias de las acciones, de conductas y de decisiones las unas con relación a las otras, estas perturban e invierten las relaciones supuestamente claras y univocas que ligán las actividades a las políticas, las soluciones a los problemas, los medios a los fines, las acciones de una parte de la organización a las de otra parte”; 3. La ambigüedad en torno a la historia y la experiencia del pasado “es todo el problema de la significación que es necesario acordar a los eventos del pasado y de la lección que uno puede y debe sacar”; 4. La última ambigüedad “toca la cuestión de saber cómo se debe interpretar los eventos del presente y particularmente las acciones y conductas de los otros participantes” (Friedberg 1997: 78-79).

Más que concluir que las decisiones y acciones dentro de una organización están regidas en principio por lo aleatorio e incierto, la invitación de Friedberg es a “adoptar una perspectiva más maleable y relajada de los vínculos causa/efecto para no sobrestimar su cohesión, su coherencia y su acabado/finalización. Dentro de una organización, como dentro de todo contexto de acción una misma causa puede tener efectos diferentes, es decir contradictorios, una solución puede generar un problema, la existencia de medios preceder la formulación de la política que las utilizará, etc. (...) el abandono de una visión muy instrumental y cohesiva de la organización conduce a interrogarse por la finalización de su acción y a poner en duda el control de los eventos por parte de los actores” (Friedberg 1997: 86). Este enfoque conduce el análisis hacia una perspectiva cualitativa y comparativa en la que el desarrollo mismo de las relaciones internas da sentido. Dónde estas relaciones pueden ser

leídas desde una racionalidad alternativa a la clásica, racionalidad que Friedberg y Crozier conciben desde el concepto de *estrategia* (Crozier y Friedberg, 1977).

El último postulado revisado a lo largo de los estudios recapitulados por Friedberg nos remitirá de nuevo al tema del conflicto social como contexto de acción colectiva. Se trata de la problematización de las fronteras de la organización social, la relación con el ambiente “externo” y su influencia sobre ésta –lo “interno”-. Durante mucho tiempo esta relación no constituyó un campo específico de estudio, la “estructura más amplia” era apelada como explicación lineal de algunos comportamientos de determinados individuos dentro de las organizaciones, con muy poca sistematicidad.

Más adelante emerge una propuesta analítica, llamada de “contingencia estructural”, basada sobre los principios de la biología, en la cual la inquietud se plantea en términos de la correlación entre las estructuras organizacionales, su “eficacidad” y su evolución en función de un ambiente específico. A partir de esto, desarrollan una “metodología comparativa y cuantitativa desde el estudio estadístico, en vista de establecer una ciencia de las formas organizativas”. Consistía en medir las principales dimensiones del contexto al que se enfrentan y tipificar las influencias sobre sus estructuras; así, el funcionamiento y el desempeño organizacional partían de un supuesto en el que la “adaptación” de estos aspectos organizativos se desarrollaba de forma unilateral y mecánica, movida por la presión de caer en un “desempeño insuficiente”. Subyace, además, una visión “puramente ‘objetiva’ de las estructuras organizacionales y de los ‘problemas’ que pone el contexto (...) y excluye casi completamente de su reflexión los actores que tienen que tratar estos problemas y el sistema de relaciones y de negociación a través de los cuales ellos pueden hacerlo concretamente” (Friedberg 1997: 93). Numerosos estudios pusieron en cuestión los tipos ideales desarrollados por esta perspectiva, pero no nos detendremos en ellos.

Pero el resultado de esas críticas al modelo de “contingencia estructural”, permitieron profundizar en el análisis de la mediación política a la que son sometidas las influencias del ambiente, consistente en la toma de decisiones estratégicas como respuesta por parte de los

actores concretos de la organización<sup>4</sup>. Desde la teoría de la *recurso-dependencia* se ve a “las organizaciones activas” buscando controlar las incertidumbres en el ambiente que condiciona su desarrollo y realización, es decir, disminuyendo o resolviendo la dependencia a los recursos que vienen de aquel, a través de un proceso de decisión política en el que es necesario elegir estratégicamente, de esta forma, la “adaptación” es vista como producto de este proceso. Este razonamiento deriva en la pregunta sobre “el impacto estructurante de una estrategia de control de las incertidumbres del ambiente sobre su naturaleza y sus dinámicas [las del propio ambiente]. Los comportamientos descritos llevan en efecto a incluir ‘pedazos’ de ambiente dentro de la organización, a ligarse de forma firme a otros segmentos, a buscar cooperantes permanentes, breve a construir un tejido de interlocutores que pueden llegar a hacer del ambiente una ‘matriz organizacional’ (Emery et Trist, 1965)” (Friedberg 1997: 98). Sin embargo, esta perspectiva sigue sin problematizar la percepción y la comprensión de estas “restricciones” y “exigencias” “externas” por parte de los actores de la organización, prevaleciendo como datos objetivos y estables. Además de que limita la posibilidad de elección estratégica a la cima de la jerarquía “como si las organizaciones estuvieran perfectamente sometidas al influjo de su superior.”

Finalmente el cuarto momento es el desarrollo de estas dos últimas críticas. Friedberg afirma entonces, como criterio de una nueva mirada, que las elecciones estructurales que se operan dentro de una organización son “el resultado de la forma en la cual todos los individuos y grupos que componen la organización completa, desde lo alto a lo bajo de la jerarquía, perciben y analizan las oportunidades y restricciones que existen “objetivamente” dentro del ambiente y deciden integrarlas a su comportamiento” esta “evaluación no se hará independientemente de las condiciones del juego dentro de la cual ellos son comprometidos en el seno mismo de la organización, si no que las tendrán en cuenta.” Estas condiciones y restricciones internas estructurarán la percepción del ambiente al cual los actores buscarán responder. Como el mismo autor manifiesta esta es una radicalización de la visión política

---

<sup>4</sup> Es importante entonces “resaltar el carácter fluctuante, frecuentemente ambiguo y contradictorio, de las restricciones y las exigencias del ambiente y a insistir sobre la capacidad de elección estratégica de la organización, la cual puede y debe escoger la manera en la que ella va a responder. (...) Child muestra que es la estrategia de una empresa, es decir el conjunto de elecciones operadas por sus dirigentes o su ‘coalición dominante’ en la afectación de los recursos disponibles, que confecciona su estructura. Lo que quiere decir que entre las influencias del ambiente y la estructura de una organización se intercala una verdadera intermediaria, la estrategia de la organización tal y como es formulada por su ‘coalición dominante’.” (Friedberg 1997: 97)

en la que el análisis incluye “los mecanismos por los cuales los miembros de una organización perciben e interpretan las restricciones, las exigencias o más generalmente las características del ambiente. (...) Ellas no pueden ser pensadas independientemente de las condiciones de la acción de los miembros de la organización por las cuales ellas son en alguna medida constituidas” (Friedberg 1997: 100)

En lo que concierne a la teoría de los movimientos sociales y sus organizaciones, las reflexiones van en un sentido similar. La reflexión sobre la relación entre contexto/ambiente y organización social remite en parte a las anotaciones que hace Diani sobre las redes de los movimientos sociales y su importancia en la configuración/implicación de estos en los conflictos sociales. La crítica a una perspectiva de movilización de recursos como única funcionalidad de las redes de cooperación, en función de unos supuestos intereses estables surgidos de una posición política o social específica, se cuestiona desde la idea de que “la percepción de intereses –y más en general la identificación de problemas socialmente relevantes- es el fruto de un proceso de construcción social (Hilgartner y Bosk, 1988; Best, 1989).” (Diani 1998: 253) Se pone entonces el acento en las dimensiones que permiten la problematización de aspectos de la vida social y por lo tanto en la configuración de conflictos en los cuales los movimientos sociales y las organizaciones se comprometen “es necesario tener en cuenta que el hecho de que la emergencia de nuevos conflictos implica al mismo tiempo la difusión de nuevas visiones del mundo. A veces, se ponen en evidencia áreas conflictivas que los modelos precedentes de interpretación del conflicto social impedían comprender; otras veces, las definiciones socialmente dominantes de un asunto determinado son puestas en entredicho por representaciones alternativas.” (Diani 1998: 255)

En este sentido la configuración de lo que Snow llama los “esquemas interpretativos” se vincula directamente con la problematización de la capacidad que tienen los actores de las organizaciones sociales de aprehender y dar sentido a las dimensiones de su contexto para tomar las elecciones estratégicas a través de los procesos de intercambio y decisión en el juego interno –de la organización o del movimiento-. Los mecanismos por los que se dota de significación y se comprende la realidad entran a jugar un papel crucial, los “esquemas

interpretativos” referenciando el marco cognitivo a través del cual los actores explican y representan el mundo, a sí mismos y la naturaleza del conflicto en el que están inmersos.

La teoría de los “nuevos movimientos sociales” ha problematizado aspectos frente a los cuales no había un énfasis, o se relegaban, como el papel central de la identidad y la composición social de éstos, así ha identificado nuevas formas en las que se estructura y fundamenta la acción colectiva. La pregunta explícita por la “naturaleza de los conflictos sociales” evidencia desde esa teoría “nuevos elementos estructurales de los conflictos” presentados en la segunda mitad del siglo XX en las sociedades occidentales. Se resaltan dos elementos distintos generales “en especial respecto al movimiento obrero”: 1 diferente composición social de los movimientos –la nueva clase media articulándose con pequeñas clases medias locales afectadas por la modernización- y 2 mayor receptividad hacia nuevas visiones del mundo –sistemas de valores postmaterialistas-. Se identifican entonces tres variables importantes que “potencialmente pueden orientar las decisiones relativas a la cooperación y la pertenencia individual” en estos entramados donde se configura la acción colectiva: “1. Posición social de los activistas. 2. Vínculos de solidaridad que se derivan de sus experiencias pasadas en “viejos” y “nuevos” conflictos. 3. Sistemas simbólicos adoptados por los actores.” La influencia de estos factores en la “estructura del *network*” es variable en el tiempo. Por ejemplo, el sentimiento de solidaridad e identidad aumentan o disminuyen en intensidad según las oportunidades de éxito de la acción colectiva, percibidas en relación a la “estructura de oportunidades políticas” o por el contrario de situaciones políticas desfavorables, efectivas en un momento dado; así como durante “ciclos de protesta” o “latencia”. La variación de estos sentimientos incide igualmente en las relaciones internas, alianzas y cooperaciones interorganizativas.

Todas estas perspectivas han influenciado el análisis de los recientes movimientos sociales en América Latina. La emergencia de fuertes olas de protesta asociadas a nuevos conflictos y al protagonismo de grandes movimientos sociales, especialmente durante la década de los 90’s y siguientes, es un fenómeno que ha marcado fuertemente la vida social y política de los países latinoamericanos en su actualidad. Salgado y Ñañez nos ofrecen un panorama con las líneas más gruesas de las reflexiones desarrolladas al respecto, “Zibechi [2003], señala que los movimientos sociales en la región ‘están transitando por nuevos caminos,



que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos de los países centrales. (...) Son las respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que trastocó las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana.” (Salgado y Ñañez 2014: 351)

Se ha analizado la incidencia de las agendas temáticas de esos actores colectivos en las transformaciones de sus sociedades, pero también las características propias de estas nuevas organizaciones, las redes de cooperación e identidad en las que operan. Se identifican por ejemplo, sectores populares urbanos que se articulan en movimientos barriales y vecinales, el movimiento de desocupados organizados o *piqueteros*, los procesos de “recuperación” de fábricas en cese por la desindustrialización en Argentina. El EZLN se visibiliza desde México a nivel internacional con la reivindicación de autonomía étnica, augurando la movilización indígena y campesina que ya bullía y depondría presentes uno tras otro en Ecuador. Estos tres referentes marcan la memoria de los conflictos en la historia reciente del continente, “representa la irrupción de subjetividades políticas alternas con marcos cognitivos que (re) valorizan el concepto de movimiento social con un importante componente territorial” (Salgado y Ñañez 2014: 354) El fortalecimiento progresivo de estos movimientos étnicos y políticos, en el caso de Ecuador y Bolivia, ha implicado una reconfiguración de los poderes institucionales estatales bajo criterios de “radicalización de los sistemas democráticos”, y el control público de los recursos naturales y el patrimonio nacional.

En esta renovadora dinámica política se re-editan términos que parecían caducos como *anti-imperialismo*, *descolonización*, *emancipación*. Categorías como *lo popular* fungen en tanto elemento articulador de diferentes actores e identidades sociales<sup>5</sup>. Según Svampa, son al menos dos factores consensuados como transversales en los estudios de estos movimientos en América Latina: “el carácter socio territorial y la irrupción de formas de participación popular en el espacio público”. También sintetiza los temas problematizados en sus agendas actuales, que articulan: “Nueva cartografía de las resistencias; Ampliación

---

<sup>5</sup> “ninguno de estos conceptos límites ha retornado intacto o simplemente como fantasma del pasado; antes bien, sobre ellos se van operando trastocamientos y resignificaciones mayores, ligadas tanto a la nueva dinámica del poder como a la acción contestataria de los movimientos sociales contemporáneos” (Salgado y Ñañez 2014: 353)

de los horizontes de sentido de lo social popular; Potenciación de las luchas ancestrales por la tierra (campesinos, indígenas, afrodescendientes); Nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”) ligadas a un concepto de territorialidad con un fuerte componente cultural y de construcción de relaciones sociales. Territorialidad ligada al hábitat y a las condiciones de vida; Nuevas modalidades que adopta la lógica del capital en los espacios considerados estratégicos en términos de recursos naturales. Por ejemplo los conflictos mineros; Resistencia en contra de “economía por desposesión”, y de los modelos de reprimarización de los recursos, en contra de los proyectos minero-energéticos y de los agro negocios; territorio: locus del conflicto.” (Salgado y Ñañez 2014: 359)

Así, los recientes movimientos sociales en Latinoamérica tienden a ubicarse abiertamente en una posición de cuestionamiento de las políticas neoliberales de privatización, la reducción y focalización del gasto social, y la desregulación económica recetadas por los organismos multilaterales a los Estados. El cuestionamiento del proceso de desindustrialización y reprimarización de las economías de América Latina, y con esto de la tendencia a profundizar la división internacional del trabajo, se formula desde “esquemas de interpretación” que mezclan viejos conceptos con miradas propias de los “movimientos identitarios”, generando nuevos vínculos causales, explicaciones y discursos. Todos estos cambios que implican la desestructuración del espacio social se vinculan al aumento de la marginalidad y el empobrecimiento, en fin a la desigualdad social, ahora concebida desde una idea de justicia social renovada. Esa reprimarización es tangible en el crecimiento acelerado de la Inversión Extranjera Directa en el renglón primario de la economía, constituyéndonos como exportadores de materias primas y profundizando la explotación de recursos no renovables<sup>6</sup>. Es por esto que, no solo Svampa, sino numerosos autores resaltan “la alta dependencia de mercados internacionales y la fuerte relación entre gobiernos y grupos económicos privados” como características de las economías y los Estados Latinoamericanos hoy.

---

<sup>6</sup> Para un análisis económico del proceso de reprimarización en América Latina y el Caribe, ver primera parte del artículo de Pérez: (Pérez, 2014: 253).

Pareciera el re-encauchamiento de un modelo extractivo–exportador que no es ajeno a nuestra más lejana historia, basado en la expansión de “la frontera agrícola, petrolera, minera, energética y forestal hacia zonas que desde el discurso dominante son considerados como territorios vacíos e improductivos.” (Salgado y Ñañez 2014: 356) Sin embargo, lo que vivimos es algo diferente. La economía global actual, los mercados de inversión y financieros, los desarrollos técnicos, tecnológicos y de las “fuerzas productivas”, las formas de trabajo, la nuevas estructuras empresariales, la crisis energética, en fin, el actual contexto histórico delinea un fenómeno en sí diferente. Algunos le han llamado “Neo-extractivismo”<sup>7</sup>, caracterizado por su aumentada capacidad para exacerbar los daños ambientales y por una “competencia entre capitales internacionales y nacionales por el acaparamiento de tierras, suelo y subsuelo, a través de diversas modalidades como la extranjerización, la titularización [minera] y el derecho real de superficie, para la producción de *commodities* que se tranzan en el mercado mundial (...) [Garay, 2013]” (Salgado y Ñañez 2014: 356)

En los procesos de apropiación de tierras y recursos se han identificado mecanismos legales, pero también ilegales. En estos últimos se reconocen la realización de transacciones engañosas, la presión a comunidades locales y la implicación de grupos paramilitares, es decir la aplicación de mecanismos coercitivos para la expulsión y control de la población. Salgado y Ñañez señalan la utilidad que ha tenido la propuesta de David Harvey en la conceptualización de esos *otros* mecanismos a través de los que se realiza el capital: *la acumulación por desposesión* permite pensar el proceso de *acumulación originaria o primitiva* que analizó Marx, como un fenómeno que ocurre de muchas formas actualmente “es omnipresente, sin importar la etapa histórica, y se acelera cuando ocurren crisis de sobreacumulación en la reproducción ampliada, cuando parece no haber otra salida excepto

---

<sup>7</sup> “en el marco de la tercera revolución científico tecnológica y las posibilidades que ésta plantea –particularmente bajo la biogenética y sus biotecnologías- para el despliegue de un extenso y profundo proceso de mercantilización (de control y explotación capitalista) de la naturaleza y la vida a una escala global antes inimaginables. Y también porque el capitalismo neoliberal está llevando la contaminación del ambiente a un punto que no sólo exaspera su carácter devastador sobre numerosas poblaciones y territorios a lo largo y ancho del globo, sino que también amenaza la continuidad de la vida misma en todas sus formas sobre la tierra bajo la crisis climática en curso. (...) dimensión energética- expresión del agotamiento de la matriz energética del siglo XX y sus efectos sobre el crecimiento del precio de los hidrocarburos y la intensificación de las disputas por el control de las reservas conocidas y potenciales, así como por las posibles nuevas matrices energéticas” [Seone 2012, p. 9]” (Salgado y Ñañez 2014: 357)

la devaluación” (Harvey 2005: 115)<sup>8</sup>. Tienen hoy un importante lugar la mercantilización y privatización de bienes comunes como el agua, las semillas y los recursos genéticos, así como otros procesos a los que Marx dio un gran peso en momentos históricos anteriores: la “mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas”<sup>9</sup>. Por todo lo anterior, aunque sabemos que la recuperación de la tierra y el acceso a recursos naturales no son reivindicaciones nuevas en América Latina, es necesario reconocer que los proyectos emancipatorios actuales basados en aquellas son el resultado de nuevas configuraciones históricas, como hemos señalado, son una respuesta al neoliberalismo, a lo que sucede en la esfera del consumo y a los procesos de acumulación por despojo (Varela y Mariño 2004: 4)

La afectación masiva de comunidades rurales en las que predominan economías de subsistencia, o con muy reducidos excedentes, y de sus territorios, es problematizada por estudiosos y politizada por organizaciones sociales-comunitarias. Los movimientos sociales elaboran una determinada consciencia sobre aquellos medios de vida afectados, comprendiendo esta realidad desde una posición política que resalta las “relaciones de sustentabilidad entre la tierra y el territorio” (Salgado y Ñañez 2014: 356).

El reconocimiento de la categoría de territorio como “eje central de la acción colectiva en la región”, más que la constatación de una simple dimensión discursiva, permite abordar el interés de esos actores por consolidar y practicar el ejercicio de *la territorialidad*. “Alude al sentimiento de pertenencia a ese espacio geográfico en el que se tienen una serie de derechos y en el que se despliegan formas de comportamiento particulares. Se hace efectiva en la medida en que se intenta influir, afectar o controlar acciones mediante el establecimiento de un control sobre un área geográfica específica. Por lo tanto, la territorialidad hace referencia a los sistemas de poder que se despliegan en el territorio y que se encuentran en permanente conflicto” (Salgado y Ñañez 2014: 354, 355). El control de las dimensiones del territorio se torna fundamental para la realización del proyecto

---

<sup>8</sup> Según los análisis de Harvey, este tipo de acumulación se ha acentuado en el último periodo del capitalismo (1973 en adelante) desarrollando múltiples mecanismos, algunos han adquirido un protagonismo nunca antes visto: “las promociones bursátiles, los esquemas ponzi, la destrucción estructurada de activos a través de la inflación, el vaciamiento a través de fusiones y adquisiciones” entre otros (Harvey 2005: 113-114).

<sup>9</sup> Más de fondo se trata de “la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, colectiva, estatal, etc.- en derechos de propiedad exclusivos; la supresión de derecho a los bienes comunes”.

sociopolítico de determinadas organizaciones y movimientos sociales, instaurándose como una política dentro de estas apuestas. Como veremos a lo largo de este trabajo, las dos organizaciones étnicas implicadas en el conflicto minero analizado son un ejemplo de ese esfuerzo colectivo por ejercer territorialidad.

Es necesario señalar que las “dinámicas de territorialización” no son patrimonio exclusivo de las comunidades rurales movilizadas contra lo que amenaza sus formas específicas de existir y representarse, mucho más, han sido elaboradas y apropiadas desde diversos lugares sociales –incluyendo académicos- y en función de tópicos y reivindicaciones muy diversas<sup>10</sup>. Sin embargo, la valoración de la territorialidad en el lenguaje reivindicativo “pareciera ser más inmediato para el caso de organizaciones indígenas y campesinas, debido tanto a la relación que éstas plantean entre tierra y territorio, en términos de comunidad de vida, como a la notoria reactivación de la matriz comunitaria indígena acaecida en las últimas décadas” nos dice Svampa (Salgado y Ñañez 2014: 360).

Principalmente en los últimos decenios, la interlocución entre las organizaciones ambientalistas y las étnicas es más o menos recurrente en diferentes conflictos sociales ligados a la implementación de megaproyectos de desarrollo económico. Estas relaciones de intercambio y cooperación parecen haber maleado las miradas e incidido en el horizonte reivindicativo de unas y otras organizaciones<sup>11</sup>. Svampa considera que distintos procesos de reivindicación social –analiza particularmente casos de Argentina y Perú- vienen transformando su “matriz cognitiva y discursiva”, cambio que concibe como “un giro que se puede denominar ‘eco-territorial’ de las luchas contra la minería, que corresponde a la potenciación de ‘un lenguaje de valoración acerca de la *territorialidad*, que expresa la convergencia entre la visión ambientalista y la revalorización de la matriz comunitaria-indígena. El resultado es un lenguaje que se opone radicalmente al discurso ecoeficientista

---

<sup>10</sup> “las dinámicas de territorialización de los mismos y de la apropiación de los espacios geográficos “recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. Es la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación. La desterritorialización productiva (a caballo de las dictaduras o las contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido [...]. El resultado, en todos los países aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva” [Zibechi 2003, p. 186]” (Salgado y Ñañez 2014: 354)

<sup>11</sup> Svampa sostiene que estas interacciones han permitido la “radicalización e inclusión de reivindicaciones más amplias que puntuales como el derecho a la diversidad cultural y la exigencia de la desmercantilización de los bienes comunes – naturales-”

y la visión desarrollista, propia de la narrativa dominante.” (Subrayado nuestro) (Salgado y Ñañez 2014: 360) Al mismo tiempo, la institucionalización del discurso ambientalista en claves muy moderadas, lo que Svampa llama ‘ecoeficientista’, permiten a los agentes de las políticas económicas tener un margen de control de determinados conflictos denominados “socio-ambientales” en función de reducir la incidencia de los grupos divergentes<sup>12</sup>.

Por otro lado, algunas de esas luchas actuales “en especial de la minería a cielo abierto y los agronegocios articulan a una heterogeneidad de sujetos sociales que tienen características distintas a los pobladores rurales” (Salgado y Ñañez 2014: 359). La convivencia en determinados conflictos de multiplicidad de actores ubicados en diferentes niveles de incidencia y lugares geográficos –“luchas multisectoriales”-, es lo que Svampa denomina como “multiescalaridad del conflicto” –actores locales, regionales, nacionales y globales-.

Se caracterizan también por la recurrencia a “la acción directa no convencional y disruptiva” como “los cortes de ruta y los bloqueos al acceso de campamentos mineros”; por exigencias que van desde la “derogación de leyes mineras hasta la ampliación de mecanismos de participación directa a nivel regional y nacional”.

Las consultas populares han sido una importante reivindicación en el marco de proyectos mineros, como herramienta política para ampliar la participación y politización del tema. Su historia como mecanismo se ha construido en diferentes países de la región, las fechas emblemáticas son: Cotacachi en Ecuador (1997), Tambo Grande en Perú (2002), Esquel en Argentina (2003), Piura y Cajamarca en Perú (2007), Sipacapa, Huehuetenango y Ixtahuacan en Guatemala (2005, 2006 y 2007, respectivamente), Piedras en Colombia (2014)” (Salgado y Ñañez 2014: 360)

Para la lectura de este trabajo es importante que el lector conozca los análisis avanzados sobre este tipo de conflictos, que como los relacionados con proyectos mineros, vienen emergiendo y consolidándose. Las reivindicaciones, agendas políticas y “marcos de interpretación” de algunos actores colectivos caracterizados parcialmente en los párrafos anteriores pueden darnos pistas sobre el caso que vamos a indagar a continuación. Sin

---

<sup>12</sup> “El término socioambiental puede entenderse como una ‘restricción temporal y sectorial-corporativo de la acción programática de estos movimientos, sirviendo a diluir su significación política’ [Seoane 2012, p. 9]”.

embargo, nuestro análisis a lo largo de este texto intenta abordar, principalmente, el desarrollo de un conflicto específico, las relaciones entre los actores sociales implicados en él y la acción colectiva de dos organizaciones étnicas sus situaciones concretas.

Consideramos que, a la vez que estos actores colectivos se comprometen en una situación de conflicto para disputarse la permanencia y control del territorio, el acceso a la tierra y recursos naturales, estructuran poco a poco sus posibilidades de actuar. A partir sus procesos “internos” y de interlocución con el ambiente, constituyen los problemas a los cuales responder y los recursos a emplear. Definen y redefinen sus propios objetivos, sujetos a la eterna ambigüedad propia de la racionalidad de la acción humana. Éstos pueden “aclararse” y configurarse conscientemente, o “enturbiarse” según las trayectorias concretas, las percepciones y los intercambios posibles en el contexto, así como la injerencia de actores “externos” o/y de oportunidades políticas. En ese sentido, partimos de que la relación organización/ambiente es fundamental en el análisis de los procesos organizativos que abordaremos, ya que puede concebirse como un eje desde donde se instituyen, a través de la incidencia recíproca, tanto la una como el otro.

La lectura que el Observatorio Planeta Paz propone en el artículo de Salgado y Ñañez, converge en mayor medida con la mirada que hemos intentado plasmar, una mirada que integre como uno de sus principales elementos la “percepción mucho más territorializada y cotidiana del conflicto, la cual se expresa en términos de las imposibilidades o los desafíos que enfrentan las comunidades para poder desarrollar sus proyectos vitales” en palabras de estos autores (Salgado y Ñañez 2014: 362). En el caso del presente trabajo, las percepciones de algunos líderes son esas voces que configuran una mirada particular del conflicto que, aunque profundamente política, no necesariamente está estructurada sobre elaboraciones ideológicas compactas y estáticas. Esas voces nos permiten llevar un hilo conductor basado en una experiencia local específica, a la vez que se integra con otras fuentes primarias extraídas del material documental que complementan, profundizan y contraponen informaciones.

## CAPÍTULO I

### 1. El polémico “boom” minero nacional y los hitos de conflicto en el reciente trayecto histórico local

#### 1.1. El “des-arreglo” minero sale a la luz: institucionalidad y política minera en Colombia

*“(…) más de una tercera parte del territorio continental de Colombia cuenta con título minero, está solicitado para titulación o está destinado para el desarrollo minero a través de las áreas estratégicas mineras (...)” (Negrete 2013: 24)*

La polémica salió de los círculos más especializados hacia la opinión pública a principios del año 2011, cuando se agudizaba la disputa entre amplios sectores de la sociedad civil, principalmente de Bucaramanga, contra la empresa minera canadiense Greystar que pretendía<sup>13</sup> explotar oro a cielo abierto y a gran escala en el páramo de Santurbán en Santander, de donde vienen los recursos hídricos que abastecen esa ciudad. El momento culmen de este conflicto con la movilización de miles de ciudadanos a nivel nacional, el 25 de febrero de 2011, marcó un precedente importante en la lucha contra la gran minería en Colombia y a favor de los páramos, y popularizó un tema que se había salido del dominio regional: la minería como factor de conflicto social y degradación ambiental. Desde años atrás se escuchaban voces de advertencia, llamados profundamente “incómodos” que ya no solo emitían organizaciones sociales y poblaciones afectadas, si no que venían también de un nivel institucional, y fueron abonando a la futura polémica pública que protagonizaría la Greystar.

Se hicieron, ni más ni menos, desde la misma Contraloría General de la República que en cumplimiento de sus funciones desarrolló, a finales de 2009, una Auditoría a la fiscalización que Ingeominas había realizado de los contratos mineros de “Interés

---

<sup>13</sup> Aún hoy, la empresa canadiense, renombrada Eco-Oro, pretende continuar su aspiración a un emprendimiento minero en la zona con diversas propuestas para la explotación de oro por socavón, incluso después del desenlace del conflicto referenciado. Ver “Un año después, se calienta de nuevo el páramo” (Orduz, Natalia. Julio 2012) y “Otro escollo para Eco Oro en Santurbán, ahora en el Banco Mundial” (Silla Vacía. Julio 2013).



Nacional”<sup>14</sup>. La Auditoría se convirtió en el referente determinante del debate político sobre las desventajas que conllevan para la Nación el incumplimiento de los contratos por parte de la Drummond SA y Cerro Matoso SA, así como, incluso, el cuestionamiento de los términos mismos de estos, ad portas de las fechas en la que expirarían o se prorrogarían. La advertencia y el plan de cumplimiento –para compensar y cancelar la deuda con el Estado– que la Contraloría envió a Ingeominas como consecuencia del estudio, desató un fuerte conflicto de intereses en el que se jugaba los privilegios de unas multinacionales mineras. Durante el 2010, Ingeominas vivió una dura pugna interna en la que altos directivos pretendían impedir el cobro de más de 24.000 millones de pesos por concepto de regalías no pagadas que la Contraloría ordenaba notificar a Cerro Matoso, lo que salió finalmente a la luz en debates de control político realizados en el Congreso de la República en la segunda mitad de ese mismo año. Ese oscuro capítulo que se pretendió evadir aceptando, meses después (Semana. Octubre 2010a), la renuncia del Director de Ingeominas, Mario Ballesteros, no concluyó pronto, más bien fue en ascenso junto con el conflicto socioambiental y territorial que se había desatado en numerosas partes del país y al que ya se hacía seguimiento investigativo por su impacto en páramos, zonas especiales ambientales y territorios étnicos y campesinos. El caso de Santurbán, que se dirimía justo en medio de importantes revelaciones de esos últimos seguimientos investigativos a la opinión pública fue el parte de movilización que jugó para que no continuara omitiéndose y se generara este nuevo contexto de cuestionamiento generalizado al sector minero.

*“Feria minera: títulos a \$500.000”* se leía en la portada de PODER, una de las revistas colombianas más influyentes, el 30 de abril de 2011. Su artículo recogía los datos y testimonios de varios investigadores y consultores<sup>15</sup>, que desde meses atrás habían estado publicando en varios medios alternativos múltiples hallazgos y denuncias. La impactante imagen del mapa colombiano inundado por una voraz plaga de títulos mineros y solicitudes de titulación reflejaban la política de calculada desregulación minera y ambiental imperante

---

<sup>14</sup> Se trata del Informe de Auditoría gubernamental con enfoque integral, Modalidad Especial: “Contratos de Gran y Mediana Minería-Proyectos de Interés Nacional” Diciembre 2009, referenciado en numerosos documentos sobre el tema.

<sup>15</sup> Guillermo Rudas, Julio Fierro, y Camilo Gonzales Posso que no aparece referenciado también había escrito en Razón Pública a inicios de ese año.

desde el 2001 y cada vez más acentuada. Era el reflejo, por no decir más, de la entrega indiscriminada de una importante porción del país, incluyendo ecosistemas protegidos y zonas agrícolas a actores con intenciones mineras. Lo que Guillermo Rudas bautizó como “feria de concesiones mineras” (Rudas, Guillermo, Enero 2011), el escándalo de corrupción, clientelismo y tráfico de influencias tanto de Congresistas (El Espectador. Noviembre 2011; Semana. Junio 2011), como de grandes empresas multinacionales fue posible gracias, entre otras cosas, a una realidad de la institucionalidad minera marcada por la escasez de recursos financieros y de planta de personal permanente, idónea y bien remunerada en la que quedó el Ingeominas, erigida Autoridad Minera fiscalizadora y a la vez desmantelada después de la reestructuración del 2004. Es que pasar de un total de 681 funcionarios que realizaban las labores de Servicio Geológico cumplida por Ingeominas (con 495 funcionarios costando 14.838 millones de pesos) y de Administración de los recursos mineros cumplida por Minercol Ltda. (con 186 funcionarios costando de 25.900 millones de pesos), a tan solo 325 funcionarios costando 11.572 millones de pesos en 2004<sup>16</sup>, reunidos todos en una sola entidad, la nueva Ingeominas, a la que le asignaron todas las anteriores funciones auguraba un déficit frente a la decidida intención gubernamental de aumentar a como fuera lugar los proyectos de inversión minera en el país. La “catástrofe” del tres veces frustrado Catastro Minero Colombiano (Ponce Muriel 2012: 116)<sup>17</sup> -el sistema virtual de gestión de la información minera- funcionó como la excusa/incubadora/velo perfecta para tapar tras una nube densa y gris la información de lo que verdaderamente se estaba titulando y cómo se estaba procediendo (Ponce Muriel 2012: 112-118)<sup>18</sup>.

La “feria minera” era tan solo el resultado de graves problemas de la política e

---

<sup>16</sup> “El personal de esta planta correspondía al 47,7% del que disponían las dos entidades que se iban a fusionar y su costo equivalía al 28,4% del valor total de las dos plantas. Como complemento a esta propuesta se recomendaba un ‘incremento de la utilización de la tercerización u “outsourcing” para la ejecución de actividades que, como la experiencia indica, conlleva a la larga al incremento de calidad y productividad del servicio al cliente, y frecuentemente también a una reducción de costos” en (Ponce Muriel 2012: 110)

<sup>17</sup> Rueda de prensa de mayo de 2011, comunicado de prensa 032 del 30 de mayo de 2011 Ministerio de Minas y Energía.

<sup>18</sup> Según Ponce, fueron unos 7 años lo que necesitó Ingeominas para consolidar un Catastro Minero Unificado que llamó Catastro Minero Colombiano, desde el año 2005 en el que anunció su montaje hasta el 2011-12 cuando aún generaba dificultades por desactualización y falta de depuración. También en esta contratación para la realización del CMC hubo escándalo de corrupción involucrando a Alma Mater empresa contratista vinculada a la Universidad de Antioquia y que recibió altas sumas de dinero pero no cumplió con los resultados esperados.

institucionalidad del sector y un abrebocas de los inmensos riesgos que significaba la entrega de derechos mineros calculadamente desorganizada y sin control, como salida para el crecimiento económico. Durante un largo periodo se continuarían referenciando en los medios de comunicación y eventos aquel fenómeno que se convirtió en el ojo del huracán. El “boom” minero, resultó entonces, una realidad económica, social, política e institucional con innumerables dimensiones, impactos y casos que estaban aún por profundizar en su realidad actual. Ante la visibilización pública de semejante caos el gobierno no tuvo más remedio que suspender la recepción de solicitudes desde febrero de 2011 para asumir la “descongestión” del sistema de gestión minera<sup>19</sup>.

Para mayo, la Corte Constitucional declaraba inconstitucional la Ley 1382 de 2010, más conocida como la Reforma al Código Minero, por no haber sido consultada con las comunidades étnicas. Más allá de lo positivo o negativo que esta decisión haya sido para la efectiva protección de zonas como páramos<sup>20</sup>, es claro que fue un duro golpe a la institucionalidad gubernamental y al marco jurídico del sector a favor de la participación de indígenas y afrocolombianos, que, junto con las investigaciones, críticas y cuestionamientos que iban y venían en la discusión pública, allanaron el camino para la reforma institucional que posteriormente nos propondrían como solución.

Con la crisis al cuello el Ministro de Minas y Energía del gobierno entrante, Carlos Rodado Noriega, capitán de la “loca” y “descarrilada” locomotora minera, después de haber asegurado junto con el presidente Santos que este sector sería el protagonista y el motor que impulsaría la economía de la Colombia Minera, se presenta ante los medios de comunicación a reconocer el secreto a voces con un pretendido halo de denunciante atónito y “demostrando” la transparencia del gobierno: según el Ministro, a lo que asistimos en Ingeominas fue, no solo una “piñata” minera, sino a una olla a presión, próxima a estallar (Semana. Junio 2011) (Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas. 30 Mayo 2011). En ese

---

<sup>19</sup> Ministerio de Minas y Energía, Resolución 180099 del 1 de febrero de 2011, Por la cual se adopta una medida administrativa en materia de Minas.

<sup>20</sup> Pues es la única norma en la que se prohibía explícitamente la actividad minera en zonas de páramos y otras, Art 34 de la ley 1382 de 2010, algunas: “áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar.” Sin vigencia la ley 1382, queda nuevamente rigiendo la totalidad del Código Minero de 2001, el cual no excluye estas zonas.

momento Ingeominas corregía los problemas identificados en la Auditoría de la Contraloría como lo comprobamos en su Comunicado de Prensa 056 del 29 de agosto de 2011.

Aprovecha entonces el Ministro su “denuncia” y reitera el paso a seguir para poner orden en la casa: crear la Agencia Nacional de Minerales. Es así como se da la promulgación de dos Decretos-ley (el 4131 de noviembre 3 y el 4134 de noviembre 4 del 2011) por parte del Presidente Santos, con el objetivo de reconfigurar la institucionalidad gubernamental en el sector y así asumir políticamente el caos que se había puesto en evidencia. De esta manera, Ingeominas (resultado de la fusión señalada en el periodo Uribe) debía de nuevo escindirse para dar nacimiento a dos entidades: la Agencia Nacional de Minerales, que heredaría las funciones de administración de los recursos mineros como autoridad minera y el Sistema Geológico Colombiano que heredaría las funciones de servicio geológico (Ponce Muriel 2012: 199)<sup>21</sup>.

En ese momento, el Ministerio de Minas y Energía había prorrogado por seis meses la suspensión en la recepción de solicitudes, anunciando que el Sistema Geológico Colombiano “se dedicaría a estudiar y responder las más de 15.000 solicitudes de contratos de concesión, licencias temporales y solicitudes de legalización que reposan en sus archivos” (CINEP, 2012: . Veamos unos datos ya famosos que pueden ilustrar la magnitud del problema territorial que implican las concesiones mineras: Para 1990 habían 467 títulos mineros que al final del periodo de César Gaviria aumentaron en 187 dando un total de 654 en 1994. De ese año hasta 1998 el gobierno de Ernesto Samper otorgó 172 concesiones terminando con 826 al final de su periodo. En 2002, Andrés Pastrana finalizaba sus 4 años de mandato con 221 títulos de más, es decir con 1.047 concesiones mineras. Entre 2002 y julio de 2009 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entregó 7.397 completando 8.444 títulos mineros antes de finalizar ese año (Vélez, Abril 2011: PAG). Para el año 2010 había, según Ingeominas, 8.889 títulos que representaban 4.772.617 hectáreas del territorio nacional (Vélez, Abril 2011: PAG). En Diciembre de 2012, el Ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, declara (Rengifo, Diciembre 2012) que en Colombia hay 9.400 títulos

---

<sup>21</sup> “El modelo de servicio geológico que debía presentarse en este decreto de manera explícita y coherente, se plantea de manera difusa y sin mayor unidad de criterio. Parecería que cuando se diseñó este organismo solo se estaba pensando en crear una dependencia de apoyo técnico para la Agencia Nacional de minerales y no en un centro generador de conocimiento científico.” (Ponce Muriel 2012: 199)

mineros sobre 5,6 millones de hectáreas, 2,1 millones de hectáreas correspondientes a los 3.760 títulos que están siendo explotados efectivamente. Si a 3.760 títulos en explotación debían hacerle frente tan solo 50 funcionarios, número de personas encargada de la fiscalización según la propia entidad, era de esperarse tal desparpajo en las cuentas e incumplimiento de requisitos por parte de los concesionarios<sup>22</sup>

En medio del publicitado caos era menester que el gobierno de Santos cambiara de táctica, habiendo dejado la simple titulación minera en masa reposar mientras se reposaban también las aguas, para llegar a una que le permitiera diferenciarse de su antecesor, fortalecer la “vocación” minera paralelamente, y relegitimar de nuevo el apremio por titular zonas mineras al mejor postor. Es decir, mientras estaban cocinando en la hoguera pública a Uribe por la masiva titulación desregularizada, Santos no podía continuar como si nada, su locomotora minera debía cambiar las cosas para que siguieran igual.

Para quienes los Decretos de finales de 2011 (creación de la ANM y el SGC) y la suspensión de recepción de solicitudes mineras, fueron una buena señal encaminada a corregir la entrada indiscriminada de la minería a gran parte del territorio nacional, la Resolución 045 del 20 de junio de 2012<sup>23</sup> fue el baldado de agua helada que los trajo de nuevo bien lejos de las quiméricas ilusiones en las que flotaban: las “áreas estratégicas mineras” resultaron el nuevo “as” bajo la manga que le permitió al gobierno declarar cerca de 22,3 millones de hectáreas como zonas de especial interés para la actividad minera y por lo tanto de prelación para el sector. Sumas y restas, la proyección institucional nos pinta el siguiente panorama: “Se estima que en la actualidad existen más de diecinueve mil (19.000) solicitudes mineras por resolver, que sumadas a las otorgadas y a las declaradas áreas estratégicas mineras en el Amazonas y el Pacífico (...) se puede señalar que en el país las áreas con interés minero abarcan cerca de cuarenta (40) millones de hectáreas de las ciento catorce (114) millones de hectáreas que conforman el territorio continental.” (Negrete

---

<sup>22</sup>“Ingeominas recauda al año 1,6 billones de pesos que provienen de la explotación de minas de ferroníquel, carbón, oro, esmeraldas, sal, plata, hierro, entre otros metales, correspondientes a más de 3.000 títulos mineros. Para realizar esta labor, según informó a SEMANA esta entidad, tiene un equipo de 50 personas entre Bogotá y las diferentes regiones, que hacen al menos dos visitas al año por título. Si esto fuera real significaría que cada funcionario estaría cumpliendo la maratónica labor de realizar, en promedio, 120 visitas al año. Aun, de ser así, no podrían destinar más de dos días a cada visita para verificar si la producción que reportan las compañías mineras corresponde al pago de regalías que giran a Ingeominas” (Semana Octubre 2010b).

<sup>23</sup> Agencia Nacional de Minerales, Resolución 0045 de 2012, Por la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones, 20 de junio de 2012.

2013: 24)

Las más de 19.000 solicitudes (Negrete 2013: cita 3) que el SGC debe resolver es sin duda el pantano más simple a sobrepasar, si tenemos en cuenta que son sólo un viso, un estático reflejo de lo que se desarrolla en los territorios que pretenden disputar. Y aunque no todas las áreas destinadas a la exploración terminarían en explotaciones, esta actividad preliminar implica nuevas dinámicas sociales entre los habitantes de los territorios y los nuevos actores, así como unos impactos ambientales mayores o menores según los casos, que se pueden convertir en un factor de conflicto social.

## **1.2 Despojo, conflictos previos y organización étnica**

*“...la identidad no es en sí misma su redescubrimiento sino lo que ella, como recurso cultural, permite producir a la gente. La identidad no se encuentra en el pasado por encontrar sino en el futuro por construir (Hall 2001:291)” (Restrepo 2004:62)*

*Y desconocen totalmente como el sueño que dejaron nuestros mayores de, de realmente que la vida del indio o del Nasa es el territorio, la Madre Tierra. Meraldiño Caviche 2014.*

En el transcurso de su historia local, estas poblaciones se dotaron de formas organizativas por medio de las cuales organizar las dinámicas socioeconómicas, solucionar conflictos y ganar autonomía sobre su existencia. En el caso de los indígenas, las primeras migraciones se dan desde el nororiente y sur del departamento del Cauca, de donde se desplazaron familias enteras buscando tierras baldías para establecerse. La infertilidad de las tierras bajo la propiedad de los indígenas<sup>24</sup>, el sistema de terraje que en algunas zonas sometía a

---

<sup>24</sup> En Altamira, el mayores Don Micho me explicaba en una ocasión que en el caso de los Güetio, ellos tenían diferencias con la autoridad indígena de Pueblo Nuevo, por lo que decidieron migrar. En la historia que recopiló e investigó Cristian Güetio, profesor de esa vereda, la razón de la migración era “que las tierras de la región eran muy poco fértiles y les tocaba trabajar mucho” (Morales *et al* 2010: 35). No se quedaron, entonces, en las áreas ya pobladas por los afrodescendientes sino que incursionaron montañas adentro, sobre la cordillera del lado occidental del río Cauca. Eran pocas las familias que habitaban los amplios bosques por donde caminaba algún campesino cazando o buscando madera. Según la versión de Cristian, se toparon entonces con un “viejo amigo del cabildo de Muchique” que habitaba la zona, el

comunidades enteras a una servidumbre perpetua hacia los propietarios de la tierra, la violencia que luego se convertiría en La Violencia podrían haber sido, entre otras, sus razones. Durante una reunión en aquellas veredas, unos mayores nos explicaban que vinieron desde Caldon y Paniquitá, asentándose en el área denominada actualmente como Agua Clara y La Carmelita, también Aníbal Cometa, cabildante y ex-directivo me explicaba que era similar en Santa Ana. En el caso del sector de La Florida y Altamira llegaron también personas provenientes de Pueblo Nuevo, Caldon. Algunos dicen que la vereda Altamira fue fundada hacia el año de 1929 (Morales et al, 2010:36). “Luego de empezar a habitar estas hermosas tierras, debimos organizarnos para vivir en comunidad, como éramos nasa, nos organizamos en cabildo indígena, en él Don Leandro Güetio fue el gobernador, Jesús Medina fue guardia, Gabriel Chate, Pablo Ulcue, entre otros.” (Morales et al, 2010: 36). Su pertenencia e histórica herencia indígena parecía llevarlos a intentar reproducir los lazos comunitarios propios de los pueblos nasa de aquella zona del Cauca, retomando esa forma organizativa que les era familiar. Sin embargo, esta organización desapareció, argumentan algunos, por la “falta de compromiso y respeto hacia el cabildo” (Morales et al, 2010: 38), otros por el influjo político de las causas liberal y conservadora en plena época de La Violencia. Durante mucho tiempo fue un recuerdo de los mayores.

La investigación realizada por diversos líderes del Consejo Comunitario de La Toma junto con profesores universitarios<sup>25</sup> con base en la historia oral transmitida por muchos mayores de esas comunidades negras, nos muestra que en ellas predominó la Junta de Padres de Familia después de ser “liberadas”. Éstas direccionaban sobre temas variados como la educación, la realización de fiestas y la solución de conflictos. Desde la Junta de Padres se proyectó y organizó la compra colectiva de los predios que componían Gelima, hoy el corregimiento de La Toma, a las familias Concha y Méneses, hacendados payaneses que después de la manumisión controlaron la vida productiva de los afrodescendientes prohibiendo los cultivos permanentes y exigiendo pagos por la producción, es decir, a través del “terraje”. De acuerdo con Ararat et al, este episodio consolidó un proyecto

---

señor Pedro Méndez, quien les permitió trabajar cerca de su morada. “Los resultados fueron abundantes. Al siguiente año decidieron llevar toda la familia” (Morales et al 2010: 36).

25

político colectivo en torno a la construcción de una comunidad ahora también libre de las relaciones de dependencia que perduraron después de abolir la esclavitud y fundó un nuevo periodo en esta zona. Su memoria constituye un pilar importante en el sentido de comunidad que permanece en muchos de los habitantes de La Toma y que el Consejo Comunitario se esfuerza por rescatar y reforzar<sup>26</sup>.

Más adelante, a mediados del siglo XX, la forma organizativa de las Juntas de Acción Comunal cobran una gran importancia en la vida de estas poblaciones rurales, como referente de organización de la vida comunitaria y de articulación con el estado. Desde ahí se pretendió incidir en la orientación de servicios y programas sociales institucionales hacia lo local. No obstante, el trabajo de campo y la revisión de algunos documentos de las organizaciones, nos llevan a resaltar la importancia de una “memoria larga”, que remite a la búsqueda de esa autonomía y de un poder comunitario local más propio como el proyecto colectivo para comprar las tierras desde las Juntas de Padres o el Cabildo Indígena en Altamira, en las organizaciones étnicas actuales. Consideramos que estas experiencias sociales son precedentes significativos de la reconfiguración organizativa reciente que exploraremos a continuación.

La perspectiva de la etnicidad como una “articulación”, desarrollada por Stuart Hall, nos ha sido muy útil para pensar el (re)surgimiento de iniciativas organizativas como el Consejo Comunitario y el Cabildo de Cerro Tijeras. En palabras de Eduardo Restrepo: “Una articulación es histórica y depende del contexto en el cual emerge; además, pasa a configurarlo una vez es producida. Más aún, después de su producción requiere ser renovada permanentemente porque puede ser disuelta y otra puede ser creada en su lugar. Así, lo que se encuentra es un proceso permanente de articulación/desarticulación, una suerte de lucha permanente en la cual no existe de antemano ninguna garantía de continuidad en una articulación que ha sido producida (Hall 1985:113-114)” (Restrepo

---

<sup>26</sup> Ararat *et al* nos explica sobre ese nuevo periodo que: “Las actividades agrícolas se sostuvieron sobre la base de una red de relaciones sociales que se venía tejiendo desde varios siglos atrás, al tiempo que ayudó a consolidar nuevas relaciones. Como hemos visto, personas y familias de la orilla del río Ovejas mantenían intercambios económicos y relaciones familiares y de amistad con los habitantes de las orillas del río Cauca; a medida que transitaban por este territorio iban dándole forma a la economía y a las redes sociales que hacen que los habitantes de La Toma se piensen como una comunidad.” (Ararat *et al* 2013: 182)



2004: 36-37). Desde este enfoque de la “articulación” y parafraseando a Restrepo, la existencia actual o pasada de prácticas y relaciones socioeconómicas/culturales no está *necesariamente* vinculada a una identidad específica. A su vez, las identidades no son tampoco “inventadas” sin más, de la “nada”, como si se pudiera “escoger” entre todas ellas haciendo abstracción de las “experiencias históricas” de los sujetos y de sus contextos. Son “parcialmente producidas”, en parte, a partir de estas experiencias históricas, de las características sociocomunitarias/culturales de los sujetos y de las situaciones específicas a las que se enfrentan en el presente<sup>27</sup>.

En ese sentido y como decíamos, nos parece significativo que las organizaciones étnicas actuales se inclinen por retomar estos precedentes experienciales como referentes en medio del nuevo contexto. En medio de que nuevos factores inciden en las posibilidades de autonomía de aquellas poblaciones locales. Desde nuestra lectura y a la luz de la propuesta de Hall, pareciera generarse una rearticulación de aspectos que estuvieron presentes, y permanecían seguramente de otras formas: una rearticulación histórica, estimulada por un contexto específico. En este sentido, como factores de ese contexto parecen haber sido especialmente relevantes algunas situaciones de despojo vividas por aquellas comunidades en las últimas cuatro décadas, y con éstas, la afectación de sus medios de vida y sus relaciones sociales. El acercamiento a la visión de etnicidad de un líder afrodescendiente y uno indígena, y la profundización de algunos aspectos del enfoque analítico que hemos adoptado para comprenderla se encontrarán en el Capítulo IV. En este aparte nos detendremos en algunos de esos episodios previos que hemos identificado en el intercambio con los líderes y la revisión de documentos como experiencias sociales significativas.

---

<sup>27</sup> “De forma general Hall (1996<sup>a</sup>: 141) entiende por articulación el no necesario vínculo entre dos planos o aspectos de una formación social determinada, es decir, una clase de vínculo contingente en la constitución de una unidad. Este enlace no se establece casualmente; existen condiciones históricas en las cuales puede ser o no ser producido, pero la presencia de esas condiciones no es garantía suficiente para su producción. Aunque las articulaciones son contingentes esto no significa que cualquiera es igualmente posible ni que floten libremente para anclarse, casualmente, en cualquier tiempo y lugar.” (Restrepo 2004: 36) “ ‘Existe una ‘no necesaria correspondencia’ entre las condiciones de una relación social o práctica y las diferentes formas como puede ser representada’ (Hall 1985: 104)” (Restrepo 2004: 39) Hall combate de esta forma dos corrientes que él considera dos modalidades de “esencialismos”, la que considera que la “etnicidad es irremediabilmente asociado a un lugar geográfico/social de nacimiento” así como en la que “no hay ninguna correspondencia entre locación y representación” lo que es denominado como “invencionismo radical”; es además una crítica a la visión instrumentalista y de la perspectiva del individualismo metodológico.

La construcción y llenado del embalse de La Salvajina desde finales de los 70's y hasta finales del año 1985 (Juanillo 2008: 31-37), es un antecedente cardinal que proponemos tomar como la apertura de un nuevo periodo para esa región, que ya no sería igual antes y después de este megaproyecto hidroeléctrico. Lo que al parecer no había podido canalizarse en un conflicto generalizado y claramente definido entre poblaciones afectadas y quienes impulsaban el megaproyecto se materializa en el 86, cuando los habitantes vieron y vivieron finalmente lo que significaba tener un “lago” de 908.6 Millones de metros cúbicos (CVC 2013)<sup>28</sup>, inundando lo que fueron las tierras y minas más productivas, los caminos y espacios habitados históricamente por ellos. Para estos pobladores representaba un desastre socioeconómico de proporciones colosales.

Antes, los brotes de inconformidad principalmente de propietarios directamente afectados, eran aplacados con intimidaciones de expropiación, para obligarles a aceptar los supuestos “jugosos” presupuestos invertidos en la compra de los predios, probados luego como un desfalco<sup>29</sup>. También jugaba en su favor el reencauchado discurso sobre el progreso que La Salvajina representaría para la región en términos de empleo y turismo. La “imposibilidad” de dimensionar *previamente* los alcances del cambio derivado del proyecto por parte de los pobladores puede comprenderse en parte desde la consideración de los mapas causales de aquel momento<sup>30</sup>. No obstante, cuando reventó el conflicto, parece haber tomado una forma que se iría definiendo cada vez más a lo largo de los años: unos son perjudicados, despojados, en función de favorecer a otros. En aquel momento se denunciaba este gran perjuicio y se reivindicaba una compensación por el daño. De alguna forma se exigía –y exige-, aunque no sabemos si conscientemente para esa época, la redistribución de parte de ese beneficio económico que sería apropiado, más directamente, por los beneficiados,

---

<sup>28</sup> Dato del Volumen Total del embalse para 1985 año en que fue llenado.

<sup>29</sup> “Durante la compra de tierras en Suárez, la falta de títulos de propiedad derivó en una especulación económica por parte del estado que subvaloró el precio de las tierras. El Instituto Agustín Codazzi encargado de hacer los avalúos de las fincas ‘sólo tuvo en cuenta su uso agrícola’ [Hombre adulto, funcionario público de CVC que trabajó como abogado en la compra de tierras de Salvajina] y no valoró los usos de transporte, pesca y minería artesanal que los pobladores realizaban en los ríos y en las quebradas de sus fincas. Esta subvaloración favoreció a la CVC por los montos bajos que pagó por las tierras, a la vez que afectó radicalmente el sustento de las familias quienes recibieron sumas de dinero que no lograron compensar lo que dejaron de recibir por su actividad productiva tradicional (Vélez Torres y Vélez Galeano s.f: 8)” citado en (Ararat *et al* 2013: 131). Para el tema de la compra de los predios ver también las páginas 142 a 145 del mismo libro.

<sup>30</sup> Friedberg explica la posición de Weick al respecto: “Él argumenta que las organizaciones solo pueden reaccionar a datos o problemas que han estado previamente percibidos. Reconocidos y comprendidos por sus miembros que deben para esto integrarlos dentro de los mapas causales que ellos se construyen a través de su experiencia y que proporcionan sus representaciones y sus esquemas de interpretación del mundo.” (Friedberg 1997: 100)

propietarios/operadores de la represa: CVC, posteriormente Unión Fenosa y EPSA y, de forma más amplia, los ingenios azucareros del Valle del Cauca<sup>31</sup>.

Se delineaba el conflicto. La masiva afectación de los medios de vida de miles de personas que subsistían gracias a la minería en “Paso Bobo” y en la zona minera aledaña, la de mayor importancia para la época, a la agricultura en esas vegas del Cauca, a la pesca y al comercio de maderables a través del río, fue el detonante de la abierta contradicción que los pobladores afectados decidieron ejercer ante el detrimento evidenciado por la inundación<sup>32</sup>. La perturbación de la dinámica socioeconómica y comunitaria regional fue radical y la reacción masiva. Miles de campesinos indígenas, negros y mestizos de los municipios de Buenos Aires (que incluía Suárez) y Morales se movilizaron hacia Popayán para exigirle a la CVC y al Estado en general, compensaciones dignas, la construcción de nuevos caminos y vías de comunicación, un plan de choque que garantizara las condiciones mínimas para restablecer la movilidad y la conexión de zonas que quedaron casi completamente aisladas, la reubicación de mineros, inversión social en salud, educación, acueductos, electrificación. La importante marcha de aproximadamente 3.500 personas hacia la ciudad de Popayán se realizó entre el 10 y el 13 de agosto de 1986<sup>33</sup> y los acuerdos se consignaron en la famosa “Acta del 86”. Marcó la historia regional desde muchos puntos de vista (Ararat *et al* 2013: 151, 152), y en especial, consideramos, la historia organizativa de las comunidades.

---

<sup>31</sup> Si este tema es de interés para el lector, en Ararat *et al*: 135-139 puede encontrar un recuento de las razones que motivaron la construcción de esta represa, entre las que tiene un importante lugar la regulación del caudal del río Cauca, con el objetivo de impedir las inundaciones de gran cantidad de hectáreas que podrían ser utilizadas en el negocio de la agroindustria de la caña.

<sup>32</sup> “Al parecer otro de los procesos organizativos comenzó con la movilización de los mineros y luego se amplió al problema de las tierras; mucha gente resistió y se negó a aceptar el dinero de la CVC. Pero fueron procesos que maduraron cuando ya la represa estaba levantada y el agua empezaba a ahogar las fincas” (Ararat *et al* 2013: 153)

<sup>33</sup> En el Diario El País de Cali se empiezan a registrar noticias al respecto el 8 de agosto de 1986 con un artículo de la sección “En el Cauca”, llamado “Reclaman electrificación rural” en la que se describen protestas de “negros, indígenas y campesinos” debido a que se les estaba cobrando el impuesto predial de predios inundados, a los problemas fiscales y a la crisis por el “lleno del embalse”. Luego, el 12 de agosto del mismo año una nota “Salvajina. Inician marcha de protesta en el Cauca” indicaba que la movilización salió el 10 de agosto de Suárez, llegando el 11 a Santander de Quilichao, además en esa edición publica el comunicado de la CVC al respecto en la que “aclarar” y niega todas las denuncias, y habla de que había interlocutado con el CRIC durante el proceso de construcción. El 13 de agosto en la nota “Prosigue marcha hacia Popayán” resaltan que no se tomarían medidas policivas y el Gobernador (r) Víctor Gómez “aseguró que los campesinos e indígenas integrantes de la protesta son utilizados por elementos subversivos que se escudan en las penalidades del campesinado para quebrantar el orden establecido”. La marcha llega esa fecha (13), notas posteriores relatan un gran recibimiento por parte de “cientos de personas” que les esperaban varios kilómetros antes de la entrada a Popayán. Desde el mismo día inician las reuniones con los delegados nacionales y regionales de todas las instituciones implicadas, según la nota “Con aplausos recibieron los campesinos” del 14 de agosto.

Cuando inicié mi trabajo de campo identificaba la presencia del tema “Salvajina” en numerosos espacios de interacción y múltiples conversaciones, en los dos sectores étnicos. Sin embargo, y a pesar de lo reiterativo del asunto, mi mirada estaba enteramente enfocada en captar y encontrar información que me permitiera aclarar el panorama minero, que en parte, veía de forma independiente a ese otro tópico. En la medida que debí comenzar a pensar en los antecedentes históricos y en la contextualización del conflicto que reconstruyo en los capítulos siguientes, me preguntaba cómo comprender de una forma distinta esos aspectos “contextuales” e “históricos” sin verlos como un dato más. Algunos aspectos analíticos de la sociología de las organizaciones y los movimientos sociales fueron importantes para la perspectiva adoptada.

Uno es la reflexión que la teoría de los nuevos movimientos sociales hace a propósito de la importancia que tienen el tipo de conflictos y movimientos sociales en los cuales han participado previamente los integrantes de una organización o un movimiento actual, para su configuración organizativa presente, para sus prioridades y sus imaginarios. Adaptar este elemento de análisis al caso de las organizaciones étnicas estudiadas nos permite concebir la marcha y el “Acta del 86” como un precedente organizativo significativo, más que un dato en la cronología de una historia local. La reiteración del tema Salvajina que había identificado en campo, la reconocía también en los documentos relacionados con el conflicto minero revisados (cartas, actas, comunicados, documentos de trabajo del sector afrodescendiente y del indígena), pero con la perspectiva adoptada tenía la posibilidad de valorarlo e interpretarlo diferentemente.

A lo largo de este trabajo, el lector podrá identificar a través de algunos de esos documentos o conversaciones cómo estas comunidades y los miembros de las dos organizaciones étnicas han guardado memoria de ese episodio político hasta la actualidad, cómo en sus reuniones continuaría siendo una preocupación y un referente<sup>34</sup>. Éstas son de alguna forma las herederas de este proceso.

---

<sup>34</sup> Solo como ejemplos, en diciembre de 2006 se hacía en Buenos Aires, Cauca, el Encuentro Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Proyectos Hidroeléctricos, que permitía encontrar a afectados de los diferentes municipio de la zona (Suárez, Morales, Buenos Aires) y del país (Idárraga, *et al.*: 179). En 2010 el Acta de una Asamblea del Cabildo consignaba: “El acta de 86 fue reformada y no ha cumplido nada de lo que prometieron” Relatoría “Paraiso (Sic) 09 de

Otra herramienta conceptual es la de “esquemas interpretativos” (master frame). En este caso nos ha permitido tener en cuenta con mayor consciencia que a lo largo de su historia podrían haberse generado cambios cualitativos importantes en las miradas que los líderes y las organizaciones tenían de los conflictos, de sus razones y de su lugar en estos. Analizando ese episodio bajo aquella inquietud hemos llegado a considerar que en el “Acta del 86” se consolidaba una *específica* reivindicación. Esta es la de derechos socioeconómicos, ligados a servicios sociales básicos como “acueductos, energía eléctrica, salud, tierras” en tanto condiciones para una vida digna, la inversión social estatal parecía lo central. Desde nuestra comprensión de aquel momento, esa reivindicación puede ser considerada una forma concreta que tomaban los intereses de esas poblaciones, como resultado de la generalización de una también específica consciencia política del despojo. A la luz del concepto señalado podríamos pensar que la confrontación con la CVC y el Estado estuvo marcada por un *master frame* especial que se centraba en la idea de acceso a servicios fundamentales y básicos. Esto debido posiblemente al predominio de ese tipo de miradas entre las organizaciones sociales en aquella época y a las condiciones en las que reaccionaron las poblaciones: ya había sido llenado el embalse. Este momento puede ser visto como una “primera” etapa de reivindicaciones económico-políticas que identificamos como relevantes.

Ese episodio aparece frecuentemente como punto de comparación en el desarrollo del conflicto minero. Podríamos considerar que ese esquema interpretativo ha sido una base o acumulado sobre el cual las nuevas generaciones cultivaron, combinando nuevas

---

2010 Agosto Asamblea”. “La generación de energía con el mapa proyecto de La Salvajina, que en nada nos retribuido la entrega de nuestros predios y actividades económicas, pues luego de 25 años de entrar en plena actividad económica contamos en el 2011, con veredas sin servicio eléctrico, ni de agua potable pese a que tales servicios públicos se encuentran en grandes proporciones en el complejo de explotación ‘La Salvajina’, ahora de propiedad del grupo económico antioqueño –GEA.” Diagnóstico Político y Social. Parcialidad Indígena del Cabildo Cerro Tijeras. Altamira, 14 de diciembre de 2011. En los espacios que he podido presenciar en uno y otro sector el tema del “Acta del 86” y la construcción de la represa es considerado por los líderes étnicos como acuerdos que no han sido saldados por la empresa y el estado. Actualmente todos los Consejos Comunitarios de Suárez por un lado, y el Cabildo Indígena por el otro, se encuentran iniciando un proceso de Consulta Previa sobre el Plan de Manejo Ambiental de ese embalse. La instalación de la Consulta Previa con los Consejos se realizó en Septiembre de este año. El Cabildo de Cerro Tijeras y el Resguardo de Honduras también han instalado el proceso. Además han logrado un fallo a su favor de la Corte Constitucional con la Sentencia T-462A de julio de 2014 que reconoce la obligación que tiene la empresa y el Estado de resarcir los impactos y compensar las afectaciones de la construcción con base en los acuerdos incumplidos del Acta del 86.

elaboraciones, una transformada lectura del conflicto minero que afrontan desde hace aproximadamente una década.

Otros conflictos aparecen de distinta forma en la memoria de los líderes de cada sector étnico. En el caso de la comunidad negra de La Toma, el siguiente conflicto de importancia es extensivo del anterior: el Proyecto de Desviación del Río Ovejas hacia el Embalse de Salvajina (DROES) presentado por gobiernos y empresarios. Éste se explicita hacia 1991 con el objetivo de aumentar la capacidad del embalse como solución al desabastecimiento de energía en Cali durante las épocas de sequía<sup>35</sup>. El desastre generado por la represa no solo no había sido “compensado” si no que podía seguir creciendo. En 1994 se reactiva con fuerza la iniciativa, se perfila el enfrentamiento de la comunidad contra la amenaza directa y con anticipación a su ejecución, “En los años 1993 y 1994 la Empresa de Energía del Pacífico EPSA reciente propietaria del embalse, apoyada en estudios de la Universidad del Cauca presenta nuevamente el proyecto, y es entonces la comunidad la que se opone a su puesta en marcha, la comunidad se apoya en la naciente ley 70 de 1993.”<sup>36</sup> Dos aspectos a resaltar de la anterior cita tomada de una denuncia en la que se hace el recuento de todo ese proceso de resistencia. Por un lado, aparece en escena la EPSA, que en el 2000 sería vendida en un 62,6% a la Unión Fenosa, grupo empresarial español. De esta forma la figura de “la multinacional” en tanto agente perturbador y factor de despojo reaparece (Asnazú Gold Dreading) unos años antes de la llegada de los nuevos actores mineros que describiremos adelante.

Por otro, la comunidad negra contaba ahora con una nueva herramienta jurídica, pero mucho más, la influencia de otras miradas y elementos sobre las definiciones e implicaciones del “desastre”. Consideramos que la oportunidad política estructural emergía como consecuencia del nuevo marco constitucional en doble vía. La aprobación de esa Ley

---

<sup>35</sup> Líderes de la Toma con quienes he conversado recuerdan que la iniciativa salió a flote en el 91 y 92, y según la nota “El apagón no es como lo pintan” del 22 de marzo de 1992 en el Diario el País, el Plan de Expansión Eléctrica de ese momento diseñado por ISA y avalado en US\$5.700 millones en 1988, no contemplaba el proyecto de desviación del río Ovejas “su costo era sólo de US\$22 millones, pero a la CVC se le dejó que buscara los recursos por fuera del sector eléctrico, ya que era un proyecto de regulación”, quedando en manos, como se lee, de la CVC.

<sup>36</sup> REDHER. Junio 2007. Denuncia pública: “Cauca: amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y comunitarios de la Salvajina” firmado por “Comunidad de Suárez-Cauca” y enviado por la Red de Hermandad y Solidaridad –Colombia. P. 2 En adelante se citará (REDHER. Junio 2007)

70 en la que participó activamente el norte del Cauca (Ararat *et al* 2013: 255), y adicional, del Código Ambiental del 93, dos políticas –pluralidad étnica y protección ambiental– desde donde los líderes de la comunidad tomeña reclamaron participación en la nueva obligación impuesta a los proyectos de desarrollo económico: la construcción del Estudio de Impacto Ambiental. El contexto de este logro es presentado en la denuncia: “En el año 1995 se realiza una audiencia pública en la vereda Yolombó donde participan representantes del Ministerio del Medio ambiente, Ministerio de Minas y energía, y la EPSA, de esta audiencia resulta la urgencia de un estudio de impacto ambiental con participación de la comunidad donde se determinen las consecuencias del desarrollo del proyecto”<sup>37</sup>.

Cuando comparamos este proceso con las reivindicaciones del 86, identificamos que el problema se abordó incluyendo nuevas dimensiones como el reconocimiento de los “impactos socioambientales” del proyecto, a través de un ejercicio político y “técnico”, que estuvo acompañado de otros actores solidarios, como el PCN y la CCDC, con quienes los líderes locales interactuaron y aprendieron de sus “esquemas interpretativos”<sup>38</sup>. Gracias al concepto negativo dado por la comunidad, las acciones de movilización y denuncia, y la divulgación de los “impactos irreversibles” que podía implicar la propuesta, la CVC desestimó finalmente la iniciativa en 1997. Podría pensarse que este proceso de resistencia iniciado en el 94 y en especial el ejercicio de reconocimientos de impactos haya aportado

---

<sup>37</sup> *Ibíd.*

<sup>38</sup> “[EPSA -Unión Fenosa] contrató la realización del estudio de impacto ambiental, EIA, (...) los gestores se olvidaron de un pequeño detalle: (...) que la región estaba habitada ancestralmente por comunidades negras, mestizas e indígenas (...). Las demandas comunitarias arrojaron resultados positivos cuando a finales de 1996 se da origen a un proceso de concertación que culminó con un procedimiento para evaluar el EIA del proyecto.” El trabajo estuvo mediado por la Comisión Consultiva Departamental del Cauca, CCDC que reconoció las observaciones de la comunidad por lo que se consideró que ésta debía tener condiciones proporcionadas por las autoridades ambientales para formular el plan integral de manejo de la cuenca del río. La participación del PCN fue determinante en este proceso (Pérez 2007: 336). Según nos han explicado algunos líderes, dos comisiones “técnicas”, una de la empresa y otra de la comunidad, trabajaron por separado y arrojaron resultados diferentes sobre el número de impactos y sus características, es decir, los tipos de impactos. Resultados que luego fueron contrapuestos y discutidos. “Ello permitió concluir que de los 49 impactos identificados, siete, todos económicos, eran positivos para EPSA y los cañicultores, mientras que los restantes eran adversos para las comunidades, el río, los peces, la agricultura, la arena, las playas, la cultura, la economía de la región, etc. (PCN, 2005) (...) Así, el 21 de mayo de 1997 las comunidades dieron a conocer su concepto respecto a este proyecto, en el que objetaron por razones históricas, ambientales y culturales la desviación del río Ovejas al embalse de Salvajina. En diciembre del mismo año el Ministerio del Ambiente protocolizó la realización de la consulta previa, pero aunque la comunidad se presentó al sitio de la reunión, el Ministerio nunca lo hizo. En el 2001, EPSA retiró el proyecto que pasó en Minambiente al llamado ‘archivo activo’, retirándolo parcialmente a principios de 2004. A fines del mismo año se reactivó de nuevo.” (Pérez 2007: 336, 337) Según comentan algunos líderes parece haber jugado también un papel importante un Debate de Control Político en el Congreso de la República contra el Proyecto de Desviación en 1997, al que asistieron líderes de la Toma.

de manera significativa a que se consolide una consciencia política explícita sobre la importancia del río para la vida socioeconómica y comunitaria/cultural. Dicho de otra forma un auto reconocimiento explícito y político de dinámicas comunitarias que existían sin necesariamente ser analizadas y valoradas conscientemente como tal<sup>39</sup>. Más adelante veremos cómo la minería ilegal con “retros” llega en el 93 y es rechazada por algunos de estos líderes. La vinculación entre la “minería ilegal” y la iniciativa de desviación es sugerida por los líderes en un comunicado, sin embargo no se presentan muchos detalles sobre esta posible relación<sup>40</sup>.

Conversando en su casa (5 de marzo 2015), Simón Rodríguez explicaba que para él ese proceso fue “un escenario de formación política, organizativa, tocó que aprender de todo”. Su opinión está marcada por la experiencia personal y política de aquel momento pues él fue el dinamizador del proceso de Consulta durante el 96, según un documento revisado el “dinamizador del proceso de oposición a la desviación del río Ovejas”<sup>41</sup>. De acuerdo con esta conversación y otras más con líderes de Yolombó, la posibilidad de debatir con la empresa desde ese lugar en un proceso formal, fue importante para el fogueo de líderes en el manejo de una interlocución política con agentes estatales y económicos. Es decir, para la formación de liderazgos que más adelante asumirían el conflicto minero como Simón, Gustavo Zapata o Tomás Salcedo.

Ararat *et al* a través de una importante cantidad de testimonios de aquellos y otros líderes, nos muestra cómo la reivindicación étnica iba siendo apropiada desde lo local y el

---

<sup>39</sup> Por otro lado, el proceso negro en general, a diferencia del indígena, debió hacer mucho énfasis en las dimensiones constitutivas de la “comunidad negra”, los criterios y el significado de diversos conceptos debatidos durante la confección y más que todo durante los posteriores desarrollos de la Ley 70. Esto debido a una lectura muy restringida del artículo 55 transitorio de la Constitución Política y de la misma Ley 70 de parte de diversos actores institucionales, quienes sostenían que estas comunidades étnicas solo cumplían los criterios en la zona del pacífico colombiano, que fue el modelo arquetipo que permitió caracterizarlos como tal. Por esto el reconocimiento y legitimación de formas de relacionamiento comunitarias y prácticas socioeconómicas y culturales tradicionales en otras comunidades negras ubicadas en lugares geográficos diferentes al Pacífico fue un imperativo necesario para el aprovechamiento de las posibilidades brindadas por la nueva estructura de oportunidades políticas, esfuerzo que fue acompañado por académicos y diversidad de sectores en el país.

<sup>40</sup> El comunicado dice: “En el año 1997 la confrontación se vuelve frontal a través de estrategias como la minería ilegal a manos de Crisanto Mora, Juan de Dios Mosquera, los hermanos Roldán y Jesús Amado Sarria, personas puestas por la empresa para entorpecer el proceso comunitario de oposición.” (REDHER. Junio 2007: 3)

<sup>41</sup> Denuncia Pública, 2007. “Líderes de Salvajina en riesgo por su trabajo comunitario”, firmado por Campaña Prohibido Olvidar.



surgimiento de nuevas iniciativas organizativas irían conjugándose en ese contexto. En 1994, algunos de los líderes afrodescendientes fundaron el “Consejo Comunal” que “tuvo el propósito de agrupar las asociaciones del corregimiento de La Toma, para así trabajar conjuntamente desde diferentes temáticas.” “En ese orden de ideas pudimos aglutinar los motoristas, las madres comunitarias, los mismos docentes, las parteras y otras expresiones como los cafeteros y los mineros”, explicaba un líder citado en ese trabajo (Ararat *et al* 2013: 256). De acuerdo a los testimonios presentados en el libro, esa forma organizativa era un mecanismo para la convergencia de la gente en respuesta a que mucha gente se sentía excluida de la JAC, pero también la búsqueda de una organización comunitaria que interpretara la perspectiva del naciente proceso afrodescendiente nacional. Varios de estos líderes, junto con otros como el profesor Omar, se iban articulando y participando en el Proceso de Comunidades Negras Nacional asistiendo a sus talleres en varios municipios del norte del Cauca y a través del acompañamiento que esta organización brindó desde el primer momento de la amenaza en el año 92-93.

La reivindicación étnica iba acoplándose y solidificándose como marco de representación y cognitivo entre los líderes locales, mientras reconocían desde una perspectiva política la importancia de dinámicas sociocomunitarias en torno al río y exploraban las posibilidades que como comunidad negra tenían en el nuevo marco jurídico de la ley 70. Sin embargo el “Consejo Comunal” perdió dinámica durante un largo periodo, según los testimonios presentados por los autores referenciados. Simón nos explica cuál fue el momento en el que la figura de Consejo Comunitario se consolida, desde su experiencia y punto de vista,

Nosotros comenzamos a darle el viraje a eso como desde el 2000. (...) porque aquí había una organización que era la Junta, después creamos una organización de comunidad negra, se llamaba Asociación por el desarrollo de Yolombó, Gelima y Dos Aguas, luego, ‘noo, entonces aquí lo que hay que buscar es la figura de los consejos comunitarios’ (...) porque cuando comenzamos nosotros a ver, o sea que nosotros vimos todas las amenazas, tonces (Sic) ‘no, aquí lo que toca buscar es un paraguas’, más grande. (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

La raíz de ese Consejo Comunitario era, en gran medida, el Consejo Comunal desarticulado “para el 2004 empieza un momento de fortalecimiento y florecimiento, no obstante

reactivarlo fue una tarea ardua” explican Ararat *et al* en su investigación (Ararat *et al* 2013: 271). La reactivación del Proyecto de Desvío del Río Ovejas durante ese mismo año parece haber precipitado la decisión de refundarse como Consejo Comunitario de Comunidades Negras. Para este nuevo round encontramos un proceso nacional y local con mayores experiencias acumuladas. Mario Pérez resume la mirada de PCN sobre la estrategia de lucha promovida en este caso específico a partir de un documento de esa organización: “se necesita una mesa de cuatro patas: lo jurídico, lo cultural, el fortalecimiento organizativo y lo técnico que debe conjugar conocimientos y lenguajes propios y “científicos”, con lo cual se puede contribuir a que la gente tenga una mayor percepción de lo que se discute. Lo malo es que las autoridades e instituciones, nunca se acercan a entender los lenguajes y sabidurías de la gente (PCN, 2005)” (Pérez 2007: 337).

De acuerdo a nuestro análisis de la resistencia al DROES desde los 90’s y tomando en cuenta la anterior cita, consideramos que esta lucha local y el conflicto desatado ha incidido especialmente en la transformación de los términos en los que se plantean los *intereses propios* de las comunidades y el tipo de reivindicaciones que enarbolan actualmente, girando hacia contenidos relacionados con visiones socioambientalistas y territoriales.

Aunque observamos en escena agentes e intereses económicos relacionados con la construcción de la represa La Salvajina, la óptica y el ejercicio desde donde se asumió el problema tendrían otros acentos, dimensiones y herramientas. Se iría condensando un “esquema interpretativo” diferente que ayuda a fundamentar la acción organizada y la identidad étnica.

El paramilitarismo amenaza a cuatro líderes afrodescendientes que lideraban este proceso de resistencia en 2004. El nexo entre actores armados ilegales y proyectos de desarrollo empezaba a ser considerado por estos líderes, dado el contexto de disputa que existía<sup>42</sup>.

En el caso de la población indígena ubicada en la parte alta occidental del municipio de Suárez, la lejanía del casco urbano marca una realidad diferente. Según la entrevista realizada a don Ovidio Ovando, a finales de los años 90’s la dificultad para acceder a

---

<sup>42</sup> “En ese momento se iba a reiniciar la consulta para la desviación del Río y ya existía presencia evidente de paramilitares del Bloque Calima en toda la zona de influencia del proyecto DROES” (REDHER. Junio 2007: 3)

determinados servicios de salud requeridos por su hija, lo motivó a promover la fundación de un Cabildo Indígena<sup>43</sup> en la zona de la vereda Naranjal. Aunque para ese momento no se constituye, esta experiencia fue retomada por un líder comunitario, el mayor don Sofonías, quien después de un grave accidente logra acceder a un costoso tratamiento médico gracias a que, aconsejado por don Ovidio, solicita el aval de un Cabildo que lo acoge. Estas situaciones particulares impulsan de nuevo la conformación del Cabildo propio durante el año 2000 y 2001. Hemos identificado que la historia de don Sofonías es la que pareciera más divulgada y reconocida por una gran cantidad de líderes y cabildantes como el inicio o la fundación de la organización étnica. En el proceso tenía un peso importante esas necesidades concretas. La organización permitiría colectivizar esa oportunidad y materializar por fin una serie de derechos fundamentales que no han sido garantizados históricamente por el estado para estas poblaciones marginalizadas. De acuerdo con la entrevista de don Ovidio, la iniciativa se fortaleció con la realización de varias asambleas multitudinarias en Unión Olivares y Naranjal. Meraldiño Caviche me relataba que, a pesar de no haber participado muy de lleno en ese primer momento de la organización, recordaba que se decía que aquellas asambleas habían sido de gran magnitud (Diario de Campo, 15 de octubre de 2012).

Según la versión de este último líder, la dinámica organizativa disminuyó pronto en gran parte debido a la incursión paramilitar hacia el Naya en el año 2001 (Verdad Abierta. Julio 2011). El itinerario de uno de esos grupos de militares y paramilitares atravesó, iniciando desde la cabecera municipal, parte del territorio que hoy se incluye en la parcialidad indígena de Cerro Tijeras. En algunas veredas de los corregimientos de La Betulia y Los Robles, dejaron tras su paso varios asesinatos. Después de perpetrar la

---

<sup>43</sup> Este líder debió hacer frente a una grave enfermedad de su hija con la que llegó al Hospital Departamental del Valle en Cali. Las enfermeras allá le preguntan, debido a su apariencia indígena, si es miembro de un Cabildo dado que la única posibilidad de acceder al tratamiento sin costos era estando censado en una organización de ese tipo. Extrañados por el desconocimiento que don Ovidio tenía del tema le dirigen a la Casa de Paso Indígena de Cali, donde lo envían al Cabildo de Muchique los Tigres organización que finalmente lo asesora y acoge como miembro. Esta experiencia abre toda una nueva perspectiva e inicia un trabajo en su vereda y otras veredas vecinas (Entrevista a Ovidio Ovando 2013). Como es visto en retrospectiva “El cabildo nace como motivo de una necesidad específicamente la salud. Los principios plataformas de lucha que nacen con el no pago de terraje pero se sigue pagando impuesto. Recuperar la tierra de los resguardo recuperar la educación propia formar educandos propios. La medicina propia son los principios de la lucha del movimiento indígena.” “(...) emos (Sic) logrado conseguir la casa de paso, carnet de salud, auxiliares de enfermería, que vienen de otro lado porque carecemos de personal.” Relatoría: Vereda La Cascada 09 Febrero- año 2011-. La marginalidad frente al acceso a estos servicios “públicos” ya no es visto como un simple destino sino como una condición de exclusión en unas relaciones desiguales de poder.

masacre en el Naya, los paramilitares continuaron operando en el municipio de Buenos Aires (Palo Blanco), en Santander de Quilichao y Timba desde donde ya llevaban más de un año realizando acciones para aterrorizar la población<sup>44</sup>. Es muy posible que la situación de zozobra inclinara a los líderes que impulsaban la conformación del Cabildo a suspender temporalmente el empeño. Sin embargo, el peso que muchos pobladores de la parcialidad indígenas parecen darle al impacto de la masacre del Naya en esta zona es menor. Cuando le pregunto a Julio Cañas (marzo 2015) me comenta que los paramilitares generaron un gran temor pero que en Suárez no asesinaron personas. Después de conversar un rato a propósito de las implicaciones de ese hecho para la organización étnica, recuerda que sí habían ocurrido algunos asesinatos en Betulia. Enfatiza, como muchos otros líderes que he escuchado, en que el referente principal que impulsó la creación del Cabildo es el tema de salud y educación. La lectura de Enrique Güetio, líder de gran importancia en el Cabildo, sobre ese episodio incluye informaciones que muchos cabildantes no manejan y tiene consideraciones políticas de mayor amplitud,

Quando la masacre del Naya, pues salieron varios dueños a reclamar, entre esos la Universidad del Cauca, entre esas nos dimos cuenta de que habían unos intereses geoestratégicos y económicos, que eran los recursos naturales, había unos proyectos en vía de construirse: un proyecto hidroeléctrico (...) Después de la masacre, un poco leyendo y solicitando capitulación de tierras en la olla hidrográfica del río Naya, aparece la Universidad del Cauca con unos títulos (...) y entre esas nos damos cuenta que son títulos sobre el territorio y no son títulos mineros (...) tenían unos títulos solicitados, que eran los títulos de Agrominas del Yurumanguí, Agrominas del Naya y Kajambre, que son permisos o hipotecas dados por la Universidad del Cauca. (...) Y pensando en la ONIC y mi calidad de desplazado, he sido desplazado en varias ocasiones, por allá en el 2002, desde la ONIC

---

<sup>44</sup> Uno de los casos anteriores al ocurrido en el Naya, es el asesinato de varias personas por parte del Bloque Calima y su Frente Farallones durante junio de 2000 en las veredas La Aventura y San Francisco de Buenos Aires, ubicadas en el alto Naya cerca de la frontera con Suárez, por lo que afectó también algunas de las veredas de este municipio como Brisas de Marilópez, Naranjal, San Pablo, Bellavista. Este hecho generó el desplazamiento de cientos si no miles de personas, "(...) sus jefes instalaron a cuatro kilómetros del municipio [Santander de Quilichao], en la vereda Lomitas, un grupo de patrulleros con armas de largo alcance, para que controlaran las vías de comunicación, protegieran a los urbanos y demás hombres que se encontraban en fincas aledañas como Barracón y Corcovado, esta última propiedad de Manuel Mosquera, según contó la Fiscalía en la audiencia pública." (Verdad Abierta, Abril 2012). Diez años antes, 1991, la masacre perpetrada en la finca El Nilo, Caloto, realizada por la Policía Nacional y civiles armados, reconocida por la Corte Interamericana de DDHH como un crimen de estado y ordenó el resarcimiento a partir de la compra de tierras al pueblo Nasa. De este presupuesto le fue asignado una parte a la compra de tierras para el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, que aún no era resguardo, a través de otros Cabildos.

se preguntó cuál era el interés que había basado en los tres títulos mineros (...) nos damos cuenta que la masacre del Naya no fue coincidencia sino una acción para desplazar a la gente. (Entrevista con Enrique Güetio)<sup>45</sup>

Paradójicamente, las terribles consecuencias de la masacre parecían generar una indagación que resultaba en una visión política de sus razones y explicaciones. La relación que los líderes sostenían con la región del Naya en ese momento marca en parte el peso que le dan al suceso en la construcción de su mirada actual del mundo. En el relato de Enrique es palpable un acercamiento al tema, con el que la mayoría de líderes en Cerro Tijeras no cuentan. Para esa época, según me contaba Julio Cañas, Enrique trabajaba frecuentemente en la región del Naya, y Leandro Güetio se había radicado allá, me comentaba él mismo durante una conversación. Esto explica su conocimiento detallado de aquel desastre social y su vinculación con otros actores con los que intentaban establecer las causas de los hechos violentos. Los dos hicieron parte del proceso organizativo de víctimas de esa masacre que fue acompañado por varias organizaciones nacionales y que permitió politizar la tragedia. En la anterior cita es posible identificar esa politización de la *permanencia* en un territorio, a través de una politización de la tragedia y del despojo que vivieron esas poblaciones.

Cuando dialogo con Meraldiño sobre el lugar de esa incursión paramilitar en la historia de estas comunidades y del Cabildo también se presenta esta especie de dualidad en el análisis. Me dice “el tema del conflicto (armado) también hizo que se hablara de organización” refiriéndose a la masacre. Por mi parte, le expreso que, según lo que he sabido, jugaba un papel principal el tema de salud, frente a lo que mi interlocutor detalla que “con la masacre ya se empieza a pensar más en lo territorial aunque ya se venía andando por el tema de salud, entonces se ve que se hace necesario defender las dos posiciones tanto territorio y salud (...) cuando pasa la masacre se justifica la parte territorial”. Según le interpreto, el líder considera la masacre del Naya como un momento de inflexión en el que el proceso toma un giro o matiz relativo a lo “territorial”. Pregunto de nuevo si los aspectos

---

<sup>45</sup> En el Archivo del Cabildo se encuentra la respuesta a un derecho de petición elevado por el presidente de la ONIC en 2003 sobre el tema que referencia Güetio, Empresa Nacional Minera- Minercol Ltda. 2003 Junio 18. 1130-0432. Respuesta a derecho de petición oficio JUR- 030-003 con radicado 1387 del 16 de junio de 2003 sobre títulos mineros en la cuenca del río Naya. Dirigido a Armando Valbuena- Presidente ONIC. Jamundí. Pp. 5.

relacionados con lo territorial no eran centrales en el proceso antes del suceso violento, a lo que me responde “la gente no lo tenía claro, después de ahí se ve la amenaza y se empieza a tener la claridad”. Pero, ¿Quiénes tuvieron esa claridad? Porque es normal, como he señalado, encontrar poca información sobre la incursión paramilitar entre diversos pobladores de la parcialidad. Cuando indago sobre este aspecto Meraldiño resume de una forma muy sintética la situación: “eso jue más que todo a personas [que les llega esa claridad], a líderes que estuvieron al frente de esas situaciones, porque la comunidad nooo, inclusive hay gente aún, que no alcanza a interpretar por qué fue la masacre del naya.”

Aunque la problematización del hecho violento se haya restringido a algunos líderes del proceso de Cerro Tijeras, esta perspectiva que politiza la permanencia en el territorio, las amenazas y la defensa territorial sería un derrotero importante en el direccionamiento de la organización naciente. Enrique Güetio asumió la Gobernación del Cabildo Indígena a partir del 2004 durante varios periodos, imprimiendo una orientación organizativa desde esta visión política, como él mismo y diversos cabildantes lo resalta en las Asambleas. Ese *mapa de causalidades* que se venía construyendo en el marco de la reivindicación de las víctimas se divulga en el proceso organizativo que se estaba consolidando especialmente por los Güetio. En ese mapa, las comunidades indígenas, campesinas y negras tienen un lugar en determinadas relaciones de poder y lo que está en juego, entre otras cosas, es el territorio y los recursos naturales. En él se reconoce la existencia de iniciativas de despojo en función de intereses contrapuestos. El Cabildo se convierte, desde ese panorama, en una herramienta para asumir esa lucha, en palabras de Meraldiño “quienes estaban como al frente y miraban que esa era una forma de resistir”.

En ese periodo no solo aportaron Enrique y Leandro, también Saúl Güetio, Laurencio Rivera, Julio Cañas entre varios otros, el impulso de esos liderazgos parece haber contribuido a la dinamización de la organización indígena, conjugándose con los esfuerzos que venían haciendo don Sofonías, don Ovidio y todos los demás que aportaban ya en ese proceso. Es así como se va consolidando la organización étnica con la participación de

líderes comunitarios de varias veredas, entre el 2004 y 2005<sup>46</sup>. De acuerdo al relato de Ovidio, estos asistían a encuentros de la ACIN realizados en otras zonas del norte del Cauca e intentaban aplicar el programa político de este movimiento desde el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras<sup>47</sup>. De acuerdo con la visión de Meraldiño, con la que coincidimos en gran medida, terminan enlazándose la necesidad de materializar el derecho a la salud y una renovada comprensión de las disputas por el control de los recursos naturales y el territorio habitado. Una específica consciencia, así solo sea en algunos de sus miembros, sobre unas amenazas que podían afectar las dinámicas socioeconómicas, comunitarias e incluso la posibilidad misma de permanecer en estos lugares.

Los años 90's y comienzos del nuevo siglo proponemos considerarlo como un periodo durante el cual se inicia una modificación de la “matriz cognitiva y discursiva”, una especie de transición acompañada principalmente por los dos últimos conflictos señalados: el relativo a la desviación del río Ovejas y a la masacre del Naya. En cada caso de forma diferente, estos hechos impactaron los posteriores desarrollos de las organizaciones nacientes<sup>48</sup>. De alguna manera, en los dos hay una politización de la permanencia y las *condiciones* de ésta; de lo que significa permanecer en el lugar que se concluye en querrela. También en los dos casos reconocemos, tanto en los testimonios como en los documentos, la intervención de organizaciones nacionales, PCN y ONIC, que interlocutaban con los líderes locales. La consolidación del movimiento afrodescendiente y la visibilización del indígena como referentes políticos nacionales “reconocidos” institucionalmente estaba en auge. Muy seguramente los “esquemas de interpretación” de estos se conjugaron para

---

<sup>46</sup> Naranjal, Unión Olivares, Altamira, por esos años, según cuenta Saúl Güetio, él junto con otro líder van a la vereda Agua Clara por invitación de un señor del lugar, para socializar el tema del Cabildo Indígena, en donde no había conocimiento del tema organizativo étnico. Luego de esa visita, de acuerdo con la misma versión, es Enrique Güetio quien se dedica a la tarea de incorporar nuevos miembros para el Cabildo de esa zona.

<sup>47</sup> Espacios organizativos desconocidos y lugares geográficos a los cuales mucho no habían ido debido a la característica apartada de Suárez y mucho más de Cerro Tijeras, eventos durante los cuales presenciaron incluso asesinatos de líderes indígenas cuando apenas estaban conociendo el proceso, (Entrevista a Ovidio Ovando 2013).

<sup>48</sup> “Se trata por tanto de ir más allá de la observación, ya asumida, de que experiencias de compromiso político pasado, que permiten la adquisición de competencias y sensibilidades específicas, representan un potente factor predictivo de ulteriores formas de participación en sentido lato (Bernes, Kaase *et al.*, 1979). Es necesario, en cambio, preguntarse si backgrounds políticos y asociativos diferenciados conforman variables de identidad colectiva capaces de orientar las elecciones sucesivas. (...) El problema es comprender qué experiencia ha tenido un mayor impacto a la hora de estructurar la identidad del nuevo movimiento e, indirectamente, a la hora de orientar la elección de cooperación por parte de sus componentes.” (Diani 1998: 255)

fortalecer, en lo local, la apropiación de nuevos énfasis en la lectura de los problemas, los conflictos y las oportunidades, con un contexto en el que emergían discusiones nacionales y políticas de estado como lo étnico, lo ambiental y la neoliberalización de servicios sociales por la Constitución Política de 1991. También en la opinión pública se divulgaban cada vez más los numerosos desplazamientos masivos a causa de la acción violenta de actores armados ilegales coordinados con el Estado y asociados a la disputa por los corredores del narcotráfico o también al beneficio de agentes económicos privados interesados en proyectos de desarrollo económico.

A partir de esta interpretación que proponemos de algunos aspectos de la historia organizativa y local, podríamos pensar que determinados conflictos han tenido un papel preponderante en la consolidación de las dos organizaciones étnicas que exploramos. Pareciera que a medida que se desarrollaban estos actores colectivos configuraban también una específica consciencia de sí en tanto grupo diferente y opuesto los contradictores. En este caso podría considerarse un ejercicio político de configuración de identidad.

Cuando hacemos el paralelo de estas fechas, años 2004, 2005 y 2006, coincide con la llegada de nuevos actores mineros. En el Capítulo III abordaremos de lleno la problematización de la cuestión del oro y la configuración de ese conflicto minero emergente. Exploraremos cómo esta coyuntura situó a los diversos actores locales en una trama de relaciones y de contradicciones con esos actores mineros, que en el caso de esos actores colectivos étnicos parece haber permitido afianzar mucho más el “esquema de interpretación” que venían incorporando, la consolidación de la autoridad étnica, la iniciativa de territorialidad y, en fin, aplicación de una táctica ligada a oportunidades políticas proporcionadas por los marcos jurídicos sobre el asunto étnico.



## CAPÍTULO II

### 2. Apuntes sobre los tipos de minerías en Suárez

Más que de minería, en Suárez debemos hablar de *minerías*, pues en el municipio caucano actualmente existen varios tipos de minas y mineros. Esta característica no es reciente, por el contrario, parece más bien el resultado de una larga historia.

Signada por la presencia del metal precioso, derrotero de los partidos españoles en sus trayectos de “descubrimiento y conquista”, Gelima fue antes que nada un importante lavadero de oro, una mina que dejaría el sello particular de toda su existencia futura<sup>49</sup>.

Junto a las otras zonas mineras, ese espacio geográficamente apartado, política, social y culturalmente periférico dinamizaba, paradójicamente, la vida económica del Distrito de Popayán<sup>50</sup>. Por un lado, el trabajo de Robert West nos permitió acercarnos a una reflexión sobre la centralidad de la minería en la empresa colonizadora y la configuración aquel territorio dominado. Por otro, la investigación de Ararat *et al* profundiza en el caso específico de las minas de Honduras y Jelima, lo que nos aportó inmensamente en la comprensión de aspectos actuales. En los dos libros se sugiere la participación de indígenas en esas minas. Sin embargo, ante la escasez de mano de obra generada por la crisis demográfica que afectó la población indígena, los españoles optan por comerciar africanos

---

<sup>49</sup> Según la investigación desarrollada por Ararat *et al*, el registro más antiguo de las minas de “Xelima” data de 1605, fecha consignada en un vale en el que se explicita el origen del oro. Los investigadores logran encontrar un documento fechado en 1634 en el que se funda una compañía minera para explotar Jelima, entre Andrés Martín Rayo, con “diezyocho o veinte negros e indios mineros y de trabajo”, y Francisco Vélez de Zúñiga, el deán, con veintidós negros y negras esclavizadas. Con mucho más despliegue que el anterior, el documento permite deducir la presencia de mano de obra indígena y negra esclavizada en las orillas del río Ovejas, incluso anterior a la fecha de la fundación de la compañía (Ararat *et al* 2014: 20-24). Las minas pasaron luego a manos de los Jesuitas en un remate realizado por su propietario Francisco Ventura Belalcázar en 1651, quienes las mantuvieron hasta cuando serían expulsados de la Nueva Granada en 1767 por orden de Carlos III. También hay referencias de documentos históricos sobre las minas fundadas en inmediaciones del río Inguító por esa misma época. Para profundizar más en estos aspectos históricos recomendamos revisar el libro reseñado. (Ararat *et al* 2014: 27-30)

<sup>50</sup> “Al norte [de Popayán] las *minas de adentro*, establecidas en las gravas de los márgenes de numerosos tributarios del Cauca (como La Teta, Jelima, Ovejós) fueron placeres importantes del distrito de Popayán durante el último cuarto del siglo XVI. De 1564 a 1597 el ingreso anual de oro en polvo a la tesorería real de Cali, la mayoría del cual provenía de los placeres de Popayán, fue de unos 75.000 pesos en promedio, o sea un poco menos de cuanto producía durante la misma época las minas de Anserma- Cartago.” (West 1972: 22) Placeres de Popayán comprenden la meseta de la cuenca del alto Cauca en las que estaban las minas del Cauca y del Patía al norte y al sur de Popayán respectivamente, las minas de Quilichao, Quinamayó y Caloto y las de Almaguer.

esclavizados para trabajar en las minas<sup>51</sup>.

Según la información recolectada por Ararat *et al*, después de la Ley de Manumisión promulgada en 1852, las minerías en esta localidad parecen haberse diversificado. Para el lector interesado puede resultar enriquecedora la consulta de dos tablas que muestran las minas registradas en Buenos Aires entre 1864-1895 y entre 1894-1954, que puede encontrar en el Anexo 3. Denotan la difusión de otras técnicas y tecnologías, con la multiplicación de las minas de filón<sup>52</sup>. La entrada de nuevos actores en el control de las minas, extranjeros y nacionales, entre los cuales algunos afrodescendientes<sup>53</sup>. Reflejaba también el cambio de una minería estructurada en enclaves coloniales con base en el trabajo esclavizado, controlada por señores españoles y payaneses, a la existencia de minas contraladas por payaneses y foráneos y cada vez más minas con “terrajeros” como propietarios de sus propias minas. A esto se le suma la llegada de Asnazú Gold Company, la multinacional minera que trajo la primera draga en 1935, con la que dragó el río Cauca desde La Balsa hasta la cabecera de Suárez. Convivían varias formas de explotación minera. Diversas técnicas y tecnologías, pero también diferencias derivadas por las características de quien controla el proceso de producción y lo producido. Las formas y la organización del trabajo muy probablemente no serían igual en el proyecto de la

---

<sup>51</sup> Algunos factores de esa crisis fueron la rigurosidad de la actividad minera, las enfermedades, la especial resistencia de estas comunidades al maltrato y la subordinación, y al tributo vehiculado por el sistema de encomienda: “Entre los indios de las cuencas del Cauca y el Magdalena -la principal región aurífera de la Nueva Granada- el sistema de encomienda resultó un fracaso, que se debió en especial a la peculiar cultura de los indios y a la rapidez con la que fueron exterminados casi por completo. Tales pueblos eran cultural y psicológicamente diferentes a los agricultores organizados, dóciles, aldeanos, de las altiplanicies ecuatoriana y peruana, a los cuales se habían acostumbrado mucho los españoles.” (West 1972: 73). Los conocimientos mineros de los indígenas fueron la base del trabajo minero colonial. Es probable que las minas de “Jelima y Honduras” hubiesen sido intermitentemente explotadas por indígenas antes de la conquista: “los españoles hallaron que la mayoría de los campos auríferos importantes de la América Tropical eran ya explotados por los indios que habían desarrollado técnicas primitivas pero adecuadas. Por consiguiente, como los indios ofrecieron inicialmente una fuerza de trabajo barata y abundante, los peninsulares adoptaron con frecuencia los métodos de los indios para extraer el oro del Nuevo Mundo.” (West 1972: 49) “los invasores iniciales eran principalmente soldados y aventureros, la mayoría de los cuales parece haber desconocido incluso los métodos más sencillos del lavado del oro.” (West 1972: 50)

<sup>52</sup> Al parecer el primer Molino Californiano fue introducido en la zona por “los hermanos Mosquera” en 1953, según datos encontrados en las “Líneas de tiempo. Ejercicios de Memoria en Territorios de La Toma, El Hormiguero y Guachené. Marzo-Junio de 2011” trabajo realizado por el Grupo Conflicto social y violencia, Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional de Colombia. Desconocemos si existieran otro tipo de molinos en la zona antes de esta fecha.

<sup>53</sup> En la primera tabla se observan 11 minas de aluvión y solo 2 de filón, de las que 10 pertenecían a la familia Mosquera, 2 a la familia Concha –familias hacendadas esclavistas payanesas- y una a un señor Angola, muy seguramente un negro minero. En la segunda ya tenemos 41 minas de filón y 8 de aluvión. Ahora no solo los Mosquera o los Concha que mantenían sus minas, sino nuevos nombres extranjeros ya no españoles –Vaugh W. Dayle- y nacionales, entre esos varios afrodescendientes, e incluso una “Sociedad de Minas El Peñón”. Ver Anexo 3.

multinacional, en el de los Mosquera o en las minas de los lugareños. Los registros de las minas denunciadas no logran captar otros tipos de minerías presentes en la zona. Reflejan seguramente la presencia de minas de interés para el Estado o aquellos actores foráneos, por lo que habría que sumar las minerías de aluvión en playas, márgenes y lechos de los ríos y quebradas, u otras que existieran sin el respaldo de un denuncia, practicadas por aquellas comunidades como actividad permanente o intermitente y reproduciendo viejas técnicas.

El panorama hoy es ciertamente muy distinto, pero se mantiene lo que caracterizó desde aquellos tiempos lejanos la realidad minera, la heterogeneidad: diferentes bases tecnológicas y relaciones de poder orientan el trabajo en las distintas minas.

## **2.1. Minerías en La Toma y en zona occidental**

Hasta la fecha, hemos podido identificar cuatro áreas principales de carácter minero en Suárez, además de los ríos y quebradas que son un eje de actividad minera intermitente según los ciclos de lluvia, en este caso los ríos Ovejas, Inguitó y Cauca.

La primera y más amplia, es el corregimiento de La Toma, al oriente del municipio, en medio del río Cauca y el Ovejas. Para guiarse, el lector puede encontrar un mapa con la división administrativa del municipio de Suárez en el Anexo 4. En este corregimiento la minería está ampliamente generalizada entre sus habitantes, la gran mayoría afrodescendientes. Muchos de ellos son propietarios de una mina, de aluvión o filón, ubicada en este territorio y quienes no lo son “saben que en el río hay orito y van a buscar en el río” me explicaba Mario Mondragón (5 de marzo de 2015). Sin embargo, la minería no es la actividad económica exclusiva, la agricultura de subsistencia es parte estructural de la vida económica de estas comunidades, así como en menor medida a la pesca y la extracción de material de arrastre. Podríamos decir de la mano de Ararat *et al*, que la población del corregimiento tiene una marcada vocación agrominera<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Según el censo realizado en esa investigación las respuestas a “Actividades a las que se dedica” son: Agricultura 22,1%; Minería 27,3%; Minería y agricultura 27,7%; Comercio 2,4%; Profesor 1,3%; Empleado 12,6; Otro 6,6. Encuestadas 1522 personas. En general le dedican dos o tres días a la agricultura y cuatro o cinco a la minería (Ararat *et al* 2014: 353). Según algunos líderes del Consejo Comunitario, en la vereda La Toma es donde más ha tendido la gente a especializarse

La minería aluvial comprende una serie de modalidades. Está el barequeo ‘simple’ en ríos, pequeñas quebradas y zanjones, trabajado individualmente o por grupos. La práctica de “zambullir” en el río.

Tenemos los “cortes”, explotaciones a cielo abierto que anteriormente se hacía con pilas que los mayores construían en la parte alta de la loma de donde descargaban el agua lluvia para lavarla. Desde hace unos 5 o 6 años (Simón Rodríguez 2014) en los “cortes” se utilizan motores para lavar por “chorreo” debido a la poca pluviosidad de determinadas épocas del año, normalmente se trabaja en familia.

Se encuentran trabajos mineros denominados veneros, que son minas subterráneas, túneles o “cobas” -como ellos le llaman-, en capas de tierra rica en oro. Éste se concentra en una cinta de forma similar que en la mina de filón, también se trabaja en familia o en grupos y también parece ser una práctica antigua. Estas minas son generalizadas en la zona alta del corregimiento en la vereda La Toma. Esta forma de trabajo es especialmente difícil debido a que la ventilación es muy escasa. Están las minas de veta, una minería comunitaria realizada en el lecho y las playas del río Ovejas y que implica “represar” segmentos del río de forma artesanal. Se trabaja por familias o “parejas” en tramos llamados “tongas”. Simón nos habla de la minería de veta, practicada especialmente por las veredas Gelima, Yolombó y Dos Aguas,

Para mí es la minería más importante, y es la que une la comunidad, es la que nos une todo. Porque, si tú puedes ver cómo nosotros comunitariamente nos ponemos en una piedra para moverla entre 30, 25 personas, es una minería muy solidaria (...) Entonces uno ahí va uniendo grupos primero, una va a hacer como grupos familiares, después 2, 3 familias, después ha habido partes que es donde toda la vereda tenemos el acceso al río y unos hacen que la tapa, voltiamos (Sic) el río, la cosa. (...) Esa minería es muy bacana. (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

---

en el ejercicio de la minería exclusivamente. Es interesante la proporción de “empleados” que aunque siendo mucho menor marca una –probable- diferencia con respecto a la zona indígena-mestiza, en parte por su cercanía con el casco urbano del municipio (y las actividades económicas en él) y un mayor contacto/vinculación con la administración municipal, la misma EPSA S.A. (en menor proporción).

Cada zona de La Toma se especializa parcialmente en una forma de minería<sup>55</sup>. Este tipo de minería trabajada en tongas y el desvío parcial artesanal del río, parecen perdurar solamente en aquellas veredas de La Toma. Por el contrario, el barequeo individual o en grupos pequeños existe aún en un rango mucho más amplio, entre comunidades negras de los corregimientos de Mindalá y Mesetas, e incluso entre personas indígenas y mestizas de la “parte alta” –Betulia, Agua Clara, Los Robles-, según conversaciones con personas de las zonas.

Esos tipos de minería de aluvión, al menos en La Toma, conservan una serie de características que vienen de prácticas mineras incorporadas durante la colonia (West 1972), pero al mismo tiempo los mineros han venido introduciendo nuevas herramientas y tecnologías como las motobombas eléctricas y el laberinto<sup>56</sup>.

En La Toma también hay minas de filón. Se ubican principalmente en la zona de La Carolina (oeste del corregimiento al lado del embalse), en la zona del Peñón y en otras partes de la vereda La Toma, es decir, en principalmente en la parte “alta” del corregimiento. Gustavo nos aclara que también en la parte alta de Yolombó hay algunas de estas minas. Sin embargo, según explica Simón en su entrevista, ésta no es una minería muy “desarrollada” en esa zona, aunque sí más “constante” dado que la *veta* encontrada puede “durar 100, 200, 300 años”, debido probablemente a que la escala de explotación es muy pequeña. También es posible que la veta “se pierda” pues nunca se está seguro de que la cinta continúa ni hacia dónde. Por el contrario, la minería aluvial son *depósitos* de oro

---

<sup>55</sup> Me explicaba Simón a propósito “Por ejemplo, los tomeños [de la vereda La Toma] no saben trabajar veta. (...) Acá por lo menos hay gente que no se mete a una coba. (...) Acá, la gente son más duchos pa’ trabajar el tema del río, cómo voltiar (Sic) el río (...) pero la gente de la Toma, es más, pa’ el tema de las cobas. (...) Ah, porque se manejan unas técnicas de respiración. (...) esa coba tiene como 400 metros. Y entonces yo decía ‘ehhh, yo puedo, yo tengo que meterme allá’, y arrancaba, y dele, dele, dele, dele, y yo por allá parecía que se me fuera a reventar el pecho, me parecía que yo ya no cabía en la coba (...) Pero ellos ya adaptan el cuerpo a la respiración. (...) Entonces yo también les decía ‘Ah, bueno. Pero cuando uno les tira un tarro, no saben cómo agarrar un tarro, entonces nosotros sí’. (...) Por ejemplo las mujeres de acá no dejan que el tarro les llegue a los senos, lo paran, lo paran y eso tiene que hacerse con técnica” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

<sup>56</sup> “Porque anteriormente se usaban era motobombas de guadua, o la gente tenía que achicar agua. Eso fue, las primeras fueron como en el 88. Ahí trajeron las motobombas, trajeron los laberintos, porque anteriormente era solamente batea. (...) eso lo trajeron unos compañeros que fueron a buscar oro al Huila [a El Remolino] (...) anteriormente uno por ejemplo sacaba uno la tierra de la veta, ¿no? O sea, uno sacaba el mineral, ¡ja!, y tocaba que uno, un día, dos días pa’ lavarla. Pa’ (Sic) lavarla uno a batea (...) Y nooo, uno terminaba enfermo. (...) Pero uno con el labero (Sic), uno lavaba, por hay una hora. (...) Aquí hubieron solamente en el comienzo habían 2 laberintos. Y tenía que uno ayudar a lavar la tierra, o sea lavábamos en minga. Uno le ayudaba al otro, y al otro y al otro hasta que iba cogiendo el turno. (...) porque de todos modos uno le tocaba que achicar unas pocetas más grandes que ésta casa. Con batea.” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

que tienen duraciones más cortas, “tu un depósito te lo terminas y ya (...) pero uno se encuentra un depósito y hay orito pa’ (Sic) rato. Claro” especifica Simón. Aunque mi entrevistado ha trabajado la minería de filón, considera que es una minería que tiene menor acogida entre los habitantes de Yolombó y es principalmente desarrollada por personas que no son tomeñas<sup>57</sup>. Algunos informes de la autoridad minera sobre el polígono “Gelima” del ARE corroboran en parte esta última consideración (ver acápite sobre el ARE en el capítulo siguiente). Sin embargo, al preguntar a otros habitantes de Yolombó parecen haber percepciones diferentes. Arturo Salcedo me explica que él ha trabajado por igual los dos tipos de minería, sin tener preferencia por ninguno. Igual sucede con Edwin Salcedo y con Gustavo Zapata que me dicen, cada uno en su momento, opiniones muy similares. La minería de filón tiene también varios tipos de minas como, por ejemplo, la de “carmin” que se encuentra en una especie de “semipeña” y se trabaja con cincel, o la de agua, que solo es posible extraer con dinamita<sup>58</sup>. Y ha variado igualmente en sus herramientas, entre las que hoy se encuentran martillos neumáticos, máquinas de perforar y aunque muy pocos, algunos compresores. El trabajo de campo y a la revisión de algunos documentos me lleva a coincidir con Simón en que, en general en el corregimiento, la minería de aluvión predomina por encima de la de filón.

Según lo que pude indagar con diversos mineros y en la entrevista con Simón, en la minería de aluvión parece predominar el mecanismo de puestos para la distribución de la “ganancia”. Quienes trabajan en la mina, más el dueño de la tierra, suman los puestos por los que se dividirá el dinero que resulte en partes iguales. La motobomba también cuenta

---

<sup>57</sup> “La gente de aquí de Yolombó no hace minería de filón, le tiene pereza. Y hay minas de filón, pero no. (...) es que la gente no tiene esa vocación del filón (...) aquí la minería de filón, para mí es una minería introducida, o sea la gente que la está haciendo no es de aquí [de La Toma] (...) porque nosotros así siempre hemos hecho es la aluvial. (...) Pues hay [gente] de Suárez [cabecera], hay de fuera del municipio. Claro que acá, afortunadamente, por un buen tiempo se logró parar la entrada de los paisas. (...) La minería de filón, que la pólvora, que la molienda, que una cosa, que la otra. En cambio acá le gente le tira más es a la aluvial. Porque la aluvial tu sacas el oro de una. Tú fuiste, lavaste y chao. Rápido. (...) La sé trabajar y la estuve trabajando pero aaah, o sea para mí es muy esclavizante (...) tu sacas tu mina y tienes que sentarte mientras que el molino le da, son 3 horas por vuelta, lava, vuelve otra vez otras 3 horas ahí, vuelve otra vez y lava, y son otras 3 horas ahí. Nooooo, en cambio la de aluvial no, lo que quedó en el cajón, lo que quedó en la batea, ya fue.” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

<sup>58</sup> Inclusive la minería de filón se está introduciendo algunas técnicas que permiten realizar minería de chorreo [con agua] (...) eso hay, creo que alrededor de 15 frentes [en La Toma] (...) O sea la de carmin es la que no, esa se saca con pico o cincel (...) es casi semipeña, entonces es lo que le llamamos el oro libre, que con un solo golpeo sale. Esa no necesita pólvora. Pero cuando uno ya encuentra la de agua, tú la de agua puedes ver el oro ahí pero si no tienes dinamita, no, no la despega. (...) (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

por un puesto para su dueño, que en caso de trabajar también en la mina es acreedor a dos puestos –por su trabajo y por la máquina-. De esta forma, todos o casi todos los que intervienen en la explotación son “socios”, y pueden esporádicamente contratar jornales a sus vecinos. Además hay otros mecanismos de distribución de la riqueza que no están dirigidos a quienes trabajan, ponen terreno o herramientas, sino a quienes tienen una necesidad sentida dentro de la comunidad. Es el caso del “despegue”, una figura que permite la solidaridad entre vecinos. Se le ofrece a los que no trabajan en la mina, o se utiliza para financiar proyectos comunes e incluso actividades colectivas de esparcimiento,

Uno por ejemplo le dice ‘vé, andá el sábado pa’ que cojás tu despegue’ (Sic), que eso se hace con los estudiantes, eso se hace con el que está haciendo otro trabajo y no tiene plata, entonces ese año o ese día está mal (...) uno le da sus 10, 20 tarrados (Sic), depende (...) Nosotros lo usábamos más que todo pa’ la fiesta, que pa’ la recocha, entonces nosotros vamos a sacar un despegue pa’ una pucha o pa’ el trago, entonces nos poníamos a trabajar, o sea, después de uno terminar la jornada, (...) o vamos pa’ paseo, que también lo hacíamos (...) para nosotros esa vaina ha hecho mucho la unión familiar, la amistad. (...) ellos [en La Toma cabecera], yo digo que actúan también con la misma dinámica. Sí, porque por ejemplo ellos dicen, dizque ‘Ay, que tal persona no tiene plata pa’ pagar arriendo en Cali, que saqué mole (Sic) uno o dos viajes’, porque allá llaman es viaje. Y ya, y le sacan los dos viajes y le lavan, y venden el oro y le mandan la plata. Se ponen de acuerdo. ‘Ah, que tal persona está enfermo, que hay que sacarle no sé cuántos viajes también’ (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

Lo que nos describe Simón ilustra en parte lo señalado por Ararat *et al* en su trabajo sobre la historia de La Toma: “la producción en las minas no se orienta solo por criterios como la acumulación y el enriquecimiento rápido e individual; el trabajo en la mina es con frecuencia sinónimo de autonomía y de posibilidades de bienestar compartido.” (Ararat *et al* 2014: 183).

La idea de que la minería realizada por esa comunidad afrodescendiente ha sido un “sinónimo de autonomía” tiene que ver con la experiencia presente de esta actividad pero también con su pasado. Los autores del libro citado nos muestran con detalle cómo la complementariedad entre, por un lado, la actividad agrícola que permitió la ocupación productiva y por lo tanto afianzó la legitimidad de la posesión de los “terrajeros” sobre sus

predios, y por otro, la actividad minera que permitió la acumulación de *oro* suficiente, fueron los factores fundamentales para que los mayores lograran comprar las tierras de La Toma. Después de la liberación de los negros -1852- aquellos “terrajeros” venían trabajando la tierra incorporando diversos cultivos transitorios, principalmente en la cuenca alta del río Cauca, lo que hoy conocemos como La Toma, Mindalá, y en general las vegas y riberas del río Cauca aguas abajo. Desde finales del siglo XIX, y mucho más a inicios del XX, esta vocación agrícola se profundizó con los cultivos de café, y más adelante con la comercialización de este y otros productos a través del ferrocarril, que comenzaría a funcionar en Suárez desde 1920. El tren y el café fue una pareja determinante, pero además, el comercio de maderables y la actividad minera que se mantuvieron como ingreso del dinero que los adultos de la comunidad de Vicentico ahorraría durante años para comprar en 1936 las tierras de La Toma a los descendientes de la familia Concha y a una señora Meneses. La valorización de las mejoras especialmente los cultivos de café, los mayores excedentes por la comercialización sus productos en mercados locales y regionales y la acumulación de pequeñas cantidades de oro durante largos años permitió finalmente este objetivo, trazado consciente y colectivamente por aquellos mayores.

En este sentido, la minería fue un pilar para combatir los lazos de dependencia que aún permanecían con los antiguos hacendados y esclavistas. Su papel fue completamente diferente al que jugó en el periodo anterior, la colonia, cuando representó la explotación y la subordinación absoluta. Ahora, bajo el control de los “terrajeros” permitía una autonomía económica respaldada ya jurídicamente y el inicio de un periodo en el que se consolidaría una economía basada en la pequeña propiedad de la tierra (Ararat *et al* 2014).

Ararat *et al* nos muestran también el valor que la minería tiene en el desarrollo de la autonomía personal de los jóvenes que la trabajan, de las mujeres y los hombres adultos que tienen esa posibilidad de sustento diario, en medio de la crisis que desde hace décadas azota agro en el municipio. También hemos visto su importancia en las dinámicas de integración comunitaria y la solidaridad. Es importante tener en cuenta lo que estos autores describen: allí, el derecho a desarrollar la minería y el oro no es un derecho exclusivo, es más bien un derecho que todos pueden ejercer bajo las reglas implícitas y consuetudinarias



que han operado desde hace mucho tiempo, son bienes de la comunidad. Además, “el derecho a trabajar en las minas no se rige por un principio individualista de propiedad” dado que las minas pueden ser trabajadas por personas ajenas a la familia propietaria a través de acuerdos, bajo las formas y ritmos de trabajo que esas personas prefieran.

La minería puede considerarse el ingreso económico principal de la mayoría de tomeños en la actualidad y es un referente de identidad para estas personas. La relevancia de esta actividad frente al momento actual de conflicto es expresada por esos autores en estos términos “De manera similar cómo la agricultura y su modalidad de terraje sirvió para garantizar la apropiación del territorio a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la minería ha sido fundamental para la defensa del territorio en el presente.” (Ararat *et al*: 181). Según interpreto esta afirmación, podríamos decir que la legitimidad que les da el histórico ejercicio minero local ha sido la base para disputar con la institucionalidad pública y los actores mineros foráneos el dominio sobre el oro de la zona.

A partir de los análisis y reflexiones propuestos por Ararat *et al* podemos sugerir que el dominio que estas comunidades han ejercido sobre sus actividades mineras durante tantos años, en función de su beneficio personal y comunitario, parece haber fundamentado en parte la reacción negativa a la llegada de nuevos actores mineros foráneos con intenciones de implantar proyectos mineros bajo su control. Mucho más cuando el acercamiento a esas formas mineras locales nos sugieren que en ellas subyacen concepciones distintas de la riqueza, del trabajo y de la propiedad, en palabras de esos autores, “no se ajustan a la lógica del trabajo asalariado (...) si una persona tiene derecho a trabajar en una mina, lo puede hacer los días y en los horarios de su preferencia”, además de que “muchas personas trabajan en la mina solo hasta obtener el dinero necesario para resolver algunas necesidades del momento. (...) Si comparamos estas formas de trabajo con aquellas que propone el gran capital, podría pensarse que los tomeños no están interesados en ajustarse a horarios rígidos, relaciones laborales definidas por el interés de un propietario o patrón, ni en producir para acumular grandes cantidades de dinero. Todo ello ayudaría a comprender por qué se resisten a aceptar la implantación de grandes proyectos de extracción en su territorio y prefieren un sistema de explotación del oro a pequeña o mediana escala, con menores

márgenes de ganancia y mayor autonomía.” (Ararat *et al* 2014: 183 -184). Muy seguramente esas lógicas presentes en la práctica minera local subyacen a aquel rechazo y a esa tenaz resistencia. No obstante, es probable que ni el auto-reconocimiento, ni esas lógicas por sí solas, ni la condición de minero amenazado por otros actores, hayan sido la garantía o explicación absoluta de esa resistencia. La movilización de muchas de las personas y su nivel de organización ha sido un difícil proceso emprendido por algunos líderes, desde el Consejo Comunitario. El fortalecimiento de sus decisiones y políticas organizativas parece haber sido un importante fundamento, y se ha dado en medio de las disputas concretas entorno al recurso. Considero que ese trabajo político-organizativo ha creado las condiciones para realizar las acciones coordinadas necesarias, a pesar, incluso, del escepticismo de muchos tomeños, o del peso que tienen criterios economicistas o individualistas en los comportamientos de personas de las comunidades a la hora de enfrentar las amenazas comunes<sup>59</sup>.

El tema minero ha sido pensado con bastante detalle por los líderes del Consejo Comunitario. Cuando entrevisto a Simón, en su reflexión sobre esta actividad, reconozco una fuerte consciencia política de los lazos comunitarios. Enfatiza en la valoración de esos elementos. Puede que esos elementos fueran valorados de forma distinta antes y después de los conflictos vividos -del río Ovejas y el minero-, que no fueran tan evidentes o conscientes a pesar de estar presentes. Actualmente, la identificación y valoración de los lazos comunitarios vehiculados por las minerías locales, es de gran importancia para la definición de la práctica minera propia, en contraposición con lo que proponen determinados actores mineros.

Las prácticas mineras son recreadas/transformadas/modificadas/adaptadas por esas poblaciones a lo largo del tiempo, durante el cual prolifera o no un tipo de minería, o desaparece parcial o totalmente por momentos –como el barequeo entre los indígenas del

---

<sup>59</sup> “Entonces pues muchas personas no entienden porque dirán un ejemplo, no es la mina de Zutanito que se la van a quitar, no, porque si empiezan por esa mina arrastran con todo y de esto es con lo que nosotros vivimos. Yo digo que si a nosotros nos quitan la minería pues nosotros estamos muertos, porque de ella vivimos, bueno de ella nacimos, de ella somos todo, porque en medio de ella conseguimos todo, entonces pues sí hay mucha gente que no entiende que esto ha sido un proceso muy duro” Shirley Vergara citado en (Ararat *et al* 2013: 272)

occidente por ejemplo, o la proliferación de la minería de venero en La Toma, así como la de filón-, y conviven técnicas/tecnologías “viejas” y “nuevas”.

En segundo lugar, otro polo de minería es gran parte del corregimiento Mindalá. Se ubica al sur del pueblo de Suárez, a la altura del embalse de La Salvajina, sobre las montañas de la orilla occidental del río Cauca, y se extiende casi hasta el final del lago. En diversas partes del corregimiento hay minería de aluvión y filón, pero me interesa resaltar una “pequeña” área en la que se concentran una gran cantidad de explotaciones de filón, en su gran mayoría propiedad de afrodescendientes que viven en la cabecera o en ese corregimiento. Son las veredas Turbina, Tamboral, Miravalle y Pueblo Nuevo. Como en casi todas las minerías presentes en el municipio, también la propiedad y el trabajo de estas minas es principalmente familiar. Sin embargo, las observaciones que he realizado en minas de este tipo y la información que he recolectado (especialmente los informes del polígono Turbina-Tamboral del ARE), me sugieren que en las explotaciones de filón las relaciones internas entre quienes intervienen en ella tienden a cambiar en tanto crece la mina y se tecnifica. Los socios, normalmente 2 o 3 personas amigas o familia que participan por igual en las ganancias, contratan jornaleros que trabajan, a la par con ellos o solos, esto en la medida que la economía lo permita. Por ejemplo, en la Turbina-Tamboral el número de trabajadores de las 41 minas de las que se cuenta con este dato, varía entre 1 y 9, y el promedio es de 3 trabajadores por mina. Aunque la base familiar del trabajo se mantiene en muchas, el trabajo por jornal y la *relación laboral* parece volverse más frecuente y “necesaria” en tanto crece la rentabilidad.

El tercer referente está también al occidente del Cauca, hacia donde se extienden todos los demás corregimientos. En la “parte alta”, como muchos le llaman, montañas adentro en el corregimiento de Betulia, está la vereda El Diviso –una hora y media en chiva o una en moto desde la cabecera-, en la que desde hace más de 60 años se realiza minería de filón, principalmente en la finca El Danubio propiedad del minero Alonso Giraldo. Aquí, además de la mina El Danubio, hay una cantidad de mineros independientes que trabajan sus bocaminas y pagan un porcentaje (entre 60 y 40% el producto) al propietario del terreno.

Según me explicaba Albeiro Cortez en su entrevista, la dinámica es como ya hemos descrito, con buen rendimiento se contratan jornaleros que refuerzan el trabajo del dueño de bocamina. Éste se encarga de pagar a los trabajadores y el % a Giraldo.

La cuarta área se encuentra bien hacia el sur occidente, en la vereda Matecaña del corregimiento Agua Clara, cerca al río Inguitó. Allí se realiza pequeña minería de filón, pero hoy, al parecer, no predominan mineros locales, según lo informado por Meraldiño en su entrevista. En Matecaña ocurre algo similar a El Danubio. A los dueños de las fincas en las que se ubican las minas los mineros independientes deben pagar un porcentaje.

Observando el mapa de Suárez, considero que las áreas de El Danubio y Matecaña son pequeñas porciones en una extensa zona montañosa occidental. En general, esta región es principalmente habitada por población indígena y mestiza. En esa “parte alta” (corregimientos de Betulia, Los Robles, Bellavista al norte y Aguaclara al sur) predomina la agricultura de subsistencia o con un bajo margen de ganancia y también se presenta la cría de bovinos en poca cantidad<sup>60</sup>.

La mayoría de las personas de esta zona con las que hemos dialogado o escuchado sobre el tema minero, identifican esas dos áreas mineras puntuales. No obstante, en una larga conversación con Julio Cañas, Saúl Güetio y Leandro Güetio, habitantes de Altamira y líderes del proceso étnico, comentan sobre otras minas dispersas en la zona occidental. Ya varios habitantes de esa vereda me habían contado que existían allí algunos túneles abandonados. Antes de llegar Saúl, Cañas me había explicado que recordaba uno que mide “unos 100 metros” y otros “cortíticos”, según él los “habían venido a abrir los mineros del Danubio”. Sacaban el material a lomo de mula y lo molían en “Tres Puentes”, “en esa época no había carretera”, la carretera la abren en 1992, especifica. Era el año 78 y 79, aproximadamente, “porque cuando yo terminé de estudiar todavía escarbaban esa mina y yo terminé en el 80”. Don Julio Cañas considera que “la raza de nosotros nunca ha sido de

---

<sup>60</sup> En especial en el cultivo de café y la hoja de coca tienen excedentes, productos que en ocasiones permiten el pago de jornales a trabajadores –vecinos, familiares-. Aunque no cuento con datos exactos se puede afirmar que el nivel de profesionalización es muy bajo, tal vez menor que en La Toma, puede ser probable que el nivel de alfabetización también sea mucho menor, pero no hay información certera para afirmarlo.

minería” para explicarme que, al menos en Altamira, la implicación de los indígenas en aquellas actividades mineras era muy poca.

Por otro lado, Saul Güetio me comenta que, junto con sus tíos abuelos, sus abuelos fueron la primera generación de los Güetio que llegaron a Altamira en los 20’s. Antes de su llegada solo estaban los Lucumí, afrodescendientes, y los Gómez, nariñenses, y varios de ellos hacían minería. Saúl y Leandro, que se une a la conversación, me confirman que algunos de sus abuelos hicieron minería, en especial Don Manuel y Sebastián Güetio (abuelo y tío de Saúl). Su abuelo le contaba a Saúl que, por la escases, durante algunos periodos, entre los 30’s y 40’s, debieron hacer minería en La Charca, una quebrada a una hora de Altamira explica Saúl. Leandro, Saúl y Cañas coinciden en que una de las primeras minas en esta zona, sino la primera, fue La María, de filón, y La Charca de aluvión, ubicadas en la misma zona minera en La Cabaña. Según ellos aún se trabaja en esas minas. Leandro Güetio también se acuerda aquella lejana época en la que sus familiares mayores hicieron minería. Su padre, Don Isaías Güetio, mantenía una amistad con el encargado de la mina El Danubio en esa época, el señor Luis Castillo. Cuando era muy pequeño, recuerda, Luis Castillo iba a su casa en Altamira para hablar con don Isaías de “sacar oro” mientras reventaban piedras. El minero del Danubio “sabía que en Altamira había oro” me afirma Leandro mientras rememora. “Luego” ya por el 48, me dice, “vinieron unos paisas a explotar”, liderados por un señor José Rúa, lo cual coincide con el margen de años que me había indicado Saúl. Del relato comprendo que había una relación entre Luis Castillo y Rúa, y cuando pregunto sobre esa relación Leandro me explica: “En esa época las relaciones entre mineros era muy buena, y entre dueños de tierras y minas era muy buena, ahora existen unos celos, que ahora cuando se habla de minas, sí se pregunta una, dos, tres veces, tiene que preguntar varias veces, saber de dónde vienen porque hay muchas sospechas”.

Por esa época, años 48 y 50’s, parece haber sido prospera la minería en Altamira, “e incluso dio para hacer mercado, venían de varias zonas a comprar remesa, cebolla” y el oro se vendía en Suárez, recuerda Leandro, y Saúl, que lo escucha, mueve la cabeza en tono afirmativo. Sin embargo, parece que las actividades comenzaron a generar problemas, “fue por las fincas, ‘que usted me va a dañar la finca’ porque los paisas iban abriendo mina

donde hubiera cordón de oro sin preguntar” y “ahí fue que los indios entraron a actuar, ¿cómo actuaron? Utilizaron la medicina tradicional e hicieron desaparecer el oro” nos cuenta Leandro. Cuando desapareció el oro, los mineros se fueron a buscar a otra parte.

En este punto, el relato de Leandro se encuentra con lo que me había comentado Julio Cañas, después de unos 20 años de partir de Altamira, “entre el 80 al 86” vuelven “los paisas”. En esa época, su padre don Isaías estuvo entre 4 y 5 años haciendo minería, trabajando específicamente en los molinos, que estaba en la quebrada Farallón. Por esos años vino Pacho Ruíz, otro paisa, quien monto dos molinos en “Tres Puentes”, “y sacaron mucho oro” recuerda Leandro. El año 86 muere don Isaías, y entre ese y el siguiente decayó la mina “porque los indios actuaron”. En “el 88 y el 91 o 92 lo agarré yo, con un socio, Eliecer Güetio, allí volvió José Rúa, porque yo lo contraté, y otro señor boyacense, un guaquero de minas de esmeralda” explica Leandro, y a continuación agrega que incluso el mismo Saúl trabajó en esa mina. Saúl sonríe y mueve la cabeza: “sí, sí, sí yo recuerdo” con los ojos mirando más al pasado que a nosotros. Leandro y Saúl consideran que en esa ocasión los mayores actuaron de nuevo para perder el oro y acabar el trabajo.

Leandro muestra una gran empatía con la actividad minera y tiene una serie de conocimientos sobre los minerales en esta área que habita su familia, “Lo que hacíamos era estudiar bien cómo van los cordones y ahí le íbamos haciendo”. No es la primera vez que lo escucho afirmar que toda esa zona, desde la vereda hasta todo el Cerro Tijeras, es más rica que el mismo Danubio. Que han encontrado “piedras de puro oro”, explica el indígena: “las minas de Altamira son minas ‘güeveras’ o ‘materas’ cada unos 5 metros, 2 o 20 metros encuentra un huevo de oro, de 100 gramos o más”. También reflexiona sobre los impactos que genera las nuevas formas e insumos utilizados “Los mineros de esa época no usaban los venenos que usan hoy los mineros (...) ni Pacho Ruíz, ni Luis Castillo, ni nosotros no utilizábamos el mercurio, por desconocimiento, luego es que nos dimos cuenta que la mayor parte se iba en la arena”, sobre las plantas de beneficio dice: “no era con esos tarros de ahora, era con molinos de pisón con agua” y agrega a propósito del momento actual en el que parece renacer un interés por el oro entre algunas personas de Altamira, “ahora último quiso salir un proyecto, pero los muchachos comenzaron a aplicar mercurio, para

cada cosita, y no tenían experiencia, con una semana querían tener ya gramos de oro, pero la minería no es así, hay que tener paciencia y tener un recurso (...) yo siempre vengo pensando en lo propio, los molinos de pisón y sin gasolina, con la fuerza del agua”. Nos cuenta que quiere adelantar varios trabajos mineros pero debido a la situación actual y a los intereses en torno al tema han decidido dejarlos por un tiempo.

De vez en cuando algunas personas de Altamira intentan sacar oro según Saúl, “aunque no les ha dado resultados”. Sin embargo, de esta y otras conversaciones sostenidas con diversos indígenas a lo largo del trabajo de campo, me he hecho la idea de que la actividad minera, al menos en esa zona y en lo que respecta a la comunidad indígena, ha estado vinculada específicamente con la familia Güetio. Pareciera que los indígenas no le han practicado de forma generalizada. La gran mayoría parece no tener una tradición o conocimiento mayor de la actividad minera.

En todo caso, hemos identificado que la problematización de las prácticas mineras presentes y pasadas es recurrente en la actualidad, principalmente por parte de los/as líderes/as integrados en el proceso indígena. Algunas de estas personas se preguntan, por ejemplo, por la renovación del barequeo entre adultos y niños en el río Marilopito<sup>61</sup>, o por la intensificación de la explotación en la mina El Danubio que como sabemos opera hace más de 5 décadas, como veremos en el acápite 3.6. También hemos escuchado en determinadas asambleas y reuniones asistidas durante el 2014 en Altamira la preocupación por el interés de grupos armados legales e ilegales en la explotación de oro<sup>62</sup>. No obstante, la reflexión/problematización “consciente”, hemos identificado que ésta puede ser menos apropiada por amplios sectores de las comunidades de esa zona occidental incluyendo

---

<sup>61</sup> Por ejemplo, la profesora Martha Güetio, lideresa del Cabildo, me contaba en 2012 que varios de sus estudiantes habían suspendido sus estudios debido a que preferían ir a trabajar cogiendo oro con sus padres-madres en el río Marilopito. Me explicó que ella estuvo cogiendo oro en El Diviso, experiencia que le causó impresión pues comprendió y sintió la emoción del azar al capturar pepas de oro, y al mismo tiempo la fuerza que eso imprime a la búsqueda del mineral, en la que se termina dejando de lado la “consciencia” del daño que se causa, en ese caso el socavamiento de las raíces de algunos árboles, todo, desde su percepción de que ha emergido en torno al oro una fuerte ambición. Esa era su experiencia del asunto, que puede ser radicalmente diferente a la de muchos otros comuneros que no perciben “daños” o los consideran y valoran diferente. O a la de los afrotomeños que tienen criterios y visiones distintas de los “impactos ambientales” y sus niveles, y en especial los asociados a la minería ancestral y tradicional.

<sup>62</sup> Una de ellas fue la Asamblea de mayo de 2013 en donde varios líderes denunciaron que sospechaban que el Ejército pretendía comprar algunas fincas probablemente para poner bases, pero que parecían ser terrenos ricos en oro. Además se habló de un interés de la guerrilla por aprovechar algunos yacimientos frente a lo cual estos líderes se opusieron.

cabildantes. La idea de “impactos ambientales” viene siendo uno de los temas que los líderes de la organización intentan difundir y que al parecer tiene una relativa acogida.

Parece haber una consciencia más generalizada entre cabildantes tanto de la zona de Altamira y Unión Olivares como de Agua Clara, sobre el hecho de que la mina El Danubio es “privada” y representa un beneficio individual de su propietario. Es común que los dos referentes mineros de la zona occidental sean caracterizadas como lo hace Manuel Belalcazar: “las dos que yo sé, es en El Diviso y Matecaña. (...) la diferencia que hay entre, entre la del Danubio es que esa empresa pues hace parte de un, de una firma, privada. Y allá, el trabajo que hacen allá es, en Matecaña, son las comunidades de ahí mismo, las familias que tienen. Ese si lo hacen artesanalmente.” El líder de la vereda Santa Ana del corregimiento de Agua Clara, también conoce de la llegada de mineros de hecho foráneos – algunos paisas- que se han asentado en Matecaña, sea “comprando o en arriendo”, “pero que así que haiga (Sic) alguna que estén explotando una mina así con retroexcavadora o con volqueta, empresa no (...) sí le han invertido un poquito más, pero que yo tenga entendido que hay alguna, que haiga (Sic) allá alguien con una volqueta como en la del Danubio no.” (Entrevista con Manuel Belalcazar marzo 2015)

A propósito, reunidos en Cali (20 de marzo 2015), pregunto a Meraldiño si considera que “la minería” es algo que beneficia a la comunidad, a lo que me responde: “pues en el momento es algo que beneficia al que está allí, pero a largo plazo es algo que no se ha visto” y complementa “a la comunidad no porque mucha gente de la comunidad no vive de la minería”. Esta posición la he identificado en varios líderes, pero también hemos visto como Leandro remitía a un pasado en el que la minería generó prosperidad. Además, partir de la entrevista al indígena minero Albeiro Cortez pude acercarme a una visión en la que la minería es una actividad que puede ser aprovechada por la comunidad local, fragmentos de esa entrevista serán abordados en el acápite 3.2. Esta dualidad parece estar presente también en las consideraciones del líder Meraldiño, cuando reivindica que la minería ha sido un derecho ancestral de los pueblos: “en este caso la minería pequeña sería lo que por derecho tienen las comunidades, pero ahora poco a poco la han venido ampliando, la han venido tecnificando poco a poco y entonces ya no sería pequeña porque ya genera todos



esos perjuicios como la contaminación la erosión” (Transcripción literal de la conversación con Meraldiño el 20 de marzo de 2015). La anterior cita muestra cómo la preocupación por lo que pueda implicar la minería está permanentemente en las consideraciones de algunos de los líderes más implicados en la organización. Manuel Belalcazar también hace una reflexión similar durante su entrevista: “digamos, como las empresas van buscando la forma de cómo irle llegando a la comunidad cuando menos piense ya no están explotando así artesanalmente ni con poca mano de obra, cuando menos piense está la maquinaria ya ahí, eso sí toca tener mucho cuidado”. De acuerdo con la interlocución que he desarrollado con mineros y no mineros, pareciera que la cercanía a esa actividad marca en parte una percepción más positiva de ésta.

Como vemos, desde la lectura de Meraldiño se reconoce la existencia de prácticas mineras intermitentes pasadas y presentes, pero el líder parece debatirse entre un rechazo hacia actores y tipos de minería específicos, y la desconfianza y cuestionamiento de todo tipo de minería. Se le reconoce a la vez como fuente de subsistencia individual y de un amplio daño ambiental difícil de controlar. Para profundizar en estos matices, pregunto a Meraldiño si tiene un rechazo a “todo tipo de minería”, a la minería en general. Me responde que sí, “uno, porque realmente lo que se ha hecho es con esto más que fortalecer a las comunidades, generar conflictos internos. Y lo otro es que hay muchos intereses sobre esto, y generen desequilibrio y problemáticas en las comunidades como el conflicto armado y grupos armados”. Y ¿cuándo se trata del barequeo?: “el barequeo siempre y cuando no haiga (Sic), no se quede en un solo sitio haciendo barequeo, no es tan contaminantes, pero en el barequeo también se meten una gran cantidad de personas a trabajar en el río, entonces ahí se genera una problemática, lo que se ha encontrado es que también se genera la contaminación de las cuencas, de las microcuencas, porque el oro, los peces, y de igual manera se deforesta, sin retros, o sea el barequeo barequeo”. A pesar de la percepción negativa que puede estar presente en diversos/as líderes/as indígenas, la minería ancestral y artesanal es reivindicada en sus posiciones políticas y documentos pues es, como Meraldiño señalaba, un derecho heredado. Como veremos en el acápite 4.2 la reivindicación de una

Zona Minera Mixta (indígena-afrodescendiente) ha sido, en determinado momento, una oportunidad tomada en cuenta por los dirigentes de la organización.

De conversaciones similares con otros/as líderes/as indígenas y de la participación en reuniones me he construido la idea de que para gran cantidad de ellos/as la minería es asociada a un beneficio mucho más individual, localizado en una población específica y pequeña, y con el dominio actual o potencial de personas externas y/o no confiables. En el caso del Danubio, Giraldo, y de Matecaña, Chandillo, de los que profundizaremos en acápites posteriores. Esta percepción puede estar correlacionada con el hecho de que en las políticas y líneas de acción del Cabildo no haya identificado, durante mis años de interacción, una preocupación específica y permanente sobre el conocimiento/interpretación/valoración de los detalles y aristas de las prácticas mineras en sí, de sus posibilidades, sus historias y sus papeles en la economía comunitaria. En esto se diferencia del Consejo Comunitario de La Toma en donde he reconocido con mayor recurrencia elaboraciones y reflexiones en torno a las minerías que desarrollan, sus técnicas, tecnologías y las relaciones sociocomunitarias que implican.

En general, los/as indígenas y mestizos con quienes he interlocutado –de Alejandría hacia Naranjal, y líderes de Agua Clara- cuentan con escasa información sobre El Danubio y Matecaña. Menor o nula es la que manejan sobre La Toma y el río Ovejas. Durante mi relacionamiento con mineros de filón de La Toma noté que tenían más familiaridad con la mina de El Danubio, sea porque han visitado o han visto a Giraldo en la Cooperativa de Mineros de Suárez. Matecaña es mucho menos referenciada y conocida por las personas con las que me relacioné –tanto de La Toma como de Cerro Tijeras- probablemente porque se ubica bastante lejos, en la frontera con Morales.

Desde la perspectiva que adoptamos, la problematización de las minerías por parte de los miembros del Consejo Comunitario y el Cabildo ha pasado por su interlocución con diferentes actores mineros y organizativos. En ese proceso elaboran posiciones y percepciones acerca de cada uno, de las actividades que agencian, las formas y los objetivos de las minerías. En los siguientes apartes reconstruiremos esos momentos y relaciones concretas.

## **CAPÍTULO III**

### **3. Desarrollo del conflicto minero y la acción organizada del Consejo Comunitario de la Toma y el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras**

#### **3.1. Me titularon la casa y yo no sabía: pero ¿cómo se enteraron las organizaciones étnicas?**

Según la entrevista realizada a Simón y algunos oficios encontrados, en el 2004 líderes del municipio de Suárez descubrían y se preguntaban por la presencia de títulos mineros ostentados por Héctor Jesús Sarria. Como hemos visto con Güetio, algunos líderes de la comunidad indígena para 2003 ya sospechaban de intereses mineros vinculados con la arremetida paramilitar en Naya. Esos años proponemos pensarlos como el inicio de un nuevo periodo en el que el conflicto minero toma un peso importante en la vida política de este municipio. A partir de ese momento, las dos organizaciones despliegan poco a poco acciones colectivas y tácticas para contrarrestar una realidad que antes era más o menos ajena. Se empieza a reconocer y a hacer consciente un problema que tomaría proporciones inmensas: la solicitud y titulación minera de grandes porciones de sus territorios habitados. El lector podrá encontrar las tablas con las 17 concesiones mineras y las 27 solicitudes de concesión vigentes en el municipio de Suárez en el Anexo

Para finales de 2006 y comienzos de 2007 ambos sectores veían llegar directamente al municipio las funcionarias y técnicos de la Kedahda S. A., seguidos de geólogos e ingenieros de la Cosigo Resources, como veremos a lo largo de los siguientes subcapítulos. A partir de la revisión de los documentos presentes en los Archivos del Cabildo –algunas cartas y convocatorias- y de las entrevistas realizadas a Simón, Meraldiño y Enrique, fui reconociendo la importancia de relaciones organizativas previas que cada sector sostenía con otros actores aliados. Gracias a este material empírico, me hice la idea de que la previa inserción de estos sectores y líderes en una red de organizaciones aliadas y cooperantes fue de grandísima importancia, pues ayudó a fundamentar la reacción que éstas tuvieron frente

a estos nuevos actores. Posiblemente la reacción no hubiese sido igual sin esa anterior inserción en aquellas redes de organizaciones aliadas y cooperantes. La perspectiva analítica de Diani me permitió posteriormente releer estas informaciones presentes en el material empírico y darles una importancia mayor desde una conceptualización específica y adecuada. Como veremos, en esa red se intercambian recursos, información y se ayuda a configurar los “esquemas de interpretación” que hemos señalado. “La existencia de lazos fuertes y articulados entre los actores es una precondition esencial para el desarrollo de movilizaciones eficaces y sostenidas en el tiempo. (...) Por otra parte las organizaciones de los movimientos carecen frecuentemente de recursos, sobre todo en comparación con sus adversarios. Por tanto, es de vital importancia la realización de acciones coordinadas y de campañas comunes para poder generalizar la protesta, imponer determinados temas en la agenda política y difundir nuevas interpretaciones del conflicto político y social (Freeman, 1983)” (Diani 1998: 246). Siguiendo la reflexión de Diani, las oportunidades presentes en el contexto y las capacidades que permiten la acción colectiva dependen en gran medida de la circulación de recursos y de significados a través de estas redes que les condicionan y restringen.

Veamos, desde la voz de dos líderes, uno afrodescendiente y uno indígena, esta precondition de la acción colectiva que ha marcado la forma en que estas dos organizaciones étnicas han estructurado su trabajo,

Haber en el momento que yo me acuerde para decir cómo, cómo nos enteramos, pues nos enteramos por intermedio de, de lo que hoy viene plantiando (Sic) el movimiento indígena a que no a la minería ¿Sí? Y en ese momento se decía pero no a la minería pero en nuestros territorios no, no se pensaba en eso ¿Sí? O sea no había ese sueño de minería y acá la mayoría de la comunidad nunca fue minera a pesar de que algunos mayores lo hicieran anteriormente, pero el sueño de ellos no era hacer minería a gran escala como hoy se viene planteando ¿Sí? (...) Pero desde allí se empieza como a hacer las investigaciones, si realmente es cierto que se va a hacer minería ¿Sí? Y uno se encuentra ya con las políticas de gobierno y...que realmente sí es una, sí es una iniciativa como política de Estado hacer minería allá en los territorios. Y es ahí donde se empieza a hacer averiguaciones, a buscar (...) Eso fue aproximadamente, creo, casi en la creación del Cabildo. El Cabildo tiene 10 años aproximadamente, diez años, diez años. (...) Desde eso hace que se empieza a hablar

del Cabildo pero por ahí derecho se empieza a hablar de todo el tema de lo que enmarca y lo que es un Cabildo y para qué es un Cabildo.” (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

El bajo nivel de coordinación y coherencia entre la política minera y las otras políticas del estado –ambiental, agraria, étnica, de ordenamiento territorial, etc.-, la poca capacidad de control institucional y los escasos o nulos mecanismos de participación brindados a los poseedores/propietarios del suelo en las áreas concesionadas, especialmente en la fase de exploración, hacían –y hacen- de la difusión de esa información un problema mayor que han tenido que enfrentar estas comunidades. El recelo y las restricciones para su acceso por parte de la autoridad minera estatal se suma a estos obstáculos. Durante las entrevistas y conversaciones sostenidas a lo largo de este proceso de investigación, identifiqué que el desconocimiento sobre la política y la titularización vigente era generalizado para esta época -2006-, los documentos revisados parecen confirmar esta suposición. Simón me comenta, cuando le pregunto directamente sobre esta percepción, que fue para el año 2007 que se empezó a conocer realmente la política minera y sus consecuencias, en medio de los problemas que surgieron con la titularización del territorio (Simón 5 marzo 2015). La red organizativa en la que se inscribían fue determinante para el acceso a aquella información, también, desde mi punto de vista, para una interpretación de las intenciones de los titulares y del Gobierno Nacional, así como para una activación organizativa en torno a esta realidad. Algunas anécdotas de los entrevistados fueron importantes para tener estas consideraciones sobre el papel de las redes de solidaridad,

En ese entonces se hacía el Tribunal Permanente de los Pueblos, entonces el Tribunal Permanente de los Pueblos tocó en Medellín (...) como en el 2004 (...) yo fui por el caso de la desviación del río Ovejas, entonces allá cogieron y presentaron los mapas de las zonas que tenía la Anglo Gold Ashanti, la Sociedad Kedahda, perdón. Cuando de pronto miré, y ¡pun! la Sociedad Kedahda, Suárez, 50.000 hectáreas (...) ¿cuál? ¿Qué? Inmediatamente, ¡ayyy! y yo dije: uyy hermano, 50.000 hectáreas, en el Cauca, y les dije a los del CNA: “vé, regaláme el mapa” la presentación, y entonces me puse a ver la presentación y, haaaa, las 50.000 hectáreas eran Suárez y Buenos Aires. Nosotros no sabíamos que acá donde nosotros estaban entregadas, nada de eso, entonces le dije a estos manes, les dije a los muchachos: “muchachos, yo estuve en Medellín y yo vi esta vaina, ¿por qué no

comenzamos a indagar sobre eso?” (Entrevista con Simón Rodríguez)

El “movimiento indígena”, es decir el CRIC y la ACIN, en un caso, y en el otro, el espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos impulsado por ONG’s acompañantes, son procesos en los que conviven, articulándose, numerosas organizaciones con diversa ubicación geográfica y alcance político. Algunos documentos presentes en los archivos físicos del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras testimonian estas interrelaciones de acompañamiento y solidaridad entre una diversidad de actores que intercambian y construyen miradas del asunto minero. Se propiciaba, en especial, el encuentro entre comunidades y procesos de distintas regiones del país que vivían situaciones análogas, para la identificación de las dimensiones del problema similar que afrontaban, las posibilidades y limitantes jurídicas, así como las formas en que opera la/s compañía/s estando ya en los territorios. Uno de éstos es un breve texto de convocatoria al “1er Encuentro Interétnico de Agromineros”<sup>63</sup> que se realizaría en Fusagasugá en julio de 2007, y que era la continuación, según el escrito, del proceso de “articulación entre diferentes comunidades”. Ésta articulación había iniciado con la “Audiencia Minera” de noviembre de 2006 en Medellín, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde:

“(…) las comunidades mineras del Sur de Bolívar y Nariño, los indígenas y afrodescendientes del Norte del Cauca y Chocó junto a los indígenas de Risaralda, han empezado a encontrarse para confrontar e intercambiar sus problemáticas.” Allí “se entendió el carácter nacional del conflicto que se viene presentando entre las comunidades mineras y la empresa AngloGold Ashanti –Kedahda- y se ha iniciado una serie de reuniones (...)”

Esta primera Audiencia Minera fue continuada luego con el “Foro Nacional Agrominero de Santa Rosa –Sur de Bolívar-” en febrero de 2007, en el que, según la misma convocatoria ya citada: “En este Foro las comunidades procedentes de diferentes lados del país plantearon su rechazo frente al ingreso de la AngloGold Ashanti a sus territorios, así como al actual Código de Minas y a la reforma que el gobierno pretende hacer en aras de eliminar cualquier forma legal de existencia a los pequeños mineros en defensa de sus tenencias.”

---

<sup>63</sup> REDHER, Fedegromisbol, Corporación Sembrar, PCN, ONIC, CNA, Comité Interétnico del Cauca. 2007. Convocatoria “1º Encuentro Nacional Interétnico de Agromineros”. Pp. 1.

En esta convocatoria la empresa transnacional así como la legislación minera son vistas como “amenaza (...) para las comunidades cuyos territorios son ricos en recursos mineros”. El evento al que se invita pretende, entre otras cosas, incidir en la legislación minera estatal incluyendo como uno de sus ejes de trabajo: “-Propuesta de las comunidades agromineras frente a la legislación vigente y a la propuesta gubernamental de reforma al actual código de minas de 2001”.

Como parte de los convocantes aparece el “Comité interétnico de Cauca (Comunidades de Suárez y Buenos Aires, CRIC, Cooperativa de mineros de Buenos Aires – Coomultimineros-, Comité Municipal de Derechos Humanos de Buenos Aires)” un interesante espacio de trabajo conjunto entre sectores afrodescendientes e indígenas principalmente de la región occidente,

En su momento hubo una mesa interétnica en el municipio de Suarez, que funcionó. Pero eso finalmente fue quedando que hacía parte de varios resguardos. El resguardo de Honduras, el resguardo de Morales, un resguardo que hay en Caldono sobre el río sobre el río Pescador. Estuvo allí con la Asociación de Autoridades de Caldono, creo que el resguardo de La Aguada, y con los afrodescendientes de Buenos Aires, Morales. Se hicieron varias actividades conjuntas y eso no resultó. En esos días se estaba discutiendo el tema del río Ovejas, hubieron varios escenarios que se tomaron (...) fue en el 2007, 2009, fue tres años, esas fechas fueron solo de actividades en este también fueron muriendo (sic) varia gente. Asesinan un compañero Robert Guachetá, asesinan otros en Morales. Un poco eso generó diezmamiento [sic] y se repliega la dirigencia de ese momento. **A:** ¿eso fue durante el tema crítico de la AngloGold Ashanti y de Jesús Sarria? **E:** en ese momento es que sucedieron estos asesinatos. Si bien tengan relación o no, pero fue en estos momentos que había fuertes amenazas en la región. (Entrevista con Enrique Güetio 2014)<sup>64</sup>

Aparecen en la convocatoria otras organizaciones como la Federación Agrominera del Sur

---

<sup>64</sup> Otro documento muestra que a mediados de 2009 existía una dinámica de articulación e intercambio regional motivada principalmente por “la formulación del plan de manejo ambiental de Salvajina, las diversas solicitudes de licencias mineras por parte de compañías internacionales y nacionales sobre nuestros territorios, y otros grandes proyectos sobre toda la región [en el texto se nombran los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales] (...) La Asamblea tiene un carácter informativo y para avanzar en la construcción de un Plan de Acción de las Comunidades para la Defensa del TERRITORIO Y LA DIGNIDAD de los Pueblos.” Convocan: ACIN, CRIC, ATIZO, ACONC, ASOPRODESA, PCN. 2009 Mayo. “Asamblea General Informativa. Comunidades y municipios de Suárez, Buenos Aires, y Morales. Munchique, 25 de MAYO, 9a.m.”. Pp. 1.

de Bolívar –Fedeagromisbol- pioneros en la férrea disputa contra AngloGold Ashanti en su departamento desde los primeros años en que llegó la multinacional a Colombia, el Coordinador Nacional Agrario –CNA- con fuerte presencia en el centro y sur del Cauca, organizaciones con alcance internacional como la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Sembrar de DDHH, y los sectores étnicos nacionales: el Proceso de Comunidades Negras –PCN- y la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- que aparece en el documento con la anotación “por confirmar”. Las características de “multiescalaridad y multisectorialidad” que algunos autores atribuyen a otros conflictos y movimientos “anti minería a cielo abierto” en otras latitudes de América Latina, parecen perfilarse también en estas convocatorias con la participación de actores tan diversos. Vemos organizaciones locales: gremiales o comunitarias; otras de incidencia regional; redes y procesos nacionales/internacionales; con formas organizativas diferentes: asociaciones de procesos étnico/comunitarios, cooperativas mineras, ONG’s. En fin, múltiples lugares que se intersectan, campesinos, agromineros, mineros, afrodescendientes, indígenas, defensores de DDHH, sindicalistas, se intentaban articular en torno al eje minería, según lo muestran los documentos referenciados.

Durante 2007 y 2008 el número de eventos con el objetivo de tratar el tema se multiplicaron. Por mi cercanía previa a la lucha contra las transnacionales mineras y la movilización social ambientalista en general, conocía de la existencia de algunos de esos eventos. Sin embargo, tenía un panorama bastante fragmentado, pues no había participado personalmente de ellos. En el libro “Conflictos Socio-ambientales por la Extracción Minera en Colombia: Casos de la Inversión Británica” escrito por Andrés Idárraga, Diego Muñoz e Hildebrando Vélez en 2010, pude encontrar un listado de los encuentros que reseño a continuación, rastreados por los autores en la parte final del documento (Idárraga *et al.* 2010).

En el primer semestre de 2007 se realizaron varias reuniones regionales de preparación al Encuentro Nacional Minero llevado a cabo durante el mes de junio en Quinchía, Risaralda. En las entrevistas que realicé, el caso de Quinchía aparece como un referente para varios de los líderes (Meraldiño, Enrique y Simón), que se relacionaron con comunidades de ese municipio en el marco de la lucha contra la AngloGold Ashanti. Un mes antes se había



desarrollado el Encuentro Regional Minero en Buenos Aires. En julio ocurría el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico en Bogotá y un mes después la Caravana Nacional e Internacional Agrominera. En 2008 eventos en dos zonas del país fueron promovidos por Censat Agua Viva, para abril se realizó en Santander el Primer Encuentro de Comunidades Afectadas y Amenazadas por Megaproyectos Mineros (ECAAMM) en Málaga, así como el Foro Regional Minero en Bucaramanga. En junio el Segundo EAAMM en Caramanta y el Foro Social Minero en Támesis, Antioquia. No a todos estos encuentros asistieron los entrevistados de las organizaciones étnicas estudiadas, pero considero que hacen parte de un proceso más amplio de conexiones entre comunidades, ONG's y organizaciones sociales. Desde mi punto de vista, ese proceso representa un momento inicial de configuración de vínculos más estables animados explícitamente por el tema de la minería, entre todos esos sectores sociales que desde una dinámica más o menos nacional, pueden haber incidido –y seguir haciéndolo- directa o indirectamente en la lucha local en Suárez. Como señalé antes, varios de estos eventos y organizaciones hacen parte de la memoria –o red actual- de los líderes entrevistados en Suárez.

En el contacto que he tenido con distintos sectores que vienen ocupándose del tema minero desde una perspectiva crítica, me he dado cuenta que cada uno de esos sectores sociopolíticos tienen elementos de convergencia pero también perspectivas diferentes. Es decir, las iniciativas de resistencia frente a las políticas mineras y las tentativas de unificación se guían por visiones más o menos diferentes del tema minero, o por oportunidades concretas que varían en el tiempo.

En ese sentido, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional –RECLAME- , es un ejemplo de una iniciativa de articulación multisectorial que se basaba sobre un criterio mínimo que, como su nombre lo indica, era el rechazo a un tipo específico de minería: la transnacional<sup>65</sup>. La Confederación de Mineros de Colombia ejemplifica otro esfuerzo nacional por unir pequeños y medianos mineros –entre los que hay de filón, de

---

<sup>65</sup> Aunque los entrevistados no se refieren explícitamente a esta red, durante la investigación encontré un comunicado en el que RECLAME –por lo tanto las organizaciones que la componen- condena el desalojo de mineros tradicionales en el corregimiento de La Toma (RECLAME Junio 2010). A finales del 2014 envié un correo a Mario A. Valencia, una de las personas que ayudaba a dinamizar RECLAME, en el que le preguntaba sobre las actividades de la Red. Valencia me expresa en un correo el 20 de enero de 2015, que en el último periodo el trabajo se ha desarticulado debido a los ritmos diferentes de las agendas de cada organización y sector participante.

retroexcavadoras y de dragas-, que vienen trabajando porque se tome en cuenta las necesidades de este sector en la ley y política minera, desde una perspectiva o “esquema interpretativo” ligado a lo gremial.

Las diferentes iniciativas de “coalición” o unión pueden presentar distintos niveles de diferencias políticas. Es necesario tener en cuenta lo que explica Diani: “las redes sociales no son un simple canal para la circulación de recursos materiales o de información indispensables para la acción. Representan, al mismo tiempo, las oportunidades para transmisión de símbolos y significados y, por lo tanto, para la construcción de representaciones compartidas de la acción. Mediante el networking se atribuye sentido a prácticas que de lo contrario permanecerían aisladas e independientes unas de otras, y se desarrollan sentimientos específicos de solidaridad entre actores anteriormente desconocidos” (Diani 1998: 249).

La observación y la revisión de los documentos relativos al caso de Suárez me llevan a pensar que entre diferentes sectores mineros puede haber conflictos explícitos o contradicciones latentes, en especial entre comunidades agromineras que trabajan aluvión en los lechos de ríos y los dueños de retroexcavadoras y dragas.

De los documentos consultados en el archivo del Cabildo y de la lectura de algunos documentos relativos al caso de la minería en Suárez, me queda la percepción de que, en un primer momento, la divulgación de este caso local, así como los esfuerzos de interconectar organizaciones a nivel nacional tenían como centro un actor muy nombrado, la transnacional Sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), seguramente por el altísimo volumen de títulos y solicitudes mineras que ostenta en comparación con otros actores. Parece que poco a poco se ha ido profundizando en las características de otras compañías – como la Cosigo Resources- y otros actores como las retroexcavadoras, las cuales han ido tomando más relevancia según se agudiza su presencia y estragos en los territorios. Sin embargo, el papel de contradictor y amenaza foránea se le suele reservar recurrentemente a la AGA en el caso de Suárez, o más ampliamente a las multinacionales. Por mi parte, a lo largo de este trabajo intento profundizar en la presencia de otros actores no multinacionales en la zona, para contar con un panorama más amplio de ese conflicto minero.

Otra convocatoria al “Seminario Nacional Minero de comunidades afectadas por la Gran Minería”<sup>66</sup> realizado en Bogotá en febrero de 2010 nos sugiere que para ese año, el Cabildo continuaba siendo invitado –y participando según conversaciones que he tenido con Enrique Güetio sobre este evento- a espacios de diálogo nacional. Rezaba en el objetivo del evento: “(...) generar acuerdos políticos que nos permitan incidir en la política minero energética del país a través de ejes de acción como la movilización y organización, formación, investigación y difusión, lo jurídico, y el manejo y acceso a la información.” Como vemos, continúa la preocupación por permear las políticas mineras estatales. ““EN QUÉ ESTAMOS DE ACUERDO’ los movimientos sociales para continuar trabajando conjuntamente y respetando el ‘en qué no estamos de acuerdo de cada sector’.” El anterior aparte parece vislumbrar una conciencia mayor sobre las diferencias entre grupos sociales y comunitarios, considero que puede estar reflejando un mayor detalle en la discusión minera y ambiental, por parte de cada sector así como un mayor conocimiento mutuo, la referencia a una “Plataforma Política” en el documento puede ser también el síntoma de una intensión orientada a la mayor unificación entre los diversos sectores.

Entre los convocantes en 2010 vemos viejos y nuevos actores: Onic, Censat, Cedins, Justicia y Paz, Fedeagromisbol, Corporación Aury Sará, Minga, Sembrar, Sintraminercol, Colectivo de Soberanía en Recursos Naturales y Minero-Energéticos, Aida, Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Asociación Campesina del Valle del Río Simitarra, RECALCA.

Pienso que en las experiencias de algunos líderes ha sido importante el intercambio internacional así como también lo ha sido la visibilización del conflicto local en este nivel, se puede ver, por ejemplo, en que el líder afrodescendiente Simón y el indígena Enrique viajan a Perú para divulgar su experiencia de lucha en un Foro sobre Cambio Climático, al igual que para conocer la realidad minera de ese país, actividad agenciada por Censat<sup>67</sup>. En

---

<sup>66</sup> ONIC *et al.* 2010 Febrero. Seminario nacional minero de comunidades afectadas por la gran minería. Bogotá. Pp. 2

<sup>67</sup> Rodríguez Maldonado, Tatiana. Sin fecha. “Recomendaciones importantes para su viaje a Perú” Dirigido a Simón Rodríguez, Enrique Güetio y Rosa Elvira. Pp. 1. Censat Agua Viva es una organización ligada al caso de la desviación del río Ovejas y a los temas ambientales que amenazan las fuentes hídricas como la minería.

esa ocasión Simón visita la mina de Cajamarca, experiencia que marcó su mirada de la gran minería, según me confirma en nuestro encuentro del 5 marzo de 2015.

He identificado en la entrevista con Simón, en los diálogos con Enrique y Meraldiño, y en los derechos de petición interpuestos por el Consejo Comunitario, que el papel de algunos sindicatos ha sido importante en la ampliación de estas redes multiescalares. Es el caso de Sintraemcali, cercano a las dos organizaciones étnicas gracias a un trabajador sindicalizado de Emcali oriundo de La Toma, Edwar Alberto Villegas Carabalí –y a nombre del cual están varios de esos derechos de petición del Consejo-. O el de la Central Unitaria de Trabajadores, que ha estado presente en múltiples espacios y momentos del Cabildo gracias a la cercanía de uno de sus integrantes que se ha preocupado sistemáticamente por este proceso étnico. Con Sintraemcali se venía estrechando la relación desde el 2004 (Simón 5 marzo 2015). Desde el sindicato se contactó al Representante a la Cámara en la época, Alexander López<sup>68</sup>, quien se solidarizó con el proceso en repetidas ocasiones, entre otras cosas, enviando las denuncias a sindicatos de EEUU en el 2006 aproximadamente (Simón 5 marzo 2015). Me parece interesante resaltar que, muy a pesar de la desestructuración del trabajo formal y el debilitamiento de las organizaciones sindicales en el mundo actual, los sindicatos siguen jugando un papel de gran importancia en conflictos no laborales, ayudando en el apoyo técnico-jurídico, logístico, de respaldo político y de lobby/puente para acceder a otros contactos. Lo anterior lo considero gracias a las entrevistas y los documentos revisados y por mi propia experiencia en la organización estudiantil a la que pertenezco –el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA, COES-.

Además, la relación con el Proceso de Comunidades Negras de Colombia que permite a líderes negros como Simón, asistir a espacios como la OEA años después<sup>69</sup>. Así mismo, el

---

<sup>68</sup> Comenta Simón sobre esa relación: “nosotros éramos muy amigos de, allá estaba, en ese entonces era muy amigo de la gente del sindicato de Cali [Sintraemcali] (...) con Alexander López. Entonces Alex nos acogió y como (...) había un man de la Toma trabajando en Emcali (...) nosotros fuimos ya moviendo puertas.” (Entrevista con Simón Rodríguez). López es ex-presidente de Sintraemcali, ex-representante a la cámara por el Valle del Cauca y Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo desde 2006.

<sup>69</sup> Según me cuenta Simón, por el 2006 el PCN, y él personalmente ingresaron a un encuentro gubernamental sobre el TLC y el Plan Colombia, realizado en Cali, donde denunciaron la situación de las comunidades negras en Colombia. El PCN decide ir a EEUU a contar su versión de la realidad en ese marco, paralelamente Alexander López ayudaba con la denuncia internacional “más desde la perspectiva de DDHH” y del relacionamiento con sindicatos de EEUU (Simón 5 marzo 2015).

acompañamiento de la Corporación Sembrar, y la Campaña Prohibido Olvidar, hoy Nomadesc, tanto en el sector afrodescendiente como indígena.

La “amenaza multinacional” se renueva, pero ahora con dos organizaciones locales que, con su acumulado experiencial y discursivo, se hicieron protagonistas en un conflicto que, desde la comprensión que propongo, fue permitido y desencadenado en gran parte gracias a que sus líderes se negaron a aceptar las dádivas y propuestas de las compañías. En fin, a que no se plegaron conformemente – o como en otros casos, agradecidamente- a la voluntad de éstas.

### **3.2. Las “Retros” y las Dragas: los foráneos nacionales ilegales**

Al interrogar a Meraldiño sobre el primer proyecto minero “grande” con presencia directa en el municipio del que se acuerda, señala unos actores foráneos muy diferentes a las multinacionales mineras: los foráneos nacionales ilegales. Se trata de las explotaciones a cielo abierto con retroexcavadores a las orillas de los ríos,

¡Ah no antes de ser concejal! Fue cuando estaban haciendo explotación minera en, en el río Cauca, a orillas del río Cauca en la cabecera municipal y desafortunadamente ahí de ese hecho sucedieron veinte, veintiún víctimas por una mina que se explotó (...) eee, más que todo afros. Ese fue como el primer, la primera experiencia y posteriormente (...) el alcalde Luis Fernando Colorado, eee le concede un permiso a una, a una empresa minera (...) el hecho era que eran como unos paisas que venían (...) allí piden un permiso al Concejo Municipal, para que como que le den ese permiso para exploración en, eso fue ahí en San Miguel ¿Sí? Allí llegan unas maquinarias, (...) Esa fue como las dos experiencias de, de minería que vi así así antes de mirar todo este espacio grande. (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

Según las conversaciones que he sostenido con Meraldiño, su experiencia no ha sido cercana –ni geográfica ni socialmente- a las prácticas mineras en el municipio. Sabe que algunos mayores barequeaban eventualmente en quebradas, conoce de la existencia de las zonas mineras tradicionales, incluso me ha contado que hay viejas bocaminas escondidas o sepultadas en Altamira, pero no ha practicado la minería.

Sin embargo, en las minas de El Danubio y Matecaña ha habido participación de indígenas y mestizos mineros. Es el caso de Albeiro Cortez, indígena cabildante para quién la llegada de las “retros” fue una realidad bastante anterior a las fechas que menciona Meraldiño, me explica a propósito del caso del río Inguitó,

Hubo una época donde entraba todo los que es Asnazú y Pilato, lo que es de aquí de Suárez. Entraba la gente minera allá (...) eso ya por ahí unos 12 años que se suspendió la minería (...) Sí ya hubieron hasta retros. Entonces ya frente a eso ya se unieron los cabildos y los cabildos mismos se, se, se, se cuidan de un lado y del otro para un lado pertenece al resguardo de Honduras y hacía el otro lado corresponde a Cerro Tijeras. (...) Eso hace pu’ ahí (Sic) unos 15 años que su, subió las retros. (...) Eso no demoraron mucho porque lo que el territorio que trabajó una sola persona que dio el permiso (...) Una sola playa y el compromiso que habían hecho con el dueño de la tierra fue que cuando se iba, dejaran aplanado el, el terreno por allá. (...) dejarlo nuevamente sembrado el pasto y ahí está la playa otra vez. Pero pues ya lo que digamos el, el metal ya se fue. (Entrevista con Albeiro Cortez 2013)

Albeiro me cuenta que ha sido minero durante más de 25 años, gran parte de estos en una boca mina propia en El Danubio. Estuvo vinculado a la Cooperativa de Mineros de Suárez también largos años, conoce la historia de las minas cercanas a la peña Salvajina que fueron inundadas –como Paso Bobo–, trabajó la minería en las orillas del río Cauca circundantes al casco urbano y conoce algunas minas de La Turbina y Tamboral.

La memoria de algunos comuneros afrotomeños se remonta incluso más atrás, cuando por 1993 experimentaron la llegada de varias retroexcavadoras al río Ovejas. Frente a esto, “nosotros”, me dice Tomás mientras conversamos un día en su casa, “lo denunciamos, aunque mucha gente no lo quería” ¿Quién? Pregunto. “Una familia, algunas personas”. Las personas del Consejo, principalmente de la vereda Yolombó y Gelima, que me cuentan sobre los momentos que han vivido con las retroexcavadores, reconocen que estas explotaciones y sus agentes generan divisiones en la comunidad negra, “no les gustó, pero a nosotros no nos importó, nosotros fuimos y las denunciamos, una denuncia anónima, y allá les llegaron, el escuadrón de búsqueda” me comentaba el líder, por lo cual salieron del río; el hecho es relevante para diversos comuneros de La Toma que recuerdan la situación. El episodio coincidió con la lucha contra la desviación del río, defenderlo se había convertido

en una consigna clara para la gran mayoría de los habitantes del corregimiento. Se venían incorporando dimensiones de la perspectiva ambiental así como el reconocimiento de dinámicas comunitarias/culturales desde un auto-reconocimiento étnico. En este marco, después de hablar con varios líderes sobre aquel momento considero que quienes intentaban dirigir la acción organizada de la comunidad consideraron, en un momento dado, que esa maquinaria atentaba contra el río y sus peces, que “competía” e impedía actividades que las personas realizaban en él para su sustento e integración; finalmente, reaccionaron contra el fenómeno. Dialogando sobre esta coyuntura con Tomás, el 5 de marzo de 2015, me confirma que, aunque mucha gente estaba clara contra la desviación del Ovejas, no toda esa gente tuvo en aquel momento la claridad frente a los impactos negativos de las “retros”, en realidad, fue un grupo mucho menor de personas. Las reflexiones sobre el proceso de concientización que se ha generado desde esa época frente a las “retros” las vamos redactando y leyendo con Tomás mientras dialogamos. Me cuenta que “antes, cuando llegaban las retros la gente pensaba que era lo mejor que les podía pasar, era lo máximo” y resalta que hoy en día esa realidad ha cambiado profundamente, la gran mayoría de habitantes del corregimiento ya no están de acuerdo con la llegada de las retroexcavadoras. De 1994 al 2015 ha cambiado mucho la consideración de los impactos por parte de los miembros del Consejo Comunitario, debido a esto, la cantidad de gente que se presentó a barequear en junio de 2014 fue muchísima menor que en ocasiones anteriores (Conversación con Tomás del 5 de marzo de 2015).

Al salir de Ovejas continuaron merodeando: “de acá [de Suárez] no se fueron, del 94 para allá, es que se hicieron en otro sitio (...) se hicieron en Suárez [cabecera], pa’ arriba, pa’l lado de Buenos Aires” me comentan un habitante de La Toma (Diario de Campo abril 2013). Según los documentos revisados, se instalaron en Machaqueo, en el barrio El Diamante, relleno donde depositaron el material –muy rico en oro- que extrajeron del lecho y subsuelo del Cauca al construir la represa. También lo hicieron en San Miguel<sup>70</sup>, uno de

---

<sup>70</sup> Milton Prado recuerda a propósito de este último caso: “cuando subieron esas máquinas en San Miguel sacaron mucho oro, eso me contaba un operador de ahí que sacaban era por arroba cada tres días” (Diario de Campo abril 2013)

los lugares recordados también por Meraldiño y por Albeiro Cortez<sup>71</sup>.

Bueno y, ¿cómo llegan las retro, quién las trae? Me pregunto constantemente al conversar el tema con la gente. Varios comuneros me van aclarando el asunto, entre esos Tomás “no pues las retros andan por ahí, por varias partes, por Santander, Asnazú, Buenos Aires, y oyen, llegan, cuadran con alguna persona de la comunidad o dueño de una tierra o de una mina y definen el porcentaje y la alquilada y ya, luego otros ven y siguen cuadrando y así, se va extendiendo y extendiendo por la orilla y otras partes” (Diario de campo abril 2013)<sup>72</sup>.

Conversando ese mismo 5 de marzo de 2015 con Tomás, le leo lo que he podido comprender del funcionamiento de este tipo de explotación. Me corrige datos confusos y complementa la descripción así: quien llega con la retro pone las condiciones. Sea maquinaria propia o alquilada -información que no se suministra a los agentes externos del entable-, quien llega con ésta es quien define al dueño del terreno un porcentaje (que, informa mi interlocutor, se negocia normalmente entre el 10 % y 12%, oscilando según las condiciones de acceso al terreno y la capacidad de negociación del propietario de la tierra). Esa persona llega con los “operarios” o “retreros” que manejan las retroexcavadoras. El “patrón de corte” o el mismo dueño del entable es quien lava lo extraído por éstas: “en ocasiones se consiguen trabajadores de la zona para realizar oficios varios, pa’ cargar almuerzos, pa’ chorriar (Sic), pa’ engrasar la máquina, entre otros” especifica Tomás (5 marzo 2015). A estas explotaciones a cielo abierto normalmente arriban gran cantidad de mineros independientes de la región, buscando lavar algo del material que remueve la retroexcavadora. Son mineros que llegan con su batea con la idea de aprovechar el trabajo de la máquina, y que en general no tiene vínculo ni con el dueño del entable ni con sus “operarios” o retreros.

En uno de los casos que me fue posible documentar parcialmente, es interesante constatar

---

<sup>71</sup> “¿y Cauca no está dragado y ha estado lleno de retros también? Cauca ya pasó por ahí. (...) Eso ya hará unos ocho, diez años. Las retros ya han estado por aquí. (...) Entonces, las retros ya estuvieron por aquí y llegaron hasta el río Inguitó. (...) También estuvo [en el río Ovejas]. Estuvieron hasta en Machaqueo las retros.” (Entrevista con Cortez 2013)

<sup>72</sup> A propósito de cómo entraron las retroexcavadoras a las orillas del río Inguitó Albeiro nos dice: “[Si] soy dueño de, de un territorio allá pues, yo necesito digamos también tener unos recursos, pues digo: no, en, en mi tierra tengo oro, invito una retro a esas. De esa manera es donde llega la retro allá. (...) Son acuerdos con el dueño de eso [tierra]. (...) [Por] un porcentaje” (Entrevista con Cortez 2013)



la participación evidente de la autoridad municipal. Con relación al otro caso documentado, hay personas que consideran que la empresa de energía EPSA S.A. que opera La Salvajina, tuvo una participación en esa explotación, ya que es dueña del terreno donde ocurrió la emergencia minera más grande recordada en la historia local. Esta opinión se puede encontrar en el documento que realizó un sindicalista de la CUT que ha venido acompañando el Cabildo (Escobar 2008).

Todos recuerdan esa tragedia que dejó 21 mineros/as sepultados/as, sucedida catorce años después de la expulsión de las retos del Ovejas, “Se fueron [las retos] de Suárez con tantas catástrofes que hubieron (...) el alcalde ya se vio obligado a frenar un poquito eso” dice Julián al respecto en una conversación sobre el tema, y Milton Prado precisa “es que él comía, supuestamente él [Alcalde] comía de ahí” (Diario de Campo abril 2013). La versión no está muy lejos de la realidad, el burgomaestre promovió e intentó darle un marco de legalidad junto con el Concejo Municipal de Suárez a la entrada de la empresa “Mineros Global” en el lote estatal “Machaqueo”<sup>73</sup> según se puede constatar en el Acuerdo 001 de 2002 en el que el Concejo le autorizaba para disponer la exploración y explotación minera de la parte no apta para construcción -5.31 Has-, de la propiedad pública<sup>74</sup>. La explotación inició, o ya estaba -en el documento disponible no se especifica esa información-, para ese mismo año (Ingeominas, 2007b:4). Para 2007 continuaba, contaba con un título de exploración a nombre de Mineros Global<sup>75</sup> y empezaba a generar un rechazo en el barrio aledaño El Diamante<sup>76</sup> según los datos encontrados en los documentos revisados.

---

<sup>73</sup> Lote “adquirido a” la EPSA S.A. en 2000 destinado originalmente a la construcción de vivienda de interés social para la población.

<sup>74</sup> El “tercero particular” debía cumplir las condiciones técnicas y de personal requeridas según lo determina el Acuerdo No. 001 de 2002, “asumir a su costa la responsabilidad por toda clase de riesgos que puedan acontecer y que afecten a las personas que intervienen en dicha labor: -Trabajadores que estén bajo sus responsabilidades; -Los barequeros” y además el Municipio invertiría su parte de las ganancias en un proyecto de vivienda ubicado en el resto del predio, como se especifica también en el Acuerdo. Desconozco si las condiciones fueron cumplidas. Concejo Municipal de Suárez. 2002. Acuerdo No. 001 de 2002 (Febrero 27) “Por el cual se da una autorización al señor Alcalde”. Suárez, Cauca.

<sup>75</sup> Mineros Global sí aparece en el Catastro Minero Nacional con el título, agregado al Registro Minero Nacional el 17 de julio de 2007. Se constatan “3 retroexcavadoras ubicadas en un tramo de 100 metros” propiedad de los titulares. Por la falta de licencia ambiental se ordena suspender. (Ingeominas 2007a)

<sup>76</sup> Oficio ODPM 149-07 del 5 de Julio, enviado por el Personero Municipal de Suárez al Alcalde, a propósito de la visita que realizó junto con CRC y funcionarios de la Administración, en la que se constató el “riesgo de la vida de las personas que están trabajando como ‘barequeros’” en los dos sitios -Machaqueo y CasaMáquinas- y los daños en la cancha de Fútbol y viviendas en Machaqueo. El mismo día, el Secretario de Gobierno y Desarrollo Social Municipal emite un Oficio Circular No. 007 convocando a funcionarios -incluida la CRC-, a líderes comunitarios, a la JAC del Barrio el Diamante y al representante de la explotación minera en machaqueo a una reunión el día siguiente. Se menciona que “en otra ocasión anterior se extrajo una cantidad significativa de oro, pero que trajo consigo tragedia representada en dos

Ya existían varias minas más de este tipo a lo largo del río Cauca, a raíz de la muerte de mineros en algunas de ellas<sup>77</sup> la institucionalidad ambiental y minera intervino en el municipio para “regular” su proliferación. Seguramente ante esta presión, el Alcalde toma algunas medidas principalmente frente a la mina “no avalada” por él y el Concejo Municipal, en el terreno de la EPSA S. A. a quinientos metros del muro de la represa, medidas que no tuvieron mucho éxito<sup>78</sup>. Tan solo unos meses después, el 13 de octubre, se presentó en el lugar el derrumbe que dejó los 21 fallecidos y las 24 personas heridas (Ingeominas 2007b: 7)<sup>79</sup>. El talud de tierra de la explotación del señor Segundo Perea se vino abajo ante los ojos de mineros independientes que se encontraban en el gran hoyo excavado por las “retros”<sup>80</sup>. Hubo gran despliegue mediático regional y nacional, y tuvo importantes consecuencias institucionales. El desastre visibilizaba una problemática que tomaba fuerza no solo en esta región. Como los documentos institucionales señalan, igual que en la mina de Machaqueo, en CasaMáquinas operaba una “empresa” llamada Agromineros S y L<sup>81</sup> que extraía oro contratando trabajadores y contaba con “seguridad” privada (Escobar 2008: ). Le pregunto a Tomás sobre la vigilancia privada en esa explotación y comenta el tema con Mario, que también participa de la conversación (5 de

---

personas que allí perecieron, fuera de otros lesionados y que además se ha renovado la explotación irregular de dicho yacimiento acarreado ciertas dificultades tanto para los moradores como los baharequeros (Sic) y los empresarios.” Lo que permite pensar que la explotación en este y otros puntos era intermitente. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social Municipal. 2007 Julio 5. “Oficio Circular No. 007. Ref: Invitación urgente reunión (Explotación Minera machaqueo)”. Suárez, Cauca.

<sup>77</sup> Parece que además de Machaqueo también ocurrieron tragedias en San Miguel según me ha comentado un comunero.

<sup>78</sup> En particular la explotación de CasaMáquinas que el Alcalde suspende temporalmente en la Resolución No. 2202-2-6 de junio 06 de 2007 por no presentar los papeles legales y en la que “se observa un sin número de personas dedicadas al barequeo en ese lugar el cual no ofrece la seguridad necesaria”. Sin embargo casi dos meses después el Mayor Mario Fernando Guerrero Fonseca comandante del segundo distrito de Santander de Quilichao respondió a un derecho de petición sobre las explotaciones mineras ilegales en Suárez: “En cuanto a la explotación Aurífera del sector, el señor alcalde es quien actualmente está otorgando los permisos correspondientes para su explotación, según lo manifestado al comandante de la policía de la estación Suárez, Intendente ANTONIO JOSE MUÑOZ VALENCIA, por parte del Secretario de Gobierno MILCIADES VERGARA BALANTA, quien estará dispuesto a escuchar cualquier anomalía al respecto.” En (Escobar, Diego 2007: 8) y Oficio 0820-COMAN-DIDOS del 24 de agosto de 2007.

<sup>79</sup> De los cuales 16 mujeres cabeza de hogar fallecidas, según el documento titulado “PRONUNCIAMIENTO Frente a la muerte de mineros afrodescendientes en el municipio de Suárez, Cauca”, del 16 de octubre.

<sup>80</sup> “Según información adicional suministrada por el coordinador de salvamento minero, Sergio Cadavid, la actividad adelantada en la zona era ilegal, y procedía de un desplazamiento de mineros tradicionales de la zona del contrato de concesión HIL-10581 hacia la zona de la solicitud IIL-10221, básicamente porque el primero había sido fiscalizado por el Grupo de Trabajo Regional de Ingeominas Cali (...)” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta I: 1). También en esta mina se registraban 3 retroexcavadoras (Ingeominas 2007b)

<sup>81</sup> “se encontró evidencia de que las operaciones en la zona estuvieran a cargo de AGROMINEROS S y L. (...) consultado nuestro sistema de información denominado Catastro Minero Colombiano –CMC, no se encontró ninguna sociedad que respondiera a este nombre y que contara con algún tipo de trámite minero para explotación de ORO en el departamento del cauca.” Oficio GTRC-1767-07 dirigido por la Coordinadora del Grupo de Trabajo Ingeominas-Cali al Alcalde Municipal de Suárez-Cauca el 17 de octubre de 2007. Citado en adelante: (Ingeominas. 2007c Octubre 17)

marzo 2015). Los dos recuerdan que sí había un “dispositivo de seguridad fuerte”, en esa mina permanecía una gente con “armas raras”, me confirman. Al parecer, en las dos explotaciones las empresas coordinaban bajo su mando tanto las retroexcavadoras como los trabajadores del entable.

El área en CasaMáquinas había sido solicitada en concesión –No. IIL-10221- 22 días antes de la emergencia por José Ary Ambuila, un minero tradicional que venía trabajando en el lugar antes de la llegada de las retroexcavadoras, según los oficios de 2004. No se puede afirmar que los “mineros en lucha por un futuro” que él representó en un momento dado, estuvieran articulados con Agromineros S y L, tampoco profundizar el carácter de ese posible vínculo<sup>82</sup>, al no encontrar información clara relativa a este aspecto en los documentos disponibles.

Sin embargo, puede ser significativo apuntar que, posterior a la tragedia, el 7 de noviembre de 2007, en el Ministerio de Minas es radicado un oficio enviado por el señor Ambuila en el que expresaba “nos han cerrado las Minas de Aluvión en cual se venía trabajando en las riveras (Sic) del Rio Cauca margen derecha aguas abajo, mediante la explotación de maquinaria Técnica (Retroexcavadora) de donde miles de personas venían desarrollando esta actividad como la única fuente de empleos directos”<sup>83</sup>. Abogaba entonces por este tipo de explotaciones a nombre de la “Asociación Protectora de los Recursos Naturales y de Medio Ambiente- ASOPROMA”. Por otro lado, la solicitud de concesión antes señalada, era referenciada por quienes seguían miniando después de la tragedia como argumento de

---

<sup>82</sup> Según dos documentos, en 2004 se desarrollaba explotación minera tradicional en ese terreno por parte de un grupo de mineros autodenominado “mineros en lucha por un futuro” desde hace más de 10 años, uno de sus voceros era Jose Ary Ambuila, al parecer el principal. Los documentos muestran que se les solicitó desalojar por ser un área restringida. Después de que concertaron con la EPSA, acordaron una indemnización a las 20 familias de los mineros, de la que desconozco su ejecución. Oficio de “Mineros en lucha por un futuro” dirigida al Subdirector de EPSA S.A el 23 de Febrero de 2005, y “ACTA REUNIÓN MINERO TÚNELES C.M” San Miguel, junio 29 de 2005, encontrados en los Archivos del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras. Desde la perspectiva de Escobar –CUT- se le da más peso a la suposición de una “alianza” entre la EPSA S. A. y Agromineros S y L en detrimento de los barequeros que habían sido al parecer, según él, expulsados del lugar por la misma EPSA S. A., años atrás. Los documentos examinados no nos permiten afirmar esta suposición ni saber si finalmente se retiró de forma efectiva los mineros como venía solicitando EPSA. No contamos con información que permita identificar una confrontación entre el grupo de mineros tradicionales y la empresa Agromineros S y L. Tampoco hayamos datos sobre si los mineros tradicionales trabajaban en el lugar como mineros independientes, contratados bajo las condiciones de la “empresa” o como asociados en el negocio con condiciones concertadas con ella.

<sup>83</sup> Dirección de Minas, MinMinas. 2007. Oficio con Rad: 2007051673 registrada el 16 de noviembre en la oficina de Ingeominas Cali a donde se dirigió una copia.

supuesta legalidad de la actividad minera, ante la visita de autoridades<sup>84</sup>.

A CasaMaquinas llegaron mineros de Asnazú e incluso de Buenos Aires, según recuerda Tomás (5 de marzo de 2015). También me aclara junto con Mario que dependiendo de la productividad de la mina es que llegan o se van los mineros independientes. Cuando una mina está dando grandes cantidades de oro, es cuando se generan aquellas multitudes inmensas de gente intentando extraer parte del tesoro. Para los dos casos que vengo referenciando, según los documentos revisados, la situación entre la gran cantidad de mineros/as independientes y los “dueños” de la explotación se regularizó con un acuerdo: dos días a la semana eran destinados al trabajo de los mineros independientes el resto a las labores de los miembros formales del entable<sup>85</sup>. Es frecuente que la misma “empresa” u otras personas cercanas al “dueño” del entable o los retreros, instalen una venta de oro para comprar in situ el metal producido, sin embargo, no es una obligación para los mineros independientes venderles inmediatamente, pero les resulta más práctico, según me informa Tomás (5 de marzo 2015).

Por otro lado se encuentra la explotación con dragas<sup>86</sup> que opera de forma diferente: muy pocos se benefician de este tipo de explotación. Esta realidad parece ser la base de un rechazo generalizado a su presencia en el río Ovejas, por parte de la comunidad tomeña. Este rechazo ha sido permanente, Simón nos cuenta a propósito de la larga relación con las dragas,

Claro que esa minería acá nosotros, ha tenido mucha resistencia. (...) Entonces lo que la

---

<sup>84</sup> En la explotación de San Miguel, vereda Portugal, en la que se identifica como responsable Segundo Perea, encontrándose 2 retroexcavadoras y 2 motobombas, no se aporta licencia ambiental ni título minero pero “dicen estar explotando en un título minero del señor José Ary Ambuila. Sin embargo esta información no fue aportada” Oficio Suspensión de exploraciones de oro de aluvión-municipio de Suárez, Cauca, 9 de noviembre de 2007, Santander de Quilichao, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Dirección Territorial Norte. Pág. 3.

<sup>85</sup> “Por información verbal de algunos de los presentes en el sector, se ha extraído una buena cantidad de mineral (oro), tanto por los señores de la empresa Mineros Global Ltda., como por los mineros (Gurreros) de subsistencia que han invadido el área laborada. De acuerdo a información verbal por parte de algunas personas, quienes se encontraban en el área de laboreo, los titulares de contrato HIL-10581, han llegado a un acuerdo con los mineros emergentes del área, para que trabajen en la mina dos (2) días a la semana.” (Ingeominas 2007a: 3) Y en el otro caso “Según lo manifestado por el Supervisor de la empresa, debido a la insistencia de la comunidad para que los dejaran trabajar, AGROMINEROS S y L llegó a un acuerdo con las personas extrañas a esta Asociación, para que laboraran ciertos días de la semana.” Martes y sábados de 8 am a 1 pm según letrado en la mina (Ingeominas. 2007c Octubre 17)

<sup>86</sup> Son unas máquinas de unos 3 metros, en este caso, que funcionan con uno o dos motores de 16 caballos de fuerza.

gente lo que dice es que esa minería es muy individual porque solamente con esa minería come el dueño de la draga. (...) a la gente no le gusta, eso ha habido disputas ¡jumm!, por más de 30 años, por no aceptar esa minería acá en el río (...) Porque ahí solamente trabaja el dueño de la draga, la draga hace todo. Entonces la gente dice que no, que esa minería no porque, que esa minería es muy egoísta (...) La gente entran las dragas, la gente las sacan, traen dragas, la gente las sacan.” A: “¿y quién las trae?” S: “son externos (...) ellos dicen que por el río, que como el río es nacional (...) Porque como siempre ha estado la amenaza ahí. (...) Ahora están ahí que se entran. Inclusive hay dragas pegadas [en la parte baja del río Ovejas] (...) están esperando que el río comience a mermar el cauce. (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

Al leerle estas reflexiones, Edwin complementa con algo que él, Tomás y Mario, que también escuchan y opinan, consideran de grandísima importancia porque tiene gran peso en ese rechazo: ellos consideran que se ha desarrollado una conciencia sobre los impactos ambientales negativos de las dragas en gran cantidad de personas de la comunidad de Yolombó y de otras veredas cercanas al río. Me explican algunos de esos daños: la grasa de los motores y la remoción de las playas contaminan y destruyen el hábitat de gran cantidad de animales, dañando especialmente los sitios donde crían sus huevos los peces; el humo contamina el aire; se destruyen los lugares donde los mayores van a “zambullir”. Edwin me aclara que de un entable con una draga “comen” hasta 6 personas, por lo que se pueden estar beneficiando hasta 6 familias.

Cuando leía las consideraciones que tiene Simón sobre las dragas en el río Ovejas, comparaba esas características que, según su experiencia y opinión, llevan a la gente del corregimiento a rechazar ese tipo de explotación, frente a las características que puede tener la minería con retroexcavadoras. Al hacer esta comparación, identificaba que una característica que en parte complejiza, y de alguna forma estabiliza la explotación con retroexcavadoras al menos en esta zona, puede ser que su dinámica termina, de hecho, involucrando muchas personas. Como señalamos anteriormente, en muchos de esos casos los/as mineros/as locales independientes que no son conscientes de los daños ambientales - o que sí lo son, pero la necesidad económica les impulsa a participar de este tipo de minas-, arriban a trabajar con o sin el consentimiento del dueño del entable.

Me pregunto hasta qué punto esta situación es deseada o “propiciada” por los dueños de esas explotaciones. Le pregunto sobre el tema a Edwin (5 de marzo de 2015) y me doy cuenta de que coincidimos en una opinión, que expreso en los términos en los que el líder me lo explica: actualmente, la llegada de esos mineros independientes es cada vez más utilizada por los responsables del entable como estrategia, pues esas personas en un momento dado pueden respaldar esa minería ilegal ante la llegada de la fuerza pública o la misma comunidad local que se opone. En el último periodo hemos sido testigos del amplio mar innavegable de gente que extrae y lava mineral en numerosas minas similares en el norte del Cauca, la más reciente tragedia: el derrumbe de una inmensa mina a cielo abierto en la vereda San Antonio del municipio de Santander de Quilichao, el 30 de abril de 2014. Parece que la presencia de este tipo de minas ha terminado en zonas como estas, siendo una fuente de ingresos de la que gran cantidad de personas participa, con las diversas consecuencias sociales y ambientales que conlleva.

Considero que esta realidad contribuye notablemente a que el rechazo de las comunidades y poblaciones negras a la explotación con retroexcavadoras no sea temprano y tajante, sino profundamente difícil. Cuando le leo esta última frase (5 de marzo 2015), Edwin expresa su acuerdo. Continúo explicándole que, desde mi punto de vista, el rechazo parece en ocasiones “ambiguo incluso entre quienes impulsan esta posición en un momento dado”, pero frente a esta otra frase Edwin, y Mario que se suma en ese momento a la conversación, tienen una opinión diferente a la mía. Me explican que la gente de Yolombó, Gelima, y muchas personas del corregimiento en general, no están de acuerdo con la llegada de las retroexcavadoras y se oponen a ellas con toda la claridad. Sin embargo, ante la necesidad económica y la imposibilidad de expulsarlas, muchas de esas personas deciden, en casos determinados, ir a extraer parte del oro que consideran *su propiedad* por estar en su territorio heredado, antes que dejar que las retros se lleven todo. Al mismo tiempo, en el momento en que se decide ir colectivamente a enfrentarles muchas de esas mismas personas también se unen para intentar sacarlas. Es decir, desde su punto de vista, la eventual participación en una de estas minas no implica que haya una posición política equívoca o confusa, la gran mayoría están claros en su oposición.

También resaltan que es creciente el número de personas que se abstienen de trabajar en

esas minas, como lo había señalado horas antes Tomás, quien para ese momento ya no participaba de la conversación. Por mi parte, otra consideración que he escuchado en algunas conversaciones, y percibo personalmente que opera como un punto a “favor” de este tipo de explotación, es que las retos pueden optimizar el trabajo minero, que es una labor muy desgastante físicamente. Me parece importante explorar estos detalles pues evidencian la complejidad que implica impulsar un proceso político crítico hacia ese tipo de minería en el territorio estudiado, minas que afectan profundamente las actividades productivas tradicionales de estas comunidades. Proceso que un grupo de líderes y lideresas han decidido construir poco a poco tanto en La Toma como desde el Cabildo.

A partir del diálogo con Simón por un lado, con Edwin, Mario y Tomás por el otro, y de los documentos revisados, es para mí evidente que la relación entre “retos” o dragas y comunidad tiene cada una sus particularidades. Sin embargo, tanto un tipo explotación como el otro afectan la posibilidad de desarrollar una de las minerías ancestrales comunitarias más interesantes que aún se practica en el Ovejas: el desvío artesanal y colectivo de partes del río y la explotación de “vetas” en las playas y el lecho por el sistema de tongas<sup>87</sup>, así como en general la minería de aluvión.

Tomás y Edwin (5 marzo 2015) resaltan que las dos formas de minería tienen grandes impactos ambientales. Yo les comento que, hablando con algunas personas, he concluido que también hay distintos niveles en el impacto que pueden causar. Tomás me repite “no, el impacto es el mismo, es negativo”, le explico que he escuchado que algunas personas distinguen entre unos impactos más graves que otros<sup>88</sup>, por ejemplo, continuo “no es lo mismo que trabajen en la playa que en el lecho del río”. Ahora Tomás exclama “¡Ah, Claro!” y complementa “así como no es lo mismo antes, que trabajaban sin mercurio, y hoy, que lo utilizan”.

---

<sup>87</sup> Según una de tantas conversaciones que tuve con tomeños al respecto: “sí ya no se pudo [trabajar en Tonga] porque, porque pues la máquina trabajó a mucha, mucha profundidad. (...) pueden haber [vetas] pero están muy hondas, que usted en su esfuerzo a mano muy complicado. (...) Trabajaron a 4- 5 metros de profundidad.” Interviene un anciano en la conversación: “no a mano ya no saca nada, ya la maquinaria usted sabe que, en tiempo antiguo duraba porque trabajaban era artesanalmente, ya hoy en día, no ve que una reto en un día [saca], lo que uno con una motobombita demoraba era mese (Sic) pa’ poder llegar a la peña, una reto de esas llega y en dos tres horas llegó allá y ya”

<sup>88</sup> Dice un comunero “Pero mira que eso tampoco, eso no fue culpa ni de ellos [los dueños de las retos], eso fue culpa de los mismos dueños de los terrenos que los dejaron y los vendieron” Julián le responde: “no creás, no creás, lo que pasa es lo siguiente, usted tiene un terreno ahí, y usted digamos no tiene la forma y llegan y le ofrecen cualquier cantidad de plata la necesidad hace que uno se (...)”

Adicional, del más reciente suceso con las dragas, parece concluirse que hay relación entre unos y otros actores. Según me cuentan Edwin, Tomás y Mario, normalmente cuando llegan las dragas, algunos líderes van hasta donde están ubicadas para solicitar que se vayan. El año pasado, 2014, un grupo de tomeños les abordó y les explicó que para trabajar en el río debían hablar con la comunidad en una reunión, dado que es un área protegida. En el encuentro, la comunidad de Yolombó les solicitó que detuvieran la explotación, pues donde estaban dragando es una zona que los mayores usan para “zambullir”. Los dueños de las dragas no estuvieron de acuerdo porque, según ellos, las retroexcavadoras iban a llegar pronto y a ellas sí se les iba a dejar trabajar. Edwin recuerda lo que dijeron los dragueros: “ustedes nos sacan a nosotros pero ahora llegan las retos y a ellos no los sacan”. La idea que Edwin tiene es que los dragueros querían “separar” unas partes del río anticipando la llegada de las retos. Solo 15 días después de la reunión llegó una amenaza a los líderes más visibles y a continuación, unos días después, llegaron las retos. En medio de esta información que entre todos me transmiten, Tomás manifiesta que “ellos eran cómplices de la llegada de las retos”. Sabían que llegarían, pero además, ellos eran quienes habían identificado en la reunión a los líderes que serían amenazados antes de hacer presencia la maquinaria pesada. De acuerdo a esto, se puede afirmar que algunos líderes consideran que entre estos dos tipos de agentes circula información sobre las poblaciones a las que llegan a trabajar.

Una de las razones que se encuentra tanto en un comunicado de las comunidades negras y en un documento de un sindicalista de la CUT, para explicar la masiva participación de la población en las minas con retroexcavadoras durante el periodo en el que sucedió el gran derrumbe, 2007, era la dificultad que tenían los mineros de filón para adquirir los explosivos necesarios en el desarrollo de la minería que practican. Parece que esa participación de mineros independientes se acentuaba debido a que muchos mineros llevaban inactivos un buen tiempo, por lo que la Cooperativa de Mineros de Suárez y gran cantidad de gente abogaba por mantener dichas explotaciones<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> El 14 de agosto de 2007 se realiza una reunión entre “autoridades civiles, militares concejales como también algunos representantes del sector minero y el propietario de la mina ubicada en la cabecera municipal sector el Peñon (Sic) (...). El



Como he dicho en apartes anteriores, pienso que la caracterización que los miembros de las organizaciones y actores sociales en general pueden hacer de los actores mineros e institucionales y sus vínculos, está muy ligada a su experiencia y conocimiento de las diversas aristas que tiene el tema particular, tanto como la posición política. Por ejemplo, la lectura que el Coordinador del Departamento de Lucha contra las Empresas Transnacionales de la CUT hace del asunto, considero que se erige sobre una visión algo monolítica de los actores mineros e institucionales estatales. Interpretando su documento, el capital privado transnacional no solo impregna estos actores e instituciones, si no que les dirige de forma unilateral bajo sus objetivos de despojo y apropiación de los territorios. Desde esta perspectiva, las empresas nacionales son una “fachada”, algo así como un tentáculo del pulpo capitalista que opera bajo sus órdenes directas. La consecuencia en términos analíticos es simple: el interés por caracterizar las “empresas nacionales” mineras operando ilegalmente, sus miembros y sus vínculos con las comunidades queda al margen,

“(…) con fuertes sumas de dinero provenientes del capital privado foráneo representado en UNION FENOSA, SMURFIT CARTÓN COLOMBIA, KEDAHDA S. A y sus empresas nacionales de fachada o testaferreros, doblegan la voluntad de funcionarios públicos (...) Por lo que es fácilmente deducible, que ante la imposibilidad de penetrar directamente esté utilizando empresas nacionales de fachada como puede ser el caso de Agromineros S y L, y otras procedentes del Chocó, Antioquia, Costa Atlántica y Nariño que están haciendo presencia en el territorio y con personal fuertemente armados (Sic) para brindarles su ‘seguridad y autonomía empresarial’. (...) dentro del fenómeno del testaferrato<sup>90</sup>, motivado por la negación consciente de la comunidad para que ingrese la multinacional Kedahda S.

---

gremio minero representado por la Cooperativa de Mineros de Suárez Ltda. manifiesta (...) “los mineros de esta región del Departamento del Cauca especialmente Suárez y Buenos Aires pedimos que no se cierre esta mina ya que de ella subsistimos, (...) los mineros de filón a falta de este material estamos barequeando para no dejar morir de hambre a nuestras familias. Pedimos pues nos ayuden ante el gobierno nacional para poder tener nuevamente el explosivo y trabajar en nuestras minas de filón y evitar estar aquí.” La Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao ya venía solicitando informe sobre minas legales e ilegales en el Municipio de Suárez, por lo que finalmente “se concluyó que era mejor cerrar la mina ilegal del señor Segundo Perea (...) Se decide ir personalmente tanto las autoridades civiles, militares y de policía hasta el sitio en donde se desarrolla la explotación ilegal, para persuadir a las personas que están ejerciendo esa labor (...)” Acta de reunión con los usuarios de la explotación minera ilegal, autoridades civiles, militares y concejales, 14 de agosto de 2007, Suárez-Cauca- Anexo 10.

<sup>90</sup> “Modelo de Testaferrato y entrega de la soberanía nacional, convalidados por el Gobierno Nacional (Ejecutivo y Legislativo) (...)” (Escobar 2007: 7)

A.” (Escobar 2008: 4, 7)<sup>91</sup>.

Un sentido diferente tiene la reflexión realizada por el sector afrodescendiente –local y nacional- que se pronuncia en un documento:

“Los intentos para despojar a las comunidades negras de sus territorios y los recursos que les sirven para sobrevivir han sido muchos en esta zona. A mediados de los 90 esta zona soportó una invasión de mineros procedentes de otras zonas del país que fue enfrentada por las organizaciones logrando que las retroexcavadoras y mineros salieran de la zona. Una situación similar se está presentando en los últimos dos años: a la zona han llegado mineros procedentes de Antioquia fundamentalmente, con capital y tecnologías que las comunidades no poseen que haciendo uso de medio (Sic) bastante cuestionables están presionando a los propietarios ancestrales para que dejen los territorio, explotan las minas sin ningún control ambiental y contaminan las fuentes de agua con mercurio y cianuro. Sobre esta misma zona, la Empresa Sociedad Kedahda pretende, a pesar de la oposición de las comunidades y líderes, adelantar actividades de exploración y explotación minera. Por estas causas muchos de los líderes comunitarios han sido amenazados de muerte. (...) La mina donde ocurrieron los hechos es de propiedad de Segundo Perea, minero procedente de Urabá que pese a la oposición de los pobladores inició la explotación ilegal (...) ese día se encontraban trabajando más de mil personas afrocolombianas (...)”<sup>92</sup>

El comunicado enfatiza también en que la minería es una herencia de su pasado como comunidades esclavizadas, actualmente “casi único medio de subsistencia (...) de las minas obtienen recursos para sobrevivir, no lo hacen por placer”, y que en “medio de tanta ausencia gubernamental” parece la única opción.

“Al abolirse legalmente la esclavitud, fueron reparados los dueños de los esclavizados. La reparación histórica para los afrocolombianos, y con ella para los pobladores negros del municipio de Suárez y Buenos Aires, es un asunto todavía pendiente, como también lo es la reparación por los impactos del conflicto armado interno a que han sido sometidos. Por ello

---

<sup>91</sup> Este documento, aunque no representa de forma directa la posición y percepción de los líderes indígenas, es muy importante, pues fue un documento de trabajo del Cabildo en esa coyuntura. El sindicalista que lo escribió ha apoyado especialmente en la parte jurídica y en lineamientos políticos al Cabildo, incluyendo en algunos casos la elaboración conjunta de documentos que son firmados por la CUT y el Cabildo. En este caso solo firma Escobar.

<sup>92</sup> PRONUNCIAMIENTO Frente a la muerte de mineros afrocolombianos en el municipio de Suárez, Cauca, 16 de octubre de 2007, firman el Consejo Comunitario de La Toma- las Juntas de Acción Comunal de Yolombó, Portugal, Honduras y Asnazú, el Consejo Comunitario de Cerro Teta, el Consejo Comunitario de Pilamo, el Comité Municipal de Derechos Humanos de Buenos Aires, La Asociación Municipal de Mujeres –ASOM, la Asociación Juvenil Comunitaria, la Corporación Ancestros, el Palenke Regional Alto Cauca, Palenque Regional Congal, Proceso de Comunidades Negras en Colombia –PCN-.

las afirmaciones institucionales en el sentido que las minas serán cerradas, no representa una verdadera salida a la situación de los pobladores de la zona, y puede constituir en medio de la tragedia, un preludio para que los mineros afrocolombianos sean expropiados.”<sup>93</sup>

En efecto, la administración municipal decide suspender<sup>94</sup> todas “las actividades de minería sin título en la jurisdicción del Municipio de Suárez (Cauca)”, una medida que ajustaba clavijas indiscriminadamente hacia todos los mineros y tipos de minería presentes en el municipio, pero parecía no afectar las explotaciones con retroexcavadoras que se seguían registrando activas en los informes de visita realizada por la CRC el 31 de octubre de ese año<sup>95</sup>. Tanto el comunicado del PCN como el documento de trabajo de la CUT subrayan el papel de la Salvajina en el empobrecimiento de la región<sup>96</sup> y el “desconocimiento intencionado de zona especial o de reserva minera para comunidades indígenas y negras” en la región (Escobar 2008:). En esta especial coyuntura local los indígenas responden también desde su red organizativa-étnica y se movilizan en Suárez ese 18 de octubre,

---

<sup>93</sup> Para las organizaciones afrodescendientes esta decisión es una respuesta “evadiendo la responsabilidad de generar medidas que ataquen de fondo el problema de miseria en la que vive esta población y sin pensar que dicha medida aumentara la crisis humanitaria de la zona” se oponen a ella, y exigen: cumplimiento de acuerdos del acta de 1986; se cumpla la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Salvajina “con participación de los pobladores afrocolombianos, indígenas y campesinos”; “se declaren las zonas de Buenos Aires y Suárez como Zonas Especiales Mineras Afrocolombianas e Indígenas; se de paso a la reparación histórica por la esclavización y los impactos del conflicto armado interno (...)”.

<sup>94</sup> Decreto No. 1685-1-22 de 2007 de Octubre 22, “Por medio del cual se solicita la suspensión inmediata de actividades de minería sin título en jurisdicción de este municipio”. La Alcaldía recibía una avalancha de oficios dirigidos desde organismos de control estatal de todo tipo, exigiendo la suspensión de minas ilegales a cielo abierto que siguieron operando sin más después de la tragedia, incluyendo CasaMáquinas. Entre otros Oficio 19203600007-472 del Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Popayán; Oficio Código 1700 SOP-573 del secretario de Gobierno y participación del Cauca; Oficio 102-RB-1289 del 22 de octubre, sobre una visita de la Corporación Autónoma Regional del Cauca Dirección Territorial Norte en la que se constata la “continuidad de actividades mineras que se desarrollan con seis (6) retroexcavadoras, propiedad de Mineros Global (...)” en Machaqueo.

<sup>95</sup> En noviembre 08 de ese mismo año, Santiago Rengifo, Presidente de Mineros Global Ltda. solicitaba Amparo Administrativo y Protección Policial al Alcalde de Suárez para que impidiera la entrada de los “mineros informales” quienes según él “invaden los terrenos” de la mina Machaqueo, para así “poder desarrollar labores de exploración y adecuación minera (...) por lo tanto quiero concertar con usted una forma de permitirles un laboreo, pero dentro de un marco de máxima seguridad, y que en ningún caso se permitirá el acceso directo de los llamados barequeros al corte de la mina o lugares donde se esté desarrollando actividades (...)”. Oficio ref.: Contrato de concesión HIL-10581. Mineros Global Ltda., dirigido al Alcalde Javier Ordoñez. Y el 9 de noviembre la CRC dirige el informe de su visita al Alcalde de Suárez por un lado, y a la “Comunidad de mineros y comunidad en general del municipio de Suárez” por otro. En él se identifica la persistencia de varias explotaciones con retroexcavadoras señalando cuatro puntos en las márgenes del río Cauca: en la Finca Puerta amarilla, Vereda Portugal-corregimiento de Asnazú siendo responsable de la explotación Diego Restrepo; en San Miguel, vereda Portugal –Municipio de Suárez siendo responsable Segundo Perea; en machaqueo, municipio de Suárez responsable Diego Rengifo y en El Gallinazo o la antigua Base no se explicita el responsable. Oficio Suspensión de exploraciones de oro de aluvión-municipio de Suárez, Cauca, 9 de noviembre de 2007, Santander de Quilichao, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Dirección Territorial Norte.

<sup>96</sup> “(...) muchos de los mejores trabajadores mineros de la zona fueron sepultados por las aguas y las fincas inundadas” dice el comunicado, mientras que el documento de trabajo de Escobar describe todos los impactos ambientales sobre los ecosistemas del ríos, la disminución de peces y desaparición de especies, el cambio en el microclima y la afectación de la agricultura por ese cambio, la pérdida de las tierras productivas.

“tuvo fortaleza y grandeza por la participación activa y decidida de compañeros consejeros indígenas del CRIC, de los cabildos de Honduras, Tijeras y Santander de Quilichao, y sobre todo, de los maestros locales que convocaron a los estudiantes y éstos a sus padres de familia, hecho que le dio gran dimensión a la marcha, porque la verdad sea dicha, los mineros que eran los directos afectados y que debían estar arengando, dirigiendo la acción colectiva y convocando a la unidad y organización para luchar, de manera sorpresiva se abstuvieron de participar masivamente. Lo anterior obedece justamente al maniqueo de los politiqueros quienes (Sic) al verse en serias dificultades por ser parte activa y con suma responsabilidad en el siniestro, alarmaron a los mineros manifestándoles falsamente que con este tipo de actuaciones lo que se pretendía era ‘el cierre de las minas’ y con ello más miseria y desolación para la población Suareña.” (Escobar 2008: 4)

En su escrito, Escobar enmarca esta movilización en un horizonte mayor de la acción colectiva del Cabildo. Orientada en principio a reivindicar sus derechos negados por el Gobierno y la EPSA, pero en una construcción organizativa mucho más amplia “con la participación de la Campaña Prohibido Olvidar, la Central Unitaria de Trabajadores y la Fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos (...)”; y luego conecta a la señalada movilización local, en una sola línea de acción política integral, otras acciones organizadas anteriores, de alcance regional y nacional: “la marcha a Cali el 5 de Mayo de 2006, reclamando de la EPSA S.A el cumplimiento del acta de 1986 (...) así como la movilización étnica hacia la capital de la república dentro del marco de la marcha indígena”.

Tengamos en cuenta que para ese año 2007, la presencia de multinacionales mineras ya era un hecho en el municipio y las organizaciones étnicas iniciaban una tenaz pugna por difundir otras versiones y visiones del proyecto minero y social que proponía la Kedahda S.A en los espacios institucionales y comunitarios, asunto que desarrollaré en el siguiente subcapítulo. Una convocatoria nos muestra cómo la Alcaldía citaba en julio a los Presidentes de Juntas de Acción Comunal para una reunión en el Concejo Municipal. A ésta se había invitado al Dr. Jorge Alberto Uribe, Alcalde del Municipio de Quinchía (Risaralda) “teniendo en cuenta que en su municipio se está desarrollando un proceso de exploración por parte de la sociedad Kedhada (Sic), la cual también pretende realizar la misma tarea en este territorio (...) Le solicitamos su inmediata presencia, toda vez que la

comunidad por usted representada, en hechos posteriores deberán emitir conceptos al respecto.”<sup>97</sup>

En los años posteriores, la explotación minera con retroexcavadoras no solo ha permanecido intermitentemente en el municipio, sino que ha sido avalada nuevamente por la Alcaldía y el Concejo Municipal, que reeditan el Acuerdo No. 001 de 2002 tiempo después. En el Acuerdo No. 019 sancionado el 29 de agosto de 2008, se copia y pega literalmente lo redactado 6 años atrás. En esta ocasión, la autorización para explotar se extiende a otro predio más, el “lote contiguo al área del Campamento de San Miguel”, la única modificación. Por la misma época, se presentaba de nuevo una difícil situación para la minería tradicional de filón debido a la falta de explosivos. Mientras que la Alcaldía pretendía “legalizar” una vez más la explotación irregular con retroexcavadoras, una carta que encontré en el expediente del ARE evidencia que los mineros cooperados se dirigían al Ministerio de Minas para solicitar unos documentos pertinentes para su trabajo: “La Certificación se necesita con urgencia, puesto que hay muchos mineros, haciendo explotación en *sitios de alto riesgo* (...) sin este documento no se nos facilita la entrega de este material explosivo, para continuar con las labores mineras en el municipio de Suárez Cauca” (el subrayado es nuestro)<sup>98</sup>

En el 2010, las retroexcavadoras entran de nuevo al río Ovejas, y vuelven a comienzos del 2011. Para mayo y julio de ese último año, el Consejo Comunitario realiza ‘Misión de Verificación’, primero con la Defensoría del Pueblo y luego con “delegados internacionales”, comprobando en las dos fechas la presencia de esta maquinaria. A propósito de la situación con las “retros”, Gustavo Zapata, presidente del Consejo en ese entonces, informa en una queja enviada al Procurador General de la Nación a finales de 2012: “[La explotación] se encontraba ubicada frente a la comunidad de Yolombó (...) La entrada de estas personas, que la comunidad afirma trabajan en convivencia con las bandas

---

<sup>97</sup> Convocatoria fechada el 23 de julio por parte del Alcalde, el Secretario de Gobierno Municipal y el Promotor de Acción Comunal a todos los Presidentes de JAC, para una reunión el 26 de julio de 2007.

<sup>98</sup> Oficio con Radicado 2008028009 enviado el 20 de junio de 2008 por Representante de Cooperativa de Mineros de Suárez a la Directora de Minas del Ministerio. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 74).

criminales que operan en el sector, ‘Los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’, impidió que la comunidad realizara sus labores de minería artesanal que realizan a la luz de la Sentencia antes referida (...) Más preocupante aún es el hecho de que estas personas ajenas a la región, están ofreciendo \$5 millones a las personas que informen quién está denunciando la extracción, lo que pone en un riesgo inminente a los líderes de la comunidad, en especial a los miembros del consejo comunitario y las organizaciones que acompañan los procesos de organización social, como es el caso del proceso de comunidades negras- PCN.”<sup>99</sup>

Como se lee en la denuncia, la relación con grupos armados ilegales, la coacción a través de la amenaza y el terror, es una herramienta utilizada abiertamente por estos actores mineros para impedir la acción política de los líderes contra su presencia<sup>100</sup>. No obstante, la situación de persecución se venía presentando desde algunos años atrás, dirigida a intimidar a los líderes afrodescendientes e indígenas que se oponían a los **títulos mineros legales** en sus territorios. Esto incluye agentes legales como la AngloGold Ashanti, Cosigo Resources, los Ruíz y Héctor Jesús Sarria, casos que detallaremos en acápites siguientes. La persecución y amenazas por parte de grupos armados ilegales pareciera, desde mi punto de vista, un común denominador que ha beneficiado a todos estos titulares foráneos legales e ilegales. Sobre este aspecto el lector podrá encontrar los soportes y una mayor profundización en el acápite 3.4 y el 3.5.

Por el momento, podemos también decir que la forma en que los dueños de las “retros” intentan permear las redes comunitarias e institucionales puede diferenciarse en diversos aspectos de la estrategia de penetración adelantada por la AGA y por los otros titulares legales. Aunque en un momento dado, como hemos reseñado en 2002 y 2008, la autoridad política local avalaba abiertamente algunas explotaciones con retroexcavadoras, la denuncia

---

<sup>99</sup> Oficio 466194 del 14 de diciembre de 2012, Solicitud y queja elevada por Gustavo Zapata presidente del Consejo Comunitario de La Toma al Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez. En este documento con base a la Sentencia T-1045A se exige la expulsión de las retros “la sentencia declara: ‘El carácter de ilegal a todo tipo de actividad minera extractiva por fuera de las prácticas mineras tradicionales o ancestrales de Mazamorreo y Barequeo que las comunidades afrodescendientes practican en su cotidianidad y su forma de subsistencia’ (...) además de un aprovechamiento irracional e ilegal del agua que entra en conflicto con las actividades agropecuarias y pesquera de la comunidad” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta III: 37, 41).

<sup>100</sup> “El viernes 15 de julio a las antes de las 9 de la noche Marcel Quintero, actual Representante Legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma recibió una llamada telefónica en la que le dijeron textualmente ‘...ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben.’” Ibid., p. 37.

de los líderes, las tragedias y la evidencia en la ilegalidad que revisten, ha impedido el apoyo público de los Alcaldes en los últimos años. A medida que se afianza públicamente su carácter ilegal y una consciencia de rechazo en la población, pareciera haber una mayor vinculación con dispositivos de seguridad y grupos armados, según nos indica la información que hemos recopilado. La utilización de la coacción hacia los denunciantes por parte de estos actores se ha ido acentuando en ese contexto, especialmente desde su nueva entrada en 2010.

Actualmente, la situación con las retroexcavadoras está fuertemente tensionada. En 2014 entraron y se ubicaron en varias partes del río Ovejas, específicamente en San Juan y frente a Yolombó, al margen oriental que pertenece al municipio de Buenos Aires y en el Hato en la orilla oriental del embalse La Salvajina. Según las conversaciones sostenidas, las retroexcavadoras son las mismas que se encontraban en la zona de la tragedia sucedida el 30 de abril de 2014, en la vereda San Antonio del municipio de Santander de Quilichao. Como cada vez que han ingresado, no todas las personas del corregimiento han apoyado *públicamente* su expulsión, la *denuncia abierta* ha sido elevada casi exclusivamente por habitantes de la vereda Yolombó. En las conversaciones con varios líderes y habitantes del corregimiento he comprobado que no están de acuerdo con la presencia de las “retros”. Tomás y Edwin me explicaban que hoy es evidente que la conciencia política de la gran mayoría de los habitantes del corregimiento es mucho más clara y rechazan este tipo de explotaciones, pero, a comparación de años pasados, en esta ocasión la coacción ha sido mayor. Ésta pareciera ser la razón de peso por la que las acciones de hecho y las denuncias públicas son respaldadas tan solo por algunos. Incluso miembros principales y comprometidos con el Consejo Comunitario se han apartado del tema. En mis últimas visitas se percibe un fuerte temor generalizado por esa intimidación violenta. Según estas últimas observaciones, se han presentado señalamientos de los “retreros” a lideresas específicas, los principales líderes de Yolombó tienen restricciones en los horarios para movilizarse por el territorio y varios de ellos han decidido instalar cercos de mallas (rejas) para encerrar sus predios aumentando la seguridad. Gustavo Zapata ha debido alternar su lugar de residencia entre Cali y Suárez, y Camila Restrepo tuvo que desplazarse

completamente a Cali y recientemente, entre finales de marzo y principios de abril, ha salido del país.

Edwin me cuenta (5 de marzo de 2015) que a finales de Octubre del 2014 aproximadamente 50 personas de Yolombó, junto con un inspector de policía y el Secretario de Gobierno de Suárez, se dirigieron a dos explotaciones ubicadas al nivel de la vereda para solicitarles se retiraran del río. La situación se complicó cuando el Secretario intentó fotografiar la maquinaria escondida en el monte y uno de los trabajadores de la mina amenazó con asesinarlo en ese mismo lugar, situación que impidieron todos/as los/as comuneros/as que reaccionaron en el momento. Esta información sirve para ilustrar el nivel de violencia alcanzado, que actualmente parece no respetar interlocutor alguno.

Días después, las mujeres de Yolombó decidieron emprender una caminata desde La Toma hasta Bogotá, donde realizaron un plantón en la Corte Constitucional solicitándole que ordene a las autoridades competentes detener la explotación minera ilegal, se revise toda la situación minera incluyendo los títulos suspendidos y la violación de derechos colectivos e individuales en el territorio del Consejo Comunitario. Las lideresas insisten en la competencia de la Administración Municipal para resolver este caso de minería ilegal, dado que debe ordenar su suspensión según el Código Minero, y señalan la urgencia de que se aplique la Sentencia T-1045A que estipula también la suspensión de cualquier actividad minera que no corresponda a la tradicional o ancestral practicada por la comunidad negra.

En ese marco y a pesar de que las mujeres durante su paso por la capital enfatizaron en que la quema de maquinaria no es una solución a la problemática (Reunión de socialización en Yolombó 16 marzo 2015), después de culminada la marcha y el plantón en Bogotá, el 29 de diciembre, el CTI hizo presencia en el río Ovejas y quemó una maquinaria, hecho que agudizó la tensión y las amenazas contra los denunciantes. Como se suponía, la acción no ha tenido un efecto real en la suspensión de este tipo de minas, que al 13 de marzo de 2015, siguen presentes y ampliándose a lo largo del río Ovejas.

Después de este acercamiento a algunas situaciones, relaciones y percepciones que tienen ciertos actores sociales en torno a este tipo de explotación, es importante indagar en el tema



de la minería tradicional informal y en la constitución del Área de Reserva Especial. El ARE venía siendo solicitada por muchos de esos mineros en su esfuerzo por no ser aniquilados legalmente y perseguidos por la política de criminalización de la minería “ilegal/informal”. Además, como una solución a la dificultad de acceso al suministro de explosivos en el caso de los mineros de filón. En fin, para facilitar la formalización. La respuesta de la institucionalidad no había sido positiva, hasta que el desastre de CasaMáquinas desatoró la iniciativa, acelerando el proceso burocrático.

### **3.3. Minerías tradicionales y Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires: Artilugio en disputa.**

En un municipio en el que la explotación minera informal oscila entre el primer y segundo renglón de las actividades económicas de la población, las relaciones de la “institucionalidad pública local” -véase la Alcaldía, el Concejo, la Personería Municipal- con los actores mineros y la actividad misma, ha estado especialmente trazada por un manejo “informal” del asunto. La minería no solo es el sustento de miles de personas sino, además, la oportunidad de captar recursos para respaldar las arcas de la administración municipal dentro de un marco legal o ilegal. Ésta se ha mostrado interesada en la actividad minera, pero, considero, no desde una “política pública” fuerte y clara, sino muchas veces a través de medidas que le conciben como una fuente rápida de recursos<sup>101</sup>. Con base en los documentos revisados, pienso que los Alcaldes han tenido un manejo en el que ha predominado el desconocimiento de los procedimientos legales e institucionales del sector minero. Esto ha sido poco a poco modificado<sup>102</sup> debido a los hechos trágicos, políticos y

---

<sup>101</sup> Ilustra la ya reseñada explotación con retroexcavadoras en Machaqueo que la Alcaldía impulsó en su momento dándose la facultad de “aprobar” una actividad minera desde un acto administrativo -Decreto Municipal-, pasándose por encima la competencia de la Autoridad Minera Nacional.

<sup>102</sup> La carta de consulta enviada por el Luis Fernando Colorado en la que expone sus preocupaciones ilustra esta intención de ajustarse a marcos legales, solicita aclaración sobre “(...) si los Alcaldes tenemos la facultad legal para celebrar contratos de concesión para explotación minera”, si “Los mineros tradicionales cuando se decreta (Sic) el Área de Reserva Especial (...) podían continuar adelantando sus labores mineras” y “si los mineros tradicionales adelantan labores de explotación minera en un Área decretada como Reserva especial por su despacho. El municipio como propietario del predio donde se adelantan las labores mineras y afectado por estas, pueden exigir el pago la servidumbre minera” El Alcalde explica al final que la Procuraduría Provincial le adelanta un proceso disciplinario “Dice el denunciante que debí celebrar un Contrato de Concesión con los mineros facultad que considero es de la Autoridad Minera Delegada. Y en aras de defender los intereses y el patrimonio del Municipio acorde con los mineros una servidumbre Minera de uso según el Código de Minas.” Oficio con Radicado 2011038285 del 19 de julio de 2011, fechado a 15 de julio, dirigido por el

jurídicos sucedidos por la explotación minera, y que ha puesto en vilo algunos de ellos ante los organismos de control estatal.

Conversando sobre este tema con Simón (5 marzo 2015), me expresa que, desde su punto de vista, los anteriores alcaldes, Javier y Colorado, eran prácticamente trabajadores de la AGA. En el caso de Devia -2012/2015-, me dice el líder, su trabajo ha sido muy poco ligado a lo minero, a su despacho han llegado, en este último periodo, varias empresas mineras –“Oro verde, la Billinton, Mineros del Sur, AngloBrasil”- pero él, Devia, “poco espacio les abrió”. Por otro lado, y como lo testimonian los documentos y las reuniones en las que he participado, la administración actual ha intentado promover una “política” en torno al proceso de formalización de los mineros tradicionales informales y al perfeccionamiento de la “concesión especial” que resultará del proceso de Área de Reserva Especial –Suárez/Buenos Aires-.<sup>103</sup>

Sin embargo, y a pesar de la aparente desvinculación señalada por Simón, entre Alcaldía y nuevas “compañías mineras”, he observado que en muchos líderes de las organizaciones étnicas locales surge, no de forma desprevénida, una pregunta sobre las intenciones y la dirección de esa “política”. Por ejemplo, ante la intención del Alcalde de “intervenir” en el rumbo de las minas ubicadas en la zona indígena-mestiza occidental –principalmente en Matecaña- a principios del 2013, hay varias reacciones, entre las cuales, posiciones claramente contrarias,

Meraldiño: (...) el Alcalde está adelantando, va a hacer unos hechos que prácticamente más allá va, le va a costar cosas a él, ¿sí?, porque él no, como funcionario público no lo puede hacer en este momento, porque no ha estado metido en el territorio (inaudible), yo le dije a la comunidad [de Matecaña] eso es claro, le dije, ustedes tienen clara esa vuelta, no se dejen ¿sí?, -Albeiro: pero lo que está tratando de hacer que cada quien tenga su título no es malo, me imagino yo ¿no? -Meraldiño: (...) tenemos que diseñar nuestra propia política minera, y eso se reglamenta de acuerdo a los títulos

---

Alcalde Fernando Colorado Aponzá al Director de Minas del Ministerio de Minas y Energía. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 95)

<sup>103</sup> Expresaba el Alcalde Devia en abril de 2013 “(...) como Alcalde Municipal, estamos muy empeñados en impulsar el desarrollo de proyectos mineros”, en una carta en la que solicitaba a la ANM sobre el ARE “Ordenar el cumplimiento del objeto de la resolución, consistente en adelantar estudios geológico-mineros y determinar las clases de proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. (...) –Ordenar el otorgamiento de la concesión minera a las comunidades que están ejerciendo las explotaciones mineras tradicionales dentro de los polígonos que conforman el área de reserva minera especial. (...) la administración municipal está muy interesada en impulsar esta actividad, para definir posibles convenios de apoyo a proyectos de desarrollo minero dentro del área de reserva minera (...)” Oficio No. 20139050012282 del 3 de abril de 2013, enviado por el Alcalde de Suárez a la Agencia Nacional de Minería. (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM, Carpeta I: 69)

colectivos que se puedan dar, ¿sí? allí uno reglamenta, pero antes, yo cómo iba a reglamentar la minería en título colectivo cuando tenemos allá en el centro empresas multinacionales o amigos de la misma casa haciendo minería a gran escala allá, porque ellos quieren cumplir sus metas, que el Código Minero tiene que cumplir, no es que porque, porque es pequeño minero le van a olvidarse eso no es así, (...) lo que está haciendo el Alcalde en estos momentos es ilegal, él como autoridad del municipio y más como representante de todo el pueblo debió haber consultado mínimamente al Cabildo”<sup>104</sup>

Como se lee en el aparte anterior, el direccionamiento de los mineros informales es un punto problematizado por aquellos –en este caso Meraldiño- para quienes la Alcaldía representa intereses de otros actores mineros contrarios. Según esta posición, las decisiones de la institucionalidad local son una amenaza para la autonomía de la autoridad étnica sobre su territorio y la población que habita en él –en este caso mineros de Matecaña-. Interpreto que se trata, entonces, de disputarse la autoridad con la Municipalidad e intentar orientar el relacionamiento de esas personas con ésta última. En esa época, abril de 2013, el Alcalde cita a la Junta D. del Cabildo a una reunión para aclarar sus propuestas, y anuncia la entrega de unos documentos que no se proporcionaron finalmente<sup>105</sup>. Sobre las propuestas tampoco quedan mayores claridades, más allá de su intención de crear una nueva Cooperativa de Mineros, según me informaron quienes asistieron a dicho encuentro<sup>106</sup>.

Por su lado, en el desarrollo de su trabajo como autoridad étnica, el Cabildo realizó una Asamblea en Matecaña a finales del año 2012, en la que se pretendía abordar una serie de

---

<sup>104</sup> Reunión con Meraldiño, Nelson y Albeiro Cortez el 14 de abril de 2013 en la AIC, Suárez –cabecera-, Cauca. El Alcalde no ha sido claro sobre en qué consiste su “apoyo”. Albeiro Cortez parece no ver intenciones subyacentes en esa iniciativa, y nos cuenta lo que ha escuchado a propósito del tema: “(...) Albeiro: (...) que tiene unos acuerdos, quién sabe, que un proyecto que van a traer de la minería, (...) Lo que yo así por encimita me dijeron es que son proyectos que él lanza al Ministerio de Minas (...) está tratando de que a través de los que tienen los territorios va a llegar mucha plata a la Alcaldía, quién se va a beneficiar: ellos, la gente (...) me imagino por ahí por ese lado [de las regalías], eh es más, hay, aquí hay territorios que tienen mina y no tienen título, entonces él está buscando (...) a través de la, del Ministerio de Minas, para qué para que todo mundo tenga sus títulos.”

<sup>105</sup> Explicaba Meraldiño: “¿por qué necesitamos esa documentación? Porque necesitamos llevarla al abogado, necesitamos llevarla al jurídico (...) y el 22 en la comunidad, directamente con la comunidad “señor vea, esta es la propuesta del Cabildo Cerro Tijeras, esto son, y necesitamos esta plata, este territorio por lo tanto usted no lo toca” así claro” Reunión con Meraldiño, Nelson y Albeiro Cortez el 14 de abril de 2013 en la AIC, Suárez –cabecera-, Cauca.

<sup>106</sup> Cuando indago sobre las razones del Alcalde para crear una nueva Cooperativa no hay muchas explicaciones al respecto, el objetivo concreto tampoco es claro en el contexto específico del municipio. Cortez, por ejemplo, como minero ve con buenos ojos que se creen cooperativas para beneficiar mineros, considera que pueden promover programas socioeconómicos para sus miembros, mucho más cuando la que ya existe no tiene muchos beneficios. Por otro lado, me llama la atención dado que una nueva cooperativa podría entrar a competir por miembros y por otro tipo de beneficios – ARE- con la ya existente, lo que me cuestiona el tipo de relacionamiento del Alcalde con quienes manejan hace años la Cooperativa de Mineros de Suárez.

situaciones relacionadas con la minería. Según la información que han podido captar varios líderes de la organización en esa ocasión, muchos mineros actualmente en la zona no son de la comunidad, algunos son paisas que han comprado predios a personas de la vereda, y su relación con los otros habitantes vecinos se está tornando conflictiva por varios motivos<sup>107</sup>. La intensión de la asamblea era precisamente concretar la intervención del Cabildo en estos asuntos para evaluar los casos, hablando con las personas “afectadas” y los “dueños de la minería”, así como considerando acciones legales, entre otras posibles herramientas para resolver las disputas (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014). No obstante, el tratamiento del tema en la zona y por parte de los líderes del Cabildo está cargado de temor, dado que uno de los principales “dueños de la minería” es presuntamente un antiguo integrante del Bloque Calima de las AUC, que participó en el trayecto hacia el Naya y la masacre realizada en 2001<sup>108</sup>. Su familia ha sido propietaria y él mismo de predios y minas, y actualmente el señor incide en el manejo de ese patrimonio familiar. Al parecer ha introducido una serie de modificaciones en las formas en que se relacionaban los dueños de bocamina y los dueños de predios, sin embargo es bastante dispersa y vaga la información acerca de estos cambios debido al temor que rodea todo el asunto<sup>109</sup>. A partir de los diálogos sostenidos con Meraldiño y Enrique, he concluido que el contexto de la zona minera en Matecaña ha obstaculizado el ejercicio político-organizativo del Cabildo tanto en

---

<sup>107</sup> “quienes representaban las autoridades como que no...no quisieron, hubo temor, no sé qué hubo pero no se cogió el tema (...) porque había mucho conflicto internadamente con la, entre la comunidad y los, y los mineros de ese, de ese sector. (...) había inclusive, había problemas de, de linderos, entonces por ejemplo su finca está aquí y la finca mía limita con la suya, entonces ya por debajo del subsuelo yo no me podía pasar pa' (Sic) la otra, ni el de acá je podía pajar pa' (Sic) allá. Y ya habían, ya habían socavones que habían pasado (...) ya se dice que son poquitos. Lo que manifestaba un comunero que son posiblemente unas seis personas que hacen minería, que son de la comunidad.” (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

<sup>108</sup> “(...) hay un señor que se llama Noraldo Chandillo (...) Él es dueño de, de una finca donde prácticamente está como más aterrizada el tema de la minería en esa región (...) Cuando pasó el recorrido de los paramilitares por acá, con los militares, por aquí pasaron, él fue integrante de la fuerza pública (...) se involucró o ya hacía parte de la, del tema o el Bloque Calima de los parami...de las Autodefensas ¿Sí? Y lo que se manifiesta que tuvo que ver con muchos asesinatos de acá de la región, de los cuales él dio esa información (...) no sé quién lo denunció, pero el hecho es que él cae a la cárcel. (...) Cinco o seis años y hoy nuevamente se encuentra en el territorio ¿Sí? Y él es el dueño de la, yo diría de la gran mine...de la, de los grandes frentes de trabajo que hay en Matecaña. (...) no sabemos que esté pensando: legalizar su título o traer más gente, o traer su propia gente –como se dice-, no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana con esa situación, eso es complejo en esta comunidad.” (Miembro de la Junta Directiva del Cabildo).

<sup>109</sup> “Entró a hacer todo el acomodo de sus minas, (...) y entra ahora con la capacidad económica y que entra a manejar un poco toda la dinámica frente al monopolio de la mina. (...) Allá hay mineros, pero de alguna manera se tiene que someter a algunas posiciones, de hecho el temor que se genera la región (...) sabemos que en cualquier momento se puede aliar con cualquier empresa. Y sabemos que una persona que ya está metido en su cuento y pues, como la marca que tiene haber pertenecido a un grupo que generó tanto terror en la región, pues se vuelva a reactivar.” (Miembro de la Junta Directiva del Cabildo)

la orientación a las familias cabildantes<sup>110</sup> vinculadas a las situaciones referenciadas, como en la proyección de los planes sobre la minería como actividad tradicional en ese territorio, es decir, en la formulación de *su* política minera propia.

En este panorama, la Alcaldía Municipal intenta promover unos “proyectos sobre minería” de los que no se socializan los mínimos con la organización indígena, divulgando su interés por la formalización de los mineros tradicionales. Aunque poco o nada pueda incidir, al menos si se trata del proceso de formalización convencional en el marco normativo actual<sup>111</sup>.

Por el otro lado, la intervención de la Alcaldía en el tema de la formalización minera no es considerada como una intención gratuita en pro de los mineros tradicionales tampoco por parte de la gran mayoría de líderes y mineros del Consejo Comunitario. En esta experiencia hay una mayor cercanía con los mecanismos institucionales –nuevas oficinas por ejemplo– puestos en marcha para asumir el asunto minero desde la institucionalidad local,

“a través de digamos de la Alcaldía Municipal, de una oficina que han creado que le han llamado oficina de asuntos étnicos [mineros, luego corrige], han venido, o han tratado de hacer unos proceso de, de, digamos legalización de la minería de hecho acá en la comunidad diciéndoles que les van es a titular encima de un título que ya existe que es el título de este señor Sarria (...) ha causado parte de malestar por la desinformación o por la información que se les trata como de orientar (...)” intervención de Marcel Quintero en segunda reunión de mineros vereda La Toma 15 de abril 2014.

---

<sup>110</sup> Recordemos que según la Resolución 00155 de 2010 el Cabildo contaba con 99 personas solo en la vereda Matecaña.

<sup>111</sup> Según la Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia (PNFMC 2014) se implementarán una serie de programas en los que diferentes actores serán tomados en cuenta para el fortalecimiento de la coordinación de la institucionalidad minera. Aunque de acuerdo a este documento las Alcaldías tendrían un papel en esos procesos, el discurso del Alcalde Devia no es claro sobre su real posibilidad de injerencia. El Gobierno Nacional se muestra como se estuviera reacomodando el sector. Por ejemplo, según la PNFMC se considera dar participación a los entes territoriales (alcaldías, distritos) en procesos de otorgamiento de títulos mineros: “Según lo autorizado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, la clasificación también abriría caminos para delegar el otorgamiento de títulos mineros a determinados departamentos y alcaldías capitales, que, a juicio del Gobierno Nacional, tengan la capacidad de gestión apropiada; estas delegaciones caso a caso serían para plazos que permitan examinar de qué manera han sido exitosas y, de ser así, prorrogarlas con los ajustes del caso.” (PNOM 2014: 19). Sin embargo, esto es una proyección bastante vaga e imprecisa, dado que ese mismo año el Presidente emite el Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014, en el que la participación de los entes territoriales se limita a una “solicitud” que deben soportar con estudios técnicos (costosos) financiados localmente, y sólo durante los siguientes 3 meses posteriores a la vigencia de la norma. Adicional, la decisión final es tomada por MinMinas, centralizando de nuevo las determinaciones frente a las áreas que el Municipio o Distrito pretende proteger de la actividad minera. De esta forma se vuelven a limitar las posibilidades reales de incidencia desde lo local en los procesos de titulación y protección de áreas.

La Alcaldía actual contrató en esa oficina un ingeniero que ha sido cuestionado por líderes del proceso étnico por haber beneficiado a la AngloGold Ashanti cuando fue funcionario de la CRC. Durante el relacionamiento que he tenido con habitantes de La Toma, en varias conversaciones escuché el malestar de algunos mineros que advertían sobre la presencia de ese ingeniero, un señor Antimo Tandioy, que pretendía asesorarlos. También en la reunión de mineros del 8 de abril se hace la advertencia con el objetivo de que no aceptaran su apoyo<sup>112</sup>. Simón me confirma: Antimo fue contratado por la Alcaldía para realizar unos planos de las áreas libres y para avanzar en la formalización de minería de hecho (5 de marzo 2015). En varios documentos se corrobora que Tandioy era funcionario de la CRC de donde, según Simón, fue expulsado por problemas de corrupción. Su actuación resultó significativa porque gracias al Concepto Técnico No. 150-03820 del 21 de abril de 2008 que él y otra funcionaria elaboraron sobre el “Estudio de Impacto Ambiental presentado por el interesado”, es decir, Raúl Ruíz, la CRC emite la Resolución 0356 “Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental” al título EKE-151 de ese personaje, fuertemente combatido como veremos en el acápite 3.5. En su Concepto, entre otras cosas, se afirma: “Comunidades indígenas y/o negras: Las comunidades que habitan en el área y zona de influencia del proyecto son campesinas” (Expediente Título EKE-151 Pdf 8: 45). Lo cual es parte de la memoria de diversos líderes.

En este sentido, considero que la autoridad política local resulta ser un elemento activo en esa disputa por el recurso minero, en función de participar en la renta minera, integrando a su estructura elementos pertenecientes o vinculados a otros actores mineros, considerados como opuestos a los intereses de los mineros de La Toma.

Desde mi lectura, la autoridad municipal aprovecha la dificultad que tienen los mineros para cumplir los requisitos que “comprueben” la antigüedad y continuidad de un trabajo minero básicos para el proceso de formalización individual ordinario. Es complicado para

---

<sup>112</sup> “Mire yo ayer hablaba con un muchacho que está también preocupado por legalizar su trabajo, y está buscando un ingeniero (...) y la Administración le ofreció a Antimo, como yo ya había escuchado al compadre Álvaro hablar de ese señor acá, yo le dije pilas, no se vaya a dejar asesorar de ese tipo (...) digo que el Estado no lo va a hacer así por así, pero si se hacen las reclamaciones y si se toca que ir a las vías de hecho pues hay que salirle a eso porque de lo contrario el Estado no nos va a poner cuidado” Intervención del profesor Omar en la primera reunión de mineros en la vereda de La Toma 8 de abril de 2014.

ellos contar con las “pruebas” y “respaldos” técnicos o financieros a las que se les da un peso principal -por ejemplo, recibos de venta de oro-, debido a la intermitencia propia de su forma de trabajo o por el carácter informal en el que se desarrolla su dinámica. También aprovecha la dificultad que tienen para adecuarse a la dinámica institucional minera y al lenguaje que maneja, hablando de la posibilidad de legalizar la actividad sin contar con alguna competencia en el tema.

Los programas de legalización de la minería tradicional/informal en Colombia, que se remontan como política específica a principios de los años 90's, poco impacto han tenido en las actividades mineras del municipio de Suárez. Simón me explicaba que el programa de legalización adelantado en el 94 fue un poco diferente, gracias a que el estado respaldaba mucho más con el trámite de los requisitos. Según él, algunos mineros locales formalizaron sus trabajos en ese marco<sup>113</sup> (5 marzo 2015). Sin embargo, coincido con Simón en que la legalización no fue una necesidad antes del periodo estudiado, pues parecía suficiente, al menos para los mineros de filón, la cooperativización –anterior a la política de formalización- y la asistencia técnica esporádica por parte de la autoridad minera en ese marco. Considero que la política de criminalización y el aumento de restricciones para la “minería informal no ilegal”, así como el aumento de concesiones/solicitudes de contrato de concesión vigentes en el municipio ha generado una renovada necesidad de formalizar. Para no ser criminalizado y para “competir” por el derecho legal a acceder al oro.

Vemos entonces cómo del último programa de Formalización de la Minería Tradicional ordenado por la Ley 1385 de 2010 -que ha tenido varias fechas perentorias y varios decretos reglamentarios- resultaron 19 solicitudes de legalización que hoy están en curso en el área del municipio de Suárez. De esas, 12 son para explotaciones de oro, y se ubican en cada una de las cuatro tradicionales zonas mineras de oro que he identificado en el acápite “Zonas mineras en lo local”. En el caso de Matecaña, por ejemplo, hay dos solicitudes de legalización de minería tradicional, una junto a la otra: la OE7-15002 de 86,57 Has a nombre de María Felisa Yandy Campo y la OE7-14461 de 58,83 Has a nombre de Débora

---

<sup>113</sup> Según Simón (5 marzo 2015), los títulos pequeños de personas nativas como el de Miguel A. Carabalí minero cooperado y los de Diefer Marin, son producto de la legalización realizada en los 90's.

Huila Cruces y Héctor Adelio Zambrano<sup>114</sup>. Éstas no se traslapan con otras expectativas formales sobre el oro -hasta el momento-, pues en esa área no hay actualmente solicitudes de concesión ni títulos vigentes. El lector puede observar en el Anexo 7 el mapa que incluye las solicitudes de concesión y las solicitudes de legalización.

Sin embargo, esta realidad es más bien extraordinaria en el municipio, pues la gran mayoría de solicitudes de formalización de minería tradicional para oro se superponen a títulos mineros de actores a los que nos iremos acercando a lo largo de esta descripción. Por el momento, es importante resaltar que esto responde, entre otras cosas, a la falta de interés y capacidad institucional del sector minero estatal para separar las áreas de minería tradicional de las áreas concesionables. El sistema de concesionamiento minero –primero en solicitar contrato, primero en derecho- que ha predominado hasta finales de 2011, ha priorizado los solicitantes por encima de la supuesta restricción legal existente que impide entregar títulos en áreas explotadas tradicionalmente. Es recurrente, por el contrario, la situación inversa, y pareciera que con mucho más ahínco son entregadas aquellas zonas de yacimientos auríferos comprobados por la explotación tradicional.

La entrega indiscriminada de concesiones mineras ha sido reconocida recientemente por el gobierno de Santos Calderón como un problema<sup>115</sup> en la “estructura de la industria minera” en Colombia que debe ser resuelto, en vías de optimizar su organización y desempeño. El proceso de reestructuración de la institucionalidad minera representa este giro en la proyección política, que puede ser leída de varias formas. Considero que actualmente el gobierno de turno pretende modificar algunos efectos “negativos” de ese camino

---

<sup>114</sup> Los titulares de la solicitud OE7-14461 aparecen en el “Listado de población indígena para el programa ‘MAS FAMILIAS EN ACCION’” que se adjunta en la web del municipio de Suárez, por lo que sabemos que son personas que se auto-reconocen como indígenas, y probablemente pertenecen formalmente al Cabildo. También surge la incógnita sobre la relación de los titulares de estas dos solicitudes de formalización, con el señor Chandillo, lo que permitiría aclarar si la solicitud le beneficia o compete con él por el derecho de acceso al oro (Alcaldía Municipal de Suárez. Enero 2013).

<sup>115</sup> Son tres grandes problemas, el primero: “(i) los mecanismos existentes en la actualidad en el marco de la ley, así como los requisitos y criterios para la adjudicación de títulos mineros no son suficientemente rigurosos ni permiten que el Estado, como propietario del recurso, decida con quién quiere asociarse para su aprovechamiento (...) Para dar solución al problema (i), se propone orientar la entrega de títulos hacia la oferta, a través de subastas. Para que esto ocurra debe existir un sistema de información con las escalas adecuadas sobre las restricciones y condicionantes ambientales, problemáticas sociales y la estructura geológica de todo el territorio nacional. En tanto no es posible frenar la actividad minera mientras se hace el levantamiento de información básica, se propone incentivar la llegada de firmas de reconocida capacidad, pues estas empresas son las que cumplen más fácilmente las exigencias de ley.” (PNOM 2014: 30, 31)



emprendido a tientas por el Estado desde hace más de dos décadas, no para cambiar sustancialmente su rumbo, sino en función de llegar a un destino similar al trazado desde un inicio. Sin embargo, lo que me interesa señalar ahora –y que muchos ya han hecho– es la prevalencia de una singular desarticulación entre la institucionalidad minera y todos los otros sectores estatales en los últimos años, especialmente desde que inició la desestructuración de aquella a principios de los 90’s. Esa ambigüedad no es exclusiva de la autoridad política local. La institucionalidad estatal minera nacional opera también en medio de numerosas discontinuidades en las decisiones y políticas, “descoordinaciones” entre dependencias internas, e incoherencias que se traslucen al “exterior” y eventualmente pueden condensar en contradicciones “internas”<sup>116</sup>.

Este carácter de la institucionalidad minera pública –inherente de alguna forma a toda organización social, pero en este caso acentuada en el periodo reciente– es especialmente evidente en lo local durante el proceso de constitución del Área de Reserva Especial<sup>117</sup> ocurrido desde finales de 2007. Antes de esa fecha algunos mineros del municipio venían solicitando la constitución de un “área de reserva para comunidades negras”, desde el año 95 o 96, según me cuenta Simón a finales de enero en una breve entrevista: “varias veces oficiamos al Ministerio y la respuesta que dio el Ministerio era que no se podía acá decretar un área de reserva para comunidad negra porque acá no había titulación colectiva”. Se buscaba un reconocimiento legal del derecho a explotar ese recurso y proteger el corregimiento (Entrevista con Simón Rodríguez 27 enero 2015)<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup>Cuando reconoce los retos del sector, los primeros dos se relacionan con esa realidad: “(i) *Política pública*: no existe una visión compartida de mediano y de largo plazo entre el sector minero y otros sectores relacionados con el uso del suelo; (ii) *Institucionales*: existen agendas contradictorias en el sector público, debilidad del Estado y del imperio de la Ley en muchas áreas de producción minera, y complejidad y captura de la consulta y del relacionamiento con comunidades;” (PNOM 2014: 9) De ahí que sea necesario explicitar enfáticamente como principio ordenador del Plan Nacional de Ordenamiento Minero lo que desde hace mucho debería ser un principio en la planeación estatal, la “*Consistencia*: el sector público debe tener una única agenda (una política minera, ambiental y social) con respecto a los proyectos mineros. Este Plan debe ser coherente con el Plan Nacional de Desarrollo Minero, PNDM, el documento CONPES sobre minería (en proceso de formulación) y las políticas lideradas por el MME.” (PNOM 2014: 5)

<sup>117</sup> Las Áreas de Reserva Especial es una figura jurídica e institucional estipulada en el Código Minero de 2001 que permite definir polígonos con el objeto de “adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país” (artículo 31 del Código de Minas), en zonas con condiciones económicas y sociales especiales de explotación minera tradicional y de la mano de la comunidad minera asentada en cada una de estas.

<sup>118</sup> En ese contexto previo se evidencian ya decisiones políticas orientadas a abarcar el territorio con figuras jurídicas que protegieran su práctica minera, en este caso, a través de alianzas con los indígenas de Buenos Aires. Algunos líderes afrodescendientes de La Toma habían estrechado su relación política con ese sector étnico en el marco de la lucha contra la desviación del río Ovejas, dice Simón: “habíamos hecho un arreglo con los indígenas como en el 97, para que los indígenas capturaran parte de la toma, claro, la zona de reserva [indígena] (...) entonces la zona indígena de delicias,

En el caso específico de la minería de filón, facilitaría la autorización permanente de la compra de explosivos que estaba siendo negada por la autoridad minera. La figura permite un tratamiento especial pues la formalización de las explotaciones ubicadas dentro del ARE depende de un proceso progresivo de adecuación y formulación técnica con la asistencia de esa autoridad<sup>119</sup>, y en esta medida muy diferente al proceso de formalización individual estipulada por la política minera.

La polémica suscitada por la muerte de los 21 mineros en CasaMáquina<sup>120</sup> se sumaba a las exigencias locales, por lo que finalmente el Ministerio de Minas acelera su creación<sup>121</sup>. Se genera en este contexto la primera declaratoria del ARE desde el Ministerio de Minas el 13 de noviembre de ese año con la Resolución 424. Los criterios que fundamentaron la decisión sobre los tamaños de los 3 polígonos definidos y su distribución geográfica en los municipios de Suárez y Buenos Aires no aparecen en ninguno de los documentos institucionales relativos previos ni posteriores<sup>122</sup>. Pero deja de ser un desatino para convertirse en un procedimiento negligente cuando comprobamos que según la versión de la propia autoridad minera<sup>123</sup>, no fueron incluidas en aquella primera delimitación de polígonos, áreas como la zona de explotación minera tradicional Turbina y Tamboral. Esto implicaba dejar por fuera del ARE una gran parte de los mineros tradicionales de filón, así como la gran mayoría de mineros de la Cooperativa de Mineros de Suárez. Simón me

---

delicias canoa, ¡claro! Para proteger, entonces nosotros como sí sabíamos eso entonces qué dijimos, bueno de aquí para allá tienen los indios” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

<sup>119</sup>“O sea, es reservar, se lo dan a la comunidad, pero si la comunidad no da pie con bola, ellos también lo tienen planteado, entonces se lo puede quitar... y elimina la zona, o sea que la zona de reserva no es para toda la vida (...) es un área, es cómo un título.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

<sup>120</sup> Precedida por la muerte de 31 mineros en la explosión de la mina San Roque en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, el 4 de febrero de 2007 (El Tiempo 2007 Febrero).

<sup>121</sup> Desde la primera página del Expediente Jurídico de este proceso institucional, una carta del 25 de octubre de 2007, se dice: “Debido a la situación de emergencia ocurrida el 13 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía nos ha solicitado comenzar de oficio el procedimiento para declarar un Área de Reserva Especial en la zona afectada (...)” Oficio con Radicado 2007048086 25-10-2007, Bogotá. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 1).

<sup>122</sup> Después de una búsqueda exhaustiva, al menos en los documentos que tengo en mi poder y que según la ANM son la totalidad de archivos del Expediente Jurídico del ARE, no se encuentra el “Informe Técnico del 25 de octubre de 2007” frecuentemente mencionado y citado en los oficios sobre la Resolución 424 y en ésta misma justificándola. En la propuesta de cambio de coordenadas de los mineros (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 15) aparecen varios apartes interesantes de este “informe”.

<sup>123</sup> Oficio con Radicado 2008030485 08-07-2008, Bogotá. “Una vez revisado el sistema gráfico del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS- le informamos que las Veredas La Turbina y El Tamboral jurisdicción del municipio de Suárez, departamento del Cauca, no se encuentran dentro del polígono delimitado mediante Resolución No. 424 de Noviembre de 2007, como área de reserva especial en Suárez-Cauca. Sin embargo, dichos puntos geográficos están ubicados dentro de las zonas que actualmente se encuentran en estudio por el Ministerio de Minas y Energía para ser delimitados también como reserva minera especial.” (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 80).

cuenta algo que ya yo había conversado con Gustavo, el área declarada en un inicio abarcaba la zona del río Cauca de la cabecera municipal hacia el norte: “entonces cuando nosotros vemos la captura del área vemos que toda esa zona, toda esa zona era para donde ya había trabajado Asnazú Gold Mine, entonces nosotros dijimos que (Sic) que nos están dando, o sea nos están dando una zona que está explotada” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

Lo anterior incentivó la redelimitación de los polígonos que fue propuesta por los mineros de Suárez. Simón señala que el debate de Control Político citado para el 21 de noviembre en la Comisión V de la Cámara de Representantes, a propósito de la problemática minera y la tragedia, sirvió como espacio de reclamación para la definición de nuevos polígonos<sup>124</sup> (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015). Tan solo unos días después, el 26 de noviembre, se realiza una reunión en la que participaron los miembros de la Cooperativa de Mineros de Suárez, el MinMinas e Ingeominas, donde los actores locales se comprometen a remitir una propuesta de polígonos, que consistió en 2 zonas en el municipio de Suárez y una zona en el de Buenos Aires<sup>125</sup>. Ésta consideraba una amplia zona que Ingeominas, en un documento interno, calculaba en 12.523,8975 Has sin recortes y 9.078,4811 Has<sup>126</sup> recortando los títulos vigentes. La Directora de Minas que había ordenado estudiar esa nueva área propuesta<sup>127</sup>, posteriormente la objeta,

“en reunión sostenida el día 1 de febrero del presente año [2008] con los Alcaldes de

---

<sup>124</sup> Durante el debate se conforma una “comisión interinstitucional” para abordar el caso. Oficio SQ-3.5-278-LEG.07-08 del 21 de noviembre de 2007, Bogotá. Carta de la Presidenta de la Comisión V de la Cámara de Representantes. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 11, 12). Simón se refiere al tema en estos términos “nosotros fuimos a Bogotá después de ese, de esa cachetada le llamamos nosotros, que nos había dado el, el Ministro Martínez [La Resolución 424] (...) allá se dio el gran debate, entonces listo, modificación del área (...)” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

<sup>125</sup> El documento en el que se solicita la modificación de la Resolución 424 es firmada por los Alcaldes salientes y electos de Suárez y Buenos Aires así como por los representantes legales de la Cooperativa de Mineros de Suárez, la Cooperativa de Molineros de Suárez y la Cooperativa de Mineros de Buenos Aires- COOMULTIMINEROS en diciembre de 2007. Oficio DIR- 0797 del 3 de diciembre de 2007, dirigido al Ministerio de Minas y a Ingeominas, Bogotá. Anexo: Propuesta Modificación Resolución No. 424 del 13 de noviembre de 2007 (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 13, 14-19)

<sup>126</sup> El primer dato distribuido así: Suárez zona occidente del embalse: 3725, 17875 has zona oriente del embalse: 3583,09375 has Buenos Aires: 5215,62500 has. La zona con más recortes es la de Buenos Aires. El Cálculo lo hace el Coordinador de Registro y Catastro Minero Nacional para la Directora de Minas con base en los polígonos propuestos por los Alcaldes y Cooperativas en la carta de solicitud de modificación de la Resolución 424. Información encontrada en Oficio GCRMN-073 con Radicado 2008006878 de febrero 14 de 2008, Bogotá. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 30)

<sup>127</sup> Oficio con Radicado 2007058325 21-12-2007 de la Directora de Minas del MinMinas al Director de Servicio Minero de Ingeominas. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 22).

Buenos Aires y de Suárez y funcionarios de la Gobernación del Cauca, se determinó que el área solicitada en ampliación superaba las 30.000 hectáreas y que por lo tanto se requería realizar una comisión en compañía de funcionarios del Instituto, del Ministerio de Minas y de la Comunidad, con el objeto de definir al menos tres Zonas sensibles que permitiera disminuir, por efectos de recursos y contraprestaciones, el área solicitada en ampliación.”<sup>128</sup>

Los documentos muestran la incongruencia entre la cifra manejada internamente por las oficinas estatales de minería y la presentada por estas mismas a los actores locales. A partir de la decisión de conformar una comisión para la definición de las “Zonas sensibles”, la autoridad minera elabora el primer Informe (Ingeominas, 07 Marzo 2008) sobre las zonas mineras: Miravalle, Pueblo Nuevo, la Turbina/Tamboral, el corregimiento de La Toma en Suárez y el Higuerrillo/La Vetica en Buenos Aires, después de una visita realizada entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 2008<sup>129</sup>.

La definición de la ubicación y el tamaño de las áreas, implicaba la inclusión o exclusión de bocaminas –el alcance de la población objeto-. Y dado que al declarar un ARE se descartan las expectativas de otros solicitantes sobre esas áreas, también afectaba los intereses de otros actores mineros, titulares de solicitudes de concesión vigentes o con intención de realizarlas. De ahí la profunda sensibilidad política del procedimiento, en donde se expresan y se juegan fuertes intereses sobre el recurso minero: “la misión de nosotros era quitarle tierra a la AngloGold y especialmente nosotros necesitábamos favorecer parte de La Toma, sí porque nosotros pedimos 50.000 hectáreas, que eran las 50.000 hectáreas que había solicitado la AngloGold Ashanti, entre Suárez y Buenos Aires. Bueno nosotros de 50.000 nos dieron 2.150” explica Simón cuando se refiere a la solicitud firmada por los Alcaldes y las Cooperativas que él ayudó a elaborar junto con Sergio Zuluaga (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015). Sin embargo, cuando finalmente se está a punto de declarar por segunda vez el ARE, se hace evidente una irregularidad que me han referenciado varios líderes, principalmente Gustavo y Simón, al dialogar sobre el tema. Ellos consideran que la entrega de parte de uno de los nuevos polígonos a Cosigo

---

<sup>128</sup> Oficio con Radicado 2008004363 del 4 de febrero de 2008, dirigido por la Directora de Minas del MinMinas al Director General de Ingeominas. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 25-26)

<sup>129</sup> Es el Informe de la primera visita técnica que tiene por objeto formalmente el ARE en Suárez y Buenos Aires, y de la que efectivamente se cuenta con el documento dentro del Expediente Jurídico, transferido en Oficio con Radicado 2008018823 del 30 de abril de 2008 (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 40)

Resources estuvo de alguna forma concertada entre la empresa, funcionarios de la institucionalidad y algunos mineros de la Cooperativa. En varias ocasiones habíamos hablado del tema, y el 1 de septiembre de 2014 con Simón, Gustavo, Tomás y otros líderes presentes, me cuentan nuevamente que después de que “los de la cooperativa” declinaran públicamente a unas 500 hectáreas de su parte del polígono en una reunión, como líderes del Consejo su posición consistió en que éstas fueran trasladadas a los polígonos de La Toma. Simón sintetiza el episodio de esta manera,

Entonces ahí hubo una irregularidad terrible, terrible, ¿sí? (...) Entonces en San Miguel, se firma ya el área, la última, ¿sí? Y esa área de 500 hectáreas que nosotros habíamos capturado pa’ la zona de Miravalle, el Desquite, Tamboral, el viernes, habíamos capturado nosotros las 500 hectáreas, el Ministro, el Viceministro, el Director de Ingeominas, se comprometieron acá con las comunidades a decretar el área tal como estaba, nos damos cuenta de que el lunes ya esa misma área se la habían entregado a Cosigo. Entonces ahí hubo una vaina de negociación. En qué consiste la negociación, bueno, como los mineros de, porque como aquí eran tres grupos de mineros, los mineros del embalse, los mineros de Buenos Aires y los mineros de La Toma (...) los mineros del embalse en cabeza del Gerente de la Cooperativa él dijo que no necesitaba esas 500 hectáreas, entonces una negociación ahí con Cosigo, que allí hubo cosa turbia” (Entrevista Simón Rodríguez enero 2015)

De esa forma, Cosigo le “echó mano” al área liberada por la Cooperativa, me afirmaban Gustavo y Simón, en aquella ocasión<sup>130</sup>. En el Expediente Jurídico del título minero se comprueba que para el 30 de noviembre de 2007 aún no había sido otorgado y apenas se hacía la reevaluación técnica de la solicitud<sup>131</sup>. Después de ese documento de reevaluación aparece uno de evaluación jurídica del título, fechado precisamente a 25 de marzo de 2008.

---

<sup>130</sup> Simón afirmaba con contundencia al respecto: “Cosigo consiguió el título de una forma fraudulenta, nosotros no nos queda duda, siempre lo hemos denunciado, no hubo consulta” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015). Esta sospecha también es reportada por Viviane Weitzner una investigadora del Instituto Norte-Sur que ha acompañado al PCN en el tema de Compañías extractivas. Señalaba el caso muy brevemente en su informe: “Según miembros de la comunidad Afrodescendiente, hasta ahora la relación entre Cosigo y la comunidad de Suárez se ha manejado a través de de (Sic) la Cooperativa de Mineros. Aparentemente esta Cooperativa le dio parte de sus títulos a la compañía. Miembros negros de la comunidad especulan que una de las razones por las que Cosigo no ha intentado forjar relaciones más profundas con el Consejo Comunitario en Suárez es porque los títulos y concesiones de Cosigo están ante todo en territorios indígenas.” (Weitzner 2012: 131) La última afirmación es un poco imprecisa dado que el título de Cosigo en el municipio de Suárez abarca principalmente el corregimiento de Mindalá en el que hay una gran población afrodescendiente.

<sup>131</sup> Oficio: Reevaluación Técnica de solicitudes mineras, Subdirección de contratación y titulación minera GD6-121 del 30 de noviembre de 2007.(Expediente Jurídico Título GD6-121, Archivos MinMinas Pdf 1: 53)

Se reactiva el proceso del GD6-121 por las fechas en que se entrega el Informe (7 de marzo), probablemente por estar en riesgo la expectativa de Rendle ante la declaración de los nuevos polígonos del ARE.

Pero al contraponer algunos oficios del Expediente del GD6-121 con otros del Expediente del ARE, hay más coincidencias. En este último, después de la propuesta de polígonos enviada por los actores locales, aparecen unas coordenadas delimitadas por la autoridad minera antes de las finalmente definidas en la Resolución final. El Oficio con Radicado 2008019866 de mayo 8 de 2008, dirigido por la Directora de Minas del Ministerio al Director de Servicio Minero, expone un área mayor a 2.054 Ha, resultado de la suma de 5 polígonos<sup>132</sup>. Un día después, el 9 de mayo de 2008, es firmado el Contrato de Concesión entre Rendle<sup>133</sup> y el Director de Servicio Minero<sup>134</sup>. El 19 de ese mes es inscrito en el RMC.

A partir de ese día, el nuevo título de Cosigo abarcaría “Miravalle y Pueblo Nuevo”, veredas que la Comisión de Técnicos de Ingeominas visitó a finales de febrero y comienzos de marzo, reportando minería tradicional en ellas. Son señaladas explícitamente en el Informe del 7 de marzo como zona de laboreo minero, junto con Turbina y Tamboral, pero fueron excluidas de la posterior declaración del ARE por haber sido incluidas en el GD6-121. Los polígonos propuestos por aquel Informe fueron reducidos y posiblemente desplazados, como lo demuestran sus propias conclusiones:

“6.9 El polígono 1, denominado Área 1, que comprende las veredas de Turbina, Tamboral, Pueblo Nuevo y Miravalles, y que también incluye las bocaminas que se encuentran ubicadas sobre el costado derecho de la carretera sin pavimentar que bordea el Embalse de La Salvajina, al momento de la visita no se observó aportes de sedimentos ni de efluentes al

---

<sup>132</sup> Área 1 Veredas Turbina y Tamboral con 551 Ha y 2493 m<sup>2</sup>; Área 2 Vereda Yolombó con 364 Ha y 249 m<sup>2</sup>; Área 3 Vereda Gelima con 210 Ha y 2500 m<sup>2</sup>; Área 4 Veredas Munchique y Santa Catalina con 462 Ha y 7142,4 m<sup>2</sup>; y Área 5 Zona Sur del Área de Suárez Cauca con 467 Ha y 8087,8 m<sup>2</sup>. Oficio con Radicado 2008019866 de mayo 8 de 2008, Bogotá, dirigido por la Directora de Minas del Ministerio al Director de Servicio Minero. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 69-71)

<sup>133</sup> Nacido en Costa Rica, es Vice-Presidente y Director de Operaciones en Sur América de la Cosigo Resources, identificado con Pasaporte Canadiense en la solicitud del área en 2005 que consta en el Expediente del título. Ver <http://www.cosigo.com/s/Management.asp> consultada el 8 de diciembre de 2014. Según el Oficio de Evaluación técnico-jurídica, Reporte de superposiciones: “El solicitante manifiesta que el área NO se encuentra en zonas de minería restringida, pero en el plano aparecen construcciones (casas), por lo tanto debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 35 de la Ley 685 de 2001.” (Expediente Jurídico Título GD6-121, Archivos MinMinas Pdf. 1: 23)

<sup>134</sup> Oficio Contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. GD6-121 celebrado entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS, y el señor Andrés Rendle. (Expediente Jurídico del título GD6-121 Pdf 1, Pp 73- 95)

mismo.” (Ingeominas, 2008: 22) <sup>135</sup>

Extrañamente ni las coordenadas ni los mapas de los polígonos propuestos en esa ocasión se encuentra adjuntos al susodicho Informe de marzo, en el Expediente del ARE. Como ya señalé, solo encontramos las áreas del Oficio de mayo 8 que, sin estar seguros que correspondan realmente a la propuesta de la Comisión, son igualmente prueba de la reducción del área final.

De 2.086 has y 7.270 m<sup>2</sup> declaradas por la Resolución 424, pasamos a más de 2.054 Has (mayo 8) y, unos meses después, a un total de 1976 Ha y 417,12 m<sup>2</sup>. Último tamaño comprendido en 9 polígonos libres, declarados en la Resolución 333 del **11 de septiembre de 2008** del ARE de Suárez y Buenos Aires <sup>136</sup>. Una reducción de 110 Has y 6.747 m<sup>2</sup>, sin ninguna explicación clara, ni criterio alguno.

Adicional, en la Resolución 333 se constata que 5 de los 9 polígonos son extrañamente minúsculos y están ubicados exactamente en las veredas contiguas a Turbina y Tamboral en Mindalá, es decir, Miravalle y Pueblo Nuevo <sup>137</sup>. Son, con seguridad, las “áreas libres” resultantes después de recortar el título concedido cuatro meses atrás sobre esa misma área a Rendle. Son el resultado absurdo de una autoridad minera que respeta el interés privado, antes que respetar la presencia previa de la minería tradicional y ancestral reconocida en sus propios Informes. Que prioriza y acelera un proceso de concesión minera, perjudicando el área que venía proyectando declarar como ARE.

En su Estudio Geológico Minero de los polígonos declarados (UNAL, 2009), la Universidad Nacional no identificaría explotaciones tradicionales en esos 5 mini polígonos.

---

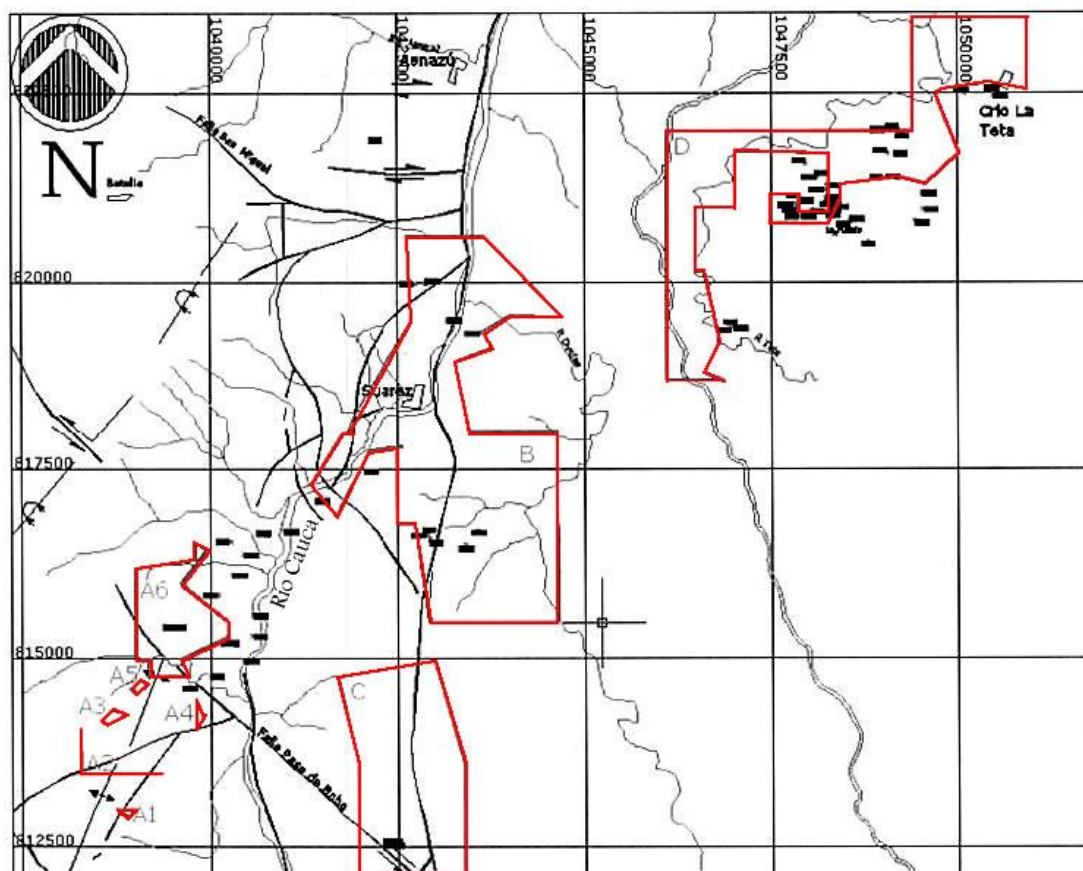
<sup>135</sup> El objetivo era definir nuevos polígonos, incluso excluyen áreas de títulos vigentes y en el caso del polígono 1 solo se excluye el FLN-093, lo que muestra que a Cosigo no se le debía respetar ningún derecho minero en esa zona: “6.6 Teniendo en cuenta que en la zona declarada mediante Resolución número 424 del 13 de noviembre de 2007 como Área de Reserva Especial de Suárez no contempló la totalidad de los sitios de interés minero donde se realizan explotaciones de minería informal por las comunidades asentadas en el área, se definió un nuevo polígono. (...) 6.8 De los polígonos delimitados en jurisdicción del municipio de Suárez, denotados como Área 2 y 5 se excluyeron las áreas correspondientes de los siguientes títulos mineros vigentes e inscritos en el Registro Minero Nacional: HEOI-01, EKE-151, HIL-10581. Del polígono 1 se excluyó el área de la Solicitud de Legalización de Minería de Hecho FLN-093, a nombre del señor Miguel Antonio Carabalí, ad portas de suscribir contrato de concesión. Es de advertir, que los polígonos restantes, no presentan superposición con títulos mineros vigentes e inscritos en el Registro Minero Nacional. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 61)

<sup>136</sup> Memorando con Radicado 2008038246 del 25 de agosto de 2008 por Directora de Minas a la Jefe de Oficina Asesora Jurídica. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 81)

<sup>137</sup> Los polígonos ubicados dispersamente y sin coherencia alguna, con un tamaño donde es difícil “pescar” alguna explotación tradicional, son: A1 de 1 hectárea, A2 de 0,48 has; A3 de 2,5 has; A4 de 1,2 has; A5 de 2 has.

No obstante, las cuatro solicitudes de formalización de minería tradicional que desde 2013 se superponen con la concesión GD6-121<sup>138</sup> muestran los intentos de la minería tradicional por legalizar a ese lado de la Salvajina, más allá del polígono A6, declarado como Área de Reserva Especial Unidad Productiva Turbina-Tamboral con 127,6 Has.

### *Ilustración 1*



Localización de polígonos delimitados para las comunidades mineras de los municipios de Suárez y Buenos Aires.

Fuente: UNAL Componente Técnico, Pág 27

Simón nos explica cómo asumieron este irregular proceso de expedición de la Resolución 333, la decisión que tomaron y la participación de la institucionalidad en la modificación arbitraria de los polígonos convenidos,

<sup>138</sup> No cuento con información que permita indagar con mayor detalle sobre las motivaciones de las personas que elevaron estas solicitudes de legalización, sobre su intención frente a la multinacional (oposición o cooperación -alianzas estratégicas por ejemplo-), más allá de suponer el objetivo formal de hacer valer la legalidad de trabajos tradicionales que coinciden con el título de Cosigo. Las solicitudes de formalización son: la OE9-10091 a nombre de Hilario Güetio Camayo; la OE6-10211 de Jon Jairo Fernández Franco y Víctor Mina Solano; la OB5-08251 de Hugo Gerardo Bravo Guerrero; y la OE6-11201 de Pascual Mina Carabalí y Maricela Carabalí. (Mapa de la ANM y bases de datos proporcionadas por la ANM)



O sea nosotros no nos podíamos quedar con 1500 [Has], ¡ni puel (Sic) verraco!, toes (Sic) qué hicimos, se aumentó Gelima y se aumentó Higuerillo (...) eso lo hicimos en reunión me acuerdo [con el Ministerio] (...) ahí hubo una responsabilidad del Ministerio, y pues lo que en últimas dijo Martínez fue que quienes habían hecho la jugada habían sido funcionarios de bajo perfil, inclusive que eso resultó en un escándalo de ahí y sacaron un poco de gente de ahí por ese hecho (...) porque el hecho se pudo denunciar en ese debate, en un debate de control político. Anabel: ¿en otro?, Simón: en otro. (...) nosotros lo sabíamos lo de allá [área de Cosigo] estaba en solicitud eso no estaba en firme. (Entrevista Simón enero 2015)

Posteriormente y al parecer a raíz de estas denuncias, el Ingeominas presenta una demanda de nulidad contra Andrés Rendle y el título GD6-121, argumentando que el ARE “presenta superposición con el área correspondiente al Contrato de Concesión Minera No. GD6-121” y que “El Contrato Único de Concesión No. GD6-121 esta (Sic) viciado de nulidad, por haberse celebrado sobre un área con vocación de zona de reserva especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Código de Minas.” (PGN, 2010). Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Sub sección B, niega las pretensiones de Ingeominas “porque fue con posterioridad a la inscripción del mismo (título GD6-121) en el registro, que el Ministerio de minas y Energía profirió la Resolución 333 de 11 de septiembre, mediante la cual delimitó como área de reserva especial, la entregada en concesión al señor Rendle, la cual no podía ser afectada por la existencia del título minero.” Ante el recurso de apelación presentado al Consejo de Estado, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado (Wilson Ruíz Orejuela) emite un concepto ratificando el primer fallo a favor de Rendle. Entre otros argumentos dice: “Tampoco se encuentra entre las causales señaladas para incoar la acción de nulidad del contrato de concesión, el hecho de que este se celebre y perfeccione durante el trámite para delimitar un área de Reserva Especial sobre el mismo territorio que versa el primero” (PGN, 2010). Desconocemos el detalle del fallo final, pero sí sabemos de la actual vigencia del título de Rendle. Éste se ubica exacto junto a la zona explotada por los mineros de la Cooperativa en Turbina-Tamboral A6, en sentido occidente.

La posición adoptada por el directivo de la Cooperativa, al renunciar pasivamente a una parte del área en su zona, despierta una fuerte desconfianza por parte los líderes del

Consejo. Ésta tiene efectos concretos en las decisiones de cooperación y alianza que adoptan –frente a la Cooperativa- los líderes que la albergan. Es evidente la poca transparencia y la ausencia de criterios por parte de la institucionalidad para la definición y cambio de los polígonos, tanto en la primera como en la segunda Resolución, generando también una profunda desconfianza de parte de numerosos mineros de La Toma hacia ella, y hacia los reales intereses que ésta representa.

Las solicitudes de concesión minera finalmente afectadas en Suárez por la Resolución 333 son:

**Tabla 1.**

Superposiciones de Solicitudes Mineras con el Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires- Área Turbina- inicios 2012									
Capa	Expediente	Titulares	Minerales	Porcentaje					
				Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6
Solicitudes	ICQ-10001	Sin información	Minerales de Oro y sus Concentrados.	100%	100%	100%	100%	100%	4,68%
Solicitudes	HCG-131	Anglogold Ashanti Colombia S.A y Rafael Alfonso Roa	Mineral de Molibdeno, Mineral de Zinc, Platino, Mineral de Plata, Mineral de Cobre, Oro.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Solicitudes	HJ3-08211	Anglogold Ashanti Colombia S.A	Plata, Mineral de Zinc, Mineral de Molibdeno, Cobre, Oro, Platino.	99,04%	100%	100%	100%	100%	100%
Solicitudes	ICS-09501	Sin información	Minerales de Oro y sus Concentrados.	0%	0%	92,94%	0%	0%	0%
Solicitudes- Legalización de Hecho	FLN-093	Antonio Miguel Carabalí	Oro, Plata.	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Solicitudes	JHE-15301	Sin información	Materiales de Construcción	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Solicitudes	ICQ-09522	Cooperativa de Mineros de Suárez	Minerales de Oro y sus Concentrados.	0%	0%	0%	0%	0%	85,29%
Histórico de Títulos	FIQN-02	Carmen Elsy Mera y Julio R. Mera Rivera	Oro.	0%	60,80%	0%	0%	0%	0%
Histórico de Títulos	FFDF-01	Empresa Nacional Minera LTDA Minercol LTDA	Carbón.	0%	100%	0%	0%	0%	0%

Zona 1: 1,07039 Ha; Zona 2: 0,4832 Ha; Zona 3: 2,56272 Ha; Zona 4: 1,97351 Ha; Zona 5: 2,09353 Ha; Zona 6: 127,61003 Ha. Fuente: Reporte de Superposiciones de Solicitudes Mineras del Catastro Minero Colombiano-Ingeominas, incluidos en el Expediente Jurídico del Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires. Carpeta II Pp 35-40

**Tabla 2.**

<b>Superposiciones de Solicitudes Mineras con el Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires- Área Yolombo- Inicios 2012</b>				
<b>Capa</b>	<b>Expediente</b>	<b>Titular</b>	<b>Minerales</b>	<b>Porcentaje</b>
Solicitudes	22030	Alfredo Díaz Durán	Plata, Oro.	1,02%
Solicitudes	ICQ-10031	Sin información	Minerales de Oro y sus Concentrados	47,10%
Solicitudes	IIL-10221	Sin información	Demás concesibles, Minerales de Oro y sus Concentrados	1,54%
Solicitudes	HJ3-08211	AngloGold Ashanti Colombia S.A	Plata, Mineral de Zinc, Mineral de Molibdeno, Cobre, Oro, Platino.	26,88%
Solicitudes	HCG-131	Anglogold Ashanti Colombia S.A y Rafael Alfonso Roa	Mineral de Molibdeno, Mineral de Zinc, Platino, Mineral de Plata, Mineral de Cobre, Oro.	34,95%
Solicitudes	IJU-16171	Sin información	Minerales de Oro y sus Concentrados, demás concesibles	10,25%
Solicitudes	IIL-14151	Sin información	Minerales de Plata y sus concentrados, Minerales de cobre y sus concentrados, Minerales de Molibdeno y sus concentrados, Minerales de Zinc y sus concentrados, Minerales de Oro y Platino y sus concentrados.	7,43%
Solicitudes	HIL-11051	Sin información	Oro	5,21%
Solicitudes	EAO-091	Sin información	Oro	11,45%
Solicitudes	HJB-10401X	Sin información	Cobre, Oro	9,86%
Solicitudes	ILL-15221	Sin información	Minerales de Plata y sus concentrados, Minerales de cobre y sus concentrados, Minerales de Oro y sus concentrados, Minerales de Plomo y sus concentrados, Minerales de Molibdeno y sus concentrados, Minerales de Platino y sus concentrados, Minerales de Zinc y sus concentrados.	0,04%
Solicitudes	GDK-094	AngloGold Ashanti Colombia S.A	Mineral de Molibdeno, Plata, Cobre, Mineral de Zinc, Platino, Oro.	65,07%

Fuente: Reporte de Superposiciones de Solicitudes Mineras del Catastro Minero Colombiano-Ingeominas, incluidos en el Expediente Jurídico del Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires. Carpeta II P. 41

**Tabla 3.**

<b>Superposiciones de Solicitudes Mineras con el Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires- Área Gelima- Inicios 2012</b>				
<b>Capa</b>	<b>Expediente</b>	<b>Titular</b>	<b>Minerales</b>	<b>Porcentaje</b>
Solicitudes	JHE-15411	Sin información	Materiales de Construcción	54,49%
Solicitudes	GDI-12F	AngloGold Ashanti Colombia S.A	Plata, Cobre, Oro, Mineral de Zinc, Mineral de Molibdeno, Platino	52,19%
Solicitudes	ICQ-10031	Sin información	Minerales de Oro y sus Concentrados	11,05%
Solicitudes	JG7-08563	Sin información	Demas concesibles, Mineral de Oro y Platino, y sus Concentrados	16,54%
Solicitudes	GDK-094	AngloGold Ashanti Colombia S.A	Mineral de Zinc, Cobre, Mineral de Molibdeno, Plata, Oro, Platino	11,98%
Solicitudes	HJ3-08211	AngloGold Ashanti Colombia S.A	Plata, Mineral de Zinc, Mineral de Molibdeno, Cobre, Oro, Platino.	71,47%
Solicitudes	HCG-131	Anglogold Ashanti Colombia S.A y Rafael Alfonso Roa	Mineral de Molibdeno, Mineral de Zinc, Platino, Mineral de Plata, Mineral de Cobre, Oro.	100%
Solicitudes	ICQ-09591	Cooperativa de Mineros de Suárez	Minerales de Oro y sus Concentrados	88,91%

Fuente: Reporte de Superposiciones de Solicitudes Mineras del Catastro Minero Colombiano-Ingeominas, incluidos en el Expediente Jurídico del Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires. Carpeta II P. 45

Sobre los polígonos finalmente declarados se inició un proceso de caracterización geológica-minera, socioeconómica y ambiental que desarrollaría la Universidad Nacional de Colombia –sede Medellín-, incluyendo la realización del inventario exhaustivo de bocaminas y mineros presentes -población objeto-<sup>139</sup>. Este estudio, que se realizó durante 2009, tan solo sería socializado con la “Comunidad Minera Tradicional” a finales de 2013. Durante ese largo periodo predominó la ausencia de información y diálogo no sólo entre la institucionalidad minera nacional y los actores locales - los alcaldes y mineros-, sino entre dependencias del mismo sector estatal. Los mismos funcionarios del Ingeominas se preguntaban también por los estudios y solicitaban información al respecto a la Directora

<sup>139</sup> Se había firmado desde la Resolución 424, el “Convenio de Cooperación Técnica 084” del 18 de diciembre de 2007 entre Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia para “el desarrollo de programas integrales de exploración, diseño minero e implementación en las Áreas de Reserva Especial de Suárez, Cauca, Arenal y Monte Cristo Sur de Bolívar”. La UNAL accede a desarrollarlos sobre los nuevos polígonos. Incluyó la elaboración de un documento de diagnóstico, un de componente técnico-guía para PTO y uno de componente ambiental-guía para PMA.

de Minas a mediados de 2011<sup>140</sup>. Para esta fecha, según la funcionaria, se iniciaría su evaluación para luego ser socializados con los mineros de los municipios, evaluación que recibe en febrero de 2012 (MinMinas 2011)<sup>141</sup>. Más de un año y medio después, entre el 24 y 27 de septiembre de 2013, se desarrolla la visita a Suárez para la entrega oficial de los documentos resultados (ANM 2013b). La dilatación del proceso al menos a partir del 2012, está relacionada con los cambios institucionales desarrollados a finales de 2011 y los trámites burocráticos derivados, al ser suprimido Ingeominas y creada la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Minero Colombiano<sup>142</sup>. No obstante, la dilación de los dos años anteriores escapa a esta explicación.

En el estudio de la UNAL en 2009 se toman una serie de decisiones que priorizan y descarta uno u otro tipo de minería, en tanto objeto de la intervención estatal. También se descarta parte del área declarada, empezando por los 5 mini polígonos, según UNAL, por no encontrar explotaciones mineras en ellos; así como la gran parte norte del Polígono B “Gelima” por haber sido ya dragada, la parte norte del Polígono D “La Vetica-Higuerillo” y todo el Polígono C “La Toma” por “requerir estudios geológicos” costosos para identificar su potencial.

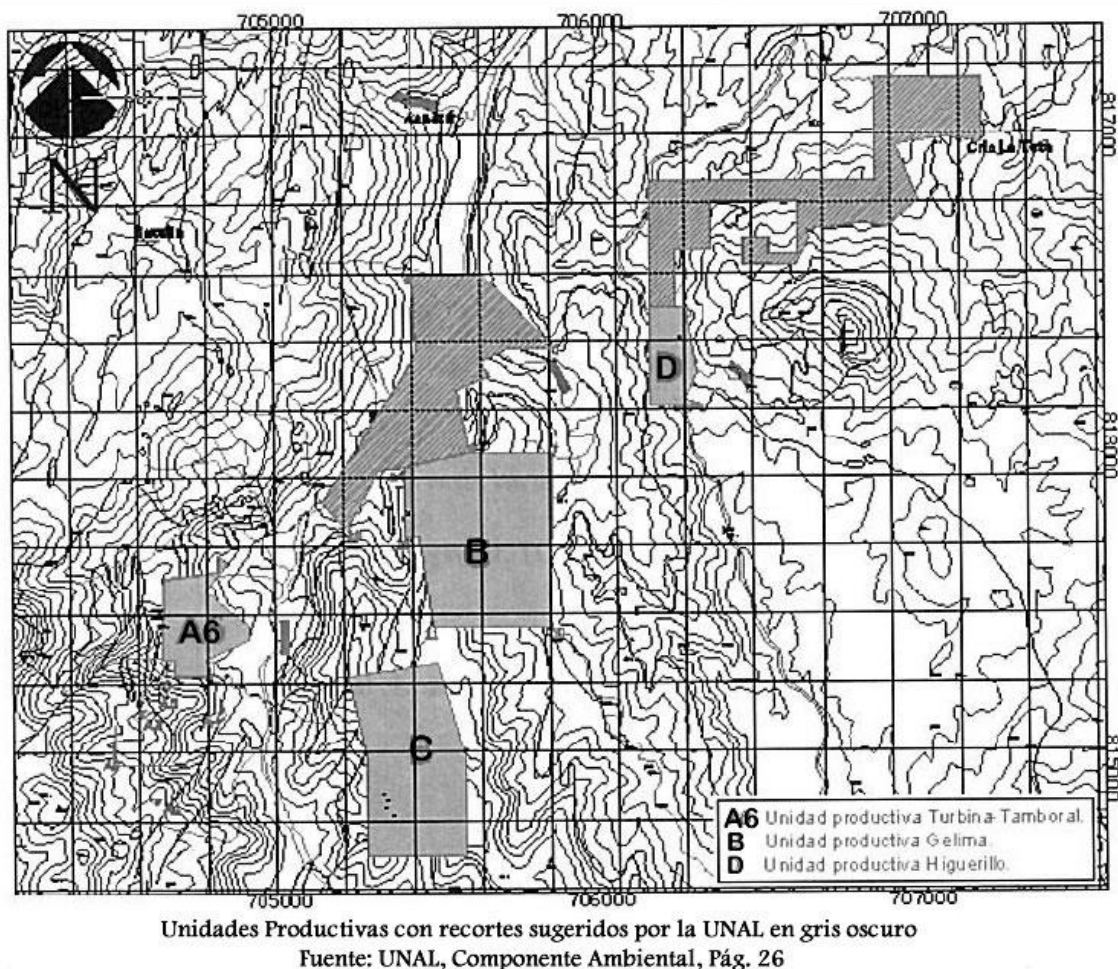
---

<sup>140</sup> El Oficio con Radicado 2011012886 de 14 de marzo de 2011 lo enviaba el Alcalde de Buenos Aires solicitando información al Despacho del Ministro. El Oficio 021478 con Radicado 2010048606 del 21 de septiembre de 2010, lo enviaba el Director de Servicio Minero de Ingeominas manifestándole su desconocimiento del estado del proceso a la Directora de Minas (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 92) En el Expediente Jurídico suministrado por la ANM hay un largo silencio general, al menos extraño, pues en el transcurso de un poco más de 2 años se identifican tan solo tres oficios -21/01/2009 a 28/02/2011-; del estudio de la UNAL no se tiene información entre 2008 y mediados de 2011.

<sup>141</sup> Informe de Evaluación transferido en Oficio con Radicado 2012005244 del 1 de febrero de 2012, pero fechado al 14 de octubre de 2011. Enviado al Director de Minas por un ingeniero contratista. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta II: 1)

<sup>142</sup> La ANM recibe y revisa todos los expedientes mineros desde comienzos de 2012 y durante todo este año, según se constata en el Expediente Jurídico del ARE; otro factor que “impidió” la socialización a tiempo según argumenta el documento de Evaluación fue la situación de “orden público” en el municipio de Suárez. Lo cierto es que la visita debía haberse realizado lo más pronto después de la evaluación, pero se termina concretando cuando la institucionalidad se vio obligada a cumplir con los tiempos de consolidación del Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, para lo cual necesitaba recolectar y consolidar la información de los miembros del ARE.

## Ilustración 2



Las minas que abarcan los polígonos ubicados en el municipio de Suárez son diversas y el primer Informe de 2008 capta parcialmente estas diferencias. La zona más homogénea es la orilla occidental del embalse de la Salvajina, donde se ubica el polígono A6 que comprende las veredas Turbina y Tamboral. Allí se agrupan la mayor cantidad de explotaciones de filón, algunas pocas cuentan con algún mecanismo de beneficio -trituradoras de pisón o molino de bolas-, pero la mayoría procesan su mineral en el entable –con un molino de barril- de la Cooperativa de Mineros de Suárez. Primero, fueron registradas 17 bocaminas (Ingeominas 2008), posteriormente se contaron 35 (UNAL 2009). Luego, en visita de seguridad e higiene minera se atienden 55 bocaminas (ANM 2013a), ese mismo año la

ANM hace un listado de 56 en su visita de verificación (ANM 2013b) y para la siguiente visita de seguridad e higiene minera, se trabaja con 55 (ANM 2014) <sup>143</sup>. Algunas bocaminas coinciden de uno a otro documento. En total, se han identificado al menos 83 bocaminas diferentes de filón, de las cuales cuatro están por fuera de las coordenadas de esa Unidad Turbina-Tamboral, dos están abandonadas, y unas cuantas suspendidas por cuestiones técnicas. Además, de los responsables de minas que se cuenta con esa información, cinco nacieron fuera de la región y 42 son locales –muchos nacieron en B. Aires, municipio del que anteriormente Suárez era corregimiento-.

En el segundo polígono –B-, ubicado en el corregimiento de La Toma, se puede encontrar una mayor heterogeneidad de la actividad minera. Ingeominas identifica tres “tipos” globales de explotación minera en Yolombó y Gelima durante el recorrido realizado en 2008: tres “tajos a cielo abierto” en aluvión –denominados “cortes” por los tomeños– (vereda Yolombó), 16 bocaminas de explotaciones subterráneas también en aluvión –denominadas minas de venero– (5 en Yolombó y 11 en Gelima<sup>144</sup>) y *unas* bocaminas de explotaciones subterráneas en filón (Yolombó). Estos dos tipos de minería aluvial pueden ser permanentes. También se señalan “tritadora de pisón” o “molino de bolas” en algunos entables mineros del último tipo. Este registro no detalla mucho las diferentes prácticas mineras, no indaga en sus técnicas, herramientas, organización del trabajo, distribución de la “inversión” y la “ganancia”, y mucho menos en el lugar que éstas tienen en la dinamización de relaciones sociocomunitarias.

Algunos cortos párrafos en los Informes, desarrollan un limitado análisis socioeconómico en el que, por lo regular se reconoce la larga historia local minera y se evidencia esta actividad económica como base de una economía familiar de subsistencia<sup>145</sup>. La alusión a la relación complementaria entre agricultura y minería en esa economía rural y el “sentido de

---

<sup>143</sup> El Informe de Ingeominas (2008) y el estudio de la UNAL (2009) –y su evaluación (MinMinas 2011)- son documentos con objetivos de caracterización; los demás Informes disponibles son de visitas técnicas de verificación de condiciones de seguridad e higiene minera realizadas por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero–(ANM 2013a; ANM 2014)-.

<sup>144</sup> “(...) donde laboran aproximadamente una comunidad de treinta (30) familias habitantes del municipio de Suárez, pertenecientes a comunidades afrodescendientes. En esta zona se realiza una minería tradicional con una antigüedad mayor de 30 años, la cual se ha venido llevando de manera artesanal e informal.” (Ingeominas 2008). No es claro si esta área recorrida que aquí llaman Gelima sea la misma que posteriormente en el estudio de la UNAL aparece como “polígono C (La Toma)” y que presenta unas características similares.

<sup>145</sup> “El municipio de Suárez es una zona minera por tradición, en la cual se adelanta la explotación de depósitos auríferos desde épocas coloniales hasta nuestros días, y en donde la informalidad y las explotaciones artesanales o de sustento diario ha sido el común denominador de los habitantes de la zona.” (Ingeominas 2008: 2)

comunidad ligado a su relación con su entorno” se encontró en un informes y en el diagnóstico de la UNAL<sup>146</sup>, pero predomina muy por encima, en estos y los demás documentos, la perspectiva de una minería eficiente y rentable, vista como una actividad aislada –volcada hacia sí misma–, abstraída de su contexto socioeconómico específico. Considero que el análisis social funciona en ellos como un contexto arandela que nada incide en las valoraciones y conclusiones establecidas en el desarrollo de los Informes. La actividad minera local es observada desde una perspectiva que resalta con insistencia las falencias técnicas<sup>147</sup> por lo que escapa su complejidad social. La estandarización de procesos y técnicas pareciera el eje central y único del ARE.

La autoridad minera en sus informes y actas tiende a englobar la población minera de los dos municipios en una categoría que denomina “Comunidad Minera Tradicional”<sup>148</sup>. Ésta es, de alguna forma, el sujeto colectivo que desarrolla esa minería que caracteriza y asiste, abarcando todos los mineros locales –incluyendo en ocasiones implícitamente las autoridades políticas locales<sup>149</sup>– y en el que las distinciones internas no son muy determinantes. Según esos mismos documentos la representación organizada y legítima de esa “Comunidad” es la Cooperativa de Mineros de Suárez, o la de Buenos Aires en cada

---

<sup>146</sup> En la visita y la realización del Informe a finales de 2013 participa un funcionario con formación en antropología, algo poco común en los equipos que envía la autoridad minera. Junto con algunos apartes del diagnóstico de la UNAL, es de los pocos fragmentos que considera la minería en relación con otras actividades: “La población del área de reserva especial de Suárez y Buenos Aires es mayoritariamente negra. Sus prácticas productivas en gran medida están ligadas a la explotación de oro a baja escala, el cultivo de la tierra y la cría de animales de consumo doméstico. En este sentido, el posible sostener que existe una articulación entre el sistema productivo minero y las labores productivas desarrolladas en sus parcelas. Estos dos horizontes de la actividad productiva de la gente de la reserva son complementarios, dado que mientras la parcela le permite resolver sus necesidades alimentarias, el trabajo en la mina les permite la adquisición de bienes materiales a través del dinero. En los habitantes de la reserva existe un evidente sentido de comunidad ligado a su relación con su entorno. Al respecto es de resaltar que su discurso relacionado con el territorio es radical frente a la necesidad de luchas por la autonomía de su espacio habitado. En este sentido entienden la entrega de contratos de concesión minera en su territorio como un acto que está generando violencia en la comunidad, dado que es percibido como una suerte de ‘política de despojo’ que atenta directamente su existencia.” (ANM 2013b)

<sup>147</sup> Dos ejemplos: “(...) estas explotaciones ‘se efectúan de manera rudimentaria y tradicional por Comunidades Afrodescendientes del Municipio de Suárez’ (...) la informalidad y explotación rudimentaria contribuyen ‘al deterioro de la mena’. Gran parte del yacimiento se encuentra sin explorar por ser explotaciones superficiales.” (Ingeominas 2008: 21) “(...) esta actividad se caracteriza por el laboreo antitécnico de las explotaciones mineras, falta de seguridad [industrial e higiene minera], bajo nivel de conocimiento del potencial geológico de los yacimientos mineros, bajo nivel de tecnificación y escasez de equipos apropiados, además de la falta de visión empresarial. -es importante la generación de una política minera que permita la creación de Asociaciones Mineras y legalización de las explotaciones, además de un apoyo “técnico y empresarial permanente con el fin de mejorar las técnicas de explotación tradicional (...)” (MinMinas 2011)

<sup>148</sup> Después de utilizar denominaciones similares y variaciones, aparece el término “Comunidad Minera Tradicional” en el Informe de la visita a finales de 2013 (ANM 2013b).

<sup>149</sup> Por otro lado, frente a la autoridad local, hay que considerar que hay Alcaldes que han hecho minería o tienen mina - Caso de Luis Fernando Colorado, Alcalde entre 2007- 2011, que tiene una mina llamada La Fortaleza en La Turbina-Tamboral.



caso<sup>150</sup>. La existencia de algún tipo de comunidad minera local o regional es una discusión que trasciende el presente trabajo. Pero aún si llegásemos a afirmar esa hipótesis, ligar una específica organización a la presunta “Comunidad Minera Tradicional” –que como supuesto “incluiría” a “todos” los mineros presentes en los polígonos-, es un movimiento por medio del cual un tipo específico de minería termina siendo considerado como el todo, y un sector de la supuesta “comunidad” se toma por toda esa población minera. Desde mi punto de vista, esta es una ambigüedad que permite a la institucionalidad centrarse solo en una parte de la realidad minera presente en esas áreas, dejando de lado las necesidades y particularidades de otras prácticas, como las diferentes minas de aluvión. Separa de su preocupación y suprime de su denominada “Comunidad Minera Tradicional” a este tipo de mineros, dado que muy pocos –por no decir ninguno- están afiliados a la organización gremial pues no requieren de explosivos para su trabajo.

Considero que la histórica interlocución del Estado con las cooperativas que él mismo incentivó desde décadas atrás, en parte como mecanismo de regulación y distribución de explosivos, hace de estas organizaciones gremiales las de más “fácil” acceso para la institucionalidad<sup>151</sup>. Por lo que la Cooperativa es privilegiada como núcleo para la intervención estatal y la definición de los “beneficiados” del ARE.

La razón que argumenta la UNAL para descartar el “polígono C (La Toma)” ubicado en la vereda La Toma y contemplado originalmente en la Resolución 333 de 2008, es una muestra de esa política, el estudio explica,

---

<sup>150</sup> Este es el análisis más detallado que hace del tema en alguno de sus documentos: “Los representantes de las minas están asociados, en su mayoría, desde hace más de treinta años, bajo la figura de Cooperativa de Mineros de Suárez, además desde siempre se colaboran, realizan actividades en conjunto, aunque trabajan para su propia mina y en miras de fortalecer la familia. (...) e incluso si alguien quiere entrar a explotar, se reúnen en la Cooperativa de Mineros de Suárez y toman las decisiones pertinentes. En el municipio de Buenos Aires, también hay colaboración entre los habitantes del ARE (...) En la actualidad pertenecen a la Cooperativa de Mineros de Buenos Aires, pero por problemas con ella, muchos decidieron hacer otra asociación que denominaron Asociación de Mineros del Cerro Catalina [llegados recientes y habitantes/dueños de tierras]. A la hora de tomar decisiones sobre el territorio, se reúnen y forman alianzas estratégicas (...) Adicionalmente hacen alianzas con los compradores de oro quienes les prestan dinero a cambio de la venta del mineral.” Para Buenos Aires señala una división organizativa sin profundizar, pero para Suárez no identifica ninguna, y en ninguno de los documentos revisados, como si la Cooperativa representara “armónicamente” esta “Comunidad Minera”. (MinMinas 2011: 17)

<sup>151</sup> “(...) el gobierno reconoce la necesidad de dicho insumo [explosivos] para las comunidades mineras ilegales organizadas por medio de cooperativas. Este es el caso de la mayoría de las minas de la región, ya que se encuentran asociadas a la cooperativa del municipio de Suárez, sin embargo, las operaciones de cada una estas se ve limitada debido a la intermitencia en el abastecimiento de este insumo (...) el gobierno nacional exige a la cooperativa del municipio de Suárez, un censo de todas las minas de la región que se encuentren adscritas a ella (...) como también la cuantificación de la producción de cada una de éstas. Para la cooperativa ha sido difícil cumplir a cabalidad tales exigencias por los (Sic) que se ve afectado el suministro de explosivos de forma regular (...)” (UNAL 2009: 103)

“la concentración de mineros en la zona es demasiado alta (aproximadamente 100 personas) y cada uno realiza su propia labor minera atacando la misma capa. (Trabajan un aluvión consolidado). Se recomienda realizar una exploración de superficie y subterránea que permita definir el potencial real de la zona, con base en la continuidad de la capa sedimentaria afectada y a la posibilidad de encontrar estructuras mineralizadas similares a las comprobadas sobre la misma formación en el sector de Gelima asociadas a los cuerpos intrusivos presentes en la región. (Una exploración más detallada) (Se estima una inversión de \$608.000.000 para dicha exploración)”

Según esto, para la UNAL –y para la autoridad minera-, el potencial aurífero que se encuentra en la roca maciza debajo de la capa de “aluvión consolidado” es lo realmente importante en tanto determinará el verdadero potencial minero del área. Las explotaciones de estas familias no son un factor que amerite mantener el polígono para facilitarles la asesoría y promoción sistemática. Incluso, así el mismo estudio resalte el alto riesgo de colapso que presentan esas minas a cielo abierto y de socavón en aluvión<sup>152</sup>. De las minas aluviales de Yolombó y Gelima –subterráneas y cielo abierto- tampoco se vuelve a hablar, pues en la caracterización que hace la UNAL del polígono B “Unidad Productiva Gelima” solo registra cuatro bocaminas de filón, omitiendo las anteriormente listadas en 2008, sin explicación alguna<sup>153</sup>. Saltamos de esta forma a la definitiva priorización de las minas de filón, lo cual se mantiene en todos los posteriores Informes de Seguridad e Higiene minera que tenemos a disposición, en los que se asesoran técnicamente solo las minas de filón.

---

<sup>152</sup> No solo en el diagnóstico de la UNAL, en el de Informe de 2008 también se señalaba el riesgo: “En esta zona [Yolombó] el material se encuentra altamente meteorizado y oxidado” (Ingeominas 2008: 14) “Cabe destacar que la explotación [a cielo abierto] es artesanal y no cumple con ninguna norma de seguridad, ni con el diseño de explotación adecuado que garantice la estabilidad del frente de trabajo.” (Ingeominas 2008: 15) “(...) también se puede observar que las bocaminas se encuentran ubicadas sobre un depósito que ha sufrido algún grado de transporte, lo cual hace que las propiedades mecánicas del macizo rocoso sean bajas o malas, haciendo altamente riesgoso ese tipo de minería.” (Ingeominas 2008:) Lo otro que llama la atención es que por esa misma época, 2009, la AngloGold Ashanti manifestaba públicamente que la única zona de la que le interesaba el potencial aurífero se ubicaba en la vereda La Toma donde había desarrollado algunas labores de exploración sin llegar a acuerdos con supuestos titulares –si fuera cierto probablemente Raúl y Olga Ruíz-. No se puede esclarecer si el polígono coincide con el área de las exploraciones, pero se ubican en una misma zona que en realidad no es tan extensa.

<sup>153</sup> Las tres zonas que la UNAL avala finalmente para ser parte efectiva del ARE son: 1. Turbina-Tamboral (el más grande de los 6 polígonos declarados en esta orilla del Cauca, los otros 5 polígonos eran áreas insignificantes y, según el estudio, sin explotaciones mineras); 2. Gelima (con un recorte en la zona noroccidental por abarcar el lecho del río Cauca ya dragado), estas dos en Suárez; 3. El Higuerrillo y La Vetica en Buenos Aires. La Vetica fue excluida por la UNAL pero la ANM retoma visitas a esa zona a partir de la reunión de entrega de los estudios a los mineros en 2013, debido a su inconformidad “Los mineros [de La Vetica] que atendieron la visita informaron haber sido visitados por la Universidad Nacional y veían con extrañeza no estar incluidos en el inventario levantado.” (ANM 2013b)

Los vacíos y discontinuidades presentes entre los documentos de las dependencias y delegados de la autoridad minera son una realidad palpable en este proceso del ARE. Durante el periodo posterior a la supresión del Ingeominas, el Punto de Atención Regional Cali y el Grupo de Salvamento Minero de Jamundí habían continuado interlocutando con la Cooperativa de Mineros de Suárez, expidiendo certificados y visitando las minas. Gracias a esta labor venían registrando un inventario con gran cantidad de minas que no habían sido tenidas en cuenta para complementar el estudio de la UNAL, ni en posteriores evaluaciones<sup>154</sup>.

La inconformidad de los actores locales no se hizo esperar el día de la entrega y socialización del estudio geológico minero en 2013. “La comunidad minera tradicional, así como las autoridades regionales” reclamaron no solo por el extremo retraso en la entrega de los resultados, sino además por “la negligencia del Estado en sus procesos (...) el abandono del Estado” y, como era natural, por el deficiente inventario presentado en el diagnóstico de la Universidad<sup>155</sup>. En respuesta, la ANM realiza durante los tres días siguientes visitas a las tres zonas definidas como aptas en el estudio de 2009 para verificar y completar el listado, además de que “la comunidad se comprometió a levantar un inventario propio de los integrantes del Área de Reserva Especial”. El paso siguiente en el proceso del ARE consistiría, entonces, en la realización del PTO y el PMA por parte de “La Comunidad

---

<sup>154</sup> “2) Se conoció que el Punto de Atención Regional Cali, ha venido expidiendo certificaciones de explosivos a la Cooperativa de Mineros Tradicionales de Suárez Cauca, y que el Grupo de Salvamento de Jamundí, ha venido realizando visitas de Seguridad y Saneamiento Minero a las explotaciones que se encuentran en el área. 3) De acuerdo con lo expresado por el Grupo de Salvamento Minero de Jamundí-Regional Cali, se evidenció que en el tema de Áreas Reserva, cuando era competencia del Ministerio de, (Sic) no existía una comunicación favorable respecto al tema.” “(...) se evidencia que no todas las explotaciones visitas (Sic) por el Grupo de Salvamento están incluidas dentro del listado de integrantes del Área de Reserva Especial entregado por la Universidad Nacional, no obstante se señala por los ingenieros del Grupo de Salvamento, que la comunidad minera de Suárez y Buenos Aires se encuentra organizada y viene trabajando armónicamente.” (ANM 2013b: 2)

<sup>155</sup> “(...) la comunidad manifiesta negligencia por parte de los profesionales de la Universidad Nacional que realizaron dicho inventario señalando entre otros: -El personal de la UN, no incluyó en el listado todas las explotaciones que visitaron. -El personal de la UN no realizó los recorridos completos de todas las explotaciones. -En los estudios de la UN se excluyeron explotaciones tradicionales.” (ANM 2013b) Los actores que participaron en esta reunión fueron tres delegados de la Agencia Nacional de Minería, el Secretario de Gobierno y funcionaria de Planeación de la Alcaldía de Suárez, los Personeros de los dos municipios, los representantes legales y miembros de las Cooperativas de Suárez y Buenos Aires, el Presidente del Consejo Comunitario de La Toma, el Presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios de Buenos Aires y el representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras de Suárez. Estos últimos actores étnicos aparecen como tal por primera vez formalmente en un Informe institucional sobre el ARE. Pero venían participando de ese proceso desde un inicio como lo expresa Simón y otros líderes del Consejo como Gustavo.

Minera Tradicional” basándose en dos documentos “guías”<sup>156</sup> que la ANM les entrega en esa misma ocasión a los representantes legales de las Cooperativas. Requisitos sin los cuales la “Comunidad Minera Tradicional” no podría aspirar a mantener en sus manos la concesión especial que debe desprenderse del ARE. En la reunión, “la comunidad” se niega a cumplir los tiempos burocráticos establecidos y solicita capacitación y acompañamiento por parte de la autoridad minera en el proceso de elaboración del PTO y PMA<sup>157</sup>.

La unanimidad de la “Comunidad Minera Tradicional” al cuestionar en aquella reunión la caracterización y seguimiento realizado por el Estado a las explotaciones del ARE, es el resultado de la unificación circunstancial de varios actores colectivos e individuales que en la dinámica local más amplia presentan distintos niveles de contradicción y cooperación. Considero que existen entre ellos matices y diferencias con relación a imaginarios, posiciones políticas y organizativas, según los contextos. A las diferencias entre autoridades políticas locales y organizaciones étnicas nos hemos acercado en páginas precedentes. La situación con la concesión especial del ARE permite ilustrar particularmente algunos aspectos de la relación entre el Consejo Comunitario de La Toma y la Cooperativa Minera de Suárez. El dominio sobre la/s concesión/es especial/es es un factor importante que tendrá repercusiones en la distribución del derecho de acceso legal al recurso minero-oro. En este sentido, de quien ostente la concesión depende también que se acepte o no una “alianza estratégica” o algún tipo de cooperación con otros actores mineros, al menos en los polígonos del ARE que controle.

Según me ha informado Simón y Gustavo Zapata, más allá de que la autoridad minera institucional priorice la Cooperativa de Mineros de Suárez como sujeto del ARE, el objetivo que se han trazado, estos y otros líderes, es que el polígono ubicado en su corregimiento esté bajo el manejo cierto de la organización étnica afrodescendiente: “(...) en últimas el Ministerio decía que el Consejo Comunitario no podía entrar a operar una

---

<sup>156</sup> La ANM entrega dos paquetes de documentos originales, uno para el representante legal de cada cooperativa, compuestos por: “-Proyecto de Programa de Trabajo y Obra-PTO: 299 folios y 27 planos; -Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental-PMA: 251 folios y 3 planos; -Proyecto de Asistencia e Implementación Técnica: 286 folios.”

<sup>157</sup> “(...) se conformó una comisión de revisión de dichos estudios y se manifestó por unanimidad por parte de la comunidad que ellos no se comprometían a presentar el Programa de Trabajos y Obras –PTO ni el Plan de Manejo Ambiental –PMA, dentro del término señalado por la ANM, es decir seis meses después de la entrega de los estudios geológico mineros de acuerdo con lo estipulado en la Resolución No. 0205 de 2013 de la ANM.” (ANM 2013b)

Zona de Reserva Especial. Entonces nosotros dijimos, aah listo, se crea la Cooperativa [mitad del 2011]. O sea es una forma, pero ahora con la titulación colectiva de todas formas tienen que dársela al Consejo.” (Entrevista con Simón 2014). Simón evidencia en su comentario un ejercicio de búsqueda jurídica y política que he observado a medida que intercambio sobre el tema minero con algunos líderes de este proceso, así como en algunas de sus reuniones. La ruta jurídica para llegar a controlar esa concesión especial del ARE y, más ampliamente, para lograr la mayor protección posible del corregimiento es indagada de forma permanente, en especial por los líderes más activos y empapados del tema: se exploran varias estrategias y figuras jurídicas, se proyectan tácticas. Sin embargo, el proceso de difusión e incorporación organizativa interna de esas rutas y posiciones político/jurídicas no es inmediato ni mecánico. Esto lo concluí gracias a la participación en dos reuniones de mineros de la vereda La Toma<sup>158</sup>, en abril de 2013, en donde pude observar que existían en los asistentes, múltiples niveles de cualificación y de manejo de la información sobre las posibilidades jurídicas. También, a medida que dialogaba con diversos miembros de la organización, quienes contaban con informaciones diferentes o no muy bastas sobre estos asuntos, se ponía en evidencia la mayor incidencia de algunos líderes y un mayor nivel de detalle en sus versiones.

En ese sentido, aunque ya algunos por el año 2011 habían creado una cooperativa independiente para hacer frente a lo proyectado con el ARE, en las reuniones a las que asistí, ya 2013, los líderes y mineros de esa vereda se formulaban preocupaciones y preguntas similares sobre esos mismos asuntos. En palabras del profesor Omar, que introducía la primera reunión de mineros que se realizaba en esa coyuntura,

El Gobierno nuevamente arremete con la pequeña minería y da un plazo perentorio hasta el 10 de mayo [para solicitar legalización] (...) hoy qué es lo que están diciendo, que por favor busquemos el mecanismo de que lo que está estipulado en la Zona de Reserva le quede no a favor de un tercero como decía un capítulo de lo que leí (...) hay que oficiar al Ministerio de que nosotros nos queremos quedar con este territorio porque es nuestro (...) [Si] usted tiene una suerte y se sacó una libra de oro ya usted no puede venderla tal como la sacó,

---

<sup>158</sup>Asisten numerosos comuneros en calidad de mineros, líderes diversos de la comunidad tomeña –mineros o no– que hacen parte de la Junta de Acción Comunal, profesores de la Escuela, muchos a su vez participantes activos en mayor o menor medida del Consejo Comunitario de La Toma.

tiene que fraccionar esa misma libra de oro llevando de a dos gramitos (...) hicimos la denuncia en Popayán, a la CUT Valle, a la CUT Cauca, CUT a nivel nacional, y ellos quieren venir a hacer acompañamiento eso si ustedes así lo requieren (Diario de campo. Reunión de mineros de La Toma el 8 de abril de 2013)

La vigencia del programa de legalización de minería tradicional estipulado por el Decreto 1970 de 2012 vencía su plazo unos cuantos días después de aquella reunión, lo que motivó la realización del encuentro. Para la gran mayoría resultaba imposible cumplir los requisitos de ese proceso de formalización<sup>159</sup>, por lo que se comprobaba una vez más el fracaso de ese marco. Por otro lado, el aumento en los mecanismos de control en la comercialización del oro, había sido anunciado por funcionarios del estado según informaban varios líderes en la reunión, medida que afectaría por igual la minería de filón y aluvión. Según lo dicho por los funcionarios a los tomeños, pronto habría una barrera en la venta de oro para personas naturales o jurídicas que no se incluyan en el Registro Único de Comercializadores de Minerales, así como para los barequeros que serían, además, censados pronto. La reglamentación del RUCOM se expide en febrero de 2015 con el Decreto 0276, asunto sobre el que profundizaremos en el segundo acápite del Capítulo IV.

Como hemos dicho, en este difícil panorama para los mineros informales, el Área de Reserva Especial resulta una figura privilegiada. El profesor evidencia una preocupación

---

<sup>159</sup> El Decreto 1970 de 2012 sobre legalización de minería tradicional –que modificó el 2715 reglamentario de la ley 1382 de 2010- definía dos requisitos para acreditar la calidad de minero tradicional (Artículo 5): 1 demostración de la explotación continua durante al menos 5 años a través de documentación técnica (planos mostrando explotación y años de trabajo, formatos declaración de regalías, informes técnicos, visitas de autoridades mineras, ambientales o locales, actas de suspensión o cierres, formatos de afiliación a riesgos laborales en minería, ensayos laboratorio, otros) y 2 la existencia mínima de 10 años de explotación antes de la vigencia de la ley 1382 de 2010, probándolo con documentos y/o pruebas comerciales y técnicas. Con estos requisitos y otros más, como un plano de los trabajos, era posible iniciar el proceso de legalización, sin embargo, es sabido que la gran mayoría de mineros tradicionales difícilmente cuentan con este tipo de pruebas, mucho menos continuas durante 5 años. Adicional, en caso de tenerlas, el proceso posterior tiende a expulsarlos –según el abogado de Corporación Sembrar que señalaba precisamente en esa reunión de mineros diversos casos de minas en proceso de legalización en el Sur de Bolívar-. No obstante, con este ultimatum a punto de vencer, el 9 de mayo MinMinas expide el Decreto 0933 de 2013, que flexibiliza un poco la mirada de la minería tradicional ante el evidente fracaso de todos los decretos anteriores sobre la materia (Artículo 1): “aquella que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o discontinua, por personas naturales o grupos de personas naturales o asociaciones (...) que, por las características socioeconómicas de éstas, constituyen para dichas comunidades la principal fuente de manutención y generación de ingresos (...)”. La comprobación de estos años de existencia –ahora sin necesidad de 5 años de continuidad- sería por medio de documentos técnicos o comerciales, aún, y se ordena elaborar unos términos de referencia adaptados a “las condiciones socioeconómicas, técnicas y ambientales de la actividad minera objeto de formalización” (Artículo 17) para la presentación de PTO y PMA por parte de los mineros. En los últimos decretos se enfatiza en la mediación para acuerdos entre partes, en caso de que la solicitud de legalización se superponga con contratos de concesión, contrato en áreas de aporte o autorización temporal y estipula varios posibles acuerdos.

que ya he referenciado: ¿a quién será otorgada la concesión especial? “Nosotros”, dice el líder, “nos queremos quedar con este territorio porque es nuestro”. ¿Quién puede representar los mineros legítimamente en este objetivo –lo que denomina “nosotros”-? es una pregunta que parece implícita en la reunión. Es decir, percibo que durante ese encuentro, no necesariamente todos los/as mineros/as tienen un sujeto organizativo claro para este empeño, pero poco a poco se va aclarando. Algunas intervenciones de los asistentes enfatizan en la necesidad de que los mineros de la vereda La Toma brinden un mayor acompañamiento a la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario –y en general a los líderes que han impulsado más activamente la organización-. Deduzco de esas intervenciones y de conversaciones que he sostenido con algunos de esos líderes, que éstos últimos –principalmente algunos de Gelima y Yolombó- han tomado distancia de la problemática de la vereda La Toma porque se percibe que ha faltado respaldo de parte de sus habitantes. Por otro lado, entre los asistentes a la reunión predomina un reconocimiento de la pertinencia que ha tenido la orientación política de la organización étnica, a la vez que vislumbro una tensión de muchos de ellos con la Cooperativa de Mineros de Suárez,

El Consejo Comunitario es una potencia en esta comunidad (...), yo pienso que ellos ya tienen mucho avanzado y hay mucha cosa, y hay mucha gente que apoya el problema nuestro de esta minería, entonces, ahí es donde tenemos que tocar (...) ¿adelantar una cooperativa? Eso, eso lo perdimos ya que nos agarremos a pensar que armamos una organización de esas para defender esto, ya perdimos eso (...) ahora que La Toma esta tan solicitada de las multinacionales y de todo el mundo pues más pirinola le ponen [a la personería jurídica] (...) llamemos a la dirección del Consejo Comunitario y sentémonos y cuadremos esta cosa que ellos manejen la directriz, pero con todos nosotros, no los vamos a dejar a ellos solos, a mí sí me da temor, créame, soltarle, soltarle el problema minero a cualquier organización que se tenga, ahí sí no (...) yo soy muy de la Cooperativa, yo defiendo mucho la Cooperativa porque me ha ayudado mucho pero no apoyaría eso (...) nosotros tenemos la capacidad, la comunidad tiene la capacidad de manejar esto (Intervención de un minero en reunión 8 de abril de 2013, vereda La Toma)

Después de algunas intervenciones, la posición frente a la Cooperativa de Suárez parece más generalizada. Identifico que para numerosos asistentes ella no representa sus intereses.

Un minero cooperado interviene para abogar por esa organización gremial<sup>160</sup>, pero otros mineros siguen insistiendo en que no representa una garantía para los mineros de La Toma,

Yo hice parte como presidente de la junta en el 2009, estuve con el presidente de la Cooperativa, en varias oportunidades lo cite (...) y la respuesta que me daban negativa era que él no venía acá a La Toma para polémica, esa fue toda la respuesta que me daba a mí, (...) entonces no sé qué problema tenemos nosotros lo tomeños para él tener que de pronto descartarnos esa parte. Nosotros siempre, siempre hemos tenido el temor de la Cooperativa porque es uno de los aliados que hemos tenido para, de frente para que cuando en el momento dado que las multinacionales están buscando sus intereses aquí en nuestras comunidades están prestos para eso [aliárseles], y eso no hay que dudarlo (Intervención de un minero en reunión del 8 de abril de 2013)

Sobre si el Consejo Comunitario es o no apto jurídicamente para el control del ARE, los asistentes no tienen información muy clara. Marcel Quintero, presidente del Consejo en ese momento, manifiesta que es necesario consultar el tema con algún abogado e indagar sobre la creación de una nueva cooperativa por parte de algunos líderes de la organización étnica. Explica que aunque no tiene mucha información al respecto, sabe que esa decisión fue tomada a propósito del ARE<sup>161</sup>. Finalmente, en medio de la incertidumbre sobre la ruta jurídica a seguir, se define solicitar a través de la Junta de Gobierno del Consejo un acompañamiento del PCN y de abogados, que permitiera aclarar el camino.

Considero que, al constituir la cooperativa, los líderes se crean una oportunidad política de disputar junto con varios actores locales el polígono en cuestión. Frente a las diferencias políticas con la Cooperativa de Suárez, hoy percibidas de forma generalizada en La Toma, anticiparon la necesidad a la que ahora se enfrentaban los mineros reunidos. Simón me explica cómo ve la relación con esa organización gremial, sintetizando una postura que yo

---

<sup>160</sup> “yo si quiero hacerles un llamado por lo menos a las personas de aquí de La Toma, porque no es que la Cooperativa se excluya si no que (...) de los 10, 12 afiliados que hay de acá en La Toma cuando se les pide los documentos, los lleva Paulo, los lleva el compañero Gato, el resto de compañeros no se ven, entonces yo creo que eso hace parte también de que, de meterle un poquitico de amor más a eso. El gobierno lo que quiere es acabarnos, el tiempo que tenemos para tomar la decisión que estamos tomando hoy aquí es muy poquitico, o sea que yo si los invito a que tomemos una decisión sabia” Asistente a esa misma reunión del 8 de abril de 2013.

<sup>161</sup> “el Ministerio dice que [las Cooperativas] deben de tener una antigüedad [2 años] (...) para entrar a operar las Zonas de Reserva, entonces nosotros lo que estamos esperando es que, tenga la antigüedad (...) ya casi, ya ahorita en mayo completa los 2 años (...) [Y el ARE] se le da a la organización minera existente en la zona.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2013)



considero una especie de “política de relacionamiento” en la que operan criterios prácticos e ideológicos en las decisiones y comportamientos concretos,

**A:** Y por ejemplo ¿la Cooperativa de Mineros de Suárez podría aspirar a manejar la Zona de Reserva? **S:** Claro. (...) pero por ejemplo pa’ acá [La Toma] no. (...) Así tuvieran todos los miembros [mineros]. **A:** ¿Por qué? **S:** Porque somos autoridad. **A:** Aah bueno listo. Ahí es donde empieza el problema (risas) **S:** (Risas) (...) sí lo podrían hacer. **A:** ¿Y vos creés (Sic) que ellos quieran? **S:** Claro, porque ahí está el negocio (...) Porque la minería es un negocio. ¿Cuánto vale un título hoy día? **A:** Pero igual ellos teniendo eso no pueden venderlo porque... **S:** Pero sí pueden hacer un contrato de concesión. **A:** O sea, ellos teniendo la Zona de Reserva, administrándola, pueden concesionársela ¿a quién? **S:** A cualquier empresa (...) y ¿qué no permite la ley? Tú puedes tener una casa arrendada, ¿sí o no? ¿Y la ley no te permite que tú puedas subarrendar? (...) pero ahí, o sea nosotros ya tenemos eso... **A:** O sea, también digamos que ¿ustedes consideran que la Cooperativa de Mineros de Suárez no representa los intereses de ustedes? **S:** Ah nooo, pero por eso te estoy diciendo, nosotros sabemos que la pelea no es con ellos, porque la pelea no es entre nosotros. Entonces nosotros les decimos a ellos “respeten nuestra...” ¿sí? Y si toca que caminar juntos, caminamos juntos pero ellos acá en la Toma no. Acá en la Toma no tienen manejo de nada. **A:** Digamos, ellos representan un riesgo en la medida que pueden acceder a entregar o a aliarse con otros pero ellos no son los malos, los malos son los otros, esa es la idea que ustedes... **S:** Claro, pero les interesa el negocio (Entrevista con Simón 2014)

Esta conversación nos permite ver la dualidad de la relación. La gran mayoría de mineros de filón que integran la Cooperativa de Mineros de Suárez son afrocolombianos y suareños con quienes los líderes de La Toma se han relacionado en mayor o menor medida a lo largo de sus vidas en el municipio. Ese “*nosotros*” en el que Simón les incluye muestra, desde mi punto de vista, esa faceta que les vincula como suareños mineros en un territorio amplio compartido en el que han trasegado sus familias y muchos de ellos con apellidos “tan negros” como los suyos. Al tiempo, siendo que la real confrontación no es entre ese “*nosotros*”, la perspectiva étnica traza una fina línea política que diferencia abismalmente las dos organizaciones. Esa organización gremial no se orienta por el contenido y la política específica de la etnicidad que articula y promueve el Consejo. En este sentido, los imaginarios, valores, apuestas e intereses que sus dirigentes vehiculan y a los que aspiran

son diferentes, a pesar de que, como supongo, la mayoría de quienes pertenecen y dirigen la Cooperativa también se auto-reconozcan como negros/afrocolombianos. Llama la atención que esa organización haya incorporado en las interlocuciones con la institucionalidad minera, elementos de la reivindicación étnica. Considero que el alto grado de auto-reconocimiento étnico/racial de la población negra de Suárez, por un lado, la creciente legitimación del discurso étnico y su potencial para incidir en procesos y decisiones institucionales, por el otro, pueden ser algunas de las razones que les motivan<sup>162</sup>. Se mezclan con las históricas reivindicaciones por el incumplimiento del Acta del 86 y las actuales exigencias ligadas a lo minero. No obstante, como he señalado, la organización no se configura en torno a la reivindicación étnica, y los contenidos de esa etnicidad no coinciden por completo con la que representa el Consejo Comunitario.

La lucha del Consejo Comunitario de La Toma por mantener la dinámica local minera e incidir en ella, no se ha restringido al polígono del ARE. La organización ha encontrado una fuerza inmensa en su marco ideológico y sus decisiones políticas para defender la minería *tradicional/ancestral* del corregimiento, y ha ido consolidando una legitimidad ante los mineros de ese territorio que, considero, le reconocen cada vez más su ejercicio como autoridad étnica. Su acción fue determinante en el conflicto que se desató en torno al título BFC-021 de Héctor Jesús Sarria indagado en el acápite 3.5 de este trabajo, en el que la Cooperativa de Mineros de Suárez brilló por su ausencia. La tutela que el Consejo

---

<sup>162</sup> La referencia más explícita a lo afrodescendiente asociado a lo ancestral, a la historia de esclavitud y a “lo cultural” se encuentra en un oficio que la Cooperativa dirige a la institucionalidad en 2011. En sus oficios anteriores se hablaba recurrentemente de los efectos de la construcción de La Salvajina y al Acta del 86 sin hacer alusión a la herencia negra como tal en ninguno de sus apartes. Por ejemplo “se genera graves problemas sociales y económicos, como el desplazamiento de una cantidad de mineros balseros, pescadores, agricultores. En 1986 se inicia una marcha de las comunidades afectadas a la ciudad de Popayán de la cual se firma la llamada acta del 86. Uno de los compromisos era reubicar los mineros en zonas actas (Sic) para la minería en Suárez y Buenos Aires. Compromiso que nunca se cumplió” Oficio DIR- 0797 del 3 de diciembre de 2007 (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 13, 14-19); y años más tarde se evidencia un renovado ahínco en resaltar su historia afrocolombiana “hemos predicado y practicado la minería aurífera (filón y aluvión), por varios centenares de años, oficio que nos legaron nuestros ancestros que fueron casados y atrapados como animales en África, luego traídos al continente americano para trabajar en contra de su voluntad el oficio de la minería del oro, la esclavitud se acabo (Sic) y no sabiendo otra cosa nuestros antepasados continuaron con esta actividad, que hoy esta (Sic) inmersa dentro de nuestra integridad cultural, de esta manera las comunidades mineras negras hemos aprendido esta oficio y lo hemos llevado de generación en generación y lo hemos realizado de forma artesanal, con ello hemos nacido, hemos crecido, hemos multiplicado y también han muerto muchos de los nuestros (...)” Oficio No. 2011-429-003035-2, 8 de septiembre de 2011, Suárez-Cauca, enviado por el Representante Legal de la Cooperativa de Suárez, Gabriel Guazá a la Coordinadora Grupo de Trabajo Ingeominas Regional Cali denunciando diversos problemas. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas, Carpeta I: 100)

interpone en ese contexto, a finales de 2010, falla a su favor con la Sentencia T-1045A y apuntala la legalidad de la reivindicación étnica en el marco de la disputa minera. Entre otras cosas, ordena la suspensión de toda actividad minera no tradicional o no ancestral así como de los títulos y solicitudes vigentes en el corregimiento, por ser *territorio ancestral*, hasta la cabal realización de las Consultas Previas para cada uno de estos. La autoridad minera no había procedido a la aplicación de las suspensiones hasta inicios de 2013. Cuando finalmente es presionada, como detallaremos en el acápite señalado, para expedir las Resoluciones relativas al tema, la autoridad minera incluye la Resolución 003 del 15 de mayo de 2013. Proferida por el Vicepresidente de Promoción y Fomento, ordena “la suspensión de actividades mineras dentro del Área de Reserva Especial Suárez-Cauca” específicamente la Unidad Productiva Gelima por superponerse con el corregimiento de La Toma. Los líderes del Consejo Comunitario rechazaron esta medida y solicitaron una revisión jurídica a la luz de la propia Sentencia.

Por los días en que iban a discutir con la autoridad minera aquella Resolución, pude conversar con Gustavo sobre el tema y mi percepción fue que el líder interpretaba la medida como una especie de contrajugada de la Autoridad minera que, al verse obligada a suspender concesiones y solicitudes que no quería intervenir, decide suspender ese polígono del ARE a sabiendas del perjuicio que causaría. Se realiza, entonces, una reunión a la que asisten líderes del Consejo Comunitario junto con representantes de PCN Nacional, y exponen las razones por las que esa suspensión contraviene el propio objeto de la sentencia,

“(…) Sin embargo, y después de una revisión completa de la sentencia de amparo constitucional, se constata que la intención de la misma es proteger los derechos de los miembros de la comunidad negra que habita *en el* Consejo Comunitario de La Toma, puesto que en una lectura integral del resuelve se evidencia que la Honorable Corte profiere en el numeral octavo y noveno, protecciones para los *pobladores ancestrales* que vienen desarrollando la actividad minera en el territorio como forma de vida. iv. Entonces, resulta un contrasentido suspender en modo alguno las *actividades mineras ancestrales* que se han venido desarrollando por los miembros del consejo comunitario, en aras del cumplimiento de un fallo judicial, cuando esa misma decisión lo que busca es defender los derechos de la comunidad negra que habita el territorio y que *cuenta con un bagaje ancestral en las*

*prácticas mineras* que se adelantan en el área de reserva especial (...)” (Subrayado propio)<sup>163</sup>.

El carácter *ancestral* de las prácticas mineras –o del *bagaje*-, y del territorio y la comunidad en otros documentos, es un elemento que adquiere su potencia jurídica de la Sentencia T-1045A. Considero que en la base de ese desarrollo jurídico está la fuerza política consolidada desde el proceso organizativo del Consejo, en el territorio/población de la que disputan su legítima representación como autoridad. La defensa del polígono “Gelima” incluye explotaciones mineras propiedad de nativos y de algunos foráneos<sup>164</sup>. En estas minas se emplean un buen número de tomeños y es importante para el Consejo garantizar que éstos no sean afectados. Desde nuestra lectura, tiene un sentido político que se interesen por no afectar los propietarios –sean “internos”, “externos” aliados o fluctuantes-. Más cuando intenta consolidar un “control” legítimo y legal sobre las actividades mineras en el corregimiento y del proceso jurídico del ARE. En esa misma reunión de finales del 2013 los delegados mineros y del Consejo Comunitario dejan claro que “En el trámite de obtención del título minero en área de reserva especial [el polígono Gelima] se deberá cumplir con la normatividad vigente”. Con esto se refieren a la obligatoriedad de la Consulta Previa también para el ARE, que representa la posibilidad de incidir en el PMA y PTO, es decir, en los “proyectos estratégicos mineros” en caso de ser desarrollados por actores externos al Consejo<sup>165</sup>.

El rumbo del ARE estará, como hemos dicho, marcado por la política que adopte el titular de esa concesión especial y por las disputas que a futuro se puedan desatar. Pero también es

---

<sup>163</sup> La reunión giró en torno a la protección de la “diversidad cultural en lo relacionado con las actividades de producción de las comunidades negras del corregimiento de la Toma, teniendo en cuenta que están han ejercido la actividad de manera ancestral” En Oficio titulado “Acta de la Reunión Debate Jurídico de la Sentencia T-1045 A de 2010 en cumplimiento al compromiso número 2 del Acta del 22 de noviembre de 2013” del 29 de noviembre de 2013, Agencia Nacional de Minería, Bogotá. (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM, Carpeta II: 161)

<sup>164</sup> De las diez minas registradas en el polígono del ARE ubicado en Gelima por la autoridad minera en sus Informes (Ingeominas 2008), (UNAL 2009), (ANM 2013a), (ANM 2013b), (ANM 2014); dos Responsables son de Antioquia, uno de Santa Rosa de Osos, uno de Argelia Cauca, tres de La Toma, Suárez y tres no sabemos, pero tienen apellidos propios de esas comunidades afrocolombianas.

<sup>165</sup> Se acuerda adicional que “3. La Dirección de Formalización Minera y ANM acompañará y brindará asistencia técnica para que sirva de insumo para la elaboración del PTO y PMA, para ello, se establece las personas contacto para el desarrollo de este compromisos (Sic)” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM, Carpeta II: 162). Los responsables por lo local fueron una persona como “Minero” y el Presidente del Consejo Comunitario de La Toma en este entonces.

necesario considerar el rumbo que el Estado pretende imprimir a esta novedosa figura legal que ve la luz con el Código de Minas del 2001<sup>166</sup>.

Como hemos señalado, en Colombia habían existido intentos significativos de formalización de pequeña minería desde 1994 con la Ley 141 y el Decreto 2636<sup>167</sup>. En 2001, el nuevo Código Minero establece tres años para que los pequeños mineros soliciten su legalización, programa en el cual “a noviembre de 2013 se habían recibido 3.114 solicitudes de las cuales 80% aproximadamente habían sido rechazadas y únicamente el 5% tenían contrato de concesión inscritos en el RMN, un 5% suscritos y un 2% para firma.” (PFM 2014: 17) El siguiente programa se llamó “Formalización de la Minería Tradicional” surgido de la Ley 1385 de 2010 –reforma al Código Minero- y para junio de 2013 contaba ya con 8.125 solicitudes “de las cuales el 39% fueron rechazadas, un título minero otorgado y 4.959 solicitudes en trámite.” (PFM 2014: 17) De los datos fácilmente se deducen las grandes limitaciones de los programas de legalización y en general, la ausencia de una política integral de acompañamiento a los mineros. A la vez que se insiste, como nunca antes se había hecho, en la legalización, aumentando las restricciones a la minería informal, se diseñan unos programas en los que la gran mayoría de mineros no pueden engancharse. Pareciera que la institucionalidad se debate entre un interés por transformar esa minería informal y por criminalizarle. Y esto de alguna manera lo refleja la figura de las Áreas de Reserva Especial. Considero que éstas responden a la intención de adecuar la minería informal con parámetros funcionales a una industria minera proyectada para Colombia. Un documento de 1997, escrito por el Banco Mundial, es bastante útil para comprender el

---

<sup>166</sup> Las ARE's tienen “el propósito de definir y poner en marcha proyectos mineros especiales enfocados a las comunidades mineras para desarrollar actividades de capacitación, fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren; en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías con el sector privado para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización de los minerales existentes’ (...) Desde la expedición de la Ley 685 de 2001, la Institucionalidad Minera ha recibido, a agosto de 2013, 89 solicitudes de declaración de áreas de reserva especial, de las cuales 24 han sido declaradas, 23 rechazadas, 11 en evaluación, 10 subsanando deficiencias, 6 para rechazar, 4 delimitadas sin estudio, 3 con PTO y PMA, 3 en trámite, 2 desistidas, 1 para declarar y 2 para visita.” (PNFMC 2014: 28)

<sup>167</sup> “El mismo año fueron recibidas 3.006 solicitudes para legalización de minas en todo el país de las cuales se resolvieron alrededor de 900, de estas aproximadamente el 47% fueron para carbón y el restante para otros minerales” Y para esa época se vislumbraba una nueva mirada de la pequeña minería y habían sectores que promovían “la importancia que la nueva legislación minera orientara y fomentara el crecimiento del sector, *‘dejando de lado la costumbre proteccionista de la minería informal o ilegal’* y propendiendo para su crecimiento, asociatividad, financiamiento y manejo racional de los recursos y del medio ambiente” concepto de minería informal que se presentó en la propuesta de reforma al Código de Minas de 1988, en el Congreso en 1996. (PNFMC 2014: 17)

posible sentido de la figura jurídica. En éste se plasman las líneas que orientaron la mayoría de las adecuaciones normativas que vivieron los países Latinoamericanos en el sector público minero durante los años 80's y 90's –recordemos que el BM asesoró la confección de la Ley 685 del 2001 el Código Minero de nuestro país-. Entre otras cosas, recomienda fortalecer la pequeña y mediana minería a través de adecuar sus prácticas socioeconómicas para alcanzar unos criterios técnicos, financieros y administrativos. De esta forma serían actores útiles en la nueva “estructura de la industria minera”, en la que es necesaria la participación de empresas mineras de todos los tamaños. Esta última afirmación se fundamenta en al menos dos premisas: por un lado, es necesario explotar todos los yacimientos mineros sin importar el tamaño; por otro, las empresas mineras pequeñas y medianas tienen funciones específicas en la industria minera con ventaja relativa frente a otras empresas.

Pero éstas no siempre estuvieron presentes tan explícitamente en la lectura que hacen esas grandes corporaciones. Como el mismo BM explica, es la transformación en la morfología de la industria minera internacional acaecida durante finales de la década de los 70's, la que les permite configurar un nuevo paradigma de lo que debe ser su “estructura” ideal: por efecto de las alzas en el precio del oro surgían numerosas empresas “junior” con altas capacidades técnicas y administrativas e insertadas en mercados globales de capital, que les permitían captar inversiones de alto riesgo para prospección y exploración. Asumiendo esa fase del proceso minero que había sido relegada en años anteriores por las grandes empresas mineras que monopolizaban los yacimientos constatados, estas “junior” se convertían en una importante herramienta para dinamizar una industria que venía de un periodo “recesivo” y con una baja inversión en exploración. Esta especie de división del trabajo por fases del proceso minero, llevó a revalorar el papel que podían desempeñar las pequeñas y medianas empresas mineras, la estrategia de alianzas corporativas y la adecuación de los marcos jurídicos para posibilitar la fácil circulación de los derechos mineros.

Actualmente, para el BM, la industria minera necesita de diferentes actores mineros con disposición a explotar una diversidad de yacimientos de varias proporciones. Las grandes compañías mineras solo buscan yacimientos que signifiquen una ganancia de capital

proporcional al que pueden invertir. Por esto, considera necesario contar con elementos interesados y capacitados para explotar medianos y pequeños yacimientos, que *deben* también ser extraídos. En ese sentido, a propósito de la “Minería Mediana” nos recomienda: “Una vez que se hayan consolidado, esas empresas podrían hacer hincapié en: i) la optimización de su estrategia financiera mediante un mayor uso de los servicios que ofrecen los bancos de inversiones; ii) los **proyectos de prospección comunitarios**, y iii) las posibilidades de explotación y expansión de las minas pequeñas, pues éste es el campo en el cual las empresas mineras medianas son expertas y tienen una ventaja relativa respecto a las compañías mineras internacionales.” (Banco Mundial 1997: 67) Una de las dimensiones principales que se enfatiza en el documento es la promoción de una “cultura empresarial minera” y la incorporación de personal administrativo y técnico “competente” en la toma de decisiones operativas y financieras de las pequeñas y medianas empresas. Lo anterior con la finalidad de crear una mirada de negocios sobre la actividad minera que permita romper las barreras que representa la práctica minera de subsistencia. Y de esta forma, como ya lo señalé, llevarles a cumplir un papel productivo en la nueva estructura de la industria minera nacional hacia la que se nos pretende dirigir.

No todas las formas de pequeñas minerías son susceptibles de adaptar, desde la visión del BM, por lo que las ARE’s podrían funcionar, desde nuestro punto de vista, como un instrumento para la selección de determinadas “comunidades mineras tradicionales” para la intervención institucional en esta vía. La definición y objetivos que el Código de Minas del 2001 presenta de esta figura parecen acoplarse a esa valoración específica de la pequeña y mediana minería. La alerta que genera en el Consejo Comunitario la posibilidad abierta por ese Código para realizar alianzas estratégicas desde la figura del ARE, también está presente en líderes del Cabildo de Cerro Tijeras,

Se hablaba del Área de Reserva Especial minera, que teníamos que trabajar en sociedad con algunas empresas que venían a hacer explotación a gran escala. Y como comunidad indígena corríamos un riesgo, porque una comunidad que si bien pone todo el tema de recursos naturales, no tiene las herramientas necesarias; entonces allí prácticamente quien pone la plata no iría en condiciones iguales para distribuirse las ganancias, si hablamos del tema económico no más. Y veíamos que no era muy conveniente y no es conveniente esa

propuesta (...) Incluso lo planteó el presidente Uribe en esa época. Que incluso si la validábamos con las empresas y denunciábamos [las minas] incluso, podíamos adquirir toda la pólvora que fuera necesaria porque en algún momento como chantaje de no tener un título minero y poder explotar las minas que hacían los afrodescendientes, pues no vendieron de la pólvora (...) Eso lo dijo [Uribe] en un consejo comunitario, que va a propósito de la catástrofe del municipio de Suarez (...) pa' que pudieran explotar y se generara desarrollo en el municipio. (Entrevista con Enrique Güetio 2014)

No ha sido posible identificar la fecha o algún registro del consejo comunitario que señala el entrevistado, aunque varios líderes afrotomeños en diferentes conversaciones también referencian eventos similares y encuentros con Uribe. Sin embargo, más allá de la confirmación exacta de la fecha y el tipo de encuentro, buscamos resaltar la fuerte percepción del ARE por parte de Güetio, como un mecanismo para rentabilizar la pequeña minería a través de la alianza con socios estratégicos. Esa orientación hacia las “alianzas estratégicas” se viene fortaleciendo actualmente también en el marco de la Política de formalización y fomento minero (PFFM). Esta nueva política pretendidamente más ambiciosa que los programas anteriores, junto con Plan de Ordenamiento Minero, intenta re-estructurar el sector. En ese ejercicio, el Plan de Ordenamiento Minero plantea como segundo problema estructural del sector minero, la minería informal,

“(ii) la minería informal no tiene las capacidades técnicas para la explotación de los recursos, contamina el medio ambiente, sus trabajadores laboran en condiciones riesgosas, no tienen seguridad social y no pagan regalías (...) Los impactos del problema (ii) se disminuyen promoviendo alianzas estratégicas entre pequeños mineros con medianos, grandes y el gobierno (en sus distintos niveles, nacional, regional y territorial). Esto hace que los mineros informales tengan incentivos para formalizarse y legalizar su actividad, pues las asociaciones los hacen más productivos.” (POM 2014: 30-31)

La solución, según el gobierno, será un fuerte “*Plan de choque para la formalización*” y una política de “*Estímulo a mineras grandes para formalizar mineros informales*”<sup>168</sup>. Los

---

<sup>168</sup>“En el corto plazo, se debe continuar facilitando arreglos de riesgo compartido entre mineras grandes y pequeños mineros informales o legales, sobre la base de la sostenibilidad del negocio y de los arreglos. Esto ya lo vienen haciendo las empresas mineras con muy buenos resultados. MILPA y Gran Colombia Gold son ejemplos exitosos de estas iniciativas. A mediano plazo, a semejanza de lo realizado en Chile, valdría la pena pensar en una entidad tipo ENAMI (de naturaleza mixta o de cooperación internacional), que se encargue de la organización, capacitación, acceso al crédito, compra y comercialización del mineral de los antiguos mineros informales incluidos en procesos de formalización (seleccionando minerales de interés).” (POM 2014: 34)



planes piloto de formalización minera que había anunciado el gobierno son considerados en esa PFFM, la columna vertebral del “plan de choque”. Gustavo Zapata estaba al tanto de este asunto, dado que él participó de la reunión de noviembre de 2013, en la que la autoridad minera ofreció aplicar uno de esos pilotos en La Toma, rezaba el acta: “La Dirección de Formalización Minera estudiará la posibilidad de *realizar un piloto de formalización con las comunidades mineras del corregimiento de La Toma*.”<sup>169</sup>. Sin embargo, el 8 de marzo de 2015, tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema y comentaba Gustavo con indignación que para los funcionarios del gobierno, el mencionado programa piloto consistía en promover unas “alianzas estratégicas” que en últimas serían acuerdos para convenir áreas de trabajo destinadas a los actores presentes en las zonas mineras en pugna. Es decir, entre titulares de concesiones y mineros de hecho. El objetivo perseguido, según Gustavo, es la reactivación de los títulos suspendidos, para los que la organización étnica ha solicitado su anulación.

Por otro lado, cuando habla de la formalización y del ARE, Simón enfatiza en que la organización debe exigir que cualquier proceso institucional desarrollado en el corregimiento debe ser bajo un *enfoque diferencial* en tanto afectaría una comunidad negra. Según interpreto, esto les permitiría un mayor grado de autonomía, y más posibilidades de redefinir criterios o términos de referencia. Llama la atención a propósito de este mismo asunto, que en la Política de Fomento Minero, el gobierno establece un Plan de Acción y sus Proyectos, a partir de 8 líneas estratégicas de trabajo<sup>170</sup> entre las que incluye una llamada “Inclusión diferencial y desarrollo social”. En esta línea la UPME propone un “Programa de acompañamiento para el apoyo y fortalecimiento de los proyectos productivos mineros de las comunidades étnicas”, que aspira a fortalecer económica y socialmente un 40% de “comunidades étnicas identificadas con proyectos productivos” para diciembre de 2019 (PFM 2014: 96). De cualquier forma, los procesos de formalización o programas estatales mineros para comunidades –piloto, ARE u otros- parecen estar

---

<sup>169</sup> Oficio titulado “Acta de la Reunión Debate Jurídico de la Sentencia T-1045 A de 2010 en cumplimiento al compromiso número 2 del Acta del 22 de noviembre de 2013” del 29 de noviembre de 2013, Agencia Nacional de Minería, Bogotá. (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM, Carpeta II: 161-162)

<sup>170</sup> Son: Coordinación interinstitucional para la gestión eficiente, Formación para el trabajo minero, Inclusión diferencial y desarrollo social, Información para la formalización, Fortalecimiento técnico, asociativo y empresarial, Recursos e incentivos para la formalización, Minería bajo el amparo de un título, y Normatividad y lineamientos para la formalización minera. (PFM 2014: 74-75)

orientados por la intención institucional de impulsar, por un lado, una política del “buen vecino” que permita la convivencia entre algunos mineros locales y los titulares de concesiones. Y por otro, de transformar unas específicas subjetividades ligadas a las prácticas mineras actuales, para producir unas más aptas en esa industria ideal. Pareciera que la subjetividad del “minero empresario” y la estandarización técnica son fundamentales en esta tarea. Sin embargo, esta lectura puede ser discutida, podemos por ejemplo considerar que estos programas y mecanismos –como el ARE- no están finalizados y no son necesariamente coherentes de forma unívoca con los postulados del BM. En el caso de que esas intenciones sean impulsadas conscientemente por la mayoría de funcionarios del sector minero estatal, aún la aplicación de esos programas y mecanismos son procesos que están expuestos a numerosas situaciones y relaciones de poder, en las que los actores locales comunitarios y divergentes podrían incidir para modificar su rumbo.

La subsistencia como finalidad de la práctica minera tradicional es reivindicada por diversos líderes de la organización negra, y en el discurso más general de las dos organizaciones. Por otro lado, también he encontrado posiciones de comuneros mineros que consideran necesario realizar procesos de tecnificación de la minería, que permitan hacer la práctica menos riesgosa para la salud de los trabajadores, y en algunos casos, también para hacer más rentable las minas. Considero que la posibilidad de tecnificar y generar las condiciones para aumentar la renta de las minas, tiene múltiples aristas que vienen siendo valoradas por algunos líderes. Cualquiera de estas posiciones tendrá que hacer frente a un contexto específico en el que se podrían concretar procesos de ese tipo, contexto del cual he intentado presentar algunos aspectos generales.

**Tabla 4.**

<b>SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN VIGENTES LEY 1382 DE 2010 EN SUAREZ- CAUCA</b> <b>Actualización del Catastro Minero: 21 de Mayo de 2014</b> <b>Extraído de HOJA DE REPORTE: RT-0302-14 ANM</b>						
Área (ha)	Expediente	Fecha Radicación	Minerales	Titulares	Municipios	Corregimiento y Superposiciones con otros Títulos
57,00	OE9-10111	09/05/2013	CARBON TERMICO	(29362868) DERLY SOFIA FAJARDO SANCHEZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA	Asnazú. Norte del Municipio colindando con Buenos Aires.
487,63	OE8-09192	08/05/2013	CARBON TERMICO	(9006124201) ASOCIACION MINERIA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA DE COLOMBIA	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA	Asnazú. Norte del Municipio colindando con Buenos Aires.
90,68	OEA-09583	10/05/2013	CARBON TERMICO	(10470628) JOSE MIGUEL CARABALI GONZALEZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA	Asnazú. Norte del Municipio colindando con Buenos Aires.
25,05	NLL-09521	21/12/2012	BAUXITA (MIG)	(2595476) LUIS LEONEL CAMPO	SUAREZ-CAUCA	Asnazú. Norte del Municipio.
65,21	OE9-10521	09/05/2013	CARBON TERMICO	(76337574) JOSE ANIBAL APONZA MORENO\ (3048561) NICOMEDES PATINO GAVIRIA\ (31465723) ELIZABETH MARTINEZ OLAYA	SUAREZ-CAUCA	Asnazú.
110,17	OE9-08591	09/05/2013	CARBON TERMICO	(34538396) NAZLY BETANCOURT PEA\ (6530635) ENRIQUE MARTINEZ OLAYA\ (10471783) OVIDIO SOLANO URRUTIA	SUAREZ-CAUCA	Betulia/Asnazú, subiendo por El Amparo
35,00	OE6-10322	06/05/2013	CARBON TERMICO	(10472077) HAROL SILVA LOPEZ	SUAREZ-CAUCA	Betulia/Asnazú, subiendo por El Amparo
125,18	OE9-10091	09/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10472933) HILARIO GUETIO CAMAYO	SUAREZ-CAUCA	Mindalá. Una parte se superpone al título GD6-121 de Rendle Andrés (Cosigo Resources)
103,72	OE6-10211	06/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10472728) JON JAIRO FERNANDEZ FRANCO\ (10472505) VICTOR MINA SOLANO	SUAREZ-CAUCA	Mindalá. Gran parte se superpone al título GD6-121 de Rendle Andrés (Cosigo Resources)
94,65	OBS-08251	05/02/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10660663) HUGO GERARDO BRAVO GUERRERO	SUAREZ-CAUCA	Mindalá. Gran parte se superpone al título GD6-121 de Rendle Andrés (Cosigo Resources y al título FLN-093 Carabalí Miguel Antonio
107,57	OE6-11201	06/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10472216) PASCUAL MINA CARABALI\ (34500516) MARICELA CARABALI	SUAREZ-CAUCA	Mindalá. Se ubica justo al sur de la Solicitud de legalización OBS-08251 y se superpone con el título GD6-121 de Rendle Andrés (Cosigo Resources)
139,04	OE6-10321	06/05/2013	MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(16841954) JHON MALLER GIRALDO CORREA	SUAREZ-CAUCA	Betulia/Los Robles. Abarca el título EEK-152 de Giraldo Alonso y llama la atención que hay dos solicitudes de contrato de concesión específicamente sobre esa misma porción la LLG-14531 a nombre de Martínez Mor Yara/ Montaña Pezzotti Liglia, y la LLD-08181 a nombre de Giraldo Alonso.
86,57	OE7-15002	07/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(34500344) MARIA FELISA YANDY CAMPO	SUAREZ-CAUCA	Agua Clara. Vereda Matecaña.
58,83	OE7-14461	07/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(34500739) DEBORA HUILA CRUCES\ (76336677) HECTOR ADELO ZAMBRANO	SUAREZ-CAUCA	Agua Clara. Vereda Matecaña. Las dos personas aparecen en el registro de "listado familias en acción para población indígena" en la Web del municipio de Suárez, Cauca.
56,37	OE9-16083	09/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(14973704) LUIS ANGEL VALENCIA WILCHES\ (10471653) LUIS ANGEL SOLANO URRUTIA\ (29939077) MARTHA ITALIA CASTANEDA PENA	SUAREZ-CAUCA	La Toma. Se superpone gran parte con el título EKE-151 de Ruiz Raúl (hermano de Olga Nidia Ruiz)
149,94	OEA-14483	10/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(76225329) ARMANDO ORTIZ LUCUMI	SUAREZ-CAUCA	La Toma. Se superpone gran parte con el título EKE-151 de Ruiz Raúl, todo el EET-144 de Lucumí Eusebio y el un pequeño tramo del BFC-021 de Sarria Héctor Jesús.
93,14	OEA-16161	10/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(76225355) SABINO LUCUMI CHOCO	SUAREZ-CAUCA	La Toma. Se superpone completamente al título EET-143 de Lucumí Eusebio, así como con más de la mitad del BFC-021 de Sarria Héctor de Jesús.
95,46	OE6-10001	06/05/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(76225215) NORALDO ARARAT LUCUMI	SUAREZ-CAUCA	La Toma. Se ubica justo al sur del título BFC-021 y se superpone un poco con el título HJ3-08211 de la AGA.
48,71	ODB-11001	11/04/2013	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10474522) FERNANDO RODALLEGRA CARABALI	MORALES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA	La Toma. Vereda El Hato

Fuente: Tabla Solicitud de Legalización Ley 1385 en el Departamento del Cauca y mapa de títulos mineros, propuestas de contratos de concesión y solicitudes de legalización vigentes en el municipio de Suárez; información proporcionada por la Agencia Nacional de Minería mediante derecho de petición.

### **3.4. Las multinacionales: el caso de Cosigo Resources y la Sociedad Kedahda o AngloGold Ashanti**

Las convocatorias de la red solidaria de organizaciones que he descrito anteriormente centraban su atención en la figura de la Sociedad Kedahda, pero como sabemos no es la única empresa multinacional con títulos en el municipio de Suárez. La Cosigo Resources y la Anglo American Colombia Exploration ostentan también importantes áreas para explotación, incluso mucho mayores que las que AGA hoy tiene bajo su derecho minero. Sin embargo, la presencia directa en el municipio ha estado principalmente relacionada con esta última y con la Cosigo. En mi interlocución con líderes de las dos organizaciones étnicas y mineros de La Toma, he reconocido un recurrente desconocimiento sobre los títulos de la Anglo American, de la que al parecer no se ha constatado una presencia directa en la zona.

La Cosigo Resources es una empresa minera que podríamos catalogar como “junior”, a diferencia de la AGA y de la Anglo American, dos empresas de gran capital en la industria minera mundial, aunque esto puede cambiar según las ventas de acciones y fusiones<sup>171</sup>. He notado que pocos líderes señalan este tipo de diferencias entre compañías mineras. En general, parece haber menos información en la Web sobre Cosigo, su historia y sus proyectos, a comparación de las otras dos empresas. He encontrado menos estudios al respecto, probablemente porque, según sugieren los datos que he podido obtener, no parece ser una empresa de larga trayectoria. Entre los líderes indígenas con los que he dialogado sobre el caso de Cosigo Resources, Enrique Güetio es quien me ha aportado mayor

---

<sup>171</sup> Para profundizar en la trayectoria de Anglo American PLC y su relación con AngloGold Ashanti revisar a partir de la p. 111 del libro de Idárraga, Andrés. Muñoz, Diego y Vélez Hildebrando. (Idárraga *et al* 2010) Según la informaciones presentadas en este trabajo “hasta 2006, Anglo American poseía el 50% de AGA. En ese momento redujo su inversión al 48,8% y en 2007 al 17%.” (Idárraga *et al* 2010: 119) Más adelante en 2009 vende el restante porcentaje (11,3%) aún mantenido bajo su control, de acuerdo con los autores, esta separación de Anglo American de AGA responde a los escándalos por violación de derechos humanos en los que se ha visto envuelta esta última multinacional. Frente a Cosigo Resources, se puede consultar información en (Weitzner 2012: 127). En un aparte de su informe financiero de 2013, manifestaban: “La compañía está implicada en el negocio de la exploración mineral. La compañía aún no ha determinado si sus intereses de propiedad contienen depósitos minerales recuperables económicamente. La recuperabilidad de los costos de adquisición y exploración relacionados con estos intereses de propiedad depende de un número de factores que incluye el descubrimiento de reservas económicamente recuperables, confirmación del interés de la compañía en los títulos mineros, la habilidad de la compañía para obtener financiamiento necesarios para completar el desarrollo y una futura producción rentable o ganancias producto de la venta del mismo.” (Traducción propia) En Cosigo Resources LTD. 2013 noviembre 22. Condensed Consolidated Interim Financial Report. Three and nine months ended september 30, 2013 and three and nine months ended september 30, 2012 (Unaudited-Prepared by Management). P.7 Citado en adelante como (Cosigo Resources LTD. 2013)

información. Meraldiño había escuchado, como Güetio, que esa compañía tenía titulado Cerro Negro, pero manejaba solo esos datos. Otros cabildantes desconocen por completo la empresa, por ejemplo Manuel Belalcazar de Agua Clara y exgobernador (Entrevista Con Manuel Belalcazar Febrero de 2015) u otros más de Altamira a quienes les he preguntado. Según Güetio, la empresa llegó sin presentarse como tal a algunas veredas de la zona occidental, “la comunidad de Betulia, Bellavista” y en el “Cerro simbólico que tiene la región, que es el cerro Piedra Escrita”, en donde los supuestos “turistas” contrataron “caminatas ecológicas”, el entrevistado ubica los hechos hacia el año 2007, aproximadamente,

Contratando gente, diciendo que son turistas, que llegan a la comunidad en calidad de turistas y llegan a Cerro y empiezan a hacer todo un registro de la región y la comunidad de alguna manera ingenuamente o inocentemente cae en esta trampa, y cuando se dan cuenta es que eran geólogos; que empezaban a recoger muestra de agua, rocas o material, y después al poco tiempo los títulos se empezaban a dar sobre todo del 2009 en adelante. (...) (Entrevista con Enrique Güetio 2014)

Indagando un poco más, tuve la oportunidad de entrevistar a un habitante de la vereda Senderito ubicada en el corregimiento de Mindalá, en donde actualmente esa compañía tiene su concesión minera. Ramón Tobar me explica que esta empresa hace presencia en el territorio occidental del municipio, principalmente en su corregimiento, con una “metodología” que coincide en parte con lo que recuera Güetio, aunque con algunas variaciones<sup>172</sup>. Según el entrevistado, la empresa realizó varios recorridos en aquel corregimiento, recogiendo muestras y demarcando puntos de interés con cintas de

---

<sup>172</sup> Según el entrevistado: “pero dentran (Sic) con una metodología ciertas personas, diciéndoles a las comunidades que necesitan que los guíen a estudiar el tema de las fuentes de agua pero, y les pagaban aproximadamente entre 90, 100 mil pesos por un rato que fueran (Sic) (...) le dicen que recojan las arenas de la quebrada en puras, en puros tarros, unos recipientes que ellos le daba (...) para muestras de agua y muestras de suelo decían ellos, nada más y llevaban unos barrenos, con los barrenos tomaban muestras (...) iba un personal especializado, al personal que llevaban de la comunidad lo llevaban era como guía y para que voliaran (Sic) machete para que trochaban donde estaban, donde estaban los puntos.” Explica que él personalmente constató que era la Cosigo Resources cuando le ofrecieron un negocio a su padre por esa misma época “ya nos dimos cuenta porque llegaron específicamente a la finca de nosotros de, de mi padre llegan y le dicen: ‘le damos por ese lote de tierra que tiene allá, le vamos a dar 300 millones de pesos, entonces pues nosotros conservamos todavía nuestros arraigos y la cultura (...) dijeron que necesitaban para la explotación minera; mi papá les dijo: ‘si ustedes quieren, yo no les vendo, quieren trabajamos en compañía’ (Sic), dijeron que en compañía no. Tonces (Sic) dice la señora: ‘vea, no, no discutamos más ese tema, vaya a Cali y le damos la plata’ (...) teniendo en cuenta de que nosotros sabíamos lo que había en la región, dice mi padre ‘no, no podemos venderle’ y nos llama a los hijos y ‘no podemos vender’.” (Entrevista con Ramón Tobar enero 2015)

colores<sup>173</sup>. También, agrega, hicieron presencia en el sector de Turbina, Tamboral, Maraveles, La Estrella, y todo el sector de Cerro Damián<sup>174</sup>. La compañía se desplaza hacia el corregimiento de La Betulia, información que coincide con la versión de Enrique Güetio. Tobar recuerda que estos hechos se desarrollaron aproximadamente por en el año 2005, dos años antes de la fecha sugerida por el ex -gobernador del Cabildo. Tobar detalla un poco el tema,

Algunos de los comuneros que estaban en ese sitio de Tamboral, consiguieron otros amigos de a, del sector de la Betulia, específicamente Playa Rica y empiezan a hacer también el trabajo, y lo llevan a uno de los sitios, que lo reconocemos como un sitio ancestral, el sitio de Piedra Escrita, que está asentado en Santa Bárbara, entre Santa Bárbara, Playa Rica y la Betulia. Sacan muestras desde, La Alejandría, Playa Rica y Santa Bárbara (...) Ya a los dos años encontramos de que la, que esa región específicamente del sector de Pueblo Nuevo, Las Badeas, Senderito, La Meseta, Finlandia, Arenal, Buena Vista habían, les habían concedido un título minero a aquella empresa Consigo Resources (Entrevista con Ramón Tobar enero de 2015)

Empleados de esa compañía también se presentaron en el corregimiento de La Toma y en Buenos Aires<sup>175</sup>, de donde pretendían extraer muestras de algunas minas y afloraciones sin la autorización de los mineros. Uno de estos episodios ocurridos en Buenos Aires fue denunciado por la ACIN a mediados de 2008. Pudimos leer el comunicado gracias al informe realizado por Viviane Weitz en el marco de una investigación adelantada por el Instituto Norte-Sur, en el que cita el artículo. Se identifican situaciones similares a las relatadas en el caso de Suárez: “describe cómo doce empleados de Cosigo Resources Ltd

---

<sup>173</sup> En sus propias palabras “vuelven [unos 2 meses después] y entran y hacen una demarcación en el territorio (...) en las quebradas aparecen unas señas, unaaas, puntas, marcadas con unas cintas rojas, unas zapotes y unas amarillas, pues para nosotros que andamos por el territorio ya se nos hizo raro pues que apareciera estas cintas (...) llevamos uno de los mayores o sabedores ancestrales, para que nos diera un lineamiento qué significaban esas marcas, porque para nosotros no era común, dice el mayor el sabedor ancestral dice ‘saque un puñado de esa tierra que está allí’ y se encuentra de que... ‘y lávenlo’: había oro.” (Entrevista con Ramón Tobar enero 2015)

<sup>174</sup> En el informe de la compañía referenciado antes se refiere en un corto aparte a este derecho minero: “La compañía pagó los derechos al gobierno y adquirió varias concesiones mineras en el departamento del Cauca, en la región de Damián, región de Colombia. En septiembre 30 de 2011 los esfuerzos de investigación en el área fueron temporalmente suspendidos por las autoridades gubernamentales. Las licencias continúan vigentes pero los pagos requeridos para la concesión no son ahora exigiros por el gobierno en septiembre 30 de 2013.” (Traducción propia) (Cosigo Resources LTD. 2013: 16)

<sup>175</sup> Me cuenta al respecto: “porque en esos tiempos, de alla habían sacado a Cosigo Resources. O sea Cosigo Resources, ellos fueron a hacer unas obras de unas... prospección. Entonces ya la gente se emberracó (Sic) y los amarraron o sea los, y eso un problema allá de marca mayor en el medio como de más de cuatro mil personas. Eso fue, eso fue en esos mismo tiempos de la... Anabel: ¿del ARE? Simón: sí, si no estoy mal eso fue como en julio o agosto [2007].” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

(Sic) entraron a la Reserva Delicias y adelantaron actividades de exploración sin el consentimiento del Consejo (Sic) Indígena de Delicias. Miembros del Consejo interrogaron a los empleados de Cosigo quienes dijeron que tenían permiso del Municipio de Suárez. Los miembros del Consejo contactaron el gobierno municipal y la oficina del alcalde y ambas declararon no tener información con respecto a las actividades de Cosigo. (...) El artículo expresa el temor de que Cosigo regrese con la fuerza pública (Sic) para lograr sus objetivos y afirma que esto incrementará el conflicto en la región.” Incluso Weitzner señala cómo es una “estrategia reportada” por los tomeños<sup>176</sup> (Weitzner 2012: 131).

Sobre la empresa, Simón exclamaba al preguntarle sobre su llegada, en una conversación el 1 de septiembre de 2014, “¡esos son los que peor les ha ido por acá!”. La Cosigo, además, intentó respaldar sus actividades de prospección con el acompañamiento de la Fuerza Pública con la que buscaba, pienso, intimidar e imponer su ingreso “arbitrario” a las minas,

Por eso fueron como retenidos en Buenos Aires, por eso fueron retenidos en La Toma, A: ¿acá también los cogieron? S: ¡claro! ¡Ja! acá casi los ponemos a hablar español. A: y ¿cómo fue esa anécdota? S: No porque ellos entraron (Sic) con el Ejército, entraron (Sic) ese día estaban, estaban enterrando un líder (...) sí estábamos enterrando a Geremías, entonces ellos pensaron que la, que las minas estaban solas (...) [Pero] había un minero, entonces el minero cuando ellos llegaron con el Ejército ‘que no, que somos el Ejército Nacional y que, y que venimos a hacer un estudio con’, ahí mismo se les dijo ‘aa bueno’, ‘ustedes vienen a hacer su estudio pero pues acá están en Consejo Comunitario’ y entonces en eso llamaron y en un momentico 50, eso alrededor nos logramos juntar más de 200 personas (...) se les ordeno que tenían que irse, que porque acá no se había hecho Consulta (...) ‘tenemos el respaldo del estado y tenemos el respaldo del Ejército Nacional’ y entonces nosotros le dijimos ‘ustedes tienen el Ejército, nosotros no estamos en contra de del Ejército pero considero que tienen que respetar, ¿sí? (...) como zona de comunidad

---

<sup>176</sup> Weitzner cita el artículo donde se señala que existe una concesión sobre el área de Cerro Catalina a nombre de Cosigo en el que la empresa buscaba prospectar, “*“además de entrar en varias áreas de nuestra Reserva y en la zona minera indígena [una extensión territorial definida en el Código de Minas como un área en la que los Pueblos Indígenas tienen prioridad para todas las actividades mineras]”*” Citando directamente el artículo de la ACIN. Sobre la prevención hacia personas extranjeras por el comportamiento de la Cosigo, Weitzner cuenta su experiencia en la investigación: “la primera vez que el equipo del Proyecto INS-PCN-RICL llegó a las minas de Suárez en 2009, los mineros a pequeña escala creyeron que éramos representantes de Cosigo Resources. Apparently, representantes de esta compañía habían ido recientemente a las minas a tomar muestras sin el debido proceso de consulta. Claramente había tensión en el ambiente y tomó un buen tiempo disolverlo después de que un miembro del PCN explicó que la delegación, y los canadienses presentes, estaban con el PCN y no con la compañía minera.” (Weitzner 2012: 131)

negra hasta que no hagan la Consulta no dejamos sacar mina' (...) llamamos a la comandancia, y la comandancia lo que hizo fue que el Cabo que estaba ahí no te, no estaba autorizado (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

Gustavo Zapata y Julián me habían comentado sobre el episodio en el que varios líderes del Consejo Comunitario emprendieron la carrera para alcanzar unos funcionarios de la compañía que habían extraído material con engaños, logrando decomisar las muestras en la cabecera municipal<sup>177</sup>. Estas situaciones coinciden con lo que Ramón Tobar me informa que sucedió en Meseta, donde empleados de la Cosigo regresaron a una reunión con la comunidad en la que pretendían que se les autorizara la realización de estudios mineros, a cambio de beneficios. Según su testimonio, las personas reunidas respondieron de forma rotunda que no estaban interesadas en las propuestas de los foráneos<sup>178</sup>. La información que presenta Weitzner sobre esta zona es esta “En octubre de 2011 representantes de la compañía se acercaron a la zona y se encontraron con los Consejos Comunitarios de Puerto, Mindalá y Mesetas con el objetivo de consultar sobre un título en la zona. Sin embargo, miembros de la comunidad afirmaron que el Estado debía conducir y coordinar la consulta, y no la compañía.” (Weitzner 2012: 131) Le pregunto a Simón si la compañía ha vuelto al territorio, me explica que posterior a esas tensionantes situaciones habían regresado “con la gente del Ministerio” diciendo que iban a hacer una Consulta, pero planteaban que ese proceso se desarrollaría con la Cooperativa de Mineros de Suárez a lo que los líderes

---

<sup>177</sup> Simón me detalla el episodio en la breve entrevista que le hice en enero de 2015: “un día entraron acá a las minas también con engaños (...) que venían de parte de del gobierno que solamente era una visita a ver cómo la gente trabajaba, y cuando ya ellos vimos fue que ya llevaban mina en su carro, entonces, no señor (...) eso fue pa' Mindalá, Miravalle, pa' acá (...) porque la gente cuenta: 'que ve que por acá estuvo tal perencejo que muchachos y ¿ustedes saben? No, nosotros no sabemos' (...) porque a veces decían que, que tenían que permiso de uno (...) entonces nos contactábamos: 've que que cómo así que vos diste permiso que pa' que tal persona viniera, no nosotros no hemos dado permiso ¿dónde están!? que no, que van en tal carro', entonces las motos, ¡sa! Salimos, (risas) (...) entonces: 'a muestre el carro', entonces aa, 'que de tal mina vienen, a no, que nosotros venimos de tal mina (...) que nosotros solamente sacamos muestra de la carretera', 'ni de la carretera ni nada, vamos a ver', ¡ay! tenían ellos marcao (Sic), los nombres de las minas y sus referencias, ahí mismo todo eso a un costal, se queda, '¡se van!' 'no, ustedes no los podemos retener, pero nuestras muestras sí se quedan' (...) a los ojos de todo el mundo, si no estoy mal, una de esas muestras las quitamos ahí al frente de la Policía por la parte de abajo” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

<sup>178</sup> Tobar lo explica con detalle: “volvieron específicamente a lo que fue La Meseta, y la gente los sacó de allá (...) convocaron a una reunión a través de un líder, toes (Sic) la comunidad los echa, les iba a quemar hasta el carro, así de sencillo, porque ya nosotros sabíamos que estaba sucediendo (...) pero nunca, pero en ningún momento se identificaban como empresa minera, hasta ahí todavía no se identificaban como empresa minera, de que si les permitían en los territorios, en los terrenos hacer un estudio que si querían que los bonificaban (...) toes (Sic) la gente pregunta que pa' qué estudio, pues ya la gente ya sabía qué había sucedido, toes (Sic) la gente dice 'no señores, nuestro territorio no está, no se está vendiendo ni se está regalando, se van de aquí' y es donde la gente se alza, habían aproximadamente unas 120 personas y cogieron una camioneta doble cabina una Toyota, y la gente les dice 'se van, y tienen 20 minutos para que se vayan de aquí' fueron 4 personas, un chofer y tres personas, dos mujeres y un hombre (...) se fueron de una vez, no esperaron más” (Entrevista con Ramón Tobar enero de 2015)



étnicos reaccionaron fuertemente desautorizando la organización gremial para este tipo de procedimiento,

Entonces que la consulta que era con la cooperativa les dije ‘qué les pasa, aquí la Consulta es con los Consejos Comunitarios, entonces señores Cooperativa -ahí mismo en la misma Cooperativa- señores Cooperativa ustedes no nada tienen que ver en esto, esto la autoridad son los Consejos Comunitarios’ (...) esa reunión ahí terminó mal, ellos se raboniaron (Sic) como siempre, el señor Andrés ¿Rinde? A: Rende sí. S: claro, él vino y se rabonió (Sic) (...) dieron su nombre de su empresa que ellos que tal cosa, lo que hacían, le digo ‘noo, ustedes pueden hacer lo que hagan’, entonces él comenzó a hablar de las maravillas que habían hecho pa’l, pa’l (Sic) Guanía, le dije ‘¡Jum! No estoy tan convencido porque yo conozco la historia de allá’ (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

Sobre el caso de los títulos que Cosigo ostenta en el Vaupés, Amazonía colombiana, Enrique Güetio me había comentado que había tenido la oportunidad de encontrar unos líderes indígenas de esa región y que, al parecer, estaban más a favor que en contra del proyecto minero<sup>179</sup>. Desconozco las circunstancias de ese encuentro y el detalle de esa posible interlocución. Por otro lado, durante la segunda entrevista con Simón, el líder hace referencia a un evento realizado en Bogotá por la Embajada de Canadá y el Instituto Norte Sur, en el que dialogaron varias empresas multinacionales con comunidades de influencia de los proyectos mineros<sup>180</sup>. Este taller puede ilustrar la trascendencia social e institucional que ha tenido la visibilización de las potenciales afectaciones que entrañan aquellos actores en lo local, así como el tipo de escenarios en los que posiblemente se desarrolló el intercambio referenciado por Güetio.

El encuentro se realizó en julio del 2010 en el marco del “Proyecto INS-PCN-RICL” (Weitzner 2012: 129) y Viviane Weitzner, a quien ya hemos citado en varias ocasiones, fue

---

<sup>179</sup> Los títulos de Cosigo se encuentran cerca de Taraira y en el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis. Curiosamente, a comienzos de este año en medio del desarrollo de una audiencia pública de la Corte Constitucional en el Parque Nacional, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que había tutelado contra la declaración del Parque por no haber consultado a las comunidades indígenas, “admitió públicamente que su estrategia legal fue organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources, que tiene un título minero dentro de este parque en el Vaupés y que no puede explotarlo mientras el área permanezca protegida.” (Bermúdez Liévano Febrero 2014) De esta forma se evidenció una relación que no se había podido comprobar.

<sup>180</sup> Me informaba Simón sobre el evento: “En Bogotá ellos lo dijeron que que no que ellos acá tenían aliados mineros, claro ellos lo reconocieron, inclusive que ese evento terminó mal terminado, eso fue un evento organizado por la Embajada de Canadá y una, un instituto que llamaba Instituto Norte Sur, que nos estaba haciendo a nosotros una formación de Consulta, entonces dentro de esa formación de Consulta se decidió llamarlos a ellos para un evento que se llamó Responsabilidad Social y Corporativa (...) eso estuvo todo, estuvo Cosigo estuvo la Greystar, estuvo Gold Mine, estuvo AngloGold Ashanti (...) eso fue en el 2009” (Entrevista con Simón Rodríguez enero 2015)

la encargada de coordinarlo. La autora señala que en la presentación que la compañía realizó en el taller “No se hizo ninguna mención al conflicto armado, aunque éste fue subrayado en las preguntas clave que los panelistas debían abordar (...) Los participantes en la audiencia abiertamente expresaron sentirse ofendidos por el enfoque de la compañía, especialmente por haberle dado regalos de navidad a los niños de la comunidad. Lo que salió a la luz en la interacción en el taller fue que aunque algunos de los miembros del personal de la compañía puedan no ser malintencionados y, por el contrario, puedan creer que están asumiendo el mejor enfoque en su trabajo y de una manera cuidadosa, simplemente no cuentan con las herramientas adecuadas y el conocimiento para asumir un programa de trabajo que respete los derechos étnicos y los procesos tradicionales de toma de decisiones. En cambio, la impresión que dejan las presentaciones es que el personal de la compañía intenta comprar a las comunidades por medio de sus niños para avanzar en los proyectos de la compañía, un enfoque que replica el enfoque de “los espejitos y las baratijas” que ha fallado una y otra vez. (...) los líderes que se pronuncian por sus derechos en la cara de Cosigo también han recibido amenazas (Sic). Hay una profunda preocupación en la zona de que los asesinatos que sí suceden estén de alguna manera ligados a las actividades de las compañías con intereses en la zona y ha habido solicitudes de investigación en este sentido.” (Weitzner 2012: 130) Y más adelante, después de describir los intentos por prospector de Cosigo dice “En resumen, las intenciones de prospección de Cosigo y sus intentos de consulta directa en vez de consulta con el apoyo y coordinación del Ministerio del Interior, ya han causado conflictos internos y, aparentemente, también amenazas de muerte.”<sup>181</sup>

La concesión GD6-121 de 1.717 Has, a nombre de Andrés Rendle, empleado de la empresa canadiense, es la tercera con mayor área para oro después de dos títulos de Anglo American. Meraldiño Caviche y Enrique Güetio señalan frecuentemente que esa compañía tiene un título minero o una solicitud en la zona de Cerro Negro y Bella Vista. Sin

---

<sup>181</sup> La autora citaba apoyando esta afirmación: “Un artículo y entrevista grabada el 7 de diciembre de 2009, por ejemplo, afirma que cinco líderes indígenas fueron asesinados por su oposición a la presencia de Cosigo Resources por las relaciones entre Cosigo y los paramilitares de las Águilas Negras. <http://intercontinentalcry.org/canadian-company-linked-to-indigenous-murders-in-colombia/> (consultado junio 10, 2010).” (Weitzner 2012: 130).

embargo, la información de la Agencia Nacional de Minería muestra que, para mayo de 2014, aún no había títulos registrados en esa zona.

Las solicitudes de concesión ubicadas en esa vereda o cerca, son para explotación de cobre y se encuentran a nombre de la Anglo American Colombia Exploration S. A: la inmensa OG2-09064 de 1.633 has (un poco al noroccidente de la cabecera entre Betulia y Asnazú) y la OG2-09084 (en todo el norte de Suárez abarcando parte de la frontera con el municipio de Buenos Aires). Otra gran expectativa minera, todavía en la orilla occidental del río Cauca, es la solicitud de concesión HCG-121 para cobre, plata, platino, zinc, molibdeno y oro, a nombre de la AngloGold Ashanti. Es en el centro del municipio, engloba una buena porción de los corregimientos Betulia, Mindalá y un tramo de Los Robles, rodeando el único título de Andrés Rendle. Para completar las expectativas ubicadas en esa zona occidental tenemos las que Anglo American ha solicitado para cobre, más al sur, la OG2-11103 y LKN-11291. En el Anexo 6 el lector encontrará el mapa del municipio con las concesiones vigentes y en el Anexo 7 con las solicitudes de concesión y legalización.

Anglo American tiene bajo su poder casi la mitad de las hectáreas concesionadas en el municipio. Abarca con sus tres grandes títulos un poco más de 4.917,6 Has de la zona sur de Suárez, corregimientos de Mindalá, Mesetas y Agua Clara, colindando con el municipio de Morales (un “pequeño” porcentaje de esos títulos cobijan ese municipio vecino). Uno de ellos se encuentra sobre un amplio tramo del lago-embalse La Salvajina, en su parte más alta.

Por otro lado, la AGA cuenta con dos títulos mineros vigentes, el HJ3-08211 y HJ3-08212X, que en total suman 349,76 Has, área que parece insignificante si le comparamos con las anteriores cifras. No obstante, es de resaltar que ostenta la mayor cantidad de solicitudes de concesión presentes en Suárez con 8, la mayoría en La Toma; le sigue Anglo American con 5, la mayoría en la zona occidental como ya hemos visto; la Sae Exploration tiene una, al igual que Four Points Mining y otras personas naturales, y la Cooperativa de Mineros de Suárez aparece con dos<sup>182</sup>. La concesión más grande de AGA, la HJ3-08211, se ubica integralmente sobre el espejo de agua del lago-embalse (muy cerca del muro de la

---

<sup>182</sup> En el corregimiento de La Toma tenemos a nombre de la AGA las inmensas solicitudes de concesión GDI-12F, GDK-094, JG1-11171; la solicitud de Sae Exploration S.A.S., LAR-11501 que abarca 873 Has del municipio, casi todas ubicadas en ese corregimiento y una de la Cooperativa de Mineros de Suárez con la ICQ-09591 de 245 Has.

represa), igual que una parte de su otro título<sup>183</sup>. Como constatamos, el Gobierno no respetó tampoco las áreas restringidas que la misma ley ha definido, en este caso el subsuelo de embalses hidroeléctricos.

Los líderes entrevistados que más información me han aportado sobre la llegada de las multinacionales al municipio, Enrique Güetio, Meraldiño Caviche, Simón Rodríguez y Ramón Tobar<sup>184</sup>, coinciden en que la primera en hacer presencia fue la AngloGold Ashanti, en ese momento denominada como Sociedad Kedahda S. A. En los vínculos que una y otra multinacional establecieron con actores locales pueden reconocerse elementos en común así como diferencias. La Cosigo parece haber apelado más recurrentemente al acompañamiento de la Fuerza Pública, por otro lado, la información que he obtenido sobre AngloGold me sugiere que ésta se apoyó mucho más en la Alcaldía para irradiar la población del municipio. El vínculo con la Cooperativa de Mineros de Suárez parece un factor en común, como veremos a continuación.

El arribo y presencia permanente de una empresa multinacional minera como la Sociedad Kedahda, era algo nuevo para las organizaciones étnicas y sus líderes<sup>185</sup>. Con su llegada, parecía emerger un contexto de nuevas disputas entorno al oro, y otros minerales como el cobre, molibdeno, zinc. En este marco, considero que las organizaciones étnicas se fortalecerían y recrearían desde su singular “esquema interpretativo”, a partir de establecer una ruta de acciones políticas contemplando los sucesivos acontecimientos e iniciativas de esos actores mineros. Aunque la AGA no fuera la “causa” o el único epicentro del nuevo momento, me interesa resaltarle como un elemento que le caracteriza, nos cuenta Simón a

---

<sup>183</sup> Durante una de las Mesas de Trabajo sobre minería los líderes solicitaban “Que el INGEOMINAS explique a la comunidad porqué (Sic) se otorgó título minero a AngloGold Ashanti con superposición en la represa de Salvajina, y porqué (Sic) con los mismos argumentos, se negó la solicitud de la Cooperativa de Mineros de Suárez.” Ingeominas Cali. 25 Junio 2010. Memorando 20104290009543 “Asunto: Síntesis Mesa de Trabajo Suárez, Buenos Aires y Morales Cauca”. (Documento de la ANM respuesta Derecho de Petición citado en Fuentes Primarias acápite 3.5)

<sup>184</sup> Ramón me comentaba “primero llegó AngloGold, ella llega primero, luego llega Cosigo”. Si tenemos en cuenta que la AngloGold parece haber hecho presencia por primera vez en Suárez en el año 2006, es probable que los recorridos de Cosigo que Ramón enmarca en el año 2005 haya sido realizados en el 2007. Enrique y Simón indican ese año, 2007, cuando hablan de situaciones similares con Cosigo.

<sup>185</sup> No se puede olvidar que en el municipio ya habían estado empresas multinacionales, especialmente la Asnazú Gold Company desde 1936 a 1952 aproximadamente, dragando el cauce del río Cauca desde la Balsa hasta la cabecera de Suárez. A pesar de esto, y aunque aquella empresa operó con un amplio campamento en Asnazú e invirtió en dos pequeñas plantas eléctricas –que necesitaba- que luego dejó a la comunidad, ni el contexto minero –local/nacional/internacional- y organizativo pueden hacer de este reciente/actual episodio una especie de repetición de otros momentos de la historia del municipio ligada a otras multinacionales.

propósito,

Yo les dije: ‘no manitos hay que coger a investigar esto’ (...) comencé a yo a investigar, comencé a ver qué había hecho la AGA, la Sociedad Kedahda en el sur de Bolívar, qué había hecho en Antioquia, qué le había hecho a los de Caldas. Y ¡ayy juemadre! (Sic), entonces les dije a estos manes: ‘nosotros estamos montados en la verraca’ (Risas) Cuando pum, cuando a los 4 meses de nosotros tener esa información, llegaron a Suárez (...) que van a trabajar con el Alcalde, y que tal cosa, ja, y comenzamos nosotros a desmontar eso (...) y a los primeros que llegaron fue a la Cooperativa, o sea, ellos cogieron su combo. (Entrevista con Simón Rodríguez)

La empresa desplegó una estrategia para su posicionamiento que incluyó la interlocución con organizaciones sociales y gremiales, tácticas de persuasión entre las cuales “gestiones”, favores y contratación de líderes “naturales” de las comunidades. En un Acta del Concejo Municipal de Suárez de su sesión del 5 de noviembre de 2009, la Coordinadora Social de la AGA, Clara Márquez, atribuía a su empresa unas ayudas otorgadas a la Cooperativa de Mineros de Suárez (CMS). En esa reunión la funcionaria hace un recuento del proceso de exploración minera que ha desarrollado la compañía, expresaba la funcionaria según el documento,

A la cooperativa de minero (Sic) le hemos colaborado para ayudarles en el trámite de la licencia minera para ellos poder hacer su explotación minera y nos hemos vinculado con ellos donde le hemos colaborado en viajes y transporte para que ellos se pudiesen desplazar a la ciudad de Bogotá hacer los tramites (Sic) (...) La cooperativa de mineros esta (Sic) sumamente agradecida con la empresa ANGLOGOL ASHANTI (Sic) por que (Sic) gracias a la gestión hoy cuentan con 2 licencias que son propias de ellos y esto hay que, enaltecerlo por que (Sic) esto no se las gana, así por así cualquiera [de] nosotros aquí si hemos colabora (Sic) (Concejo Municipal de Suárez. 2009 Noviembre)

Entre los mineros del municipio, la Cooperativa parece haber operado como una base legitimadora para AGA<sup>186</sup>. La percepción que tienen muchos líderes afrodescendientes, y algunos indígenas, sobre esa organización gremial, ha estado muy marcada por el vínculo que sostuvo con aquella multinacional. Ya hemos visto que se le tiende a concebir como

---

<sup>186</sup> Simón recuerda: “Claro, a endulzarles el oído, que el viaje pa’ (Sic) allá, que la cosa pa’ (Sic) acá, y yo les dije: ‘ayy hermanos si ustedes [miembros CMS] supieran en lo que se están metiendo, ustedes están es toriando (Sic) el mismo diablo’, y entonces, ‘que a mí cómo se me ocurría una cosa de esas’.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014).

una organización aliada o potencialmente aliada de estos actores foráneos. Estas colaboraciones referenciadas por la señora Márquez pueden ser puestas en cuestión por parte de miembros de esa organización gremial<sup>187</sup>. Sin embargo, la mayoría de líderes de las organizaciones étnicas que me han aportado información al respecto, incluyendo los entrevistados, coinciden en que la relación entre esos dos actores fue de cooperación. Puede que la fuerte polémica en torno a los intereses de AGA desatada con esfuerzo por aquellas organizaciones, llevara a que miembros de la CMS intentaran guardar discreción sobre la relación que habían mantenido con la empresa.

Escuchando el recuento que Meraldiño y Simón hacen de esta lucha, caemos en cuenta que el ambiente de relativa desconfianza hacia la AGA, presente para 2009 en amplios sectores del municipio, no existió desde un inicio, no fue instantánea esa problematización de su llegada. La lectura política que considera este tipo de proyectos mineros como un factor de importantes impactos “socioambientales” negativos<sup>188</sup> y de despojo para las comunidades locales, parecía no ser verídica a los ojos de muchos.

Por un lado, a partir de lo que Simón me ha contado, deducimos que para gran cantidad de mineros tradicionales afrodescendientes no era concebible e incluso podía parecer absurdo, que su derecho legítimo sobre las minas heredadas de generación en generación pudiera ser vulnerado. Gracias a un fuerte sentido de posesión/propiedad legítima sobre las minas, parecían no poder creer posible una desposesión masiva de éstas o un “desplazamiento” causado por algún proyecto de esa índole<sup>189</sup>. Por otro lado, gran cantidad de personas

---

<sup>187</sup> En este caso por ejemplo uno de los Concejales evidencia lo espinoso de las afirmaciones de la AGA con relación a la CMS: “El primer vicepresidente del concejo JULIAN VALDEZ CASTRO manifiesta perdón doctora sería (Sic) bueno que cuando se estuviera diciendo esto estuvieran aquí presentes los de la cooperativa por que unos (Sic) les pregunta y manifiestan que la multinacional no les ha colaborado y siempre mencionan otras entidades pero las reuniones que he, estado nunca les escuche mencionar a ustedes.” Y la AGA le aclara con más detalles: “(...) yo le agradezco concejal por lo que nos acaba de decir pero la empresa ANGLOGOL ASHANTI (Sic) si les ha colaborado a la cooperativa de mineros y les hemos dado aproximadamente unos 16 millones de pesos en transporte, alimentación y alojamiento y la fachada de la cooperativa también fue gestión de ANGLOGOL ASHANTI por que (Sic) les dejo claro que la empresa no da plata sino que hace los trámites para colaborar en lo que la persona necesita (...) no damos efectivo a nadie pero gracias al apoyo de la empresa, alcalde y a muchos de ustedes hoy cuenta la cooperativa con dos licencias mineras.”

<sup>188</sup> “pues seguimos ya como haciendo ya el ¿cómo te digo? Buscando ya los espacios de, de resistencia y socializando en las mismas comunidades de lo que era la gran, la gran minería en ese momento. Algunos pues no je creía, para algunos eso era una mentira en, en la misma cabecera municipal porque ellos lo que dijeron es que eso era el desarrollo más bonito” (Entrevista con Meraldiño Caviche mayo 2014).

<sup>189</sup> “Dije: ‘No, vea muchachos, primero me matan pero, esa pelea la iniciamos y la vamos a ganar’, ‘noooo vos estás loco’, vea, nosotros íbamos a la Toma y ‘nooo Simón, ¿usted de dónde sacó eso?’ (...) no creían, y que la gente dijo: ‘no, mi mina no me la quita nadie, que yo he heredado de no sé qué cuánto, a mi si me van a quitar la mina tienen que matarme.’ (...)” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014).

parecían tener una impresión positiva sobre la Sociedad Kedahda. Ésta hablaba de cooperar con los pequeños mineros mientras exponía su interés por explorar los yacimientos de oro. Enfatizaba en sus iniciativas de inversión y “gestión” social, con lo que proyectaba un panorama de grandes beneficios para la población y el gobierno local.

Consideramos que el posterior ambiente de desconfianza fue, en parte, resultado de una prolongada disputa por difundir esas otras visiones sobre los impactos que tendrían aquellos proyectos. Algunos líderes étnicos asumieron en ese contexto el papel solitario de contradictores, buscando disputar la opinión de los pobladores, principalmente en los territorios donde sus organizaciones se esfuerzan por consolidar una legitimidad de representación y gobierno.

En el caso de la organización indígena, la llegada de las multinacionales mineras directamente a Suárez se hace explícito por primera vez un acta de reunión conjunta entre esa organización y la institucionalidad estatal en el año 2007, según los documentos del Archivo Físico del Cabildo revisados. A comienzos de 2006 se desarrollaba una amplia reunión sobre los derechos de los damnificados de la región Salvajina y en su Acta de acuerdos<sup>190</sup> aún no se incluía el tema minero. Tiempo después, aparece como preocupación permanente en múltiples documentos de reuniones diversas, incluso las de temas aparentemente no conexos. Apartes del primer y segundo acuerdo de la referenciada acta de 2007 dicen,

1. Se aunaran esfuerzos entre la administración municipal, el concejo municipal, la personería municipal, comité de usuarios de servicios públicos, el CRIC, la ACIN, el cabildo, indígena, las juntas de acción comunal, el grupo de mujeres, las ONGS, los consejos comunitarios y demás comunidades afros, para oponerse a la entrada de multinacionales que pretendan explotar recursos naturales dentro del municipio. (...) 2. Entre la administración municipal y la oposición se gestionará de manera conjunta una

---

<sup>190</sup> “5. La reunión de la fecha si bien prestó especial interés a los temas de vías electrificación y transporte igual ha enfatizado el reconocimiento total a los acuerdos pactados en 1986 y la necesidad de revisarlos para que se cumplan”. Jornada de trabajo organizada por el Gobierno Departamental del Cauca, con participación del Gobierno Nacional - Viceministro de Minas y Energía, Asesor del Ministerio del Interior y el Responsable territorial del INVIAS-; el Gobernador Departamental y los Secretarios; Alcaldía de Suárez, Morales y Buenos Aires; “autoridades tradicionales de la zona occidente del Cauca y representantes de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes de los tres municipios.” Acta que recoge los Acuerdos de la jornada de trabajo institucional y comunitaria (Sic) por la reivindicación de los derechos de los damnificados de la región de la Salvajina. Suárez, Cauca, 5 de mayo de 2006. Archivo del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras.

audiencia defensorial y el alcalde solicitará el ministerio (Sic) del interior protección para los líderes que han denunciado amenazas.<sup>191</sup>

En otros puntos se habla del compromiso de las autoridades en la aplicación de la consulta previa y se acuerdan reuniones “para construir y firmar un documento que fije las relaciones entre la administración municipal y las comunidades indígenas”<sup>192</sup>, igual que para los afrodescendientes del corregimiento de La Toma. Ese último acuerdo nos remite a un principio político que hemos escuchado de forma insistente por parte de algunos líderes del Cabildo en las reuniones a las que hemos asistido. Ellos enfatizan en que el Cabildo es una autoridad étnica y como tal, debe ser respetada por la autoridad municipal, en tanto “par”. Pareciera que con el acuerdo se buscara establecer un mecanismo de relacionamiento con la Alcaldía desde esa posición de “pares”, de autoridad a autoridad. En otros acuerdos se aborda la actuación de la Administración local en el incendio sucedido en La Cabaña y los derrumbes ocurridos en Bella Vista y Agua Clara. Asuntos en los que la AngloGold Ashanti intervino con “ayudas”, según su propia versión. Consideramos que el documento muestra el esfuerzo del Cabildo por contrarrestar la incidencia de la multinacional en el municipio. La organización étnica lograba comprometer a la Alcaldía, al menos en el papel, “para oponerse a la entrada de multinacionales”, y todo parece indicar que, al mismo tiempo, recibía con los brazos abiertos a la multinacional.

A partir de la información recopilada hemos identificado que la presencia directa de la Sociedad Kedahda fue mucho más sistemática e insistente en el casco urbano, en las veredas Turbina y Tamboral del corregimiento de Mindalá, y en el corregimiento de La Toma. En la “parte alta” de la amplia zona occidental, la parcialidad indígena de Cerro Tijeras (principalmente corregimientos de Betulia, Agua Clara, Los Robles) fue menos evidente. En una visita a la vereda La Carmelita, durante el recorrido que desarrollamos en noviembre de 2012, conocimos el testimonio de personas que señalaban la llegada de “ingenieros” y funcionarios de “la compañía” que tomaron muestras de suelo. Esta información coincide con los datos que maneja Ramón Tobar, que durante su entrevista

---

<sup>191</sup> Acta de compromisos entre la Administración Municipal de Suárez y las comunidades asistentes a la Asamblea del 7 de junio de 2007. Asamblea del 6 y 7 de junio.

<sup>192</sup> *Ibíd.*



explica que la AngloGold había desarrollado actividades prospección de forma similar a la que utilizaría Cosigo: “lo hizo también recogiendo muestras de arena en las quebradas y se camufló (...) específicamente entre La Carmelita y El Diviso, recogió muestreos también de las quebradas y se camuflaron a través de cier (Sic), ciertas empresas que decía que venían era que era para proteger el medio ambiente que había acá” (Entrevista con Ramón Tobar enero 2015)

Durante el mismo recorrido, en la vereda Agua Clara, un mayor expresidente de la Junta de Acción Comunal se acercó para contarme que había asistido a reuniones convocadas por la AGA en Suárez y Cali. Insistía especialmente en la realizada en Cali, donde empleados de la AGA mostraron a los comuneros asistentes información satelital sobre el potencial minero de su municipio y de López de Micay. También hablaron de los proyectos mineros de interés que planeaban para la zona y explicaron, según el comunero, que más allá de la postura de las comunidades ellos desarrollarían sus proyectos estratégicos. No obstante este tipo de informaciones, todo parece indicar que la empresa no se enfocó en desarrollar reuniones con habitantes de esas zonas directamente en sus veredas u otras interlocuciones más profundas y permanentes.

Para el año 2008, Meraldiño Caviche se posesionaba como Concejal del municipio por el partido ASI. Algunos de los documentos encontrados en el Archivo del Cabildo fueron proporcionados por este líder, que es, ante todo, un comprometido cabildante. Desde nuestro punto de vista, su participación en la corporación pública permitió hacer políticamente más palpable la presencia de la empresa para el conjunto de la organización indígena. Las acciones que el Cabildo desplegó para contrarrestar en su territorio la persuasión de los líderes de las JAC por parte de la compañía, estuvieron reforzadas por esa curul en el Concejo, que, consideramos, funcionaba como una herramienta al servicio de la organización étnica. Se intentaba articular la denuncia en el espacio institucional de control político con la acción de la autoridad tradicional desde el Cabildo<sup>193</sup>.

Más ampliamente, la curul posibilitó la expresión permanente de una voz de oposición que,

---

<sup>193</sup> “yo sé que llamaron a presidentes [de las JAC] (...) Pero no tuvo como esa resonancia porque en ese momento a pesar de que éramos muy nuevos en, en el Concejo, a pesar de que éramos muy nuevos en el Cabildo, no teníamos mucha credibilidad pero nos habíamos, o sea demarcado de un, de un margen de respeto por las posiciones que habíamos venido dejando ¿Sí? Y que lo que no funcionaba, así como yo diría de una posición formal (...)” (Entrevista con Meraldiño Caviche)

si bien minoritaria, fue de gran importancia. En realidad, uno de los pocos sonidos disonantes, en medio de las adulaciones que reinaban entre los funcionarios públicos del Concejo, la Alcaldía Municipal, así como entre numerosos líderes del casco urbano, hacia la iniciativa de la AGA. Meraldiño nos cuenta como un estrecho lazo entre la compañía y la Administración y el Concejo Municipal ya estaba a la orden del día cuando debuta como concejal,

Permeó, yo diría, todas las instituciones públicas de, de la administración. (...) pues recién entrado (Sic) al Concejo, eee, lo primero que se plantea es un poco la modificación de, de ¿cómo llama? el, el reglamento interno de, del Concejo ¿Sí? Y quien financia (Sic) el reglamento interno del Concejo fue la AngloGold Ashanti ¿Sí? Y como el presidente era una persona que pues supuestamente era muy, pues no sino filial pero sí al menos sí tenía sus... (...) [Yo pensaba que] ese reglamento iba a salir financiado (...) por el mismo rubro que llega para el Concejo, pensábamos yo (Sic), cuando en un momento llega el, ya llega el, el reglamento ya listo (...) a cada uno nos va pasando de a librito. Entonces ya teníamos como ese concepto de que no a la minería y que no la AngloGold Ashanti ¿Sí? (...) [Y] uno de los Concejales que fue el Concejal Julián me dijo ‘mirá los que nos están financiando’ (Risas). Tojes (Sic) yo lo que hice fue, sí yo llegué y ¡ran!, yo le arranqué todas esas, se lo arranqué a, al librito del Concejo. Yo le dije ‘nojotros (Si) no necesitamos que nos esté financiando una empresa que sabemos que nos va, nos está violando los derechos en el tema territorial ¿Sí? Y más para los pueblos indígenas’. Yo le dije ‘yo no, no comparto eso’ (...) Le dije ‘de aquí pa’ delante lo leemos, pero de aquí pa’ atrás eso, eso, eso no va conmigo’, le dije yo y así lo hice pues. (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

En el Anexo 4 el lector puede encontrar la imagen del Reglamento Interno referenciado por el ex -concejal. La iniciativa venía desde el periodo de gobierno anterior. Caviche me explica que la mayoría de los concejales estaban “repitiendo”, por lo que no solo la conocían, sino que varios habrían votado a favor de ésta<sup>194</sup>. Fueron varias las ocasiones en que la AGA se hizo conceder espacios en el Concejo Municipal para explicar su proyecto, presentar sus inversiones sociales, contrarrestar los temores y “mitos” creados por los rumores anti-gran minería. Para la época en que escuchó por primera vez a funcionarias de

---

<sup>194</sup> Detalla Meraldiño la tensionante situación: “El hecho es que a mí nadie (Sic) me dijo nada, ni el presidente le tocó que morderse, yo diría, la lengua pero todo el mundo se quedó callado y no dijo nada. Entonces ya empezaron a ver que ya había una posición por ese lado que no era lo que compartían.” (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

la compañía en ese espacio (seguramente en 2008), Meraldiño recuerda que ya se intercambiaba con afectados por la AGA en otras regiones del país. Ya venía investigando la conducta de la empresa a nivel internacional y se tenían más claros los argumentos relacionados con la dimensión ambiental como campo de afectaciones<sup>195</sup>.

Pero las iniciativas “gestionantes” de la compañía no se limitaron a la gaceta de la referenciada corporación pública. Según el testimonio de su funcionaria, que venimos citando gracias al Acta del Concejo M., la empresa desarrolló un programa conjunto con la tradicional Federación de Cafeteros. Además, llama la atención la realización de un “proyecto productivo”<sup>196</sup> en colaboración con la Corporación Regional Ambiental del Cauca, CRC. La Alcaldía parecía ser el puente en estas iniciativas, permitiéndole a la AGA darse un rol de inversora social y aliada para temas comunitarios. Con base en la información recolectada, consideramos que la acción conjunta entre AGA y Alcaldía Municipal se convertía en un común denominador de la gestión pública en esos años. La compañía parecía tomar de alguna forma el lugar de mentora de la administración local. En ocasiones, apoyaba en sectores y actividades de la competencia del Gobierno Nacional y Departamental: implementos para las I. Educativas, para el arreglo de vías, asistencia por desastres naturales, proyectos productivos. Las fiestas es probablemente lo que más recuerdan la mayoría de personas con las que he interlocutado, sobre ellas he escuchado en diversos encuentros, reuniones, conversaciones y en varias de las entrevistas realizadas. “Acá trajeron pantallas, los mejores cantantes los trajo la Anglo Gold Ashanti. Trajo al Grupo Niche, vino Alberto Posada, Jimmy (...) desde el 2005” me especificaba Simón, la

---

<sup>195</sup> Sobre lo que le manifestó a la representante de la compañía en aquella ocasión, nos dice: “Yo por ejemplo no estoy interesado en decirle a usted, eee, ¿qué te digo? La nejecitamos (Sic). Sí, porque sabemos la...sabemos la contaminación y sabemos la pobreza que ha venido dejando. No solamente aquí, sino que ya teníamos algunos informes de África y toda esa vaina dónde habían estao (Sic) y un poco, pues contando un poco lo de Cajamarca porque en ejos (Sic) días también habíamos, nos habíamos sentado a hablar con unos compañeros de Cajamarca en el Tolima.” (Entrevista con Meraldiño Caviche)

<sup>196</sup> “(...) la empresa continua prestando su labor social donde tenemos un proyecto de café agro con la federación de cafeteros y la alcaldía municipal donde se están beneficiando 30 familias del municipio al igual continuamos apoyando, otro proyecto productivo con la CRC y la alcaldía municipal. De igual manera la empresa se solidarizó con la avalancha ocurrida en el corregimiento de agua clara (Sic) donde quedaron unas veredas incomunicadas la empresa ANGLOGOL ASHANTI se vinculo (Sic) con 1.000 mercados para los dignificados y un helicóptero para que pudiese entrar los viveres (Sic) a la zona pero el alcalde dijo que no era necesario y de esta manera nos hemos vinculado apoyando una serie de festividades en las diferentes instituciones sector salud y material vial l (Sic) el año pasado también colaboramos con la iniciativa de la gaceta municipal de aquí.” Intervención de Clara Márquez Coordinadora Social de la AGA en el Concejo Mpal. (Concejo Municipal de Suárez. 2009 Noviembre)

presencia pública de la compañía en Suárez era permanente a lo largo de todo el año a través de diversas festividades en meses distintos<sup>197</sup>.

La relación económica y de “gestión” promovida por la AGA con la Cooperativa y el Estado se replicaba con los líderes comunitarios de las JAC y con los dirigentes étnicos. A estos últimos intentó persuadir de muy diversas formas<sup>198</sup>. Un documento de convocatoria dirigido por la Gerente de Desarrollo Social de la Kedahda S. A. -Carolina Rueda Barrios- el 23 de mayo de 2007, a Enrique Güetio, Gobernador del Cabildo Indígena de C. T. muestra esta estrategia. Lo invitaba a participar de una comisión financiada por la empresa, que viajaría en junio de ese mismo año al municipio de Quinchía-Risaralda “donde hemos desarrollado trabajos de exploración acompañados de acciones sociales y ambientales para que usted pueda constatar las políticas que la empresa tiene en relación con las comunidades y con la preservación del medio ambiente (...) esta invitación no implica ningún compromiso de las partes”. Dirigida también a otros líderes étnicos y personalidades del municipio como los Concejales.

La compañía intentó establecer comunicación directa con las poblaciones de algunas veredas, especialmente en Mindalá y La Toma. La compañía recorría las zonas de interés con un grupo de “Promotores sociales”<sup>199</sup> y técnicos en geología y otras disciplinas<sup>200</sup>. Lo

---

<sup>197</sup> Meraldiño recuerda especialmente una de esas fiestas: “un día que hubo una fiesta del campesino que se hizo en, en el municipio de Suárez que eso lo hacen cada año los alcaldes, resulta que ese día que fuimos a ver entojos (Sic) en todas las palas, en los machetes, en todo lo que dieron para el campesino (...) pues ahí también estaba el logo de la AngloGold Ashanti (...) ya permearon ese las instituciones y todos prácticamente. Inclusive a mí me dijo la comunidad que yo era uno de los que apoyaba la AngloGold Ashanti y pues no supieron lo que yo hice pero al menos eso hice (risas).” (Entrevista con Meraldiño Caviche)

<sup>198</sup> “Entonces cuando yo vi la Adad que había sido personera en Quinchía (...) una muchacha muy bonita, y me busca, ‘quiero conversar con usted’ así como estamos conversando hoy, ‘que necesito hablar con usted porque usted es un tipo que...’ ‘hágale hable’, ‘¿y qué va tomar?’, y ahí mismo me bajó una cosa de, una botella de whisky, y toda copetona (...) ‘que yo a ti te conozco’, entonces cuando le dije: ‘Vea, la verdad, si usted quiere conversar conmigo, conversamos porque no me gusta ser grosero. Pero usted traicionó su pueblo’ ‘Ay ¿que cómo así?’ ‘Es que usted causó que metieran presas a no sé cuántas personas ahí en Quinchía, y ¿ahora viene a decirme que es su gente, que esta empresa es el desarrollo para un pueblo? ¡Nooooo!. Está hablando con la persona equivocada’. (...) que ‘¡ay!, que yo cómo estaba...’ y le dije: ‘miré el informe’ (...) porque acá vino gente de Quinchía.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014) Esta relación se tensiona, tanto que otros documentos denunciaban que “El día 26 de abril [2007], después de una reunión entre los mineros del municipio de Suárez y empleados de la empresa Kedahda, la trabajadora social de esta sociedad María Isabel Abad señala al líder comunitario SIMÓN RODRÍGUEZ diciendo que anda difamando la empresa Kedahda y que no es minero sino perteneciente a algún grupo político.” (REDHER. Junio 2007: 5).

<sup>199</sup> En 2006 algunos eran Gerardo Martínez González, Eliecer Muñoz y Diego Carabalí Muñoz, en: Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2006 Noviembre 6. “Acta 052”. La Toma, Suárez, Cauca. En adelante (Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2006 Noviembre 6).

encabezaba la “Responsable Social” local que, a mayo de 2007, era la señora María Isabel Abad, ex -personera municipal de Quinchía, Caldas. Esa ocasión en el Concejo, Clara Márquez enaltecía la política de contratar “promotores” “nativos” como un compromiso de la multinacional con la “transparencia y con el respeto a las comunidades”<sup>201</sup>. Esa contratación fue una estrategia de penetración, especialmente en el corregimiento de La Toma, donde parecía haber una mayor resistencia frente a las actividades de exploración a comparación de las veredas de los otros corregimientos. Su población, ahora dividida, era objetivo de la persuasión de la empresa, así como de los esfuerzos del Consejo Comunitario por cohesionarla para enfrentar la permeación del discurso de la transnacional y mantener/consolidar su legitimidad como autoridad comunitaria,

Al alcalde ya le habían dado plata, (...) el representante legal del Consejo Comunitario que habíamos creado, la AGA lo cooptó (...) ya sabíamos que habían cooptado la cooperativa (...) el secretario de gobierno del Alcalde renunció para ponerse a trabajar con la AGA (...) eso la disidencia era total (...) y los manes encima, amenazaban, los manes dijeron: ‘bueno, cuánta plata querés’ (Sic) (...) Y entonces eso ya se formó el zaperoco, que el representante legal [del Consejo C.] con sueldo, que yo no sé qué, que tal cosa, que se pasó con la AngloGold Ashanti, la gente dijeron, ‘¡bueno!’, y entonces sacaron al representante legal y yo asumí la representación legal [en el 2008]” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

Se podría pensar que las diferencias internas que corrientemente se encuentran dentro de las comunidades (según lo que he podido observar, en este caso entre las veredas de la parte “baja” y las de la parte “alta”), se exacerbaban con la nueva situación de tensión. Ser indiferente o, ante la necesidad económica, ceder a los apoyos de la AGA, podía ser considerado como la toma de partido por una de las partes en esta dura confrontación, que ya varios líderes comunitarios y familias completas veían como una lucha a vida o muerte. Según Tomás Salcedo los contratados como promotores en La Toma fueron tres líderes. Gustavo Zapata coincide con la funcionaria Márquez en que habían sido cuatro. En una

---

<sup>200</sup> Sobre un grupo de geólogos se hace alusión en esa misma “Acta 052” pues según el documento se había presentado unos “impases” en La Toma debido a su presencia. A propósito de los Promotores oriundos de La Toma, nos dice Simón: “Claro, un contrato muy bueno (...) para hacer el trabajo de sensibilización, de convencimiento”.

<sup>201</sup> “(...) se contrato (Sic) a cuatro 4 personas del municipio para que hicieran veeduría y dieran testimonio de la forma en que nosotros trabajamos y todo fue concertado y no se violó (Sic) ningún derecho y nosotros sabemos que ellos [promotores] al igual que ustedes [concejales] fueron señalados y gracias a lo que dice la gente ustedes son ricos por que según la empresa les dio miles y miles de millones de pesos y todo esto fueron solo señalamientos” (Intervención de Clara Márquez Coordinadora Social de la AGA en el Concejo Municipal de Suárez)

ocasión, tuve la oportunidad de dialogar muy brevemente sobre ese episodio con dos de ellos. Me explicaban que, al ofrecérseles el empleo y con dificultades económicas, habían aceptado sin sospechar. Señalaban que en ese momento no alcanzaron a dimensionar las implicaciones que podría tener el trabajo de la AGA en sus territorios. Resaltaban que la empresa no había sido transparente, pues nunca se les dijo su real intención ni las características de los proyectos mineros que promovía. En su entrevista, Simón me explica las dificultades internas que la estrategia de la multinacional indujo en la organización afrotomeña y en las comunidades,

Los profesores, AngloGold les daba todo (...) que uniformes, que una cosa, que la plata, porque eso madre, para manejar 7 millones de dólares en éste municipio (...) ‘es que aquí hicimos esto, hicimos esto, hicimos...’ y entonces aquí la gente: ‘pero ¿cómo se va a ir la AngloGold si ha ayudado en el desarrollo del municipio?’ (...) Entonces nosotros: ‘ni puel hijueputa (Sic), ustedes aquí se van’ (...) entonces ya después tocaba la pelea que con Ignacio (...) que con Juan, que eran gentes hermanos de nosotros, que Antonio<sup>202</sup>, y yo les dije: ‘ni puel (Sic) putas la pelea aquí va a ser con estos muchachos. No vamos a peliar (Sic) con estos muchachos porque si nosotros peliamos (Sic) con éstos muchachos, vamos a perder la pelea. Porque ellos malo que bien, acá tienen su familia’ (...) [Actualmente] hacen parte del Consejo, inclusive Antonio es hoy día el presidente (...) porque tocaba que recuperarlo (...) Antonio hoy en día me dice ‘uy hermano, yo estaba cometiendo un error’ (Entrevista con Simón abril 2014)

Priorizar los lazos familiares y comunitarios de los pobladores locales, más allá de su temporal vinculación con la multinacional, puede haber aportado en gran medida para la cohesión y estabilización de la organización étnica en aquellos momentos de crisis. Como señala el entrevistado, esa posición política le ha permitido reincorporar a sus filas y afianzar esas personas que pudieron llegar a ser potenciales disidentes de la causa étnica. En mis observaciones e interlocuciones he identificado una fuerte implicación de esas personas en las apuestas del Consejo Comunitario.

Con quien sí se llegó a una ruptura política importante fue con el Alcalde de ese momento, Javier Ordoñez. Simón me explica que a pesar de llevar una relación de cooperación,

---

<sup>202</sup> Los nombres han sido cambiados.

decidieron tomar distancia de su antiguo aliado<sup>203</sup>. También Meraldiño recuerda que fue testigo de los reclamos que la gente de La Toma le hizo al mandatario en una audiencia sobre minería en aquella época. La información que he recolectado y las interlocuciones con los líderes étnicos me llevan a pensar que tienen una percepción general: los funcionarios públicos habían tomado partido a favor de la empresa.

Las dos organizaciones étnicas intentaban también darse sus estrategias para detener las acciones de la AGA y la penetración de las versiones que ésta promovía en torno a su proyecto. Propiciar espacios de comunicación e intercambio entre dirigentes y habitantes de las veredas, parece haber sido una importante línea de acción. Según se concluye de las conversaciones con Meraldiño y Simón, y de algunos documentos disponibles, con aquellas reuniones se buscaba socializar la información de casos de afectaciones por parte de la AGA en el país y en el mundo, las consecuencias de la gran minería así como tomar decisiones a propósito de las acciones colectivas a emprender. Esta estrategia les permitía convencer la gente, consolidar y unificar una lectura interna, orientar y planear la acción organizada. Por otro lado, la divulgación nacional e internacional constituiría también un frente al que aplicaron esfuerzos los dos sectores. Esta tarea ayudaba a atraer la mirada de organismos nacionales e internacionales como veedores, así como nuevos actores solidarios que acompañaran más directamente el conflicto.

En el caso del Cabildo representó el despliegue de toda una logística por parte de su Junta Directiva, la cual se volcó a caminar vereda por vereda, caserío por caserío, del amplio territorio de influencia de la organización. Esa estrategia de sensibilización, organización y toma de decisiones políticas estaba dirigida a los habitantes de las veredas sin restricción alguna –fueran miembros o no, indígenas o no-. Fue la respuesta a la aplicación de la Resolución 5234 de 2009, tema que abordaremos con profundidad más adelante, y a la necesidad de contrarrestar la cooptación de las JAC. Como veremos en el capítulo posterior, difundir la lectura que correlacionaba la Resolución, la militarización/conflicto

---

<sup>203</sup> “La relación con el alcalde se rompe por eso (...) en el 2007 (...) [era] Javier Ordoñez (...) él era amigo, nosotros le ayudábamos a él pa’ que llegara (Sic), y le dije: ‘ay hombre volvete serio, no tontíes’ (Sic) (...) entonces, ‘que ay, lo que pasa es que ustedes son revolucionarios, que yo no sé qué’, ‘piense lo que sea mano, acá se pierde la amistad, pero jamás voy a permitir que haga una cosa de esas con mi pueblo’. Si acá, Anabel, esto ha sido muy duro. Duro, duro, duro, duro.” (Entrevista con Simón abril 2014)

armado y los intereses mineros era el objetivo principal. La tarea consistía, entonces, en disputarse la opinión que los habitantes tuvieran acerca de la multinacional y de los demás fenómenos, Meraldiño nos explica,

Sencillamente nosotros decíamos nos vamos de demanda o nos vamos con la gente y cualquier cosa tiene que pasar pero tiene que pasar, (...) y logramos como salirle al paso a lo que ellos, ellos pretendían (...) haciendo las, los recorridos, llamados que recorridos de, en defensa del territorio o y (Sic) derecho a la vida. Hicimos tres recorridos, yo me recuerdo, y en esos recorridos fuimos plantiando (Sic) las imágenes, plantiando (Sic) la problemática de lo que realmente era la gran minería a gran escala y eso nos sirvió mucho pa' la parte alta (...) [Para] llegar a hacer consciencia a, a las comunidades (...) logramos recorrer casi las 37 veredas que hacen parcialidad del Cabildo Cerro Tijeras, ¿Sí? Eso lo hicimos en tres comisiones, nos echamos 15 días recorriendo (...) ahí sí nos sentábamos a hacer una sola asamblea y a juntar, y a analizar cómo nos había ido y qué habíamos hecho, qué habíamos logrado, qué no habíamos logrado, qué nos faltaba por hacer (...) en la asamblea decíamos esto está pasando y ahora sí qué vamos a hacer y ahí venía quedando unas tareas concretas, uno pues eran las acciones legales que se llaman. O si no pues las acciones de hecho, mal llamada ilegales por el gobierno nacional (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

El primer recorrido se realizó en el año 2010 conjuntamente con la Central Unitaria de Trabajadores y con la presencia de un acompañante irlandés en representación de una organización internacional. Luego la actividad se replicó en 2011. De esta forma el Cabildo hacía un gran esfuerzo por difundir su mirada del contexto, sus posiciones políticas, por recoger información sobre lo que sucedía en las veredas y específicamente sobre las relaciones que la población establecía con los actores mineros o institucionales.

En el corregimiento de La Toma se desarrollaba una disputa análoga por permear la opinión de la población, generalizar una versión diferente y consolidar una posición política como Consejo Comunitario, más allá de su Junta de Gobierno y sus líderes,

Comencé a estudiar todo, todo, todo el accionar de la AngloGold Ashanti en Colombia, en el Congo<sup>204</sup>, en todas las partes por donde habían pasado y habían dejado su, ellos son

---

<sup>204</sup> “El 1° de junio de 2005, Human Rights Watch, HRW, publicó un informe titulado ‘The curse of gold’, en el que acusa a la AngloGold Ashanti de apoyar financieramente a los milicianos del Frente Nacionalista del Congo, que controlan las minas de oro del noreste del país. Este grupo ha sido señalado de ser el responsable de masacrar a más de dos mil



malos (...) hablé con los manes del Sur de Bolívar [2005 aproximadamente] (...) les dije: ‘Vea muchachos, en el sur de Bolívar han matado a más de 4000 personas, ¿no van a matar acá en la Toma?’ (...) como los paracos estaban allí [Buenos Aires], llegaron ya las primeras amenazas (...) y yo les dije ‘ay hermanos, no, vea aquí tenemos 3 estrategias. La primera estrategia es que vamos a hacer trabajo de visibilización, hermanos. Entonces vamos a pegarnos a los que vienen peliando (Sic) con Sociedad Kedahda’. Ah listo, y entonces me hice amigo de los del sur de Bolívar, me hice muy amigo de los de Quinchía<sup>205</sup> (...) y la gente nada que creía, ahí mismo dije, hicimos una caravana [agosto 2007], trajimos gente de allá, ‘vengan, muchachos cuenten cómo es la vaina’ (...) una caravana de mineros por todo el país, y entonces ya de acá fueron allá. (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

La presencia más directa de la AGA en esa zona propició confrontaciones cara a cara con la compañía en diversas reuniones. Se enfrentaba una aguda disputa por obtener la legitimación de la comunidad, y se despertaban fuertes pasiones<sup>206</sup>. Un Acta de diciembre de 2006, elaborada por el Consejo Comunitario, describe una asamblea promovida por el “Consejo comunitario de negritudes” y el “consejo comunal” del corregimiento de La Toma “con el propósito de escuchar los planteamientos de los representantes de la Empresa Minera Sociedad Kedahda S. A”. Según el documento, durante la reunión los líderes manifiestan su preocupación por la suerte de la comunidad en caso de realizarse la explotación. Ante esto, los delegados de la empresa responden “que la comunidad sigue allí puesto que ellos manejan una política del buen vecino, que los mineros que trabajen artesanalmente lo podrán seguir haciendo hasta que la empresa instale su maquinaria y subsiguientes sitios de trabajo”. Las experiencias previas relacionadas con La Salvajina

---

habitantes de la región en dos años. Según HRW, la Anglogold Ashanti habría financiado a este grupo a cambio de permitir el acceso de la empresa a las minas de oro en la provincia de Ituri. (...) La transnacional inglesa aceptó haber realizado pagos al grupo armado y afirmó que los contactos con miembros de este grupo fueron ‘inevitables’” (Fernández y Valencia 2010: 33-34)

<sup>205</sup> “porque en Quinchía hasta el alcalde lo metieron a la cárcel para poder implementar lo de Sociedad Kedahda (...) además hicieron una repesca y como a 300 personas las metieron a la cárcel (...) cuando los soltaron (...) ya les habían quitado todas las minas” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

<sup>206</sup> Apropósito, Simón recuerda esta anécdota en este sentido: “eso fue pelea en Bogotá, porque nosotros ahí, ahí como se dice, a regañadientes, pudimos hacer una, una asamblea en la Toma, ya porque uno iba cogiendo más carnita con lo que se había hecho, y dijimos (Sic) una reunión en la Toma y la gente dijo: ‘No vamos a permitir la entrada de Sociedad Kedahda aquí’ (...) entonces nos fuimos para el Ministerio de Minas, (...) entonces, la misma acta y ellos [AGA] fueron a decir que la gente estaba de acuerdo (...) y coincidentalmente, nosotros estábamos ahí sentados esperando (...) ‘que aprobaron, que la gente de allá aprobó’ (...) jueputa (Sic) y se para un compañero nuestro (...) ‘¿ah sí? granhijuetantas (Sic), no ves que nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo’, y el man le, porque el man bien arrebatado, de una le chantó la mano [al empleado de la AGA] allá en el Ministerio en Bogotá” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

marcan también una interpretación específica del nuevo proyecto extractivo privado,

El señor Paulo Mejía pide la palabra y manifiesta que la Toma es un sitio pacífico y que por consiguiente queremos seguir así y que la respuesta es no a la fase de exploración a esta empresa. Don Elkin hace lo propio y manifiesta que no está de acuerdo puesto que se tienen referentes de Buenos Aires y de Salvajina donde la comunidad fue engañada y puede pasar igual con esta empresa. La Asamblea en pleno respaldo (Sic) la decisión de que no se acepta que esta empresa siga las labores de exploración (...) El señor Tomás Salcedo plantea que para la comunidad es más conveniente permanecer ganando poco y andar alegres coloca el ejemplo de la gotera de agua la cual persiste hasta llenar una vasija. El señor Camilo manifiesta la adversidad que nos dejó la salvajina e insiste a los asistentes a no permitir que esta empresa entre a la Toma (Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2006 Noviembre 6)

Se lograban unificar unas personas respaldando la postura de oposición a la empresa, desde el marco interpretativo anti-multinacional y de defensa territorial. Esto, en parte, gracias a experiencias sociales anteriores como la construcción de la hidroeléctrica. Sin embargo, al mismo tiempo, la propuesta del Consejo Comunitario enfrentaba muchas personas que no cuestionaban o problematizaban la llegada de la multinacional. También, enfrentaba una apropiación matizada de sus postulados por parte de algunos comuneros que, a pesar de pertenecer al Consejo, optaron por vincularse con la compañía bajo criterios pragmáticos o de beneficio individual. Se lograba declarar el rechazo a la Kedahda, pero, a la vez, su acción en la población hacía mella.

Recordemos que los objetivos/postulados en una organización, a pesar de estar “claramente” enunciados, normalmente no son referentes “transparentes”, no siempre implican una “coherencia” interna de los “marcos interpretativos” o de la forma en que las personas se lo apropian. Tampoco indican que sus miembros adoptarán mecánicamente una única postura o un determinado comportamiento en contextos específicos. Consideramos que en alguna medida es por eso que la participación de sus miembros en actividades de defensa del territorio, convocadas por el Consejo o por el Cabildo, nunca está asegurada por completo. Tampoco es segura una decisión unívoca por parte de comuneros ante los ofrecimientos de las multinacionales. Al sugerir lo anterior no solo tengo en mente el caso de los “promotores” en La Toma. Recuerdo, por ejemplo, la ocasión en que llegamos a

Altamira finalizando el recorrido de noviembre 2012 y la asamblea de rendición de cuentas tenía un objetivo adicional: decidir si se aceptaba o rechazaba una “volquetada” de arena que había sido obsequiada por Alonso Giraldo a las monjas del Colegio. En múltiples conversaciones he identificado que gran cantidad de personas en esa comunidad saben que la mina El Danubio viene explotando a mayor escala que antes, que gracias a esto ha aumentado la militarización de esa zona y muchos dan por hecho que Giraldo se ha aliado con una multinacional estadounidense. El Cabildo se ha manifestado formalmente contra ese proyecto minero, inclusive en asambleas exclusivas del tema directamente en Altamira. Sin embargo, en esa ocasión algunos líderes cabildantes consideraban que recibir la arena no representaba una contradicción con el postulado político de la organización. Era posible, según su razonamiento, recibir y rechazar su presencia. Otros reaccionaron con una lógica diferente. Consideraban que si se recibían favores, luego les cobrarían favores. Las monjas no tenían una postura clara, y se acogieron a la decisión de la asamblea. También estaba presente quien había intercedido por la empresa, la persona con quien, al parecer, interlocutó Karina, la concejal que hace lobby en las comunidades para Giraldo, pero no intervino en la reunión. Finalmente, después de debatir, la comunidad en asamblea decidió no recibir el regalo del minero.

Estos episodios y algunos documentos que exploraremos más adelante, nos sugieren que, de alguna forma, la disputa pasa por lograr establecer criterios que orienten el relacionamiento con los actores mineros en contradicción, sea la AGA o “Giraldo y Duque” y sus aliados. Pasa por incidir en los valores con los que las personas determinan qué son beneficios y consecuencias negativas o positivas, cuáles priorizar o evitar. Por revalorar las condiciones de vida que han mantenido y por reforzar actividades que les permitan autonomía económica y política. Por definir eso que se rechaza y, a su vez, lo que se defiende.

En ese sentido, pensamos que lo que las personas consideran sobre su forma de vida juega en la definición de esos postulados políticos, tanto como las experiencias y lugares socioeconómicos pasados y presentes. Por ejemplo, volviendo al Acta de la reunión en La Toma, algunos líderes resaltan la práctica minera “rudimentaria” o artesanal no solo como fuente de sustento diario sino como forma de vida. Parece sugerirse como una cualidad

contrapuesta a lo que ofrece el contrario, la Kedahda; cualidad que estos líderes valoran y, consideramos, *revaloran* en este contexto de disputa. Desde nuestra perspectiva, la diferencia entre el tipo de minería que promueve la multinacional y las minerías reproducidas por estas personas, individual o colectivamente, es problematizada, evidenciada y revalorizada en la confrontación. A esto aportan los “esquemas interpretativos” disponibles y el conflicto mismo. Pareciera que permiten realzar y potenciar determinadas características de sus prácticas mineras, interpretar el lugar y significado que aquellas tienen en las dinámicas comunitarias, y reconocerles como dimensiones a defender de su existencia actual. Lo anterior puede entrañar reflexiones sobre lo que se es y lo que no se quiere ser. Aunque todo esto puede ser ampliamente discutido y no son, de ninguna manera, análisis terminados o absolutos, nuestra lectura sugiere que el contexto de conflicto minero ha permitido afianzar el auto-reconocimiento de un ser étnico específico y de una estrategia organizativa de autoridad étnica.

Por otro lado, según la misma acta, las intervenciones de la compañía en la reunión señalada recurren con frecuencia a unos supuestos valores democráticos y de respeto a la autonomía de las comunidades. Estas declaraciones de respeto son cuestionadas por varios líderes cuando al final del encuentro los delegados de la AGA afirman que, más allá de la negativa de la asamblea, continuarán insistiendo en la realización del proyecto<sup>207</sup>. La posición política de los comuneros reunidos a finales de 2006 se repite seis meses después el 28 de mayo de 2007<sup>208</sup>. En esta ocasión la reunión convocada por el Consejo es la

---

<sup>207</sup> Dice el Acta: “explica el señor promotor social que ellos son respetuosos de la autonomía de los pueblos que si de esta asamblea sale un sí o un no ellos no pueden continuar la labor iniciada sin la consulta previa de que habla el señor Edgar. También se dice que son respetuosos de los derechos humanos y del medio ambiente, dice que por el momento solo están en una fase de reconocimiento para posterior al permiso que la comunidad les otorgue poder empezar el trabajo exploratorio que para la empresa es únicamente inversión y cero rentabilidad.” Y pide “disculpas por los impases presentados con el grupo de geólogos que estuvo en la zona” Después de escuchar las voces en contra del proyecto “Don Gerardo manifiesta que él respeta la decisión pero que como agentes corporativos seguirán insistiendo por todos los medios para persuadir a la comunidad. Daniel pide la palabra y manifiesta que no es muy claro el planteamiento del señor Gerardo ya que dice que insistirá por todos los medios para lograr que la comunidad ceda y para mí eso no es legal. Que nosotros somos propietarios de un territorio de paz y así seguiremos.” (Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2006 Noviembre 6)

<sup>208</sup> “En asamblea general de la comunidad hizo presencia la abogada María Isabel Andrade [Abad] de la empresa Kedahda, con el fin de socializar la propuesta de la Explotación Minera (...) Dice que en el poco tiempo que ha estado aquí se ha reunido con el consejo comunitario, Consejo Comunal, Concejo Municipal y otras asociaciones comunitarias para tratar el tema (...)” reza la titulada “Acta No 02” que consigna lo sucedido en esa reunión, “(...) al intervenir el concejal de la región [de La Toma] manifestó que el Concejo Municipal no esta (Sic) de acuerdo con la salida a Quinchía

reacción a otro encuentro convocado por las funcionarias de la Kedahda en su afán por legitimar la actividad de la compañía,

El día 28 de mayo en el corregimiento La Toma de Suárez Cauca la representante de la multinacional la KEDAHDA S.A. había convocado a 25 personas para hacer una consulta previa pasándose por encima de las comunidades. El comité la invitó a una asamblea que se realizaba en ese momento con toda la comunidad en la cual fue obligada por la comunidad para que diera la información correspondiente ante toda la comunidad (Sic). 10. El día 29 de mayo la abogada MARIA ISABEL ANDRADE [Abad], la representante de la multinacional Kedahda, en reunión con algunos líderes toma la decisión que a los líderes que están impidiendo la llegada de la multinacional toca sacarlos de la zona o tomar otras decisiones<sup>209</sup> (Derecho de Petición dirigido al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, fechado a 3 de junio de 2007)

En ese marco, los documentos del Cabildo revisados sugieren que las dos organizaciones étnicas intensificaron su interpelación a la institucionalidad estatal nacional por medio de derechos de petición en los que solicitaban información sobre el tema minero y reclamaban la protección del gobierno. Los dos derechos de petición a nombre del “Consejo Comunitario”, a los que he tenido acceso, están firmados por Edwar Alberto Villegas Carabalí como Presidente del Comité Pro-defensa del Corregimiento de La Toma de Suárez Cauca y delegado del Polo Democrático<sup>210</sup>. Se dirigen al presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, a finales del 2006 y mediados de 2007. En el primero, junto a la denuncia sobre las actividades de exploración de la Sociedad Kedahda en La Toma, aparecen otros

---

(...) Otro líder comunitario agregó que la comunidad con su explotación de las minas en forma rudimentaria se consigue el sustento diario, debido a esto la comunidad aprobó, no a la kedahda.” Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2007 Mayo 28. “Acta No. 02”. La Toma, Suárez, Cauca. Pp. 1. Anexo firmas 5 pp.

<sup>209</sup> En otro documento de denuncia también se habla de este asunto: “El 28 de mayo, después de una reunión entre la comunidad y representantes de sociedad Kedahda se escuchan de parte de estos últimos hacer comentarios acerca de dos distinguidos líderes de la comunidad diciendo que constituyen un obstáculo para el ingreso de la multinacional y que por esto es necesario neutralizarlos.” (REDHER. Junio 2007: 6)

<sup>210</sup> Por algunos documentos presentes en los archivos revisados se deduce que hubo varios derechos de petición y denuncias más dirigidas al Gobierno Nacional, de los que no tenemos los textos completos, y que iban dirigidos también a Ministerios. Por ejemplo, de una denuncia interpuesta por Villegas en el Ministerio del Interior y de Justicia en diciembre de 2006, se deriva un proceso de justicia penal, pues MinInterior trasladada la denuncia a la Fiscalía de Popayán en enero de 2007 de donde sale a despacho en Santander en febrero del mismo año. El proceso iniciado “por el punible de EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE YACIMIENTO MINERO, por parte de la EMPRESA MINERA SOCIEDAD KEDAHDA S.A.” en el corregimiento de La Toma en Suarez continúa y para septiembre de 2007 el señor Villegas se presenta en Santander al despacho de la Delegada asistente de fiscal para averiguar sobre el trámite, sin haber, al parecer, muchas claridades de su avance según documentos posteriores firmados por Villegas. Los documentos relativos son Oficio 19905 dirigido al Ministerio del interior y de justicia Programa de Protección el 13 de diciembre de 2006; Oficio 001309 de 28 de enero de 2007; Oficio DSF-00158 de febrero 1 de 2007.

cinco temas sociales<sup>211</sup>. En el documento del siguiente año se repiten algunos de esos tópicos y se agregan unos nuevos<sup>212</sup>.

El tema minero aparece ahora explícitamente correlacionado con el aumento de amenazas y persecución a los líderes inconformes con la compañía<sup>213</sup>. Este contenido de Derechos Humanos, empezaría a aparecer de forma recurrente en los documentos firmados por las organizaciones étnicas durante esos años. Otro documento firmado por la “Comunidad de Suárez-Cauca” y difundido por REDHER en julio de 2007, muestra también un recuento de algunas de las situaciones referenciadas por el líder. Ya hemos visto que los líderes de Yolombó fueron amenazados en 2004, situaciones que comienzan a repetirse después de mayo de 2006 mes en el que se realiza una marcha a Cali que reseñaremos en páginas siguientes, según la información de la denuncia. Se presentaron hechos de asedio casi durante todos los meses siguientes: uno en julio, uno en agosto, uno en noviembre, dos en diciembre, dos en enero de 2007<sup>214</sup>. Estas fechas coinciden también con la llegada de la compañía Kedahda S.A a Suárez y con sus intentos de penetrar en el corregimiento de La Toma especialmente. El documento resalta como hechos explícitamente vinculados al asunto minero, las llamadas de un supuesto funcionario del DAS y de la Fiscalía al presidente del Consejo Comunitario preguntando por “la situación minera” y por un líder comunitario. En mayo de 2007, en medio de un ambiente en de fuerte tensión directa con

---

<sup>211</sup> Precario servicio de energía y falta de acueducto en La Toma, oposición al desvío del río Ovejas, afectación de agricultores por posible desvío del río Timba, abandono del norte del Cauca e incumplimiento del Acta del 86.

<sup>212</sup> Acueducto, incumplimiento con los subsidios de la tercera edad, necesidad de una oficina de Telecom, falta de establecimientos de educación superior y de centro de salud, deterioro en los puentes del río Ovejas. De este oficio se envía copia, además del destinatario Uribe, al Polo Democrático Alternativo, a las “Bancadas Afrocolombianas” y al “Comité de Derechos Humanos”, que supongo se refiere a quienes impulsaban el proceso que venía haciendo acompañamiento desde el conflicto por la desviación del río Ovejas, llamado “PROHIBIDO OLVIDAR”.

<sup>213</sup> Edwar Villegas señala en 2007 “Desde hace 20 días en el corregimiento La Toma, se movilizan vehículos polarizados con personas armadas y que no son de la región; en la misma zona se apoderaron de una mina y sacaron al dueño e impiden el paso de las personas por ese sector donde se encuentra la mina. La llegada de todas estas personas ha aumentado las amenazas hacia los líderes de la zona” (Derecho de Petición dirigido al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, fechado a 3 de junio de 2007)

<sup>214</sup> En julio de 2006 dos hombres abordan a Valentina Zapata, esposa de Simón, y preguntan por su esposo, por Gustavo Zapata y por Tomás Salcedo, manifestando: “estas personas son los sapos de la vereda, quitan y ponen, y aunque no los encontramos esta vez, vamos a volver por ellos”. En agosto cuatro hombres se movilizaban en motos de alto cilindraje preguntando sobre los lugares frecuentados por Villegas. En noviembre cuatro hombres desconocidos llegan a la reunión del Comité Pro-defensa a preguntar sobre su presidente y la frecuencia de las reuniones. En diciembre dos hombres golpean a Paulo Mejía, miembro del Comité referenciado y vicepresidente de la JAC, en su casa, disparan al piso y huyen. Ese mismo mes hombres con guacharacas se dirigen a la casa del secretario del Comité al no encontrar sino a su hermano revisan y se van. En enero de 2007 seis hombres desconocidos en tres motos llegan a un establecimiento público de la Toma y sondean con las miradas los asistentes, luego e retiran. Ese mismo mes, Villegas es abordado cerca de la cabecera por cuatro hombres con los rostros cubiertos que lo golpean y le amenazan por defender los DDHH. (REDHER. Junio 2007: 4-5)

funcionarias de Kedahda, “desconocidos entran en la casa del Fiscal” de la JAC de Yolombó, al estar vacía “dejan entonces un mensaje escrito que dice: ‘tuviste suerte porque no te encontramos’”<sup>215</sup>.

El documento muestra también cómo “personal” aparentemente “del DAS” intentan, a través de llamadas, hacer inteligencia al “encuentro regional minero del Cauca” realizado el 20 y 21 de mayo de ese año, evento que hemos referenciado en el acápite 3.1. Además, “un desconocido intenta infiltrarse abusivamente haciéndose pasar como miembro de una de las comunidades participantes. Al ser descubierto huye. Días después miembros de la comunidad lo identifican como personal adscrito al esquema de seguridad de la señora Maria Isabel Abad, trabajadora social de la empresa Kedahda.”<sup>216</sup>

Lo anterior evidencia la frecuencia e insistencia con la que se les asedia en el contexto de conflicto minero, el riesgo y temor por la integridad física/moral de los líderes tomaba proporciones desconocidas. De acuerdo a varios de los documentos revisados, el principal factor de conflicto durante 2006 y 2007 era la titulación minera “legal” en sus territorios, pues el proyecto DROES se había desestimado de nuevo entre 2004 y 2005. En otro sentido, es interesante resaltar que más allá de esta estrategia de terror que benefició a la AGA, esta compañía ha tenido, como hemos descrito a lo largo de este acápite, múltiples posibilidades de relacionamiento “legítimo” con actores sociales del municipio gracias a su carácter “legal”. Algo que la distancia relativamente de los agentes vinculados con explotaciones ilegales en la actualidad.

Igualmente, es importante tener presente que, en tanto la Cosigo Resources empieza a hacer presencia directa con sus prospecciones arbitrarias, en tanto se agudiza la tensión con los Ruíz y Héctor Jesús Sarria, las amenazas y la persecución es correlacionada por los líderes también con estos otros agentes. A medida que se desarrolla el conflicto se entrelazan situaciones y tensiones con todos ellos, y un hecho vinculado con uno antecede incidentes con los otros. Es por esto que muchos, si no todos los líderes afrodescendientes e indígenas con los que he dialogado y escuchado en reuniones, vinculan las amenazas de las Águilas

---

<sup>215</sup> (REDHER. Junio 2007: 5)

<sup>216</sup> (REDHER. Junio 2007: 5-6)

Negras, Rastrojos o anónimas, casi que por igual con los titulares foráneos. Incluso, en una de las amenazas enviadas en octubre de 2009 se mencionan explícitamente títulos y actores mineros “Esos burócratas no dejan progresar el CAUCA, donde no permiten el ingreso de las multinacionales que si traen beneficio a las comunidades en SUAREZ, MORALES Y BUENOS, AIRES, (Sic)”<sup>217</sup>.

La entrevista con Simón me sugiere que la intimidación paramilitar fue una de las motivaciones para afianzar la estrategia de visibilización internacional. Según esto, parece haber sido la herramienta por excelencia para contrarrestarla.

El Cabildo Indígena de Cerro Tijeras en su relacionamiento con el Gobierno Nacional también interpela sobre el tema minero. A comienzos de 2008, el Cabildo de Cerro Tijeras, junto con las Autoridades Indígenas del Alto Naya, Pueblo Nuevo Ceral, la Asociación de Juntas del Alto Naya y la Asociación de Desplazados del Naya –ASOCAIDENA-, solicitaban información sobre la titulación minera en Suárez y Buenos Aires a la Subdirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, durante una reunión de dos días. El Ministerio de Minas e Ingeominas responden en tres documentos dirigidos a José Leandro Güetio –representante del Cabildo Cerro Tijeras-: el informe de superposiciones de títulos mineros con el Área de Reserva Especial, el informe de los títulos y solicitudes de concesiones mineras en esos municipios y la realización de consultas previas a las actividades mineras adelantadas en la zona. Sobre este último tópico las organizaciones habían manifestado que “se están adelantando actividades mineras sin la realización del proceso de consulta con los grupos étnicos asentados en el área.”<sup>218</sup> De nuevo observamos la alianza entre sectores étnicos y comunitarios del Naya con algunos

---

<sup>217</sup> Otros apartes del texto: “Ustedes son defensores de la Guerrilla, solicitando tierra para sembrar coca para fortalecer a los indígenas y la guerrilla que no entienden el esfuerzo del presidente de la república Álvaro Uribe (...) Algunas de estas organizaciones han hecho convenios con dueños de títulos mineros solicitando el desalojo de las zonas mineras a cambio de dinero como ocurre en el corregimiento de la toma y tenemos documentos como prueba.” Se nombran más abajo entre los “objetivos militares” a: Nomadesc, Cut Valle, PCN, Consejo Comunitario de La Toma, Cerro Tijeras, Simón, Eduar Villegas, Jose Goyes, Diego Escobar, recheche, Plutarco, Meraldiño Consejal “Firma Aguilas Negras Nueva Generación”. En Nomadesc. 2009 Octubre 22. S.O.S. Organizaciones de la minga de resistencia social y comunitaria nuevamente blanco de amenazas. Cali.

<sup>218</sup> Oficio con Radicado No. 2008018118 del 25 de abril de 2008 enviado por la Directora de Minas del Ministerio de Minas y Energía al Subdirector de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, en respuesta al Oficio OFI08-10354-DET-1000, de abril 16 de 2008 enviado por la Subdirección a MinMinas.



líderes de Cerro Tijeras, y su preocupación por el tema minero. Más adelante, en julio de 2010, José Enrique Güetio envía un derecho de petición a su nombre, exclusivamente sobre el tema minero, las consultas previas y las licencias ambientales de las concesiones en Suárez<sup>219</sup>.

En la relación entre las dos organizaciones étnicas analizadas hemos identificado potenciales contradicciones y momentos de alianza, es decir, matices según los temas y contextos. El referente de acción política común más antiguo que hemos podido encontrar es la movilización hasta Cali desarrollada en el mes de mayo de 2006, en la que participaron “las comunidades de estos tres municipios impactadas por la construcción del embalse Salvajina y el proyecto de desviación del río Ovejas”<sup>220</sup>. Tanto el líder afrodescendiente Simón como el indígena Enrique han referenciado en numerosas ocasiones –conversaciones y reuniones- su participación en esa acción colectiva. Sabemos gracias al mismo documento que la iniciativa se da “después de un proceso de un año y medio de trabajo conjunto acompañado por la Campaña de Derechos Humanos Prohibido Olvidar”, sin embargo, no conocemos los detalles de ese trabajo previo ni los posibles intercambios entre el Consejo Comunitario de La Toma y el Cabildo de Cerro Tijeras en ese contexto. Parece que la Campaña Prohibido Olvidar, que luego se convertiría en la organización Nomadesc, constituyó un factor a través del cual se propiciaron acciones, espacios de formación y denuncias conjuntas.

El siguiente referente para el intercambio y acción coordinada del que participaron al menos parcialmente las dos organizaciones, es el ya mencionado “Comité Interétnico”, que intentó articular los procesos sociales de influencia de la Salvajina entre el año 2007 y 2009. Más allá de este espacio que, según la entrevista de Güetio, no siempre logró la participación de indígenas y afrodescendientes, entre el Cabildo de Cerro Tijeras y el Consejo Comunitario de La Toma parece haber predominado la colaboración puntual en medio de un trabajo más bien separado.

---

<sup>219</sup> Sé que por parte del Cabildo se realizaron muchos más y diversos oficios a propósito de este tema desde que inició el conflicto, sin embargo no ha sido posible ubicar los documentos físicos ni digitales.

<sup>220</sup> En (REDHER. Junio 2007) y también en el documento (Escobar 2008) se menciona la movilización.

A partir de la reconstrucción que hemos realizado, podría pensarse que la lucha contra la Kedahda/AGA, Cosigo, Héctor J. Sarria, es decir, contra los títulos mineros de foráneos en general, representa uno de los temas en los que mayor acuerdo ideológico y político hay. Este tema y línea de acción permitiría fortalecer una perspectiva de alianzas.

Inclusive, nos arriesgamos a considerar que puede haber sido el periodo de conflicto [2008, pero mucho más 2009 y 2010] durante el cual las dos organizaciones acompañaron una mayor cantidad de eventos comunes, principalmente en la cabecera y en La Toma. En varios momentos los indígenas visitaron ese corregimiento para asistir a eventos interétnicos, Audiencias Mineras Institucionales o Mesas Mineras con actores estatales. Estos intercambios permitieron reconocer las situaciones en las que se encontraban las comunidades afrodescendientes<sup>221</sup> y generar condiciones dentro de las organizaciones étnicas y sus comunidades, así como para demandar con mayor firmeza las soluciones a los agentes institucionales. El desalojo solicitado por Sarria, que profundizaremos en el acápite siguiente, es un factor relevante en la materialización de esta cooperación<sup>222</sup>, pero veremos que la lucha contra Sarria no es vista como algo aislado sino como una muestra de lo que significa la amenaza de los títulos mineros.

Según las observaciones realizadas y las conversaciones sostenidas sobre el tema con Simón y Meraldiño, actualmente y aproximadamente desde finales de 2011 el intercambio

---

<sup>221</sup> Contaba Meraldiño sobre una de esas ocasiones: “visitamos a la Toma en un evento con las comunidades negras (...). Inicios del 2009 creo que fue (Sic). Y llegamos allá y resulta que allá también había una dotación de, de implementos para la recreación cultural. Tambores, cositas así, maracas, toda esa vaina y esos también tenían el logo de la AngloGold Ashanti ¿Sí? Entonces decían ‘pues aquí también está la AngloGold Ashanti’ y empezamos a ver” (Entrevista con Meraldiño Caviche)

<sup>222</sup> “Nosotros sí juimos [indígenas] (Sic) y creo que en dos ocasiones [a las Audiencias y Asambleas Públicas en La Toma]. Tanto así que yo me acuerdo que yo personalmente de los recursos que yo tenía yo pagué un, una chiva para, para ir de acá (...) Y fueron (Sic) porque yo ya no pude ir, más pagué el carro más yo no puede ir (...) allá nos reunimos varios indígenas y varios negros y, y nos dimos el debate, se pelió (Sic), se, eee, se apoyó. (...) la CUT Valle también estuvo al frente, estuvo Nomadesc y no me acuerdo quién más, pero hubo hartos personal y que empezamos entre todos a decir: bueno, no, y es que no puede, o sea no puede pasar ese, ese título minero y sacar la gente así por así, (...) Yo creo que la unidad no se debe dejar de lado, buscar los procesos de unidad para dar una pelea jurídica en el tema territorial. (...) como planteando posturas internas de lo que estábamos pensando para poder llevarle directamente al gobierno también y eso, pues yo considero que ha servido.” (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014) Por ejemplo, solo para referenciar uno de los eventos en la cabecera, el 10 de diciembre de 2009 se realizaba la Audiencia por la Defensa del Territorio, la Cultura y la Dignidad de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur occidente colombiano. “La audiencia fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Corporación Nomadesc, Corporación Sembrar, el CRIC, la ACIN y otras 16 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.” (Raigoza, Camilo. Enero 2010).

interétnico específicamente en el municipio fue prácticamente nulo. Durante este mes de marzo de 2015 se ha desarrollado una reunión entre la Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y el Gobernador del Cabildo en la que se ha pactado avanzar en una agenda conjunta en torno al tema de la Consulta Previa al PMA de la Salvajina (14 marzo 2015).

El 5 de noviembre de 2009 la “Coordinadora Social” Clara Márquez, en aquella reunión ampliamente referenciada en este acápite, comunica ante el Concejo Municipal su “último informe”. En esa ocasión se despide de las comunidades y funcionarios públicos, dando el anuncio formal de que la AngloGold Ashanti se retiraba “de manera definitiva” del municipio.

“la empresa multinacional ANGLOGOL (Sic) ASHANTI ha decidido irse del municipio de Suárez y cerrar el proyecto de exploración aquí en el municipio por que (Sic) la licencia que no es nuestra no se pudo llegar a un acuerdo de permiso con el beneficiario de la licencia y la ley es muy clara y quien tiene la licencia tiene el derecho (...) se va muy agradecida por que (Sic) aquí se hizo todo con transparencia nadie puede decir que la empresa desplazo, mato, secuestro, incinero, o amenaza (Sic) y si alguien cree que la empresa multinacional ANGLOGOL (Sic) ASHANTI violó algún derecho lo invito que se valla (Sic), ante todos los entres competitivos y que denuncie.” (Concejo Municipal de Suárez. 2009 Noviembre)

A pesar de lo anterior, el Consejo Comunitario y el Cabildo de Cerro Tijeras continúan solicitando la anulación definitiva de los títulos y solicitudes mineras ubicadas en su territorio. Todas las concesiones y solicitudes ubicadas en el municipio siguen vigentes, incluyendo las de AGA<sup>223</sup>. Esta fue una de las exigencias de la Marcha de las Mujeres a Bogotá a finales del año 2014. Es recurrente escuchar en las reuniones del Consejo o cuando se conversa con los líderes, que el riesgo de las multinacionales continúa, que los

---

<sup>223</sup> La investigadora del Instituto Norte-Sur se refiere igualmente al anuncio de AGA: “A pesar de los anuncios públicos de que AGA se estaba retirando de la zona de Suárez y Buenos Aires, según el Informe de Sostenibilidad de 2010, el Proyecto La Salvajina de AGA se presenta como un proyecto de exploración en campo verde activo para Colombia, que se extiende desde el norte del Cauca hasta la zona de Nariño. Lo anterior se reconfirma en una presentación de mayo de 2012 de AGA en una conferencia sobre minería en las Américas organizada por Scotiabank. Los datos que nos dieron los representantes de la compañía confirman este interés y demuestran que las solicitudes de concesiones que ha hecho la compañía se traslapan con un territorio ancestral afro-colombiano y que cubren, incluso, el área inundada de la represa de La Salvajina.” Y en la cita 380 presente en el anterior párrafo dice: “A pesar de la información recogida a la fecha de las oficinas en Colombia de AGA que muestran las concesiones y zonas de interés, una carta de abril de 2012 de AGA afirma que *‘En el presente, no prevemos actividades de exploración en el Norte del Cauca en el futuro próximo.’*” (Weitzner 2012:132)

títulos en cualquier momento se reactivan. Como decía José Antonio “están no más haciéndose los muertos, con un ojo cerrado y otro abierto”. Parafraseando a Enrique, que nos explicaba en su entrevista: han dicho que se van, pero no han desistido de los derechos mineros que hoy ostentan y no van a desistir de desarrollar en un futuro las exploraciones y las explotaciones que les interese.

### **3.5. Naturales colombianos con títulos. Amparos administrativos y agudización de la tensión ‘nativos’/‘foráneos nacionales no legítimos’**

Mientras se desarrollaban todas estas situaciones con la AngloGold Ashanti, se cristalizaba una férrea contradicción con otros actores mineros foráneos, caracterizados por ser personas naturales con títulos, a quienes se les profesa un abierto rechazo por parte de las dos organizaciones étnicas y la gran mayoría de mineros tomeños. La intención de este aparte es describir el caso de esos actores, las relaciones que establecieron y el desarrollo de sus estrategias. El primero, Héctor de Jesús Sarria, obtuvo una licencia de explotación, BCF-021, de 99 Has en el año 2000. Luego, Olga Nidia Ruíz y Raúl Ruíz -su hermano- se hacen a una concesión minera, EKE-151, de 314 Has registrada en 2006. Las dos abarcan importantes áreas mineras tradicionalmente trabajadas en el corregimiento de La Toma, títulos que hasta el momento no han sido explotados directamente por los foráneos. Para ver el mapa de títulos vigentes ver Anexo 6.

Indagando sobre el perfil y la capacidad financiera que puedan tener para explotar a mediana o gran escala, Daniel Aguirre me dice “de tenerla, la pueden tener”, pero acota, “nosotros desconocemos su procedencia” enfatizando que es difícil asegurar algo sobre su capacidad económica. José Antonio interviene en la conversación para explicarme “cuando el estado da un título a alguien que no puede explotar, el estado mismo sabe que detrás hay alguien que sí puede explotar y viene por eso” y completa la reflexión Daniel “¡esos títulos son para vendérselos a la multinacional!”. Mis interlocutores señalan el caso de la hidroeléctrica La Salvajina para ejemplificar un poco más cómo llegan unos para beneficiar finalmente a otros: “como cuando trancaron La Salvajina, ¿Quién fue que compró las

fincas? ¿Quién hizo la represa? ¡Fue la CVC!” dice José Antonio y Lorenzo agrega: han puesto varias bases militares y aunque dicen que es para la protección de la gente, su objetivo es proteger La Salvajna, una prueba más de que el estado protege las multinacionales. Los tres asienten.

Los tomeños José Antonio Vidal y Daniel Aguirre presenciaron casi todos los encuentros con Sarria y participaron activamente en este particular enfrentamiento. El domingo 8 de marzo de 2015 nos encontramos para recapitular este episodio, dialogar sobre las informaciones que he recolectado y sobre las ideas que me he hecho al respecto. Llegan con Lorenzo Reyes miembro, como sus otros dos compañeros, de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario -2014 y 2015- (8 de marzo de 2015 ver Anexo 2).

Desde mi interpretación del contexto, el desenlace de la específica contradicción con Sarria condensó o catalizó el conflicto que se desarrollaba paralelamente con las multinacionales, especialmente con AGA. Los eventos y acciones de hecho que las dos organizaciones venían adelantando contra los títulos mineros en general, desembocan, en el caso del Consejo, en una serie de acciones para detener la amenaza de desalojo de los mineros tradicionales ubicados en la licencia de Sarria. La “ley” defendió, hasta último momento, el derecho minero del foráneo por encima del trabajo tradicional de los tomeños. Con José Antonio, Daniel y Lorenzo coincidimos en que esta situación fue, para muchos, una prueba de la veracidad de las prevenciones y desconfianzas hacia la titulación, una palmaria muestra de la posible realización de las tragedias que venían siendo auguradas por algunos líderes, si no se defendían los derechos como comunidad étnica legítima en el territorio.

Los dos personajes son vistos por la mayoría de los habitantes de la zona como agentes externos sin ninguna legitimidad, aliados o potencialmente aliados de las multinacionales, amparados por la ley para venderles o asociárseles, en fin para hacer negocio. Por mi parte comparto esta lectura, sus potenciales vínculos con las multinacionales tienden decididamente hacia la cooperación. A pesar de esto, también me he hecho la idea de que ni Olga Nidia, ni Sarria son “parte” o “enviados camuflados” de aquellas. De la lectura de los documentos he concluido que tienen un comportamiento más o menos “autónomo” en la búsqueda de intereses propios –autonomía susceptible de variar según el actor y según el momento-. Lo sugiere principalmente la forma en que llegaron y las fechas de los títulos

que defienden. He identificado que el desarrollo de estos específicos enfrentamientos ha tenido su propia lógica, lo que no quiere decir que haya sido independiente de otras dimensiones del contexto. Por lo anterior, me alejo de la perspectiva que ve estos actores como “testaferros” de las multinacionales. Sin embargo, dado que los casos no transcurren aislados, sí considero que las situaciones entre unos y otros actores se refuerzan.

Así como que se desarrollan efectivamente interacciones entre ellos. La relación entre Olga Nidia Ruíz y AGA que, he identificado, varios líderes suponen, es un ejemplo de esos posibles intercambios.

A pesar de obtener su título en 2006, la llegada de Olga Nidia Ruíz antecedió incluso el título más antiguo, el de Sarria. Aparece en la escena minera de Suárez hacia 1994, cuando el gobierno impulsa el programa de formalización minera derivado de la ley 141. La experiencia con esta persona marca un precedente negativo,

[Ella] es una señora de Popayán que, que llegó, ella es una Ingeniera de Minas<sup>224</sup>, y manipuló a los mineros, o sea allá buscó toda la confianza, y todo, y entonces se hizo al título (...) Ese título está por todo el sector del cementerio, del cementerio, el Peñón (...) [Está a nombre de] Raúl Fernando Ruíz que es el hermano (...) [El título] era de la Asociación de Agromineros de la Toma. Entonces ella dejó vencer los términos, entonces la descarada no los apoya, y entonces fue que lo puso a nombre del hermano (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

La señora Olga Nidia que, según me han informado numerosas personas, al momento de su llegada no contaba con tierras, con mina, ni con título, se ganó la confianza de los mineros locales y orientó el proceso del título minero de la Asociación de Agromineros de La Toma, organización constituida, según Simón, aproximadamente entre el año 88-90. Aquella Licencia de exploración No. 19656 otorgada al señor Salustiano Carabalí Juanillo en agosto de 1996 e inscrita en el Registro Minero en abril de 1998, se declara finalmente terminada en Abril de 2003<sup>225</sup> después de un largo proceso legal. En su expediente jurídico comprobamos que la asesoría de la señora Olga Nidia precedió la expedición de la Licencia, ya que para agosto de 1995 la Secretaría Legal del Ministerio de Minas y Energía

---

<sup>224</sup> Los datos de su Tarjeta Profesional son: Olga Nidia Ruíz Ordoñez Ingeniera de Minas con Matrícula 1921881857CAU de la Fundación Universitaria de Popayán, fecha 2000/07/27. En Anexo del Oficio 2603 del 14 de noviembre de 2003, Formulario No. 1764 Propuesta de contrato de concesión (Expediente Título EEK-151 Pdf 2: p. 13)

<sup>225</sup> Resolución No. 3-109-2003 del 16 de abril de 2003, Empresa Nacional Minera LTDA.- Minercol.

recibía un oficio en el que Salustiano Carabalí cedía los derechos “al título Licencia de exploración” en favor de “los titulares” Olga Nidia Ruíz Ordoñez y Carlos Arturo Plaza Parra<sup>226</sup>. La autoridad minera decide denegar la solicitud pues no era posible ceder una expectativa -aún no era derecho- y le otorga la Licencia al señor Carabalí<sup>227</sup>. Sin embargo, el no pago del Canon Superficial así como el hecho de no adelantar ninguna actividad de exploración justifica legalmente la posterior cancelación de la Licencia. En nuestra charla de marzo de 2015, José Antonio recuerda que “el primer título fue de la Cooperativa” pero se “perdió” porque “Salustiano no tenía para pagar el canon”. De inmediato corrige con Daniel: era una “Asociación” y “no estaba registrada” apunta este último. José Antonio dice desconocer el detalle exacto de la maniobra realizada por la señora a los mineros de la época, pero sabe que de alguna forma se aprovechó de las circunstancias.

No parece haber sido el único caso relacionado con “ingenieros” foráneos. Conversando con Simón (5 de marzo de 2015), le pregunto sobre el titular de una pequeña concesión, la 22030 de casi 7 Has, del que hasta el momento no tenía información alguna. Me explica que el título de Alfredo Díaz Durán tiene una historia similar al de Ruíz. El señor, un “ingeniero”, asesoró a unos mineros y dejó un pequeño título a su nombre, cuya propuesta de contrato fue radicada en 1998 y registrado como concesión en 2003. Según su versión, el “señor de Popayán” “nunca volvió a aparecer” ni a saberse de él por La Toma.

La prevención que se pudo haber generado ante este tipo de asesores, toma otra dimensión más adelante, cuando los líderes comprueban que una solicitud de concesión minera elevada en noviembre de 2003<sup>228</sup> por el señor Raúl Ruíz, hermano de Olga Nidia Ruíz, es aceptada e inscrita en el RNM el año 2006. José Antonio nos explica a Daniel, Lorenzo y a mí, que la señora Ruíz obtuvo su título cobijando el que anteriormente había sacado a nombre de Salustiano, pero en un área mayor. Según el Certificado de libertad realizado por Minercol<sup>229</sup>, en el área originalmente solicitada (un poco más de 332Has) sí se registró

---

<sup>226</sup> Oficio “Cesión derechos licencia de exploración expediente 19656” del 25 de agosto de 1995. (Expediente Jurídico Licencia de Exploración 19656, presente en los Archivos del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras).

<sup>227</sup> Resolución No. 730979 del 13 de Agosto de 1996.

<sup>228</sup> En las tablas de títulos del municipio de Suárez, Raúl Ruíz Ingeomina aparece firmando el contrato en 2006. El titular presentaba propuesta de contrato de concesión, es decir solicitud formal el 14 de noviembre de 2003 poco después de cancelarse la licencia 19656. Oficio 002603 del 14 de noviembre de 2003 dirigido al Gerente Operativo de Minercol Ltda. por Raúl Fernando Ruíz (Expediente Título EKE-151 Pdf 1: p. 1)

<sup>229</sup> Oficio 002662 del 24 de noviembre de 2003, Minercol Ltda. (Expediente Título EKE-151 Pdf 2: p. 43)

superposición con la licencia 19656 en un porcentaje de 003.341, licencia que a pesar de haber sido terminada formalmente por la autoridad, continuaba vigente en el Registro Minero Nacional. Además, hubo superposición con las propuestas de contrato de concesión en trámite del señor Alfredo Díaz y Diefer Marin (EET-143). Todas estas áreas, incluyendo la licencia de Salustiano, fueron finalmente recortadas del área original solicitada por los Ruíz<sup>230</sup> reduciéndola unas 8 Has. Finalmente, la concesión abarca lugares de trabajo minero local, de habitación, de relacionamiento comunitario e incluso el cementerio de la vereda La Toma. Así, el titular ha tenido el amparo de la ley por encima de los intereses que los/as mineros/as y habitantes locales tengan, o puedan tener, sobre una gran área de su corregimiento.

A diferencia de Alfredo Díaz, Olga Nidia ha hecho “presencia” en el corregimiento a través de la relación con algunos de sus habitantes, lo que al parecer le permite hacer seguimiento a su derecho minero: “Olga Nidia tiene personas de la misma comunidad que le llevan informaciones a ella, se prestan para eso, no se sabe los compromisos, si son dádivas que les llevan, pero se prestan para eso” me explica Daniel en medio de la charla, después de que él y José Antonio me aseguraran que nunca la han visto en persona<sup>231</sup>.

En algún momento del conflicto minero, el tema del título de Salustiano y de la señora Olga Nidia Ruíz trascendió el corregimiento de La Toma. El Expediente Jurídico del título que ella “asesoró” se encuentra completo entre los documentos del Archivo del Cabildo, y es información que maneja, aunque con poco detalle, Enrique Güetio. Al líder indígena le he escuchado referenciar un par de veces el caso, manifestando que conoció el testimonio de Salustiano Carabalí y que éste había expresado que desconocía muchas de las acciones y decisiones sobre su título. Pareciera que la difusión del caso de Salustiano hubiera tenido el objetivo de advertir la amenaza que representaban los foráneos actores mineros. Por su

---

<sup>230</sup> Desde que Raúl Ruíz solicita la concesión Olga Nidia aparece realizando los planos topográficos y el 5 de mayo de 2005 el titular autoriza una total representación a la ingeniera en todo lo relacionado con el título EKE-151. Ver Oficio con recibido 15089 (un poco borroso) del 5 de mayo de 2005, dirigido a Ingeominas por Raúl Ruíz Ordoñez (Expediente Título EKE-151 Pdf 2: p. 67)

<sup>231</sup> En el formato de Diligencia de reconocimiento del Informe de apoyo técnico (Ingeominas. 11 Julio 2008: 29), el funcionario registra lo manifestado por comuneros que realizaban minería en el título de Ruíz: “se concede el uso de la palabra a: Dagoberto Larrahondo y otros (...) dice que todo el personal encontrado lleva más de 35 años trabajando en la zona, ellos no conocen al señor Raul Ruiz (Sic), nunca se ha aparecido por aca (Sic) que la Sra Olga Nidia Ruiz llegó a trabajar en asociación con los mineros y la licencia estaba a nombre del señor Salustiano Carabalí y ella se fue de la zona en el año 1996 y ahoran (Sic) escuchan que volvió a aparecer, y que tiene una persona que le cuenta todo lo que sucede y los tiene perjudicados porque no les está llegando la polvora (Sic)”.



parte, Meraldiño dice desconocer el caso de la licencia 19656 y de Olga Nidia Ruíz (marzo de 2015). Durante esa época, me explica, quien “estaba bien metido” en el tema minero general del municipio era Güetio, ya que su rol en el Concejo le exigía asumir otros temas diversos.

Varios otros documentos relativos al “caso Sarria” reposan en el Archivo que el ex – gobernador Güetio ha conservado. Uno me llama poderosamente la atención, son 10 páginas en las que el propio Héctor J. Sarria hace el recuento de su relación con el minero Arlex González, y argumenta sus motivaciones para solicitar el amparo administrativo que prendió las alarmas nacionales e internacionales. Escribe el titular sobre sus indagaciones acerca de la posición que los tomeños tenían frente a su derecho minero:

“Arlex: (...) Lo que dicen en la Toma es que a ella [Olga Nidia] le tumban ese título; y que a usted también (...) estábamos hablando sobre la mina que tengo allá arriba y entonces decían los manes de ahí que lo que pasa es que por ahí habían dos o tres personas que habían denunciado una tierra y que no eran de la zona (...) el título no es de OLGA NIDIA es del hermano, sino que hay una fachada (...) Héctor: Que se lo tumban y por qué, no dicen? (Sic) Ah, que porque es de fachada? (Sic) Arlex: No, que porque no es de la zona, que no tiene tierras (...) pero le voy a decir una de las personas que influye mucho en eso, se llama ESTEBAN<sup>232</sup>. Ese man (Sic) es el que mueve la TOMA (...) y que el suyo [Sarria] no estaba tumbado pero que la gente de aquí no lo dejaba trabajar ahí (...) Igual [que] cuando yo llegué aquí, que no me dejaban trabajar (...) mejor dicho que a usted no lo dejaban trabajar (...)”<sup>233</sup>

Según el documento y los testimonios de José Antonio y Daniel, el conflicto con Héctor J. Sarria inicia a finales de 2008, se desarrolla y madura durante 2009, para alcanzar su punto más alto en 2010. No obstante, la información sobre su presencia como titular minero circulaba ya desde el año 2004, cuando se constata un oficio dirigido a la autoridad minera nacional, por parte del Personero Municipal de Suárez, el señor Clemente Lucumí Golú. Solicitaba la suspensión provisional de los efectos de la licencia BFC-021, así como la

---

<sup>232</sup> El nombre ha sido sustituido.

<sup>233</sup> Documento firmado por Héctor Jesús Sarria dirigido a “Señores Comunidad de La Toma”, titulado: “OBJETIVO DE LA REUNION: DENUNCIAR PUBLICAMENTE AL CAUSANTE INTELECTUAL Y MATERIAL DEL DESALOJO DEL AREA BFC-021: ARLEX GONZALEZ Y SU GENTE”, con fecha 6 de agosto de 2009 en Santiago de Cali. En adelante citado (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

realización de la Consulta Previa por la presencia de comunidades negras en este territorio<sup>234</sup>. La respuesta que recibió el funcionario se repetiría durante años para argumentar el “correcto” procedimiento de la institucionalidad en el otorgamiento de la concesión a Sarria: “ (...) se procedió a evaluar el proceso de otorgamiento de la licencia BFC-021, encontrando que este se ajusta a derecho y que como usted bien lo señala no se efectuaron las consultas previstas en la ley 70 porque el sistema gráfico de MINERCOL LTDA., que para entonces se desempeñaba como autoridad minera, no reportó superposición con comunidad negra alguna.”<sup>235</sup> La anterior cita ilustra cómo desde aquella época encontramos la contradicción entre el procedimiento institucional minero y el marco legal que protege los derechos étnicos, un elemento de profunda importancia política y jurídica que este caso pondría a la luz de forma espléndida con su desalojo fallido.

Pero antes del sonado amparo administrativo solicitado por Sarria, los hermanos Ruíz habían ya apelado a esa figura para “proteger” su concesión minera, según nos cuenta José Antonio (8 de marzo 2015). Revisando el Expediente Jurídico del título EKE-151 corroboramos esta información en un oficio que Raúl Ruíz radicó en la Alcaldía Municipal de Suárez el 16 de enero de 2008<sup>236</sup>. El tomeño me explicaba que “en esa época no hubo rebelión, porque eso lo manejaron entre la administración y el Concejo Municipal”. Al parecer y según su versión, algunos funcionarios de esas instancias lograron parar el proceso en aquella época. En el expediente consta que en un primer momento el Alcalde niega la solicitud de amparo por no incluir la copia del certificado de registro de la

---

<sup>234</sup> Oficio ODP-342-04 enviado el 25 de agosto de 2004 por el Personero Municipal a Ingeominas Grupo de Trabajo Cali.

<sup>235</sup> Oficio GTC-674-04 de septiembre 07 de 2004 enviado por Teresa Duque coordinadora Grupo de Trabajo INGEOMINAS Cali al Personero Municipal de Suárez.

<sup>236</sup> Después de una visita de fiscalización (9 noviembre 2007) al área en concesión durante la cual se registraron tres bocaminas en explotación (en el Peñón y un molino en El Carmen, según especificaciones posteriores de Ruíz), Ingeominas había asumido que aquellos frentes venían siendo trabajados por el titular (Fuentes Primarias de este capítulo: Ingeominas. 27 Noviembre 2007). La Autoridad Minera procedió a solicitar la suspensión de las explotaciones directamente al Alcalde de Suárez y a notificar causal de caducidad para la concesión de Ruíz por adelantar trabajos de explotación y construcción sin PTO y Licencia Ambiental aprobados (Fuentes Primarias de este capítulo: Ingeominas. 30 Noviembre 2007). En ese momento Raúl Ruíz procede a solicitar el amparo administrativo contra los explotadores, en uno de los oficios declaraba el titular “Se informa nuevamente que el concesionario no adelanta labores de explotación y no tiene ningún montaje de beneficio en el área de concesión del contrato otorgado”. Posteriormente, Ingeominas declara subsanada la causalidad de caducidad “debido a la presentación de solicitud de amparo administrativo” (Fuentes Primarias de este capítulo: Ingeominas. 22 Febrero 2008). Ver Oficio “Asunto: Solicitud amparo administrativo contrato de concesión minero EKE-151 otorgado a Raúl Fernando Ruíz Ordoñez” dirigido por Ruíz a Luis Fernando Colorado Aponzá, Alcalde de Suárez, radicado el 16 de enero de 2007 y redireccionado a Ingeominas el 17 de enero (Expediente Título EKE-151 Pdf 4: 87-89)

concesión a través de la Resolución No. 112-1-17 de 17 de enero de 2008<sup>237</sup>.

Durante mis intercambios con personas del municipio de Suárez en torno al tema de Olga Nidia no había escuchado referencia a la situación señalada. José Antonio lo recuerda mientras reconstruyen con Daniel los encuentros que tuvieron con Sarria. No obstante la negativa del Alcalde, Ruíz presenta una nueva solicitud de amparo el 23 de junio de 2008<sup>238</sup>. Según el Informe de la visita de apoyo al amparo realizada el 7 y 9 de julio de ese año, la suspensión de actividades mineras en el área del título EKE-151 comprometía el trabajo de al menos 70 personas registradas por los funcionarios “fue encontrada minera (Sic) subterránea y a cielo abierto” se reportaba una “alta densidad de minería”<sup>239</sup>. El 11 de agosto se concede el amparo administrativo por medio de la Resolución No. GTRC-0128-08 ordenando la suspensión de las actividades mineras referenciadas y el desalojo.

No conocemos las acciones del Alcalde al respecto, después de ser notificada su obligación de suspender. No se encuentran documentos relacionados con alguna diligencia de desalojo programada o ejecutada, hasta un nuevo “Informe de visita técnica de seguimiento y control” en el que Ingeominas identifica de nuevo actividades mineras a cielo abierto realizadas por 20 personas en abril de 2009<sup>240</sup>. La suspensión del trabajo en bocaminas de filón se debía a la falta de explosivos, según informaban los funcionarios. De nuevo, la autoridad minera oficia al Alcalde solicitándole suspenda la “actividad minera ilegal” “no

---

<sup>237</sup> Oficio ODA-3-10/03/08 “Asunto: Su oficio GTRC-0483-08 del 22 de febrero de 2008”. Suárez, Cauca. Dirigido por Alcalde de Suárez a Ingeominas Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 5: 17) y la Resolución en (Expediente Título EKE-151 Pdf 5: 21)

<sup>238</sup> Oficio “Referencia: Amparo Administrativo Contrato de Concesión No. EKE-151, cuyo titular es el señor Raúl Fernando Ruíz Ordoñez” dirigido por Clara L. García (apoderada de Ruíz) a Ingeominas Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 5: 67)

<sup>239</sup> En el Informe se registran 7 puntos referenciales desde donde se identificaban los lugares de trabajo y el # de personas. Punto 1: “Bajo Tierra” con 7 personas se determina luego que se ubica por fuera del polígono del título; los siguientes puntos están por dentro: Punto 2: “Bajo Tierra” con 15 personas; Punto 3: “Cielo Abierto” con 7 personas; Punto 4: “Cielo Abierto” con 2 personas; Punto 5: “Cielo Abierto” con 10 personas y “Bajo Tierra” con 1 persona; Punto 6: “Cielo Abierto” con 4 personas y “Bajo Tierra” con 27 personas; Punto 7: una bocamina con 2 personas. (Fuentes Primarias de este capítulo: Ingeominas. 11 Julio 2008. En Expediente Título EKE-151 Pdf 6: 11) En otros dos Informes, de 2011 y de 2013 se constatan trabajos. Para Junio de 2011 existían 7 frentes de explotación a cielo abierto, 3 plantas de beneficio (dos con cianuración) y 11 bocaminas subterráneas algunas suspendidas. Para septiembre de 2013 se registraban igualmente 7 frentes de explotación a cielo abierto y 9 bocaminas subterráneas de las cuales 6 activas. Ver Ingeominas. 24 Junio 2011. “Informe No. GTRC-0026-11”. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 10: 29) Y ANM. 4 Septiembre 2013. Informe No. PARC-097-13. IV-097-EKE-151-04-09-13. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 13: 31)

<sup>240</sup> Ingeominas. 20 Abril 2009. “Informe GTRC-057-09. Informe de visita técnica de seguimiento y control realizada al área del título minero No. EKE-151”. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 7: 69)

autorizada” por el titular<sup>241</sup>. Una vez más se pone a la orden del día el amparo administrativo solicitado por Ruíz coincidiendo con las medidas tomadas por Sarria.

Es significativo que el precedente del amparo administrativo de los Ruíz sucedía justo a finales del año 2008, al mismo tiempo que Sarria comienza a hacer presencia directa en el municipio. Ya hemos visto que por esa época se profundizaba de nuevo la problemática para los mineros de filón que, como lo vuelve a repetir el Informe de Ingeominas sobre el amparo de los Ruíz, carecían del insumo explosivo. Recordemos también que a pesar del derrumbe en Casa Máquinas, el Concejo Municipal y el Alcalde renovaban ese mismo año (2008) el “permiso” para realizar minería a cielo abierto con retroexcavadoras en Machaqueo y San Miguel. Todo esto, junto con la presencia de Cosigo intentando explorar con engaños, acompañada de la Fuerza Pública y reafirmando su título minero contiguo al ARE Turbina-Tamboral, y la incidencia de la AGA maniobrando sus relaciones con la Alcaldía y otros sectores sociales, completaban un denso panorama de la minería en Suárez.

En el primer encuentro con Sarria, Daniel estaba presente. Todo empezó en las tierras “del finado Ramiro Ambuila, Guillermo Lucumí y otros”, un día en que el titular entró al corregimiento por el terreno llamado “El Llano” con dos personas más. Procedía el señor a tomar unas medidas cuando doña Isabel se le acercó para interpellarlo. Según Daniel, le preguntó “a quién le había pedido permiso, aún no se hablaba de consulta”, y continúa “él dijo que el estado le había concedido esos terrenos, y por lo tanto eso era de él, y que nosotros lo estábamos robando”. Nuestro interlocutor detalla que a raíz de esa respuesta,

El señor Miro Lucumí le dijo que eso era herencia de nuestros padres, y que por lo tanto eso tenía escrituras del Incora (...) en la algarabulla que se hizo se reunieron unas 15 personas que le pidieron de buenas maneras que hasta que no quedara claro lo que él estaba haciendo que suspendiera las labores que estaba haciendo, y él se sostuvo que eso era de él y él seguiría haciendo las medidas. Miro se exalto y le dijo que si no quería tener problemas que se saliera de esos terrenos. (Conversación con Daniel Aguirre, transcripción directa del relato, conversación 8 de marzo 2015)

---

<sup>241</sup> Ingeominas. 30 abril 2009. Oficio GTRC-1008-09. “Referencia: Explotación minera ilegal en el área del contrato EKE-151” Dirigido al Alcalde de Suárez.

En esa ocasión, Héctor Sarria solicita que se le conceda una reunión para explicar sus objetivos, alegando que “dependiendo de la reunión” se podría trabajar en sociedad. Daniel recuerda al respecto: “eso se entendió como que era para nosotros quedar de trabajadores de él”. Se acordó, entonces, que se haría una reunión el domingo siguiente en casa de la señora Isabel. Daniel recuerda aquel encuentro con indignación: “Sarria en un acto de mala fe, llegó con media caja de aguardiente Blanco del Valle. Quien andaba con él de guía, le había dicho que La Toma se compraba por medio de aguardiente” me dicta literalmente. Mientras escribo su relato, repite varias veces “Nunca me voy a olvidar” “¡Media caja de aguardiente Blanco! Blanco del Valle”. “Sarria explicó lo que iba hacer y se le dijo que no” afirma Daniel y luego, riendo con picardía, rememoran con José Antonio que se tomaron todo ese aguardiente “¡Todo nos le tomamos!”, se burlan. Según mis interlocutores, el titular “llegó ofreciendo [a la reunión] maquinarias para trabajar las minas” pues, según le escuchó Daniel decir en esa misma ocasión, él no estaba interesado en la explotación de las minas, sino en el permiso para traer maquinaria del exterior sin pagar aranceles, que se deriva de la concesión. Se concluyó el encuentro diciéndole al señor que no estaban interesados “porque él prácticamente quería tener era esclavos” enfatiza Daniel y prosigue “[Y] volvió a repetir que nosotros lo estábamos robando porque él tenía unos títulos que el estado le había entregado”.

Después de estos encuentros, Sarria continuó haciendo presencia en la zona, pero ahora por otro sector de “su” título, en donde se encontró otros mineros con quienes tuvo nuevas interacciones, “él siguió tomando otras acciones, yéndose por el punto denominado La Carolina, se encontró con el señor Alberto Varela y otros” recuerda Daniel<sup>242</sup>. A esta altura de la historia inicia el relato que Sarria consignó en su documento, en el que no incluye las reuniones sostenidas con los mineros de los otros predios. Según su versión, a mediados/finales del 2008, el titular se interesa por una explotación en especial, ubicada en el área concesionada. Durante ese año parece haber visitado en dos ocasiones la mina La Carolina, en compañía de ingenieros de minas que él llevaba y de los algunos trabajadores de la explotación. De la descripción que hace de los hechos se deduce que su objetivo

---

<sup>242</sup> José Antonio y Daniel me explican que aunque la mina de Alberto se llama La Carolina, lo afectado es una amplia zona que cobija desde el puente del ferrocarril hasta la quebrada “Calotico”, y se referencia en su conjunto como “La Carolina”.

consistía en averiguar en profundidad la forma de trabajo y las proyecciones técnicas y financieras de los mineros de hecho. En noviembre de 2008 Sarria cita al antioqueño Arlex González, trabajador de La Carolina con quien venía interlocutando, en un restaurante de Suárez. Quería advertirle sobre su decisión de solicitar un amparo administrativo con el fin de suspender las actividades mineras de aquella mina, en caso de no hacerse voluntariamente, y bajo la consideración de ser explotaciones ilegales que ponían en riesgo su propia legalidad como titular<sup>243</sup>. La reacción del minero antioqueño, según la versión de Sarria, consistió en negarse a firmar la carta o cualquier otro documento, dado que podría ser interpretado por sus socios tomeños como una traición<sup>244</sup>,

“Arlex: (...) yo no soy de la zona, el socio es de la zona y ha vivido todo el tiempo ahí... sí me entiende, entonces yo vengo y le firmo a usted esto y le muestro a él vea hermano yo firme esto, póngale un papel en mi pellejo y me dice: ¿CÓMO QUE USTED ME ENTREGÓ LA MINA?, ENTONCES VIENE Y DICE, MALO, MALO, QUE YO FUI QUIEN LE VENDÍ A USTED (Sic). (...) Yo pase por un cacharro de estos y por eso estaba rodando mi cabeza (...) Yo entre a la zona porque me dijeron que era la zona de la cooperativa, es más, entre afiliado a la cooperativa” (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

Según Sarria, el antioqueño denotaba una supuesta inclinación a la cooperación durante los encuentros anteriores<sup>245</sup>, información que difícilmente podremos corroborar. Sin embargo, de la conversación que citamos, interpretamos que el minero paisa parecía “elegir” conservar el nivel de confianza y legitimidad que le había permitido ser aceptado en el

---

<sup>243</sup> “[la actividad] se encuentra dentro del área correspondiente al título minero BFC-021 el cual me fue asignado por INGEOMINAS. Por lo tanto sus actividades se enmarcan dentro de la conducta punible de explotación ilícita, por lo cual le solicito el desalojo de manera inmediata. Le informo que estaré iniciando la acción de amparo administrativo ante la autoridad competente (...)” rezaba la carta que Héctor J. Sarria le entrega a Arlex ese día. Por otro lado las supuestas razones de la decisión: “Héctor: (...) Yo lo hago como un arma para responderle a INGEOMINAS. Porque si INGEOMINAS me dice algo, yo respondo que yo le dije a él. (...) si algo le pasa a ti o a alguno de tus trabajadores, yo llevo del bulto porque esa parte a mi (Sic) me la dio el estado”. (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

<sup>244</sup> Cuenta en su versión del episodio: “Carta que el señor Arlex se negó a firmar, por lo que la firmó el señor Joaquín Álvarez como testigo a ruego. Una vez leída la carta al señor ARLEZ Gonzalez (Sic), Exclamó: ¡Ahhh se metió conmigo y mi gente! (...) Y dijo: ‘Don Héctor, yo se (Sic) que esa área es suya, cuanto me da y le dejo esos huecos ahí? (Sic)’” (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

<sup>245</sup> Según el texto de Sarria, el minero de hecho se presenta conciliador, con iniciativa para informar sobre su trabajo y de dialogar sobre posibles arreglos con el dueño del título. Es difícil especular sobre los múltiples sentidos, intenciones o interpretaciones que podrían subyacer a esa *supuesta* actitud: “me propuso que montáramos una sociedad o que le dijera cómo íbamos a trabajar. Me invitó un fin de semana con la familia para que conociera la mina, en la cual se podía andar parado y no como en la del resto de la región donde hay que entrar de lado y agachado. Le respondí que hablaría con las abogadas y le informaría vía celular (...)” describe Sarria en su carta. Por otro lado, *no* es posible afirmar la veracidad de esta información, ni contrastar con la versión de Arlex quien fue asesinado casi dos años después. (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

trabajo minero local por aquellos nativos. Las relaciones de asociación y trabajo entre los diversos mineros de hecho nativos, y algunos foráneos legítimos, no eran comprensibles para el señor Sarria que reclamaba por el trato “diferencial” al que eran sometidos su persona y Arlex. Desconocía la intrincada red de relaciones de poder y legitimidad en las que se dinamiza la práctica minera, en este caso de filón, y pretendía imponerse en virtud de su lugar de “titular”,

“Desde el año 2000, fecha en que INGEOMINAS me concedió la Licencia de exploración, los señores DIEFER MARIN y DANIEL AGUIRRE con sus familias son prácticamente los únicos que explotan en dicha área. Por tanto, Yo no soy bestia, para no entender, que ese ha sido y será el medio de su subsistencia. (...) sostienen que no soy de la región, que no he hecho consulta previa y que no tengo tierras en el área (Según Arlex Gonzalez). PREGUNTO: ¿El señor ARLEX GONZALEZ es de la región?, ¿Tiene tierras o propiedades en el área?, ¿Ha hecho consulta previa?, ¿Es afro?, ¿Es legal o ilegal? (...) ¿Por qué solo hasta el día miércoles, 05 de noviembre de 2008 cuando le informo del amparo administrativo, el señor ARLEX GONZALEZ me comunica que él tiene un socio llamado ALBERTO VARELA Y DIEGO?, ¿Por qué hasta ese día ARLEX GONZALEZ le paga arriendo a ALBERTO VARELA?, ¿Por qué a partir de ese día el señor ALBERTO VARELA toma posesión de la mina y es él quien le paga a ARLEX GONZALEZ un alquiler o arriendo por la máquina?, ¿Por qué, si los socios no se cobran sino que comparten sus ganancias? (...) por su culpa [de Arlex] crea discordias y problemas entre la comunidad y yo, para él ser el único beneficiado y ponerme a mi (Sic) como lo peor (...) Con lo anteriormente expuesto pruebo y demuestro que el señor ARLEX GONZALEZ (y su gente), es el único causante intelectual y material del desalojo” (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

En su documento, el titular intenta fijar una posición diferenciada frente a los mineros nativos y los foráneos como Arlex<sup>246</sup>, quien impulsaba, a su parecer, la tecnificación del trabajo minero. Sin embargo, durante las primeras reuniones relatadas por Daniel y José Antonio, Sarria catalogaba ya como ladrones a los mineros locales de las otras minas. El señor Arlex no aparecía aún en la escena y ya se registraban “choques” con los nativos que

---

<sup>246</sup> Argumentaba Sarria: “Yo con la gente de la región no me meto. ¿Por qué?, por dos razones. PRIMERO: porque son de la región y ellos se rebuscan su comida... SEGUNDO: y lo más importantes es que ellos no tienen una explotación tecnificada... El caso tuyo es diferente Arlex; porque tu (Sic) no eres de la región, PRIMERO y SEGUNDO, tu (Sic) estás explotando algo técnicamente...” (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

él decía respetar, como testimonia el propio Daniel Aguirre. Al preguntar en qué momento exacto se tornó conflictiva esta relación, José Antonio me afirma “desde que Sarria entró al territorio hubo problemas hasta que se suspendió el título. Y sin embargo sigue habiendo inconvenientes”. Adicional, el mecanismo elegido para proteger su “derecho minero” planteaba una contradicción no solo con Arlex como minero foráneo, sino con todo el personal de las minas del área. El amparo administrativo no discriminaría entre mineros tomeños y foráneos.

Según me explican, después de chocar con trabajadores y propietarios en algunos predios, porque “antes del desalojo ya había empezado con los atropellos”, “cuando pone el amparo toda la gente se une” resalta José Antonio. En enero de 2009 hace la solicitud formal de amparo administrativo y en marzo se desarrolla la visita técnica de reconocimiento, de la cual se genera el Informe de Apoyo Técnico a la Resolución No. GTRC-0066-09 que resuelve a favor de Sarria en abril. El Informe y la Resolución relacionan como mineros “perturbadores” no solo a “Arlex y su gente” sino a Diefer Marin y Daniel Aguirre, los mineros nativos tradicionales “avalados” por Sarria en su escrito. Se ordena de esta forma “la inmediata suspensión de las actividades de explotación que adelantan”<sup>247</sup> once mineros identificados en nueve bocaminas, incluyendo La Carolina –a nombre de Arlex González, Alberto y Diego Varela-<sup>248</sup>, así como “cualquier otra persona dentro del área de la Licencia de Explotación BFC-021”. El 5 de marzo, día de la visita de reconocimiento, Sarria se presenta con la comisión de funcionarios estatales en la mina La Carolina donde los esperaban, según su versión, entre unas 25 y 30 personas,

“Dicen pertenecer a la comunidad de la toma y me acusan, sindicán y sostienen que: Voy a vender el título a la internacional ANDROGOL ACHANTI (Sic) COLOMBIA S. A. y que quién les puede asegurar a ellos que eso no suceda. El señor ESTEBAN<sup>249</sup> dice que no cree ni en los pantalones que tiene puestos. Que voy a hacer lo mismo que hizo o está haciendo la señora OLGA NIDIA: Venderle a la MULTINACIONAL ANDROGOL ACHANTI

---

<sup>247</sup> Resolución GTRC-0066-09 del 28 de abril de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un amparo administrativo dentro de la licencia de explotación BFC-021”

<sup>248</sup> La mina La Carolina es referenciada explícitamente en la segunda página del “Informe No. GTRC-0050-09. Informe de Apoyo Técnico a Amparo Administrativo realizado en el área del título minero No. BFC-021” Ingeominas, 3 de abril de 2009, Santiago de Cali. Esta mina aparece en algunos informes del ARE pero finalmente no es incluida en el inventario de bocaminas por estar fuera de las coordenadas del polígono Gelima.

<sup>249</sup> La identidad ha sido cambiada.



(Sic) COLOMBIA S. A. la Licencia o el título; pues esta señora está pidiendo 10 o más millones de dólares a dicha multinacional por su licencia<sup>250</sup>. También dicen que no se ha solicitado el permiso debido a la comunidad por ser un área de negritudes (...) que los voy a desplazar de su territorio (...) Exponen que los he acusado de perturbadores y los perturbadores son gente mala como guerrilla y otros. Un señor me canta la canción la ‘Culebra’. Unas señoras, sostienen que nunca los he apoyado (...) A lo que respondí: Señoras no les he colaborado porque lo ha (Sic) citado a reuniones cantidad de veces y no han ido, me han dejado esperando. Por lo que un joven afrocolombiano de más o menos 20 a 25 años de edad, dijo: ‘Señor, si la comunidad no va a las reuniones es porque no lo quieren: HUEQUE DE AQUÍ’.” (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

La potencial inclinación a aliarse con las multinacionales aparece como uno de los riesgos principales que motivan el rechazo. Es significativo que ya para esos días hacía presencia una persona del proceso indígena regional que se solidarizaba<sup>251</sup>. Sarria relata que en ese episodio una mujer expresa que Arlex había dicho a la comunidad que le dejaría las máquinas a los lugareños. Cuando comento el tema ante Gustavo, José Antonio, Daniel y Tomás reunidos en Yolombó (5 de marzo 2015), los tres primeros corroboran la intención del antioqueño de retirarse si el problema de Sarria era solo con él, dejando las máquinas y el entable a los nativos. Más allá de estos detalles es claro que, lo que el titular se esforzaba por plantear como un conflicto personal y direccionado, era considerado por gran cantidad de tomeños como una afrenta a la comunidad. En efecto, tendría consecuencias sobre el futuro de toda la población del corregimiento, e incluso, del municipio.

Por el énfasis que hacen Daniel, José Antonio, Gustavo y Simón en el carácter y la actitud impositiva de Sarria pienso que jugó como un elemento que atizó el rechazo. Apelaba permanentemente a su derecho legal, y en su escrito sugiere que éste le facultaba para determinar las condiciones a los mineros ubicados en “su” título.

---

<sup>250</sup> José Antonio sostiene (8 de marzo 2015) que esa información fue proporcionada por un empleado de alto rango de la AngloGold a un líder de La Toma. De acuerdo con ésta, Olga Nidia Ruíz estaba pidiendo 10.000 millones de dólares a la multinacional por su título. Esta versión es manejada por varias personas del corregimiento. Por otro lado, nos llama poderosamente la atención que durante una visita técnica de seguridad e higiene minera realizada en 2011 por Ingeominas al título EKE-151, además del representante de Ruíz acompañó la diligencia un señor William Batista “representante de la empresa OROCAUCA S.A.S”. Aunque no conocemos los motivos e intenciones de su presencia, muy probablemente debía estar autorizado por el titular. Ingeominas. 24 Junio 2011. “Informe No. GTRC-0026-11. Informe de visita técnica de verificación de condiciones de seguridad e higiene minera realizada al área de contrato de concesión No. EKE-151”. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 10: 29)

<sup>251</sup> Comenta Sarria que ese día, ya en la inspección de policía: “fui filmado por el señor HUGO HERNAN DAGUA (...) periodista (según él) y perteneciente a la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS NORTE DEL CAUCA-ACIN.”

Participaban ahora del conflicto no solo quienes serían directamente desalojados. Fue tomando otras proporciones, desbordaba los actores que Sarria buscaba implicar. La afectación del dominio que los mineros tradicionales han mantenido a lo largo de los años sobre la actividad en sus minas era visto por muchos como un asunto colectivo: “cuando se habló de desalojo, toda la comunidad [todo el corregimiento aclara luego] estuvo en contra; que si iban a desalojar a uno o dos, pues que nos desalojaran a toda la comunidad” en palabras de José Antonio. Sin embargo, todos los líderes de la vereda Yolombó con los que he intercambiado opiniones al respecto así como varios líderes de la vereda La Toma reconocen que numerosas personas no acudieron al llamado que los mineros directamente afectados y el Consejo lanzaron a la población. “Muchos no creían, incluso hay los que aún no creen que esa amenaza de desalojo existe” me han repetido en diferentes conversaciones haciendo alusión a algunos habitantes, especialmente de la vereda La Toma. En ese contexto, los líderes comunitarios y de la organización se esforzaban en que la mayor cantidad de personas del corregimiento concibieran esta situación como un precedente – político y jurídico- que abriría la posibilidad para subsiguientes desalojos en muchas otras minas, e incluso de residencias que pudieran estar dentro del área de títulos mineros. Mucho más cuando gran parte de La Toma está ya concesionada y está solicitada completamente.

Aunque, según algunos líderes, se mantienen aún personas indiferentes, en las reuniones de mineros de la vereda La Toma y en las conversaciones con José Antonio, Daniel y Lorenzo, he identificado que actualmente es bastante generalizada una posición de rechazo a las intenciones de Sarria, vistas como una amenaza para la minería local y la comunidad. Parece que las situaciones vividas y las dificultades que hoy pasan los mineros ancestrales y tradicionales, han reforzado la percepción del caso como una situación colectiva que puede incidir a mediano/largo plazo en el destino del conjunto de la comunidad.

“Yo soy de los que creo que a veces es necesario que pasen esas cosas [el desalojo solicitado por Sarria], porque les apuesto que si eso no hubiese pasado ustedes seguirían por ahí, y poco o nada les importaría lo que está, estuviese pasando con la comunidad en su conjunto, pero como ahí se vieron afectados absolutamente todos, entonces ¡Claro!”

expresaba Henry Tenorio –dirigente PCN Nacional- a propósito de lo que interpreto como el *papel del conflicto* en el fortalecimiento de una dinámica organizativa, de un sentimiento colectivo de pertenencia y de defensa de intereses conjuntos. Al leerle la frase de Tenorio a José Antonio, Lorenzo y Daniel, este último opina de inmediato: “es que uno no hace una pelea donde no hay una agresión”.

Frente a la exigencia de consulta a la autoridad comunitaria, Sarria aprovecha para manifestar su opinión durante una nueva visita técnica a las minas implicadas, esta vez con los funcionarios de la CRC<sup>252</sup>,

“(…) VARELA dice que debo hablar con el consejo comunitario y que si ellos me aceptan puedo estar aquí de lo contrario no. (...) Señor PEDRO yo quiero hacer un proceso de socialización con la comunidad: enseñarles mi proyecto y trabajar con ellos, pero esto es muy diferente a que tenga que pedirle permiso a usted, al Consejo Comunitario y otra Persona. Mirándolos a todos les dije: “CUÍDENSE PORQUE YO PEDÍ UN AMPARO ADMINISTRATIVO” Cuando manifesté a la comunidad lo anterior, no fue en sentido de amenaza, por el contrario, mi interés era que estuvieran informados al respecto.” (Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6)

Mientras que Daniel me narra la historia (8 de marzo 2015), José Antonio lee el documento escrito por Sarria, comenta con vehemencia sus opiniones sobre las posiciones del autor. Interviene también en los temas que vamos abordando con Daniel y Lorenzo. Ninguno conocía aquel documento que les he proporcionado en esta ocasión. En un momento dado, José Antonio interrumpe a Daniel, le lee una parte de lo que ha escrito el titular y al terminar exclama “¡para el señor el oro es de él!”. Se dirige hacia mí y explica con indignación “Sarria dice aquí que a él la comunidad le está violando sus derechos porque a él le dio un título el estado, pero en realidad el estado es quien nos está violando a nosotros los derechos, porque ese título fue inconsulto, a nadie le pidieron permiso”. “El estado en conjunto con él han vulnerado los derechos de la comunidad”, reafirma. Considero que estas frases sintetizan la posición política que predomina en la población tomeña.

La definición de *a quién se le debe pedir permiso formalmente* es lo que parece haberse afinado a lo largo de esta contradicción, desde la perspectiva que he construido de aquellos

---

<sup>252</sup> Realizada el 15 de julio de 2009, en el marco de la “Diligencia de amparo por daño ambiental”. Sarria inicia además del Amparo Administrativo a título minero, un Amparo por Daño Ambiental ante la CRC.

hechos y su contexto. Antes, el marco de consulta previa y de autoridad étnica parecía ser del manejo tan solo de un grupo de líderes que venían implicados en la lucha por el río Ovejas. En ese sentido, la generalización de esa claridad política sobre el *sujeto organizativo* o el *actor* legítimo a consultar podría ser considerada como el producto, en gran parte, de las situaciones de tensión con actores mineros foráneos, y en especial la relacionada con Sarria. Se venía hablando de consulta de tiempo atrás (conflicto por Ovejas en 1997), y en reuniones sobre el tema minero desde 2006, incluso como vimos en 2004 el Personero ya apelaba a ésta. Pero cuando Daniel rememora cómo durante el primer encuentro con Sarria “aún no se hablaba de consulta”, llego a pensar que un número de personas, que supongo amplio, probablemente no tenían un profundo y consciente acercamiento con ese marco jurídico y de reivindicación. Seguramente existía un sentido de “dominio colectivo” generalizado que se ha venido consolidando en la reivindicación y ejercicio de lo que hoy se considera Gobierno Propio. Las oportunidades políticas favorables vinculadas con ese marco pueden ser consideradas también como un elemento importante en la decisión de fortalecer cada vez con mayor fuerza la organización étnica como el sujeto representativo de la comunidad. La autoridad étnica se consolida, a medida que se desenvuelve el conflicto, como un referente legítimo y legal efectivo para detener las acciones del actor contradictor.

Daniel nos muestra la visión que ha quedado del estado después de lo que ha venido ocurriendo en torno al oro: “Somos una zona que estamos vulnerados por el estado, porque en quién se puede confiar ahora, si el estado es el primero que atropella”, al mismo tiempo, se pregunta por qué no ayuda a los pequeños mineros tradicionales y ancestrales “antes que traer más problemas” “mientras no lo apoyan a uno, pero sí lo atropellan”.

Al conversar con Daniel, José Antonio y Lorenzo, al intercambiar de nuevo con Simón y al recordar las reuniones de los mineros en la vereda La Toma, identifico que aquellos foráneos son vistos por una gran cantidad de tomeños, ante todo como actores que pasan por encima de un derecho sobre el oro que emerge del trabajo cotidiano, de la herencia y la pertenencia a un territorio, así como por encima de unos poderes locales –liderazgos y

organizaciones- que operan en el corregimiento. Podríamos decir que “derecho legal” de Sarria y los Ruíz, como de AGA y Cosigo, entra en contradicción con varios aspectos presentes en la población. En primer lugar, con un derecho sobre las minas y el oro del corregimiento, heredado de generación a generación por los mineros locales y habitantes históricos, y que estos esgrimen permanentemente en las conversaciones. En segundo lugar, con las reglas de acceso al oro y distribución de ese derecho que han operado en el corregimiento desde muchos años atrás. En tercer lugar, choca con ese sentido de “dominio colectivo” y con la autoridad que los líderes y las organizaciones comunitarias vienen consolidando sobre el territorio.

En este marco, parece que la disputa para el Consejo consistía en hacer valer su autoridad basada en la legitimidad de representar los intereses de los mineros y comunidad tomeña, ante el interés del titular, amparado por la “autoridad” de la ley minera. La reivindicación se va centrando en la exigencia de una Consulta Previa a lo largo de la contradicción, como recurso legal y legítimo a favor de “la comunidad” y del Consejo de Comunitario en la confrontación. Los mineros afectados adoptan esta estrategia y reafirman la organización como referente de autoridad comunitaria. En este sentido, la acción de la organización étnica no se hizo esperar y se inició una gestión política para detener el desalojo de los mineros de hecho.

Es por esto que al despacho del Alcalde no llegó solamente la Resolución de Ingeominas aprobando el Amparo Administrativo Minero ordenando el desalojo y el oficio del Subdirector de Gestión Ambiental de la CRC solicitándole iniciar acciones para cesar el daño ambiental y la explotación ilícita en aquellas minas<sup>253</sup>. También recibió la carta del Viceministerio del Interior instándolo a suspender el desalojo con base en el Auto 005<sup>254</sup>. La autoridad municipal se encontraba, diría yo, en medio de una especie de “choque de trenes”, en el que los conceptos políticos y jurídicos contrarios sobre la acción que finalmente el Alcalde debía ordenar eran evidentes.

---

<sup>253</sup> Oficio 150-10115 del 19 de octubre de 2009, de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRC al Alcalde de Suárez, referenciado en la Resolución Número 2864-3-30 de 2010.

<sup>254</sup> Oficio OF109-36759-DBI-200 del 26 de octubre de 2009 por parte del Viceministerio del Interior, referenciado en la Resolución Número 2864-3-30 de 2010.

Esta contradicción entre instituciones del estado se muestra de una forma más concreta en las actas de las “Mesas de trabajo” convocadas por el Ministerio de Minas y el Programa Presidencial de DDHH ante la tensionante situación en torno a los amparos administrativos aprobados. El 26 de octubre de 2009 en Suárez se desarrolla una discusión en una de esas mesas, de nutrida participación (unas 50 personas), especialmente por la fuerte intervención del representante del Ministerio del Interior que argumentaba a favor de revocar los títulos mineros pues fueron otorgados “desconociendo los derechos ancestrales de las comunidades negras” y exhortándola para instaurar una acción de tutela contra el Ministerio de Minas y el Ingeominas, así como a la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Anuncia, para ese momento, que enviaría la autorización al Alcalde para que no atendiera la orden de desalojo. Tanto fue el choque que la funcionaria de Ingeominas Cali culmina el informe de la mesa de esta forma “Dado lo álgido y tenso del ambiente generado por la posición del representante del Ministerio de Minas [Interior], abiertamente opuesta y en contra de las actuaciones tanto del Ministerio de Minas como el Ingeominas, se concluyó por parte del Ministerio de Minas que junto con el Ingeominas se revisaría los argumentos dados por el Ministerio del Interior en esta reunión.”<sup>255</sup>

En un documento que remite una funcionaria de Ingeominas Cali a propósito de la mesa de trabajo convocada para el 23 de junio de 2010, deja en evidencia el impacto de estos espacios de interlocución. Se refiere al encuentro anterior, del 26 de mayo, para explicar que ahora se realizaría “en el Auditorio del GTR Cali Ingeominas (...) esta vez con aproximadamente 30 representantes de la comunidad de esos municipios, teniendo en cuenta la sensible situación que se presentó en la reunión anterior a la que asistieron

---

<sup>255</sup> Ingeominas Cali. 28 Octubre 2009. Memorando GTRC “Asunto: Informe sobre mesa de trabajo en Suárez-Cauca”. Asisten delegados de MinMinas, MinInterior, Ingeominas, CRC, Alcalde, Personero y Secretario de Gobierno del Municipio de Suárez. Raúl Ruíz no asistió. Líderes indígenas incluyendo la Gobernadora del Cabildo “ubicado en el Cerro Teta”, representante de Coomultimineros, Consejo Comunitario, Nomadesc y Defensoría del Pueblo. Un funcionario de MinMinas reiteraba a la funcionaria que informó de estos acontecimientos en Memorando interno “el Ministerio del Interior no cuenta con competencia alguna que le otorgue la facultad de solicitar al mandatario municipal la suspensión de una diligencia de suspensión y desalojo de labores mineras” Ingeominas Subdirector de Contratación y Titulación Minera. 19 Agosto 2010. Memorando 20104110131903 “Asunto: Temática Suárez, Buenos Aires y Morales”. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 69)

aproximadamente 800 personas.”<sup>256</sup> La reunión de junio en Cali contó con la participación de 93 personas, sumando Alcaldes, Personeros, Secretarios de Gobierno de Suárez, Morales y Buenos Aires, delegados de la Gobernación, Defensoría, MinInterior, MinMinas, CRC, líderes comunitarios y organizaciones internacionales de DDHH. Además “se presentó un pequeño incidente con la comunidad ante la presencia en la Regional del señor Hector Jesus Sarria (...) por lo cual la representante del Programa Presidencial de DDHH le solicitó retirarse de la Regional”<sup>257</sup>. Todo esto ilustra el nivel que alcanzaba el conflicto y la intensa disputa política que se desarrollaba durante este periodo.

La discusión entre MinInterior y MinMinas parece dirimirse cuando, después de que el Alcalde emite la “Resolución número 2714-1-5 de 5 de noviembre de 2009” en la que ordena, en concordancia con el primer Ministerio, *suspender* el desalojo “de las comunidades afrocolombianas del Consejo Comunitario de La Toma”, Sarria radica una Acción de Cumplimiento contra el Municipio de Suárez Cauca. Con el objetivo de hacer cumplir el amparo, que se retoma al fallar finalmente a favor del titular a inicios de 2010<sup>258</sup>. El cumplimiento de la medida se delegó en el inspector de Policía Municipal de Suárez, el Comandante de Policía del Cauca y el de Suárez, con gastos a cargo del querellante<sup>259</sup>. En torno al desalojo se sucedieron gran cantidad de acciones jurídicas y políticas que modificaban una y otra vez las relaciones de poder en la disputa tanto por la legitimidad como por la legalidad.

Como ya hemos referenciado en el acápite 3.4, la persecución paramilitar y la coacción

---

<sup>256</sup> Ingeominas Cali. 20 Junio 2010. Memorando 20104290008753 “Asunto: Sugerencias para la Mesa de Trabajo en Cali, sobre el tema minero”. Se habla en este documento que también el 4 de junio se reunían en Bogotá la “comunidad” con la Dirección de Servicio Minero, La Subdirección de Titulación y Contratación, la Coordinación de Catastro Minero, el MinMinas y MinInterior. Evidenciando la fuerte dinámica de interlocución con la institucionalidad en este contexto.

<sup>257</sup> Ingeominas Cali. 25 Junio 2010. Memorando 20104290009543 “Asunto: Síntesis Mesa de Trabajo Suárez, Buenos Aires y Morales Cauca”.

<sup>258</sup> “Sentencia del quince (15) de marzo del año dos mil diez (2010), proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán dentro del expediente número 20090052900” según la Resolución No. 2864-3-30 del 30 de abril de 2010 en donde también se referencia la Resolución Número 2714-1-5.

<sup>259</sup> Resolución No. 2864-3-30 del 30 de abril de 2010, “Por medio de la cual se suspende la extracción y explotación de yacimiento minero, se ordena un desalojo y se dictan otras disposiciones en el Municipio de Suárez Cauca.” Suárez, Cauca. Y Oficio No. ODA-1-11-05-10 del 11 de mayo de 2010, dirigida por el Alcalde Luis Fernando Colorado al Comandante Departamento de Policía Cauca, Teniente Coronel Carlos Ernesto Rodríguez en la que solicita establecer una fecha en el que se cuente con el acompañamiento de la Policía para la diligencia.

ilegal tuvieron también su lugar en esta situación particular,

Él [Sarria] amenaza a varias personas, expresó a documentos a varias personas y asesinan a unas personas también ahí (Sic) (...) Una persona Alexander... bueno, que en este momento no recuerdo pero que terminan en una discusión entre él y termina muriendo a los pocos días, aun con conocimiento de la Fiscalía y todo eso. Y después se da lo del desalojo de La Toma, que la comunidad va a acompañar a la comunidad de La Toma y dijimos que de ahí no íbamos a salir como comunidad indígena. Yo mismo los acompañé personalmente en calidad de representante de la comunidad con una comisión de guardias. Cuando estaban por desalojar, cuando estaba militarizado con ESMAD y fuerza pública en La Toma. (Entrevista con Enrique Güetio 2014)

El año 2009 aparece insistentemente en los relatos de los líderes entrevistados, en las conversaciones sostenidas con diversos comuneros y en los documentos revisados, como un año de fuerte arremetida de la violencia ilegal. Daniel me decía mientras hablábamos del conflicto con Sarria: “la mayoría de los líderes que estamos se han venido una serie de amenazas, a los líderes y a la familia”. Especialmente durante ese año reaparecen con fuerza los panfletos, las llamadas, mensajes de texto y fax, en los que se referenciaban al mismo tiempo los líderes más visibles de los dos procesos y sus acompañantes de otras organizaciones. Esta realidad se extiende durante los años siguientes, cuando se reporta también la presencia de personas encapuchadas en los caminos y en casas de líderes<sup>260</sup>. Como señala Enrique, en julio de 2010 fue asesinado el señor Arlex González después de ser amenazado por paramilitares en diciembre de 2009<sup>261</sup>, lo que para muchos parece haber sido la constatación de una vinculación entre los intereses del titular de la concesión BFC-021 y el grupo armado ilegal asentado en la fincas de los municipios de Buenos Aires (Palo

---

<sup>260</sup> Pintas amenazantes con aerosol en muros de viviendas contra dirigentes del Cabildo, en paredes de casas en la vereda Unión Olivares en Cerro Tijeras en julio de 2009. Dos amenazas a Meraldiño por mensajes de texto firmados por la Águilas Negras en octubre de 2009. Nuevos mensajes de texto y llamadas a celulares de Enrique Güetio y Meraldiño Caviche en mayo y junio de 2010 firmados por el mismo grupo. Nuevo mensaje en noviembre de ese año amenazando gran cantidad de líderes, entre esos explícitamente Cabildo Cerro Tijeras, Consejo Com. La Toma y Yolombó, “enrique (...) Simón” firmado por águilas negras. Tres mensajes de texto amenazantes entre diciembre de 2011 y enero de 2012 (CICT Febrero 2012: 4-7). Encapuchados en La Toma en diciembre de 2010 (Organizaciones de DDHH. Diciembre 2010). Llegada de “sujetos encapuchados” a la casa de dos líderes en Unión Olivares en enero y febrero de 2012 (CICT Febrero 2012: 9). En este mismo documento se describen otras amenazas y asesinatos de comuneros indígenas y afrodescendientes en los municipios de Buenos Aires, Morales y Suárez.

<sup>261</sup> El 9 de diciembre de 2009 el señor Arlex González instaura Noticia Criminal 196986000633200901289 en la URI de Santander de Quilichao por un mensaje de texto que decía “HP, no decidan por la comunidad, que si quieren los recurs (Sic) tienen ocho días para salir sigue la lista” esta amenaza fue recibida por varios líderes más como Simón y los líderes del Cabildo. El 21 de julio de 2010 “Fueron asesinados Jhon Freddy N. y Arles (Sic) Augusto González Tabares (líderes comunitarios y mineros) en la vereda El Tamboral corregimiento de Mindalá-Suárez” (CICT Febrero 2012: 5 y 7).



Blanco) y Timba.

La muerte del minero antioqueño coincide exactamente con los meses en los que se programaron las fechas para concretar el desalojo, por lo que, consideramos, incidía directamente en el estado de ánimo de las poblaciones y organizaciones en resistencia. La diligencia de desalojo se determinó primero para el 21 de mayo de 2010, pero al ser “suspendida por petición del interesado” se reprograma para el 16 de junio, cuando de nuevo se trunca debido a la jornada de elección Presidencial<sup>262</sup>. Se establece una nueva fecha, el 18 de agosto de ese mismo año<sup>263</sup>. En el Anexo 10 el lector puede encontrar una foto del volante por medio del cual se convocó la solidaridad de las comunidades del municipio en ese momento. Desde el día anterior se despliega un fuerte operativo, el Ejército Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- llegan a la cabecera y a las entradas del corregimiento<sup>264</sup>,

Edwin: Eso fue como dos días [el desalojo]. Nosotros estuvimos allá porque yo estaba en el colegio, y uno ya sabiendo todo eso nos armamos con bolillos. A lo que se viniera, porque nos sacan pero nos sacan muertos. (...) más de uno se llenó de rabia y por mucho que sean antimotines y armas, aquí hay pelea. (...) Por ejemplo ese antimotines o ese ejército tenía pues plan A y plan B. Uno, entraba por Suarez, por la panamericana para bajar por Morales. Y la otra entrada puede ser por el lago. Y la otra por el aire. Ellos tenían esa estrategia. Pero

---

<sup>262</sup> “Mario: ellos decían ‘eso se va a presentar esta semana que viene’, por la misma presión de la gente, entonces ‘eso se aplazó’, lo tenían ahí por la misma presión de la gente. Ana: ¿Cómo presionaron? M: pues yo creo que como contacto de los líderes (...) por estrategia de que estos muchachos también se estaban moviendo iban a Bogotá a moverse y acá uno estaba pendiente, uno tenía que ponerse trucha (...) todo el mundo sin poder dormir, porque era en la jugada. Porque todo el mundo dice ‘vámonos’, con una llamadita todos estábamos listos (...) en cualquier momentico, cualquier movilización uno mantenía, cualquier llamadita: ‘oí, la llamada que esperábamos’ y nada. Era como mejor dicho, como traumatizado.” (Entrevista con Edwin Salcedo y Mario Mondragón 2014)

<sup>263</sup> Resolución No. 647/07 del 31 de julio de 2010 (Ver: Inspector de Policía y Tránsito Municipal. 2010 Julio 31). Muchas organizaciones nacionales se pronunciaron, por ejemplo a través de Reclame que emitía un comunicado con 17 organizaciones firmantes entre las que incluía ACIN, CRIC, Comisión de Justicia y Paz, CIMA, CEDETRABAJO, CNA, Censat, el Colectivo José Alvear Restrepo, la Corporación Sembrar, organizaciones de DDHH de Cali y de Colombia (RECLAME. Junio 2010), así como diversas organizaciones internacionales. En los comunicados de estas últimas se maneja un número de desalojados alto, como la Organización Mundial Contra la Tortura OMCT que hablaba de 5.000 personas (OMCT Agosto 2010). La carta de Martha Gaegers al gobierno colombiano se titula, por ejemplo, “At least 1500 families to be evicted from la toma, cauca” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta III: 32), el número de 1500 familias es manejado por otras redes, en la reciente denuncia sobre retroexcavadoras en La Toma, la Afro-colombian Solidarity Network, habla de 1500 familias fueron casi desplazadas en 2010 (Afro-colombian Solidarity Network 2014). Visto desde el contexto y los intereses sobre el territorio, se puede deducir que toda la población del corregimiento (5.000 personas) resultaba amenazada a corto y mediano plazo, pues, a pesar de que el desalojo efectivo se planteaba a la mina, se convertiría en un precedente para la probable expulsión del resto de la comunidad.

<sup>264</sup> “Ayer, martes 17 de agosto, en vísperas de un desalojo que va en contra de los derechos colectivos, sociales, económicos y culturales, hizo presencia en el territorio el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-. Hoy, la comunidad se encuentra reunida en asamblea y las organizaciones de derechos humanos acompañamos de manera permanente el proceso para prevenir y denunciar cualquier tipo de irregularidad.” (Nomadesc. 2010 Agosto 18)

la gente también tenía estrategia, la gente decía acá bajémosle unos cuantos. Una cuanta gente se queda pendiente si vienen por Morales y por teléfono ta, ta, ta. Y también el sector del lago. Y pues estar pendiente. (...) Aunque la gente decía, eso no se va a dar eso es puro cuento de la gente (...) hay gente que todavía no cree eso. Hay gente de La Toma como vereda que no cree en eso. Que ese desalojo se va a dar. (Entrevista con Edwin Salcedo y Mario Mondragón 2014)

Sin embargo, ese 17 de agosto, la diligencia es suspendida por la Inspectoría de Policía y Tránsito Municipal (E)<sup>265</sup> gracias a la carta que envía el Defensor Regional del Cauca Víctor Meléndez solicitando su cancelación “hasta que el señor Sarria acredite que está plenamente legitimado para solicitar y obtener el amparo de las autoridades de la república, no con [la] precaria legalidad que lo ampara hoy”. La discusión sobre la legalidad tomaba otras proporciones, cuando MinInterior presentó a MinMinas el 4 de junio de 2010 un oficio en el que esta dependencia informaba a Sarria el resultado de la visita adelantada por uno de sus funcionarios al área del título BFC-021 (el 10 y 11 de junio de 2009), en el que certifica que NO se registran comunidades indígenas pero SÍ SE REGISTRA la presencia de comunidades negras “Consejo Comunitario Afro descendiente del Corregimiento de la Toma”. Se pone de manifiesto una inconsistencia entre la resolución de licencia ambiental emitido por la CRC en favor de Sarria<sup>266</sup>. Ante esto “la CRC realizó la suspensión temporal y lo requirió [Héctor Sarria] para que realice la consulta previa” según la autoridad ambiental en oficio del 4 de agosto<sup>267</sup>. Días después, los funcionarios de MinMinas continuaban insistiendo en no suspender la diligencia de desalojo y en dejar en firme los títulos<sup>268</sup>. No obstante, esta suspensión fue el argumento principal del Defensor del Pueblo para no respaldar la diligencia. Ahora, con los nuevos acontecimientos, tendría mayores

---

<sup>265</sup> Resolución No. 648/8 del 17 de agosto de 2010 “Por medio de la cual se suspende la Resolución Número 647/07 de julio 31 de 2010 “Por medio de la cual se suspende la orden de desalojo y dictan otras disposiciones en el Municipio de Suárez Cauca” expedida por la Alcaldía Municipal de Suárez Cauca”.

<sup>266</sup> Ingeominas Cali. 17 Junio 2010. Oficio Radicado: 20104290011081 dirigido al Dir General de la CRC. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 31) Y MinInterior. 9 Julio 2009. Oficio No. OFI-09-23106-GCP-0201. Bogotá. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 35)

<sup>267</sup> CRC. 4 Agosto 2010. Oficio 06755 dirigido a Ingeominas Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 63)

<sup>268</sup> Decía el Subdirector de Contratación y Titulación Minera que “En el marco legal colombiano, el cual se rige esencialmente por el Decreto 1320 de 1998 distingue que la consulta se realiza con el trámite de licenciamiento ambiental (...) es así como se concluye que para el otorgamiento de los títulos mineros no debe agotarse el procedimiento de consulta previa sino hasta cuando se adelantan los estudios ambientales en la etapa de exploración” y aunque ya tenía conocimiento de la inconsistencia entre el concepto de MinInterior y el de la CRC, no hacía ninguna alusión a ésta, argumentando netamente a favor de la legalidad de los títulos y el amparo. Ingeominas. 19 Agosto 2010. Memorando 20104110131903 “Asunto: Temática Suárez, Buenos Aires y Morales”. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 69)

posibilidades de prosperar la exigencia principal elevada por las comunidades negras e indígenas en este periodo y en las mesas: la nulidad de los títulos y solicitudes en virtud del Convenio 169 de la OIT.

Concebir el desalojo de aquellos trabajadores mineros como una amenaza de mayor alcance le permitió al Consejo Comunitario, desde nuestro punto de vista, incentivar la movilización de actores solidarios a múltiples niveles. También contaba el tejido previo de la señalada red organizativa de apoyo en el conflicto con las multinacionales, que respondió a esta situación con Sarria. Los espacios de diversa índole con múltiples actores mineros e institucionales, incluso con el mismísimo Presidente de la República (Consejo Comunal Presidencial<sup>269</sup>), experimentados por los líderes étnicos regionales también aportaron a la comprensión de esa amenaza.

Entre los actores locales movilizados encontramos las organizaciones afrodescendientes de Buenos Aires y el Cabildo de Cerro Tijeras. En el acápite 3.4 lo señalamos y en el fragmento de la entrevista a Güetio citado anteriormente se vuelve a evidenciar: los líderes del Cabildo Indígena fueron importantes aliados en el municipio, decididos en el respaldo de la lucha afrotomeña. En momentos específicos apoyaron movilizando personas para acompañar y presionar en eventos determinados. Las tácticas desplegadas por la organización étnica incluyeron también la movilización social y las acciones de hecho como el bloqueo de vías en lo local<sup>270</sup>.

---

<sup>269</sup> La visita que realizó el 15 de marzo de 2009 el ex-presidente Uribe al municipio de Suárez (El País. Marzo 2009), que los líderes referencian como un Consejo Comunal, tenía el objetivo de responder a la ola invernal que había afectado a numerosas familias que quedaban con sus casas destruidas e incomunicadas así como con cientos de Has de cultivos destruidas. Sin embargo los líderes de las organizaciones étnicas aprovecharon para sentar posición y reclamar sobre el tema minero, la Kedahda, el amparo administrativo a títulos de foráneos –aún no se había ordenado el desalojo como tal pero ya estaba andando el amparo de Sarria-. Sobre el tema está la denuncia del PCN sobre las amenazas contra la lideresa Camila Restrepo después de su intervención en el Consejo Comunal, “Camila, afirmo (Sic) que las comunidades ancestrales no iban a permitir que las compañías mineras, entre ellas la Anglo Gold Ashanti Kedahda, las desalojaran de sus tierras; rebatió igualmente el planteamiento del gobernador del Cauca, quien al referirse a la construcción del puente de la Balsa, sobre el río Cauca, dijo que le EPSA aportara 14 mil millones de pesos, pero que la comunidad, como contraprestación, debía aceptar la desviación del Río Ovejas” (Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Equipo de DDHH PCN. Junio 2009).

<sup>270</sup> “(...) la misma comunidad [de La Toma] le, le manifiesta [al Alcalde Luis Fernando Colorado en una audiencia] que cómo es posible que siendo ellos que lo eligen, siendo ellos que lo ponen allá para que los represente y los defienda hoy sea él mismo que lo tengan que sacar del, del territorio (...) Tanto así que hicieron una, un intento de toma de la Alcaldía en esos días, hicieron un paro ahí de Suárez para abajito. Ahí estuvimos, ahí yo fui (...) porque si era una decisión de, de alto que venía prácticamente para que la cumpliera el Alcalde pues habría que verse cómo, cómo se hacía el desacato a esa, a esa resolución o cómo se aplicaba realmente ¿Sí? Y nos sentamos con el Alcalde y nos sentamos con Enrique

Esa articulación con grupos regionales, nacionales e internacionales permitió asesorar, divulgar el caso y presionar las autoridades estatales en los diferentes niveles y sectores, con el objetivo de frenar el desalojo.

Mientras todo esto sucedía, el Consejo Comunitario de La Toma había decidido tutelar su derecho colectivo a la Consulta Previa que fallarían en dos ocasiones los jueces negando el derecho de la comunidad, hasta llegar a la Corte Constitucional, la cual finalmente falla su favor el 25 de agosto. La Sentencia T-1045-A de 2010 ordena formalmente, entre otras cosas, la *suspensión* de los títulos mineros y de las solicitudes de concesión ubicados en el corregimiento de La Toma, hasta que se cumpla cabalmente el proceso de Consulta Previa para cada uno de aquellos trámites.

La intervención de aliados institucionales como la Defensoría del Pueblo, algunos Congresistas y funcionarios del MinInterior; de delegados de la ONU y observadores de EEUU; de comisiones extranjeras como la Delegación del Estado Español de Verificación, en el seguimiento de la situación de derechos humanos<sup>271</sup> a través de pronunciamientos e informes, en el cuestionamiento del amparo administrativo, en fin la presión política, parece haber sido uno de los elementos más determinantes en la atención que la Corte Constitucional dio al caso. Consideramos que la capacidad que han desarrollado las organizaciones étnicas para aprovechar y crear oportunidades en esa “estructura política” a partir de interlocutar con actores aliados regionales/nacionales, ha sido determinante para visibilizar la lucha general de los afrotomeños y los indígenas de Suárez ante el Estado. Cada una de las organizaciones parece haber acumulado experiencias e incorporando una

---

Güetio y el dotor (Sic) Clemente. Eeee, Clemente no, sino el otro [y otros] (...) se le logra plantear al Alcalde es que, eee, el derecho, el derecho individual no prima sobre el derecho colectivo. (...) Ahí se sortió (Sic), el Alcalde creo que emitió un concepto a la Procuraduría, eee, diciendo y, y apelando un poco ya al tema y la decisión que estábamos planteando con las comunidades. De todas formas, eee, ya las comunidades en su propio accionar, ellos, tengo entendido que demandaron, y tengo entendido que lograron parar ese tema.” (Entrevista con Meraldiño Caviche mayo 2014)

<sup>271</sup> En enero de 2010 se realizaron dos encuentros: la “Misión de Verificación de Acción Permanente por la Paz: con 10 delegados de Estados Unidos viaje a la zona y visito a las comunidades de Suarez, entre ellos las comunidades Afrodescendientes que se dedican a la minería artesanal en el corregimiento de La Toma y comunidades indígenas de Cerro Tijeras” y un encuentro con la Delegación del Estado Español Misión de Verificación sobre la situación de derechos humanos en Colombia llevado a cabo en la ciudad de Cali. También durante el 2010 “la Experta Independiente de Naciones Unidas Sobre Cuestiones de Minorías comisionada para Minorías de Naciones Unidas GAY MACDOUGALL” junto con el Sr. DANIEL ATCHEBRO, Coordinador en Cali de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros delegados de esa organización visitaron el Corregimiento la Toma del Municipio de Suarez. En noviembre de 2010 Simón Rodríguez asiste a una Audiencia sobre el Norte del Cauca en la CIDH (Nomadesc *et al* Abril 2010).

especie de inteligencia específica sobre el manejo de herramientas legales y lobby político, para interlocutar e incidir en actores y decisiones institucionales.

Desde nuestro punto de vista, el manejo de esa incidencia política y jurídica tiene el objetivo de afianzar el “blindaje” legal de la autoridad étnica, permitiéndole en determinados casos detener procesos y decisiones en los que la oposición de la población por una u otra razón no es masiva o en los que parece no ser suficiente la potente movilización de la comunidad. En ese sentido son estrategias complementarias, pues la legitimidad de la autoridad entre la población y por ende el control social/territorial de hecho, varía en el tiempo, tiene sus cristalizaciones y sus debilidades según las coyunturas. Poco después de expedida la Sentencia T-1045A, el 5 de noviembre de 2010, Simón participaba de la “Audiencia Situación de las Comunidades Afrocolombianas Indígenas y Campesinas del Norte del Cauca en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” de la OEA en Washington denunciando las violaciones de derechos humanos y colectivos en el desarrollo del conflicto minero en Suárez<sup>272</sup>.

La Sentencia se convierte en un potente marco para la exigencia de sus derechos colectivos y de regulación de las actividades mineras en el corregimiento. Las “Misiones de Verificación” que hemos mencionado en el acápite 3.2, realizadas durante el 2011, tenían como objetivo central hacer seguimiento a la efectiva aplicación de las medidas ordenadas por esa Sentencia. En la también ya mencionada queja escrita por Gustavo Zapata a la Procuraduría<sup>273</sup> no solo se señala la presencia de “retros” en 2011, sino que se evidencia

---

<sup>272</sup> “Mientras que yo estaba en Washington [2010] aquí había otra pelea con ellos (...) ellos estaban en la reunión acá, porque a mí me tocó ir a la OEA (...) porque como allá uno ya se daba por muerto, si uno está libre hermano porque los orishas, la gente, pero uno ya se daba por muerto, la gente: ‘que Simón vos cómo has cometido semejante brutalidad, que huevos no pueden con piedras’, ‘y ¿cómo no vamos a poder? Claro que sí podemos’” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

<sup>273</sup> El 26 de diciembre de 2012 la procuraduría envía a la ANM la queja de Gustavo Zapata sobre el incumplimiento del fallo de la sentencia T-1045-A solicitando: “(...) Según el quejoso, mediante acción pública de tutela (...) se ordenó tutelar los derechos de las comunidades negras de La Toma a la consulta previa y al debido proceso (...) Señalando, luego de un extenso análisis, ‘que el fallo de la Corte Constitucional que les dio prelación en la explotación minera por considerar que es un pueblo ancestral’, no se ha llevado a cabo por falta de garantías, así como por, presunto, incumplimiento de las accionadas. (...) le solicito informar a esta Coordinación las actuaciones que al respecto a (Sic) adelantado esa Agencia con los debidos soportes, así como informar al interesado lo pertinente” Oficio AD-MHR-1157 dirigido por la Coordinadora del Grupo Asesores Minas, Hidrocarburos y Regalías del Despacho del Procurador General de la Nación a la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta III:

que la suspensión de la totalidad de los títulos y solicitudes de concesión minera no había sido aún registrada por la autoridad minera nacional para finales de 2012. Ante esta situación, según me informó Gustavo Zapata por esos días (abril de 2013), los líderes del Consejo Comunitario detienen una serie de reuniones que venían desarrollando con la institucionalidad minera en el marco del proceso de Pre-Consulta para la concesión de Sarria<sup>274</sup>, hasta tanto no se adelantara aquella suspensión. Dado que la queja podía implicar consecuencias disciplinarias a los funcionarios públicos, los documentos institucionales evidencian cómo ésta prende las alarmas en las oficinas de la ANM, que había dejado reposar cómodamente el tema.

Para justificarse, la autoridad minera argumenta nunca haber recibido las coordenadas del corregimiento de La Toma por parte de la Alcaldía Municipal de Suárez<sup>275</sup>, necesarias para identificar las superposiciones. Ante esa situación, optó por expedir el Auto GTRC-0212-11 del 02 de agosto de 2011 suspendiendo solamente el título de Héctor Jesús Sarria, BCF-021. No volvió a generar ninguna acción administrativa relacionada con la Sentencia hasta el año 2013, cuando en respuesta a la presión de la organización étnica son emitidas finalmente la Resolución No. VSC-0401 del 26 de abril<sup>276</sup> -suspensión de títulos-, la Resolución No. 002497 del 29 de abril -suspensión del trámite de catorce solicitudes de concesión-, la Resolución No. 002636 del 6 de mayo -suspensión de la solicitud de legalización de minería tradicional NKN-16241- y la Resolución 003 del 15 de mayo – suspensión de actividades del polígono “Gelima” del ARE-. La posición del Consejo

---

35). Oficio en el que se transfiere la queja- solicitud del Consejo Comunitario de La Toma y dirigida el 14 de diciembre de 2012 al Procurador General de la Nación.

<sup>274</sup> En un documento interno expresaba el Vicepresidente de Promoción y Fomento a propósito: “teniendo en cuenta que el martes 23 de abril de 2013, se suspendieron las acciones programadas en el municipio con el fin de adelantar el proceso de consulta previa en cumplimiento de la citada sentencia, hasta tanto se verifique el estado de cumplimiento del fallo, en lo relacionado con el artículo séptimo”. Memorando No.20134120047173 del 24 de abril de 2013. (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta III: 96-97). Gracias a la queja enviada por Zapata, además de los llamados de la Procuraduría, también el Ministerio del Interior presiona a la ANM para que presente informe de las acciones realizadas a este respecto. Con dos instituciones pidiendo rendición de cuentas a la autoridad minera sobre la suspensión de los títulos y solicitudes mineras en el corregimiento de La Toma la situación negligente se tornaba insostenible.

<sup>275</sup> El IGAC había informado a Ingeominas que los únicos que manejaban esta información eran las Alcaldías Municipales, del Alcalde de Suárez la autoridad minera no obtiene respuesta, y desiste cómodamente de aplicar la medida a cabalidad.

<sup>276</sup> Esta Resolución explica todo el proceso e imprevistos para obtener las coordenadas de La Toma y en sí para aplicar las órdenes de la Sentencias T-1045-A. Aquí se retoma la suspensión del Título BCF-021 y se agregan todos los demás superpuestos al área del corregimiento referenciado.

Comunitario frente a la suspensión de actividades en el polígono “Gelima” del ARE, que fue exactamente igual a la adoptada con relación a la Resolución No. 002636 que perjudicaba el proceso de legalización de minería tradicional NKN-16241. Las dos Resoluciones son revocadas, y permitidas aquellas actividades tradicionales.

Ese mismo año 2013 son radicadas cinco solicitudes de formalización de minería tradicional ubicadas en el corregimiento de La Toma, de las cuales dos se superponen con el título de los Ruíz y otra con el de Héctor Jesús Sarria. La solicitud de formalización OE9-16083 a nombre de Luis Ángel Valencia Wilches, Luis Ángel Solano Urrutia y Martha Italia Castaneda Pena se encuentra prácticamente toda sobre la concesión EKE-151 de los Ruíz; gran parte de la OEA-14483 de Armando Ortiz Lucumí también se superpone con la concesión de los Ruíz, abarca todo el título EET-144 de Diefer Marin y un pequeño tramo del BFC-021 de Sarria; la OEA-16161 a nombre de José Antonio Vidal comprende completamente el área del título EET-143 de Diefer Marin y más de la mitad de la licencia de Sarria. Las otras dos solicitudes de formalización son la OE6-10001 a nombre de Noraldo Ararat Lucumí que se ubica justo al sur del título BFC-021 sin superponérsele. Finalmente, la ODB-11001 de Mario Mondragón que se ubica en todo el sur oriente del corregimiento de La Toma, en la frontera con el municipio de Morales casi a la orilla del embalse. Es un ‘diminuto’ polígono sobre la inmensa solicitud de concesión minera GDI-12F a nombre de la AngloGold Ashanti que abarca 1.883 Has solamente en ese corregimiento. También está relativamente cerca de los enormes títulos de la Anglo American Exploration. El mapa con las solicitudes de concesión y de legalización puede ser revisado en el Anexo 7.

Es probable que las solicitudes de formalización sean vistas como una oportunidad para disputar las áreas tituladas o solicitadas. Para despejar la duda, pregunto a José Antonio las razones por las que tiene a su nombre una de esas solicitudes, la OEA-16161. Para ese momento, a nuestra reunión se habían unido más personas (8 de marzo 2015). Nos encontrábamos dialogando Daniel, Lorenzo, José Antonio, Julián, Gustavo, Vanessa y Mario. José Antonio, al escuchar mi pregunta, se sorprende y luego ríe diciendo: “¿que yo qué?” “¿yo tengo un título?”. Le explico de nuevo. La risa le impide hablar, al igual que a

todos los que estamos en el lugar. Después de que le describo la ubicación y repito el número de expediente, Gustavo le señala enérgicamente “¿eso no fue cuando iban a montar unas minas allá, lo de esa gente que fue a eso?”, por fin José Antonio recuerda que sí, que efectivamente él solicitó una formalización y empiezan entre todos a recordar con detalle el contexto.

“La idea fue que querían hacer una minería de hecho, según dijeron los que fueron, el señor Gonzalo Ararat de Suárez con la Alcaldía, él visito varias minas” empieza el relato José Antonio. A los días siguientes, varias personas de la zona se reunieron a impedir ese procedimiento. “Se les expulsó porque estaban midiendo, para hacer esa minería de hecho allá, para montar unos entables”, entables que la Alcaldía procedería a legalizar según le escucharon decir a sus funcionarios, contaban José Antonio, Gustavo y Daniel. “¡El alcalde le estaba pagando a Gonzalo para hacer eso!” asegura Gustavo y, riendo a carcajadas, agrega que después de eso lo echaron [a Gonzalo]. José Antonio completa: “a lo que nosotros nos revelamos en La Toma y dijimos que para eso estábamos nosotros mismos [para legalizar], el alcalde lo echó”. Según explica el tomeño, en ese momento se unieron él con “Daniel, Doña Isabel y Guillermo” para solicitar formalización de minería tradicional sobre esos predios “para proteger el territorio”. Ya que andaban diciendo que se podría legalizar sobre títulos vigentes, por qué no pelearle ellos mismos por ese medio los títulos. Recordé, entonces, que en una de las reuniones de mineros de la vereda La Toma Marcel Quintero había informado sobre esta situación. Según lo conversado en nuestra pequeña reunión, lo que intentaba la Alcaldía era impulsar la legalización con su participación en los entables y el negocio.

De nuevo le pregunto a José Antonio si en ese momento ellos eran conscientes de que su solicitud abarcaba parte del título de Sarria y responde claramente que sí, que eran conscientes. La solicitud de Armando Ortiz Lucumí responde a la misma razón. Pero la historia de Noraldo Ararat fue diferente pues, según José Antonio, él no tenía claridad sobre el tema y Gonzalo lo convence de montar en su predio el entable impulsado por la Alcaldía. Noraldo pide la solicitud de formalización por esa razón, contraria a la de José Antonio, Daniel, Doña Isabel y Guillermo. Sus vecinos/as y compañeros/as le explican posteriormente los riesgos, y finalmente la propuesta del Alcalde es rechazado por todos,



incluyendo Noraldo. José Antonio nos aclara que ahora también esa solicitud debe aprovecharse para proteger el territorio. Todos los que están presentes recuerdan aspectos del incidente con los funcionarios municipales y lo asocian con las intenciones de Sarria: “Esos eran mandaderos” dice alguno en la conversación. Indago sobre ese supuesto vínculo y me responde literalmente Lorenzo: “El Alcalde se estaba prestando para confundir la comunidad”. José Antonio y Julián complementan: “se supone que el Alcalde le estaba haciendo el juego a Sarria”. De esas y otras afirmaciones interpreto que, para mis interlocutores, la intervención de la Alcaldía buscaba legalizar áreas que luego beneficiarían al titular, utilizando la confusión.

Es importante señalar que **todo** el corregimiento de la Toma está solicitado para concesión minera (ver acápite 3.4 y Anexo 5 y 7).

### **3.6 La mina El Danubio: el paisa empresario y sus aliados estratégicos**

Cuando visité por segunda vez la parcialidad indígena de Cerro Tijeras (noviembre 2011) tuve la oportunidad de caminar hasta la carretera que venía abriendo “la minera”. Era insistente la denuncia de los líderes del Cabildo, especialmente Enrique Güetio y varios de Altamira, contra el proyecto minero desarrollado en la vereda El Diviso. Tanto, que una de las actividades principales de la Comisión Humanitaria de estudiantes fue el recorrido por sus inmediaciones. Güetio nos explicaba que durante el 2009 y 2010, como organización habían intentado persuadir la gente de que no vendiera sus predios para la construcción de la carretera, pero muchas personas no consideraron esos argumentos. Según Meraldiño, más o menos a comienzos de 2011, Alonso Giraldo “empieza a hablar de esa minería en magnitud, ya de títulos y esa vaina” y “comenzaron fue con toda, a hacer carretera a electrificar” (Conversación 15 marzo 2015).

La mayoría de personas que he consultado sobre el momento en que la producción de la mina se intensificó coinciden en que fue aproximadamente a inicios de 2012 cuando la carretera estaba completada. Albeiro Cortez durante su entrevista y en otras conversaciones informales me explicaba que desde que Giraldo se alió con “la empresa” las cosas parecen haber cambiado en la mina El Danubio, sector en el que él tuvo su bocamina durante

muchos años. También gran cantidad de personas en Altamira se refieren al agente que está detrás de este proyecto minero como “la multinacional” o “la minera” y, como hemos señalado en el acápite 2.1, la mayoría de personas del proceso indígena tienen consciencia de que es un emprendimiento privado.

Ya en el 2009 iba ampliándose el negocio, ya en el 2011 pues me atrevo a decir con la complacencia que el gobernador en el 2012, el gobernador indígena en este momento prácticamente entra mucho más fácil y ahí queda. Abren carreteras (...) esa mina empieza a operar mucho más la explotación más fuerte entre 2012 y 2013 y yo diría que llevaba dos años extrayendo material de cantera o de mina (Entrevista con Enrique Güetio octubre 2014)

Alonso Giraldo inicia un proceso de legalización de minería tradicional en mayo de 2003, cuando presenta el Formulario Simplificado para la Legalización de Explotaciones Mineras. En ese documento declara tener una mina subterránea con un sistema de explotación por “cámaras y pilares” y una infraestructura instalada de “campamento, molino y oficina”<sup>277</sup>. Se hablaba de una antigüedad de 30 años. El solicitante declaraba tener 30 obreros, 3 personas en administración y 5 contratistas. En el Certificado de área libre expedido en el marco de este proceso el mismo mes, se establece la ausencia de superposiciones en las 183 Has y 1683,5 metros<sup>2</sup> que Giraldo pretendía legalizar<sup>278</sup>.

---

<sup>277</sup> Formulario Simplificado para la Legalización de Explotaciones Mineras diligenciado el 20 de mayo de 2003 por Alonso Giraldo Vargas con cédula de Virginia, Risaralda (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 1) Anexo presenta como pruebas de antigüedad tres fotocopias de facturas de compra de metales preciosos emitidas por el Banco de la República de Medellín, en abril y noviembre de 1987 y marzo de 1988 a nombre de Guillermo Castro Granada; tres fotocopias de certificados de retención en la fuente de 1987 y 1992 a nombre de Guillermo Castro; dos declaraciones juramentadas con fines extraprocesales de Francisco Simón Carrasco Luna y de Patrocinio Balanta; una certificación original firmada por el Secretario de Gobierno Municipal de Suárez, Cauca “mediante la cual certifica que el solicitante viene explotando las minas el Danubio desde hace aproximadamente 30 años” y un certificado de Tradición y Libertad del inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 132-122770. Según el Oficio “Proceso: Reevaluación Jurídica de solicitudes mineras Concepto Jurídico solicitud de legalización EEK-152” Bogotá, de noviembre 8 de 2005, ni las facturas ni los certificados de retención permiten demuestran antigüedad de la actividad de Giraldo por no estar a su nombre. El certificado de libertad y tradición demuestra la propiedad de un inmueble pero no su actividad minera, por lo que son tenidas en cuenta solo las declaraciones juramentadas y el certificado de la Alcaldía como pruebas, al parecer, suficientes. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 43-45)

<sup>278</sup> Oficio 001232 del 23 de mayo de 2003 “Certificado de área libre solicitud de legalización EEK-152” expedido por Minercol Ltda (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 26)

A pesar de lo anterior, en una visita realizada por Ingeominas en abril de 2006, los funcionarios reportan 10 trabajadores en la mina El Danubio<sup>279</sup> y en el Anexo 7 sobre las observaciones al área recomendada exponía “el área pertinente para la legalización de la explotación la presenta la siguiente Alinderación: tiene una extensión de 10 hectáreas, cuyo punto arcifinio es la confluencia de la quebrada el Danubio y el río Inguító”, por las razones que resumía en “Presenta menor alteración en la superficie. Ambientalmente generaría menor impacto ya que se encuentra alejada del lecho del de (Sic) la quebrada el Danubio. Se encuentra alejada del campamento. Se encuentra alejada de la planta de beneficio. Ofrece mayores posibilidades para que la explotación sea económicamente rentable.” (CRC, marzo 2006: 108) En esta área recomendada se encuentra la bocamina El Yarumo que “es la única explotación que al parecer les ha dado resultados”.

Después de que la CRC aprobara ese informe<sup>280</sup>, Ingeominas ordena realizar el PMA y el PTO<sup>281</sup>. El trámite ambiental cierra esta primera etapa con la Resolución No. 0792 “Por medio de la cual se aprueba e impone un Plan de Manejo Ambiental al señor Alonso Giraldo Vargas EEK-152” expedida por la CRC el 18 de diciembre de 2007 en la que se explicita que la explotación minera “es viable ambientalmente”, dando concepto positivo. En esta Resolución se resaltan las obligaciones del responsable, entre las cuales señala la “Zonificación Ambiental: El P.M.A. definió las áreas donde se puede desarrollar la actividad minera, áreas con algunas restricciones, áreas vedadas para minería y zonas ambientalmente críticas, por lo tanto, con base en el documento técnico de soporte, debe realizar la delimitación clara de estas zonas, para el respectivo seguimiento y manejo ambiental.”<sup>282</sup> Meses más tarde, la autoridad minera da vía libre al PTO, casi el último requisito, en el Auto GLM No. 0047 “por medio del cual se aprueba el programa de

---

<sup>279</sup> CRC. Marzo de 2006. Informe técnico de viabilidad minero-ambiental solicitud de legalización EEK-152 mina El Danubio. Explotación subterránea de filón-vereda El Diviso. Municipio de Suárez Cauca. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 56-111)

<sup>280</sup> Oficio No. 06662 del 31 de mayo de 2006, suscrito por el Subdirector de Gestión Ambiental de la CRC aparece referenciado en el documento referenciado en la cita siguiente.

<sup>281</sup> Oficio “Proceso: Reevaluación técnico jurídica de solicitudes mineras concepto técnico. Solicitud de legalización de minería de hecho” del 7 de julio de 2006. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 110)

<sup>282</sup> La Resolución 0792 se ubica en el Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 130-137 y la cita específica en P. 118 de ese mismo Pdf.

Trabajo y Obras dentro del expediente EEK-152” del 9 de junio de 2008<sup>283</sup>. El Contrato de Concesión del título EEK-152 es firmado el 15 de mayo de 2009 y anotado en el Registro Minero Nacional el 3 de junio de ese año<sup>284</sup>.

La legalización inaugura un nuevo momento para la mina El Danubio dado que su propietario comienza una serie de transformaciones, tecnificando y cambiando las formas de trabajo. Muchas de las personas con las que hemos dialogado sobre el tema, que tienen algún nivel de acercamiento porque viven cerca, tienen un conocido o familiar que ha trabajado en esa zona minera o por su implicación política en el Cabildo, hablan de que estos cambios se relacionan con un aumento en la escala de explotación. Güetio lo expresaba con seguridad “hoy es uno de los títulos que este momento de la familia Duque Giraldo pues están en fase de explotación con maquinaria industrial (...) Porque se cree que está moviendo seis viajes diarios de material de cantera para el municipio de Buenos Aires, donde tienen todo el laboratorio de procesamiento del mineral”<sup>285</sup>. La planta de beneficio a la cual se refiere Güetio está ubicada en la mina La Puchis en el referenciado municipio vecino.

En el expediente jurídico del título EEK-152 hay varios documentos que constatan estos cambios que vienen siendo adelantados en la mina, entre esos un registro fotográfico enviado por Giraldo a la autoridad minera junto con los comprobantes de pagos de regalías, justificando la suspensión temporal de la producción durante algunos periodos<sup>286</sup>. La autoridad minera resumía la situación de esta forma refiriéndose al señalado documento:

---

<sup>283</sup> El Auto se encuentra en el Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 147. A través del Oficio con “Ref: Solicitud de legalización minera EEK-152-Auto GLM- No. 0048 del 9 de junio de 2008”, fechado en octubre de 2008 y dirigido a Ingeominas, Giraldo acepta los resultados y conclusiones del PTO (ver Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 149)

<sup>284</sup> Como se puede comprobar en el Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 167-78

<sup>285</sup> Albeiro Cortez expresaba durante su entrevista: “tiene que ser de otra forma diferente porque ya no era como era anteriormente ahora ya es más a grande escala. Ya debe ser diferente. (...) Digamos la, ya ahí, ahí puede haber más material porque ya el material. Puede haber más, más, más digamos material. (...) ahora ya igual como es una...eso es legalizado entonces yo creo que la, la pólvora o la dinamita no, no, no faltan. (...) Por eso a grande escala, y usted tenga plata a gran escala usted tiene todo porque tiene minero ¿Cuándo nosotros íbamos a tener pólvora? (Entrevista con Albeiro Cortez 2013)

<sup>286</sup> El “Anexo Registro Fotográfico Once (11) Fotos” hace parte del Oficio con Radicado 20139050032512 que citamos más adelante (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 2: pp. 22-28) De la foto 1 a la 3 se registran adecuaciones realizadas entre junio y julio de 2011, de la foto 4 a la 7 cambios realizados entre agosto y septiembre y la foto 8 prueba lo adelantado en octubre, noviembre y diciembre de 2011; las fotos 9 a la 11 muestras cambios realizados entre enero de 2012 a junio de 2013.

“oficio en el cual manifestó el titular que durante el III trimestre de 2011 al IV trimestre de 2011, no se realizó explotación debido a que la bocamina principal se derrumbó y que durante el semestre se llevó a cabo el ensanche de la cruzada principal de acceso, igualmente manifiesta que durante los trimestres IV de 2012, I de 2013 y II de 2013, se reportan declaraciones de regalías en ceros, debido a que durante esos periodos no se realizó explotación, pero que se llevaron a cabo labores de desarrollo, preparación y exploración de yacimiento<sup>287</sup>, señalando que a pesar de que no se reportan regalías, las actividades mineras dentro del área del contrato de Concesión No. EEK-152, no han tenido interrupción, ni suspensión de labores mineras por más de seis meses, anexando como soporte registro fotográfico de las labores realizadas.”<sup>288</sup>

En mayo de 2014 la autoridad minera revisa las conclusiones del Informe de Fiscalización Integral No. 470 radicado en la ANM el 2 de abril de 2014 por FONADE, realizado por el consorcio Grupo Bureau Veritas Tecnicontrol que desarrolló una revisión documental e inspección de campo del título EEK.152. Sobre esta última dice “lo evidenciado en la visita realizada nos permite ver que se está haciendo una reingeniería del proyecto minero de tal forma que se pueda garantizar mayor seguridad al interior de las labores mineras, un mejor manejo del mineral que permita una disminución de costos de producción (...) Se cumple con los requisitos de seguridad e higiene minera, gestión ambiental y los aspectos económicos y jurídicos”<sup>289</sup>. El mencionado informe no se encuentra entre los documentos presentes en el Expediente que me fue proporcionado, por lo cual no conocemos los detalles que justifican el visto bueno a los supuestos requisitos de gestión ambiental cumplidos.

---

<sup>287</sup> Frente a esos trimestres dice que “El material extraído durante la ejecución de las labores antes mencionadas no ha sido aún beneficiado y se encuentra acumulado en los Patios de Acopio de la Mina para su posterior beneficio” dice en Oficio con Radicado 20139050032512 que citamos más adelante (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 2: pp. 22-28)

<sup>288</sup> Cita tomada del Auto PARC-020-14 expedido por Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM el 24 de enero de 2014 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 3: pp. 13-17. Página de la cita textual: 14)

<sup>289</sup> Auto PARC-272-14 expedido el 13 de mayo de 2014 por la Vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera del Punto de Atención Regional-Cali (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 3: pp. 43-48 y cita literal en pp. 45-46)

También hay documentos que nos permiten observar el histórico de la producción de oro de la mina desde el II trimestre del año 2009. Según el Concepto Técnico emitido por la ANM en septiembre de 2013, durante los trimestres registrados de ese año (II, III y IV), la producción declarada por el titular del contrato de concesión fue en total de 1.766,64 gramos de oro que representaron 94'961.873,2 (cálculo propios con base en Precio Base Liquidación y los gramos reportados por trimestre presentes en el documento). En el año 2010 reporta producción todos los trimestres sumando 1.016,5 gramos que se tradujeron en 58'790.078,8. Solo se registra producción de oro los dos primeros trimestres del año 2011 con 1.032,89 gramos se vendieron en 71'160.209,2. En el 2012 durante los tres primeros trimestres se declaran 5.520,57 gramos representados en 408'312.235 pero el último trimestre no reporta producción; al igual que los dos primeros trimestres del 2013 fecha hasta la que se realiza la evaluación<sup>290</sup>.

Otro aspecto presente en las consideraciones de la mayoría de los habitantes que comentan el asunto, es la relación entre la intensificación de la producción con un cambio en los agentes que participan en la inversión y las ganancias. Hay un permanente cuestionamiento sobre quiénes se están aliando para adelantar el proyecto,

Lo que se ha dicho es que hay un Consorcio Minero de Occidente, creo que se llama, que ha venido cambiando diferentes nombres. Entonces uno no identifica últimamente, en última de quien es el título. Sabemos que a pesar de todo, si es de la región, no tiene los recursos para abrir una mina tan rápido, o no tenían los recursos para abrir una mina tan rápido. En algún momento para poderse aliar, tuvo que aliarse con una empresa fuerte que le inyectara recursos, tanto capital como conocimientos (Entrevista con Enrique Güetio octubre 2014)<sup>291</sup>

---

<sup>290</sup> Esta información se encuentra en el Oficio “Concepto Técnico No. PAR-Cali-518-13 título minero EEK-152” del 2 de septiembre de 2013 que hace una evaluación integral del expediente así como el seguimiento de las obligaciones del contrato. En él se constata el Pago de Regalías, el pago de la Póliza de Cumplimiento Minero Ambiental y la entrega de los Formatos Básicos Mineros (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 2: pp. 45-49)

<sup>291</sup> Albeiro Cortez decía durante su entrevista “Ahora último volví [al Danubio] y la destapé [su bocamina] pero ya entró la... ¿usted ya sabe quién entró allá? Entonces yo ya vendí ese territorio, vendí el frente de trabajo y me salí.” (Entrevista con Albeiro Cortez en 2013). Cortez vendió su bocamina un tiempo antes de que se iniciaran los cambios en la producción debido a la escasez de explosivos para adelantar el trabajo minero. Al mismo tiempo, parece referirse a la “llegada” de “la empresa” como un proceso del que no está interesado en participar.

Cuando se refiere al tema en reuniones y asambleas, Güetio también habla de la “Sociedad Minera del Sur” como una de las razones sociales de la compañía y además de una multinacional estadounidense que compra el oro a la empresa “Giraldo y Duque” que opera la mina según los líderes indígenas. Durante alguna de mis visitas realizadas a finales de 2012, Meraldiño junto con otras personas de Altamira ya contaban con la información de los compradores extranjeros, pero no conocían el nombre de la empresa multinacional. Durante esa época, consultando la página web de Giraldo y Duque S.A. comprobaba que cuenta con varias organizaciones empresariales para garantizar sus servicios, entre las cuales una empresa de seguridad. Recientemente, la Comercializadora operada por las personas de esa misma empresa (y familia, según su propia web) ha sido considerada en un artículo periodístico publicado por Moritz Tenthoff en agosto de 2014, como una de las principales compradoras de oro en el Cauca, incluyendo el proveniente de la “minería criminal” con retroexcavadoras. En él afirma que “En el Cauca, el oro de los (Sic) retroexcavadoras y los pequeños mineros llega a varias comercializadoras en Cali, entre ellas C.I. Giraldo y Duque” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014).

“Comercializadora Internacional Giraldo y Duque aparentemente funciona como un grupo empresarial, aunque no aparece registrado así en la Cámara de Comercio. De acuerdo con información de su página web, serían empresas asociadas y aliados estratégicos las siguientes: Giraldo y Duque S.A. (Nit: 900546985-8), Sociedad Minera del Sur S.A.S (900402119-8), Latinoamericana de Seguridad, Inversiones Duque Builes, y Coofminercol. Aunque en la página del grupo empresarial no se registra a la Sociedad Giraldo y Duque Ltda (Nit 805020091-6), los integrantes de su junta directiva son similares a los de la empresa Giraldo y Duque S.A.” (Cepeda, Iván. Febrero 2015)

La Comercializadora Internacional Giraldo y Duque es la principal compradora del oro producido en la mina El Danubio, como lo registra en sus informes de pago de regalías el señor Alonso Giraldo. Es importante anotar que de los 12 trimestres reportados, el oro producido durante 7 de estos fue vendido por el titular a dos intermediarios. “El mineral explotado y reportado durante los trimestres II, III y IV de 2009 y 145,22 gramos del I trimestre de 2010, fue vendido al señor SANTIAGO TAFUR CHALA (...) quien a la vez

vendió el mineral a la Fundación C.I. GIRALDO Y DUQUE LTDA, empresa que realiza las respectivas retenciones y pagos de los valores de las regalías retenidas.”<sup>292</sup> Durante el II trimestre de 2010 el producido fue comercializado directamente con “C.I. GIRALDO Y DUQUE LTDA”<sup>293</sup>. De igual forma entre el trimestre III de 2010 al II del 2011. Pero entre el trimestre I y III de 2012 el oro “fue comercializado por el Titular con La Empresa ‘**Sociedad Minera el Danubio SAS**’, la cual a su vez comercializó el Oro con la Empresa C.I. GIRALDO Y DUQUE LTDA”<sup>294</sup> (Subrayado nuestro). No obstante, quien reporta el pago de regalías siempre es la nombrada comercializadora que expide los soportes y formatos del caso.

En su artículo Tenthoff explica que “Según Alexander Duque Builes, gerente de la empresa minera, a través de Inversiones GyD, la empresa además administra la Sociedad Minera del Sur y la Sociedad Minera el Danubio, que operan las minas La Puchis y El Danubio, respectivamente” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014)

La presunta compra de oro indiscriminada que parece venir adelantando la Comercializadora I. Giraldo y Duque denunciada por el periodista, fue centro de atención del Senador Iván Cepeda Castro quien solicitó al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre “ampliar el objeto de la investigación, con base en información que he recibido sobre diferentes empresas del sector, como la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque, que podrían estar asociadas al lavado de activos u otros movimientos ilegales, como la evasión de impuestos.” El político hace esta solicitud en el marco de una investigación iniciada por la Contraloría General de la Nación en el año 2011 y que derivó en pesquisas judiciales adelantadas por la Fiscalía en el 2013, gracias a las cuales las directivas de la empresa Comercializadora I. Goldex, fueron capturadas y condenadas pues

---

<sup>292</sup> Oficio con Radicado 2010-429-002244-2 y Referencia: “Regalías II, III y IV trimestre de 2009, I trimestre de 2010 y formatos básicos mineros de 2009 contrato de concesión EEK-152 Alonso Giraldo Vargas”, dirigido a Ingeominas por Giraldo el 5 de mayo de 2010 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 213)

<sup>293</sup> Oficio con Radicado 2010-429-003764-2 y Referencia: “Regalías II trimestre de 2010 y formato básico minero del I semestre de 2010 contrato de concesión EEK-152 Alonso Giraldo Vargas”, dirigido a Ingeominas por Giraldo el 26 de julio de 2010 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 1: pp. 18)

<sup>294</sup> Oficio con Radicado 20139050032512 y Referencia: “Declaración y pago de regalías III trimestre de 2010 hasta II trimestre de 2013. Contrato de concesión EEK-152, dirigido a la Agencia Nacional de Minería por Giraldo el 12 de agosto de 2013 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 2: pp. 19-28, cita en Pp. 19-20) Incluye el anexo fotográfico señalado.



según “la Fiscalía estaba ‘dedicada al lavado de activos más grande del país’.” (Cepeda, Iván. Febrero 2015)

Apoyándose en información proporcionada por el periodista, el senador Cepeda compara el crecimiento económico de las más importantes comercializadoras y exportadoras de oro para evidenciar la pertinencia de la solicitud: “En este periodo de aumento de los precios [del oro], las principales empresas exportadoras aumentaron sus ventas al exterior de forma importante, por ejemplo, en el caso de Goldex, entre 2008 y 2012, sus exportaciones aumentaron en un 266%. Así mismo, de acuerdo con información suministrada por la Dian empresas como C.I. J. Gutiérrez y Cia S.A.; CIIGSA; Mineros S.A. y C.I. Giraldo & Duque, aumentaron sus exportaciones en 194%, 133%, 197% y **532%**, en el mismo periodo” (Subrayado nuestro) (Cepeda, Iván. Febrero 2015). Las exportaciones de esta comercializadora pasaron de “32,2 millones de dólares en 2008 a 203,3 millones de dólares en 2012.”

Un aspecto interesante tiene que ver con la forma de trabajo, el modelo empresarial y el lugar en la cadena de producción en la que la C.I. Giraldo y Duque ha venido consolidándose. Tenthoff cita la entrevista que realiza a Duque Builes “Hemos encontrado un modelo de negocio que consideramos que es el futuro que se llama la Minería Social Ambiental. (...) Nosotros no tenemos títulos mineros. Nosotros tenemos plantas de beneficio en el título de la cooperativa, de la comunidad o en áreas de minería especial. Ellos pueden retirar la piedra, no molerla, no contaminar el río con esos lodos, y lo que hace la empresa es aplicarle una industrialización de esa piedra. Cogemos la piedra, la transportamos a nuestra planta, la trituramos y hacemos la extracción” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014).

El periodista ve en este “formato” una réplica del desarrollado por “las empresas cañeras, palmeras y forestales que, en vez de ser dueños del cultivo, compran la cosecha a los productores”. No obstante, es importante señalar diferencias y particularidades entre esos casos, en especial, el hecho de que en diversos entables de Buenos Aires existen múltiples plantas de beneficio con molinos de barriles, en los que por lo general se utiliza el mercurio para amalgamar. Durante un conversatorio en el que Simón y Dairo Herrera tuvieron la

intervención central, realizado en la ciudad de Popayán el 22 de abril del 2015, José Antonio y Daniel detallaban que en La Toma existen varios de estos entables de los cuales aproximadamente en cuatro se emplea el mercurio y en los demás se trabaja oro libre, lo cual diferencia este corregimiento de Buenos Aires donde es más generalizado la utilización de esta sustancia. En Suárez cabecera, existen molinos de barril con mercurio así como en otros puntos del municipio. Muchos de estos molinos, en los dos municipios, son alquilados a los mineros que extraen la roca y pagan un porcentaje para la separación del mineral. De manera que no necesariamente la mayoría de mineros en Buenos Aires, sino que probablemente tan solo algunos sean los que vendan la roca o mina sin ningún tipo de transformación.

De acuerdo a las intervenciones en el conversatorio de Dairo Herrera, presidente de la Cooperativa Multiactiva de Mineros de Buenos Aires y miembro del Consejo Comunitario Cerro Teta, el mayor beneficio proporcionado por la empresa Giraldo y Duque a la mayoría de mineros cooperados de este municipio consiste en la compra de los lodos “residuales” que resultan del proceso de beneficio con molinos de pisón o/y barriles y mercurio. Esto debido a que el sistema de cianuración incorporado en su planta de beneficio les permite recuperar un porcentaje del oro que permanece en estos lodos y que las otras técnicas no pueden captar, generando un ingreso adicional al minero que si no tendría que desecharlos. En estos dos municipios, parecen no ser muchas las plantas que han incorporado la cianuración para separar el oro. Entre aquellas plantas se pueden contar la que se ubica a la entrada de la cabecera de Suárez manejada por la Cooperativa de Mineros de Suárez, la planta de beneficio de la mina Gelima del profesor Jhon, una que identificamos en Machaqueo supuestamente bajo mando de Petrocol Holding LTDA, dos plantas identificadas en el título EKE—151 por Ingeominas en su Informe de 24 Junio de 2011, una de “Jorge Florez” (Expediente Jurídico Título EKE-151 Pdf 10: 37) y la planta de La Puchis. Según las conversaciones que he sostenido con habitantes de La Toma, ésta última parece tener una capacidad de procesamiento permanente de grandes cantidades de material. Tenemos conocimiento de que es abastecida por la mina La Puchis; la mina El Danubio, como hemos comprobado a través de múltiples intercambios con personas que

conocen trabajadores de estas minas y que señalan que las volquetas se dirigen de Suárez hacia La Puchis; por mineros que deseen vender la roca sin procesar y con los lodos “residuales” de los mineros de Buenos Aires. Es significativa la declaración de Duque Builes, pues evidencia un interés especial del “grupo empresarial” por el proceso de transformación del material minero de filón, fase en la que hay un importante valor agregado, así como por la etapa de comercialización. No en vano han invertido en la planta de beneficio con la mayor capacidad y más “avanzada” tecnología de la zona, y se han establecido en la Zona Franca del Pacífico desde diciembre de 2012, donde tienen una proyección internacional reduciendo “costos aduaneros y tributarios”<sup>295</sup>. De acuerdo a la información aportada en el artículo de La Silla Vacía, C.I Giraldo y Duque fue “la principal empresa exportadora desde la Zona Franca [Palmira, Valle] en 2013 para un total de casi 77 millones de dólares, un 46,4% del total de las exportaciones” de esa Zona. De acuerdo a las declaraciones de su gerente es la “quinta fundidora más grande del país y su negocio oscila entre los 150 y 300 kilos de oro al mes.”

La pregunta sobre la procedencia de este oro es la que intenta resaltar Tenthoff, pues el crecimiento en la producción de oro a nivel nacional y específicamente en el Cauca ha estado asociado no solamente a la multiplicación de minas informales de filón y aluvión, al barequeo artesanal en ríos y quebradas, sino al aumento de minas ilegales trabajadas con retroexcavadoras. En la medida en que estos últimos agentes ilegales han incorporado de forma cada vez más recurrente armas y estructuras internas de seguridad, han afianzado su relación con grupos armados ilegales, y han sido promovidos por el narcotráfico, el problema de la procedencia del oro en Colombia ha tomado proporciones diferentes. Al parecer, lo que motiva la investigación de la Contraloría en 2011 es la alerta enviada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en Washington, de acuerdo a la Revista Dinero. Esta información fue puesta a la luz por un artículo de esa revista (Dinero. Septiembre 2011), en el que presentan algunos datos de los posibles vínculos entre el lavado de activos y la comercialización de oro en Colombia a través de canales en los que confluyen autoridades locales, comercializadoras y

---

<sup>295</sup> Revisar la web de la empresa “Giraldo y Duque”: <http://www.giraldoyduque.com/>

fundidoras, grupos armados ilegales y mafia. El informe de la Embajada “asegura que hay un circuito de municipios –la mayoría afectados por el conflicto armado- que prestan su estructura administrativa para lavar recursos de grupos armados irregulares y mafiosos.”<sup>296</sup> (Dinero. Septiembre 2011). Es interesante señalar que la política que está buscando establecer y reglamentar el RUCOM responde a esta presión orientada a regular la circulación y legalización de oro proveniente de la “extracción ilícita”. Ya hemos visto cómo la ausencia de una política integral en la que se defina y se tenga en cuenta la pequeña minería ancestral y tradicional genera una persecución de estas formas de sustento al mismo nivel como si se trataran de una minería criminal desarrollada por las retroexcavadoras.

El periodista de La Silla Vacía parece haber concentrado su atención en una pieza de la cadena, que Dinero había señalado como clave en el proceso: “El siguiente eslabón en la cadena lo conforman las casas fundidoras de oro que se encargan de comercializar internacionalmente la producción, generando certificados de exportación. Estos certificados permiten ingresar al país grandes cantidades de dólares dentro de un marco de legalidad.” (Dinero. Septiembre 2011). Pero la preocupación se relacionó con la posibilidad de que el oro de la “minería criminal” sería legalizado en Medellín y, específicamente, en Cali. Y cómo finalmente termina nutriendo las arcas de importantes compradoras de oro en el mundo como la Republic Metals de EEUU y la Metalor Technologies S.A. de suiza en el caso de C.I. GyD. Argor-Heraeus de Suiza y Johnson Matthey Gold and Silver Refining Inc en relación con Fundiciones Escobar. “Todas estas empresas están asociadas a la London

---

<sup>296</sup> Según un funcionario de esa embajada consultado por la revista, en algunos de esos casos se estaría trayendo oro de países vecinos comprado por grupos ilegales que luego es presentado como producción aurífera en determinados municipios legalizándolo de esta forma. La investigación de la Contraloría se centró en primer momento en el municipio de Maceo en Antioquia donde no existen títulos para explotación de oro ni minas de oro informales pero donde se recibieron unas enormes sumas por regalías en 2008 gracias a la venta de oro en esa localidad, dineros que fueron repartidos como incentivo minero entre las personas involucradas en esas ventas, que luego desaparecieron de la zona. “En archivos oficiales quedaron documentos según los cuales ellos vendieron en seis meses cerca de un millón de gramos de oro a las fundiciones Escobar, Inversiones Giraldo y Duque Ltda; C.I Metales y Derivados S.A.; C.I IGSA y al Banco de la República.” En fin la Revista Dinero explica de forma general “Las cifras de producción de oro en Colombia no son confiables. Poblaciones que nunca han tenido vocación aurífera y no registran yacimientos en su sueldo reciben millonarias regalías, aunque no puedan explicar el origen del oro que sus productores venden a las grandes fundiciones o al propio Banco de la República, según una investigación de la Contraloría General.” (Dinero. Septiembre 2011)

Bullion Market Association (LBMA)<sup>297</sup>, el referente mundial más importante para la comercialización del oro. Todas tienen códigos de conducta, de derechos humanos, de responsabilidad social empresarial y de cuidado al medio ambiente.” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014).

El autor del artículo sostiene como argumento central que, según testimonios locales, a través de la Cooperativa Multiactiva de Buenos Aires y de otras, la C.I Giraldo y Duque estaría comprando el oro que se produce en entables de retroexcavadoras asentadas ilegalmente en la zona<sup>298</sup>. Para sugerir lo anterior, además de referirse a unos testimonios, señala la supuesta facilidad con la que “las cooperativas pueden aumentar el oro producido por ellos, ingresando el oro comprado a otros y presentándolo como parte de la producción propia.”<sup>299</sup> (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014).

Dairo Herrera durante su intervención en el evento señalado ratificó que la empresa Duque y Giraldo no solo es la principal compradora del oro y los lodos de los cooperados, sino que son ellos mismos parte de esa Cooperativa Multiactiva a la que han apoyado con su actividad industrial<sup>300</sup>. Además, conversando informalmente al finalizar el Foro, me explicó que las afirmaciones que aseguran un vínculo entre la Cooperativa que representa y agentes que operan retroexcavadoras en explotaciones de oro han generado un inmenso perjuicio para los “364 mineros” asociados a los que hoy nadie accede a comprar su oro. Argumenta

---

<sup>297</sup> “es el principal proveedor de lingotes para los bancos centrales alrededor del mundo. El ingreso de Republic Metals a LBMA significa que la producción ilegal de oro en el Cauca podría terminar directamente en varios de los principales bancos del mundo, como HSBC, Deutsche Bank y JP Morgan.” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014).

<sup>298</sup> “Pobladores del municipio de Buenos Aires afirman que el oro de las retroexcavadoras, dragas y pequeños mineros del norte del Cauca llega a través de varias cooperativas a la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque. Alexander Duque afirmó que ellos compran a varias cooperativas, entre ellas Coofminercol y Coomultimineros.”

<sup>299</sup> El autor señala que “varias de las compraventas de oro en la cabecera municipal de Santander de Quilichao dicen vender el oro a Giraldo y Duque S.A.” y a C.I. Goldex en Medellín, de caracterizar la cooperativa Coofminercol conformada por la empresa que le provee cerca de 100 kilos de oro al mes, con asociados de Suárez, Timbiquí, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Buenaventura. El revisor fiscal de esa cooperativa expresaba “es difícil saber bien de donde viene el oro. Son muchos sitios donde trabajan nuestros asociados, muchos muy retirados” y cita también a Builes “Al intermediario no lo puedo controlar, porque no sé a quién le compra”. Yo trato de filtrarlo, como lo haría un banco, por antigüedad, por ubicación (...) Yo no puedo llegar al proveedor de mi proveedor, como ética no lo puedo hacer (...) Garantizar cada uno de los proveedores de mi proveedor esa es la parte más crítica.” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014).

<sup>300</sup> “Al ser interrogado Dairo Herrera sobre la comercialización que realiza la cooperativa con el oro, dijo que su principal comprador y patrocinador es la **Comercializadora Internacional Giraldo y Duque** cuyo gerente es **Alexander Duque Builes**.” (Proclama del Cauca. Febrero 2015)

que, además de no conocer estos agentes<sup>301</sup>, su organización gremial ha solicitado formalmente al Alcalde del municipio cuatro amparos administrativos para proteger sus tres títulos mineros de la acción ilegal de las “retros”, pero que para la autoridad local ha sido difícil cumplir la competencia de expulsarles.

En febrero de 2015 los miembros de la Cooperativa se movilizaron en Santander de Quilichao “para demostrar públicamente que sus actividades mineras son legales y que no puede ser estigmatizada ni acusada de estar ejerciendo actividades criminales” (Proclama del Cauca. Febrero 2015). La ‘satanización’ de la Cooperativa ha afectado a sus miembros y a toda una comunidad que subsiste de las minas de filón en Buenos Aires, según me comentaba Herrera. Frente a la posible investigación adelantada por la Fiscalía a la C.I. GyD, el presidente resalta que la relación de la organización con la empresa es comercial. Desconocemos la relación entre la Cooperativa de Mineros de Suárez y la comercializadora, pero sabemos que Alonso Giraldo es reconocido por varios interlocutores como miembro de esa organización gremial.

Después de acercarnos a este panorama regional, al papel de las compradoras del oro y los supuestos vínculos entre actores como Alonso Giraldo, la C.I Giraldo y Duque, Sociedad Minera El Danubio S.A.S, las retroexcavadoras y Coomultimineros, volvemos al título EEK-152. Es interesante resaltar que sobre ese título se identifican expectativas de personas diferentes a Giraldo. Englobando el título pero en un área mucho mayor está la solicitud de formalización minera OE6-10321 de 139,04 Has, a nombre de Jhon Maller Giraldo Correa, sobrino de Alonso según un informante de La Toma. Pero adicional, sobre esa misma

---

<sup>301</sup> El periodista de La Silla Vacía afirma que parecen existir vínculos entre “El Mexicano” dueño de “retros” en la zona y Builes: “Integrantes de los consejos comunitarios de Buenos Aires dicen que Alexander Duque Builes y “El Mexicano” se mueven de forma conjunta por el municipio. Sin embargo Duque Builes dice que no conoce a este personaje: ‘frente al Mexicano, no sé quién es. Apareció de lo (Sic) nada con retros sobre el río. Queremos pensar que son competición legal de Giraldo y Duque y cualquier persona puede meterse en el mercado’” (Tenthoff, Moritz. Agosto 2014). El autor también referencia un comunicado del Proceso de Comunidades Negras con fecha del 1ero de mayo del 2014 en el que se nombra a esta persona, el siguiente aparte ilustra una intrincada situación en la que parece existir contradicciones entre la AGA y este agente: “Esta semana, las comunidades y sus concejos comunitarios conocieron de un amparo administrativo protegiendo los derechos mineros de la Anglo Gold Ashanti en Buenos Aires. Según noticias locales, en una mina de la parte alta de este mismo municipio hubo enfrentamientos entre el ejército y los trabajadores de una mina. Se habla que en el operativo, el ejército decomiso un arsenal compuesto de 16 fusiles y granadas. Estos hechos ocurrieron en la llamada mina del ‘Mexicano’ en la vereda Chambimbe.” (PCN, DDHH Mayo 2014)

porción solicitada para formalización, se ubican dos solicitudes de contrato de concesión, la LLG-14531 a nombre de Yara Martínez Mor<sup>302</sup> y Ligia Montaña Pezzotti, y la LLD-08181 a nombre del mismo Alonso Giraldo. Desconocemos la relación entre las señoras referenciadas y el responsable de la mina en explotación.

En lo concerniente a la relación del titular con las organizaciones comunitarias del occidente del municipio de Suárez, en el momento en que se le concede la concesión, busca establecer y profundizar el vínculo,

Él también empieza a hacer acercamiento con los cabildos diciendo que le dejaran trabajar, que era un campesino de la región y que él necesitaba un poco que la economía se abriera (...) estuvimos hablando en varias ocasiones. Incluso en el municipio de Suarez, en la casa de él en conjuntamente con la ACIN. Y hacer un trabajo de socialización en varias comunidades. Estuvo en Altamira, la gente no lo aceptó y él dice que mal o bien él tenía que hacerse (...) (Entrevista con Enrique Güetio octubre 2014)

A propósito de lo señalado antes por Güetio en el anterior fragmento de su entrevista, el líder indígena Meraldiño también recuerda varios episodios de interacción entre diversos actores en torno al tema. Conversando el 15 de marzo de 2015 en su casa en Altamira intenta reconstruir estos eventos.

Según el líder, en un primer momento Giraldo convocó y se reunió con las JAC. Luego “cuando ya iba a prácticamente a iniciar el trabajo nos reunimos en la mina, en El Diviso” las comunidades de la parte baja, las autoridades y líderes indígenas con el minero. Posteriormente, en el año 2010, se realizó “una asamblea grande” en Altamira que acompañaron el CRIC, la ACIN y un experto en minería, y donde se le solicitó a Giraldo “toda la documentación técnica y el Plan Ambiental”. Finalmente, Meraldiño recuerda

---

<sup>302</sup> La señora Martínez aparece en un documento de la Cámara de Comercio de Cali 2006 como Gerente de la compañía Petrocol Holding LTDA (Cámara de Comercio de Cali 2006: 40), en otro como gerente de Colgold S. A. (Cámara de Comercio de Cali 2009a: 43) y en uno más como gerente de Extracon S. A. (Cámara de Comercio de Cali 2009b: 44). Aparece como representante legal de Petrocol Holding en un estudio realizado por tesis de la Universidad De La Salle para el cual visitaron una planta de Beneficio de oro –o “Centro de Desarrollo Productivo”- ubicada, según el trabajo en la Vereda Gelima, corregimiento de La Toma, Suárez, Cauca, y donde según las estudiantes procesan mineral traído de minas el Tamboral y La Carolina, además de producir ladrillos con los residuos (Sánchez y Andrade 2009: 83-85). Dialogando sobre el tema con José Antonio Vidal, Daniel Aguirre, Julián, Lorenzo Reyes y revisando las fotos presentadas en la tesis aclaramos que la planta se ubica realmente en Machaqueo y que es conocida por fabricar ladrillos (Dialogo del 8 de marzo 2015). No obstante los comuneros desconocen por completo el origen y la participación de las señoras Martínez y Pezzotti.

como un hecho impulsado por el Cabildo para presionar a Giraldo, la comisión de estudiantes que acompañó la organización en el recorrido por la carretera muy cerca de la mina. Aquella es la misma comisión que organizamos y coordinamos varios compañeros/as en Cali y Bogotá, y el recorrido, el que inicié señalando en la primera parte de este acápite. Según la información proporcionada por Güetio y Meraldiño, así como las observaciones y el seguimiento que he realizado del caso de la mina El Danubio, esta acción parece haber sido una de las últimas, sino la última realizada por el Cabildo que se direccionaba a presionar los agentes de esta explotación. A partir del 2012, no he podido identificar acciones o pronunciamientos que abordasen este asunto en particular, ni para generar acercamientos, ni para avalar o cuestionar. Güetio profundiza sobre los argumentos que presentaba Giraldo en la Asamblea desarrollada en Altamira,

Él quería decir que lo dejaran trabajar porque iba a emplear comunidad, iba a dar trabajo, que iba a arreglar vías, que iba a hacer un aporte social a la comunidad y que eso se iba a ver reflejado en las vías que se abrieran. (...) usted necesita mínimamente la carretera que es como la herramienta de trabajo por donde usted se va a mover con sus materiales, pero ¿las otras regiones qué? (...) el trabajo social reflejado en el empleo que se iba a dar nunca se dio porque sencillamente en la región no hay capacidad técnica o conocimientos técnicos (...) Fue que empleó para abrir trochas, fue que empleó por los primeros 3 o 4 meses, de resto no. Lo que él un poco hace dentro de la mina y el título que él tiene dice, pues bueno, aquí no puede trabajar más porque yo estoy pagando impuestos canon superficiario y todo eso, y pasa un accidente tiene que competir en igualdad de condiciones si usted va a trabajar en la mina. Prácticamente cierra las otras minas de mineros artesanales. Eso fue en el 2009, 2010 (Entrevista con Enrique Güetio octubre 2014)

Sobre el posible cierre de las bocaminas propiedad de otros mineros tradicionales no conocemos otras versiones o testimonios que apunten a detallar y corroborar esta situación. Sin embargo, en el expediente se encuentran dos planos del área, uno fechado en mayo de 2003 y otro en febrero de 2006. En los dos, el cartógrafo registra las mismas ocho minas con igual ubicación<sup>303</sup>.

---

<sup>303</sup> Según los planos son las minas de: Roberto Castillo, Gerardo Guamanga, Albeiro Castillo (aparece en el de 2006 como Alberto), Juan Sandoval, Aldemar Carabalí, Javier Parra y las minas La Guagua y El Yarumo. En el plano de 2006 que incluye el polígono asignado de 10 Has, se constata que la única bocamina que se ubica por fuera de éste es la de Javier



La relación con los dueños de la mina El Danubio ha estado fuertemente tensionada gracias a la problematización que algunos líderes indígenas vienen haciendo de la minería. Este cuestionamiento les lleva a considerar también los aspectos negativos de estos cambios en la producción minera. No obstante, el cuestionamiento y eventualmente la oposición no ha sido generalizada en todas las veredas del territorio de influencia del Cabildo, de acuerdo a las entrevistas concedidas por Güetio y Albeiro. Por el contrario, muchas personas de los caseríos cercanos a la mina El Danubio algunos cabildantes, otros no, recibieron positivamente las promesas de Giraldo,

Fue muy complicado porque la comunidad [del Diviso y la zona] termina accediendo a las dadas que ofrecían en ese momento el dueño (...) el señor Alonso Giraldo. Entonces les ofrece empleo, les ofrece a las mujeres empleo, unos contratos a 3 o 4 meses, les ofrecen comprarles las tierras, pagarle las aperturas de por dónde iba a presentar la mina (...) por eso se hace muy difícil decirle no a la entrada de esa mina porque de alguna manera él con la plata prácticamente se adelanta en lo que el Cabildo no podía ofrecer en ese momento, que era ni empleo ni algunas condiciones económicas que podían garantizarles, que él garantizó en ese momento pero que ahora no es lo mismo. (...) En este momento la gente está más bien decepcionada de la decisión que ellos tomaron (...) pero no ha habido como una política fuerte, diría de aceptar lo indígena, sobre todo, cuando se dice que a pesar de que estamos en el territorio podemos garantizar, y no vendan los predios (...) Pero ahora con toda la intervención militar, el ejército, tanto guerrilla que sabemos que el mismo dicho por el señor Alonso Giraldo que se pagan las denominadas vacunas. En algún momento plantea, “si el Cabildo necesita algunas condiciones mínimas para su acompañamiento económico, pues coméntenos”. Hasta allí llegó un poco el relacionamiento y un poco alguna gente empiezan a tener muchas y fuertes amenazas, que estuvimos al frente nos retiramos un poco. (Entrevista con Enrique Güetio octubre 2014)

---

Parra. El plano de 2003 muestra el polígono solicitado para legalización y las explotaciones existentes. El plano de 2006 muestra el polígono solicitado, el polígono pertinente de 10 Has y las explotaciones existentes (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 1: p. 69-70)

Pareciera que la denuncia de los impactos ambientales que tendrían la intensificación del trabajo minero y la militarización que podría derivarse es ahora considerada en parte por quienes estuvieron a favor de estos cambios.

La persona que me llamó ahorita, ¿usted no oyó que yo le dije?, este fue el que se prestó para que entrara la... (...) Le dije: ¿y usted para qué se prestó? Se prestó para que dejara...para que dentraran (Sic). Se prestó vendiendo (...) [Para] la vía. Eso en ese tiempo hubo muchos oponentes, hubo varios. (...) A lo último ¿Qué hicieron? Compraron el derecho a la vía y listo. (...) Si yo soy dueño de un terreno ahí, yo no, yo no vendo y listo ¿Por dónde entra? **A:** ¿Y ahorita se estaba quejando o qué? **C:** Claro. Ahorita se estaba quejando. Por eso le dije usted fue un, una persona que antes hizo de que la gente dentrara (Sic), pues ahí está. Pero así hay muchas personas (Sic), muchas, muchas. Ahorita por lo menos muchos se benefician otros no, están atravesando un impacto duro porque imagínese toda esa área militarizada. Eso es un impacto para la comunidad, es duro. Eee, anteriormente, cuándo existía eso ¡No! Uno se los encontraba de vez en cuando. (...) Ahora no, ahora está... [más permanente] (...) ¿Atrás de qué?, ¿cuidando qué? Entonces la gente no mira eso pero uno desde un punto de vista uno lo mira. Que uno no puede andar libremente como anteriormente. Ahora pues también camina pero resulta que cualquier momento “quieto”. Cualquier cosa le... **A:** ¿Y no se puede meter por los predios de la multi tampoco (Sic)? **C:** Ya no. Siempre y cuando usted no trabaje en esa área pues “cómo así usted”. (...) Anteriormente pasaba todo el mundo. Todas, todas esas lomas que hay por allá pasaba cualquiera; hoy en día ya no se puede porque tiene que tener una orden pa’ (Sic) pasar, siendo, siendo dueño de su territorio... Y usted va a pedir permiso (risas). ¿Cómo la ve? (...) **S:** Si no que eso es porque las comunidades no se pronuncian. Si las comunidades, las 37 comunidades se pronunciaran y, y piden refuerzos de los otros Cabildos, del resguardo de Honduras o de los otros ¡no eso... va pa’ fuera! (Entrevista con Albeiro Cortez 2013)

De acuerdo a la anterior cita, de unos años hacia la actualidad la seguridad privada de la mina ha restringido el paso por determinadas áreas, impidiendo transitar por caminos de uso comunal que atraviesan las tierras propiedad de Giraldo y otras que ha ido adquiriendo. Meraldiño cuenta con información similar al respecto dice “más que todo fue la fuerza pública que no permitía que la gente transitara por esa vía de acceso a la mina, e igualmente ellos tenían seguridad privada” (conversación transcrita 15 de marzo 2015). En especial,

según me explicaba, no permiten pasar en la dirección en la que está el lote de la explotación. Cortez me explica que el supuesto beneficio consta específicamente del pago de un salario mínimo para algunas cuantas personas, lo cual es cuestionado por mi interlocutor “¿Pero qué plata es un mínimo? (...) Un mínimo eso, eso no es plata.” Giraldo parece también haber mantenido una relación con algunos funcionarios públicos. Sobre quien más he identificado alusión en las conversaciones informales de los líderes y en las observaciones de campo es el vínculo con la concejal Karina. Muchos de mis interlocutores la perciben como una de las aliadas del proyecto El Danubio. Durante el recorrido en el que acompañé al Gobernador Carlos Cobo en octubre de 2012, tuve la oportunidad de participar en una asamblea en Altamira donde la comunidad decidiría si recibir un material enviado por “la empresa minera” de El Danubio para la construcción de un auditorio. En los acápites siguientes haremos alusión a este episodio, pero lo señalo ahora especialmente para resaltar que una de las personas que parece encargarse de propiciar estos favores y gestiones entre comunidades y la empresa, es esta concejal. Albeiro comentaba a propósito de la situación reseñada,

No, pero eso se da cuando en una comunidad se presta una persona para vender una comunidad. Porque no está vendiendo solamente digamos, digamos ese acuerdo con esa sola persona. Usted si se presta para eso pues la comunidad es la que debe estar mirando (...) Lllaman a la señora Karina. Nooo, si yo me sé todo el rollo de todo. Ese rollo me lo sé al derecho y al revés. Y no solamente en esa comunidad ella, ella, pues digamos a través del Concejo pues ella busca la manera de cómo obtener en todas las comunidades tener, tener relaciones con, con la comunidad e ir haciendo como un, una buena imagen. No solamente para minería, (...) A través de que ella es concejal aspira a, a ir dentrando (Sic) con la grande (Entrevista con Albeiro Cortez 2013).

Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, podríamos pensar que existe un conflicto latente entre la dirigencia del Cabildo Indígena Cerro Tijeras –así como muchos de sus miembros- y Alonso Giraldo –junto con sus “aliados”-. Cuando leo esta frase a Meraldiño, inmediatamente reflexiona: “desde que haya el tema de la minería sea con Alonso o quien se sea el conflicto persiste, porque hay un sector que apoya la minería y otro sector que no está de acuerdo” y agrega “aparentemente se ha quedado en una parte neutral donde las autoridades [indígenas] que han ido pasando no han hecho

pronunciamiento alguno, pero mientras eso continua hay un momento en que eso vuelve a reventar en ese caso yo diría con más fuerza para hacer oposición” (conversación 15 de marzo 2015).

Durante mi último encuentro con directivos y líderes del Cabildo el 20 y 21 de abril de 2015, abordamos, entre otros temas, el asunto de las actividades mineras de Giraldo dado que existen nuevas inconformidades por parte de habitantes de la zona occidental. Esto de cara a la reunión de la Mesa Interinstitucional entre el Cabildo de Cerro Tijeras y el Gobierno Nacional, Departamental y Local que se realizaría al día siguiente.

Según el señor Iván Serna de la vereda El Amparo, la mina El Danubio ha suspendido la producción de oro. Su sobrino trabaja con la empresa Giraldo y Duque en la planta de beneficio La Puchis, ubicada en el municipio de Buenos Aires. Lo que ha informado este trabajador a su familia es que al parecer de El Danubio no se está enviando cargas de mineral a esa planta, como venía haciéndolo anteriormente. Eliecer Cuetia, habitante de la vereda la Alejandría me comenta que su hijo fue trabajador en esa mina hasta hace poco y que la información que maneja coincide con la de Serna: la producción de oro venía disminuyendo y en un momento dado paró pues el tenor de oro en el material fue mínimo. Por mi parte ya había escuchado estos rumores en algún encuentro con líderes del proceso indígena durante el año 2014. Sin embargo, la situación no es muy clara dado que también se maneja una versión diferente sobre lo que viene ocurriendo con esta mina. Enrique Güetio y Meraldiño han obtenido otras informaciones con comuneros que plantean que ha habido inconvenientes entre los asociados de la empresa Giraldo y Duque, lo que podría implicar una ruptura con La Puchis.

Más allá de estas especulaciones, lo que es cierto es que, como nos explicaba los señores Serna y Cuetia, Giraldo lleva más de un año, aproximadamente desde marzo de 2014, trabajando una mina en la vereda La Estrella. De acuerdo a la información que manejan los cabildantes, el minero paisa habría comprado esa “finquita” hace varios meses, viene abriendo carretera e ingresando máquinas y herramientas, lo que ha intensificado notablemente la producción minera, anteriormente por completo artesanal. Se han presentado quejas de habitantes cercanos a la mina por el vertimiento de aguas residuales

de la producción minera que están generando problemas de salud a los afectados. Frente a esta situación, de acuerdo su relato, Giraldo mandó a reubicar las mangueras de las aguas residuales hacia otro potrero, en donde parece estar afectando los animales que ahí se encuentran.

Durante la entrevista con Cortez, nuestro interlocutor se refería a ésta como un área de intereses, frente a lo que es pertinente anotar que se conecta precisamente con la zona titulada a Cosigo Resources y muy probablemente se encuentre dentro de ese título o dentro de la solicitud HCG-121 de AGA<sup>304</sup>. Durante su entrevista, Ramón Tobar también hizo alusión a la mina en esa vereda, mientras hablaba de la forma en que las multinacionales ingresaban en el territorio, decía: “y al la’o di acá (Sic), específicamente en el territorio de nosotros [occidente] sabemos que están amparados [las multinacionales] también bajo un título minero de un señor Ilario Güetio, y Alonso Giraldo, a este lado, que es lo que está sucediendo en la Estrella como tal.”

El 21 de abril en la Mesa Interinstitucional, después de informar al funcionario de la CRC las situaciones ilegales ocurridas en La Estrella, se agenda una visita de seguimiento y fiscalización ambiental a la mina El Danubio para verificar el cumplimiento de todas las medidas dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado en el 2007 por la CRC. La comisión del Cabildo en la Mesa<sup>305</sup> hizo énfasis en la necesidad de identificar la fase de desarrollo del proyecto minero (y eventual aplicación del Plan de Cierre y Abandono<sup>306</sup>). A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería no enviaron delegados a esta reunión, la comisión de la organización étnica vuelve a reiterar la exigencia principal en el tema territorial: la derogación de todos los títulos y solicitudes de concesión minera vigentes en Suárez.

---

<sup>304</sup> Expresaba Cortez acerca de esa área apetecida por muchos: “uno acá dentro del territorio ya sabe el problema de lo que le estoy diciendo, si es Maraver o es Montañitas o es La Estrella o es Turbina. Sí, digamos en esa área. Nosotros sabemos qué personas viven ahí y cuáles es las personas que han vendido o, o otras (Sic) personas se han prestado para, para comprarle” (Entrevista con Albeiro Cortez 2013).

<sup>305</sup> Meraldiño Caviche de Altamira, Iván Serna del Amparo, Eliecer Cuetia de la Alejandría, David Guamanga de Unión Olivares, el asesor jurídico Hames Larrea, Enrique Güetio de Altamira, el Gobernador Indígena Saúl Güetio y mi persona constituimos la comisión por parte de la organización indígena en la Mesa Interinstitucional. La reunión inició a las 9 a.m. y finalizó a las 2 p.m. aproximadamente.

<sup>306</sup> El 24 de septiembre de 2007 en el oficio “Evaluación de programa de trabajos y obras PTO” se especifica la necesidad de un Plan de Cierre y Abandono en el PTO, describiendo los criterios para tal fin como un cronograma detallado de las actividades (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 115-119, el tema del Plan de Cierre aparece en p. 118).

## CAPITULO IV

### 4. Perspectivas estratégicas de las organizaciones étnicas

#### 4.1 Autoridad étnica, gobierno propio e identidad: importancia de la territorialidad

En la primera parte de este trabajo hemos referenciado algunas realidades previas que incidieron en la configuración organizativa actual, como la construcción del embalse Salvajina, el proyecto de desvío del río Ovejas, la masacre del Naya y la vulneración del derecho a la salud y la educación. La explicación de esos hechos y realidades, adelantados con el objetivo de reconfigurar los territorios y sus poblaciones desde poderosos intereses, a partir de determinados marcos interpretativos, parece haber permitido politizar la permanencia territorial de esas comunidades así como sus dinámicas socioeconómicas y culturales. Permanecer en los territorios, en las *condiciones* que ellos/as mismos/as consideran que deben permanecer<sup>307</sup>, parece depender en gran medida de que sus organizaciones consoliden la mayor capacidad de control posible sobre los factores e incertidumbres del “ambiente”. De esta forma, los factores que pueden ser potencialmente aprovechados por quienes tienen las intenciones amenazantes serían, por el contrario, enfilados en función de estrategias para combatirlos.

El factor jurídico, por un lado, y el “control” efectivo de determinados aspectos sociales y territoriales, por el otro, son dos dimensiones de ese ambiente que recurrentemente hemos identificado en las preocupaciones y en las acciones de las dos organizaciones étnicas, tanto en el trabajo de campo como en los documentos revisados.

---

<sup>307</sup> Esta permanencia pasa por la definición del uso de la tierra/recursos, el control en la configuración de los territorios que se habitan. Hablamos de unas condiciones específicas dado que estas organizaciones son enfáticas en reivindicar una forma especial de vivir en ese territorio, con unas garantías para la no dependencia, la autonomía en la definición de sus proyectos sociales, económicos, políticos y culturales, más allá del simple hecho de mantenerse en el lugar. En este sentido, permanecer bajo nuevas relaciones de dominación económica como la inclusión de la población en proyectos económicos como fuerza productiva asalariada vinculada por relaciones laborales es en parte cuestionado. Por otro lado, incluso la simple permanencia física, puede ser amenazada eventualmente, dependiendo la estrategia de apropiación del territorio por parte de los foráneos y del proyecto de desarrollo proyectado, si requiere el “vaciamiento” del territorio.

De forma y en tiempos diferentes, cada una de las organizaciones y en especial algunos de sus líderes, han ido afianzando un mayor manejo de los aspectos jurídicos pertinentes. La apropiación de ese acervo ha contribuido a identificar oportunidades políticas favorables por lo que parece otorgársele gran importancia a esta línea de acción<sup>308</sup>. Lo anterior ha sucedido en la medida en que se consolida también institucionalmente el marco jurídico étnico.

El *control* de aspectos sociales y territoriales es lo que en acápites anteriores hemos llamado *la territorialidad*. Este segundo factor se relaciona con el ejercicio de un dominio sobre la vida social local a través de un proceso político/organizativo que en el caso de estas dos organizaciones étnicas no incluye un control armado. Consideramos que las dos organizaciones étnicas reconocen permanentemente como necesidad, y posibilidad, ese control de dimensiones específicas que en la población y el territorio pueden ser utilizados tanto por los agentes contrarios como por ellas mismas en la disputa. En la medida que aquel control se fundamenta en su legitimidad ante la comunidad, su estrategia política incluye un fuerte componente de identificación interna, de difusión de algunos imaginarios y de creación de “consensos” internos ligados a ese “esquema de interpretación”, todo para unificar criterios y percepciones en las comunidades. Problematicar la naturalización de la presencia y de los vínculos que aquellos agentes establecen con la población, resulta de gran importancia para impedir que se instalen poco a poco en sus dinámicas socioeconómicas cotidianas y se generalice una representación positiva de lo que pueden ofrecer y transformar en sus vidas<sup>309310</sup>.

---

<sup>308</sup> Ya hemos visto como tanto el Consejo Comunitario como el Cabildo han participado de acciones de tutela reclamando protección de derechos colectivos a la integridad cultural y la participación por consulta previa (Sentencia T-1045A de 2010 y Sentencia T-462A de 2014); además de numerosos derechos de petición, quejas, denuncias formales. Otras estrategias de incidencia en la “estructura de oportunidades políticas” que han afectado decisiones políticas e incluso, podría decirse que jurídicas, ha sido por un lado la articulación con actores políticos internacionales que han presionado la institucionalidad en favor del reconocimiento y protección de los derechos colectivos exigidos y por otro la realización de Audiencias y mesas institucionales (interinstitucionales) para la interlocución directa de las organizaciones étnicas con el Estado.

<sup>309</sup> Aquí me refiero no solo a la llegada de multinacionales, sino a fenómenos tan diferentes como las retroexcavadoras, dragas, cultivo masivo de coca y laboratorios de procesamiento, mineros tradicionales de otras regiones, proyectos de minería mediana y grande industriales, nuevo proyectos hidroeléctricos, prostitución, homicidios y conflicto armado.

<sup>310</sup> “TAREAS SINTESIS: Tema jurídico como vamos a estructurar el cabildo indígena cerro tijeras. (...) Tema especial necesitamos jóvenes para capacitación de comunicación. Concretar proyectos productivos en las fincas. Capacitación de la Guardia por Derechos Humanos. (...) Que vamos a hacer con las multinacionales. Que vamos hacer con los jóvenes que

Esto tiene un efecto político concreto, dado que la posibilidad que tienen esos actores de implantarse parece depender, en parte, de su capacidad para insertarse y, eventualmente, arraigarse en las redes de relaciones socioeconómicas y comunitarias de los pobladores. Incluirse en los proyectos de vida de los pobladores, en sus percepciones de forma positiva, vincularlos a la dinámica del fenómeno y, en determinados casos, integrarlos en sus estructuras, hace parte de las estrategias de algunos actores que hemos estudiado. Es por esto que la posición y decisión de cada comunero contribuye a su entrada y fortalecimiento o, por el contrario, a su segmentación/marginación y eventual expulsión. Lo anterior puede ser discutible ya que varía según los actores contrarios y la coyuntura<sup>311</sup>.

En este sentido, consideramos que el acceso al recurso minero puede estar parcial o determinadamente afectado por ese “gobierno” relativo de los imaginarios que se tienen de los actores amenazantes, en tanto se pueda traducir en el control de los vínculos que los pobladores deciden establecer con estos<sup>312</sup>. El respaldo a las acciones colectivas – movilizaciones, sabotaje de maquinarias, bloqueo de vías, plantones, audiencias públicas, por ejemplo- impulsadas por las organizaciones étnicas también se relaciona en parte con ese dominio<sup>313</sup>.

---

están en la droga. Temas de amenazas con los comuneros. Temas jurídicos acceso (Sic) carnal violento. Que vamos a hacer con los grupos armados. Tema de educación se viene la consulta previa de educación. Que vamos a ser con los docentes que tienen problemas con la comunidad y la organización.” Relatoria: Asamblea general. 10 y 11 de febrero -2012 Informe general de la directiva 2011 y Elección del gabinete 2012. Vereda La Chorrera, Suárez-Cauca

<sup>311</sup> Por ejemplo, un caso en el que la aplicación de esas estrategias por parte de los actores contrarios parece no haber sido central, ha sido el de las retroexcavadoras que llegaron a finales del 2014. Su estrategia para lograr mantenerse en el río Ovejas se ha basado desde el inicio en el terror y la coacción, amenazando con utilizar la violencia ilegal. Esto puede responder a la fuerte resistencia desplegada por la organización en 2010 y 2011. No obstante, parece muy común que estos y otros agentes intenten vincularse con sectores de las comunidades para darse respaldo y legitimidad, y podemos suponer que esa estrategia hace parte de las opciones que son consideradas en contextos determinados.

<sup>312</sup> El “gobierno” y control territorial también incluye una línea fundamental: la proyección de propuestas productivas – agrícolas y transformación- es gran importancia pues permiten crear alternativas para que el criterio de la necesidad y oportunidad económica tenga un menor peso en las decisiones de los habitantes del territorio a la hora de involucrarse con actores y fenómenos cuestionados por las organizaciones, esta línea de acción y organización es bastante compleja y enfrenta muchos problemas, sin embargo resulta determinante en muchos casos.

<sup>313</sup> Un ejemplo práctico son los criterios para el tratamiento de funcionarios de las multinacionales, promovidos por el Cabildo: “Ante la llegada de funcionarios y empleados de las empresas transnacionales y en especial de las mineras la comunidad debe apartarse momentáneamente de sus aspectos culturales y no brindarles a éstos personajes algunas comodidades o facilidades, para ello ratificamos nuestro compromiso de: -No darles alimentación ni bebidas. -No brindarles la hospitalidad de nuestros hogares. -No proporcionarles ninguna información sobre el territorio. -Abstenerse de compartir con ellos, cero amabilidad para con los explotadores. -No colaborarles con el transporte de material para el montaje de sus minas. -HEMOS OPTADO POR DEFENDER EL TERRITORIO, CUESTE LO QUE CUESTE.” Documento para discusión y análisis en el Congreso de los Pueblos. Cabildo de Cerro Tijeras. Octubre 8 al 12 de 2010, Bogotá D.C. No obstante, esa incidencia no se reduce a aspectos siempre tan concretos y evidentes, sino a múltiples



Sin embargo, en el trabajo de campo y los documentos revisados hemos observado que ese “gobierno” sobre los criterios que definen los tipos de minería que se pueden hacer en el territorio, y que la organización étnica se esfuerza por consolidar, es una capacidad que no existe *a priori* en virtud del auto reconocimiento étnico de los miembros de la comunidad o de sus prácticas comunitarias/culturales diferenciales, actuales y/o pasadas. Esta capacidad de “gobierno” pasa en gran medida por cimentar esas condiciones específicas de legitimidad y “consenso” entre sus miembros formales y entre las poblaciones rurales más amplias, dado que no son fruto “natural” de un ser cultural o biológico específico.

Es así como la interpretación específica de una experiencia social vinculada a la etnicidad y la promoción del auto-reconocimiento étnico individual es una política promovida de forma permanente como fundamento de la organización y acción política común<sup>314</sup>. “La formación y capacitación político-organizativa en todo el territorio”<sup>315</sup> se convierte en consigna y práctica para la difusión/construcción de esos postulados/criterios/líneas de acción<sup>316</sup>, para la toma de decisiones y las proyecciones colectivas. Ha permitido que cristalicen “estructuras” organizativas y políticas más o menos formales/continuas<sup>317</sup>.

---

imaginarios, relaciones y prácticas sociales dependiendo la política manejada por la organización. En ese caso, Meraldiño me confirma que se impulsaron fuertemente esos criterios durante la caminata por la pervivencia con el objetivo de cerrarle las puertas a las compañías (15 marzo 2015).

<sup>314</sup> “En la comunidad hace falta formación política y organizativa lo cual se ve reflejado en la falta de pertenencia hacia el territorio y el proceso indígena. Falta capacitación y orientación para dar a conocer que como pueblo nasa tenemos una cultura, una cosmovisión, una legislación, etc.” Relatoría: Asamblea general. 10 y 11 de febrero -2012 Informe general de la directiva 2011 y Elección del gabinete 2012. Vereda La Chorrera, Suárez-Cauca. En la comisión No 1 Relatoría por Stella Chavez (Sic). Por otro lado: “(...) el tema de estrategias, pues siempre lo que hemos hablado (...) de cómo se hace el trabajo de formación, cómo se hace una buena visibilización, cómo se hace ese mismo trabajo de autorreconocimiento.” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)

<sup>315</sup> Relatoría: Asamblea general. 10 y 11 de febrero -2012 Informe general de la directiva 2011 y Elección del gabinete 2012. Vereda La Chorrera, Suárez-Cauca. En la comisión No 1 Relatoría por Stella Chavez (Sic).

<sup>316</sup> “Discutir normas internas para obedecer los mandatos de la autoridad tradicional, en términos de la resistencia milenaria como diría Quintín Lame, “Que las leyes que hace el hombre que van en contra de la naturaleza no hay porque obedecerlas”. Se enfatiza en el papel de “dirección” de la Junta Directiva del Cabildo “(...) la orientación de la directiva del cabildo cerro tijeras a las comunidades en el proceso político organizativo para fortalecer el proceso.” Relatoría: Asamblea general. 10 y 11 de febrero -2012 Informe general de la directiva 2011 y Elección del gabinete 2012. Vereda La Chorrera, Suárez-Cauca. En la comisión No 3, relatoría Milena.

<sup>317</sup> Por ejemplo el Consejo Comunitario promueve una política de fortalecimiento de proyectos agrícolas, la finca tradicional –en particular líderes de Gelima y Yolombó conformaron Asoyoge una asociación de productores agrícolas-, el Grupo de Jóvenes, la reunión de mayores, ha habido un fortalecimiento de los grupos de música afrocaucana, hay quienes asumen especialmente las reuniones internas de las comunidades o externas con actores institucionales sobre minería, se trabaja también el tema de Mujer y hay una Asociación de mujeres de algunas veredas del corregimiento, ha habido procesos en torno al tema de comunicaciones –video con líderes antiguos y más recientemente con jóvenes-, hay un trabajo con las JAC. Por otro lado el Cabildo maneja una serie de Programas organizativos Mujer, Movimiento Juvenil, Defensa Territorial y fortalecimiento de la Guardia Indígena -ante multinacionales y actores armados-, Comunicaciones, Salud/medicina propia, Educación propia, recuperación del Nasa Yuwe y rituales propios, seguridad alimentaria y recuperación de semillas propias.

El fundamento ideológico<sup>318</sup> de lo étnico, proporcionado por el movimiento indígena y afrodescendiente nacional, puede ser visto, en términos de Hall, como una “rejilla de inteligibilidad” específica, una luz –selectiva, claro está- a través de la cual los miembros del Cabildo Indígena y el Consejo Comunitario han podido interpretar políticamente sus realidades, lugares sociales y el despojo al que han sido sometidos. Nos interesa resaltar una dimensión profundamente relacionada con la ideología y la etnicidad: las prácticas y los lugares sociales. Al preguntar a Meraldiño cómo comprende lo étnico y su aspecto ideológico, me expresa que antes que nada existe “una razón de ser”: “Después de esa razón de ser eee, yo diría dentro (Sic) la parte de la ideología que es la que se empieza a inducir a la gente ¿sí? Y esa razón de ser pues fueron nuestros mayores que tenían claro ese concepto de quienes eran”. De nuestra conversación al respecto, interpreto la síntesis que me propone Meraldiño: las creencias y conocimientos ancestrales fueron modificados poco a poco en un proceso de asimilación cultural que hoy se ha venido combatiendo gracias a los fundamentos ideológicos del proceso indígena. “M: Ahí sí hablarían de la parte ideológica que ellos traían ya, frente a lo que se tenía en esa razón de ser, y ahí poco a poco se ha ido avanzando. A: es decir, había un fundamento de una experiencia previa de comunidad, M: lógico, sí, de principio, A: y lo ideológico ayuda a recuperar eso, digamos a promoverlo y a concretarlo en hoy, M: sí, sí.” Esta razón de ser (concepto que yo relaciono con el de “lugar social” cayendo muy seguramente en reduccionismos), que se fundamenta en una serie de “creencias y conocimientos” sobre el mundo, es para Meraldiño y para muchos miembros de la organización étnica una realidad pasada y presente que define sus vidas colectivas e individuales. Su experiencia política y personal de la etnicidad ha pasado no solo por su rol en el proceso político del Cabildo, sino por la fuerte relación que sostuvo con su difunto abuelo Leonidas, importante T’wala (médico tradicional) de Altamira. Por esas y otras razones resulta para mí muy significativo intentar acercarme a estas concepciones a través de este líder. Mi comprensión está cultural y socialmente limitada,

---

<sup>318</sup> “Aunque lo racial y la etnicidad no son exclusivamente ideología sí son ideológicos de múltiples maneras.” (Restrepo 2004: 52) “En términos generales ideología ‘refiere a las imágenes, conceptos y premisas que proveen los marcos de pensamiento a través de los cuales representamos, interpretamos, entendemos y ‘hacen sentido’ ciertos aspectos de la existencia social’ (Hall 1981:31) (...) Las ‘rejillas de inteligibilidad’ que constituyen la ideología no se agotan en el lenguaje ni son sólo quimeras mentales sin impacto en lo real” (Restrepo 2004: 51)

sin embargo, la intención es resaltar el lugar central que la experiencia social concreta, individual y colectiva, tiene en esta experiencia de la etnicidad.

Para conectar de nuevo con la concepción que adoptamos de lo ideológico: “Antes que quimeras existiendo sólo en el fantasmagórico orden de las imágenes mentales *la ideología es material* porque se inscribe en, y es configurada por, prácticas sociales.” (Subrayado nuestro) (Restrepo 2004: 53). La remisión a esta dimensión *material*, no solo de lo ideológico sino de lo étnico, es expresada de forma diferente por Simón. Hablando del conflicto del río Ovejas, me explica que, para él, la explicación principal de aquella fuerte reacción de las comunidades es “la apropiación del territorio” por parte de éstas. Los aspectos que denomina como culturales, en especial las dinámicas con y en el río, las actividades de subsistencia desarrolladas a través de redes comunitarias en profunda relación con ese territorio, la historia de los mayores por vivir de y en él, son esa experiencia social. La forma en que ellos en cada caso conciben lo étnico no excluye la existencia de muchos otros factores y dimensiones que inciden en el desarrollo organizativo y en las razones por las que las personas se movilizan o deciden vincularse<sup>319</sup>.

En este sentido, las etnicidades son más bien un proceso de “anclaje/fijación” de significados en una continua lucha por su definición, “mediante una serie de *articulaciones* histórica-contextuales”<sup>320</sup>. Desde ese marco se anclan experiencias sociales, se configuran las subjetividades, sus sentimientos de pertenencia y, en mayor o menor medida, sus prácticas. Desde el enfoque que adoptamos, lo étnico no es un discurso/ideología *utilizado* como instrumento político calculado para lograr unos objetivos fijos y transparentes, en una lucha por beneficios materiales o simbólicos.

---

<sup>319</sup> Hay que considerar que las personas pueden sumarse a uno u otro proceso étnico por razones vinculadas con esas experiencias sociales, pero también por acceder a una oportunidad individual o colectiva, o/y porque tiene una sensibilidad frente a temas específicos que promueve el Cabildo. Durante algunas conversaciones con líderes indígenas identificaba su inconformidad porque había personas que se afiliaban para sacar la libreta militar o por acceder a la salud. Manuel Belalcázar ex-gobernador de Agua Clara me manifestaba que en esa zona mucha gente lo hizo para solucionar la problemática de educación (Entrevista a Manuel Belalcázar marzo 2015). Sin embargo, a pesar de esta inconformidad, en muchos de esos casos existe una experiencia social previa o presente vinculada a lo indígena, aunque pueda parecer lejana para algunas de esas personas. Adicional, es necesario recordar que diversas lógicas y criterios pueden convivir en una decisión o relacionamiento, dadas las profundas ambigüedades que encarna la acción humana, nunca completamente “compacta y coherente” frente a un valor y objetivo.

<sup>320</sup> “De la misma manera que no hay una práctica social por fuera del discurso toda práctica social está inscrita en la ideología; sin embargo, debido a que toda práctica social está inscrita en la ideología no se puede concluir correctamente que no existe nada sino ideología (Hall 1985:103)” (Restrepo 2004: 53)

Este razonamiento converge con la perspectiva que he adoptado desde la sociología de la organización y de la acción colectiva, en donde el proceso sociopolítico de apropiación/elaboración de unos “esquemas interpretativos” y de una identidad no es un proceso calculado, racional –en el sentido restringido y “clásico” del término- y ligado sólo y siempre a lógicas de utilidad, ni siquiera frecuentemente.

De ahí que la afectividad, los sentimientos de solidaridad e identidad sean un factor de importancia en esos procesos organizativos, y la etnicidad una posibilidad de reorganizar experiencias/prácticas/vínculos presentes o/y pasados en una “memoria” en la que un renovado relato las revalora, dando nuevos sentidos a la vida y al futuro<sup>321</sup>. Todo esto se amalgama al mismo tiempo con las “necesidades”<sup>322</sup> y “oportunidades” que algunos miembros de la organización identifican desde una racionalidad estratégica, en un conflicto dado, para defender eso que consideran han sido y quieren ser. Consideramos que el fortalecimiento de un sentimiento de identificación como grupo étnico se adecúa al menos en tres vías a esas “necesidades”/“oportunidades” en el conflicto: permite la *recuperación/confección* de una *memoria* y la reinterpretación de especificidades culturales/comunitarias en torno a una identidad y un “esquema interpretativo” que incluye, en este caso, la *autonomía* y el *gobierno propio* como reivindicaciones fundamentales de su programa político y social, enmarcándolas en una *legitimidad política* y unos *desarrollos legales especiales*. La consolidación de un referente comunitario como “autoridad étnica” se torna de gran importancia especialmente en el tipo de disputa que se ha desatado. Se convierte en la posibilidad de legitimar desde un marco especial ese control social y territorial que se ejerce relativamente y se intenta ampliar. El conflicto minero, propiciado por la acción divergente de las organizaciones étnicas, ha permitido a su vez la

---

<sup>321</sup> “Ninguna identidad es producida del aire sino que es producida de aquellas experiencias históricas, tradiciones culturales, de aquellos lenguajes perdidos y marginales, de aquellas experiencias marginalizadas, de aquellas gentes e historias que permanecen sin escribir. Estas son las raíces específicas de la identidad (Hall:2001:291)” citado en (Restrepo 2004:62). A partir de la cita de Hall podemos reiterar de nuevo que esa *memoria* es construida como común desde un relato específico, que en el caso de los indígenas en Suárez, se fundamenta en experiencias pasadas o actuales de pertenencia y autorreconocimiento, ligadas por lo regular a una experiencia familiar de migración desde “regiones indígenas”, sea reciente o ya lejana en el tiempo. En el caso de la comunidad negra su experiencia remite a esa trayectoria común, extendida en el tiempo, en un mismo espacio geográfico en el que se han integrado por dinámicas comunitarias que son reinterpretadas desde esta memoria.

<sup>322</sup> En Suárez “(...) se cuenta con la presencia de una comunidad indígena organizada, legalizada y legitimada ante la comunidad nacional e internacional, justamente por los atropellos de que ha venido siendo objeto como lo es adscrita al Cabildo de Cerro Tijeras (...)” Posecionamiento (Sic) Político comunidad Cabildo Indígena Cerro Tijeras Municipio de Suárez Cauca. Julio 2 de 2010, Suárez Cauca. Asamblea comunitaria del 1 y 2 de julio en Unión Olivares.

profundización y renovación del ejercicio de la autoridad étnica y más ampliamente de la etnicidad.

En ese sentido, el enfoque adoptado en este trabajo es completamente compatible con la propuesta de “contextualismo radical” presente en la teoría de Hall, dado que deseáramos resaltar cómo ese contexto específico, al reforzar el proceso sociopolítico de resistencia, acentúa también la apropiación de las reivindicaciones étnicas. No obstante, la intención no es desconocer otras dimensiones del contexto que han jugado en esta formación étnica concreta, ni insistir en que ésta sea la de más peso.

Los mecanismos sociales e ideológicos por medio de los cuales se configura/difunde/recrea una específica identidad y comunidad étnica, y su relación con las prácticas socioeconómicas y culturales, no es el objeto central de este trabajo. La etnicidad es una realidad que tiene su propia dinámica, es un amplio campo con formas y trayectos autónomos. En este caso me interesa en tanto problematiza las prácticas y actores mineros en un conflicto dado. El énfasis en una dimensión del contexto es también un acento en las características relacionales de la identidad étnica y del papel que el conflicto juega en esta configuración de la diferencia. Hall proporciona igualmente una mirada que valora este carácter<sup>323</sup> y que adecuó para este análisis: “De un lado, estas narrativas de sí son parcialmente configuradas desde afuera (Hall 2001:285-286); la identidad implica una exterioridad constitutiva (Hall 1998:295). Ante la presencia-imaginación de Otro lo Mismo emerge como tal (Hall1989:16)” (Restrepo 2004:60)

En este sentido, podemos pensar que la búsqueda de lo Mismo en la contradicción con determinados actores mineros es importante pues la disputa cobra un sentido ideológico, más allá de un “simple” conflicto por recursos. Toma, de esta forma, gran importancia la delimitación de lo *propio* en las prácticas mineras de las comunidades afectadas y lo *contrapuesto* en las que se rechazan. En estos casos, en los documentos revisados y lo

---

<sup>323</sup> “Por tanto, Hall está argumentando por una radical historicidad, relacionalidad y posicionalidad de la inscripción/adscripción étnica (marcada o no); por eso su insistencia en una modalidad de análisis de lo concreto que dé cuenta de la especificidad histórica, en contraposición a las tendencias especulativas y homogeneizantes. Estrictamente hablando la etnicidad no existe: existen etnicidades concretas, históricamente situadas, desde las cuales se pueden decantar analíticamente las condiciones de existencia compartidas para suponer una modalidad específica, pero plural, de inscripción/problematización de la diferencia que llamaríamos etnicidad. (...) El propósito es comprender la pluralidad histórica y las inscripciones concretas en las cuales han emergido, transformado y desaparecido los fenómenos étnicos.” (Restrepo 2004: 44)

observado en campo hemos identificado que cobran gran fuerza las categorías *artesanal* que problematiza lo técnico/tecnológico; *subsistencia* problematizando el fin de la actividad y *ancestral, tradicional* que problematizan lo heredado, “la memoria” y, en parte, lo técnico<sup>324</sup>. Lo Otro remitiría entonces a lo *industrializado, rentable y lo moderno*, que se relaciona a su vez con una lógica de acumulación en la que el territorio y su población proporcionan recursos a capitalizar, eliminando todas sus otras dimensiones socioculturales. Estas dicotomías que parece cristalizarse desde esa “rejilla de inteligibilidad” ideológica no son estáticas, y se anclan en determinadas características de las prácticas mineras de esas específicas poblaciones.

En los dos casos hemos identificado aquella dualidad de lo étnico. Por un lado, constituye la resignificación de las experiencias, prácticas y relaciones socioeconómicas/comunitarias/culturales, de los rasgos del territorio, de las *intenciones* de los ancestros, un proceso de construcción de subjetividades específicas y de sentidos del mundo. Por otro lado, es también un proceso en función de fundamentar las “capacidades” de respuesta a la injerencia de esas amenazas efectivas y sus agentes, de generar “oportunidades” a través del control de ciertas incertidumbres,

Se lo decía yo a la comunidad reunidos aquí en Altamira, es que si cogemos de Munchique Los Tigres, llegando por Delicias, llegando a, al Cerro Catalina o la Teta Catalina que le llaman, pasando por Piedra-Escrita, llegando aquí en el río Marilópez (...) atrás por la Cordillera Central, que es San Agustín pues hay huellas de nuestros mayores ¿Sí? Y ¿cuáles son esas huellas? Pues los jeroglíficos que fueron, que fueron dibujando en, en las piedras donde ellos habitaban, y eso nos da pie, jurídicamente, desde la base ancestral, de que sí son unos territorios de nosotros (...) que nojotros (Sic) ya diríamos unos herederos de esos territorios (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014).

---

<sup>324</sup> “Sabemos de la presencia de enormes riquezas auríferas a lo largo y ancho del Departamento del Cauca, junto con los otros grupos étnicos –negritudes y campesino- las hemos explotado de una manera artesanal, tradicional y sin impactar al medio ambiente, pues nuestra razón de ser, nuestro aspecto cultural no nos permite degradar al suelo y el subsuelo para beneficiarnos o lucrarnos económicamente de él, lo concebimos con la integración de las comunidades con su entorno, con el territorio sin divagar en acumular fortunas como si lo hacen aquellos individuos que conforman grandes empresas y que de ambulan por varios países del mundo con el ánimo de arrebatarles a sus propietarios originarios los metales que son objeto de la misma cosmovisión étnico cultural.” Posecionamiento (Sic) Político comunidad Cabildo Indígena Cerro Tijeras Municipio de Suárez Cauca. Julio 2 de 2010, Suárez Cauca. Asamblea comunitaria del 1 y 2 de julio en Unión Olivares.

La revaloración de esas marcas en el territorio afianza un sentido de comunidad y a su vez fundamentan un dominio legítimo y eventualmente legal, ante actores institucionales, por ejemplo. Permite reelaborar imaginarios mediante la remisión a una historia compartida como *pueblo étnico* e incluso recuperar/incorporar poco a poco prácticas<sup>325</sup> asociadas a esas visiones del mundo y de las relaciones comunitarias, es decir, una política de la representación de las identidades (Restrepo 2004:61). En el caso del Consejo Comunitario rescatar el proyecto político colectivo de libertad y autonomía de los mayores que resistieron y compraron las tierras es una apelación a esas experiencias históricas en función de los retos del presente,

Que nosotros podamos garantizar el territorio, no solamente a los hijos de nosotros, sino a nuestros nietos, porque si nosotros pudiéramos hacer lo que hicieron anteriormente, los Ararat, los Carabalí, los Congo, que lo hicieron en 1852 a 1866 que trabajaron por quince años, para comprar estas tierras, y si nosotros dejamos eso, entonces ellos lo hicieron para garantizar que nosotros hoy estuviéramos contentos aquí (...) Entonces hoy esa cuestión de la memoria yo digo de que nos tiene que dar la fuerza suficientes (Sic) de hombres y mujeres (Intervención Simón en la segunda reunión de mineros de la vereda La Toma, Diario de Campo 15 de abril 2013)

La preexistencia e intenciones de los ancestros en el territorio es un argumento en esa disputa. Afianzar la cohesión social en torno a esos contenidos simbólicos y políticos específicos de aquella etnicidad, no es algo mecánico, es una tarea profundamente compleja. Es, como he referido, una disputa permanente entre múltiples imaginarios/identidades<sup>326</sup> arraigados o nuevos que ordenan las vidas de las personas y que

---

<sup>325</sup> Por ejemplo, las visitas rituales a lugares resignificados como sagrados, juegan en este sentido un nuevo rol en la comunidad indígena orientada por los postulados del Cabildo. Para el caso de la zona de Altamira los mayores y los líderes identificaron tres lagunas continuas en la parte alta en dirección a Cerro Tijeras que fueron reconocidas por el T'wala de la zona como un sitio sagrado a finales de 2014 e inicios de 2015. Desde ese momento en el lugar se cumplen todos los rituales de limpieza que antes debían realizarse en territorios de otros Cabildos o Resguardos. “No puede haber, por tanto, un simple ‘retorno’ o ‘recuperación’ del pasado ancestral que no es experimentado a través de las categorías del presente’ (Hall1996c:448)” Se trata entonces de una “‘producción’ de tradición, memoria, pasado y locaciones sociales porque el pasado no está esperando a ser ‘descubierto’, así como la memoria social o la tradición no son pura y simple continuidad desde tiempos inmemoriales” (Restrepo 2004: 61)

<sup>326</sup> “(...) las identidades siempre se superponen, contrastan u oponen entre ellas. Antes que unificadas y singulares las identidades son ‘múltiplemente construidas a lo largo de diferentes, a menudo yuxtapuestos y antagónicos, discursos, prácticas y posiciones’ (Hall 1996e:4) En consecuencia, las identidades no son totalidades puras o encerradas sino que se encuentran abiertas, expuestas y definidas por esas contradictorias intercesiones. Más aún (...) son troqueladas a través de la confluencia y contraposición de las diferentes locaciones sociales en las cuales está inscrito cada individuo (Hall

pueden debilitar o impedir la apropiación del “esquema interpretativo” y su participación en las organizaciones. En efecto, esos fenómenos promovidos por los agentes contrarios “compiten”/“conviven” en la orientación de decisiones particulares/colectivas que ordenan las dinámicas socioeconómicas de los pobladores bajo otros imaginarios, por ejemplo<sup>327</sup>.

Desde nuestro punto de vista, lo que algunos líderes enuncian con preocupación como “la falta de consciencia de las bases” responde a la dificultad que implica este proceso de reconfiguración política y social en las representaciones, relaciones organizativas y en la acción social. Al escuchar diversas opiniones de miembros del Consejo Comunitario en reuniones y conversaciones, me he hecho la idea de que existe una mayor cristalización de esta nueva “consciencia” política en el sector de Yolombó y Gelima. Esta zona del territorio afrodescendiente ha aportado con varios de los líderes más insistentes y sistemáticos en el proceso. Mis observaciones indican que una mayor receptividad de las orientaciones dadas por los líderes del Consejo Comunitario se presenta entre los pobladores de esas veredas<sup>328</sup>.

---

1997b:57). De esta manera los individuos portan al mismo tiempo múltiples y contradictorias identidades.” (Restrepo 2004: 59)

<sup>327</sup> Los imaginarios y representaciones más o menos contradictorias con determinados postulados del “esquema interpretativo” y la dinámica organizativa, no se restringen a los que se vehiculan en esos *fenómenos*. Pueden ser la no identidad ni solidaridad con la causa indígena, por ejemplo, por motivos de prejuicios “raciales”, una identidad campesina específica contrapuesta a la indígena, la individualización extrema de los intereses vistos como propios, una percepción de la participación en el Consejo como una actividad no productiva o particular de unos pocos, o la idea de que no hay necesidad de organizarse porque no hay ninguna amenaza real. La “incompatibilidad” es relativa y contextual. Por ejemplo, al mismo tiempo que el *fenómeno* del cultivo y procesamiento de la coca compiten con las dinámicas e imaginarios promovidos por el Cabildo, también *conviven*, siendo en este caso una opción económica para muchos de sus miembros. La transformación de determinadas condiciones de subsistencia contribuye en parte a que las personas tengan criterios más flexibles y prácticos frente a la decisión de cultivar la planta, a pesar de los llamados frecuentemente realizados en asambleas del Cabildo explicando los problemas sociales que crea el narcotráfico en el territorio. Algunas de esas realidades son: la clausura del tren que permitía transportar mercancía en buenas cantidades de forma económica no solo a Cali si no a Piendamó y Popayán, la crisis del café en los 70’s, el cambio en el microclima que afecta los cultivos, en general la crisis de la agricultura por la imposibilidad de competir en el mercado de Suárez o Cali con los precios de alimentos traídos de otras partes. En el 2011 y 2012 el Cabildo se enfocó en cambiar los cultivos de coca a café, sin embargo, los precios siguieron desfavorables por lo que muchos retornaron a la coca. En el último periodo, nuevamente, una de las banderas que viene impulsando el sector de Altamira es la erradicación de los chongos –laboratorios- en su zona y el tránsito progresivo hacia el cultivo de lulo. Mientras dialogamos sobre apartes de este subcapítulo y esta cita (15 marzo 2015), Meraldiño señala que esa política es la materialización de lo que veníamos discutiendo: el control territorial, ese control gradual y sistemático para cambiar las circunstancias en el territorio y sus dinámicas sociales. Parte de esa política ha consistido en cerrar los permisos de alquiler de tierras para instalar ‘chongos’, desde los mismos comuneros, orientados por la decisión tomada colectivamente en una asamblea en la que se rechazó colectivamente esta actividad. Los líderes del Cabildo se encargan de hacer cumplir el acuerdo y de buscar propuestas productivas para frenar este *fenómeno* que ha terminado socavando incluso la legitimidad de algunos líderes comunitarios.

<sup>328</sup> Esta es la zona que principalmente se movilizó para impedir la desviación del río Ovejas por su cercanía y relación con este afluente. Como hemos señalado antes, la lucha en el tema minero se nutre en un momento dado de la dirigencia de esa previa lucha por el río, expresaba Simón al respecto “Entonces lo que le pasaba era que nosotros veníamos de la pelea de la desviación del río Ovejas [Gustavo, Camila, Simón, Tomás] (...) Tomás y los otros líderes venían de la pelea del río Ovejas, y Gustavo y Camila, ellos de minería no (...) entonces yo les dije: ‘acá la pelea no es Ovejas, aquí la pelea es minera’” (Entrevista con Simón Rodríguez abril 2014)



La cabecera del corregimiento, la vereda La Toma, es la que parece menos receptiva, según me comenta Tomás (Diario de campo 7 abril 2013) mientras conversamos y a continuación resalta que, a pesar de esa realidad, se ha contado con el aporte decidido de varios líderes de aquella vereda que han sido de gran importancia. Considero que esa situación puede radicar, al menos en parte, en un menor nivel de incorporación del imaginario organizativo de Consejo Comunitario como autoridad. La reducida participación de los mineros de esta zona en encuentros y acciones relacionadas, incluso, con la defensa de su lugar como mineros ancestrales<sup>329</sup> es ejemplo de una de las realidades que me han llevado a esta reflexión. “Uno aprende de experiencias, la otra vez cuando venimos (Sic) aquí en el tema del desalojo que estuvimos aquí, era más la gente de Buenos Aires, de la montaña [indígenas y negros del occidente], de Yolombó que los mismos tomeños, entonces, a mí me parece que de eso quedó una reflexión”, expresaba Simón dirigiéndose a los mineros de la vereda La Toma (Diario de Campo segunda reunión de mineros en la vereda La Toma, 15 de abril 2013). El menor apoyo de esa vereda ha llevado a que la relación entre Yolombó/Gelima por un lado y La Toma por otro, llegue a niveles de fuerte tensión<sup>330</sup>,

Ustedes que se están lucrando de su mina no van, entonces nunca se van a enterar realmente qué está pasando, entonces, eso pasa en La Toma, (...) mire nosotros defendemos lo de los títulos, y finalmente los títulos, ninguno de nosotros de aquí de Yolombó tenemos mina en La Toma (...) a mí me alegra mucho que se hayan reunido y que por lo menos entre ellos se hayan podido decir algunas cosas que hace tiempo queríamos que las dijeran (...) eso para nosotros es oportuno, porque nos sentimos tan cansados a veces, no sentimos tan saturados de cosas que en algún momento llegamos a pensar que si la gente de La Toma, de la cabecera del corregimiento no se movilizaba, llegamos a pensar en crear otro Consejo Comunitario (...) los comentarios de alguna manera alcanzaron a salir a flote, y algunos se pellizcaron (...) pero pues en ningún momento uno quisiera pensar dividir el territorio porque es más fácil que lo fraccionen o que, si lo fraccionaran es más fácil que puedan

---

<sup>329</sup> Lo pude observar en la primera reunión de mineros de la vereda de La Toma el 8 de abril de 2013, se hacen varios llamados a los “dueños de boca mina” por su inasistencia a las reuniones y acciones colectivas durante los últimos años, en los que la situación ha sido crítica, a pesar de ser afectados o potencialmente afectados. También en la segunda reunión del 15 de abril de 2013 se vuelve a tocar el tema explicitado por algunos de los mineros de esa misma vereda, decía uno: “aquí no hay uno de los que están aquí, que no trabaja la minería (...) nos gusta la minería pero no nos paramos en la raya para defender el derecho que tenemos como mineros y defender ese patrimonio minero que tenemos en La Toma.”

<sup>330</sup> No olvidemos la fuerza centrífuga de Friedberg (1997), para quien siempre es posible la “implosión” de toda organización social.

permeabilizar el territorio pero cuando uno a veces no tiene quien lo ayude uno piensa tantas cosas que finalmente puede tomar la peor decisión ( Diario de Campo Abril 2013, conversación con líder de Yolombó).

En el caso del Cabildo, la contradicción interna histórica se manifiesta entre dos zonas de la parcialidad, que se expresa en dos “sectores” diferentes de líderes dentro de la organización. División a la que los cabildantes le atribuyen diversas causas, desde la persistencia de las contradicciones bipartidistas<sup>331</sup>, la dificultad por el carácter de algunos líderes comunitarios, la falta de comunicación interna, entre otras,

“La falta de unidad entre la comunidad de Agua Clara y Altamira es debido a la distancia. (...) Se ha malinterpretado que el cabildo es solo el gobernador y por discusiones y malos entendidos han pasado de ser personales de que trasciendan a la comunidad (Sic). –El carácter del gobernador también ha sido un aspecto para que en algunas ocasiones hayan discusiones y divisiones porque no se deja aconsejar”<sup>332</sup>

La división interna del Cabildo ha llegado a momentos álgidos durante los últimos dos años cuando algunos miembros plantearon la posibilidad de dividirse creando otra organización étnica para tener un gobierno autónomo en cada zona, sin embargo la propuesta no fue respaldada por los comuneros asistentes a las dos asambleas del Cabildo realizadas en las dos zonas implicadas en 2012<sup>333</sup>. A finales del 2014 la propuesta de división resurgió pero finalmente se ha mantenido formalmente unificada la organización en toda la parcialidad.

Además del desafío frente a la orientación de los miembros efectivos y sus divisiones internas, la relación con organizaciones “externas” puede tomar formas muy diferentes

---

<sup>331</sup> “Ha habido divisiones [internas] por conceptos políticos entonces mucha gente todavía tiene sembrado el liberalismo y el conserva, la lucha de colores, de partidos. Entonces no han entendido, o no entienden todavía la claridad política que tiene el movimiento indígena y eso ha sido lesivo para la comunidad.” (Entrevista con Enrique Güetio octubre 2014)

<sup>332</sup> Relatoría: Asamblea general. 10 y 11 de febrero -2012 Informe general de la directiva 2011 y Elección del gabinete 2012. Vereda La Chorrera, Suárez-Cauca. En la comisión No 1 Relatoría por Stella Chavez (Sic).

<sup>333</sup> “Se hizo un análisis sobre la propuesta de dividir el territorio, se escuchó a las comunidades en temas como, el nombre del cabildo, las propiedades y la parte jurídica. Se procedió a debatir en comisiones para llegar a un acuerdo si se quería la división o no, dando a conocer que no era conveniente la división de la organización (...) Las comunidades de los corregimientos de Robles y Betulia no quieren la división. La organización debe seguir unida, que haya diálogo y concertación entre las autoridades.” “Las comunidades del corregimiento de agua clara, digieron (Sic) no a la división, y que ambos sectores trabajen bajo el principio de unidad, en pro del desarrollo de los diferentes procesos que se direccionan dentro del territorio. (...) Que se revisen los criterios y perfiles de los aspirantes, para nuevas directivas para que no se presenten estas dificultades y conflictos de poder (...)” Acta de posesión (Sic) 18 de enero de 2013. Finca La Alejandría. La potencial división no se puede delimitar solo por zonas territoriales ya que hay veredas en Agua Clara que respaldan fuertemente líderes de Altamira, así como hay líderes que están cercanos a Altamira geográficamente que apoyan de forma variable líderes de una y otra zona.

según las realidades específicas en las que se opera. La relación de las organizaciones étnicas con las Juntas de Acción Comunal<sup>334</sup> refleja en parte esta diferencia en los contextos y en las historias. Las JAC han servido como soporte inicial del trabajo comunitario para varios de los líderes étnicos. La tradición organizativa de los mayores negros ha estado ligada a las JAC, y su forma organizativa permea actualmente muchos Consejos Comunitarios, que al parecer son asumidos por aquellos como herramientas similares. Algunos atribuyen esto a la novedad de esta última forma organizativa que al parecer aún no es enteramente apropiada<sup>335</sup>,

Los Consejos Comunitarios acá, para mí son jóvenes, sí, entonces son muy, somos muy jóvenes (...) nosotros, todavía no ha (Sic) alcanzado a mirar el alcance de los Consejos Comunitarios (...) la autoridad máxima es el Consejo Comunitario porque [en] la Junta de Acción Comunal los dirigentes son la gente de los Consejos Comunitarios, entonces aquí no nos ponemos a peliar (Sic) por si es Consejo Comunitario o Junta, no, (...) se trabaja en una cuestión articulada, entonces nosotros en la, para empoderar a una organización de base, porque habían muchas organizaciones de comunidades negras, habíamos 5 organizaciones de comunidades negras, sí, y adoptamos por constituirnos en Consejo Comunitario [de La Toma] expresaba Simón (Reunión de la Asociación de Consejos C. del Mpio de Suárez en la cabecera el 15 de Abril de 2013, participaron delegados del PCN Nal y de ASCONC)

La intervención de Simón en esta reunión fue de gran importancia porque me permitió comprender que el proceso afrodescendiente ha debido esforzarse en dotar de un nuevo sentido y discurso político la figura del Consejo Comunitario, para materializar el alcance político y jurídico que le dio la Ley 70: autoridad étnica que ejerce gobierno propio<sup>336</sup>. En

---

<sup>334</sup> En la historia reciente –fueron creadas en 1958 (Ararat *et al* 2013: 253)–, las Juntas de Acción Comunal han sido un factor para vehicular la acción y dirección institucional estatal, un referente para la ordenación interna de las relaciones comunitarias y la canalización de la participación local en la administración pública. También han sido un epicentro para el manejo de relaciones clientelares entre sectores políticos y comunidades (Ararat *et al* 2013: 253). En Suárez hay 60 Juntas de Acción Comunal – JAC- (Rurales: 46 Urbanas: 14) (PDM Suárez 2012: 86)

<sup>335</sup> “El ejercicio de reivindicación de derechos étnicos es nuevo, por lo menos para la gente negra es nuevo, tiene, seguramente ustedes dirán, 20 años como la ley” le decía Henry Tenorio dirigente del PCN Nacional a los líderes negros de Suárez. Reunión de la Asociación de Consejos Comunitarios del Municipio de Suárez-Cauca en la cabecera municipal el 15 de Abril de 2013, que contó con participación de delegados de PCN nacional y otras Asociaciones Negras regionales, en adelante citada como (Reunión ASCONC, 15 abril 2013)

<sup>336</sup> “El Consejo Comunitario de La Toma parece, o pareciera ser una Alcaldía, porque nosotros, mientras que nosotros estamos aquí hay unos compañeros que están sentados en este momenticos con él, el Ministro de Agricultura ¿sí? Con el Ministro de Agricultura porque se van a debatir temas importantes como es el Proyecto Plan, la inversión que tien, que va a hacer el Departamento del Cauca, la Nación, ¿sí? Hay otros compañeros que están haciendo la parte de visibilización a nivel de Bogotá, entonces en ese sentido eso es lo que nosotros queremos de todos los Consejos Comunitarios ¿sí? Que nosotros como Consejos Comunitarios podamos, podamos hacer una cosa que para nosotros es el gobierno propio, y que

otras situaciones durante el trabajo de campo identificaba ese trabajo de formación que es impulsado especialmente por el PCN y algunos líderes afrosuareños. En una de mis últimas visitas a Yolombó (5 marzo 2015) Tomás informaba a José Antonio, Gustavo y Daniel que habían definido que se apoyaría un dinamizador para fortalecer la dinámica organizativa de los Consejos Comunitarios en el municipio, ya que en algunas partes estaban un poco débiles<sup>337</sup>. Explicaba que lo central era formar e informar sobre lo que era un Consejo y todo lo relacionado con estos procesos. De lo anterior podría pensarse que aunque la forma organizativa de los Consejos Comunitarios viene siendo apropiada, aún son fuertes otras formas como las JAC en estas comunidades. Consolidarles es una tarea de peso, pues tiene una potencia que otras formas organizativas no, por su posibilidad de autonomía en el direccionamiento consciente de sus espacios de vida.

Por su lado, también algunos líderes indígenas mayores y jóvenes, como el mismo Meraldiño, iniciaron en las JAC. A diferencia de las organizaciones negras, en la zona occidental la posición de quienes componen las JAC frente al Cabildo parece ser más heterogénea y en algunos momentos ha tendido a ser contraria o distante. El Cabildo apunta a permearles<sup>338</sup>, pero según Meraldiño, la fuerte vinculación con la Alcaldía y las redes clientelares de los partidos han marcado una distancia y en momentos dados ha generado conflictos. La preocupación queda plasmada en una reunión interna de cabildantes: “Don Eliecer dice cuando apoyamos al cabildo debe ser en el campo y en el pueblo, no ser de doble personalidad. Bladimir dice que hay presidentes que está a favor de la organización, pero otros no, entonces se deben buscar Líderes que apoyen y ayuden a la organización”<sup>339</sup>. Parece haber mayor “continuidad” entre los líderes de los Consejos Comunitarios y las JAC de sus zonas –sin decir que no haya o pueda haber contradicciones–, posiblemente las dos

---

las políticas nuestras, eh, obedezcan a esa Asociación de Consejos Comunitarios aquí en Suárez, que aquí dice 6 Consejos Comunitarios, yo creo que hoy ya estamos por el lado de 8 (...)” expresa Simón sobre la experiencia del Consejo Comunitario de La Toma (Reunión ASCONC, 15 abril 2013).

<sup>337</sup> En aquel encuentro en la cabecera Simón manifestaba ante todos los delegados de los Consejos del municipio esa preocupación permanente sobre la estructura organizativa del proceso negro en Suárez: “Porque yo sí sé que al interior de los Consejos Comunitarios la gente no sabe qué es un Consejo Comunitario, la gente no sabe, y si la gente no sabe qué es un Consejo Comunitario, no tenemos conocimiento de lo que es nuestro derecho” (Reunión ASCONC, 15 abril 2013)

<sup>338</sup> Convocatoria dirigida a los Presidentes de Juntas de Acción Comunal de la Parcialidad Cabildo Cerro Tijeras: Asamblea por la dignidad, la vida y la pervivencia en el territorio en contra de las multinacionales y de las leyes impuestas, Altamira, abril 11 de 2011. Esta asamblea “(...) se enmarca dentro de la estrategia política y social del Cabildo de Cerro Tijeras de Suárez Cauca, bajo la perspectiva de aunar esfuerzos entre las diferentes organizaciones (...) en la defensa irrestricta de la región de sus más principales amenazas (...)”.

<sup>339</sup> Reunión del Cabildo Cerro Tijeras en la finca Alejandría, 10 de diciembre del 2010.

formas organizativas tengan una tendencia a ‘superponerse’ en las comunidades negras, sin decir que se fusionen completamente, ni se asimilen<sup>340</sup>.

Hemos observado que entre los líderes del Cabildo parece prevalecer una mirada más “exterior” de las JAC, como entes independientes que eventualmente hay que acercar y donde puede haber elementos del proceso indígena o cercanos.

Algunos rasgos generales de cada una de las poblaciones que habitan uno y otro territorio pueden darnos pistas para comprender en parte estas diferencias. En el caso del Consejo Comunitario de La Toma, el territorio que está reconfigurando desde su estrategia política, se caracteriza por ser un espacio geográfico “pequeño” a comparación del comprendido por el Cabildo Indígena. Con 4.084 Has distribuidas en 7 veredas, representa el 10,5% del tamaño del municipio<sup>341</sup> y concentra una población (51,9 Hab/km<sup>2</sup> de los más densos) que es también menos “heterogénea”<sup>342</sup> frente a esa zona indígena/mestiza. Las relaciones comunitarias están fuertemente ligadas a los vínculos familiares que se entrelazan de forma bastante intrincada desde lejanas épocas en el pasado, siglos, lo que genera dinámicas muy fuertes de intercambio sociocomunitario y económico, a través de lazos en torno al trabajo y la familia. La identificación étnico-racial<sup>343</sup> parece ser bastante más definida y delimitada en esa zona. La Toma es considerada por sus habitantes y por los de otras partes del municipios, casi que sin excepción, como un corregimiento de población afrodescendiente. El censo desarrollado por los profesores universitarios, estudiantes y algunos líderes, se

---

<sup>340</sup> Hay coyunturas en las que han tomado posición unificada como en el momento del accidente de la mina a cielo abierto en CasaMáquinas, donde perdieron la vida 21 mineras y mineros, y a propósito del cual emitieron su comunicado público conjuntamente las organizaciones étnicas locales, regionales y nacionales, con las JAC y otras formas organizativas de las poblaciones negras de Suárez.

<sup>341</sup> Según el Plan de Desarrollo del Municipio son 5 veredas en el corregimiento (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015). Sin embargo, el trabajo de censo realizado por profesores y estudiantes de la UniCauca habla de 7 veredas (Ararat *et al* 2013)

<sup>342</sup> Por ejemplo, parece mucho más frecuente la migración de pobladores hacia fuera del corregimiento (42% de hogares censados reportan migrantes permanentes según Ararat *et al* 2013; 347), que la inmigración, y en los momentos en los que han llegado grupos de paisas mineros las organizaciones comunitarias, entre esas el Consejo, han determinado la regulación de esta inmigración. Claro, esa reacción no ha sido inmediata ni espontánea y parece haber implicado muchas situaciones y procesos internos, por eso actualmente hay también algunos mineros paisas en La Toma.

<sup>343</sup> Consideremos el autorreconocimiento étnico para Suárez. Según el Censo General de 2005, de 19.002 personas censadas en el municipio (4.480 en la cabecera y 14.522 en el resto), el 58,1% se auto reconocía como afrocolombiano, afrodescendiente, negro o mulato, y el 21,2% lo hacía como indígena (0% para raizal, palenquero o room). Lo anterior indica que hay un 20,7% de personas que no se auto reconocieron en ninguna de estas pertenencias étnicas. Aunque esta realidad puede haber variado, principalmente a causa del desplazamiento hacia el municipio y de los procesos de organización social étnica, es una información útil como referente. (DANE 2005)

enfocó en los miembros de la organización étnica presentes durante esos días en el territorio, según me explicó Gustavo Zapata. Fueron encuestadas 1.522 personas. Él calcula que son unas 3.000 las personas las que permanecen más estables en el corregimiento, lo que indicaría que aproximadamente unos 1.500 habitantes no hacen parte de la organización o no fueron registradas directamente como tal. El líder también me aclara que, debido a que muchos tomeños se desplazan por periodos a ciudades como Cali, ellos suponen que la cantidad de miembros efectivos puede ser mucho mayor. Esas personas fluctuantes pueden llegar a ser unas 3.000 según el mismo Gustavo, sin embargo, esta información debe ser verificada con más detalle en el censo nacional. Por el momento sabemos con certeza que de las 1.522 personas el 81,1% se reconocen como afrodescendiente, afrocolombiano, mulato o negro (Ararat *et al*; 352)<sup>344</sup>.

El Cabildo Indígena de Cerro Tijeras se enfrenta a una realidad algo diferente. Los indígenas de la organización comparten el territorio con una gran cantidad de personas que no participan en ella, de los que la gran mayoría parece no identificarse racialmente como indígenas. Sus miembros formales (3.104 personas agrupadas en 1.218 familias para 2010) se reparten en 37 veredas distribuidas en cinco de los ocho corregimientos de Suárez, que suman el 64,9% de las 38.987 Has totales del municipio (PDM Suárez 2012: 20)<sup>345</sup>. Este amplio territorio, bastante accidentado geográficamente hablando, ha sido poblado progresivamente desde finales de los años 20's y los 30's en adelante, época en la que llegaron las primeras migraciones masivas de colonos indígenas y campesinos. La población ubicada en esas 37 veredas es menos “homogénea”, característica que se ha acentuado gracias a las recientes oleadas de personas desplazadas que han llegado en la última década, especialmente a esta zona occidental del municipio, provenientes de Nariño,

---

<sup>344</sup> “Este aspecto revela los procesos por los cuales ha pasado la población, que ha permitido adquirir un discurso propio sobre la identidad en la que lo negro y lo afro es afirmado. Este reconocimiento se debe en parte al trabajo que lideran los concejos (...)”(Ararat *et al* 2013: 352)

<sup>345</sup> La distribución de los cabildantes según la Resolución 00155 de 2010 es Los Robles: 982 personas agrupadas en 448 familias, de este corregimiento fue creado el de Bella Vista en años recientes; Betulia: 363 personas agrupadas en 179 familias, en estos tres corregimientos –noroccidente– se ubica el 43,3% de los afiliados y es el 59,3% del tamaño total del municipio su densidad de habitantes oscila entre 18 y 25 Hab/km<sup>2</sup> (PDM Suárez 2012: 20); corregimiento de Aguaclara –suroccidente– concentra el 55,8% de los cabildantes y es el 20,9% del tamaño total de Suárez con 24 Hab/km<sup>2</sup>: 1.732 personas agrupadas en 577 familias; La Meseta: 27 personas agrupadas en 14 familias, este corregimiento es habitado principalmente por familias afrodescendiente y mestizas, siendo los indígenas una pequeña minoría.

Caquetá, Putumayo, Cauca<sup>346</sup>.

En los dos procesos he identificado una ambivalencia relacionada con el territorio. En el trabajo de campo y algunos documentos he reconocido que se tiende a identificar el territorio como rasgo característico y definitorio de las dos organizaciones étnicas. Sin embargo, aunque estas intentan representar la mayor cantidad de población que lo habita, no todas esas personas adhieren a sus propósitos, lo que debilita esa identificación con la imagen de un territorio completamente propio. Es una contraposición entre lo que define estas comunidades étnicas y por ende su forma organizativa –su relación con el entorno que habitan y la territorialidad-, y la realidad concreta. Esa realidad observada vuelve a remitirnos a esta reflexión: consolidar un territorio como propio y legítimamente gobernado es un duro proceso, incluso entre quienes se reconocen como miembros de aquellas comunidades.

Para el Consejo Comunitario de La Toma pareciera menos difícil caracterizarse/identificarse con el territorio como un conjunto –un globo-, por las características e historia de la comunidad que ahí habita. Es decir, según mi percepción, esta organización afirma con menos potenciales cuestionamientos que el Consejo *es* el corregimiento y la población que ahí reside, aunque cristalizar esa afirmación sea una “lucha” permanente. Para el Cabildo Indígena esta afirmación se complejiza, y su referencia a un territorio –a “globo de territorio” como decía Meraldiño- como definición de la organización o de su pertenencia a ésta, es mucho menos fácil. El establecimiento del cultivo masivo de coca para uso ilícito y laboratorios de procesamiento –2004 en adelante aproximadamente-, y de personas vinculadas a esa actividad complejiza aún más el contexto de la organización indígena.

---

<sup>346</sup> Por ejemplo tan solo para el año 2012 los “municipios de llegada de mayor número de personas desplazadas (...) los 5 principales destinos fueron: Medellín (37.938 personas), Bogotá (31.648 personas), Cali (9.624 personas), Pasto (9.224 personas), Suárez (6.854 personas) y Buenaventura (6.198 personas). Un municipio como Suárez, que según los datos del DANE contaría para el 2012 apenas con un total de 18.809 habitantes vio llegar en este año, una población equivalente al 36% de su población total.” En términos de “la tasa de afectación relativa -medida en términos de total de desplazados llegados en proporción a 100.000 habitantes-” está Suárez de primero con “36.440 personas desplazadas por cada 100.000 habitantes.” (Codhes 2013: 16) En específico sobre la población indígena desplazada en 2012, al menos 18.154 personas en el país, Suárez fue la segunda ciudad de llegada con 2.286 después de Tumaco con 2.364 personas (Codhes 2013: 23). Y para la afrocolombiana también en el mismo año, de por lo menos 51.938 personas, Suárez recibió aproximadamente 1.578 siendo la séptima ciudad de llegada de afrocolombianos desplazados después de Cali. Lo que indica que de las 6.854 personas llegadas 2.990 no eran ni afrodescendientes ni indígenas.

#### **4.2. Proceso de Titulación Colectiva**

Ya hemos explorado cómo la posibilidad de control social/territorial es siempre variable e “imperfecta”. La legitimidad y la movilización, y en general la acción organizada, permite, en determinados casos, dirimir situaciones concretas en favor de las organizaciones étnicas. Sin embargo, y aunque esta dimensión es siempre una base indispensable para la vida y acción política de éstas, en muchos otros casos la posibilidad de incidencia en decisiones y procesos institucionales ha sido posible gracias al manejo de lo jurídico y a la presión política ejercida por algunos de los líderes locales u otros actores externos.

En el ‘mejor de los casos’, aun suponiendo un respaldo de las amplias mayorías a las orientaciones de las organizaciones étnicas y una masiva participación en las acciones de defensa del territorio, continúa vigente la posibilidad de una imposición coactiva de intereses ajenos –como megaproyectos mineros-, con base en la soberanía del Estado-Nación.

De ahí la especial atención que aquellos líderes conceden a esas otras herramientas que permiten edificar unas mínimas garantías jurídicas y políticas que soporten sus intereses. Algunas les han permitido detener ‘temporalmente’ o ‘enredar’ parcialmente esos procedimientos institucionales y proyectos económicos. Es el caso de la Consulta Previa para el Consejo Comunitario al lograr que fuera ordenada para los trámites mineros por la Sentencia T-1045A. Durante mi relación con esa organización étnica he percibido que ese mecanismo es visto por sus líderes como una contundente herramienta política que permite empoderar y hacer valer la posición de la comunidad, incluso a pesar de no ser vinculante. Es probable que esto se deba en parte a su experiencia de finales de los 90’s cuando después del proceso de Consulta el proyecto DROES fue archivado durante algunos años. Este mecanismo y otras figuras, podríamos decir que son, al mismo tiempo, considerados como ‘imperfectos’ desde el punto de vista de la defensa territorial enarbolada y no representan una solución radical o tajante, según veremos más adelante en el caso de los líderes del Cabildo Indígena. No obstante, desde nuestra lectura, la Consulta en especial es un medio que sirve para modificar las condiciones específicas en las que cada actor opera y los recursos concretos con los que cada uno cuenta, replanteando las relaciones de poder y,



por lo tanto, cambiando el panorama de oportunidades que se avizoraba antes de su aplicación. Consideramos que puede ser, según la posibilidad de direccionamiento de las organizaciones étnicas, tanto un proceso de consolidación como de desestabilización política para el proyecto de territorialidad local.

La titulación colectiva de los territorios ha sido vista por los líderes del Consejo Comunitario como la estrategia más sólida, que puede generar las mayores garantías a su permanencia. Para el Cabildo, constituirse como Resguardo sería su equivalente, declarando la parcialidad como tierras colectivas. Sin embargo, en este caso varios de los líderes que han impulsado ese proceso parecen dudar profundamente de las reales garantías que esa figura representa para su protección, a otros les observo más positivos frente a la medida. Para el marco institucional/jurídico étnico, titular colectivamente y constituir Resguardos es un objetivo supuesto para las tierras en que viven las comunidades negras o indígenas, y su logro representaría el mayor nivel de garantía para la permanencia y pervivencia de éstas como pueblos ligados de forma específica al territorio.

Diez años después de haberse formalizado como “autoridades étnicas”, tanto el Cabildo como el Consejo Comunitario se encuentran en ese esfuerzo que debe sortear múltiples obstáculos “internos” y “externos”. En este caso, lograrlo se relaciona de nuevo, y especialmente, con la incorporación de los “esquemas interpretativos”, la confianza en la organización y las necesidades concretas en el conflicto. La cohesión “interna” vuelve a jugar, dado que titular colectivamente depende en gran parte de la voluntad de cada miembro.

Durante la conversación<sup>347</sup> con Daniel, José Antonio, Julián, Gustavo, Lorenzo y Vanessa, les pregunto ¿qué ha sido lo más difícil en el proceso de titulación colectiva? Gustavo toma la palabra para rememorar la forma en que funcionarios del gobierno intentaron legalizar las tierras como si fueran baldíos entregados a campesinos. Hace unos años –aproximadamente entre el 2008 y 2009- el Incoder hizo presencia en el corregimiento de La Toma para hacer el procedimiento de titulación de baldíos, pero “se desaparecieron (...) luego la gente

---

<sup>347</sup> Reunión domingo 8 de marzo de 2015, desde las 11:20 am me encontraba reunida con Daniel, José Antonio y Lorenzo, pero a partir de la 1:30 pm se sumaron Julián, Gustavo, Vanessa Hurtado, hasta las 3:30 pm. Los primeros y Vanessa conforman la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, Julián y Gustavo son dos líderes de Yolombó.

volvió a presionar para que entregaran las escrituras, supuestamente era una campaña del Incoder de legalización de predios, en un convenio con la Alcaldía” (Gustavo 8 de marzo 2015). En aquella ocasión, el Incoder manifestó que no había baldíos en La Toma.

Sin embargo, un día –tal parece durante el 2012, nuestro informante no recordaba con precisión-, los vecinos llamaron a Gustavo para informarle que “venían a entregar una escrituras”. El líder estaba en la cabecera de Suarez y se apresuró a llamar a la sede del Incoder en Bogotá para asegurarse de dónde venía esta orden. Después de confirmar que no era desde la capital, Gustavo y Camila Restrepo hicieron presencia en la reunión donde estaban entregando ya las escrituras e hicieron el reclamo a los delegados del Estado, dado que los títulos de propiedad estaban a nombre de “campesinos”: “una señora Murillo, funcionaria del Incoder, dijo que ‘aquí la gente quiere su escritura’ y que la gente decidía si eran negros o no”. Los líderes locales insistieron y al cabo de la discusión, la señora debió recoger todas las escrituras a la gente que las había recibido. Lograron detener el procedimiento a pesar de que incluso, como señala nuestro informante, otros líderes del Consejo Comunitario estaban de acuerdo con la entrega de las escrituras, desconociendo muy seguramente las implicaciones políticas que se derivarían de aquello. Gustavo nos explica “nosotros dijimos que no íbamos a impedir que entregaran las escrituras, pero si decía que era para negros y no dijera que era para campesinos”. En las escrituras decía literalmente que se entregaban baldíos a población campesina, por lo que la consecuencia legal sería anular el derecho a la Consulta Previa para todas las personas ahora catalogadas por “fuera” de la comunidad étnica: “el problema que tenían las escrituras era el término campesinos” nos repite con insistencia Gustavo.

Para completar lo extraño del acontecimiento, Gustavo aclara que no se trataba de todas las tierras del corregimiento, como yo había supuesto, sino que las escrituras se pretendían entregar a los habitantes de “solo un sector, de ‘la galería’ para abajo, donde está el título de Sarria”. El episodio parece haber tenido consecuencias institucionales pues según el líder “el director regional del Incoder, un señor Valencia lo echaron desde Bogotá”, a raíz de este suceso.

En el trabajo de campo realizado, en repetidas ocasiones he identificado que la respuesta favorable al proceso de titulación colectiva de las tierras parece ser mayor en dos veredas de la parte “baja”, Gelima y Yolombó, y menor en la parte “alta”, en la vereda La Toma<sup>348</sup> compuesta mayoritariamente de mineros artesanales de aluvión. Una de ellas fue la segunda reunión de mineros de esa última vereda. El delegado del PCN Nacional exponía el tema intentando contrarrestar el escepticismo, después de que unas 18 personas de más de 200 manifestaran estar dispuestas a traspasar su título individual a uno colectivo. Informa sobre varios beneficios, entre los que incluye la cancelación del pago de impuestos y la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra como base para las futuras generaciones<sup>349</sup>, debido a su carácter inembargable, imprescriptible e inalienable. Pero la motivación que inclina con más fuerza a los asistentes hacia la aceptación de la propuesta, según mi percepción, parece ser la presión de las concesiones y actores mineros foráneos,

Dentro de eso que queremos que nos titulen podemos incluir esos dos grandes títulos que hay, ¿sí ven la particularidad y sí vemos que se puede lograr bajo cierta figura? Entonces es lograr entrar en un ejercicio de adjudicación colectiva de estos predios va a blindar la actividad económica a la que se han dedicado por siglos, esta comunidad si no estoy mal ¿está desde 1635? Simón: no 1608, ya vamos en 1608 (...) Henry Tenorio: Entonces sí ven la importancia de ir avanzando a la par, ¿cómo una cosa nos puede ir garantizando otra? (...) se protege de que los quieran desalojar, se protege absolutamente de todo porque hay un marco jurídico que así lo establece, no se asusten por que diga ‘colectiva’, no sea que diga ‘entonces mi casa también le va a pertenecer a fulanito’, no. (Intervención de Henry Tenorio, Diario de Campo, reunión 15 abril 2013)

---

<sup>348</sup> Expresaba Gustavo sobre ese tema a unos mineros: “Acá hay ventaja, acá ya ha habido gente que ha entregado las escrituras, el proceso de nosotros de Gelima de ahí pa' (Sic) bajo ya comenzó, pero pa' (Sic) La Toma ¡no han entregado una!” Diario de Campo 13 de Abril de 2013, conversación con varios mineros.

<sup>349</sup> “No quiere decir que ustedes pierden la titularidad de lo que les corresponde (...) logran varios beneficios y el primero es que ese recibo [impuesto predial] no les vuelve a aparecer (...) si todo no puede ser bonito, puede que la única desventaja si lo quieren ver [así] que tiene el título colectivo es que ustedes no le pueden vender a nadie de afuera de la comunidad (...) [porque] es la protección de la identidad cultural de la comunidad, y segundo, porque en algún momento de la historia alguno de sus hijos, nietos, bisnietos (...) se puede encontrar en alguna situación que no tenga donde vivir y se acuerde de que su abuelo o su papa, por allá en el municipio de Suárez, corregimiento de la Toma (...) él pertenecía (...) por eso cuando los muchachos dicen que el Consejo Comunitario somos todos, es que somos todos, Consejo Comunitario no son los que siempre andan en la Junta de Gobierno en una reunión aquí acá (...) lo que dicen ‘mire ahí van los desocupados’ (risas de la asamblea), eso dicen, y dicen ‘les están pagando’ aquí nadie se gana un peso, pero miren toda la ventaja que tiene el poder organizarse de esta forma”. (Intervención de Henry Tenorio en la segunda reunión de mineros en La Toma, 15 de abril de 2013)

La titulación colectiva es considerada una base jurídica para la protección de esos intereses locales, a la vez que también es una oportunidad para los líderes de promover la visión de Gobierno Propio, de proyectarle a la comunidad la posibilidad de instituir y profundizar un poder local legítimo/legal, una autoridad que ordene el territorio y su población desde esos intereses<sup>350</sup>. Cuando comparto esta frase en la conversación con mis cinco interlocutores, habitantes de las veredas La Toma y Yolombó (8 de marzo de 2015), manifiestan su acuerdo, lo que me lleva a pensar que interpreta su ejercicio político. De igual forma, se identifican completamente con el postulado de que el problema con los títulos mineros y en general el conflicto en torno al oro es el motor principal de la colectivización de las tierras. Los otros beneficios como los económicos son acogidos con gran simpatía en la reunión, pero la problemática minera tiene un peso principal, es decir, mantener el control especialmente sobre la minería, y sus actividades productivas en general es el motivo de fondo. También permanecen dudas entre muchos mineros<sup>351</sup>, aunque los asistentes parecen inclinarse por la aceptación de la estrategia. El asesor jurídico de la Corporación Sembrar presente en el encuentro reafirma, desde la perspectiva del derecho minero, lo que ellos ya han comprobado: las posibilidades de formalización para los mineros tradicionales son muy pocas y en caso de lograrlo, mantener la legalidad se vuelve mucho más complejo<sup>352</sup>.

De nuevo en nuestra reunión en Yolombó (8 marzo 2015), pregunto sobre la menor acogida de la titulación colectiva ha tenido en la vereda La Toma y José Antonio afirma “hoy debido a la problemática la gente está diciendo que la única forma de defender es esa”. En una conversación anterior, Daniel y José Antonio me habían contado que algunos de esos

---

<sup>350</sup> “ejercer el gobierno propio es que ustedes digan, bueno, este es el Consejo Comunitario, en esta zona vamos a hacer minería, en esta zona de acá la vamos a establecer pa’ (Sic) cultivar algunas cosas que nos sirvan pa’ (Sic) comer, ¿sí? Y empiezan a hacer una distribución del uso del territorio.” (Intervención de Henry Tenorio en la segunda reunión de mineros en La Toma, 15 de abril de 2013)

<sup>351</sup> En la misma reunión un señor manifiesta por ejemplo que requiere de una aclaración “dicen que si entregan su título no pueden hacer un crédito.” Tenorio: “(...) sí es cierto, eso no hay que esconderlo (...) pero ustedes quieren saber ¿cuál fue el mecanismo que se utilizó en una época para quitarle la tierra a la gente? Y de hecho que todavía se utiliza, ustedes quieren saber ¿cómo la mayoría de la gente en la zona plana del norte del Cauca perdió los predios? Por eso nos tienen encerrados a punta de caña, exactamente por eso”. Luego explica que los Bancos “no le prestan porque no tiene a usted que quitarle, no tienen que embargarle” lo cual no es realmente malo. Simón resalta que hay mucha gente que ya tiene deudas impagables y que es necesario tener un paraguas, por lo que deben titular colectivamente cuánto antes.

<sup>352</sup> Para enero de 2015 la persecución a mineros tradicionales de filón persistía, y el sábado 14 de febrero, día que me encontraba en Yolombó, fueron capturados por la policía 4 mineros tradicionales de filón que se encontraban trabajando en una mina ubicada dentro del polígono Gelima del Área de Reserva Especial, fueron liberados el mismo día. Al mismo tiempo las retroexcavadoras ilegales siguen en el río Ovejas.

habitantes no querían el proceso de titulación. ¿Cuál ha sido el temor? Varios de los presentes me responden al tiempo. José Antonio expresa que aquellas personas decían “que cómo va a entregar el predio para que otros se apropien de eso”. Y, agrega, uno de los principales inconvenientes considerado por muchos es el de los préstamos bancarios. Enseguida Gustavo exclama “¡pero muy pocos utilizan eso acá!” y se queja porque hace mucho viene solicitando un préstamo que nunca le han aprobado los bancos. Julián también intenta explicarme “hay mucha gente que no ha concebido la dimensión del problema que tienen allá en La Toma”, yo complemento, intentando interpretarlo con otras palabras: “que no es consciente de lo que se les viene encima arriba con los problemas que hay” y Julián asiente “¡exacto!”. De nuevo se manifiesta en la conversación que “hay gente que aún no cree, inclusive, no creía en las amenazas”<sup>353</sup>.

José Antonio, Daniel y Lorenzo, habitantes de la parte alta, resaltan que los problemas con la minería han ido cambiando esa situación, la gente ha comprendido y apoyando cada vez más. ¿Más o menos a partir de qué año se ha fortalecido radicalmente ese apoyo en la parte alta? Les pregunto. José Antonio toma la palabra y nos dice “a partir de este año” (2015). En este último periodo es en el que realmente la gente ha adquirido mayor consciencia frente al proceso de titulación colectiva, “¡ahora que ya les tocaron el bolsillo!” exclama Daniel y aclara José Antonio “ahora que vieron que no les iban a comprar el oro”. Me informan que este año se ha expedido el Decreto 0276 del 17 de febrero de 2015 que reglamenta el mecanismo para el control de la comercialización de minerales ordenado por el artículo 112 del Plan Nacional de Desarrollo -ley 1450/2011-, el RUCOM, y deroga los expedidos anteriormente -Decreto 2637 de 2012, 705 de 2013 y 035 de 2014-. El decreto define en su Artículo 1º, como Explotadores Mineros Autorizados el “(i) Titular Minero en Etapa de Explotación, (ii) Solicitante de programas de legalización o de formalización minera, mientras se resuelvan dichas solicitudes (iii) Beneficiario de áreas de reservas

---

<sup>353</sup> Simón me explica que el último presupuesto que destinaron para la compra de tierras de comunidades negras del norte del Cauca se logró a partir de una toma de 10 días a las instalaciones del Incoder que decidieron realizar en noviembre de 2013 para exigir la inversión. La condición para la distribución fue por partes iguales para quienes participaron en la acción de hecho, dado que ni siquiera la mitad de los Consejos Comunitarios presentes en esa zona –son 36– se sumaron “los que no ayudó (Sic) a la toma en Incoder, no tiene parte (...) ahí fue que se lograron 30.000 millones de pesos. Porque cómo hubo Consejos Comunitarios que se quedaron en sus casas.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

especial, mientras se resuelvan dichas solicitudes, (iv) Subcontratistas de formalización minera, (v) Barequeros inscritos ante la alcaldía respectiva, y (vi) Chatarreros”. Con esto la ANM busca “tener control sobre su procedencia y poner freno a la extracción ilícita” a partir de la regulación del comercio.

Al mismo tiempo, los/as mineros/as del corregimiento de La Toma identifican que la norma no recoge los tipos de explotación que ellos practican, pues estas prácticas no se acoplan de forma rigurosa a las definiciones que se plantean en ella. Ya conocemos la situación frente a la titulación, la formalización, los pocos beneficiarios que abarca el ARE –Gelima, por lo que es fácil comprender que la gran mayoría de mineros del corregimiento parecieran tener la opción de registrarse como Barequeros. Sin embargo, esa definición no alcanza a interpretar la incorporación de medios mecánicos (motores) en la minería aluvial de veta explotada por tongas, en la de venero y las cobas, dado que esta “actividad popular” “se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos”. Los mineros locales insisten en que el barequero tendrá un tope de gramos en la comercialización del oro, aunque en el Decreto referenciado no se menciona este aspecto.

De acuerdo a lo expuesto por Simón en dos oportunidades, los sectores afrodescendientes están discutiendo la posibilidad de apostarle a una *categoría minera* diferente, que refleje su especificidad cultural, sin negar las adaptaciones propias de tecnologías incorporadas a lo largo del tiempo<sup>354</sup>. Esa categoría sería *minería ancestral*, un concepto que según el mismo Simón, las organizaciones afrodescendientes deben “llenar de contenido”, con el objetivo de caracterizar esas diferentes formas que ha cobrado las minerías en las comunidades negras que no puede ser reducida ni al Barequeo ni al Chatarreio. Desde el punto de vista de este líder, el gobierno debe reconocer esta especificidad en nuevas medidas normativas, de la misma forma como reconoció la categoría de Chatarrero, concepto “paisa”, surgido en círculos mineros de esa región para designar “la persona natural que se dedica a la actividad manual de recolección de mineral con contenido de metales preciosos presente en los desechos de las explotaciones mineras”.

---

<sup>354</sup> Referenció el tema en la reunión de socialización de la Marcha de Mujeres, el 16 marzo 2015 en Yolombó, en la cual le fue asignada la tarea de escribir un documento al respecto como Consejo Comunitario, y en el Foro del 23 de abril de 2015 en Popayán ante la pregunta del público sobre la caracterización de la categoría “minería ancestral”.

Especialmente a raíz de este hecho, en la vereda La Toma se ha asumido con fuerte interés el tema de los títulos colectivos, y durante este año se han realizado ya cuatro reuniones sobre el tema, enfatiza José Antonio. El presidente del Consejo Comunitario y Daniel expresan el gran respaldo que hoy tiene ese tema en su vereda: la opción más clara para defender su actividad minera y el territorio. Gustavo manifiesta que en el caso de Yolombó la gran mayoría de habitantes asumieron desde un comienzo el tema de la titulación así como muchos en Gelima.

En aquella reunión de mineros, registro otra estrategia paralela por medio de la que intentan incidir y crear oportunidades. El PCN informaba que venía adelantando el ejercicio de identificación de afectaciones territoriales en varias comunidades negras, entre las que se encuentra el Consejo Comunitario de La Toma, para posteriormente instaurar una demanda de restitución de derechos y de tierras. Todo en el marco del proceso de restitución de tierras, en este caso restitución étnica, con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras que en el mes de agosto de 2014 preparaba la demanda para este caso específico<sup>355</sup>. A partir de lo que explicaban en la reunión referenciada, interpreto que los líderes del PCN y del Consejo parecen ver este proceso como la posibilidad de disputar la derogación, o al menos la desestabilización de decisiones que han contribuido y contribuyen al despojo de los tomeños, como los títulos mineros de foráneos.

Gustavo ha estado encargado de llevar ese proceso por parte de la organización étnica. Nos explica a todos en la reunión de Yolombó (8 de marzo 2015) que lo que se viene realizando es una restitución de derechos que debía resultar en unas medidas cautelares, eso era “lo que se buscaba”. La medida cautelar fue emitida el mes pasado (febrero 2015), y se está a la espera de que el juez la aplique. Esto debe arrojar la modificación o ‘limpieza’ de lo que ha impedido el ejercicio de los derechos fundamentales y civiles en ese territorio, para que

---

<sup>355</sup> A abril de 2014, del municipio de Suárez se habían radicado 25 solicitudes que sumaban 563,46 Has en la URT-Territorial Cauca. (URT 2014a: 5). Y según noticia en la web oficial, el pasado agosto de 2014 “la Directora Territorial Cauca proyecta la demanda del Consejo Comunitario de La Toma, en Suárez, y además iniciará en las próximas semanas las caracterizaciones de los consejos comunitarios de El Patía y Santander de Quilichao.” (URT. Agosto 2014). En enero la URT anunciaba que iniciaría la caracterización con 9 consejos comunitarios y con aproximadamente 17 comunidades indígenas afectadas por desplazamiento forzado (URT. Enero 2014) y para marzo de este año se realizaba el proceso específicamente con el Consejo Comunitario de la Toma (URT. Marzo 2014)

sean restituidos. Gustavo me explica que deben ser revisados factores como por ejemplo la presencia de la Fuerza Pública, de las retroexcavadoras, de grupos armados ilegales, y todo lo que impida la libre movilidad. Ningún titular podría avanzar de ninguna forma actividad alguna en los títulos reforzando la Sentencia T-1045A. Pone en cuestión todo “lo que afecte la comunidad” enfatiza. Considero que la medida genera condiciones políticas para el reconocimiento de afectaciones que deben, al menos según el papel, modificarse y prevenirse. Por otro lado, lo que será su aplicación concreta es un elemento importante para conocer sus implicaciones más inmediatas y palpables.

En el caso del Cabildo, la decisión de constituirse como Resguardo ha estado motivada, en parte, por la posibilidad que representa de fortalecer económicamente los servicios sociales básicos como salud y educación propia. Pero, al igual que en el proceso de los afrotomeños, el factor que parece haberla precipitado es la necesidad de controlar jurídicamente el territorio y los recursos naturales para enfrentar los títulos mineros. El testimonio de Meraldiño y las reuniones asistidas me llevan a pensar que también en este caso, el conflicto minero serviría como detonante de la puesta en marcha de esa intención que subyacía al proceso de conformación del Cabildo<sup>356</sup>.

Desde finales de 2009, el Consejo Regional Indígena del Cauca incluye a Cerro Tijeras en el listado de comunidades priorizadas para ese tema ante la institucionalidad<sup>357</sup>. Para constituirlo, es necesaria la conversión de los predios de propiedad privada a titulación colectiva, por lo que la legitimidad de la organización ante los comuneros debe ser alta para que decidan donar sus fincas. Según Meraldiño, encargado de esa labor en aquel momento, fueron entregados “aproximadamente 300 documentos de predios” por los cabildantes en toda la parcialidad, de los cuales tan solo 56 predios de 46 comuneros contaban con

---

<sup>356</sup> “desde que nosotros empezamos a constituirnos como Cabildo, uno de los sueños de los, de los mayores que tenía como más visión (...) era llegar a constituir un Resguardo ¿Sí? Porque el Resguardo generaba recursos, bueno, y toda esa, toda esa, todo esa carretazo que, que es, pero que en últimas es hasta cierto. Pero que en últimas también divide y, y daña, corrompe corazones. Eee, la estrategia que hemos planteado, que se ha venido planteando desde allí era que, mirando el tema de la minería, ummm, la figura jurídica era proteger el territorio pero constituirnos en Resguardo ya que, desde el planteamiento de la constitución dice que los Resguardos son inalienables, imprescriptibles, inembargables.” (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

<sup>357</sup> Acta de acuerdo Noviembre 21 de 2009, Popayán, Cauca Sede Universidad Intercultural Indígena Nacional, UAIIN. p. 2



escrituras originales<sup>358</sup>. De esta forma, la gran mayoría de los predios donados son filtrados y, posteriormente, las dificultades jurídicas y financieras de las escrituras válidas impiden su donación. El concepto positivo del INCODER se redujo a tan solo 3 de los predios propiedad de cabildantes junto con 7 predios ubicados en el área de la parcialidad indígena de Cerro Tijeras cedidos por otros Cabildos<sup>359</sup>. Finalmente, la constitución del Resguardo se echó a andar con las 7 fincas cedidas por dos Cabildos Indígenas al de Cerro Tijeras, que suman 382 hectáreas y 6.190 metros en el corregimiento de la Betulia.

A estas dificultades se les suma un inconveniente adicional. El corregimiento de Betulia es incluido en la Resolución 5234-06-2009 del 24 de junio de 2009 “Por medio de la cual se declaran en riesgo inminente de desplazamiento forzado la población de algunos territorios del Departamento del Cauca”<sup>360</sup>, que ordenó “abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia, a cualquier título, de los predios rurales ubicados en las zona referida”. En respuesta a la medida administrativa, el mecanismo institucional de protección de tierras se activa y funcionarios estatales llegan directamente a las veredas para socializar el tema a comienzos de 2010. La Resolución fue considerada por muchos cabildantes como un

---

<sup>358</sup> Documento “Relación de predios para constitución y/o ampliación de resguardo”. Sin fecha. Archivos Cabildo Indígena de Cerro Tijeras. 14 se ubican en Unión Olivares, 12 de Agua Blanca, 9 en Matecaña, 7 en Altamira, 3 en Alejandría, 3 en San Pablo, 2 en Guadualito Los Robles, 2 en Santa Bárbara, 2 en Paraje Inguító, 1 en Damián, 1 en Los Robles y 1 en Bella Vista, y 1 sin información. “Se han presentado inconvenientes, establecer cuales (Sic) son las zonas baldías, ceder la propiedad privada y establecer la situación legal de esos títulos para hacer las cesiones, procesos de aclaración de áreas, predios comprados por el min interior con 10 años de impuestos adeudados y se requiere hacer un traspaso del cabildo de monchique los tigres al cabildo de cerro tijeras y hay un impedimento legal, pues los territorios de estos municipios fueron cobijados por una medida cautelar, sobre orden publico (Sic). (...) Desde julio del año 2011 se le ha solicitado al gobierno departamental que levante la medida cautelar de los territorios.” Explica Gustavo Cediel según el “Acta Proceso: Titulación Colectiva a Comunidades Indígenas, Negras y Campesinas.” Comité: Mesa de Tierras. INCODER. 17 de octubre de 2012. Concejo Municipal Suárez Cauca. Referencia en posteriores citas: (INCODER. 2012 Octubre 17)

<sup>359</sup> Aunque en el documento “Diagnóstico Constitución Cerro Tijeras. Sin fecha.” Archivos Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, aparecen solo 3 predios de Suárez con concepto positivo, Meraldiño asegura que eran 5 (2 en Altamira, 2 en Unión Olivares y 1 en Agua Clara). El líder no cuenta con información sobre las razones por las que finalmente no fueron incluidos en la constitución que se está llevando a cabo, desconoce la decisión o inconvenientes que debiera enfrentar el Gobernador del momento. Las fincas son del Cabildo Indígena Nasa Las Delicias que cede 5 fincas y del Cabildo Indígena Nasa Munchique -Los Tigres que cede 2 fincas al Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras, que habían sido comprados por el Ministerio del Interior para indemnizar “el pueblo Nasa del norte del Cauca por el caso Caloto o masacre del Nilo” en cumplimiento de las recomendaciones vinculantes del Informe No. 036 de 2000 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Concepto de pertinencia y autorización de levantamiento de medidas cautelares en los 7 bienes inmuebles que conforman el territorio del cabildo Cerro Tijeras, en el Municipio de Suárez (Cauca). Fechado a 15 de febrero de 2013, Popayán.

<sup>360</sup> “6. Que debido a graves alteraciones del orden público se han visto afectados por hechos violentos que atentan contra la vida, la integridad y los bienes patrimoniales, los habitantes de los municipios que a continuación se relacionan y en las zonas que se detallan, a saber:” Nombra algunos corregimientos de los municipios de Morales, Cajibío, Piendamó, Argelia y en Suárez: Aguacalara, Betulia y Los Robles. “7. Que como consecuencia de lo anterior, las poblaciones de estas zonas se encuentran en inminencia de desplazamiento forzado.”

ataque de parte de la Gobernación Departamental del Cauca. Manuel Belalcazar, Ramón Tobar, Meraldiño Caviche, Enrique Güetio y la mayoría de líderes de Agua Clara, Unión Olivares, Altamira y varias veredas más recuerdan este momento, especialmente por la situación con las escrituras que referenciaremos adelante<sup>361</sup>. Un comunicado muestra la posición que adoptaron en la vereda Agua Clara, ilustrando la interpretación que sobre la Resolución ha perdurado en el tiempo y en todo tipo de líderes del territorio: el Estado los quiere sacar,

Como indígenas Nasas del cavildo (Sic) cerro tijeras y comunidades dueñas de nuestro territorio rechazamos estas resoluciones donde hablan del conflicto armado y zonas de riesgo que lo cual será el desplazamiento forzado por nuestros territorios y espor (Sic) las riquezas que hay como el oro y las minas de otro mineral y el agua rechazamos la Multinacional y Ejercito Nacional y grupos armados (...) se [ha] expresado [Alcalde Luis F. Colorado] en la gobernación del cauca secretamente sin hacer la consulta previa ala (Sic) comunidades (...) gracias a Dios nos morimos de viejos o enfermedades pero no por grupos armados en nuestro territorio que lo cual el señor alcalde esta (Sic) interesado e[n] el desplazamiento pero nosotros seguiremos permaneciendo en nuestra madre tierra (...) en ella nacimos y ella moriremos como buenos indios colombianos (...)” Firmas de Comuneros de Agua Blanca<sup>362</sup>.

En este contexto, el Cabildo elabora una serie de documentos en los que expresa su posición política contra a la Resolución<sup>363</sup>. Su interpretación como una amenaza llevó, en

---

<sup>361</sup> Muchos relacionan ese episodio directamente con la entrada e injerencia de las multinacionales. Por ejemplo, cuando hablo con Ramón Tobar de AngloGold y Cosigo, introduce el tema de las escrituras contextualizando los recorridos que estas empresas había hecho en los territorios “Fue en una ocasión que hasta le dijeron a las comunidades que entregaran los títulos que tenían que porque era para protegerlos.”

<sup>362</sup> Acta: “Departamento del Cauca Municipio de Suárez Cauca Corregimiento de Agua Clara Vereda Agua Blanca” Archivo del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras.

<sup>363</sup> “Hemos sobrevivido a la violencia generada por la escalada del conflicto social y armado, a los programas de erradicación [de la coca] (...) a los movimiento telúricos –sismos- de la madre tierra y con todos estos factores de riesgo hemos convivido y nos hemos sobrepuesto a los mismos. Y no entendemos como (Sic) es que ahora justamente el alto gobierno departamental y nacional, nos pretende proteger y orienta mediante un escrito *carente de legitimidad y legalidad comunitaria, que nos debemos ir y abandonar todos nuestro programas y proyectos individuales y colectivos* porque nos catalogan como población en riesgo por desplazamiento forzado, justamente ahora que hay un alto índice de presencia militar en la región (...) o será que el mismo Estado se está haciendo conejo y nos quiere mover para entregarle de manera expedita y son ningún vicio de resistencia nuestro patrimonio ancestral y vivencial a las grandes corporaciones que disfrazadas de “progreso e inversión” vienen destruyendo al planeta. (...) Ah nos desplazan para no pagar las deudas históricas contraídas por la Nación, el Departamento y sus demás dependencias oficiales (Sic) referente al Acta de 1986 – construcción del embalse y represa de La Salvajina, los acuerdos con las comunidades indígenas de 1987, con las campesinas en 1991”. Posecionamiento (Sic) Político comunidad Cabildo Indígena Cerro Tijeras Municipio de Suárez Cauca. Julio 2 de 2010, Suárez Cauca. Asamblea comunitaria del 1 y 2 de julio en Unión Olivares.

determinados casos, a considerarla como “órdenes de desalojo”<sup>364</sup>. Según los documentos, fue asumida como una negación de la autoridad tradicional por no haber sido consultada, y como parte de un paquete de acciones institucionales mucho más amplio, que más que tener el objetivo de protegerles constituían una estrategia gubernamental para arrebatárselas con “argucias legales”<sup>365</sup> las tierras y socavar la autoridad y la dinámica comunitaria: “van en contra de las decisiones y en detrimento de las tradiciones, usos y costumbres de nuestra forma propia de legislar, autogobernar, controlar y direccionar sus propias políticas de gobierno en nuestros territorios”<sup>366</sup>. No obstante, estas consideraciones parecen no haber sido evidentes de inmediato y probablemente los menos familiarizados con los mapas causales/explicativos promovidos por la organización étnica se inclinaban más fácilmente hacia una lectura positiva,

No alcanzábamos a interpretar muy bien la, la, la Resolución. (...) entonces el argumento que ellos decían es que había que...es que esa medida se había hecho para proteger cada uno de esos, de esos predios y que en el caso que llegaran los paramilitares o quién quisiera apropiarse de, esos dueños tiene que prestar (Sic) escritura pública y legal, para poder ser dueño legítimo, si no pues el dueño tenía que ir [seguir] siendo, así se fuera (Sic) [del territorio] (...) Algunas, presidentes pues dijeron “no esto es lo máximo, esto es lo, lo que nosotros necesitamos, protegen nuestro territorio” y algunos creo que alcanzaron a entregar unas escrituras. (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

La lectura que los líderes hacían del contexto reafirmaba la idea de que la medida no se orientaba a la protección de las tierras. Ésta estuvo mediada por una fuerte desconfianza en las instituciones del Estado y en sus mecanismos formales de “protección” desplegados en medio de un ambiente de zozobra. Para ese entonces, se agudizaban las tensiones con

---

<sup>364</sup> “(...) Nos quedaremos haciendo frente y resistencia para sostenernos en nuestra tierra donde tenemos nuestros proyectos. (...) Muestran *ordenes desalojo* 5234 y (*Superintendencia de Notarias y registro publico* (Sic) y *Incoder*)” en Relatoria “Paraiso (Sic) 09 de 2010 Agosto Asamblea”. Archivo del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras. Así como la idea de que es “una Resolución de la Gobernación del Cauca *que amenaza con un desplazamiento masivo*” en Asamblea en la vereda Unión Olivares con comunidades cercanas y pertenecientes al Cabildo Cerro Tijeras. Agosto 24 de 2010.

<sup>365</sup> “es el mismo Estado (...) que instruye a los notarios de la región para ***cumplir los requisitos en procesos de enajenación o transferencia de bienes inmuebles*** (...) salvo que la transferencia se haga a favor del INCODER. Lo que significa que es el Estado el que ocasiona el desplazamiento de grandes masas poblacionales para poder apoderarse con “*argucias legales*” de los territorios (...) muy seguramente para ser feriados entre el capital transnacional” Caminata por la vida y la pervivencia en el territorio en contra de la minería y de las políticas impuestas. Comunidad de Cerro Tijeras-Departamento del Cauca. Julio 26 de 2010, sede del Cabildo Indígena Cerro Tijeras, Altamira, Suárez, Cauca.

<sup>366</sup> Posecionamiento (Sic) Político comunidad Cabildo Indígena Cerro Tijeras Municipio de Suárez Cauca. Julio 2 de 2010, Suárez Cauca. Asamblea comunitaria del 1 y 2 de julio en Unión Olivares.

titulares mineros en el municipio. Llegaba una numerosa cantidad de soldados del Ejército que se establecían en bienes civiles de la zona occidental (CICT Febrero 2012: 5), a finales de 2009 y comienzos de 2010, en el marco de un supuesto megaoperativo contra el cultivo de coca. La presencia militar permanente no se limitaría ya, como antes, a las bases que custodian La Salvajina. Adelantaban retenes y requisas legales que intimidaban a los habitantes locales y, paralelamente, aumentaban las amenazas a líderes afrodescendientes e indígenas de la “Comisión Interétnica”, que serían asesinados por paramilitares durante el 2009 y 2010 en Morales, Suárez y Buenos Aires. El paramilitarismo parecía “renacer” para este sector. Según el Diagnóstico realizado por el Cabildo, después de la masacre del Naya en el 2001 en la parte de Cerro Tijeras se vuelven a registrar nuevamente muertes selectivas en octubre del año 2009 cuando también se presentan múltiples amenazas (CICT Febrero 2012: 4). Esta es la razón que encontramos en algunos documentos y en la entrevista de Meraldiño, que lleva a numerosos habitantes a preguntarse ¿cuáles alteraciones del orden público por hechos violentos? En realidad, la presencia militar, paramilitar y los títulos eran los factores que muchos de los miembros de la organización étnica asociaban a situaciones de riesgo y violencia. En ese contexto, el Estado no representaba seguridad, parece ser considerado un agente más de despojo<sup>367</sup>. Los primeros combates se presentarían en la vereda El Amparo el 25 de septiembre de 2011 y continuarían afectando otras veredas por periodos variables durante ese año y los siguientes hasta el momento actual<sup>368</sup>

---

<sup>367</sup> “Entonces pedimos un informe por escrito a la estación de policía, al hospital que cuántos muertos habían habido en el 2009, asesinados por el tema del conflicto armado ¿Sí? Dónde había habido los combates (...) Resulta que el hospital lo que nos manifiesta por escrito es que sí han habido muertos. Unos de muerte natural y otros que, los muertos que ha habido son muertos hay veces por cuestiones así de problemas de personas, acá entre las comunidades ¿Sí? Pero por cuestiones de conflicto armado y lo mismo certifica la, la inspección de policía que no han habido, no ha habido. Pero ya estaba la Resolución que era un eminente riesgo de desplazamiento (...) o sea, ya nos adelantaron un conflicto, yo diría que es el que ahora estamos viviendo [desde 2010].” (Entrevista con Meraldiño Caviche) La organización étnica reclamaba que “a la fecha no ha [el gobierno] realizado ninguna acción pública que permita prevenir tal condición [de desplazamiento] (...) Antes por el contrario ha permitido y consentido el escalonamiento del conflicto social y armado en la jurisdicción territorio del Cauca, ha incrementado el pie de fuerza” (CICT. 2010 Julio 26). Incluso, comuneros asocian la Resolución a las amenazas paramilitares en la reunión que sostienen con Acción Social sobre el tema, al expresar según el acta, que aunque en la zona no hay enfrentamientos armados “Desafortunadamente, días después de creada la resolución llegaron amenazas a líderes comunitarios de La Toma y del Cabildo Cerro Tijeras” (CICT. 2010 Agosto 23)

<sup>368</sup> Para revisar con detalle algunos de los hechos registrados por los líderes del Cabildo durante este primer momento de enfrentamientos armados ver el mencionado Diagnóstico citado anteriormente. También se cuenta con el registro realizado en el Informe de la Visita de Verificación Humanitaria de la Comisión del Congreso de la República al Municipio de Suárez, presentado por el Representante a la Cámara Wilson Arias a la Comisión, en el que se describen las situación de confinamiento y las violaciones al DIH que se venían presentando en estas comunidades durante los meses de septiembre y octubre (Arias, 2011).

Durante el año 2010 funcionarios de Acción Social intentaron promover en las veredas el proyecto de protección de tierras derivado de la Resolución, solicitando las copias de las escrituras de los predios<sup>369</sup> en varias veredas. Hemos podido acceder a las actas de dos importantes reuniones realizadas en Agosto de ese año entre delegados estatales y comunidades, realizadas en ese contexto con el objetivo de obtener la explicación detallada del programa. Según el acta de la reunión en Agua Clara, los funcionarios explican que,

“Acción social hace un informe de predios para luego gestionar la propiedad legal, teniendo los documentos al día los propietarios podrán solicitar créditos o subsidios productivos. Sin embargo los funcionarios fueron claros y manifestaron que el programa protege la tierra más no protege a las personas ni garantiza su permanencia en el territorio, estas dos últimas obligaciones corresponden a otras entidades del Estado. (...) Hicieron énfasis en que el programa cubría específicamente a campesinos ya que las comunidades negras e indígenas tienen su propia forma de protección de tierras amparadas por sus leyes y el convenio 169 de la OIT.” (CICT. 2010 Agosto 23)

Hay cuestionamientos sobre la efectividad real, más que formal, de esa protección ofrecida por el Estado. Según mi interpretación del acta, para los líderes que intervienen en dicha reunión lo que significa “proteger” la tierra se distancia evidentemente de la propuesta de la institucionalidad, dado que ésta no se enfoca en la permanencia de las personas en el territorio ni en sus proyectos de vida. Cuestionan la fragmentariedad y unilateralidad del programa que se basa en un trámite burocrático de inventariado de predios, ante una situación violenta presentándose o a presentarse en el territorio, los “beneficiados” son un dato más<sup>370</sup>,

---

<sup>369</sup>Frente a este dato hay ambigüedad, las actas dicen que se solicitaba la copia de las escrituras, pero a diversos líderes escuché referenciar en varias ocasiones que se había solicitado en algunas veredas las escrituras originales. Según las funcionarias, el programa “busca proteger las tierras de los campesinos en caso de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, pero para hacer tal protección es necesario que los propietarios se acojan al programa y registran sus predios con la copia de las escrituras si las tienen, compraventas u otro documento que certifique el derecho de propiedad. (...) al propietario se le respalda su derecho frente a la explotación minera o siembra de cultivos ilícitos, de igual manera si una persona está siendo sobornada o amenazada para que venda será respaldada, el comité garantiza que la venta de tierra sea libre y acordada” en CICT. 2010 Agosto 23. “Relatoria Reunión Comunidades Cabildo Cerrotijeras y Acción Social- Proyecto de protección de tierras y territorio a la población desplazada”. Vereda Agua Clara que citaremos en adelante como (CICT. 2010 Agosto 23) Participantes de la reunión: comunidades del Cabildo, dos funcionarios de Acción Social, Secretario de Gobierno e Inspector del Municipio de Suárez.

<sup>370</sup> [Carlos Cobo Gobernador Cabildo:] (...) es responsabilidad del Estado proteger los derechos integrales de sus habitantes y no descargar su responsabilidad en una institución que está limitada para hacer una efectiva protección integral. (...) siempre se ha querido la protección de la tierra, pero que no se está de acuerdo con la forma propuesta por ellos (...) ya que las comunidades tradicionalmente han protegido las tierras y tienen su forma propia de hacerlo, formas que necesitan ser apoyadas por el Estado y sin embargo no lo hacen, si de verdad quieren proteger nuestras tierras,

“[Asistentes] manifiestan que es imposible confiar en un programa del que no participaron en su construcción, que el programa tiene falencias en cuanto a que sólo protege el territorio más no la gente, además no tiene ningún tipo de incidencia o planteamiento (Sic) de defensa territorial sobre la amenaza actual de invasión y explotación minera. (...) [Asistente:] ¿Qué pasaría entonces si ustedes protegen los predios, y por causa de la minería a la gente la desplazan forzosamente, y le explotan su tierra? ¿De qué sirve que le protejan la tierra si no hay garantías de vivir en ella? A las anteriores preguntas, hubo la siguiente respuesta de los funcionarios: En caso tal que una persona tenga su tierra protegida, y ésta es explotada y dejada improductiva, es responsabilidad del Estado adjudicarle en otra parte de la geografía colombiana, pero hay que dejar claro que si una persona no tiene títulos, acción social ni protege su tierra ni la restituye.” (CICT. 2010 Agosto 23)

“Los asistentes” manifiestan la intención de permanecer en sus tierras más allá de la propiedad y protección jurídica brindada por Acción Social<sup>371</sup>. Además, los líderes del Cabildo anuncian una caminata en la que consultarían a las comunidades si acogerse o no al proyecto y de qué forma desearían proteger la tierra, y antes de la cual “no se entregaran escrituras o información alguna”. La “Caminata por la vida y la pervivencia en el territorio en contra de la minería y de las políticas impuestas” que, según otros documentos, venían diseñando desde mediados de ese año, contempló la discusión de cuatro puntos con los comuneros (CICT. 2010 Julio 26): gran minería transnacional<sup>372</sup>, alternativas a la Resolución 5234-06-2009 de junio 24 de 2009 y la Circular 176 del 10 de agosto de 2009, alternativas a las políticas de erradicación de la coca y Plan Departamental de Aguas. El recorrido por las 35 veredas se realizó con dos comisiones de líderes en rutas paralelas, y congregó a más de 1.100 personas durante las reuniones realizadas en Septiembre de 2010. La actividad es vista por la propia organización en una de sus actas posteriores como “ejercicio sensibilizador y metodológico que permitió unificar a la comunidad entorno a

---

entonces apoyen la constitución de resguardos y titulación de tierras colectivas para comunidades indígenas y negras.” (CICT. 2010 Agosto 23)

<sup>371</sup> “nos organizaremos y organizadamente nos defenderemos, necesitamos defender la vida y la permanencia en el territorio” agrega “ojalá que no nos vayan a llegar con fusiles de asalto a tratarnos como delincuentes, como lo hicieron el pasado 18 de Agosto en La Toma [refiriéndose al Ejército en el caso desalojo de mineros por Amparo Administrativo título BFC-021]”. (CICT. 2010 Agosto 23)

<sup>372</sup> “1- Posición frente al tema de la gran minería transnacional que se practica a cielo abierto con sus consecuencias directas para las comunidades en cada uno de los territorios (...) hemos podido detectar la presencia de las siguientes multinacionales mineras Kedahda S.A hoy absorbida por AngloGold Ashanti (...) la Cosego (Sic) Resources (...) y otras que están al asecho como Continental Gold y El Dorado Gold.” (CICT. 2010 Julio 26).

una identidad territorial”<sup>373</sup>. Considero que buscaba divulgar esa lectura de la coyuntura que ligaba aspectos del contexto que podían aparecer inconexos para muchos así como detener la injerencia del estado en el tema territorial<sup>374</sup>. La Resolución parecer haber avivado más la llama de la confrontación con el Estado. He escuchado algunos líderes que incluso llegan a sospechar que ésta fuera un cálculo del estado para impedir la constitución de Resguardo. Meraldiño nos habla de la contraposición entre una supuesta intención de “protección” y las afectaciones generadas por otras decisiones y políticas institucionales que favorecen el acceso al recurso minero por parte de foráneos,

Desgraciadamente si la hicieron de buena intención, lojotros (Sic) la aprovecharon de la mejor intención, y ¿cuál es esa mejor intención? Pues que a los indígenas no se le puede constituir en Resguardo, que los indios no podemos vender un metro de tierra porque hay una medida cautelar de las cuencas, de las tierras, pero las multinacionales sí están entrando (Sic) con sus títulos mineros para ellos no se veta la, para ellos no tiene validez ¿Sí? Entonces decimos nosotros: ¿Quién defiende a quién? ¿Sí? ¿Será el movimiento indígena que hoy tal como está planteada la, la, la Resolución, estamos expropiando a la fuerza o con un fusil estamos sacando a la gente? Dijimos: no, no lo estamos haciendo, pero la figura legal del Estado y a través del Código Minero (...) le está diciendo a las empleadas (Sic) mineras “ese es su título” y de ahí para allá no sabemos qué va a pasar con la gente. Pues yo, lo, lo más seguro es que la gente tiene que irse de allí. Legal o ilegal, venda o no venda (...) Si esa resolución fuera realmente para defender la población civil pues no se estaban consiguiendo títulos mineros. (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

Para completar este agitado panorama local, el 22 de octubre de 2010 se obtiene un primer reconocimiento oficial de parcialidad indígena. La Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Room declara la Resolución 00155, “Por la cual se reconoce como parcialidad indígena a la comunidad Cerro Tijeras del pueblo Nasa, ubicada en los Corregimientos: Los

---

<sup>373</sup> Ejercicio de Planificación Cabildo Cerro Tijeras. Sin Fecha. En otro documento dice: “(...) ejercicio [Caminata] que dio como resultado, que la comunidad no atendió el llamado del Programa de Acción Social para entregar las escrituras de sus predios” Diagnóstico Político y Social. Parcialidad Indígena del Cabildo Cerro Tijeras. Altamira, 14 de diciembre de 2011.

<sup>374</sup> “Entonces, empezamos ya a revirar y a decirle a las comunidades no entreguen las escrituras ni por el verraco (...) así lo dijimos a la, al mismo Ministerio, a la misma defensoría del pueblo, al mismo alcalde, al mismo departamento (...) La posición de la comunidad aquí es que, por aquí, de aquí del Cabildo Cerro Tijeras no vamos a salir, no vamos a mover un paso más de aquí pa’ (Sic) allá, saliendo, sacando a la gente ¿No? Nos vamos a quedar aquí, si quieren pues vengan por nosotros acá que acá estamos. Y la responsabilidad absoluta que si llegan los paramilitares, no llegan, o si matan o no matan es del Gobierno Nacional” (Entrevista con Meraldiño Caviche 2014)

Robles, Betulia, Aguaclara y la Meseta en jurisdicción del Municipio de Suárez, Departamento del Cauca.”<sup>375</sup> En algunas actas de la organización ésta parece ser vista como una primera garantía para asegurar el reconocimiento del derecho a la Consulta Previa.

El marco jurídico minero actual, presenta dos oportunidades legales concretas para “contener” temporalmente la entrada de proyectos mineros legales: la Consulta Previa y el derecho de prelación para comunidades étnicas. En los documentos del Cabildo revisados y en las reuniones que he presenciado con los agentes institucionales los líderes de la organización exigen la Consulta como un derecho colectivo. No obstante, esto no quiere decir que se le considere una garantía. Por el contrario, este mecanismo es fuertemente criticado principalmente por no ser vinculante, en documentos y en asambleas internas<sup>376</sup>.

Durante nuestro encuentro el 15 de marzo del 2015 en Cali, abordamos este tema con Meraldiño así como en la entrevista con Manuel Belalcazar el 14 de ese mismo mes. Los dos líderes coinciden en las consideraciones que tienen al respecto. Éstas reflejan las preocupaciones de múltiples dirigentes según lo observado en reuniones y conversaciones,

La consulta tal como está planteada creo que es una forma de obligar prácticamente si por bien o si por mal debe permitirse hacer un trabajo, porque lo que está diciendo Enrique, que consulta o no consulta eso no va a impedir que se haga la minería, porque hacer consulta es ponernos de acuerdo cómo es que se va a hacer la minería (...) sirve para que se modere un poco la forma indiscriminada de hacer minería, es como digamos, hacer una guerra pero

---

<sup>375</sup> Un Auto-edicto del Inceder en el 2010 ordena iniciar el proceso de constitución de Resguardo de Cerro Tijeras, los requisitos son: 1. Un censo actualizado de la población indígena en el territorio, a agosto de 2011 se contaban 3.104 personas afiliadas agrupadas en 1.218 familias distribuidas en 37 veredas; 2. Vías de acceso; 3. Un mapa del territorio con todas las medidas técnicas. A partir de esto se desarrolla un estudio etnológico adelantado por una Comisión en 2010, con base en el cual se expidió la Resolución 00155 de 10/2010 del MinInterior sobre Parcialidad Indígena. Después siguió otra comisión en noviembre de 2010 que adelantó el estudio socioeconómico que, entre otras cosas, caracterizó la tenencia de la tierra en baldíos, en títulos individuales, en tierras compradas por Min Interior. Las tierras de los Resguardos se componen por: las del propio Cabildo, las compradas, las cedidas por miembros afiliados u otras personas. Informe de Gustavo Cediel y Elmer Guevara en Reunión del 17 de octubre de 2012, Acta propia. Según la Resolución 00155 el concepto etnológico: “concluye que: ‘La metodología aplicada ratifica en cada uno de sus aspectos que la comunidad Cerro Tijeras (...) corresponde a la definición de comunidad indígena que establece parámetros: 1) ascendencia amerindia, 2) Conciencia de identidad 3) cultura representada en valores, rasgos, usos y costumbres, 4) formas de gobierno, gestión y control social. Expresados en sistemas normativos propios, 5) distinción respecto de otras comunidades’.”

<sup>376</sup> Dicen en uno de sus textos: “no tiene el carácter de vinculante, es decir, el pueblo tiene voz pero se le niega el voto, lo que equivale a manifestar que es un ejercicio interesante pero estéril, que no tiene efectos legales frente a los agresores; pues, consulta previa no es lo mismo que consentimiento previo, el cual contempla la posibilidad de negar permiso a las multinacionales.” Documento para discusión y análisis en el Congreso de los Pueblos. Cabildo de Cerro Tijeras. Octubre 8 al 12 de 2010, Bogotá D.C.



hagámosla pasito (Transcripción literal de la conversación con Meraldiño Caviche el 15 de marzo de 2015)

Según este anterior fragmento, se le concibe como una medida para amortiguar<sup>377</sup> los impactos negativos, permitiendo también, de alguna forma, que las comunidades cedan a la realización de los proyectos. Bastante similar es la opinión de Manuel,

Lo que pasa es que jurídicamente eso viene ya amarrado eso no es un instrumento de que uno le diga a una empresa ‘no’ sino que la consulta es más bien, es que sí lo van a hacer pero al menos que le tengan en cuenta a las comunidades algunas recomendaciones porque si fuera que uno en la consulta digiera ‘no’ y listo, (...) no, uno, así diga que no el proyecto va, sino que es más que todo que el daño que va a causar pues al menos no sea tanto y que al menos uno se dé cuenta (...) Por norma, porque nosotros nos la hemos ganado es un derecho hay que hacerla, pero no es suficiente la consulta es, más allá de la consulta el trabajo que hay que hacer con otras organizaciones, con las comunidades, pero la consulta claro, en su debido momento hay que realizarla (Entrevista con Manuel Belalcazar marzo 2015)

La exigencia de este derecho en las reuniones con la institucionalidad a las que he asistido les permite a los líderes dejar en evidencia el incumplimiento de unos mínimos legales por parte de proyectos económicos privados y programas institucionales en la parcialidad.

En el intercambio con cada uno de los indígenas también sale a flote el asunto del derecho de prelación y las Zonas Mineras Indígenas (ZMI) o Mixtas a las que tienen derecho. Afirmaba Meraldiño refiriéndose a la situación hipotética de no lograr detener los proyectos mineros: “mal que bien ha definido, desde el Código de Minas que las comunidades tienen ese derecho de prelación y que tarde que temprano las comunidades tienen que realizarlo” me apresuro a interpretarle “es decir, pueden echar mano del derecho de prelación”, “lógico” me responde. Sin embargo, desarrollando más el tema corroboro que esta consideración es más una consideración de opciones probables frente a situaciones críticas, dado que él mismo identifica importantes riesgos de aplicar esta estrategia:

---

<sup>377</sup> Meraldiño sopesa también la importancia de la Consulta en medio de las críticas: “Es un derecho que se tiene, porque si no hubiera ese tema de consulta lo que haría el estado y la empresa sería entrar a intervenir en las comunidades sin ningún mérito (...) sería mucho más complicado el tema en las comunidades el desplazamiento, es como una forma de regular, es, no más eso” (Transcripción literal de la conversación con Meraldiño Caviche el 15 de marzo de 2015)

Los contras serían muchos, los que han desarticulado las formas de vida de las comunidades A: ¿vos crees que con una zona minera controlada por ustedes igual se desarticularían esas formas de vida? M: yo digo que sí, realmente cuando hay intereses y cuando se trata de plata, la gente, prácticamente yo diría que la gente no hace caso a las directrices, por solucionar la parte económica no hace caso (...) y pues lo económico soluciona algunas cosas pero cuando se trata de mejorar la parte natural ni siquiera las instituciones públicas lo han hecho (Transcripción literal de la conversación con Meraldiño Caviche el 15 de marzo de 2015)

En el “Proyecto Plan de vida del Cabildo Indígena Cerro Tijeras. Propuesta de inversión” presentado a la Alcaldía de Suárez en 2011<sup>378</sup>, la organización hablaba de la “constitución de zonas mineras mixtas para grupos étnicos de nuestro territorio” como un objetivo. Pero no solo a Meraldiño, sino a gran cantidad de líderes, entre esos el Gobernador de ese año Enrique Güetio, les he escuchado numerosas objeciones a esta figura y a la ley minera que los empuja, obligados, a adoptarla como última opción para impedir la explotación de foráneos.

En el último periodo el Cabildo viene recopilando las necesidades de las comunidades con el objetivo de proyectar la vida económica y social en el territorio, así como de fundamentar las exigencias que se plantearán en la aplicación de la Sentencia T-462A, todo esto en el marco de la construcción del Plan de Vida de la organización. En ese proceso, se presentó recientemente una situación que ha llevado a una posición más inclinada a descartar las ZMI en Cerro Tijeras,

Específicamente con la comunidad de Matecaña, que dice, pues no sé si será toda la comunidad, pero pues a nosotros nos llegó una una propuesta diciendo de que ellos quieren (...) ellos quieren sofisticar más la producción minera ¿no? O sea tecnificarla más, y nosotros hemos dicho que no, que nosotros no, a eso no le apuntamos porque los mandatos dice de que no, que es un no rotundo a la minería eso no, está descartado totalmente, si quieren hacer lo hacen así de manera artesanal pero el Cabildo no va a prestar

---

<sup>378</sup> Se tiene el referente de otros Cabildos como el de Canoas que adoptaron esta estrategia y, según los líderes de Cerro Tijeras, quedaron “enchicharronados” porque no pudieron salir adelante con la explotación minera, sin embargo no tengo datos específicos de las razones del supuesto fracaso, sin embargo en documentos de interlocución con la Alcaldía escribían: “Objetivos específicos: (...) “Constitución de zonas mineras mixtas (Sic) para grupos étnicos de n nuestro territorio.” Proyecto Plan de vida del Cabildo Indígena Cerro Tijeras. Altamira. Propuesta de inversión para 37 veredas del área rural en cumplimiento de la Asamblea del 7 de julio del 2007. Por: Cabildo de Cerro Tijeras-Altamira. A: Alcaldía Municipal Suárez, Gobernación del Cauca. 29 de julio del 2011.

para que sea más tecnificado más sofisticado. (...) Ellos no pidieron, bueno quiere sembrar café, eee bueno, otros cultivos no, que pidieron fue que les ayudaran a tecnificar (Entrevista con Manuel Belalcazar marzo 2015)

Durante esa reunión realizada en febrero de 2015 en Nomadesc, delegados del Cabildo de Honduras (Morales) y de Cerro Tijeras tomaron esta posición en su mayoría según nos comenta nuestro interlocutor. “Es que hay unos mandatos a nivel de, a nivel regional, y el Cabildo como tal también tiene unos mandatos de que no” complementa Balalcazar, de una forma similar analiza la opción de las ZMI,

Tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas ¿no? Algunas de las ventajas que digamos que eso ahí no lo explote otro, que lo explote la misma comunidad. Pero nosotros en eso sí hemos sido muy digamos muy cuidadosos y lo que se ha dicho es que no, que no, que eso no, no lo explotemos ni nosotros ni que otro lo venga a explotar porque no no no tendría sentido, hemos sido muy enfáticos diciendo de que no, que nosotros no le damos permiso pa’ que nadie lo haga ni nosotros mismos ni mucho menos gente de afuera (Entrevista con Manuel Belalcazar marzo 2015)

Esta difícil realidad instaurada por la ley minera genera en Meraldiño y muchos líderes una percepción altamente negativa. Cuando se refiere a la figura de la Zona Minera Mixta, lo sintetiza de esta forma “las leyes están hechas en contra de las comunidades (...) sin necesidad de la ley de una forma ancestral muy práctica y muy equilibrada con la naturaleza lo han hecho y esta norma lo único que hace es vulnerar ese derecho que han tenido (...) No nos vamos a acoger a esa norma, porque lo que ha sido es que siempre han estado los indígenas y no tiene por qué el estado estructurar normas”. De acuerdo a esta posición, a pesar de ser tomadas en cuenta para generar oportunidades políticas o como tácticas de resistencia, estas figuras representan para este dirigente imposiciones diseñadas contra las comunidades. Para Meraldiño el papel de las comunidades en este tipo de definiciones es determinante, pues éstas dependen en gran parte “de la posición que tengan las comunidades, porque a pesar de que uno sea autoridad y de que uno tenga una posición radical, las comunidades pueden tener otras posiciones que pueden ser variables en cierto momento” y frente a los líderes me explica que puede decirse que “aún se sigue pensando (...) no hay una determinación fija que se diga esto es así esto es asá”. De acuerdo con las

anteriores reflexiones podríamos decir que las consideraciones sobre la estrategia jurídica a adoptar pueden variar notablemente según el contexto y las circunstancias afrontadas.

Las consideraciones de Manuel y muchos otros dirigentes responden a la preocupación sobre los límites de las herramientas jurídicas y la necesidad de estrategias políticas,

Nosotros como Cerro Tijeras como no, ahí tenemos muchas debilidades primero porque digamos jurídicamente no estamos reconocidos como resguardo, y digamos eso, jurídicamente es una desventaja para la organización de que no tiene, no tiene herramientas jurídicas de peliar (Sic) de que no se haga (...) Yo pienso que ahí toca es primero pues organizar digamos no solo nosotros como organización indígena sino con los Consejos Comunitarios digamos una posición clara frente a ese tema minero y multinacionales y buscar alguna forma estratégica (...) porque de lo contrario no, solos no podemos eso es muy complicado (...) más allá de la consulta, sí, más allá de la consulta toca unir esfuerzos (Entrevista con Manuel Belalcazar marzo 2015)

El avance en ese proceso para establecerse como Resguardo impone también nuevas situaciones, esperadas e inesperadas, que complejizan las relaciones “internas” y “externas”. La estrategia modifica las condiciones y recursos con los que cuenta la organización étnica, y así como crea oportunidades, parece desestabilizar, en algunos casos, las fronteras y los vínculos de cooperación anteriormente estables con otros actores. Una situación que puede ilustrar esta nueva y variable realidad, es el caso de la Institución Educativa Marilópez de la vereda Bella Vista en el norte de la parcialidad. Aunque no se relaciona con el tema minero, en las Asambleas escuchaba con frecuencia a Enrique y Meraldiño referenciar el caso, por lo que decidí revisar los documentos relacionados y concluí que ejemplificaba de una forma muy interesante ese reacomodamiento. El Cabildo y el CRIC venían cooperando con las directivas de la Institución y las comunidades de esas veredas desde el 2005, ayudando a completar la planta de profesores a través de sus programas<sup>379</sup>. Sin embargo, la relación se torna conflictiva cuando, después de que la

---

<sup>379</sup> Escribía el Director de Núcleo Guillermo Burbano al CRIC solicitando su apoyo: “Según los diagnósticos (...) se puede observar que en el **Territorio Indígena** por falta de docentes no pudieron estar dentro del Sistema Educativo muchos niños niñas y jóvenes. (...) Por tal motivo solicitamos a usted su valiosa colaboración y apoyo para que pueda entrar en el convenio CRIC, GOBIERNO Nacional y Departamental, los docentes que se requieren en este ente territorial.” Oficio DNE No. 034 de 15 de marzo de 2004 dirigido al Coordinador del CRIC. A raíz de esta solicitud se llega a un acuerdo entre el Cabildo Cerro Tijeras, el CRIC, la ACIN, el Mpio de Suárez y el Consejo C. de Comunidades

comunidad de Cerro Tijeras es declarada parcialidad indígena, el Decreto 0591-12-2009 de la Secretaría de Educación Departamental incluye aquella Institución dentro del listado de planteles que están en territorios indígenas. De esta forma, el CRIC entraría a definir todos los profesores de su banco oferente, entre otras implicaciones, ante a lo cual los directivos, empleados no indígenas, algunos padres de familia y líderes de las veredas de Bella Vista, Los Mangos, El Naranjal, Come Dulce, La Esmeralda solicitan a la Secretaría excluirlos del listado, alegando no ser mayoritariamente una comunidad indígena<sup>380</sup>. Inicia de esta manera una prolongada disputa por mantener o no el Decreto. Por el momento, el Cabildo interpuso una tutela que falla ordenando una Consulta a las comunidades que serán afectadas por una u otra decisión, medida que no se ha llevado a cabo. El proceso de reconocimiento institucional a la comunidad étnica parece, en este caso específico, generar un estrechamiento de las fronteras y los vínculos.

En este sentido, la aspiración jurídica del Cabildo sobre el territorio conjunto tensiona su relación con quienes no se identifican con el discurso organizativo, ni con lo indígena. Parece ser vista por estos, más como un mecanismo para imponerles la autoridad indígena y para integrarlos a un proyecto social ajeno. Según mis observaciones en campo y algunos de esos documentos (del caso Bella Vista y otros), se alega por parte de aquellas personas que esa aspiración puede implicar una potencial pérdida de autonomía sobre sus

---

Negras (parece de Bellavista) en el que a nombre de las comunidades “Indígenas, Campesinas y Afro colombianas”, nombran los educadores para contratarlos a través del CRIC: “Demanda[n] a la gobernación del departamento del Cauca, se respete el presente acuerdo a la decisión tomada por las partes para fortalecer los procesos interculturales de educación, como el sistema de contratación definido por las mismas comunidades, donde a través de la amplia participación nombra sus propios docentes, para el fortalecimiento de la educación intercultural.” En Acuerdo del 15 de junio de 2005 (ver Fuentes Primarias Caso I. E. Marilópez Bellavista).

<sup>380</sup> Decían por ejemplo en una de sus reuniones “La comunidad está de acuerdo en NO RECIBIR A LOS DOCENTES CRIC en las instituciones educativas” en “Acta N° 1” de Febrero 8 de 2010 (ver Fuentes Primarias Caso I. E. Marilópez Bellavista), y en otro documento: “En el año 2005 y solo en vista de la necesidad de docentes que tenía la comunidad se aceptó la prestación del servicio educativo por parte del banco oferente CRIC, concertando con sus representantes que sus funciones se limitarían solo a prestar el servicio como docentes y la comunidad no tendría compromisos con ningún evento propio del cabildo ni con sus reglamentos. Debido a las dificultades de algunos habitantes para adquirir un carnet de salud y/o libreta militar se vieron forzados a aceptar la ayuda que el cabildo ofrecía (...) La inclusión de nuestra institución en el decreto (...) se hizo de manera INCONSULTA Y ARBITRARIA (...) los habitantes que residimos en las veredas mencionadas no HEMOS SIDO, NO SOMOS, NI SEREMOS INDÍGENAS ya que la realidad es que somos pluriétnicos y multiculturales con población mayoritaria MESTIZA y AFRODESCENDIENTE” en Oficio con “Ref: Copia del derecho de petición enviado al gobernador del Cauca: solicitando la exclusión de la Institución Educativa Marilópez Bellavista y sus sedes del Secreto 0591-12-2009”, del 3 de febrero de 2010. En la Resolución 0155 de octubre de 2010 se registran 11 personas indígenas en Los Mangos, 9 personas en La Esmeralda, 50 en Naranjal, 51 en Bellavista, y 16 en Comedulce. En el “Acta de reunión No. 2” que contó con participación del Cabildo y el CRIC, la delegada de la Secretaría Departamental presentan la población educativa reportada por el director de la I. E: de 207 niños, 18 son indígenas, 14 “negritudes” y 175 “no aplica”, se habla de una “población mayoritaria mestiza”, se acuerda verificar estas cifras con delegados de la partes asistentes.

propiedades o aspectos de sus vidas. A pesar de que el Resguardo se limita a los predios aportados voluntariamente aparece recurrentemente el fantasma de una completa titulación colectiva abarcando el área de todas las veredas nombradas en la Resolución 00155.

Durante las visitas realizadas pude identificar esas diversas tensiones que el tema territorial y la colectivización suponen entre los diferentes actores y algunos documentos examinados, como hemos visto, les reflejan. Pero más allá de referenciarlos todos, pienso que uno de esos espacios nos puede permitir captar una gran cantidad de dimensiones relacionadas con este asunto, desde la perspectiva de una situación concreta. Considero que la descripción de situaciones específicas como ésta, refrenda el enfoque adoptado en este trabajo, pues permite concebir las relaciones entre actores y organizaciones desde contextos y coyunturas. Privilegio este y no otro espacio porque, en primera instancia, en él interlocutan varios agentes que representan sectores diferentes: la Asociación de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Municipio de Suárez, el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, algunos presidentes de JAC, varios funcionarios del Incoder, Personería Mpal y Alonso Giraldo, dueño de la explotación aparentemente con mayor producción en el municipio. En segundo lugar, porque tuve la oportunidad de presenciar personalmente el intercambio y, en tercero, porque cuento no solo con mis apuntes personales sino con el Acta formal realizada por el Incoder, lo que permite contraponer los datos etnográficos y documentales. La reunión fue convocada por la Mesa de Tierras del Incoder, específicamente para “Abordar los posibles conflictos territoriales y aclaraciones a las comunidades” sobre el procedimiento de constitución del Resguardo.

El primero que se identifica e interviene como de “la zona campesina y mestiza”, es el señor Alonso Giraldo. Durante toda la reunión continúa hablando a nombre del campesinado, lo que llama profundamente mi atención, pues es sabido por todos los asistentes locales que más que campesino es minero. El paisa es dueño desde hace muchos años de la mina El Danubio. Insistía en que muchos “tenemos” –hablando de los campesinos- los predios en la zona, que están en desacuerdo con que se tomen decisiones sin tener en cuenta la comunidad, tanto así que figura en el acta institucional como “Alonzo

(Sic) Giraldo. Líder Campesino”<sup>381</sup>. Identifico continuidad entre su posición y las ideas que expresan los campesinos que intervienen a lo largo del encuentro. Hacen presencia varios líderes de JAC de la zona occidental, entre los que reconozco dos que he encontrado previamente en reuniones en las veredas y que algunos líderes indígenas me habían referenciado ya como contradictores del proceso indígena. Expresan abiertamente esa contradicción, enfatizando en el temor de ser integrados ya que la ‘Parcialidad Indígena’ incluye los corregimientos en los que ellos habitan: “Manuel Antonio Becoche – [Presidente de la JAC del Amparo] Corregimiento de Vetulia (Sic). Aquí no se ha consultado con la comunidad, como en el amparo la comunidad campesina no quiere pertenecer al resguardo, quieren un reconocimiento como comunidad campesina. Se hace necesario que se consulte en las veredas cuales es el interés, porque la gente no conoce que es lo que se viene dando y esto puede dar un conflicto mayor.”<sup>382</sup>

En sus intervenciones se identifica la histórica confusión sobre las diferencias entre afiliarse a la AIC –empresa de salud manejada por la ACIN- y al Cabildo<sup>383</sup>. Una de éstas nos permite presenciar una discusión más de fondo, generada por uno de los campesinos cuando se refiere al uso de la tierra que será titulada: “Yo pregunto si esas tierras que titula el Incoder (Sic) son para que se rastrojen y que no produzcan nada, o para que produzcan”, señalando la supuesta subutilización de las fincas indígenas. El funcionario de asuntos étnicos del Incoder, Gustavo Cediell, hace una interesante explicación sobre las diferencias en los usos según los pueblos y sobre la importancia de no explotar agrícolamente la totalidad de los campos para la producción de agua y la existencia de diversidad de plantas. Proponía una reflexión que, desde mi punto de vista, intentaba cuestionar los imaginarios sobre ‘lo útil’, ‘lo productivo’ y las prácticas de subsistencia y conservación.

---

<sup>381</sup> Giraldo: “Quisiéramos saber que ha pasado pues nosotros es la primera vez que venimos a las reuniones y no sabemos que (Sic) ha pasado en el territorio, nosotros no somos ni afros ni indígenas, quisiéramos precisar las colindancias pues en este proceso no se concertaron los linderos.” (INCODER. 2012 Octubre 17: 1)

<sup>382</sup> (INCODER. 2012 Octubre 17: 2)

<sup>383</sup> Decía Becoche “la gente se afilió a la AIC, la afiliación al cabildo, las reglas etc. Yo respeto al gobernador pero la gente no esta (Sic) muy contenta con la situación. (...) Mucha gente ha planteado que aparece en el Censo pero está de acuerdo con el cabildo pero no está de acuerdo con el resguardo.” Frente a lo cual el Gobernador del Cabildo responde: “En noviembre 22 de 2010 se hizo una sección en el concejo con el alcalde colorado se hizo la claridad que la AIC es una empresa prestadora de servicios de salud, indígena y es diferente estar en la AIC y pertenecer al cabildo, todas esas claridades y diferencias se hicieron en su momento. No es nada nuevo es un proceso en el que se ha venido haciendo claridades a las comunidades en el marco del respeto a sus derechos con sus diferencias en cualquier sentido.” (INCODER. 2012 Octubre 17: 5) El Cabildo también realiza una depuración de su censo máximo cada dos años pues la norma les obliga.

Ante las posiciones basadas en el temor por las tierras, el mismo funcionario reitera que sólo se convierte en Resguardo el predio de quienes los donan explícita y voluntariamente, no todas las tierras de los corregimientos nombrados en la Resolución 00155. Lo propio hace el Gobernador del Cabildo<sup>384</sup> y se muestra el mapa para aflojar las tensiones.

Observo que los afrodescendientes parecen estar también prevenidos en este encuentro. Los dos sectores cooperan y realizan determinadas acciones conjuntas frente a determinados contradictores comunes, pero considero perfectamente normal que no se identifiquen plenamente, ni se fusionen per sé los programas políticos e intereses propios. En ese sentido, se pone en evidencia una tensión que ha salido a flote entre los dos procesos étnicos en otras partes del Cauca. En este caso, el tema territorial deja de manifiesto esa tensión subyacente, debido a la existencia de veredas compartidas por indígenas, mestizos y afrodescendientes en la zona occidental. Es el caso como hemos visto de Bellavista y Comedulce en el noroccidente, frontera con Buenos Aires, que son habitadas por familias mestizas y por afrodescendientes. Los afrodescendientes de esta zona vienen siendo organizados en dos Consejos Comunitarios por parte de la Asociación de Consejos C. de Suárez<sup>385</sup>. Al extremo sur, en el corregimiento de Mesetas, las familias indígenas son minoría (14 familias con 27 personas) en medio de una gran mayoría afrodescendiente y mestiza. El proceso afrodescendiente procura proteger sus aspiraciones territoriales y de organización autónoma sobre esas áreas compartidas en la reunión. El presidente de la Asociación de C. Comunitarios de Suárez, que para ese momento era el propio Gustavo Zapata, hace llamados al respeto y resalta la presencia del Consejo Comunitario Negro en la vereda compartida Bellavista, aclarando que esperan reclamar también sus garantías territoriales<sup>386</sup>. Frente al papel de la institucionalidad, los afrodescendientes también hacen

---

<sup>384</sup> El Gobernador del Cabildo Carlos Cobo explicaba el tema desde su posición política: “El cabildo nunca quita tierra, a nadie, acá los indígenas actúan sobre el marco legítimo y del derecho sobre las tierras de los terratenientes; nosotros respetamos las tierras de los compañeros afros y campesinos de acá de la región como levamos (Sic) a quitar las tierras. Que la comunidad este (Sic) mencionada no quiere decir que el cabildo desconozca que otras comunidades están allí, somos diferenciales en derecho. (...) no quiere decir que estén dentro del título sino que hay familias indígenas allí.” (INCODER. 2012 Octubre 17: 3, 4)

<sup>385</sup> C.C. de Bellavista y C.C. Brisas de Marilópez de la vereda Las Brisas.

<sup>386</sup> “Gustavo Zapata. En el marco de que cada uno quiere proteger sus territorios y defender sus derechos, tenemos el desafío de respetarnos las diferencias (...) Las diferencias internas las abordamos pero las cuestiones legales sea la Resguardo o Consejo Comunitario y Campesinos debe ser respetada cada cuestión.” (INCODER. 2012 Octubre 17: 5)



un llamado, entre ellos Simón, señalando que muchas de las contradicciones que han surgido entre negros e indígenas en el Cauca han sido generadas por el mismo Estado. Ejemplifican referenciando el conflicto por la finca San Rafael, entregada al Resguardo de Toribío en medio de una zona históricamente afrodescendiente en Santander de Quilichao, y donde las agresiones entre indígenas y afrodescendientes dejaron dos muertos en 2011 (Verdad Abierta, Marzo 2014). Este sector le insiste al Incoder ser claro con la asignación de tierras y tener en cuenta los contextos.

En medio de todos estos llamados, percibo que la posición de los campesinos pareciera reforzarse. Uno de éstos solicita que el trámite se limite a los 7 predios. El señor Alonso Giraldo va más allá, subraya su preocupación por el futuro del Resguardo, considera que se debe aclarar cuál es la proyección de los pueblos indígenas y afros con relación a su *expansión territorial*, lo que llaman, según él, el “saneamiento del territorio”. Explícitamente manifiesta que esta primera declaración es el inicio de un proceso de incorporación progresiva de tierras al título colectivo, el cual no brinda garantías para los campesinos, pues ha conocido “la forma de trabajo” del movimiento indígena, que moviliza gente de otros municipios para tomarse las tierras y sacar personas de determinadas zonas. Según mi percepción de la reunión, a esta altura la tensión rayaba en la ruptura. Pareciera que el malestar entre los sectores comunitarios por los distintos intereses imposibilitara llegar a un acuerdo. Ante el panorama de tensión, el delegado de la ACIN solicita un “espacio autónomo”, exclusivo para el diálogo entre indígenas, negros y campesinos. Los campesinos y Giraldo no se quedan, y finalmente el diálogo se realiza entre organizaciones negras e indígenas. Resultó decisiva, desde mi punto de vista, la perspectiva política con la que el delegado de la ACIN orientó el intercambio. Él destaca la necesidad de reconocerse como “aliados estratégicos” frente a su enemigo real y principal: los grandes capitales, nacionales y transnacionales, los cuales “sí están claros en su objetivo de mercantilizar y rentar de la tierra y los recursos naturales por encima del que sea” (Diario de Campo 17 de octubre 2012, acta propia). En ese marco, manifestaba, la titulación colectiva, negra o

---

Simón en su entrevista me explica que van por la titulación colectiva de esos Consejos. Le pregunto qué han dicho los indígenas sobre esa intención, y me explica que “han respetado eso. (...) ahí se tiene la Comisión interétnica, para mí, yo digo una cosa, de que la relación con los indios ha sido buena.” Frente a los problemas que se han tenido “Hemos ido conversando, hemos ido hablando (...) más que todo pues como la confianza que nos tenemos con algunos indígenas”.

indígena, les conviene a todos los pueblos étnicos que luchan por su pervivencia, por lo que entorpecer estos procesos no era positivo para ningún sector. Consideraba necesario impulsar una titulación colectiva intercultural, con marcos de gobernabilidad en los que se concierten mecanismos entre las organizaciones negras e indígenas, propuesta que se está poniendo en marcha en otras partes del país, según informó.<sup>387</sup> Después de expresarse mutuas inconformidades, las organizaciones acuerdan retomar el espacio local de intercambio interétnico suspendido tiempo atrás, en donde se tratarían temas de alianzas estratégicas, límites territoriales y las proyecciones de expansión de las titulaciones colectivas, en pro del respeto territorial y la confianza.

Con todos los actores en la reunión nuevamente, el sector afrodescendiente manifiesta su acuerdo con la constitución del Resguardo en los predios mencionados, y los indígenas expresan lo propio frente a la titulación de tierras colectivas negras. El Cabildo se compromete a concertar con las comunidades afrocolombianas y campesinas para su ampliación. Se plantea continuar reuniéndose y construyendo autónomamente una agenda para el fortalecimiento de la “territorialidad común.”<sup>388</sup>

Como cierre de la reunión los campesinos anuncian que su iniciativa es constituirse como Reserva Campesina con la asesoría de Asoproasa, el Consejo Campesino de la zona del embalse, el Consejo Interamericano de Desarrollo Rural, y la Casa Nacional Campesina en Bogotá. No obstante, Meraldiño considera que esta reivindicación ha tenido una dinámica más individual que colectiva, desde la iniciativa de esos líderes comunitarios. Según su percepción aquella no ha cristalizado como un proceso amplio, no ha “cuajado” según sus palabras (Entrevista con Meraldiño diciembre 2014). En fin, el proceso de Resguardo y las oportunidades que la coyuntura actual supone para la creación de Zonas de Reserva Campesina, parece profundizar el impulso por diferenciarse entre algunos de los contradictores, que optan por realzar sus diferencias políticas, llegando a re-aglutinarse en torno a una bandera diferente, en este caso, la causa campesinista. Aunque esta lectura

---

<sup>387</sup> Diario de Campo, Acta propia de la reunión citada por el Incoder y desarrollada el 17 de octubre de 2012 en Suárez, Cauca.

<sup>388</sup> Otros compromisos: “-Que se verifique bien el mapa para generar tranquilidades a las partes y seguir avanzando en el proceso de constitución del resguardo y garantizar el territorio correspondiente a las Comunidades Campesinas y Negras. - La subgerencia de promoción solicitara a la subgerencia de tierras la participación para asesoría en lo atinente a tierras para las comunidades campesinas y sus estructuras organizativas.” (INCODER. 2012 Octubre 17: 6)

puede ser apropiada para esta situación específica, también puede ser discutible teniendo en cuenta que el proceso organizativo de sectores campesinos en el municipio de Suárez se remite a décadas atrás. Recordemos que las movilizaciones en los 80's por los impactos del embalse se dinamizaron a través de organizaciones campesinas que jugaron un importante rol durante muchos años.

Es probable que el contexto en el que el Cabildo debe realizar su trabajo organizativo (JAC distantes, convivencia con una amplia población mestiza), lleve a varios de sus líderes, como he observado, a considerar la propuesta campesinista como un potencial elemento desestabilizador para el fortalecimiento de la organización. La reunión que venimos de describir ilustra un poco lo que puede haberles llevado a esta percepción: algunos de los históricos contradictores del proceso indígena son quienes enarbolan con mayor ahínco la bandera campesinista y uno de los titulares mineros más cuestionados por los miembros del Cabildo parece sentirse cómodo reivindicándose como tal para altercar la constitución del Resguardo.

Al dialogar del tema con Simón veo que vincula la propuesta campesina más con organizaciones campesinas como el CNA y el CIMA, que hacen parte de su red solidaria regional. El entrevistado manifiesta su respaldo a las Zonas de Reserva Campesina mientras no afecten territorialmente los Consejos Comunitarios ni los Resguardos, “porque es que yo digo, la negación de derechos no pueden (Sic) decidir. Si yo tengo el derecho de organizarme, no le (Sic) puedo negar a ellos [campesinos] el derecho de organizarse. Claro, organícense, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es como vamos a repartir el territorio”. No obstante, también reconocía que esta figura –las ZRC- tienen una gran desventaja jurídica frente a la titulación colectiva, el campesino no es “sujeto de consulta”, por lo que pasar de ser comunidad étnica a campesina es “retroceder” <sup>389</sup> (Entrevista con Simón 2014).

---

<sup>389</sup> Explica que al visitar algunas comunidades de arriba, zona occidental de la parte alta del embalse: “nosotros les dijimos: ‘vea, ustedes tienen 3 posibilidades, o resguardo, o reserva campesina o son consejo comunitario, pero lo que sí ustedes no pueden quedarse por ningún lado del mundo, es quedarse tal como mayoritario [mestizo]’ porque se queda uno sin paraguas. (...) A mí me parece que los campesinos tienen todo su derecho de organizarse, pero mientras que no tengan el reconocimiento como grupo étnico, pa’ (Sic) la pelea territorial van a retroceder, porque no son sujetos de consulta (...) yo soy de un Consejo Comunitario, ¿devolverle a campesinos? No señor. Y yo creo que los indígenas tampoco le vayan a

También me informa que posterior al encuentro, las organizaciones afrodescendientes conformaron una comisión para verificar directamente en campo la ubicación de una finca que resultó estar mal ubicada en el mapa presentado por el Incoder. Con esta información, indagué un poco más en uno de los encuentros con Meraldiño en Cali, quien me aclara algunos detalles del episodio en una pequeñísima entrevista,

[La finca] aparecía era entre, entre la represa La Salvajina y casi el territorio de La Toma, sí el mapa, entonces ahí ya, prácticamente llevaba las de perder fue el Incoder, y se llamó a que tenía que rectificarse eso, pero para mayor seguridad entonces se convocó de que los negros irían a visitarnos allá en el territorio, y así fue (...) claro, la finca no estaba en el territorio de las comunidades negras, taba (Sic) en el territorio de nojotros (Sic), entonces de ahí pa'llá (Sic) fue donde ya prácticamente se dice entonces que la comunidad negra ya quita como ese impedimento que venían haciendo anteriormente para que nos constituyéramos en resguardo (Entrevista con Meraldiño Caviche diciembre 2014)

Meraldiño me argumentaba en aquella misma ocasión que, según su opinión, la exigencia territorial debe ser planteada teniendo como referente la imagen de “parcialidad” y no la de un “globo de territorio” exclusivo para una u otra comunidad. Cuando se observan las características que ha tenido el proceso de constitución de Resguardo y la realidad de veredas compartidas que enfrenta, se comprende por qué el líder indígena aboga de esta manera. Lo anterior evita, según él, excluirse entre sectores. También manifiesta que ha observado que desde los afrodescendientes la exigencia territorial, aunque completamente legítima, es planteada frecuentemente como un territorio exclusivo de Consejos Comunitarios.

Cuando hablamos de la recolección de escrituras en La Toma para la titulación colectiva, Simón me expresa que la exigencia territorial en ese corregimiento debe ser con base en un “globo de territorio”, en un conjunto compacto, según interpreto. Le explico que el proceso de Resguardo ha sido diferente, pues depende de la voluntad que tenga la gente de donar sus predios. Frente a eso, mi interlocutor manifiesta que la titulación colectiva, desde su

---

jalar a nada de eso. ¿Cómo uno vamos (Sic) a retroceder? ¿Cómo vamos a renunciar a un grupo étnico? Si como grupo étnico tenemos derechos especiales (...) y como no son sujetos [étnicos], les pueden expropiar, les pueden hacer lo que sea (...) yo lo que les he dicho a la gente del CNA a la gente del CIMA, aquí lo que tienen que buscar es reconocimiento de Naciones Unidas, que los reconozcan como grupo étnico, porque también pasó en el Perú, en el Perú, los indígenas [del Amazonas] renunciaron a ser indígenas para ser campesinos, y ahí los tienen, vea, jodidos.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014)

punto de vista, no puede ser por pedazos, primero una parte y luego la otra. Pone el ejemplo del cuerpo: él funciona todo, no puede ser que primero un brazo, luego la cabeza, más adelante un pulmón. Con relación al territorio de “la parte alta” occidental, me recuerda que en aquella reunión hablaban que sería necesario un territorio intercultural, reconociendo la existencia de las diversas comunidades. Aquellas conversaciones con Simón y Meraldiño así como el acercamiento que he tenido con los dos procesos de colectivización del territorio me sugieren que la diferencia entre los contextos del corregimiento de La Toma y de algunas zonas de la “parte alta” donde conviven comunidades negras, mestizas e indígenas (porque no toda tiene las mismas características), lleva a que los líderes tengan acentos diferentes en la forma como conciben esos procesos.

A pesar de la posición que Meraldiño me explicaba sobre la inviabilidad de los “globos de territorio” en la zona occidental, se han despertado sensibilidades<sup>390</sup> entre los líderes afrodescendientes pues parecen haber interpretado que el Resguardo abarcaría “los 5 corregimientos”. Puede que la figura de “parcialidad indígena” en ocasiones sea referenciada por algunos líderes indígenas como si englobara por completo los cuatro corregimientos en los que se ubica (cuando, por ejemplo, expresan que los corregimientos *son* parcialidad), lo cual he identificado en algunos espacios en los que he participado. Sin embargo, el recuento que realizó el Incoder del proceso de constitución en la reunión de octubre de 2012, parece aclarar que, desde tiempo atrás, se viene trabajando exclusivamente sobre las escrituras de los miembros de la organización indígena, más cuando es un requisito que los predios para este fin sean donados voluntariamente o comprados. Al interpretar las diferentes posiciones de los líderes étnicos con los que he

---

<sup>390</sup> Me explicaba Simón sobre la reunión con el Incoder: “particularmente estuve allí, lo celebro, porque también es una forma de blindar el territorio. Porque el territorio tiene que verse de una forma integral. Entonces uno lo celebra, sino que hay unas consideraciones que se hicieron y es que el Resguardo no se puede constituir sobre comunidad negra. Entonces ahí ya está. Eso es lo que nosotros reclamamos. Porque ellos en un principio estaban diciendo ‘no, que se crea ese resguardo en los 5 corregimientos de la parte alta’, y entonces no, ‘no hagan eso así, porque eso va a traer líos’, porque la gente no se va a reconocer como indígena, y menos uno como negro. A: y ¿quién dijo que iban a constituirlo en todos los corregimientos? S: no, ellos hicieron la solicitud así. (...) El acuerdo fue que se crea el Resguardo en las fincas del Resguardo y del territorio del Resguardo que es clave, y es claro pues, aquí saben dónde hay comunidad negra y dónde hay comunidad indígena. Sí, entonces hay un lío que es con los campesinos. Entonces los campesinos, o la mayoría, esos son denominados ‘mayoritarios’, que es el mestizo, entonces la mayoría, yo pa’ (Sic) mí, hay unos que sienten más afinidad con los afros, otros con... (...) y lo último que estábamos diciendo es que Suárez que la parte alta debería ser un territorio intercultural.” (Entrevista con Simón Rodríguez 2014).

intercambiado al respecto, identifiqué que parecen reclamarse mutuamente garantías y condiciones similares, denotando a la vez una aceptación y un cuestionamiento.

Después de casi 4 años de proceso formal, aún hoy no ha sido expedida la resolución declarando el Resguardo, más allá de los vaivenes y conceptos jurídicos en torno a las “medidas de protección” que han impedido su culminación<sup>391</sup>. Según Meraldiño, esta batalla jurídica y política se intentará enganchar a los procesos y mecanismos que para los “territorios ancestrales indígenas” se deriven de los Decretos Autonómicos que el movimiento indígena viene negociando con el gobierno de Santos<sup>392</sup>.

---

<sup>391</sup> Primero, el Incoder planteó una ruta, la entrega de las escrituras a esta entidad, las entregaron a finales de mayo de 2013 “y desde entonces no hay trámite alguno real. Con ese recorrido anunciado, los cabildantes de cerro tijeras y ACIN en 2012, dijeron que no era necesaria intervención de La Gobernación”. Sin embargo, no sucedió nada, por lo que en otras consultas asesores del Departamento emiten otro concepto señalando las rutas: 1 el Municipio de Suárez debe autorizar la enajenación de los predios aclarando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de S. de Quilichao que se conservaría la medida de protección de todos los otros predios. 2. También “la Administración Departamental podrá hacer la Autorización”. Oficio Asunto: Consulta con el nivel central ante –Incoder. Para David Duarte. Sin fecha, finales 2013 principio 2014. Y Concepto de pertinencia y autorización de levantamiento de medidas cautelares en los 7 bienes inmuebles que conforman el territorio del cabildo Cerro Tijeras, en el Municipio de Suárez (Cauca). De la Asesoría Jurídica del Departamento a la Secretaría de Gobierno y Participación Social de la Gobernación del Cauca, fechado a 15 de febrero de 2013, Popayán.

<sup>392</sup> “pues estamos viendo que no es tan cierto [que el Resguardo protege] (...) no porque no esté la ley ni porque esté la, la constitución, sino que, por encima de la constitución, eee, hay otros intereses de quienes legislan y de quienes hacen las leyes pues a través de, de unos intereses explotadores (...) hablando personalmente con, con, creo que llama María Eugenia [delegada de MinMinas en reunión con el Cabildo] (...) ella dice que ellos son autoridades mineras y que por lo tanto, mientras los territorios no tengan un título ancestral [colonial], pues sencillamente para ellos no tiene ningún, ningún sentido (...) prácticamente lo que nos dice es que nosotros no tenemos derecho por qué reclamar y que aquí se haría minería en el territorio por encima de lo que sea. (...) La visión de nosotros es la de constituirnos en Resguardo y posteriormente hablar de ampliación de Resguardo (...) Pero, de igual manera hemos dicho la figura de la ampliación del Resguardo pues no va a pasar. Uno, porque ya hay unos intereses (...) Y dos, si pasa, pasa por ahí a la vuelta de unos cincuenta, ochenta años cuando realmente ya está todo invadido y, y ¿ya para qué? (...) ¿Cómo jurídicamente no solamente proteger las trescientas y pedacito de hectáreas que tenemos, que eran para la construcción de Resguardo, sino proteger totalmente la parcialidad del Cabildo? (...). (Entrevista con Meraldiño Caviche)

## **CAPÍTULO V**

### **5. Conclusiones**

La intención de este trabajo consistió en reconstruir el conflicto minero en Suárez Cauca y describir las relaciones que establecían diversos actores implicados en él, prestando especial atención a las acciones y decisiones del Consejo Comunitario de La Toma y el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras. Los resultados se relacionan con tres dimensiones: 1) el conflicto, 2) los diversos actores, institucionales y mineros y 3) las organizaciones étnicas y sus perspectivas estratégicas.

Aunque antes del 2004 se registran algunas situaciones de contradicción, especialmente entre líderes tomeños y dueños de “retros” y dragas, la memoria de algunos líderes afrodescendientes e indígenas sobre el inicio de la férrea disputa en torno al oro se remonta a ese año, el 2005 y el 2006, así como documentos abiertamente críticos frente a la entrega de concesiones mineras. A partir de esos años se identifica un nuevo periodo caracterizado especialmente por la entrega masiva de derechos mineros legales a agentes foráneos, la llegada de multinacionales mineras y con esto, el comienzo de un fuerte conflicto minero.

En documentos del año 2006 en adelante se registran diversas acciones organizadas adelantadas por parte del Cabildo Indígena Cerro Tijeras y el Consejo Comunitario de La Toma en las que se denota una oposición abierta a la entrada de la Sociedad Kedahda S.A. y en general a las multinacionales mineras en sus territorios así como una profunda prevención ante la titulación minera concedida y solicitada en la zona. Las acciones colectivas y la denuncia de estas dos organizaciones étnicas marcan la emergencia de una tensión que pasó de ser un asunto más o menos aislado, restringido a un problema de algunos líderes de esas dos organizaciones, a ser una problemática más general en la que amplios sectores de las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas se inclinan a cuestionar y rechazar los supuestos beneficios de los proyectos mineros impulsados por estos actores.

La participación previa del Cabildo y el Consejo en redes de organizaciones sociales de diversas características y niveles de incidencia, les permitió acceder y construir determinadas interpretaciones críticas de estas realidades afrontadas, y posiciones políticas frente a la política minera estatal. En estas redes circulaba no solo la información escueta sobre titulación en el Cauca y la política minera, sino versiones de lo que es problemático en el mundo actual y reivindicaciones ligadas a esquemas interpretativos específicos.

En el desarrollo del conflicto han confluído múltiples actores mineros y han incidido numerosas medidas institucionales –de alcance local, regional y nacional-. Esta realidad hace de él un conflicto que fluye continuamente impulsado por acciones organizadas, políticas, institucionales, lanzadas desde distintos ángulos con distintas direcciones. Las condiciones políticas se han modificado permanentemente a lo largo de estos últimos diez años, colocando en relaciones de poder disímiles y cambiantes a los actores en conflicto.

Lo anterior podemos ejemplificarlo con algunos de esos momentos: a) La fuerte contradicción adelantada por el Cabildo frente a las propuestas de Giraldo durante el 2010 y 2011 se distensiona a partir del 2012, año en el que la mina El Danubio parece salir de los temas principales en la agenda política de la organización. Este año 2015 parece reanudarse algunas acciones de seguimiento a los impactos de esa mina gracias a la solicitud elevada a la CRC por parte del Cabildo. b) Los amparos administrativos fueron frenados en varias ocasiones por acciones políticas y de hecho de las organizaciones étnicas, ONG's de DDHH, y por el mismo Alcalde de Suárez, sin embargo la intervención de Sarria y MinMinas permitió llevar adelante la medida, que la Defensoría detiene y posteriormente la Corte Constitucional deroga por completo. c) La tragedia ocurrida en CasaMáquinas por la acción de las “retros” obliga al estado a declarar un ARE, la medida institucional es replanteada para la reformulación de polígonos gracias a la incidencia de actores locales, pero la afectación de solicitudes de concesión de multinacionales interfiere en la definición de esos polígonos. El polígono ubicado en la vereda La Toma fue descartado a pesar de que existe allí una gran cantidad de minas de aluvión trabajadas en condiciones de riesgo y la zona de las veredas Pueblo Nuevo y Miravalle fue descartada en circunstancias irregulares



vinculadas con la compañía Cosigo Resources que obtiene su título de forma considerada “fraudulenta” por los líderes del Consejo Comunitario de La Toma. En este último caso la responsabilidad institucional del Ingeominas en ese momento es relevante dado que según Simón fueron algunos de sus funcionarios quienes realizaron el trámite en los registros.

En este sentido, se pone en evidencia algunas de las medidas dirigidas a incidir directamente en lo local y regional, aunque tengan alcances mayores –amparos administrativos, Sentencia T1045A, declaración del ARE-. Otras medidas aparecen vinculadas al conflicto minero desde niveles y circunstancias diferentes, como el caso de la Resolución 5234 que afecta la constitución del Resguardo, proceso adelantado por el Cabildo Indígena. También es el caso de los Decretos que han reglamentado los programas de legalización de minería tradicional/de hecho y el RUCOM, que son políticas nacionales que inciden de una forma específica en lo local, desde unos marcos jurídicos que restringen o abren oportunidades, generando condiciones y recursos para la acción en el conflicto.

Las medidas institucionales permiten acercarnos a la caracterización de un importante actor, el Estado. El desarrollo del conflicto muestra la intervención de un Estado que, en realidad, es una multiplicidad de institucionalidades que reflejan en momentos determinados discontinuidades y hasta contradicciones internas. Los agentes del Estado varían entonces, y varían también la orientación de sus medidas y posiciones. Esto se evidencia, en parte, en el dilatado proceso de declaración del ARE, en las fuertes diferencias entre MinInterior y MinMinas en torno a los amparos administrativos, que es, en sí, la contradicción de fondo entre el marco jurídico que rige el sector minero y las convenciones internacionales que reconocen los derechos colectivos étnicos protegidos finalmente por la Corte Constitucional con la Sentencia T-1045A. En lo local, la posición diferencial de la Alcaldía frente a la AGA –la cual promovía- y frente al desalojo solicitado por Sarria –que intentó detener en un momento dado- muestra también esa variabilidad en las posiciones. Además, a lo largo del tiempo se observa a la Autoridad Municipal pasar de avalar públicamente con un supuesto marco “legal” la explotación ilegal con retroexcavadoras -Acuerdos Municipales de 2002 y 2008-, a apartarse formalmente de

estos agentes. Acompaña, aunque muy tímidamente, el reclamo inicial de los yolombeños contra las “retros” a finales de 2014.

Por nuestra parte, hemos reconocido fisuras en un Estado que no es monolítico. Los distintos agentes estatales son percibidos de forma diferenciada por los líderes étnicos según su dependencia, rol y el funcionario al frente. No obstante, durante el conflicto el gobierno nacional –Ingeominas, Agencia Nacional de Minería, MinMinas, MinAmbiente, Ejército Nacional-, local –Alcaldía, Concejo Municipal-, los juzgados, la CRC, han tendido definitivamente a favorecer a los titulares multinacionales y nacionales en detrimento de los pobladores locales, partiendo de una ley minera que cimentó las bases para este beneficio – Código Minero del 2001-, lo cual también es percibido por esos líderes. Otros actores institucionales han jugado un papel de mayor respaldo a intereses de las organizaciones étnicas como la Defensoría del Pueblo.

De la misma forma en que son heterogéneos los tipos de minería presentes en el municipio de Suárez, en el conflicto en torno al oro y el territorio, participan una heterogeneidad de actores mineros y actores colectivos locales.

El trayecto de los casos de cada actor minero tiene su propia dinámica y momentos. No obstante, por periodos coinciden cronológicamente, por ejemplo, entre finales de 2007 y 2009 coincide la presencia y acciones de AGA, Cosigo Resources, las “retros”, Ruíz y Sarria. En ocasiones, son afectados por un mismo hecho político, como las mesas de trabajo sobre minería adelantadas desde finales de 2009 o el trabajo de sensibilización y organización social desplegado por las dos organizaciones étnicas durante esos años. Además comparten determinadas características en las estrategias y comportamientos. Esto último se pudo observar en la cercanía de AGA y Cosigo con la Cooperativa de Mineros de Suárez, en la insistencia por fortalecer el relacionamiento con las JAC en el caso de AGA y Alonso Giraldo, y en la reiterada utilización de la intimidación violenta con amenazas para beneficiar los intereses de mineros foráneos, que los líderes afectados relacionan con los casos de Sarria, las “retros” y las multinacionales, especialmente la AGA. Frente a este último punto debe resaltarse que durante el 2006 y 2007 se acentúa las amenazas y

persecución de grupos armados ilegales hacia líderes tomeños y a partir del año 2009 se acentúan esta vez contra líderes del Cabildo Indígena y del Consejo Comunitarios.

La memoria que las personas entrevistadas tienen sobre la llegada y acción de los diferentes actores mineros en el municipio varía según la relación que hayan tenido con las minerías – geográfica o por práctica- y según su nivel de implicación política en las organizaciones étnicas.

Con relación a los agentes que explotan minas con retroexcavadoras es importante señalar que han aumentado la utilización de medios coactivos, de amenazas, persecución y terror, hacia líderes afrodescendientes e indígenas desde su regreso a finales de 2010. Esta estrategia se despliega en articulación con grupos armados ilegales como las Águilas Negras y los Rastrojos. En ocasiones establecen relación con mineros independientes locales o de la región vinculándolos a sus estructuras como trabajadores temporales. Sin embargo, lo que más puede llegar a estabilizar este tipo de explotación en determinados momentos es la participación masiva de mineros independientes en la extracción de oro durante horarios convenidos por los dueños o responsables del entable minero. Aunque, según un comunero de La Toma, en algunas zonas esto parece estar siendo utilizado como estrategia de respaldo “comunitario” a las minas, durante la presencia de “retros” en los últimos meses en ese corregimiento la participación de la población ha sido bastante menor. Esto está relacionado con el rechazo de los mineros tomeños a ese tipo de explotación y a la intimidación de esos agentes contra líderes del Consejo. La restricción de explosivos para las numerosas minas de filón de Buenos Aires y Suárez fue identificada por muchas organizaciones comunitarias locales como uno de los factores que acentuaba la afluencia de mineros a este tipo de explotaciones en 2007.

La política del Estado para la eliminación de este tipo de minería ilegal hasta el momento no ha logrado ni siquiera su regulación y por el contrario ha exacerbado la tensión entre estos agentes y los líderes étnicos. Su acción se ha limitado a la quema reciente de maquinaria por parte del CTI lo que ha aumentado las amenazas a los líderes. La Autoridad Municipal ha demostrado una profunda incapacidad institucional para asumir la

competencia que por ley le corresponde: detener la minería ilegal. Igualmente, la Policía y el Ejército Nacional se limitan a apoyar el operativo aislado mientras que las explotaciones avanzan. Las explotaciones con Dragas también han generado rechazo de gran cantidad de tomeños. La tecnología de las dragas y de las “retros” es diferente, pero tienen impactos ambientales similares como la remoción de playas y lecho del río, vertimiento de grasas y gasolina al cauce de agua y la contaminación con mercurio. También sus agentes son distintos, pero en 2014 los líderes de Yolombó han vivido una serie de circunstancias que los llevan a pensar que entre unos y otros agentes circula información sobre las comunidades a las que llegan a trabajar.

Las dos organizaciones étnicas han declarado su oposición a la presencia de retroexcavadoras. Esta toma de posición se relaciona con la consideración de una serie de impactos ambientales y sociales negativos que estas explotaciones implican en sus actividades comunitarias y de subsistencia, así como el cuestionamiento del destino de esa riqueza del territorio habitado. La identificación y reconocimiento de estos impactos se ha fortalecido principalmente con el cuestionamiento de la presencia y el proyecto minero de la multinacional Kedahda S.A, llamada luego AngloGold Ashanti, y de la minera canadiense Cosigo Resources. La específica confrontación con las multinacionales ha sido un importante impulso en la consolidación de esta consciencia política específica frente a los impactos negativos que traen los actores mineros foráneos. El marco interpretativo que problematiza y politiza como un potencial despojo estos megaproyectos, permite también alargar cuestionamientos hacia otras formas de explotación minera, incluso las prácticas tradicionales.

Cosigo Resources desarrolló recorridos de prospección en quebradas y afloramientos de Mindalá, Betulia y La Toma. También lo hicieron directamente en socavones de los mineros locales sin su consentimiento y en varios casos con el acompañamiento de la Fuerza Pública. Las acciones de esa compañía en el municipio han estado menos vinculadas con la Alcaldía en comparación con la AGA. Esta última desplegó una estrategia de penetración de la institucionalidad pública local, impregnando con sus aportes económicos y de gestión, el Concejo y la Alcaldía Municipal de Suárez. En este caso, la Autoridad

Municipal funcionó como puente para permear la población suareña y sus agentes comunitarios e institucionales en general, como las Juntas de Acción Comunal. Lo anterior tensionó fuertemente la relación de las dos organizaciones étnicas con la municipalidad, a quien le exigían protección de los intereses de las comunidades locales. La multinacional también incidió en instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC-, autoridad ambiental regional con la cual participó en proyectos de inversión social conjuntos. La AGA incorporó líderes comunitarios y étnicos del sector afrotomeño en su estructura organizacional a través de la figura de “promotores”, personas encargadas de la sensibilización de la comunidad frente al proyecto minero propuesto. A pesar de esta estrategia, el Consejo Comunitario ha logrado que prevalezca su posición política contra la multinacional y ha mantenido a esos líderes como miembros activos del proceso.

La presencia de la AGA ha sido más directa en el corregimiento de La Toma, en la cabecera municipal y en algunas veredas de Mindalá. Aunque su presencia en la parte alta occidental se ha limitado a algunos recorridos realizados por la zona de las veredas La Carmelita y El Diviso, el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras ha sido uno de los dos actores sociales que les ha cuestionado y rechazado desde su llegada, junto al Consejo Comunitario de la Toma. El proceso indígena regional y nacional –ACIN y ONIC- venía incidiendo en el naciente Cabildo y la política minera era una de las preocupaciones relevantes en ese momento, lo que permitió interpretar rápidamente la amenaza que representaba la llegada de estos actores. La presencia de uno de sus líderes en el Concejo Municipal fue una importante herramienta para la denuncia y la oposición en el seno mismo de la institucionalidad política local, que se encontraba volcada hacia la aceptación de prebendas por parte de la compañía. Fue también importante para que la organización indígena se mantuviera cercana a los hechos políticos acaecidos en la cabecera en torno a los actores mineros. La Consulta Previa ha sido evadida sistemáticamente por los titulares que han hecho presencia. Incluso Cosigo Resources pretendió proponer una Consulta con la Cooperativa de Mineros de Suárez y no con los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras que son las organizaciones de gobierno legítimas y legalmente reconocidas por la ley como representantes de las comunidades negras objeto de consulta.

La emergencia de una fuerte contradicción con los hermanos Ruíz, por un lado, y con Héctor Jesús Sarria por el otro, titulares de dos concesiones ubicadas en La Toma marca otro aspecto del conflicto minero en el que se agudiza el rechazo a los agentes con derechos legales. Son actores diferentes a las compañías multinacionales que parecen operar con autonomía, pero considerados por la mayoría de miembros de las organizaciones étnicas como potenciales aliados de agentes mineros con mayor capacidad, como multinacionales o inversionistas. Esta misma consideración es esgrimida por líderes y comuneros/as indígenas a propósito de la mina El Danubio, propiedad del minero paisa Alonso Giraldo. Es recurrente la preocupación por la intención que estos actores podrían tener de negociar con agentes mineros más poderosos.

Los Amparos Administrativos interpuestos por los dos titulares para defender su derecho minero ante explotaciones de hecho desarrolladas por nativos convirtieron el 2009 y 2010 en años de fuerte movimiento político y organizativo, principalmente para el Consejo Comunitario, pero también en cierta medida, para el Cabildo. Aunque el amparo de los Ruíz parecía afectar directamente a más personas –entre 20 y más de 70 personas en título EKE-151 y 11 mineros en título BFC-021, *según Ingeominas-*, el proceso iniciado por Sarria sería el que generaría un impacto político nacional e internacional mayor debido a la intención de aplicar efectivamente del desalojo. El conflicto con Sarria y el desalojo resultó ser la materialización de una amenaza que para muchos parecía difusa. La comprobación del tenaz poder que aquellos intereses denunciados, no solo de titulares como Sarria sino de las multinacionales y todos sus potenciales aliados, blandían como prueba de un destino de despojo que pretendían imponer sin remedio.

En torno a los Amparos Administrativos se concentraron muchos esfuerzos de las organizaciones locales -Consejos y Cabildo- regionales y nacionales –ACIN, PCN, entre otras-. Cobraba mayor vigencia la lucha contra los títulos mineros en general. Incluso después del fallo de la Corte, distintas fuentes señalan la existencia de tomeños que cooperan con los hermanos Ruíz, especialmente con Olga Nidia Ruíz, a diferencia de Héctor Sarria que parece no haber podido establecer relaciones de cooperación con mineros o habitantes locales.

Otras organizaciones gremiales y comunitarias han tenido un papel en el conflicto. Ya hemos referenciado la vinculación de la CMS con las multinacionales, lo cual ha incidido en las decisiones de los líderes del Consejo. En especial, ellos han definido que la organización étnica debe obtener el control del polígono del ARE que se ubica en ese corregimiento que probablemente la CMS también aspira manejar. Quien se haga a este derecho minero, expresado en una Concesión Especial, puede adoptar una política de alianzas estratégicas en la que se podría favorecer las empresas multinacionales. Para lograr la concesión han avanzado una serie de decisiones tácticas, entre esas la creación de una Cooperativa propia. Esta intención de la organización étnica es una forma de controlar factores institucionales y legales que hacen parte del ambiente, de las oportunidades y los recursos en el conflicto. Muy pocos líderes del Cabildo Indígena parecen estar informados sobre la figura del ARE existente en el municipio o de la CMS. Los que conocen del tema tienen una fuerte prevención ya que consideran que el objetivo del gobierno con ésta es acercar los mineros locales a inversores estratégicos que al aliarse finalmente pondrían las condiciones del negocio.

De esta forma las dos organizaciones étnicas desplegaron estrategias de resistencia frente a los intereses mineros foráneos en general presentes en lo local y potencialmente interesados. En este sentido las organizaciones también presionaron para la realización de las Mesas de trabajo mineras que se acordaron durante el 2009, estas iniciativas evidencian la acción política organizada ante la institucionalidad política y la insistencia de las organizaciones étnicas por generar espacios para incidir en la toma de decisiones de estos agentes de estado, elementos “externos” del ambiente. En ellas solicitaron la anulación de los títulos por no haber tramitado la Consulta Previa así como los trámites de las solicitudes y especialmente se exigió la derogación de los amparos administrativos. Se realizaron Audiencias Públicas en la cabecera de Suárez sobre DDHH y minería, en La Toma para dialogar con el estado y abordar el tema minero con las comunidades. Fue uno de los periodos de mayor cooperación entre sectores étnicos del municipio y participación en espacios y eventos conjuntos.

Consideramos que el conflicto minero es un contexto que puede inclinar en un mismo sentido la acción organizada del Cabildo Indígena y el Consejo Comunitario, en la medida que hacen frente a determinados enemigos comunes, más especialmente a multinacionales mineras. No obstante la potencial perspectiva de alianzas y cooperación que esta disputa específica puede generar en su política de relacionamiento interorganizativo, es necesario resaltar que las expectativas territoriales del Cabildo Indígena y del proyecto étnico afrodescendiente municipal, en especial la titulación colectiva en áreas occidentales de Suárez aspirada por la ASCONC, ha generado tensiones entre las organizaciones étnicas de los dos sectores. En cada caso la titulación colectiva responde principalmente a una estrategia de legalización de esa territorialidad que vienen ejerciendo y consolidando como comunidades étnicas frente a la amenaza de despojo que representa la política minera nacional. A pesar de este aspecto en común, cada proyecto político y comunitario se funda en su propia autonomía y sus particularidades culturales, por lo que dirimir las aspiraciones de control territorial legítimo y legal sobre un territorio en común no se resuelve necesariamente con el reconocimiento de una amenaza compartida y una alianza estratégica ineludible.

La acción organizada dentro de las comunidades locales se ha desarrollado en a través de reuniones y asambleas en las veredas de su influencia, cada uno de los sectores con sus formas y tiempos particulares. En general podemos identificar que buscaban difundir su interpretación de las políticas, las consecuencias de los proyectos mineros y la llegada de nuevos actores interesados en el oro. Intentaban consolidar imaginarios diferentes a los promovidos por estos agentes, orientar el comportamiento de los habitantes del territorio frente a los ofrecimientos de estos y contar con la participación de las personas en las acciones organizadas que decidían para afianzar un ejercicio de control territorial. Crear consensos frente a la naturaleza del conflicto y la acción que permita la legitimidad de la autoridad étnica tradicional y la efectividad del gobierno propio.

A pesar de estar en el mismo municipio las dos organizaciones se ubican en contextos diferentes. La zona occidental es bastante más amplia y cuenta con una heterogeneidad mayor de la población por la migración, los mismos indígenas provienen de diferentes



partes del Cauca. En esa zona el número de mestizos o personas sin autorreconocimiento étnico es igual o tal vez mayor a las indígenas. Las comunidades afrotomeñas descienden de los terrajeros que habían sido liberados a mediados del siglo XIX. La gran mayoría de personas en ese corregimiento son afrodescendientes. Parece haber mayor continuidad -en la acción, en la comunicación, en los miembros- entre las JAC's y el Consejo Comunitario que entre JAC's y Cabildo.

Más allá de los espacios internos y comunitarios amplios para afrontar los agentes mineros contrarios, cada una de las organizaciones despliega una serie de programas político-organizativos por medio de los cuales se esfuerza por orientar ese destino social de la población étnica y su territorio. Aquello representa el gobierno propio desde un panorama mucho más amplio. La promoción y construcción de un Plan de vida en el caso del Cabildo por ejemplo, representa esa lucha por formalizar ese gobierno tradicional.

El conflicto minero puede considerarse como un fenómeno que emerge gracias a la problematización que grupos de líderes comunitarios venían desarrollando sobre la permanencia y pervivencia de sus poblaciones en un territorio política y económicamente en disputa. En esta medida, las situaciones de despojo y dominación social, especialmente la construcción de la represa La Salvajina, el proyecto de Desviación del Río Ovejas hacia el Embalse Salvajina, la incursión paramilitar hacia el Naya con la consecuente masacre, el incumplimiento de los acuerdos del Acta del 86 y la negación del derecho a la salud, jugaron un importante papel en la consolidación de un proceso étnico desde donde se dimensionó posteriormente la nueva realidad minera desde el cuestionamiento, desde un esquema interpretativo en apropiación y construcción. Estas experiencias sociales previas de despojo y contradicción, además de otras más lejanas en el horizonte histórico, y un nuevo contexto nacional en el que se enfatizaba en el reconocimiento de derechos colectivos a comunidades étnicas, permitieron avanzar en una mixtura de matrices interpretativas y discursivas desde donde fue posible para las nacientes organizaciones étnicas ordenar, rememorar, politizar y proyectar hacia el futuro aquellas experiencias sociales y oportunidades políticas. Esto en función también de resistir a una nueva amenaza identificada por esos mismos actores en construcción. De manera que, como hemos observado, ni el conflicto ni la articulación de la etnicidad son reductibles a un problema de

acceso a beneficio o al oro como recurso, han implicado la problematización y defensa de toda una serie de aspectos relativos la vida social de las comunidades, su relación con el territorio y su ejercicio de territorialidad.

En el desarrollo del conflicto minero la consolidación de la autoridad étnica y el gobierno propio resultan estratégicos para incidir en las relaciones de poder existentes. De esta forma podemos considerar que ese contexto genera unas necesidades y las oportunidades políticas brindadas por el reconocimiento de derechos colectivos étnicos se convierten de esta forma en una ruta que no solo interpreta las experiencias sociales pasadas sino que ofrece recursos en la disputa legal y política. En este sentido este conflicto es uno de los motores de los esfuerzos de los diversos líderes por consolidar la propuesta política e ideológica de la autoridad étnica en estas comunidades.

Para terminar, cada organización étnica adopta matices diferentes en las posiciones y percepciones frente a las herramientas institucionales y jurídicas que tienen a la mano para afrontar el tema minero. Debido a sus trayectorias históricas diferentes, en especial su experiencia generalizada o no de la minería como comunidades, estas organizaciones aparecen con lógicas, preocupaciones y eventualmente con objetivos también distintos, y se encuentran en condiciones y necesidades particulares ante esas oportunidades y contextos.

Por un lado, la constitución del Resguardo se percibe al mismo tiempo como una posibilidad para blindarse y como una herramienta muy limitada, especialmente por las dificultades para hacer el proceso formal de titulación a numerosos predios de indígenas con problemas de escrituras. La condición de parcialidad también complejiza la realidad del Cabildo Indígena en la zona occidental. Por otro lado, el Consejo Comunitario apunta a incluir integralmente el corregimiento de La Toma en el título colectivo.

La consulta previa es vista por muchos líderes/as negros/as como una oportunidad a partir de la cual se pueden detener los títulos mineros, a diferencia de diversos líderes indígenas, que tienden a concebir esta herramienta como una posibilidad de atenuar los impactos de los proyectos sin contar con la garantía de detenerlos. Desde ese punto de vista es un mecanismo para concertar el cómo de las iniciativas mineras.

Como ya hemos señalado en múltiples apartes, el Consejo Comunitario apuesta por controlar el Área de Reserva Especial ubicada en su territorio. Una de las oportunidades que se abren después de la titulación colectiva es la consecución de una Zona Minera Afrodescendiente que es considerada como una positiva herramienta en reuniones organizativas. Por el contrario, algunos líderes del Cabildo ven en el ARE y en las ZMI o ZMM un alto riesgo pues pueden desembocar en la alianza de pequeños y grandes mineros así como transformar las formas de vida, incluso bajo el control de la organización. El Cabildo tiende a adoptar una posición política en la que descarta estas figuras como tácticas de resistencia.

Cada organización, aunque heterogénea en sus miembros y posiciones internas, tiene una forma particular de relacionarse con las minerías. El Consejo Comunitario de La Toma asocia las actividades mineras que desarrollan sus miembros con un beneficio comunitario entre otros aspectos positivos. En otro sentido, el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras tiende a asumir una posición de distancia hacia las minerías en general y, aunque se reivindica la minería ancestral, tradicional, especialmente la artesanal, es permanente la preocupación sobre el desarrollo y crecimiento de esas actividades. Podemos decir que la minería se asocia a un beneficio más individual que comunitario y se tiende a cuestionar cualquier tipo de minería en esta organización étnica.

En los dos casos, mientras enfrentan poderosos intereses económicos y políticos, el Cabildo y el Consejo se reconfiguran permanentemente, delinear sus posturas, consolidan sus líneas de acción y el ejercicio del gobierno propio en un territorio en permanente construcción.

## Anexos

### Anexo 1

<b>Fechas Generales</b>	<b>Lugares visitados y fechas entrevistas</b>	<b>Observaciones</b>
14 de octubre 2011	Cerro Tijeras: el Amparo, Alejandría	Comisión DDHH del Congreso de la República.
18 al 21 de noviembre	Cerro Tijeras: Altamira, El Diviso, La Chorrera.	Comisión DDHH y de Solidaridad universitarios y defensores de DDHH. Casa de Isaías Güetio
24 al 27 de mayo de 2012	Cerro Tijeras: Altamira, El Hormiguero, Robles	Escuela de Comunicación Popular. En Casa del Cabildo
Del 15 al 26 de septiembre de 2012	Cerro Tijeras: Altamira	Primeros cuatro días en la Escuela de Comunicación Popular y los siguientes permanecí en las dinámicas comunitarias. En casa del cabildo.
11 al 28 de octubre de 2012	11 al 22 de octubre en Suárez cabecera	Primero en la AIC Suárez, durante esos días se concreta mi acompañamiento al recorrido del gobernador Carlos Cobo. Varias casas en algunas veredas.
	22 a 28 Cerro Tijeras: Aguacalara, La Carmelita, Alejandría, Aguabonita, San Pablo, Robles, Olivares, Altamira.	
5 al 26 de noviembre de 2012	5 al 18 de noviembre en Cerro Tijeras: Altamira, El Hormiguero	En Altamira dormía en la Casa del Cabildo, pero luego doña Luisa me invitó a dormir en su casa. En Suárez en la AIC. En Yolombó me acogieron en la casa de Gustavo.
	18 al 21 en Suárez cabecera.	
	21 al 26 de noviembre en La Toma: Yolombó, Gelima.	
17 de marzo al 12 de mayo de 2013 (exceptuando 1 y 2 de mayo).	17 al 27 de marzo en Altamira	En Altamira en casa de doña Luisa. Suárez en la AIC. En Yolombó me quedé donde Gustavo. El 16 de abril dormimos en casa de Vilma en Suárez para ir a la mina de Gisela el 17 temprano, ese mismo día volvimos a Yolombó. Y en la finca de Inguító.
	27 marzo al 4 de abril en Suárez cabecera	
	4 al 26 de abril en La Toma: Yolombó, Gelima, La Toma	
	26 al 28 en la finca del Cabildo ubicada Inguító en una Asamblea Comunitaria.	
	28 al 30 en el pueblo de Suárez; el 30 de abril volví a Cali para participar de la movilización del 1ero de Mayo.	

	3 al 5 de mayo en Suárez cabecera	
	5 al 12 en Altamira.	
29 de junio al 7 de julio del 2013	29 al 4 en Suárez cabecera.	En la AIC en Suárez.
	4 al 7 de julio en Miranda, Cauca. El 6 entrevisté a don Ovidio.	
10 al 18 de agosto de 2013	10 al 16 en Altamira	Casa de doña Luisa. Y en la AIC.
	16 al 17 en Suárez	
23 al 1 de septiembre.	23 al 24 de agosto en el Saakhelu realizado en Toez	En la AIC. Uno de esos días subí a Aguaclara a una reunión que no se realizó.
	24 al 1 de septiembre en Suárez. El 27 entrevisté a Albeiro Cortez que vive en Suárez.	
9 al 11 de octubre de 2013	Altamira	Casa de doña Luisa. Esos días se realizó una asamblea para solucionar un problema entre comuneros y actores armados.
26 de noviembre a 1 de diciembre de 2013	26 al 28 de noviembre en Yolombó	Yolombó en casa de Gustavo. Suárez AIC.
	28 de noviembre al 1 de diciembre en Suárez	
18 al 20 de abril de 2014	La Toma: Yolombó. El 19 de abril entrevisté a Edwin y Mario.	Casa de Gustavo.
21 de abril de 2014	Santander de Quilichao, Univalle	Audiencia Pública: “Situación minera en los territorios Afros e indígenas del norte del departamento del Cauca” estuve hasta la 1 p.m., habían varias personas de Suárez, incluyendo Gustavo y Carlos Cobo.
	Cali, Universidad Icesi	3 p. m. Lanzamiento del libro “La Toma. Historias de Territorio, Resistencia y Autonomía en la Cuenca del Alto Cauca” en la que habló Simón Rodríguez, Marcel Quintero, Gustavo Zapata y los profesores Axel Rojas, Gildardo Vanegas y Ana Solarte.
23 al 24 de abril de 2014	La Toma: Yolombó. En este encuentro realicé la entrevista a Simón después de acompañarlo en sus tareas el mismo 23.	Casa de Simón
29 de abril de 2014	Cali, Universidad Icesi	Conferencia “Creando nuevas vidas, politizando la muerte: mujeres y estrategias de resistencia en contextos de

		violencia” hablaron Vicenta Moreno, Camila Restrepo y Yaneth Valencia en la Universidad Icesi.
Del 29 abril al 4 mayo de 2014	Cerro Tijeras: Altamira. El 3 de mayo entrevisté a Meraldiño.	La asamblea se realizó el 1, 2 y 3 de mayo. Me quedé en casa de doña Luisa y una noche en el centro de salud.
Del 15 al 18 de mayo de 2014	Timbío, Cauca	Estuve en la casa de Enrique Güetio revisando el archivo del Cabildo. Debido al gran volumen de información y a que en su casa no hay electricidad, fue necesario trabajar los documentos desde Cali.
Del 28 al 29 de mayo de 2014	Bogotá	El 29 se realizó la reunión en la Agencia Nacional de Minería, citada por la Dra. Lina Franco. Fue atendida por Juan Camilo Granados, Vicepresidente de Seguimiento y Control, y Ángela Patricia Rojas, Secretaria General de la ANM. Los funcionarios nos presentaron lo que sería entregado a la UTL del Representante a la Cámara Wilson Arias. Asistimos dos miembros de la UTL, Wilson Arias y mi persona. Adelantaron una información, pero su entrega completa se realizó el 6 de junio en la oficina de W. Arias en Bogotá.
Del 3 al 5 de junio de 2014	Dormí en Suárez, estuve entre Yolombó y Suárez durante el día.	Durante estos días dialogué con Gustavo y con algunos líderes de La Toma.
Encuentro a mediados o finales de junio de 2014	Cali	A finales de junio me encontré con Simón en Cali para entregarle la información proporcionada por la ANM y dialogar sobre el tema minero.
Encuentro a finales de junio de 2014. Después del encuentro con Simón.	Santander de Quilichao.	Me encontré en la tarde con Enrique Güetio para devolver los documentos del Archivo del Cabildo que trabajé y le entregué la información obtenida gracias al derecho de petición. Dialogamos sobre reuniones con MinMinas y MinInterior, y sobre algunas fechas de trabajo político del Cabildo.
9 de julio de 2014	La Toma: La Toma y Yolombó	Me encontré con Simón en Suárez para asistir a una reunión en la vereda La Toma. En la tarde estuvimos en una reunión de mayores en Yolombó. Entregué la información del derecho de petición al profesor Alfonso.

11 de agosto de 2014	Carro Tijeras: Aguaclara	Asamblea de socialización sobre el proceso de Consulta Previa al Plan de Manejo Ambiental de la hidroeléctrica de La Salvajina. Entregué la información proporcionada por la ANM a Meraldiño.
1 de septiembre de 2014	Suárez: San Miguel	Asistí a la protocolización del proceso de Consulta Previa con los seis Consejos Comunitarios de Comunidades Negras de Suárez, en la vereda San Miguel en ese municipio, evento del cual me informó Simón.
4 de septiembre de 2014	Cali	II Jornada “Comunidades afrodescendientes y titulación minera. El caso de la Consulta Previa en La Toma, Cauca”, en la Sociedad de Mejoras Públicas, Cali, en el marco del “Diálogo intersectorial para la gestión de conflictos ambientales en el alto cauca.” Entregué información proporcionada por la ANM a Camila Restrepo –representante legal- y a José Antonio Vidal –presidente del Consejo-.
24 de octubre de 2014	Cali. En la tarde realicé entrevista a Enrique Güetio.	Enrique Güetio fue invitado como asistente al “Foro regional sobre implementación de acuerdos y construcción de paz” realizado en Univalle, donde nos vimos.
22 de noviembre	Cali	Acompañé la “Marcha de los turbantes” que pasó por Cali. Las mujeres de Yolombó marcharon desde La Toma a Bogotá para exigir la salida de las retroexcavadoras y anulación de títulos mineros.
3 y 4 de diciembre de 2014.	Cali	Meraldiño se hospeda en mi casa en Cali, debía resolver asuntos del Cabildo. Me aclara varios aspectos y hechos recientes sobre la constitución de Resguardo que grabamos en una muy corta entrevista.
17 al 26 de enero de 2015	17 y 18 en Alejandría, donde se realizó la posesión de la nueva Junta D.	Dormimos en la finca del Cabildo en la

	Durante estos días realicé la entrevista a Ramón Tobar.	Alejandría. En Altamira donde doña Luisa. En el Resguardo de Concepción asistimos con directivas y gentes del Cabildo a la Asamblea regional del Plan de Vida. Del 24 al 25 me hospedó doña Martha en Altamira, luego donde doña Luisa de nuevo. El 26 me encontré con Simón en Suárez, nos desplazamos a La Toma donde le hice una corta entrevista sobre el ARE y Cosigo, temas que no habíamos abordado. Entregué la información de la ANM a Gustavo Zapata.
	19 al 22 en Altamira	
	22 y 23 en Resguardo de Concepción, Santander de Quilichao.	
	Noche del 23 al 24 en Altamira	
	24 Asamblea en Alejandría	
	25 en Altamira de donde salí el 26 de madrugada.	
	26 Suárez y La Toma	
13 y 14 de febrero de 2015	La Toma: Yolombó	Me encontré con Simón en Suárez. Me hospedé en su casa.
16 de febrero	Cerro Tijeras: Alejandría.	Asamblea de empalme de la Junta Directiva, socialización de Consulta Previa a PMA y sentencia Acta del 86.

## Anexo 2

<b>Fechas Generales</b>	<b>Lugares visitados</b>	<b>Actividad</b>
3 al 6 de marzo de 2015	La Toma: Yolombó	Me hospedé en casa de Tomás. Trabajamos en las correcciones del subcapítulo de Retros y dragas el 5 de marzo en la mañana con Tomás, Edwin y Mario. En la tarde trabajé con Simón sobre el trabajo monográfico en general, deteniéndonos en algunos acápites.
8 de marzo de 2015	La Toma: Yolombó	Nos encontramos en la mañana, tipo 11 am, con José Antonio Vidal, Lorenzo Reyes y Daniel Aguirre habitantes de la vereda La Toma y miembros de la Junta de Gobierno. Trabajamos el relato de la relación con Sarria y el amparo administrativo. A eso de la 1 pm llegaron Gustavo, Julián líderes de Yolombó; Vanessa Hurtado de la Junta y Mario Mondragón miembro del Consejo. Mientras hablaban iba preguntándoles, leyéndoles algunos



		<p>aportes del subcapítulos de “Proceso de titulación colectiva” para que me aclararan aspectos. A eso de las 3 almorzamos y algunos se fueron. Entregué la información de la ANM a quienes no se las había proporcionado.</p>
14 a 17 de marzo de 2015	14 en Suárez	<p>En Suárez me encontré con Manuel Belalcázar a quien entrevisté. Hablamos sobre el tema minero, la información disponible de la ANM que le entregué y mi trabajo. En la tarde asistimos a una reunión entre Cabildo y Consejos Comunitarios. En Altamira me hospedé en casa de Julio Cañas. El 15 de marzo nos encontramos Saul Güetio – gobernador- y Leandro G, para hablar del tema minero y de mi trabajo, entre otros temas. El 16 iniciando la tarde asistí a la reunión de socialización convocada por las mujeres de la Marcha de los turbantes en Yolombó. Me hospedé en casa de Tomás con quien salí temprano el 17.</p>
	Noche del 14 al 16 en Altamira	
	Tarde del 16 al 17 en Yolombó	
19 al 20 de marzo de 2015	Cali	<p>El jueves en la tarde Meraldiño llegó a mi casa en Cali, donde habíamos acordado vernos para intercambiar reflexiones sobre mi trabajo de grado. El viernes 20 iniciamos a las 9 am hasta las 2 pm.</p>
20 y 21 de abril de 2015	Popayán	<p>El lunes 20 de abril en la tarde, nos reunimos Meraldiño Caviche de Altamira, Iván Serna del Amparo, Eliecer Cuetia de la Alejandría y David Guamanga de Unión Olivares para revisar diversos temas, entre los cuales la situación de DDHH y los casos de minería en el territorio. Esto de cara a la reunión de la Mesa Interinstitucional entre el Cabildo de Cerro Tijeras y el Gobierno Nacional, Departamental y Local que se realizaría al día siguiente. El 21 de abril las personas nombradas</p>

		junto con el asesor jurídico Hames Larrea, el líder Enrique Güetio y el Gobernador Indígena Saúl Güetio, participamos de parte de la organización indígena en la Mesa que inició a las 9 am y finalizó a las 2 pm aproximadamente. Después del almuerzo la comisión del Cabildo nos reunimos a evaluar hasta las 5:30 pm más o menos.
22 de abril de 2015	Popayán	Asistí al conversatorio "Minería y ordenamiento territorial. Desafíos actuales de las comunidades negras en el norte del Cauca" que tuvo como intervención central la de Simón Rodríguez. También intervino Dairo Herrera, presidente de la Cooperativa de Mineros de Buenos Aires y miembro del Consejo Comunitario del Cerro Teta de ese mismo municipio. Además de captar algunos elementos útiles para mi trabajo en las conferencias, tuve la oportunidad de hablar con Dairo sobre el asunto de los "Giraldo y Duque" y de la estigmatización de la que vienen siendo objeto por las últimas denuncias contra esa empresa.

### Anexo 3

**Tabla 5. Minas tituladas en Buenos Aires 1864-1895**

Nombre de la mina	Clase			Ubicación	Para quienes se titula	Fecha de título			
	Calidad (veta o aluvión)	Mineral (oro, plata, etc.)	Descubrimiento (antiguo o nuevo)			*	Día	Mes	Año
La Teta	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	Tomás C. de Mosquera	24	14	Nov.	1864
La Teta	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	Joaquín Mosquera	25	19	Nov.	1864
La Teta	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	María M. de Mosquera	26	19	Nov.	1864
San Pablo, San Cipriano o La Trinidad y Gelima	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	Tomás C. de Mosquera	27	21	Nov.	1864
San Miguel	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	Rafael Mosquera	5	7	Oct.	1868
San Joaquín	Aluvión	Oro	Antigua	Buenos Aires	Rafael Mosquera	6	5	Jul.	1868
La Teta	Aluvión	Oro	No consta	Buenos Aires	María de Mosquera	38	7	Abril.	1888
Gelima y Portugalete	Filón	Oro	No consta	Buenos Aires	Francisco Crescencio, José A., Dolores, Bárbara y ...Concha	58	9	Jun.	1888
Gelima y Portugalete	Filón	Oro Plata	Antiguo	Buenos Aires	Rufino Concha, otros	268	20	Feb.	1889
San Miguel	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	Rafael Mosquera	378	19	Oct.	1889
San Miguel	Aluvión	Oro	Antiguo	Buenos Aires	Rafael Mosquera	808	28	Sep.	1893
San Joaquín	Aluvión	Oro	Antiguo	Buenos Aires	Rafael Mosquera	809	28	Sep.	1893
Marilópez	Aluvión	Oro	Nueva	Buenos Aires	Pedro Antonio Angola, otros	914	19	Oct.	1895

Fuente: Secretario de Hacienda, Popayán, abril 21 de 1931. Tomado de "La Toma Historias de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del alto Cauca", p. 63.

**Tabla 6. Minas de Gelima y Marilópez (1894-1954)**

Denunciante	Denuncio	Nombre de la Mina	Clase	Ubicación	Año Título
Mosquera W. Manuel María	-	Anganche Alto	A	Gelima	-
Rodas Lisandro	1934	El Carmen	F	Gelima	-
Carabalí Roberto	1935	El Aguacatal	A	Gelima	1935
García L. Juan C.	1935	La Amalia	F	Gelima	-
Lucumí Juan María	1935	El Peñón	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1935	San Miguel	F	Gelima	-
Choco Amalio y Alcides	1936	La Amalia	F	Gelima	-
García L. Juan C.	1936	San Joaquín	F	Gelima	-
García L. Juan C.	1936	Merceditas	F	Gelima	-
García Aurelio	1936	San Juan	F	Gelima	1940
García Aurelio	1936	San José	F	Gelima	1940
García Aurelio	1936	San Pedro	F	Gelima	1940
Lemos Guzmán Domingo	1936	El Dorado #2	A	Gelima	-
Lemos Guzmán Domingo	1936	El Dorado #3	F	Gelima	-
Lemos Guzmán Domingo	1936	El Dorado	F	Gelima	-
Lemos Guzmán Domingo	1936	San Francisco	F	Gelima	-
Lucumí Blas María	1936	San José	F	Gelima	1940
Uribe R. Vicente	1936	El Peñón	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1936	San Juan	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1936	San José	F	Gelima	1940
Vaughn W. Dayle	1936	San Miguel	F	Gelima	1940
Vaughn W. Dayle	1936	San Pedro	F	Gelima	1940
Vaughn W. Dayle	1936	San Juís	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1937	4a. Cont. El Peñón	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1938	La Toma	A	Gelima	1939
Sociedad de Minas El Peñón	1939	Cusumberos	F	Gelima	1941
Sociedad de Minas El Peñón	1939	Salvajina #2	F	Gelima	1941
Sociedad de Minas El Peñón	1939	Salvajina #3	F	Gelima	1941
Sociedad de Minas El Peñón	1939	Mamalena	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1939	El Peñón	F	Gelima	1939
Vaughn W. Dayle	1941	Mataleandro	F	Gelima	1941
Vaughn W. Dayle	1941	San Luis	F	Gelima	1941
Castro Juan de Dios	1942	El Carmen	F	Gelima	1940
Vaughn W. Dayle	1943	1a. Cont. Sureste San Miguel	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1943	1a. Cont. Sureste San José	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1943	2a. Cont Sureste San José	F	Gelima	-
Vaughn W. Dayle	1944	La Cont. Sur San Miguel	F	Gelima	-
Sociedad de Minas El Peñón	1945	1a. Cont. Sureste San Miguel	F	Gelima	-
Sociedad de Minas El Peñón	1945	2a. Cont. Surote San Miguel	F	Gelima	1940
Mosquera W. Manuel María	1954	Campamento #1	F	Gelima	1955
Mosquera W. Manuel María	1954	Campamento #2	F	Gelima	1955
Mosquera W. Manuel María	1954	Campamento #3	F	Gelima	1955
Mosquera W. Manuel María	1954	Campamento #4	F	Gelima	1955
Manrique Gabriel	1869	-	F	Marilópez	-
Concha Francisco	1894	Marilópez	F	Marilópez	-
Llorente Gregorio	1897	Colón	A	Marilópez	-
Peña Aníbal	1937	La Primavera	A	Marilópez	-
Tafurt Guillermo	1938	La Cruz	A	Marilópez	-
Vernaza Emiro	1938	La Cruz	A	Marilópez	1940

Fuente: Archivo Central del Cauca. Tomado de "La Toma Historias de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del alto Cauca", pp.186-187

#### Anexo 4



#### Anexo 5

##### Nuevo siglo, viejas historias: títulos mineros en Suárez entre 2000-2014

Como lo dijimos lo que representan los registros de títulos mineros en épocas pasadas puede aplicarse al momento actual: hablan de unos actores, de unos intereses y seguramente de unas políticas de Estado que prioriza un tipo u otro de minería, que regula uno u otro. No habla necesariamente de toda la actividad minera del territorio y su dinámica compleja, ni refleja todos los actores implicados en la actividad.

En el municipio de Suárez se encuentran vigentes en la actualidad trece títulos mineros para la exploración y explotación de oro -algunos de ellos incluyen otros minerales junto al oro-, dos para carbón, uno para arenas y gravas silíceas y uno para metales preciosos. El número de solicitudes asciende a veintisiete de los cuales veintiuno incluyen oro –entre otros minerales-, cinco solo para cobre, tres para carbón y tres sin definir el tipo de mineral a explorar.

De los trece títulos en los que aparece el oro como objeto seis aparecen con tan solo la palabra “oro”, sin más, otros dos para oro y “sus concentrados” o “demás concesibles”. Puede apreciarse que las demás concesiones incluyen varios minerales, como las tres de Anglo American con oro y cobre, y las dos de AngloGold Ashanti con oro, platino, zinc, cobre, plata y molibdeno. Interesante es que probablemente sea la primera vez en la historia de la zona, que un actor minero tiene la intención y posibilidad de explorar y explotar un mineral como el molibdeno.

Aunque es bastante llamativa la propiedad privada de Universidad del Cauca sobre los Metales Preciosos del título más grande de Colombia, no vamos a detenernos mucho en este caso. Este título intersecta con un 1.99% de su área el municipio de Suárez, sobre gran parte del corregimiento de Robles, y su 98.01% restante abarca los de Morales, Buenos Aires, López de Micay, Jamundí y Buenaventura.

En los datos de la UPME se diferencian dos fechas importantes: la “fecha de contrato” que indica el día en el que se suscribe el contrato de concesión y la “fecha de inscripción” que indica el momento en el que se inscribe el título en el Registro Minero Nacional junto a los minerales de los que es objeto la concesión.

El primero en titular, entre los permisos hoy vigentes, fue el señor Héctor de Jesús Sarria, el 5 de noviembre de 2000 (inscripción en 2002), le sigue el señor Alfredo Díaz que titula el 7 de enero de 2003 (inscripción en 2004) siendo el de menor extensión entre todos. Están los dos ubicados en el corregimiento de La Toma. Viene posteriormente la compañía Anglo American Colombia Exploration S.A con sus dos títulos –de los tres que tiene- contratados el 7 de julio de 2006 (inscripción en 2008), son los más extensos entre los títulos vigentes para oro, cada uno con 1999 Ha y 200 m<sup>2</sup> y ubicados al extremo sur del municipio,

abarcando parte de los corregimientos de Mindalá, La Meseta y Agua Clara, uno con el 97.72% y el otro con el 88.51% sobre Suárez lo restante sobre Morales.

Luego llegó la concesión de Raúl Fernando Ruíz, tiene como fecha de contrato el 8 de agosto de 2006 (inscripción en 2006). Luego don Diefer Marin titula sus dos únicas concesiones el 20 de diciembre de 2007 (inscripción en 2008). Los tres títulos anteriores se encuentran en el corregimiento de La Toma, los de Lucumí colindan con el de Sarria. El título con la tercera mayor extensión es contratado el 9 de mayo de 2008 (inscripción en 2008), bajo el titular Andrés Rendle sobre los corregimientos de Mindalá, Agua Clara y Betulia. Andrés Rendle representa la compañía Canadiense Cosigo Resources. La concesión de Alonso Giraldo aparece el 15 de mayo de 2009 (inscripción en 2009), sobre el corregimiento de Betulia colindando con Robles –al que seguramente logra tocar-. El 20 de julio de 2009 Antonio Carabalí obtiene su concesión (inscripción en 2009) en el corregimiento de Mindalá.

Las concesiones de la empresa multinacional AngloGold Ashanti son contratadas el 3 de septiembre de 2009 (inscripción en 2009), la primera en su mayoría sobre el espejo de agua de la Salvajina. Finalmente, el tercer título de la Anglo American Colombia Exploration S.A con fecha de contrato del 10 de noviembre de 2009 (inscripción en 2010) tiene un 73.8869% sobre los corregimientos de La Meseta y Mindalá de Suárez. Además de otra concesión a nombre justo al lado de las anteriores igualmente con 1999 has en Agua Clara. Estas tres concesiones abarcan un poco más de 4.917,6 Has de la zona sur de Suárez colindando con el municipio de Morales y que incluye un buen tramo del lago embalse La Salvajina.

Las concesiones con mayor duración son las ostentadas por las compañías multinacionales y dos naturales: la Anglo American Colombia Exploration, la Cosigo Resources, la AngloGold Ashanti, Miguel A. Carabalí y Raúl F. Ruíz. Con una duración “media” una de las dos de don Diefer Marin y la de Alonso Giraldo. De corta duración tenemos las de Sarria, Alfredo Díaz y la otra de don Diefer Marin, la más breve.

En 2010 se encontraban formalmente en la etapa de “explotación”, solo los títulos BFC-021 de Héctor Jesús Sarria y el 22030 de Alfredo Díaz Durán. En “construcción y montaje” se encontraba el título EKE-151 de Raúl Fernando Ruíz Ordoñez –según datos del Registro Minero Nacional-. Los diez restantes aparecían en proceso de “exploración”. A mayo de 2014, las fases que registra la Agencia Nacional de Minería para los títulos han cambiado. Los títulos de Sarria, Ruíz, Carabalí, los dos más antiguos de la Anglo American Colombia Exploration S. A, el de Díaz, los dos de Lucumí y el de Giraldo aparecen en etapa de explotación. La más reciente concesión de Anglo American y las dos de AngloGold Ashanti están, según esos mismos datos, en etapa de Construcción y Montaje. Sigue en fase exploratoria la concesión a nombre de Rendle. Sin embargo, la realidad parece ser otra. En primer lugar, porque los proyectos no han llegado efectivamente a esa etapa, en segundo lugar, debido a los efectos de la Sentencia T-1045A que ordenó suspender los títulos mineros que se superponen al corregimiento de La Toma<sup>393</sup>.

La medida Judicial que determinó la aplicación de la Sentencia mencionada reflejó una importante aunque temporal victoria del Consejo Comunitario de La Toma sobre Héctor de Jesús Sarria y su título BFC-021, que tuvo consecuencias sobre otros seis de los títulos vigentes ya reseñados –cinco en fase de explotación dos en construcción y montaje-. Aunque no preveían este alcance, la afectación de determinados titulares como Raúl Fernando Ruíz y la AngloGold Ashanti era otra meta a mediano plazo pues, según los líderes del Consejo Comunitario, representan intereses que perjudican la pervivencia de la comunidad negra en el territorio de La Toma.

La medida Judicial que determinó la aplicación de la Sentencia mencionada reflejó una importante aunque temporal victoria del Consejo Comunitario de La Toma sobre Héctor de Jesús Sarria y su título BFC-021, que tuvo consecuencias sobre otros seis de los títulos vigentes ya reseñados –cinco en fase de explotación dos en construcción y montaje-.

---

<sup>393</sup> Según el señor Luis Alejandro Ruíz, funcionario de la CRC, los títulos presentes en el corregimiento de La Toma están inactivos, lo cual se verificó en visita durante el 2014. II Jornada “Comunidades afrodescendientes y titulación minera. El caso de la Consulta Previa en La Toma, Cauca”, evento desarrollado el 4 de Septiembre de 2014 en la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, en el marco del “Diálogo intersectorial para la gestión de conflictos ambientales en el alto cauca.



Aunque no preveían este alcance, la afectación de determinados titulares como Raúl Fernando Ruíz y la AngloGold Ashanti era otra meta a mediano plazo pues, según los líderes del Consejo Comunitario, representan intereses que perjudican la pervivencia de la comunidad negra en el territorio de La Toma.

**Tabla 7. Títulos mineros vigentes en el Municipio de Suárez, Cauca a mayo de 2014**

TÍTULOS MINEROS INSCRITOS EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA- MUNICIPIO DE SUÁREZ									
EXPEDIENTE	ÁREA (Has)	MINERALES	TITULARES	MUNICIPIOS	ETAPA	ESTADO JURÍDICO ACTUAL	FECHA CONTRATO	FECHA INSCRIPCIÓN	DURACIÓN
GJO-153	1999,2000	MINERAL DE COBRE\ DEMAS_CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(9001537370) ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S.A	MORALES-CAUCA (11.4893%) \ SUAREZ-CAUCA (88.5107 %)	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	07/07/2006	15/01/2008	359 meses (29 años)
GJO-155	1999,2000	DEMÁS_CONCESIBLES\ COBRE\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(19413234) JAMES ALVARO VALDIRI REYES	MORALES-CAUCA (2.2802%) \ SUAREZ-CAUCA (97.7198%)	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	07/07/2006	02/04/2008	359 meses (29 años)
GD6-121	1717,1419	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(JH564503) RENDLE ANDRES	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	09/05/2008	19/05/2008	359 meses (29 años)
GJO-154	1618,5479	DEMÁS_CONCESIBLES\ ORO\ COBRE	(9001537370) ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S.A	MORALES-CAUCA (26.1132%) \ SUAREZ-CAUCA (73.8869%)	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	10/11/2009	28/01/2010	360 meses (30 años)
HJ3-08211	332,5983	MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE\ PLATA	(8301270767) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	03/09/2009	28/10/2009	359 meses (29 años)
EKE-151	314,5728	DEMÁS_CONCESIBLES\ ASOCIADOS\ ORO	(76316330) RAUL FERNANDO RUIZ ORDOZUEZ	SUAREZ-CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	TITULO VIGENTE	08/08/2006	01/11/2006	335 meses (27 años)
BFC-021	99,6507	ORO	(4711394) JESUS SARRIA HECTOR	SUAREZ-CAUCA	EXPLOTACION	TITULO VIGENTE	05/11/2000	05/03/2002	183 meses (15 años)
FLN-093	37,9432	ASOCIADOS\ ORO	(14998308) ANTONIO CARABALI MIGUEL	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	20/07/2009	21/12/2009	359 meses (29 años)
HJ3-08212X	17,1658	MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE\ PLATA	(8301270767) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	03/09/2009	14/10/2009	359 meses (29 años)
EET-144	15,9157	ORO	(10472177) EUSEBIO LUCUMI LUCUMI	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	20/12/2007	04/03/2008	227 meses (18 años)
EEK-152	10,0531	ASOCIADOS\ ORO	(10194550) ALONSO GIRALDO VARGAS	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	15/05/2009	03/06/2009	203 meses (16 años)
EET-143	9,2217	ORO	(10472177) EUSEBIO LUCUMI LUCUMI	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	20/12/2007	04/03/2008	83 meses (6 años)
22030	6,9115	ORO\ PLATA	(16735495) ALFREDO DIAZ DURAN	SUAREZ-CAUCA	EXPLOTACION	TITULO VIGENTE	07/01/2003	09/08/2004	178 meses (14 años)
432	205887,1296	METALES PRECIOSOS	(7777700336) UNIVERSIDAD DEL CAUCA	MORALES-CAUCA\ BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA (1.9897%) \ LOPEZ DE MICAY-CAUCA\ JAMUNDI-VALLE\ BUENAVENTURA-VALLE	EXPLOTACION	TITULO VIGENTE	Sin información	12/09/1990	Sin información
ILL-15191	1054,5223	MINERAL DE COBRE\ MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE PLOMO\ MINERAL DE MOLIBDENO	(8301270767) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO TERMINADO	12/08/2009	03/09/2009	14 meses (1 año)
GLM-111	76,0790	CARBON	(8000306325) CARBONERAS SAN FRANCISCO LTDA	BUENOS AIRES-CAUCA (45.9787%) \ SUAREZ-CAUCA (54.0213%)	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	11/02/2009	13/03/2009	359 meses (29 años)
IID-09371	63,9994	ARENAS Y GRAVAS SILICEAS	(900167019-1) ARENERA DEL SUR LTDA	BUENOS AIRES-CAUCA (64.7966%) \ SUAREZ-CAUCA (35.2034%)	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	23/12/2009	26/02/2010	360 meses (30 años)
FLA-113	44,2391	CARBON	(16695907) ZAMORA ROBERTO\ (4778270) HERNANDO DAVID DIAZ FERNANDEZ	SUAREZ-CAUCA	EXPLORACION	TITULO VIGENTE	26/06/2009	12/08/2009	179 meses (14 años)
HIL-10581	7,9062	MATERIALES DE CONSTRUCCION\ ASOCIADOS\ ORO	(9000846511) MINEROS GLOBAL LTDA	SUAREZ-CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	TITULO TERMINADO	01/03/2007	17/07/2007	51 meses (4 años)

Fuente: Catastro Minero del Cauca y datos de cada expediente extraídos de la web de la UPME, 6 de enero de 2014 y derecho de petición con respuesta a mayo de 2014

**Tabla 8. Solicitudes de concesiones mineras vigentes en Suárez a mayo de 2014**

SOLICITUDES MINERAS VIGENTES RADICADAS EN EL CATÁSTRO MINERO COLOMBIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA -MUNICIPIO DE SUAREZ-				
EXPEDIENTE	AREA (Has)	MINERALES	TITULARES	MUNICIPIOS
HCG-131	6389,1533	MINERAL DE COBRE\ MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.\ (4268893) RAFAEL ALFONSO ROA	MORALES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
JG7-08061	4722,0377	DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS	(8110169582) SOCIEDAD CACTUS SOM	MORALES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
KF1-14471	4550,5405	DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS	(7691508) SANTIAGO GONZALEZ RAMOS\ (55161408) MARIA DUPERLY CANDELO GONZALEZ\ (20738315) EDNA MARITZA GONZALEZ VELANDIA	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
GDI-12F	4462,3938	MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE\ PLATA	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.\ (830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	CALDONO-CAUCA\ MORALES- CAUCA\ BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
GDK-094	3095,6590	MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ COBRE\ PLATA	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.\ (4268893) RAFAEL ALFONSO ROA	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
LAR-11501	2990,3023	DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS	(9003320475) SAE EXPLORATION SAS	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA\ SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA
21698	2198,1313	DEMÁS_CONCESIBLES\ ORO\ PLATA	(8110121414) EL CRUCERO S.O.M.\ (39184323) MARTHA TORO GUTIERREZ\ (39184323) MARTHA TORO GUTIERREZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
JG7-09021	2105,9324	MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS	(8110169582) SOCIEDAD CACTUS SOM	MORALES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
ILK-08231	1757,1332	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDEN	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	MORALES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
JG7-08563	1748,1333	DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS	(8110169582) SOCIEDAD CACTUS SOM	MORALES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
ICQ-09591	1288,5919	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(8170055022) COOPERATIVA DE MINEROS DE SUAREZ	SUAREZ-CAUCA
ILL-15221	1073,0167	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDEN	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	SUAREZ-CAUCA
KFQ-14291	992,2553	DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(19475378) JAIME ENRIQUE DIAZ RODRIGUEZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
ILL-15201	669,5478	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDEN	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ- CAUCA
ILL-15181	611,5949	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDEN	(830127076-7) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	SUAREZ-CAUCA

ICQ-09522	247,1602	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(8170055022) COOPERATIVA DE MINEROS DE SUAREZ	SUAREZ-CAUCA
KDR-15191	173,5286	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(16773686) HENRY TORRES TORRES\ (10192148) ROMAN GIRALDO VARGAS	SUAREZ-CAUCA
IIS-15341	116,2171	DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(9000919941) A-C CONSTRUCCIONES S.A.	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
LDD-14041	115,1997	DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MI	(8301270767) ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A.	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
KDO-16171	94,1064	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10535665) AQUILINO LLANTEN BOLAÑOS	SUAREZ-CAUCA
LHS-08301	76,6778	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(9002615090) MINERAS FOUR POINTS S A	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
KDN-09371	45,0178	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(4517489) JHON JAIRO ANGARITA DIAZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
KJQ-16191	37,0629	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ DEMAS_CONCESIBLES\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(38959101) GLORIA NELLY MUÑOZ PAZ	SUAREZ-CAUCA
IIH-14151	13,2766	MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS	(16655232) LUIS ALFONSO SOTO GIL	SUAREZ-CAUCA
JLF-16381	11,3442	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(10660024) JOHN JAIRO GUERRERO	SUAREZ-CAUCA
LEQ-11271	0,0180	MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS	(8170055022) COOPERATIVA DE MINEROS DE SUAREZ	SUAREZ-CAUCA
JD1-11101	156,5381	CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO	(890312011-1) COOPERATIVA DE PRODUCTORA DE CARBONES DEL SUR LTDA	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
GFR-151	125,7070	CARBON	(29363780) CLARIBEL SUAREZ MUÑOZ\ (2410177) ALFREDO SUAREZ	SUAREZ-CAUCA
JKO-10011	72,0996	DEMAS_CONCESIBLES\ CARBÓN COQUIZABLE O METALURGICO\ CARBON TERMICO\ CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO	(6046477) HOLMAN OBANDO OCAMPO\ (31539404) CAROLINA OBANDO GOMEZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
LGM-09301	56,7777	CARBON TERMICO	(16825937) OSCAR BALANTA CORSINO\ (76060142) HORACIO GONZALEZ	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
GCF-141	45,7865	CARBON	(19090778) JOSE EDGAR VASQUEZ INCAPIE	SUAREZ-CAUCA
LGC-10081	37,0360	CARBON TERMICO	(76060142) HORACIO GONZALEZ\ (16825937) OSCAR BALANTA CORSINO	BUENOS AIRES-CAUCA\ SUAREZ-CAUCA
JKO-10012X	13,6244	DEMAS_CONCESIBLES\ CARBÓN COQUIZABLE O METALURGICO\ CARBON TERMICO\ CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO	(6046477) HOLMAN OBANDO OCAMPO\ (31539404) CAROLINA OBANDO GOMEZ	SUAREZ-CAUCA

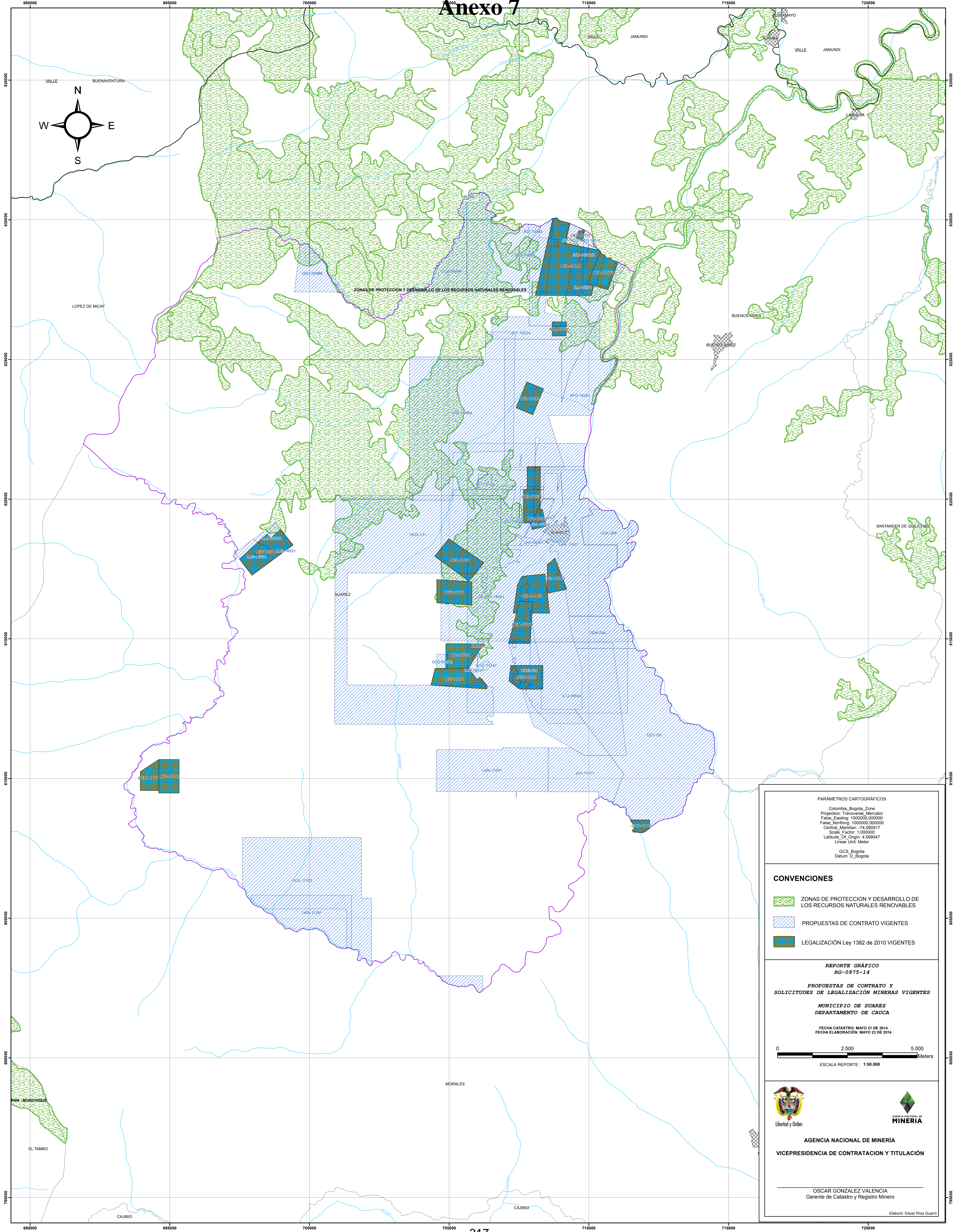


## 316





# Anexo 7



PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS  
Colombia\_Bogota\_Zone  
Projection: Transverse\_Mercator  
False\_Easting: 1000000.000000  
False\_Northing: 1000000.000000  
Central\_Meridian: -74.080917  
Scale\_Factor: 1.000000  
Latitude\_Of\_Origin: 4.595947  
Linear Unit: Meter  
GCS\_Bogota  
Datum: D\_Bogota

## CONVENCIONES

- ZONAS DE PROTECCION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
- PROPUESTAS DE CONTRATO VIGENTES
- LEGALIZACIÓN Ley 1382 de 2010 VIGENTES

## REPORTE GRÁFICO RG-0975-14

PROPUESTAS DE CONTRATO Y SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN MINERAS VIGENTES

MUNICIPIO DE SUAREZ

DEPARTAMENTO DE CAUCA

FECHA CATASTRO: MAYO 21 DE 2014

FECHA ELABORACIÓN: MAYO 23 DE 2014

0 2.500 5.000  
Meters  
ESCALA REPORTE : 1:50.000



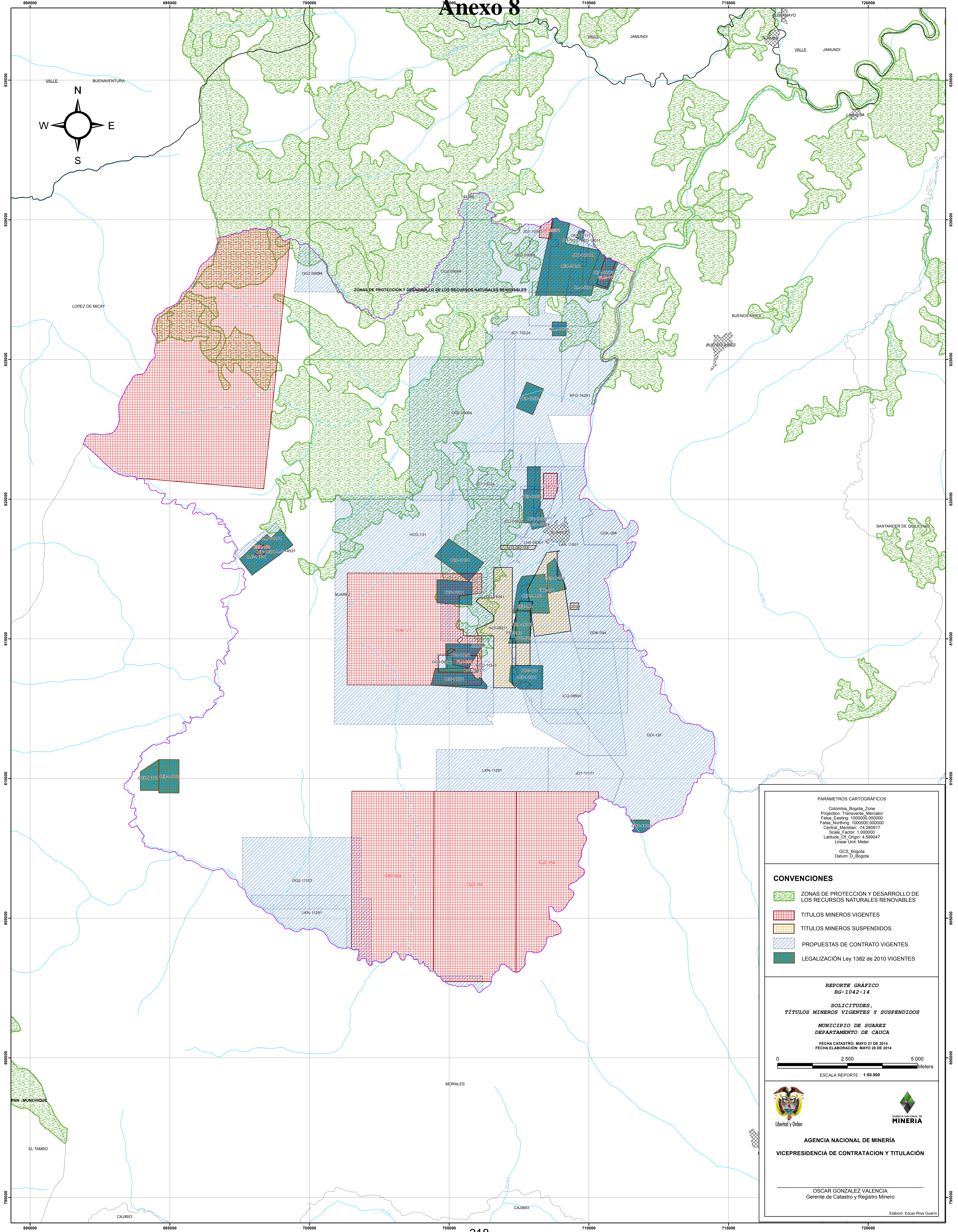
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA  
VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACIÓN

OSCAR GONZALEZ VALENCIA  
Gerente de Catastro y Registro Minero

Elaboró: Eduar Ríos Guarín



# Anexo 8



PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS

Colombia\_Bogota\_Zone  
Projection: Transverse\_Mercator  
False\_Easting: 1000000.000000  
False\_Northing: 1000000.000000  
Central\_Meridian: -74.080917  
Scale\_Factor: 1.000000  
Latitude\_Of\_Origin: 4.595947  
Linear Unit: Meter

GCS\_Bogota  
Datum: D\_Bogota

**CONVENCIONES**

- ZONAS DE PROTECCION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
- TITULOS MINEROS VIGENTES
- TITULOS MINEROS SUSPENDIDOS
- PROPUESAS DE CONTRATO VIGENTES
- LEGALIZACIÓN Ley 1382 de 2010 VIGENTES

**REPORTE GRÁFICO**  
**RG-1042-14**

**SOLICITUDES,**  
**TÍTULOS MINEROS VIGENTES Y SUSPENDIDOS**

**MUNICIPIO DE SUAREZ**  
**DEPARTAMENTO DE CAUCA**

FECHA CATASTRO: MAYO 21 DE 2014  
FECHA ELABORACIÓN: MAYO 28 DE 2014

0 2.500 5.000  
Meters

ESCALA REPORTE : 1:50.000

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

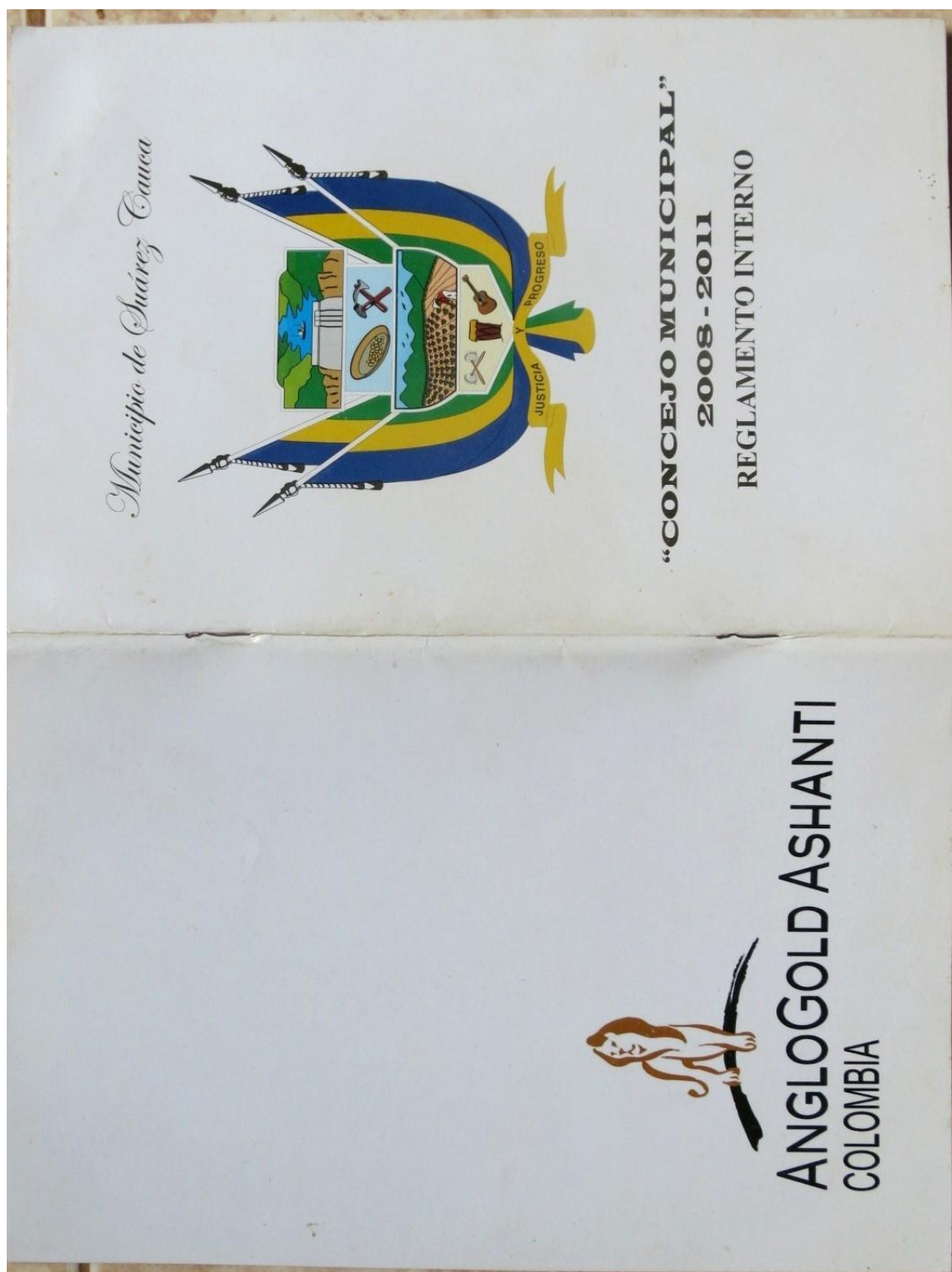
**AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**  
**VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACIÓN**

OSCAR GONZALEZ VALENCIA  
Gerente de Catastro y Registro Minero

Elaboró: Eduar Ríos Guarín



Anexo 9



**SUAREÑOS Y BONAERENSES**

**¡ALERTA!**

**¡ALERTA!**

**ESTE MIÉRCOLES, 18 DE AGOSTO DE 2010,  
LOS HERMANOS MINEROS DE LA TOMA,  
SEREMOS DESPLAZADOS POR EXIGENCIA DE UN FORÁNEO  
QUE SE SIENTE DUEÑO DE SUÁREZ**

**LES INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑEN ESE DÍA,  
A LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA,  
A LAS 6:00 AM EN EL SECTOR LA CAROLINA.**

**¡NUESTRO TERRITORIO ES LA VIDA LEJOS DE EL  
PREFERIMOS LA MUERTE!**



## 6. Bibliografía

Ararat, Lisifrey. Mina, Eduar. Rojas, Axel. Solarte, Ana María. Vanegas, Gildardo. Vargas, Luis Armando y Vega, Aníbal. 2013. La Toma Historias de territorio, resistencia y autonomía en la Cuenca del alto Cauca. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Arias, Wilson. 2011 Octubre. "Informe: Visita de Verificación Humanitaria de la Comisión del Congreso de la República al Municipio de Suárez-Cauca". Bogotá: Pdf. Pp. 10 En <http://xa.yimg.com/kq/groups/13749147/1558581855/name/INFORME+DEL+CONGRESO+-+VISITA+HUMANITARIA+SUAREZ.pdf>.

Banco Mundial. 1997. Estrategia minera para América Latina y el Caribe. Documento técnico del Banco Mundial Número 345S. Washington, D.C: División de Industria y Minería, Departamento de Industria y Energía.

Bebbington, Anthony. 2012. Extractive industries, socio-environmental conflicts and political economic transformations in Andean America. En: Bebbington, Anthony (eds.) Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry. Evidence from South America. Abingdon: Routledge: 3-26.

Birnbaum, Pierre. 1992. "Le conflit", en Boudon, Raymond (sous la direction de). *Traité de Sociologie*, Presses Universitaires de France.

Buenaventura, Andrea C. y Trujillo, Daniela. 2011. Historia Doble del Cauca. Cali. Pdf.

CINEP/Programa por la Paz. Octubre 2012. Minería, conflictos sociales y violación de Derechos Humanos en Colombia. Pdf. En [http://www.cinep.org.co/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_details&gid=263&Itemid=117&lang=en](http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=263&Itemid=117&lang=en)

CODHES. 2013. Documentos CODHES No. 26. La crisis humanitaria en Colombia persiste. Informe desplazamiento forzado en 2012. Bogotá: Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento.

Cosigo Resources LTD. 2013 noviembre 22. Condensed Consolidated Interim Financial Report. Three and nine months ended september 30, 2013 and three and nine months ended september 30, 2012 (Unaudited-Prepared by Management). Pp. 24.

CVC. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Universidad del Valle. Sin fecha. "Capítulo 3: Generalidades del Embalse" de Estudio de los Caudales Afluentes y Efluentes del Embalse de Salvajina. Consultado el 15 de noviembre de 2014, en <http://www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/dpdf3/volumen5/3-generalidadesemsv5f3.pdf>

Crozier, Michel y Friedberg, Erhard. 1977. *L'acteur et le système*, Édition du Seuil, Paris. (traducciones de la autora).

Diani, Mario. 1998. Las redes de los movimientos: una perspectiva de análisis. En Ibarra, Pedro y Tejerina, Benjamín Editores. Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid: Editorial Trotta.

Fernández, Juan Pablo y Valencia, Mario Alejandro. 2010. Libre comercio y minería en Colombia: El caso de la AngloGold Ashanti. Bogotá: Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Pp. 36.

Friedberg, Erhard. 1997. Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée. Editions du Seuil.

Harvey, David. 2005. El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión". En Socialist register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO. <http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf>

Idárraga, Andrés. Muñoz, Diego. Vélez Hildebrando. 2010. Conflictos Socio-ambientales por la Extracción Minera en Colombia: Casos de la Inversión Británica. Censat Agua Viva. Cali: Merlín S. E.

Juanillo Mina, Ismael. 2008. Salvajina Oro y Pobreza. Colombia: Artes Gráficas del Valle.

Ministerio de Minas y Energía. 2014. Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia (PNFMC). Documento Propuesta Versión Final. Bogotá: MinMinas. Versión Pdf.

Morales, Marcela. Castro, Inti Natalia. Balvino, Diego y Gutiérrez, Albalucia. Kwesh Cxhab Nasa. Nuestro Pueblo Nasa. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Negrete Montes, Rodrigo E. 2013. Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. En Contraloría General de la República. 2013. Minería en Colombia: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Pp. 23-54

Pérez Rincón, Mario Alejandro. 2007. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica. Cali: Universidad del Valle.

Pérez Rincón, Mario Alejandro. 2014. Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis. En Contraloría General de la República. 2014. Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Pp. 253-326

Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 2012-2015. Suárez-Cauca.

Ponce Muriel, Álvaro. 2012. “¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la Minería en Colombia”, Medellín: Editorial Debate

Restrepo, Eduardo. 2004. Teorías contemporáneas de la etnicidad. Popayán: Editorial de la Universidad del Cauca.

Salgado Araméndez, Carlos y Ñañez Ortiz, Jimena. 2014. Cinco fragmentos (independientes y complementarios) en torno a la posición de los movimientos sociales frente al modelo minero extractivo. En Contraloría General de la República. 2014. Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Pp. 327-403

Sánchez Sarmiento, Lenny Johana. Andrade Ayala, Aura Paola. 2009. “Determinación de la concentración letal media (CL50-96) del cianuro, por medio de bioensayos sobre alevinos de trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*).” En <http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/14081>

Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- y Ministerio de Minas y Energía. 2014. Plan Nacional de Ordenamiento Minero PNOM. Principios, lineamientos y acciones estratégicas. Bogotá: UPME. Versión Pdf

Vélez, María Elena. Abril 2011. “Feria de títulos mineros”, en Revista Poder, Edición Año 06-07 No. 115/30 de abril de 2011, Bogotá. Pp. 20.

Varela Sánchez, Araceli y Mariño Beiras, Marcos. 2004. “Los nuevos rostros del imperialismo. Entrevista a David Harvey”. Centro de Estudios Miguel Enriquez. En [www.archivo-chile.com](http://www.archivo-chile.com)

Weitzner, Viviane. 2012. Rendición de cuentas de las Compañías Extractivas en Colombia: Una evaluación de los instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE) a la luz de los derechos de los indígenas y afrodescendientes. The North-South Institute, Proceso de Comunidades Negras de Colombia, Resguardo Indígena Cañamomo Lomapieta.

West, Robert. 1972. La minería de aluvión en Colombia durante el periodo colonial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Imprenta Nacional.

### **Artículos en portales de internet**

Afro-Colombian Solidarity Network. Septiembre 2014. “Red alert in the ancestral afrodescendent territory of La Toma” en Web de Afro-Colombian Solidarity Network, <http://afrocolombian.org/2014/09/09/red-alert-in-the-ancestral-afrodescendent-territory-of-la-toma/>

Agencia Nacional de Minería. 2015 Febrero. “Gobierno Nacional reglamenta el RUCOM”. En la web de ANM, <http://www.anm.gov.co/?q=gobierno-reglamenta-RUCOM>

Bermúdez Liévano, Andrés. Febrero 2014. “La minería que quería tumbar el parque amazónico”, en La SillaVacía.com, <http://lasillavacia.com/historia/la-minera-que-estaba-detras-de-la-tutela-al-parque-amazonico-46563>

Bolaños, Edinson. Córdoba, Andrés. Octubre 2013. “Minería ilegal y mafias criminales”, en El Nuevo Liberal, consultado en la Web de Mario Pachajoa Burbano, Última consulta noviembre 2014 <http://mariopbe.com/a3minas.htm>

Cepeda, Iván. Febrero 2015. “Iván Cepeda pide a Fiscalía incluir otra empresa en investigación por lavado de activos a través de exportación de oro”, en <http://www.polodemocratico.net/index.php/noticias/titulares/7611-ivan-cepeda-pide-a-fiscalia-incluir-otra-empresa-en-investigacion-por-lavado-de-activos-a-traves-de-exportacion-de-oro>

Dinero. Septiembre 2011. “La nueva lavandería”, en Dinero.com, <http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/la-nueva-lavanderia/120971>

El Espectador. Noviembre 2011. “Congresistas habrían manipulado Ingeominas en busca de intereses propios”, en El Espectador.com, <http://www.elespectador.com/noticias/economia/congresistas-habrian-manipulado-ingeominas-busca-de-int-articulo-309005>

El País. Marzo 2009. “Uribe garantizó ayuda para Suárez” en El País, <http://historico.elpais.com.co/paionline/notas/Marzo162009/urisuarez.html>

El Tiempo. Febrero 2007. “Rescatados 30 cadáveres de mineros atrapados en una mina en Sardinata, Norte de Santander” en ElTiempo.com <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3424813>

Nomadesc, PCN, ACIN, Consejo Comunitario de La Toma, Corporación Sembrar, Asociación de Mujeres Municipales de la Balsa, Asociación ECATE, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER, Campaña Prohibido Olvidar. Abril 2010. “Masacre anunciada en zona minera del municipio de Suárez- Cauca” en Web de REDHER, <http://www.redcolombia.org/index.php/noticias-nuevas/noticias/denuncias/810-masacre-anunciada-en-zona-minera-del-municipio-de-suarez-cauca.html>

Nomadesc, Asociación para la Investigación y Acción Social. 2010 Agosto 18. Boletín Informativo. Santiago de Cali. En <http://nomadesc.blogspot.com/2010/08/relatos-desde-la-tomapresencia.html>

Orduz, Natalia. Julio 2012. “Un año después, se calienta de nuevo el páramo”, en La SillaVacía.com, <http://lasillavacia.com/historia/un-ano-despues-se-calienta-de-nuevo-el-paramo-de-santurban-34981>

OMCT. Organización Mundial Contra la Tortura. Agosto 2010. “Preocupación por orden de desalojo de cerca de cinco mil habitantes de La Toma en Suárez Cauca. Carta abierta al SR. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia” en Web de la OMCT Red SOS-Tortura, <http://www.omct.org/es/urgent-campaigns/urgent-interventions/2010/08/d20886/>

Organizaciones de Derechos Humanos. Diciembre 2010. “Hombres encapuchados generan terror en la población del corregimiento minero de La Toma, Municipio de Suárez, departamento del Cauca” en Web del Colectivo José Alvear Restrepo, <http://www.colectivodeabogados.org/alertas-de-accion-206/acciones-urgentes/Hombres-encapuchados-generan>

Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Equipo de DDHH PCN. Junio 2009. Comunicado: “El Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, se permite poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos:” En <http://www.afrocolombians.org/pdfs/NorteDelCauca-Denuncia-PCN-06-2009.pdf>

Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Equipo de DDHH PCN. Mayo 2014. “Una nueva tragedia minera enluta a los afrocolombianos. Derrumbe en la mina San Antonio, Santander de Quilichao” En <http://renacientes.org/attachments/article/1010/Tragedia%20Minera%20en%20Santander%20de%20Quilichao.pdf>

Proclama del Cauca. Febrero 2015. “Mineros de Buenos Aires marcharon hasta Santander de Quilichao. Denuncian satanización de la actividad minera legal.” En <http://www.proclamadelcauca.com/2015/02/mineros-de-buenos-aires-marcharon-hasta-santander-de-quilichao-denuncian-satanizacion-de-la-actividad-minera-legal.html>

Raigozo, Camilo. Enero 2010. “Las comunidades de Suárez (Cauca), dispuestas a defender su territorio” en Prensa Rural, <http://prensarural.org/spip/spip.php?article3544>

RECLAME -Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Junio 2010. “Rechazar y detener el desalojo de los mineros de La Toma, Cauca” en Web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, <http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/523-rechazar-y-detener-el-desalojo-de-los-mineros-de-la-toma-cauca64>

Rengifo, Federico. Diciembre 2012. “Mitos y verdades de la minería”, en El Tiempo.com, [http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/federicorenjifo/ARTICULO-WEB-NEW\\_NOTA\\_INTERIOR-12425463.html](http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/federicorenjifo/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12425463.html)

Rudas, Guillermo. Enero 2011. “Minería, medio ambiente y cambio climático: una señal de alarma”, en RazónPública.com, [http://www.razonpublica.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1697:mineria-medio-ambiente-y-cambio-climatico-una-senal-de-alarma&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29](http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1697:mineria-medio-ambiente-y-cambio-climatico-una-senal-de-alarma&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29)

Semana. Junio 2011. “La olla podrida de Ingeominas” en Semana.com, <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-olla-podrida-ingeominas/240874-3>

Semana. Octubre 2010a. “Las razones ocultas de la crisis en Ingeominas” en Semana.com <http://www.semana.com/economia/articulo/las-razones-ocultas-crisis-ingeominas/123709-3>

Semana. Octubre 2010b. “Quién controla la locomotora minera”, en Semana.com, <http://www.semana.com/nacion/articulo/quien-controla-locomotora-minera/123050-3>

Silla Vacía. Julio 2013. “Otro escollo para Eco Oro en Santurbán, ahora en el Banco Mundial” en LaSillaVacía.com, <http://lasillavacia.com/queridodiario/otro-escollo-para-eco-oro-en-santurban-ahora-en-el-banco-mundial-45153>

Tenthoff, Moritz. Agosto 2014. “Siguiendo la ruta de la minería en el Cauca” en LaSillaVacía.com, <http://lasillavacia.com/content/siguiendo-los-pasos-de-la-mineria-en-el-cauca-48380> Última consulta diciembre 2014

URT- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Enero 2014. “La restitución de tierras por el rescate de los principios fundamentales de los indígenas y afrodescendientes del país” en Web de la URT, <http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=855>

URT- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Marzo 2014. “Comunidad afrodescendiente del norte del Cauca más cerca de la restitución de sus derechos territoriales” en Web de la URT, <http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=1029>

URT- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Agosto 2014. “La Unidad de Restitución de Tierras fortalece atención a víctimas afrodescendientes en el Cauca” en Web de la URT, <http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=1375>

URT- Unidad de Restitución de Tierras Territorial Cauca. 2014a. Informe Público de Rendición de Cuentas. Periodo Marzo de 2013 a abril de 2014. <http://restituciondetierras.gov.co/media/planeacion/2014/Territoriales/Cauca/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20TERRITORIAL%20CAUCA.pdf>.

Verdad Abierta. Abril 2012. “El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca”, en VerdadAbierta.com, Última consulta diciembre de 2014

<http://www.verdadabierta.com/component/content/article/35-bloques/3987-el-recorrido-sangriento-del-bloque-calima-por-cauca>

Verdad Abierta. Julio 2011. “La masacre de El Naya, según la Fiscalía”, en VerdadAbierta.com, Última consulta diciembre 2014 <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/556-bloque-calima/3417-la-caravana-de-la-muerte-de-alias-hh>

Verdad Abierta. Marzo 2014. “Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron” en VerdadAbierta.com, <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5286-un-error-del-gobierno-los-enfrento-ahora-afros-e-indigenas-se-reconciliaron>

### **Documentos y resoluciones institucionales**

Agencia Nacional de Minerales. Junio 2012. Resolución 0045 de 2012 “Por la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones”. En <http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=eRVvd93yMXI%3D&tabid=106>

Alcaldía Municipal de Suárez. 2013 Enero 11. “Listado de población indígena para el programa ‘MAS FAMILIAS EN ACCION’” que se adjunta en la web del municipio de Suárez. Ver: <http://www.suarez-cauca.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1830644>

Cámara de Comercio de Cali. Octubre 2006. Boletín No. 1829. Pp. 40. En <http://www.ccc.org.co/documentos/boletines/boletin-200610.pdf>

Cámara de Comercio de Cali. Abril 2007. Boletín No. 1835. Pp. 91. En <http://www.ccc.org.co/documentos/boletines/boletin-200704.pdf>

Cámara de Comercio de Cali. Marzo 2009a. Boletín No. 1858. Pp. 43. En <http://www.ccc.org.co/documentos/boletines/boletin-200903.pdf>

Cámara de Comercio de Cali. Abril 2009b. Boletín No. 1859. Pp. 44. En <http://www.ccc.org.co/documentos/boletines/boletin-200904.pdf>

Congreso de la República de Colombia. 2011 Junio. Ley 1450 de 2011 (junio 16) “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”. Bogotá.

Corte Constitucional. Julio 2014. Sentencia T-462A/14. En <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-462a-14.htm>

Cosigo Resources. 2014. <http://www.cosigo.com/s/Management.asp>, consultada por última vez el 8 de diciembre de 2014.

DANE. 2005. Censo General. Perfil Suárez, Cauca. Proyección a 2010. Pdf

Gobernación del Cauca. 2009 Junio 24. Resolución 5234-06-2009 “Por medio de la cual se declaran en riesgo inminente de desplazamiento forzado la población de algunos territorios del Departamento del Cauca”. Popayán.

Ingeominas. Agosto 2011. Comunicado de Prensa 056 de 2011. En <http://www.sgc.gov.co/Noticias/Comunicados/Comunicado-de-prensa-056-de-2011.aspx>

Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas. Mayo 30 de 2011. Comunicado de prensa 032 de 2011. En <http://www.serviciogeologicocolombiano.gov.co/Noticias/Comunicados/Irregularidades-encontradas-en-la-titulacion-miner.aspx>

Ministerio de Minas y Energía. Febrero 2011. Resolución 180099 del 1 de febrero de 2011, Por la cual se adopta una medida administrativa en materia de Minas. En <http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=9SofhQShVWc%3D&tabid=106>

Ministerio de Minas y Energía. Ministerio del Interior. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014 Diciembre. Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se definen los mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, en desarrollo del proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera.”

Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2012 Diciembre. Decreto 2637 del 17 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamenta el artículo 112 de la Ley 1450 de 2011”. Bogotá.

Ministerio de Minas y Energía. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2013 Abril. Decreto 0705 del 12 de abril de 2013 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2637 del 17 de diciembre de 2012”. Bogotá.

Ministerio de Minas y Energía. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mayo 2013. Decreto 0933 del 9 de mayo de 2013 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario Minero”. Bogotá.

Ministerio de Minas y Energía. Febrero 2015. Decreto 0276 “Por el cual se adoptan medidas relacionadas con el Registro Único de comercializadores- RUCOM”. Bogotá.

Ministerio de Minas y Energía. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012 Septiembre. Decreto 1970 del 21 de septiembre de 2012 “Por el cual se modifica el capítulo II del Decreto 2715 de 2010”. Bogotá.



Ministerio de Minas y Energía. Noviembre 2007. Resolución 424 del 13 de noviembre de 2007. Bogotá D. C.

PGN. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. 2010 junio 17. Oficio “Ref.: Concepto 10-113 Acción Contractual 250002326000200800553 01 (38338) Actor: Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas Demandado: Andres (Sic) Rendle”. Bogotá D.C. Dirigida al Doctor Enrique Gil Botero, Consejero Ponente, Consejo de Estado.

Superintendencia de Notariado y Registro. 2009 Agosto 10. Circular 176. “Declaratoria de Riesgo Inminente de Desplazamiento Forzado en los Municipios de Morales, Cajibío, Piendamó, Suárez y Argelia, Cauca”. En <https://www.supernotariado.gov.co/supernotariado/images/smilies/Normatividad/Circulares/2009/circular%20176%2009.pdf>

## **7. Fuentes primarias**

### **Archivos revisados:**

Archivo Físico del Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras

Archivo proporcionado por la Agencia Nacional de Minerales

### **Expedientes Jurídicos encontrados en esos archivos y revisados completos:**

Licencia de Exploración 19656 a nombre de Salustiano Carabalí, presente en los Archivos del Cabildo.

Título Minero EKE-151 a nombre de Raúl Fernando Ruíz.

Título Minero EEK-152 a nombre de Alonso Giraldo.

Área de Reserva Especial Suárez y Buenos Aires Cauca.

### **Expediente Jurídico revisado parcialmente:**

Título Minero GD6-121 a nombre de Andrés Rendle, funcionario de Cosigo Resources.

## **DOCUMENTOS CITADOS Y REVISADOS POR CAPÍTULOS**

### **CAPITULO I**

#### **Despojo, conflictos previos y organización étnica**

Empresa Nacional Minera- Minercol Ltda. 2003 Junio 18. 1130-0432. Respuesta a derecho de petición oficio JUR- 030-003 con radicado 1387 del 16 de junio de 2003 sobre títulos mineros en la cuenca del río Naya. Dirigido a Armando Valbuena- Presidente ONIC. Jamundí. Pp. 5.

REDHER. Junio 2007. Denuncia pública: “Cauca: amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y comunitarios de la Salvajina” firmado por “Comunidad de Suárez-Cauca” y enviado por la Red de Hermandad y Solidaridad –Colombia. Pp. 6.

Prohibido Olvidar. 2007. Denuncia pública: “Líderes de Salvajina en riesgo por su trabajo comunitario”, firmado por Campaña Prohibido Olvidar. P. 5

## **CAPITULO II**

### **Apuntes sobre los tipos de minerías en Suárez**

“Líneas de tiempo. Ejercicios de Memoria en Territorios de La Toma, El Hormiguero y Guachené. Marzo-Junio de 2011” trabajo realizado por el Grupo Conflicto social y violencia, Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional de Colombia.

## **CAPITULO III**

### **Subcapítulo “Me titularon la casa y yo no sabía: pero ¿cómo se enteraron las organizaciones étnicas?”.**

#### **Documentos del Archivo Físico del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras referenciados:**

ACIN- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, CRIC- Consejo Regional Indígena del Cauca, ATIZO- Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Occidente, ACONC- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ASOPRODESA- Asociación Pro damnificados de la Salvajina, PCN- Proceso de Comunidades Negras en Colombia. 2009 Mayo. “Asamblea General Informativa. Comunidades y municipios de Suárez, Buenos Aires, y Morales. Munchique, 25 de MAYO, 9a.m.”. Pp. 1.

ONIC, Censat, Cedins, Justicia y Paz, Fedeagromisbol, Corporación Aury Sará, Minga, Sembrar, Sintraminercol, Colectivo de Soberanía en Recursos Naturales y Minero-Energéticos, Aida, Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Asociación Campesina del Valle del Río Simitarra, RECALCA. 2010 Febrero. Seminario nacional minero de comunidades afectadas por la gran minería. Bogotá. Pp. 2

REDHER, Fedeagromisbol, Corporación Sembrar, PCN, ONIC, CNA, Comité Interétnico del Cauca. 2007. Convocatoria “1º Encuentro Nacional Interétnico de Agromineros”. Pp. 1. Rodríguez Maldonado, Tatiana. Sin fecha. “Recomendaciones importantes para su viaje a Perú” Dirigido a Simón Rodríguez, Enrique Güetio y Rosa Elvira. Pp. 1.

### **Subcapítulo “Retros y dragas”.**

#### **Documentos del Archivo Físico del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras referenciados:**

Alcalde Municipal de Suárez. 2007 Junio 6. Resolución No. 2202-2-6 (Junio 06 de 2007), “Por medio de la cual se toman medidas sobre la explotación de minería ilegal en la jurisdicción del municipio de Suárez (cabecera municipal)”. Suárez, Cauca. Pp.1. Anexo 4 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007.

Alcalde Municipal de Suárez. 2007 Octubre 16. Oficio DSG-3-16-07-06. Informe de actuaciones administrativas para tratar la explotación de oro en el Municipio de Suárez.

Dirigido a Delegados del Ministerio de Medio Ambiente Suárez, Cauca. Pp. 2. Con 10 Anexos de 19 pp.

Alcalde Municipal de Suárez. 2007 Octubre 22. Decreto No. 1685-1-22 de 2007 de Octubre 22, “Por medio del cual se solicita la suspensión inmediata de actividades de minería sin título en jurisdicción de este municipio”. Suárez, Cauca. Pp. 3. Más Anexos de 3 pp.

Alcaldía de Suárez. EPSA. Mineros en lucha por un futuro. 2005 Junio 29. “ACTA REUNIÓN MINERO TÚNELES C.M”. San Miguel. Pp. 2. Anexo 3 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007.

Alcaldía Municipal de Suárez. 2007 Agosto 14. “Acta de reunión con los usuarios de la explotación minera ilegal, autoridades civiles, militares y concejales”. Suárez, Cauca. Pp. 2. Anexo 10 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007.

Alcaldía Municipal de Suárez. 2007 Julio 23. Convocatoria del Alcalde, el Secretario de Gobierno Municipal y el Promotor de Acción Comunal a todos los Presidentes de JAC, para una reunión a realizar el 26 de julio de 2007 sobre la Kedahda, con el Dr. Jorge Alberto Uribe Alcalde del Municipio de Quinchía (Risaralda). Suárez, Cauca. Pp. 1. Anexo 9 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007

Concejo Municipal de Suárez. 2002 Febrero. Acuerdo No. 001 de 2002 (Febrero 27) “Por el cual se da una autorización al señor Alcalde Municipal”. Suárez, Cauca. Pp. 4. Anexo 1 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007.

Concejo Municipal de Suárez. 2008 Agosto. Acuerdo No. 019 de 2008 (Agosto 29) “Por el cual se concede una autorización al señor Alcalde Municipal”. Suárez, Cauca. Pp. 4.

Consejo Comunitario de La Toma. JAC de Yolombó, de Portugal, de Honduras y de Asnazú. Consejo Comunitario Cerro Teta. Consejo Comunitario Pilamo. Comité Mpal de DDHH de Buenos Aires. Asociación Mpal de Mujeres- ASOM. Asociación Juvenil Comunitaria. Corporación Ancestros. Palenke Regional Alto Cauca. Palenque Regional El Congal. PCN. 2007 Octubre 16. “PRONUNCIAMIENTO Frente a la muerte de mineros afrodescendientes en el municipio de Suárez, Cauca”, municipios de Buenos Aires y Suárez. Pp. 2.

Corporación Autónoma Regional del Cauca, Dirección Territorial Norte. 2007 Noviembre 9. Asunto: Suspensión de exploraciones de oro de aluvión-municipio de Suárez, Cauca. Santander de Quilichao. Pp. 4.

Corporación Autónoma Regional del Cauca, Dirección Territorial Norte. 2007 Octubre 22. Oficio 102-RB-1289. Suárez, Cauca. Pp. 2

Escobar, Diego. 2007 Octubre 18. La muerte de 22 mineros artesanales en Suárez Cauca, consecuencia de la política de no defensa de la soberanía nacional. Suroccidente Colombiano Cali. Pp. 15.

Ingeominas, Coordinadora del Grupo de Trabajo Ingeominas-Cali. 2007c Octubre 17. Oficio GTRC-1767-07. Dirigido al Alcalde Municipal de Suárez-Cauca. Santiago de Cali. Pp. 3.

Ingeominas. 2007b Octubre. Informe No. GTRC-0513-07. Informe de emergencia presentada en el Municipio de Suárez, Departamento del Cauca, Extracción de Oro aluvial río Cauca. Solicitud en trámite No. IIL-10221 Solicitante: José Ary Ambuila. Santiago de Cali. Pp. 8. Anexo del Oficio GTRC-1767-07.

Ingeominas. 2007a Septiembre. Informe de visita GTRC-0479-07. Informe de visita técnica de seguimiento y control realizada al área del título minero No. HIL-10581. Titular: Mineros Global Ltda. Cali. Pp. 6. Anexo del Oficio GTRC-1723-07.

Mineros en lucha por un futuro. 2005 Febrero 23. Oficio de “Mineros en lucha por un futuro” dirigida al Subdirector de EPSA S.A el 23 de Febrero de 2005. Pp. 3. Anexo 2 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007.

Mineros Global- Presidente Santiago Rengifo. 2007 Noviembre 8. “Ref. Contrato de concesión HIL-10581. Mineros Global Ltda. Sector Machaqueo-Suárez. Solicitud de Amparo y protección Policial”. Dirigido al Alcalde Javier Ordoñez. Santiago de Cali. Pp. 2. Más Anexo de 5 pp.

Personero Municipal de Suárez. 2007 Julio 5. Oficio ODPM 149-07. Suárez, Cauca. Pp. 1. Anexo 6 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007

Procuraduría Judicial Ambiental y Agrario del Cauca. 2007 Octubre 17. Oficio 19203600007-472. Popayán. Pp. 2.

Restrepo, Diego. 2010 Mayo 9. Oficio de solicitud de un permiso para el ingreso de una maquinaria pesada (retroexcavadoras) al río Inguitó, dirigido al Cabildo Indígena Cerro Tijeras. Suárez, Cauca. Pp. 1.

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social Municipal. 2007 Julio 5. “Oficio Circular No. 007. Ref: Invitación urgente reunión (Explotación Minera machaqueo)”. Suárez, Cauca. Pp. 1. Anexo 5 del Oficio DSG-3-16-07-06 de Octubre de 2007.

Secretario de Gobierno y Participación del Cauca. 2007 Octubre 18. Oficio Cód. 1700 SOP-573. Popayán. Pp. 1.

**Documentos revisados sin citar:**

Alcalde Municipal de Suárez. 2007 Julio 10. “Ref: Respuesta a oficio no. 149-07 de fecha julio 5 de 2007” dirigido al Personero Municipal de Suárez. Suárez, Cauca. Pp. 1.

Corporación Autónoma Regional del Cauca Dirección Territorial Norte. 2007 Octubre 22. Certificación del pago realizado por concepto de estudio de evaluación del proyecto, fase del trámite de licencia ambiental por parte de Mineros Global a la CRC. Santander de Quilichao. Pp. 1.

Inspector de Policía. Comandante Estación de Policía Suárez, Secretario de Gobierno. Personero Suárez. Técnico CRC. 2010 Enero 19. Acta de suspensión y cierre de explotación minera sin título. San Miguel, Suárez, Cauca. Pp. 1.

Secretario de Gobierno y Desarrollo Municipal. 2007 Agosto 22. “Ref: Cierre temporal de explotación aurífera ilegal” dirigido al Comandante Estación de Policía Suárez. Suárez, Cauca. Pp. 1.

### **Documentos del Expediente Jurídico del ARE empleados en este subcapítulo:**

Oficio 466194 del 14 de diciembre de 2012 Solicitud y queja elevada por Gustavo Zapata presidente del Consejo Comunitario de La Toma al Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta III: 37)

Oficio con Radicado 2008028009 enviado el 20 de junio de 2008 por Representante de Cooperativa de Mineros de Suárez a la Directora de Minas del Ministerio. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 74).

### **Documento proporcionado por la ANM en respuesta a derecho de petición:**

Dirección de Minas, MinMinas. 2007. Oficio con Rad: 2007051673 registrada el 16 de noviembre en la oficina de Ingeominas Cali a donde se dirigió una copia.

### **Subcapítulo de “Minerías tradicionales y ARE”. Documentos referenciados:**

**Expediente Jurídico del Área de Reserva Especial (ARE) Suárez-Buenos Aires, Cauca: Archivos del Ministerio de Minas y Energía Carpetas I, II; y Archivos de la Agencia Nacional de Minería Carpetas I, II, III, IV, V y VI.**

Agencia Nacional de Minería (ANM), Ministerio de Minas y Energía. Febrero 2013a. Informe No. PARC-011-13. IV-011-Área de Reserva Especial de Suárez 08-04-13. Informe de visita técnica de verificación de condiciones de seguridad e higiene minera realizada al Área de Reserva Especial de Suárez-Cauca. Santiago de Cali: Grupo de Seguridad y Salvamiento Minero, Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero de Jamundí.

Agencia Nacional de Minería (ANM), Ministerio de Minas y Energía. Febrero 2014. Informe No. PARC-004-14. IV-004-Área de Reserva Especial de Suárez 03-02-14. Informe

de visita técnica de verificación de condiciones de seguridad e higiene minera realizada al Área de Reserva Especial de Suárez –Cauca. Santiago de Cali: Grupo de Seguridad y Salvamiento Minero, Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero de Jamundí.

Agencia Nacional de Minería (ANM). Octubre 2013b. Informe verificación RUCOM y entrega Estudios Geológico Mineros. Área de Reserva Especial de Suárez y Buenos Aires (Cauca). Bogotá: Vicepresidencia de Promoción y Fomento, Gerencia de Fomento.

Oficio con Radicado 2008018823 del 30 de abril de 2008. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 39)

Oficio con Radicado 2012005244 del 1 de febrero de 2012, pero fechado al 14 de octubre de 2011. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta II: 1)

Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía. Marzo 2008. Informe No. GTRC-004-04. Informe de visita realizada al municipio de Suárez departamento del Cauca. Santiago de Cali: Ingeominas. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 40)

Memorando con Radicado 2008038246 del 25 de agosto de 2008. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 81)

Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Minas. Octubre 2011. Informe: Evaluación al Área de Reserva Especial, Suárez –Cauca. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta II: 2)

Oficio con Radicado 2007048086 25-10-2007. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 1)

Oficio con Radicado 2007058325 21-12-2007. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 22).

Oficio con Radicado 2008004363 del 4 de febrero de 2008. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 25-26)

Oficio con Radicado 2008019866 de mayo 8 de 2008. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 69-71)

Oficio con Radicado 2008030485 08-07-2008. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 80)

Oficio con Radicado 2011012886 de 14 de marzo de 2011. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 92)

Oficio 021478 con Radicado 2010048606 del 21 de septiembre de 2010. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 92)

Oficio con Radicado 2011038285 del 19 de julio de 2011, fechado a 15 de julio. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 95)

Oficio DIR- 0797 del 3 de diciembre de 2007. Anexo: Propuesta Modificación Resolución No. 424 del 13 de noviembre de 2007 (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 13, 14-19)

Oficio GCRMN-073 con Radicado 2008006878 de febrero 14 de 2008, Bogotá (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 30)

Oficio No. 2011-429-003035-2, 8 de septiembre de 2011, Suárez-Cauca. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas, Carpeta I: 100)

Oficio que la Cooperativa dirige a la institucionalidad en 2011: puede ser este Oficio No. 2011-429-003035-2, 8 de septiembre de 2011, Suárez-Cauca. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas, Carpeta I: 100)

Oficio No. 20139050012282 del 3 de abril de 2013, enviado por el Alcalde de Suárez a la Agencia Nacional de Minería. (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM, Carpeta I: 69)

Oficio SQ-3.5-278-LEG.07-08 del 21 de noviembre de 2007, Bogotá. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta I: 11, 12)

Oficio titulado “Acta de la Reunión Debate Jurídico de la Sentencia T-1045 A de 2010 en cumplimiento al compromiso número 2 del Acta del 22 de noviembre de 2013” del 29 de noviembre de 2013, Agencia Nacional de Minería, Bogotá. (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM, Carpeta II: 161)

Universidad Nacional de Colombia (UNAL). 2009. Área de Reserva Especial Suárez-Buenos Aires. Proyecto de asistencia e implementación técnica en Áreas de Reserva Especial Suárez-Buenos Aires Cauca.

### **Expediente Jurídico de Título de Concesión Minera GD6-121: Archivos del Ministerio de Minas y Energía**

Oficio Contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. GD6-121 celebrado entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS, y el señor Andrés Rendle. (Expediente Jurídico del título GD6-121 Pdf 1, Pp. 73- 95)

Oficio de Evaluación técnico-jurídica, Reporte de superposiciones. Expediente Jurídico Título GD6-121, Archivos MinMinas Pdf 1: 23



Oficio: Reevaluación Técnica de solicitudes mineras, Subdirección de contratación y titulación minera GD6-121 del 30 de noviembre de 2007. (Expediente Jurídico Título GD6-121, Archivos MinMinas Pdf 1: 53)

El 9 de Mayo firman el Contrato de concesión finalmente. (Expediente Jurídico Título GD6-121, Archivos MinMinas Pdf 1: 73)

### **Subcapítulo de “Las multinacionales: el caso de la Sociedad Kedahda o AngloGold Ashanti”.**

#### **Documentos del Archivo Físico del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras referenciados:**

Sociedad Kedahda S. A- Gerente de Desarrollo Social, Rueda Barrios Carolina. 2007 Mayo 23. Oficio de invitación al proyecto minero de Kedahda en el municipio de Quinchía Risaralda, dirigido a Enrique Güetio, Gobernador del CICT. Bogotá. Pp. 1.

Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2006 Noviembre 6. “Acta 052”. La Toma, Suárez, Cauca. Pp. 2.

Consejo Comunal del Corregimiento de La Toma. 2007 Mayo 28. “Acta No. 02”. La Toma, Suárez, Cauca. Pp. 1. Anexo firmas 5 pp.

Concejo Municipal de Suárez. 2009 Noviembre. “Acta No. 062 de 2009 (Noviembre 5)”. Punto No. “6- intervención de la doctora CLARA MÁRQUEZ coordinadora social de la multinacional ANGLOGOL AHSANTI (Sic)”. Suárez, Cauca. Pp. 1 y 16-23.

Gobernación del Cauca. Invías Regional Cauca. Alcaldes Morales, Suárez y Buenos Aires. Comunidad Afro. Sector Campesino. Sector Indígena. Gobierno Nacional -Viceministro de Minas y Energía, Asesor del Ministerio del Interior. 2006 Mayo 5. “Acta que recoge los Acuerdos de la jornada de trabajo institucional y comunitaria por la reivindicación de los derechos de los damnificados de la región de la Salvajina”. Suárez, Cauca. Pp. 4.

Alcalde Municipal de Suárez. Gobernador Cabildo Cerro Tijeras. 2007 Junio 7. “Acta de compromisos entre la Administración Municipal de Suárez y las comunidades asistentes a la Asamblea del 7 de junio de 2007”. Suárez, Cauca. Pp. 2. Anexo firmas Pp. 2.

Fiscalía, Técnico Administrativo III- Beltrán Marcia. 2007 Enero 28. Oficio 001309. Bogotá. Pp. 1. Éste es la respuesta al Oficio 19905 dirigido al Ministerio del Interior y de Justicia, Programa de Protección, el 13 de diciembre de 2006 por Edwar A. Villegas, en nombre del Comité Prodefensa de Suárez.

Fiscalía, Director Seccional de Fiscalías. 2007 Febrero 1. Oficio DSF-00158 “Ref: Traslado denuncia”. Popayán. Pp. 1.

Fiscal, Asistente 1, Peña, María Elena. 2007 Septiembre 12. “a petición de parte interesada, se hace constar”. Santander de Quilichao. Pp. 1.

Nomadesc. PCN. CUT-Valle. Corporación Jurídica Utopía. Sintraunicol-Valle. Asociación para el desarrollo social integral. REDHER. Corporación Sembrar. 2009 Octubre 22. S.O.S. Organizaciones de la minga de resistencia social y comunitaria nuevamente blanco de amenazas. Cali. Pp. 3

Comité Prodefensa del Corregimiento de La Toma- Presidente Villegas Carabalí, Edwar Alberto. 2006 Diciembre 16. “Ref. Problemática norte del Cauca correspondiente al Municipio de Suárez (Cauca)”. Carta dirigida al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Santiago de Cali. Pp. 1.

Comité Prodefensa del Corregimiento de La Toma- Presidente Villegas Carabalí, Edwar Alberto. 2007 Junio 3. “Ref. Problemática Suárez Cauca”. Carta dirigida al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Santiago de Cali. Pp. 3.

Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom- Herrera Edilberto. 2008 Julio 15. Oficio OFI08-20467-DET-1000 Asunto: Solicitud de Información. Respuesta a José Leandro Güetio-Naya. Bogotá. Pp. 1. Anexos 3: Oficio GCRMN-248; Oficio Rad: 2008018118 25-04-2008; Oficio GCRMN-328.

Güetio Medina, José Enrique- Gobernador suplente Cabildo Cerro Tijeras. 2010 Junio 30 (recibido). Oficio Radicado 043153. Derecho de Petición sobre medidas en el marco del Auto 004, número de consultas previas en Suárez-Cauca, información de títulos mineros en Suárez, licencias ambientales otorgadas y cartografía por título. Santander de Quilichao. Pp. 3.

#### **Documentos revisados sin citar:**

Ingeominas. Coordinador Grupo de Catastro Minero Nacional- Cesar T. Franco Buitrago. 2008 Mayo 28. Oficio GCRMN-328 “Asunto: Títulos otorgados en Suárez y Buenos Aires”. Bogotá. Pp. 5. Anexo 3 del Oficio OFI08-20467-DET-1000.

Ingeominas. Coordinador Grupo de Catastro Minero Nacional- Cesar T. Franco Buitrago. 2008 Junio 22. Oficio GCRMN-248. Referencia: OFI-08-10354-DET-1000 “Reporte de superposiciones de Registro Minero del Área de Reserva del Suárez”. Bogotá. Pp. 4. Anexo 1 del Oficio OFI08-20467-DET-1000.

Ministerio de Minas y Energí. Directora de Minas- Beatriz Duque. 2008 Abril 25. Oficio con Radicado No. 2008018118 25-04-2008 “Asunto: Su Oficio OFI-08-10354-DET-1000, de abril 16 de 2008” Sobre realización de Consulta Previa. Bogotá. Pp. 2. Anexo 2 del Oficio OFI08-20467-DET-1000.

Ministerio del Interior y de Justicia. Coordinadora Grupo de Consulta Previa- Claudia Cáceres. 2010 Julio 16. Oficio OFI10-23997-GCP-0201 “Asunto: Respuesta derecho de petición radicado EXT100-31795” Dirigido a José Enrique Güetio. Bogotá. Pp. 3.

Ministerio del Interior y de Justicia. Director de Asuntos Indígenas, Minerías y Rom- Pedro Posada. 2010 Julio 12. Oficio OFI10-23262-DAI-0220 “Asunto: Respuesta Derecho de Petición” Dirigido a José Enrique Güetio. Bogotá. Pp. 5.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. 2010 Agosto 18. Oficio 2400-E2-89298 “Asunto: Radicado MAVDT 4120-E1-89298 del 16 de julio de 2010”. Dirigido a José Enrique Güetio. Bogotá. Pp. 24.

Ingeominas. 2007 Septiembre 19. Oficio SFOM-O-0630 dirigido a Edward A. Villegas. Respuesta al Oficio 11974 de agosto 2007. Bogotá. Pp. 3.

Ingeominas. 2007 Octubre 17. Oficio SCT QRS No. -665. Ref. Queja Radicación No. 13540 del 26 de septiembre de 2007. Bogotá. Pp. 2

Corporación Autónoma Regional del Cauca. 2010 Agosto 13. Oficio 07131 “Asuto: Su solicitud en ejercicio al derecho de petición radicado con el No. 05426 del 26 de julio de 2010. Licencias ambientales otorgadas por la CRC en el municipio de Suárez.” Dirigido a José Enrique Güetio. Popayán. Pp.2.

### **Subcapítulo Naturales colombianos con títulos Amparos administrativos y agudización de la tensión ‘nativos’/‘foráneos nacionales no legítimos’**

#### **Documentos del Expediente Jurídico Licencia de Exploración 19656, presente en los Archivos del Cabildo.**

Empresa Nacional Minera LTDA.- Minercol. 2003 Abril 16. Resolución No. 3-109-2003.

Carabalí, Salustiano. 1995 Agosto 25. Oficio “Cesión derechos licencia de exploración expediente 19656”. (Expediente Jurídico Licencia de Exploración 19656).

Empresa Nacional Minera LTDA.- Minercol. 1996 Agosto 13. Resolución No. 730979.

#### **Documentos del Archivo Físico del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras referenciados:**

Alcalde Municipal de Suárez. 2010 Abril 30. Resolución No. 2864-3-30 de 2010 (30 de abril), “Por medio de la cual se suspende la extracción y explotación de yacimiento minero, se ordena un desalojo y se dictan otras disposiciones en el Municipio de Suárez Cauca”. Suárez, Cauca. Pp. 5.

Alcalde Municipal de Suárez. 2010 Mayo 11. Oficio No. ODA-1-11-05-10. Dirigido al Comandante Departamento de Policía Cauca, Teniente Coronel Carlos Ernesto Rodríguez. Suárez, Cauca. Pp. 1.

Información tomada de Comunicados del Cabildo y del “Diagnóstico en DDHH, Político y Social, Parcialidad de Cerro Tijeras”. Bogotá D. C., 23 de Febrero de 2012. Pág. 9

Ingeominas, Coordinador Grupo de Trabajo Ingeominas-Cali. 2004 Septiembre 7. Respuesta al Oficio ODP-342-04. Cali. Pp. 1. Anexo de Oficio GTRC-1051-09. El Oficio ODP-342-04 fue enviado el 25 de agosto de 2004 por el Personero Municipal de Suárez-Clemente Lucumí Golú a Ingeominas.

Ingeominas, Grupo de Trabajo Regional Ingeominas-Cali. 2009 Abril. Resolución GTRC-0066-09 del 28 de abril de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un amparo administrativo dentro de la licencia de explotación BFC-021”. Santiago de Cali. Pp. 5.

Ingeominas. 2009 Abril 3. “Informe No. GTRC-0050-09. Informe de Apoyo Técnico a Amparo Administrativo realizado en el área del título minero No. BFC-021”. Santiago de Cali. Primeras 6 pp. de 8.

Inspector de Policía y Tránsito Municipal. 2010 Julio 31. Resolución No. 647/07 de 2010 (Julio 31) “Por medio de la cual se le da cumplimiento a la Resolución Número 2864-3-30 de 2010 ‘Por medio de la cual se suspende la extracción y explotación de yacimiento minero, se ordena un desalojo y dictan otras disposiciones en el Municipio de Suárez Cauca’ expedida por la Alcaldía Municipal de Suárez Cauca”. Suárez, Cauca. Pp. 3.

Inspectora de Policía y Tránsito Municipal (E). 2010 Agosto 17. Resolución No. 648/8 de 2010 (Agosto 17) “Por medio de la cual se suspende la Resolución Número 647/07 de julio 31 de 2010 ‘Por medio de la cual se suspende la orden de desalojo y dictan otras disposiciones en el Municipio de Suárez Cauca’ expedida por la Alcaldía Municipal de Suárez Cauca”. Suárez, Cauca. Pp. 6.

CICT. 2012 Febrero 23. “Diagnóstico en DDHH, Político y Social, Parcialidad de Cerro Tijeras”. Bogotá D. C. Pp. 28.

Sarria, Héctor Jesús. 2009 Agosto 6. “Objetivo de la reunión: Denunciar públicamente al causante intelectual y material del desalojo del área BFC-021: Arlex Gonzalez y su gente”. Dirigido a “Señores Comunidad de La Toma”. Santiago de Cali. Pp. 10.

#### **Documentos sobre Sarria del Archivo del Cabildo revisados sin citar:**

CUT- Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Coordinador Dpto. DDHH- Edward A. Villegas. 2010 Mayo 26. “Ref. Inconsistencias frente al otorgamiento de licencias y concesiones mineras en el Municipio de Suarez-Cauca”. Suárez, Cauca. Pp. 8. Anexo

Formulario de solicitud de licencia de exploración diligenciado por Sarria y copia del Registro Minero Nacional del título BFC-021. Pp. 4.

CUT- Escobar, Diego y Villegas, Edward A. 2010 Agosto 30. “Ref. Derecho de Petición. Art. 23 Constitucional” sobre los requisitos de Consulta previa, PMA y estudio de mitigación de impacto ambiental. Santiago de Cali. Pp. 3.

CUT- Escobar, Diego y Villegas, Edward A. 2010 Agosto 30. Carta de solicitud de certificación de la existencia de comunidades originarias en el Municipio de Suárez. Santiago de Cali. Pp. 1.

Defensor del Pueblo Regional Cauca- Meléndez Guevara, Víctor Javier. 2010 Agosto 17. Oficio número 2663 D. del P. R. del C. Código 5006. Referencia: Su solicitud de acompañamiento a una diligencia de desalojo. Dirigido a la Inspectora de Policía de Suárez. Popayán. Pp. 6.

Empresa Nacional Minera-Minercol Ltda. 2000 Agosto 31. Reporte de superposiciones de solicitudes mineras. Solicitud BFC-021. Pp. 2. Anexo de Oficio GTRC-1051-09.

Ingeominas. 2007 Octubre 10. Reporte de títulos mineros vigentes en el Municipio de Suárez por nombre inscritos entre el 01-01-1900 y el 10-10-2007. Pp. 1.

Ingeominas. 2009 Mayo 5. Oficio GTRC-1051-09. Referencia: Oficio radicado el 2009-3-12 relacionado con amparo administrativo interpuesto dentro del título minero BFC-021. Dirigido a Edwar A. Villegas como Presidente del Comité Pro-Defensa del Norte del Cauca. Santiago de Cali. Pp. 2

Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Etnias. 2006 Agosto 29. Oficio OFI06-20358-DET-1000 “Ref: Certificación sobre presencia de comunidades indígenas y /o negras en el área del proyecto ‘Explotación de un yacimiento Aurífero-Licencia de Explotación No. BFC-021’, en la vereda El Tamboral, municipio de Suárez, departamento del Cauca”. Bogotá. Pp. 1. Anexo del Oficio enviado por Zambrano Varón, Gloria Stella- Abogada de Sarria el 4 de Octubre de 2006.

Secretario de Planeación e Infraestructura de Suárez. 2010 Agosto 21. “Certifica” Que la vereda Turbina se encuentra en el Corregimiento de Mindalá y no en La Toma. Suárez, Cauca. Pp. 1.

Zambrano Varón, Gloria Stella- Abogada de Sarria. 2006 Octubre 4. “Ref.: Presencia de Grupos Étnicos” Dirigido a Alcaldía Municipal de Suárez. Santiago de Cali. Pp. 1. Anexo el Oficio OFI06-20358-DET-1000 y dos mapas del polígono título BFC-021 Pp.3.

## **Documentos del Expediente Jurídico del Título Minero EEK-151**

Oficio 002603 del 14 de noviembre de 2003 dirigido al Gerente Operativo de Minercol Ltda por Raúl Fernando Ruíz. (Expediente Título EEK-151 Pdf 1: p. 1)

Oficio 002662 del 24 de noviembre de 2004, Minercol Ltda. (Expediente Título EEK-151 Pdf 2: p. 43)

Ingeominas. 14 Noviembre 2007. “Concepto Técnico No. GTRC-0662-07. Título Minero No. EKE-151. Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero Grupo de Trabajo Regional Cali”. Cali. Pp. 7 (Expediente Título EKE-151 Pdf 4: 17)

Ingeominas. 27 Noviembre 2007. “Informe No. GTRC-0706-07. Informe de Visita Técnica de Seguimiento y Control realizada al Título No. EKE-151. Titular: Raúl Fernando Ruíz. Suárez, Cauca.” Cali. Pp. 6 (Expediente Título EKE-151 Pdf 4: 37)

Ingeominas. 30 Noviembre 2007. Auto GTRC-0761-07. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 4: 63)

Oficio “Asunto: Solicitud amparo administrativo contrato de concesión minero EKE-151 otorgado a Raúl Fernando Ruíz Ordoñez” dirigido a Luis Fernando Colorado Aponzá, Alcalde de Suárez radicado el 16 de enero de 2007 y redireccionado a Ingeominas el 17 de enero (Expediente Título EKE-151 Pdf 4: Pp 87-89)

Alcaldía Municipal de Suárez. 17 Enero 2008. Resolución No. 112-1-17. Suárez. (Expediente Título EKE-151 Pdf 5: 21)

Ingeominas. 22 Febrero 2008. Auto GTRC-0083-08. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 5: 3)

Oficio “Referencia: Amparo Administrativo Contrato de Concesión No. EKE-151, cuyo titular es el señor Raúl Fernando Ruíz Ordoñez” dirigido por Clara L. García (apoderada de Ruíz) a Ingeominas Cali el 23 de junio de 2008. (Expediente Título EKE-151 Pdf 5: 67)

Ingeominas. 11 Julio 2008. “Informe No. GTRC-0168-08. Informe de Apoyo Técnico de Amparo Administrativo realizado en el área de Título Minero No. EKE-151. Titular: Raúl Fernando Ruíz. Suárez, Cauca.” Cali. Pp. 9 (Expediente Título EKE-151 Pdf 6: 7)

Ingeominas. 11 de Agosto 2008. Resolución No. GTRC-0128-08 “Por medio de la cual se resuelve un amparo administrativo dentro del Contrato de Concesión EKE-151”. Cali. Pp. 6 (Expediente Título EKE-151 Pdf 6: 35)

Ingeominas. 7 Abril 2009. Concepto Técnico GTRC-194-09. Pp. 5 (Expediente Título EKE-151 Pdf 7: 59)

Ingeominas. 20 Abril 2009. “Informe GTRC-057-09. Informe de visita técnica de seguimiento y control realizada al área del título minero No. EKE-151”. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 7: 69)

Ingeominas. 30 abril 2009. Oficio GTRC-1008-09. “Referencia: Explotación minera ilegal en el área del contrato EKE-151” Dirigido al Alcalde de Suárez. (Expediente Título EKE-151 Pdf 7: 91)

Ingeominas. 12 Mayo 2009. Auto GTRC-0244-09. (Expediente Título EKE-151 Pdf 7: 97)

CRC. 23 Junio 2008. Resolución 0356 “Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental” (Expediente Título EKE-151 Pdf 8: 29)

Ingeominas Cali. 17 Junio 2010. Oficio Radicado: 20104290011081 dirigido al Dir General de la CRC. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 31)

CRC. 4 Agosto 2010. Oficio 06755 dirigido a Ingeominas Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 63)

MinInterior. 9 Julio 2009. Oficio No. OFI-09-23106-GCP-0201. Bogotá. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 35)

Ingeominas Subdirector de Contratación y Titulación Minera. 19 Agosto 2010. Memorando 20104110131903 “Asunto: Temática Suárez, Buenos Aires y Morales”. (Expediente Título EKE-151 Pdf 9: 69)

Ingeominas. 24 Junio 2011. “Informe No. GTRC-0026-11. Informe de visita técnica de verificación de condiciones de seguridad e higiene minera realizada al área de contrato de concesión No. EKE-151”. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 10: 29)

ANM. 4 Septiembre 2013. Informe No. PARC-097-13. IV-097-EKE-151-04-09-13. Informe visita técnica de las condiciones de seguridad e higiene minera realizada al área del contrato de concesión EKE-151. Cali. (Expediente Título EKE-151 Pdf 13: 31)

### **Documentos del Expediente Jurídico del ARE empleados en este subcapítulo:**

Gaegers, Martha. “At least 1500 families to be evicted from la toma, cauca” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta III: 32) solo

Oficio AD-MHR-1157 dirigido por la Coordinadora del Grupo Asesores Minas, Hidrocarburos y Regalías del Despacho del Procurador General de la Nación a la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta III: 35).

Oficio 466194 del 14 de diciembre de 2012 Solicitud y queja elevada por Gustavo Zapata presidente del Consejo Comunitario de La Toma al Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez. (Expediente Jurídico ARE, Archivos MinMinas Carpeta III: 37, 41) Citado también en Fuentes Primarias del subcapítulo “Las Retros y las Dragas”.

ANM. 2013 Abril 26. Resolución No. VSC-0401 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia No. T-1045A, proferida el 14 de diciembre de 2010, por la Sala Sexta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional y se toman otras determinaciones” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta I: 164)

ANM. 2013 Abril 29. Resolución No. 002497 “Por medio de la cual se ordena la suspensión de catorce trámites mineros” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta I: 129)

ANM: 2013 Mayo 6. Resolución No. 002636 “Por medio de la cual se ordena la suspensión de la solicitud de legalización de minería tradicional NKN-16241 y se toman otras determinaciones” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta I: 133)

ANM. 2013 Mayo 15. Resolución 003 “Por medio de la cual se da cumplimiento a una sentencia judicial y se ordena la suspensión de actividades mineras dentro del Área de Reserva Especial Suárez-Cauca otorgada mediante Resolución No. 333 de Septiembre 11 de 2008 que se superponen con el corregimiento de La Toma-Suárez” (Expediente Jurídico ARE, Archivos ANM Carpeta I: 152)

### **Documentos de proporcionados por la ANM a parte de los expedientes**

Ingeominas Cali. 28 Octubre 2009. Memorando GTRC “Asunto: Informe sobre mesa de trabajo en Suárez-Cauca”. (Documento proporcionado por ANM en respuesta a Derecho de Petición)

Ingeominas Cali. 20 Junio 2010. Memorando 20104290008753 “Asunto: Sugerencias para la Mesa de Trabajo en Cali, sobre el tema minero”.

Ingeominas Cali. 25 Junio 2010. Memorando 20104290009543 “Asunto: Síntesis Mesa de Trabajo Suárez, Buenos Aires y Morales Cauca”.

### **Subcapítulo La mina El Danubio: el paisa empresario y sus aliados estratégicos.**

#### **Documentos del Expediente título EEK-152:**

Formulario Simplificado para la Legalización de Explotaciones Mineras diligenciado el 20 de mayo de 2003 por Alonso Giraldo Vargas (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 1)

Oficina de registro de instrumentos públicos de Santander de Quilichao. Certificado de



Libertad y Tradición del inmueble con Matrícula Inmobiliaria No. 132-122770. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 11)

Oficio “Proceso: Reevaluación Jurídica de solicitudes mineras Concepto Jurídico solicitud de legalización EEK-152” Bogotá, de noviembre 8 de 2005 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 43-45)

Oficio 001232 del 23 de mayo de 2003 “Certificado de área libre solicitud de legalización EEK-152” expedido por Minercol Ltda (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 26)

CRC. Marzo de 2006. Informe técnico de viabilidad minero-ambiental solicitud de legalización EEK-152 mina El Danubio. Explotación subterránea de filón-vereda El Diviso. Municipio de Suárez Cauca. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 56-111)

Oficio “Proceso: Reevaluación técnico jurídica de solicitudes mineras concepto técnico. Solicitud de legalización de minería de hecho” del 7 de julio de 2006. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 110)

Resolución No. 0792 “Por medio de la cual se aprueba e impone un Plan de Manejo Ambiental al señor Alonso Giraldo Vargas EEK-152” expedida por la CRC el 18 de diciembre de 2007 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 130-137)

Auto GLM No. 0047 “por medio del cual se aprueba el programa de Trabajo y Obras dentro del expediente EEK-152” del 9 de junio de 2008 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 147)

Oficio con “Ref: Solicitud de legalización minera EEK-152-Auto GLM- No. 0048 del 9 de junio de 2008”, fechado en octubre de 2008 y dirigido a Ingeominas, Giraldo acepta los resultados y conclusiones del PTO (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: p. 149)

El Contrato de Concesión del título EEK-152 es firmado el 15 de mayo de 2009 y Anotación en el Registro Minero Nacional el 3 de junio de 2009 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 167-78)

Auto PARC-020-14 expedido por Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM el 24 de enero de 2014 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 3: pp. 13-17)

Oficio “Concepto Técnico No. PAR-Cali-518-13 título minero EEK-152” del 2 de septiembre de 2013 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 2: pp. 45-49)

Oficio con Referencia: “Respuesta a requerimiento del numeral 3 del Auto PARC-020-14 del 24 de enero de 2014”, dirigido por Giraldo a la ANM el (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 3: pp. 21-35)

Oficio con Radicado 2010-429-002244-2 y Referencia: “Regalías II, III y IV trimestre de 2009, I trimestre de 2010 y formatos básicos mineros de 2009 contrato de concesión EEK-152 Alonso Giraldo Vargas”, dirigido a Ingeominas por Giraldo el 5 de mayo de 2010 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 213)

Oficio con Radicado 2010-429-003764-2 y Referencia: “Regalías II trimestre de 2010 y formato básico minero del I semestre de 2010 contrato de concesión EEK-152 Alonso Giraldo Vargas”, dirigido a Ingeominas por Giraldo el 26 de julio de 2010 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 1: pp. 18)

Oficio con Radicado 20139050032512 y Referencia: “Declaración y pago de regalías III trimestre de 2010 hasta II trimestre de 2013. Contrato de concesión EEK-152, dirigido a la Agencia Nacional de Minería por Giraldo el 12 de agosto de 2013. Incluye el “Anexo Registro Fotográfico Once (11) Fotos” hace parte del Oficio con Radicado 20139050032512. (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 2: pp. 19-28, cita en Pp. 19-20)

Plano de 2003 muestra el polígono solicitado para legalización y las explotaciones existencias. Plano de 2006 muestra el polígono solicitado, el polígono pertinente de 10 Has y las explotaciones existentes (Expediente Título EEK-152, Carpeta 2, Pdf 1: p. 69-70)

Oficio “Evaluación de programa de trabajos y obras PTO” del 24 de septiembre de 2007 (Expediente Título EEK-152, Carpeta 1, Pdf 1: pp. 115-119, el tema del Plan de Cierre aparece en p. 118)

**Documentos del Archivo del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras (CICT) referenciados en los subcapítulos “autoridad étnica y gobierno propio” y “Proceso de Titulación Colectiva”.**

Asesoría Jurídica del Departamento- Jorge Grueso. 2013 Febrero 15. “Ref. Concepto de pertinencia y autorización de levantamiento de medidas cautelares en los 7 bienes inmuebles que conforman el territorio del cabildo Cerro Tijeras, en el Municipio de Suárez (Cauca)”. Popayán. Pp. 6.

CICT. 2010 Agosto 23. “Relatoría Reunión Comunidades Cabildo Cerrotijeras y Acción Social- Proyecto de protección de tierras y territorio a la población desplazada”. Vereda Agua Clara. Pp. 3.

CICT. 2010 Agosto 24. Acta Asamblea en la vereda Unión Olivares con comunidades cercanas y pertenecientes al Cabildo Cerro Tijeras. Pp. 3.

CICT. 2010 Agosto 9. Relatoría “Paraiso (Sic) 09 de 2010 Agosto Asamblea”. Pp. 1.

CICT. 2010 Diciembre 10. “Reunión del Cabildo Cerro Tijeras en la finca Alejandría”. Pp. 6. Anexo asistencia pp. 2.

CICT. 2010 Julio 2. Posecionamiento (Sic) Político comunidad Cabildo Indígena Cerro Tijeras Municipio de Suárez Cauca. Asamblea comunitaria del 1 y 2 de julio en Unión Olivares. Pp. 5.

CICT. 2010 Julio 26. “Caminata por la vida y la pervivencia en el territorio en contra de la minería y de las políticas impuestas. Comunidad de Cerro tijeras- Departamento del Cauca”. Sede del Cabildo Indígena Cerro Tijeras, Altamira, Suárez, Cauca. Pp. 6.

CICT. 2010 Octubre 8 al 12. Documento para discusión y análisis en el Congreso de los Pueblos. Bogotá D.C. Pp. 14.

CICT. 2011 Abril 11. Convocatoria: “Asamblea por la dignidad, la vida y la pervivencia en el territorio en contra de las multinacionales y de las leyes impuestas”. Altamira. Pp. 1.

CICT. 2011 Diciembre 14. Diagnóstico Político y Social. Parcialidad Indígena del Cabildo Cerro Tijeras. Altamira. Pp. 21.

CICT. 2011 Febrero 9. Relatoría: “Vereda La Cascada 09 Febrero- año 2011”. Pp. 7. Anexo asistencia pp. 1.

CICT. 2011 Julio 29. Proyecto Plan de vida del Cabildo Indígena Cerro Tijeras Altamira. Propuesta de inversión para 37 veredas del área rural en cumplimiento de la Asamblea del 7 de julio del 2007. Dirigido a: Alcaldía Municipal Suárez, Gobernación del Cauca. Pp. 20 de 22.

CICT. 2012 Febrero 10 y 11. Relatoría Comisión No 1 por: Stella Chavez (Sic). Pp. 3.

CICT. 2012 Febrero 10 y 11. Relatoría Comisión No 3, relatoría Milena. Pp. 2.

CICT. 2012 Febrero 10 y 11. Relatoría General: “Asamblea general. 10 y 11 de febrero - 2012 Informe general de la directiva 2011 y Elección del gabinete 2012. Vereda La Chorrera, Suárez-Cauca”. Pp. 3. Anexos Comisión 1 Pp. 3; Comisión 2 pp. 1; Comisión 3 pp. 2; Tareas pp. 2.

CICT. 2013 Enero 18. “Acta de posesión (Sic) 18 de enero de 2013”. Finca La Alejandría. Pp. 3.

CICT. Sin fecha (2010). Pronunciamiento: “Departamento del Cauca Municipio de Suárez Cauca Corregimiento de Agua Clara Vereda Agua Blanca”. Pp. 4.

CICT. Sin fecha (2011). Ejercicio de Planificación Cabildo Cerro Tijeras. Pp. 14.

CICT. Sin fecha. “Diagnóstico Constitución Cerro Tijeras.” Pp. 3.

CICT. Sin fecha. Documento “Relación de predios para constitución y/o ampliación de resguardo”. Pp. 2.

CRIC. INCODER. 2009. “Acta de acuerdo Noviembre 21 de 2009”, Popayán, Cauca Sede Universidad Intercultural Indígena Nacional, UAIIN. Pp. 2

INCODER. 2012 Octubre 17. “Formato de Actas Proceso: Titulación Colectiva a Comunidades Indígenas, Negras y Campesinas. Comité: Mesa de Tierras”. Concejo Municipal Suárez Cauca. Pp. 7.

Ministerio del Interior y de Justicia. Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Room. 2010 Octubre. Resolución 00155 del 22 de octubre de 2010 “Por la cual se reconoce como parcialidad indígena a la comunidad Cerro Tijeras del pueblo Nasa, ubicada en los Corregimientos: Los Robles, Betulia, Aguacalara y la Meseta en jurisdicción del Municipio de Suárez, Departamento del Cauca”. Bogotá.

Sin autor. Sin fecha, finales 2013 principio 2014. “Asunto: Consulta con el nivel central ante –Incoder”. Dirigido a David Duarte.

**Documentos del caso conflicto Institución Educativa Marilópez Bellavista referenciado en “Proceso de Titulación Colectiva”:**

CICT, 4 de marzo de 2010. Oficio con Radicado 00007163 dirigido al Procurador General de la Nación por el Gobernador y Vicegobernador del Cabildo. “Ref: Denuncia” “contra” el rector de la I. Educativa Maril (Sic) López Bellavista, tres docentes y el presidente de la Asociación de Juntas del Municipio de Suárez.

Acta N° 1 de Febrero 8 de 2010, reunión de “integrantes activos de las comunidades de: Bellavista, El Naranjal, La Esmeralda, Comedulce, Los Mangos, San Pablo, Unión Olivares, Guadualito, Los Robles y El Jigal”, en la I. Educativa Marilópez Bellavista Suárez-Cauca.

Oficio con “Ref: Copia derecho de petición enviado al gobernador del Cauca” del 8 de febrero de 2010 dirigido a Carlos Cobo Gobernador del Cabildo por miembros de las veredas Bellavista, El Naranjal, Comedulce, La Esmeralda y Los Mangos. Suárez, Cauca. P. 2

Acta de reunión No 02 del 24 de febrero de 2010 reunión convocada por la Dirección de Núcleo Educativo de Suárez realizada en la I. E. Marilópez Bellavista. Asistencia firmada por 55 personas.

Oficio con “Ref: Copia del derecho de petición enviado al gobernador del Cauca: solicitando la exclusión de la Institución Educativa Marilópez Bellavista y sus sedes del Secreto 0591-12-2009”, del 3 de febrero de 2010, dirigido a Carlos Cobo Gobernador del Cabildo.

CICT, 25 de enero de 2010. Circular 001 “Para: Directivos docentes, docentes, consejos directivos y juntas de acción comunal del territorio de cerro tijeras. Asunto: No aceptación de docentes y directivos trasladados y nombrados sin la concertación, los procedimientos (Sic) y perfiles que requiere el sistema educativo propio.” Firmado por el Gobernador del Cabildo Carlos Cobo.

CICT, Sin fecha. Derecho de petición dirigido a la Secretaria de Educación Departamental del Cauca con “Ref: Solicitud de aclaración del decreto 0591-12-2009”. Por Gobernador, Vicegobernador y Coordinador de educación del Cabildo.

Oficio con Ref: Respuesta derecho de petición recibido el 5 de febrero 2010, del 17 de febrero de 2010, dirigido al Director de la Institución Educativa Marilópez Bellavista por la Junta Directiva del Cabildo.

Acuerdo del 15 de junio de 2005. “Acta de acuerdo entre el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN. Y el municipio de Suárez Cauca, Consejo Comunitario de Comunidades Negras a través de su (Sic) representantes legales”.

Güetio, José Enrique. 3 de febrero de 2008. Oficio con “Ref: Derecho de Petición de Interés General” dirigido al Director Núcleo Educativo Suárez –Cauca.

CICT, 11 de abril de 2010. Oficio con “Ref: Derecho de petición” dirigido al Director de la I. Educativa Marilópez Bellavista por el Gobernador y Vicegobernador del Cabildo.

Director Núcleo Educativo. 15 de marzo de 2004. Oficio DNE No. 034 dirigido al Coordinador del CRIC.

## **Prensa**

El País de Cali. 8 de agosto de 1986 Sección En el Cauca: Reclaman electrificación rural.

El País de Cali. 12 de agosto 1986. Salvajina. Inician marcha de protesta en el Cauca.

El País de Cali. 13 de agosto 1986. Prosigue marcha hacia Popayán.

El País de Cali. 14 de agosto 1986. “Con aplausos recibieron los campesinos.

El País de Cali. 22 de marzo de 1992. El apagón no es como lo pintan.

## **Personas entrevistadas**

Ovidio William Ovando; Albeiro Cortez; Meraldiño Caviche; Enrique Güetio; Simón Rodríguez; Edwin Salcedo; Mario Mondragón; Ramón Tobar; Manuel Belalcazar.

**Otros sitios web:**

Empleados de Cosigo Resources: <http://www.cosigo.com/s/Management.asp>.

Participación de “Giraldo y Duque” en la Zona Franca del Pacífico:  
<http://www.giraldoyduque.com/>